

ANDRE HORI:

EXCMA. SRA.:

Honako hau jakinarazten dizut: Eusko Jaurlaritzak, 2017ko ekainaren 27an egindako bilkuran, **Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoari buruzko LEGE PROIEKTUA** onartu du.

Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Gobierno Vasco, en Sesión celebrada el día 27 de junio de 2017, ha procedido a la aprobación del **PROYECTO DE LEY de sostenibilidad energética de las Administraciones Públicas Vascas.**

Hori ziurtatu egiten dut eta, Jaurlaritzak erabakitakoa betez, horren berri ematen dizut, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean exijitutakoaren.

Lo que certifico y, en cumplimiento de lo acordado por el Gobierno, traslado a V.E., de conformidad con lo exigido por la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko ekainaren 29a.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de junio de 2017.

Josu Iñaki Erkoreka Gevasio

SECRETARIO DEL GOBIERNO
JAURLARITZAKO IDAZKARIA

**EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO/
EUSKO LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARIA**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN
ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VASCAS**

HONEKIN BATERA AURKEZTEN DIREN AGIRIAK

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

I.	BIDALKETA-IDAZKIA	OFICIO DE REMISIÓN
II.	LEGE PROIEKTUAREN TESTUA GAZTELANIAZ	TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN CASTELLANO
III.	LEGE PROIEKTUAREN TESTUA EUSKARAZ	TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN EUSKERA
IV.	TXOSTENA, 2016KO UZTAILAREN 19AN ONARTUTAKO EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE-PROIEKTUAREN TESTUA GOBERNU KONTSEILUAK BERRIRO HARTZEAK DUEN BIDERAGARRITASUN JURIDIKOARI BURUZKOA.	INFORME RESPECTO A LA VIABILIDAD JURÍDICA DE QUE SE VUELVA A RETOMAR POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS APROBADO EL 19 DE JULIO DE 2016.
V.	AZALPEN MEMORIAK	MEMORIAS EXPLICATIVAS
VI.	MEMORIA EKONOMIKOA	MEMORIA ECONÓMICA
VII.	AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN TXOSTENA	INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA
VIII.	EMPRESAREN INGURUKO ERAGIN TXOSTENA	INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA EMPRESA
IX.	HERRITARRAK HARTZEKO ETA ADMINISTRAZIOA BERRITZEKO ETA HOBETZEKO ZUZENDARITZAREN TXOSTENA.	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN
X.	GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN TXOSTENA	INFORME DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
XI.	EMAKUNDEAREN TXOSTENA	INFORME DE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER
XII.	HERRI ADMINISTRAZIOETAN HIZKUNTZA NORMALITZATZEKO ZUZENDARITZAREN TXOSTENA	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
XIII.	EKONOMIA- ETA ARAU-KONTROLAREN TXOSTENA	INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO
XIV.	EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOKO IRIZPENA	DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI
XV.	PROZEDURA HASTEKO AGINDUA	ORDEN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO
XVI.	PROIEKTUA AURRETIK ONARTZEKO AGINDUA	ORDEN DE APROBACIÓN PREVIA DEL PROYECTO

I

OFICIO DE REMISIÓN / BIDALKETA-OFIZIOA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN
ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA
PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VASCAS**

ANDRE HORI:

EXCMA. SRA.:

Honako hau jakinarazten dizut: Eusko Jaurlaritzak, 2017ko ekainaren 27an egindako bilkuran, **Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoari buruzko LEGE PROIEKTUA** onartu du.

Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Gobierno Vasco, en Sesión celebrada el día 27 de junio de 2017, ha procedido a la aprobación del **PROYECTO DE LEY de sostenibilidad energética de las Administraciones Públicas Vascas.**

Hori ziurtatu egiten dut eta, Jaurlaritzak erabakitakoa betez, horren berri ematen dizut, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean exijitutakoaren.

Lo que certifico y, en cumplimiento de lo acordado por el Gobierno, traslado a V.E., de conformidad con lo exigido por la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko ekainaren 29a.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de junio de 2017.

Josu Iñaki Erkoreka Gevasio

SECRETARIO DEL GOBIERNO
JAURLARITZAKO IDAZKARIA

**EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO/
EUSKO LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARIA**

Consulta de Documento

Archivo del documento[PL EFIC ENERG DOCUMENTO RESMISIÓN JUNIO 2017.pdf](#)**Descripción**

PROYECTO DE LEY de sostenibilidad energética de las Administraciones Públicas Vascas

Creador

Cortés Larramendi, Carmen

Cargo firmante

Erkoreka Gervasio, Josu Iñaki

Fecha modificación

29/06/2017

**Firmado digitalmente por**

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO

II

**TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN CASTELLANO /
LEGE PROIEKTUAREN TESTUA GAZTELANIAZ**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN
ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA
PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VASCAS**



PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La energía forma parte íntegra de la vida de las personas. De hecho, la vida es posible porque el sol emite energía que llega al planeta Tierra, en un lapso de 8 minutos, desencadenando todos los procesos vitales esenciales. Las necesidades energéticas han sido básicas para la existencia y desarrollo humano, en una evolución sin descanso que discurre desde las hogueras prehistóricas hasta la actualidad y con dos hitos destacables, a saber, la revolución industrial, fundamentada en el carbón, y el empleo generalizado del petróleo a partir de los años 20 del siglo pasado con la producción en masa de automóviles y aviones. A pesar de las sucesivas crisis energéticas, que comienzan en 1973, el petróleo constituye una fuente esencial de las sociedades actuales y está presente en prácticamente todos los artículos de uso y consumo. Obviamente, el petróleo no es la única fuente energética, al convivir con otras, como el gas natural, el carbón o la nuclear y con las renovables: hidráulica, eólica, solar, biomasa, marina y geotérmica, cuyo papel en el suministro global de energía resulta cada día más importante.

Ahora bien, el consumo energético presenta distintos problemas. Por una parte, se trata de utilizar la energía de la manera lo más eficiente posible, lo que constituye un evidente reto en las sociedades actuales en términos físicos y económicos. Por otra, está el problema de las emisiones de gases con efecto invernadero a la atmósfera. Las previsibles consecuencias del cambio climático, que cuentan con un amplio consenso científico, hacen necesario adoptar medidas que reduzcan significativamente dichas emisiones por medio, entre otros, de la sostenibilidad energética, haciendo que la debida solidaridad intergeneracional sea algo más que un eslogan habitual en declaraciones y textos jurídicos diversos.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea incluye un Título XXI específicamente dedicado a la política energética, con una serie de objetivos básicos que pasan por garantizar el funcionamiento del mercado de la energía; garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión; fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético así como el desarrollo de energías nuevas y renovables y fomentar la interconexión de las redes energéticas. De hecho, la Unión Europea ha adoptado distintas medidas en este terreno, entre las que cabe citar la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, o la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos.

La Comunidad Autónoma del País Vasco ha tomado desde hace años distintas acciones en materia de energía. Ya en 1982 se creó el Ente Vasco de la Energía, mediante la Ley 9/1982, de 24 de noviembre, atribuyéndole la planificación, la coordinación y el control



de las actividades actuales y futuras del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el campo de la energía, de acuerdo con las directrices del Gobierno en el ámbito de las competencias establecidas en el Estatuto de Autonomía. En este contexto, la Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E2030) establece, entre otros objetivos, la intensificación de las actuaciones en eficiencia energética en todos los sectores consumidores, con un ahorro de 1.250.000 tep en el año 2030, y mejorar la intensidad energética final en un 33%. De esta manera, se pretende reducir el consumo final de petróleo en el año 2030 un 18% respecto de 2015, favoreciendo la desvinculación con el sector transporte. También se persigue que las energías alternativas en el transporte por carretera sean el 25% y que el aprovechamiento de estas energías alcance en el año 2030 los 966.000 tep, lo que significaría una cuota de renovables en consumo final del 21%. Todos estos objetivos son ciertamente ambiciosos, pero solo si se es ambicioso es posible que se puedan lograr.

Desde el punto de vista medioambiental, este anteproyecto de Ley también tiene su encaje. En efecto, la Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050, aprobada en el año 2015, para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo, establece entre sus metas la de disponer de una Administración Pública Vasca responsable, ejemplar y referente en cambio climático y señala que para lograr la implicación de todos los agentes de la sociedad vasca se debe impulsar una acción ejemplarizante desde todos los órganos de la Administración Pública Vasca. Para ello es necesario llevar a cabo una coordinación horizontal y vertical, es decir, entre los diferentes departamentos del Gobierno Vasco, así como con los Ayuntamientos y Diputaciones Forales. Una de las principales líneas de actuación que se destaca para lograr los objetivos al 2050, es lograr una Administración Pública “cero emisiones”.

En este sentido, la presente Ley establece, a través de sus 28 artículos, los pilares normativos de la sostenibilidad energética, basada en el impulso de medidas de eficiencia energética y de ahorro de energía y de promoción e implantación de las energías renovables, en la Comunidad Autónoma de acuerdo con la orientación de la política energética determinando los deberes y obligaciones que deben cumplir las Administraciones Públicas Vascas que, además, deben adoptar un papel ejemplar en este ámbito. Para ello, se estructura en tres capítulos, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.

El capítulo I determina en primer lugar su ámbito de aplicación, tanto subjetivo como objetivo, y las definiciones necesarias para poder aplicarla y comprenderla. A continuación enumera los objetivos que subyacen en la Ley, destacándose la reducción del consumo energético y el impulso y promoción de la sostenibilidad energética, sin olvidar la componente de protección del medio ambiente mediante la implantación de instalaciones de energía renovable. Asimismo, la Ley enuncia ocho principios



interpretativos que constituyen pautas de actuación de las Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma, entre los que cabe destacar el papel ejemplarizante de las Administraciones Públicas Vascas. Asimismo, se establece como pilar fundamental la integración de los requisitos de la Ley en otras políticas públicas, en especial en aquellas que tienen que ver con la ordenación del territorio, el urbanismo y las infraestructuras del transporte, así como el de eficacia y coordinación de las diversas Administraciones Públicas Vascas. Para la consecución de estos objetivos se establecen las Comisiones para la sostenibilidad energética u órganos similares de cada administración, que se configuran como instrumentos con importantes funciones en la materia.

El capítulo II es clave y en él se determinan las obligaciones a las que se sujetan las Administraciones Públicas Vascas. Como en el caso de otras políticas públicas, para marcar las orientaciones principales resulta esencial señalar objetivos y actuaciones a realizar en un lapso temporal amplio. Estas obligaciones quedan moduladas en el supuesto de los municipios, dependiendo de su población, pero en todo caso persiguen que las Administraciones Públicas Vascas adopten medidas eficaces para la consecución de los objetivos de la Ley.

El capítulo se divide en cuatro secciones. La primera de ellas contiene los objetivos y acciones generales que deben acometer las Administraciones Públicas. En este sentido, la Ley les exige la elaboración de los correspondientes inventarios, el control de consumos y la realización de auditorías energéticas. Estas medidas sirven de punto de partida para la elaboración de los correspondientes planes de actuación energética de carácter plurianual en los que las Administraciones Públicas realizan un diagnóstico de la situación en su ámbito de actuación y fijan estrategias a ejecutar durante la vigencia de los mismos. Asimismo, se establecen los objetivos de reducciones porcentuales de consumo de energía con referencia a sus consumos anuales y a unos períodos de tiempo tasados, los de implantación de instalaciones de energía renovable y los requisitos para la renovación de instalaciones, vehículos o equipos de alto consumo energético.

La sección 2ª contempla las obligaciones referidas a los edificios y viviendas, exigiendo la calificación energética de todos los edificios existentes y que los nuevos o que sean objeto de reformas importantes sean de consumo energético casi nulo. Por su parte, el transporte y la movilidad es objeto de la sección 3ª que recoge, entre otras cosas, la posibilidad de que los municipios restrinjan e incluso prohíban la entrada de determinados vehículos en el centro urbano. Esta materia del transporte se completa con el fomento de los vehículos que utilicen combustibles alternativos, incluyendo los que prestan el servicio público de transporte de viajeros y viajeras, y con la exigencia de que los municipios cuenten con un plan de movilidad urbana, con indicación de los objetivos a alcanzar. Todas estas medidas se refuerzan por medio de las obligaciones de publicidad, de formación de su personal y de exhibición de etiquetas energéticas establecidas en la sección 4ª.



Para terminar, el capítulo III se refiere a los instrumentos voluntarios y al fomento de las actividades de sostenibilidad energética, incluyendo medidas incentivadoras del cumplimiento de las obligaciones y objetivos impuestos en la presente Ley a través de los posibles incrementos de las ayudas públicas en materia de sostenibilidad energética. Este capítulo incluye también una referencia a los acuerdos voluntarios, como fórmula para ir más allá de las obligaciones legales que se imponen a las Administraciones Públicas. Asimismo, en este capítulo se garantiza el derecho a la información, en línea con la normativa de la Unión Europea.

Por lo que respecta a las disposiciones adicionales, estas aclaran el cálculo del nivel base de referencia y lo que se entiende por edificio de consumo de energía casi nulo mientras no se especifique e imponen diversas obligaciones a los consorcios y mancomunidades. Por su parte, las disposiciones finales incluyen, además de la entrada en vigor de la Ley, la previsión de que tanto el Parlamento Vasco, el Tribunal de Cuentas y el Ararteko puedan, en su caso, elaborar sus propios planes, sin que vengan obligadas a lo dispuesto en esta Ley.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto el establecimiento, de acuerdo con la orientación general de la política energética, de los pilares normativos de la sostenibilidad energética en el ámbito de las Administraciones Públicas Vascas, articulando los deberes y obligaciones que estas deben cumplir y que se orientan fundamentalmente al impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética y de promoción e implantación de energías renovables.

Artículo 2. Ámbito subjetivo.

1.- A los efectos de esta Ley, se entenderá por Administraciones Públicas Vascas:

- a) La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco incluyendo sus entidades vinculadas o dependientes.
- b) La Administración de los Territorios Históricos incluyendo sus entidades vinculadas o dependientes.



c) La de los Municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco incluyendo sus entidades vinculadas o dependientes.

d) La Universidad del País Vasco/Euskal-Herriko Unibertsitatea incluyendo sus entidades vinculadas o dependientes.

2.- Se entienden por entidades vinculadas o dependientes los organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado, las sociedades públicas, las fundaciones del sector público y los consorcios con personalidad jurídica propia a los que se refiere la Disposición Adicional Primera de esta Ley.

Artículo 3. Ámbito objetivo.

1.- Esta Ley será de aplicación a los edificios, instalaciones y parque móvil, que sean propiedad de alguna de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la misma, aun cuando estuvieran arrendados a terceras personas.

2.- Se excluyen del ámbito objetivo de la presente Ley los edificios que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Los ocupados por alguna de las entidades del artículo anterior en régimen de arrendamiento, siempre y cuando su titularidad corresponda a una tercera persona a la que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, no le fuera de aplicación la presente Ley.

b) Los situados en el extranjero.

c) Los provisionales cuyo plazo previsto de utilización sea igual o inferior a 5 años.

d) Aquellos en los que se justifique la inviabilidad de implantar las medidas establecidas en la presente Ley por razones de carácter urbanístico, de protección del patrimonio histórico-artístico u otras de análoga naturaleza.

Artículo 4. Definiciones.

A los efectos de esta Ley se entiende por:

a) Acreditación: verificación por parte de una entidad de acreditación del cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos exigidos para realización de una determinada actividad.



- b) Acuerdo Voluntario: compromiso para llevar a cabo determinadas medidas de sostenibilidad energética que superen los mínimos legalmente exigibles.
- c) Ahorro de energía: la cantidad de energía ahorrada, determinada mediante la medición y/o estimación del consumo antes y después de la aplicación de alguna medida de mejora de la eficiencia energética, teniendo en cuenta al mismo tiempo la normalización de las condiciones externas que influyen en el consumo de energía.
- d) Auditor o auditora energética: persona física o jurídica que se encarga de la realización de una auditoría energética y que cuenta con la correspondiente acreditación.
- e) Auditoría energética: todo procedimiento sistemático destinado a obtener conocimientos adecuados del perfil de consumo de energía existente de un edificio o grupo de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio privado o público, así como para determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de energía a un coste eficiente e informar al respecto.
- f) Cliente o clienta final: toda persona física o jurídica que compra energía para su propio uso final.
- g) Combustibles alternativos en el transporte: los combustibles o fuentes de energía que sustituyen, al menos en parte, a los combustibles fósiles clásicos como fuente de energía en el transporte y que pueden contribuir a la descarbonización de estos últimos y a mejorar el comportamiento medioambiental del sector del transporte. Incluyen, entre otros:
- la electricidad, incluyendo los híbridos,
 - el hidrógeno,
 - los biocarburantes, tal como se definen en el artículo 2, letra i), de la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, o en la norma de Derecho de la Unión Europea que la sustituya,
 - los combustibles sintéticos y parafínicos,
 - el gas natural, incluido el biometano, en forma gaseosa [gas natural comprimido (GNC)] y en forma licuada [gas natural licuado (GNL)], y
 - el gas licuado del petróleo (GLP);
- h) Consumo de energía final: toda la energía suministrada a los edificios o instalaciones afectados por la presente Ley.
- i) Edificio: una construcción techada con paredes en la que se emplea energía para acondicionar el ambiente interior, que puede dedicarse tanto a vivienda como a la



prestación de servicios, y puede referirse a un edificio en su conjunto o a partes del mismo que hayan sido diseñadas o modificadas para ser utilizadas por separado.

j) Edificio de consumo de energía casi nulo: edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determina de conformidad con lo establecido en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida *in situ* o en el entorno.

k) Edificio existente: cualquier edificio construido, en construcción de acuerdo con la normativa aplicable o que cuente con todas las autorizaciones requeridas, ya sean de carácter urbanístico, ambiental o de otro tipo, antes de la entrada en vigor de esta Ley.

l) Edificio nuevo: todo edificio para cuya construcción se soliciten las correspondientes autorizaciones a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

m) Eficiencia energética: la relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o energía, y el gasto de energía.

n) Energía procedente de fuentes renovables: energía procedente de fuentes renovables no fósiles, como la energía hidráulica, eólica, solar, geotérmica, oceánica y biomasa, así como otros tipos de aprovechamiento considerados renovables.

ñ) Instalación: cualquier equipamiento o sistema que consuma energía en el cumplimiento de su función o bien la genere o la transforme *in situ* a partir de cualquier fuente de energía.

o) Nivel base de referencia del consumo energético global: inventario del total de la energía consumida, en todas sus formas, por la respectiva administración en un momento dado y sobre el que se aplican los objetivos de sostenibilidad energética que se determinen. Incluye el consumo en detalle de las distintas fuentes de energía y vectores energéticos utilizados, tanto en términos absolutos como relativos, desagregados y agregados por edificios, unidades de actuación energética, instalaciones generadoras y consumidoras de energía, parque móvil y alumbrado público.

p) Punto de recarga o de repostaje accesible al público: punto de recarga o de repostaje para suministrar un combustible alternativo que permite el acceso no discriminatorio a personas usuarias en toda la Unión Europea. El acceso no discriminatorio puede incluir diferentes condiciones de autenticación, utilización y pago.

q) Reformas importantes, es decir la renovación o rehabilitación de un edificio cuando:



- Los costes totales de la renovación referentes a la envolvente del edificio o a sus instalaciones técnicas son superiores al 25% del valor del edificio, excluido el valor del terreno en el que está construido o,
- se renueve más del 25% de la superficie de la envolvente del edificio o,
- la rehabilitación afecte a más de un 50% de la superficie útil del edificio.

r) Servicio energético: el beneficio físico, la utilidad o el bien derivados de la combinación de una energía con una tecnología energética eficiente o con una acción, que puede incluir las operaciones, el mantenimiento y el control necesarios para prestar el servicio, el cual se presta con arreglo a un contrato y que, en circunstancias normales, ha demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía primaria verificables y medibles o estimables.

s) Unidad de actuación energética ámbito de aplicación, singular, conjunta o transversal, de todas o algunas de las medidas previstas en la presente Ley ya se trate de edificios propiedad de cualquiera de las Administraciones Públicas Vascas objeto de la presente Ley como de sus instalaciones, sistemas de calefacción y refrigeración, parque móvil y, en su caso, alumbrado público.

Artículo 5. Objetivos.

En el ámbito definido en los artículos 2 y 3, los objetivos de esta Ley son:

- a) El impulso de la eficiencia en el uso de la energía y la promoción del ahorro, en el marco de las normas y actuaciones de la Unión Europea en esta materia.
- b) La promoción e implantación de las energías renovables y de otras fuentes energéticas alternativas sostenibles, con el fin de reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
- c) La desvinculación progresiva del uso energético del petróleo y sus derivados hasta alcanzar el consumo nulo.
- d) La promoción y el fomento de modos de transporte que utilicen combustibles alternativos.
- e) La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la contaminación por partículas y óxidos de nitrógeno principalmente, consecuencia de las medidas de ahorro y eficiencia en el uso de la energía y de la



utilización de fuentes de energía renovables derivadas del cumplimiento de la presente Ley.

f) La reducción de la factura energética de las Administraciones Públicas Vascas.

g) La promoción y el fomento de la investigación y del desarrollo de técnicas y tecnologías que incrementen el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía y el desarrollo de energías renovables, así como de los sistemas asociados que faciliten el avance de su utilización e implantación.

h) La prevención y limitación de los impactos del uso de la energía en el medio ambiente y el territorio, mediante el ahorro y el empleo de técnicas y tecnologías que impliquen una mayor eficiencia en su uso, contribuyendo también a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

i) La integración de los requisitos derivados de la sostenibilidad energética en las distintas políticas públicas y, en particular, en las de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y transportes.

j) El impulso de acuerdos con otras administraciones y con los particulares con el fin de lograr una mayor sostenibilidad energética.

k) La divulgación de los beneficios que aporta un mayor ahorro y eficiencia energética y el empleo de las energías renovables.

Artículo 6. Principios.

1.- La presente Ley se asienta en los siguientes principios:

a) Papel ejemplarizante de las Administraciones Públicas Vascas en materia de sostenibilidad energética mediante la adopción de las medidas obligatorias establecidas en esta Ley y normativa que la desarrolle, así como de cualquier otra que, no estando contemplada expresamente en esta Ley, pueda contribuir igualmente al cumplimiento de sus objetivos.

b) Integración de las exigencias relativas a la sostenibilidad energética en el diseño y aplicación del resto de las políticas y actuaciones públicas que se desarrollen en la Comunidad Autónoma del País Vasco.



- c) Priorización en los planes de ordenación del territorio, urbanismo y de infraestructuras de medios de transporte menos intensivos en el uso de la energía y de la implantación de instalaciones con una mayor eficiencia energética.
- d) Adaptación al progreso técnico mediante el empleo de aquellas técnicas que logren un mayor ahorro, una mejor eficiencia energética o una mejor utilización de las energías renovables, siempre que se encuentren disponibles en condiciones económicamente razonables.
- e) Actuación informada en datos científicos y técnicos disponibles en el momento y elaborada con perspectiva de género a la hora de diseñarse por los poderes públicos medidas y actuaciones sobre sostenibilidad energética.
- f) Cooperación, eficacia y coordinación entre las distintas administraciones públicas en materia de sostenibilidad.
- g) Participación ciudadana, directamente o por medio de asociaciones, en los términos que establezcan las correspondientes normas, en el diseño de las políticas y en las decisiones de sostenibilidad energética. Se procurará la presencia equilibrada de mujeres y hombres y se tendrá en cuenta que las formas de participar de unas y otros son diferentes por lo que se preverán estrategias de compensación.
- h) Divulgación por parte de las Administraciones Públicas Vascas de información sobre sostenibilidad energética y sobre sus actuaciones concretas en esta materia.

2.- Los anteriores principios constituyen pautas de actuación de las Administraciones Públicas Vascas y criterios de interpretación de las correspondientes normas en materia energética y, en su caso, de aquellas otras políticas que desarrollen las Administraciones Públicas con incidencia en la política energética.

Artículo 7. Integración en la ordenación del territorio y el urbanismo.

1 .- De acuerdo con lo señalado en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 6, los instrumentos de ordenación del territorio, de planeamiento urbanístico y de infraestructuras del transporte deberán incluir un estudio de sostenibilidad energética en los términos de esta Ley y de la normativa que la desarrolle.

2.- Estarán sujetos a lo anterior los siguientes instrumentos:



a) Las Directrices de Ordenación Territorial, los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales.

b) Los Planes de Ordenación Estructural, Planes Generales de Ordenación Urbana, Planes de Compatibilización de Planeamiento General, Plan de Sectorización y, en su caso y en los términos que se establezcan reglamentariamente, los Planes de Ordenación Pormenorizada.

c) Los Planes de Carreteras o de Infraestructuras de Transporte y aquellos con incidencia directa en la logística de la distribución de mercancías.

Las determinaciones que se realicen en el planeamiento superior se tendrán en cuenta en los instrumentos subordinados.

3.- El estudio sobre sostenibilidad energética incluirá los siguientes aspectos:

a) Evaluación de la adaptación a las exigencias de sostenibilidad energética.

b) Evaluación de la implantación de energías renovables en los edificios e infraestructuras.

c) Estudio de movilidad, a los efectos del consumo energético, incluyendo alternativas al uso del transporte privado.

4.- Cuando los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos a los que se refiere el apartado 2, se sometan a alguno de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica legalmente establecidos, no será necesario duplicar aquellos aspectos del estudio requerido en los apartados 1 y 3 que además vengán exigidos por la normativa que regula dichos procedimientos de evaluación ambiental

5.- Los instrumentos urbanísticos correspondientes deberán prever estaciones de recarga de uso público en los entornos urbanos para garantizar el suministro de energía a las personas usuarias de vehículos eléctricos y alternativos, así como de espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de bicicletas.

Artículo 8. Coordinación de la política de sostenibilidad energética.

Para garantizar la coherencia de la política de sostenibilidad energética, corresponderá al departamento con competencia en materia de energía del Gobierno Vasco el ejercicio de las facultades de coordinación que demande el interés general del País Vasco a través de, entre otras, las siguientes actuaciones:



- a) Elaboración de normas.
- b) Simplificación de los procedimientos administrativos.
- c) Homogeneización de métodos y criterios técnicos.
- d) Implantación de sistemas de información recíproca.
- e) Divulgación de pautas y técnicas de ahorro y eficiencia energética.
- f) Elaboración de planes y programas de apoyo para el fomento de acciones y proyectos de sostenibilidad energética.

Artículo 9. Comisiones para la Sostenibilidad Energética.

1.- Para la coordinación de los distintos entes integrantes de cada administración en la consecución de los objetivos perseguidos por la Ley, la Administración de la Comunidad Autónoma, las Administraciones de los Territorios Históricos y de los Municipios, contarán cada una, bien con una Comisión para la Sostenibilidad Energética, o bien con entidades de similares características y funciones.

2.- Las Administraciones de los Territorios Históricos y los Municipios con más de 25.000 habitantes deberán crear sus respectivas Comisiones en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Este plazo será de 2 años para los Municipios de entre 5.000 y 25.000 habitantes.

3.- Cada administración establecerá la composición y el funcionamiento de esta Comisión debiendo garantizarse la presencia equilibrada de mujeres y hombres de conformidad con lo previsto en los artículos 3.7 y 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

4.- Serán funciones de las Comisiones para la Sostenibilidad Energética:

- a) Aprobar el inventario a que se refiere el artículo 10.
- b) Supervisar y garantizar el desarrollo de las medidas adoptadas en cumplimiento de la presente Ley así como el cumplimiento de los objetivos establecidos en la misma.
- c) Informar periódicamente sobre el estado y desarrollo de su Plan de actuación energética.



CAPÍTULO II. OBJETIVOS Y ACCIONES

Sección 1ª. Objetivos y acciones generales

Artículo 10. Inventario.

1.- Las Administraciones Públicas realizarán un inventario de edificios, parque móvil e instalaciones de alumbrado público existentes, dentro de su ámbito de actuación, que contendrá la siguiente información:

- a) Inventario de los edificios e instalaciones de su titularidad, incluyendo su superficie en m² y el consumo y gasto energético de cada edificio. La anterior obligación no incluye los consumos en viviendas o locales utilizados en el ámbito privado por particulares o empresas en régimen de alquiler.
- b) Inventario de consumos derivados de su parque móvil, desglosando el número de vehículos y el destino al que se dedica cada uno. El parque móvil incluye tanto los vehículos terrestres como los marinos y aéreos.
- c) Inventario de consumos derivados de su alumbrado público.

2.- En el plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el departamento con competencia en materia de energía realizará el inventario referido a la Administración de la Comunidad Autónoma.

3.- El resto de las administraciones realizarán este inventario en el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

4.- Los inventarios y su información asociada serán públicos y, en el plazo máximo de 3 meses desde su aprobación, deberán estar a disposición del público en general y serán facilitados al departamento del Gobierno Vasco con competencia en materia de energía.

Artículo 11. Control de consumos.

1.- En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los edificios e instalaciones de cada Administración Pública Vasca con una potencia eléctrica instalada superior a 25 kW deberán disponer de contadores de energía eléctrica con capacidad de teledorada, de registro y transmisión de curva de carga en periodos inferiores a una hora. La información obtenida por los contadores estará disponible, al menos diariamente, de manera centralizada para todos los edificios e instalaciones.



2.- El control del consumo de energía por edificio, que incluirá todos los consumos de todas las energías utilizadas y su coste, se realizará al menos una vez al año y en base mensual.

Artículo 12. Auditorías energéticas.

1.- En el plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los edificios de las Administraciones Públicas Vascas con una potencia térmica superior a 70 kW deberán contar con la correspondiente auditoría energética.

2.- Las auditorías energéticas tendrán la finalidad de realizar un diagnóstico sobre su consumo energético y sus potenciales niveles de ahorro y eficiencia energética, así como las recomendaciones para su mejora y para la implantación de energías renovables.

3.- El alumbrado público exterior será objeto de una auditoría energética independiente que deberá contener, en todo caso, las prioridades de renovación y reducción de los componentes del alumbrado público exterior, salvo en aquellos casos en que por la seguridad de las personas o instalaciones no resultara posible.

4.- Las auditorías energéticas, sin perjuicio de lo establecido en las normas técnicas vigentes en el ámbito de la Unión Europea, tendrán, al menos, los siguientes contenidos:

- a) Consumo anual de la unidad de actuación energética.
- b) Consumos específicos y distribución de los mismos, abarcando instalaciones, procesos, equipos, parque móvil, calefacción, climatización, iluminación interior y alumbrado público exterior.
- c) Porcentajes de suministro energético, distinguiendo entre fuentes convencionales y otras provenientes de energías renovables.
- d) Análisis de la eficiencia de edificios, instalaciones, equipos y procesos.
- e) Análisis de la eficacia de las medidas que se estén adoptando.
- f) Recomendaciones y posibles mejoras en edificios, instalaciones, calefacción, climatización, parque móvil, iluminación interior, alumbrado público exterior, procesos de consumo, de ahorro y eficiencia, y de compras, señalando aquellas que, de acuerdo con la auditoría, resulten prioritarias.
- g) Actuaciones apropiadas en materia de energías renovables.



h) Metodología empleada, desglosada en los distintos elementos objeto de análisis por la auditoría.

i) Resumen ejecutivo.

5.- Las auditorías energéticas deberán renovarse cada seis años debiéndose realizar una nueva al término de ese plazo. Las nuevas auditorías incluirán un resumen de las actuaciones realizadas y un análisis comparativo de la evolución del consumo de energía durante la vigencia de la anterior.

Artículo 13. Planes de actuación energética.

1.- Todas las Administraciones Públicas Vascas deberán diseñar sus propios planes de actuación energética de carácter plurianual en los que realicen un diagnóstico de la situación en su ámbito de actuación y fijen estrategias a ejecutar durante la vigencia de los mismos. En todo caso, se garantizará la debida participación ciudadana en su proceso de elaboración.

2.- La Administración de la Comunidad Autónoma y la Universidad del País Vasco/Euskal-Herriko Unibertsitatea aprobarán sus respectivos planes de actuación en el plazo máximo de 6 meses, desde la entrada en vigor de la presente Ley.

3.- Las Administraciones de los Territorios Históricos y de los Municipios con más de 25.000 habitantes deberán aprobar sus respectivos planes de actuación energética en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Este plazo será de dos años para las Administraciones de los Municipios de entre 5.000 y 25.000 habitantes.

Los Ayuntamientos con un número de habitantes inferior a 5.000 podrán sustituir el plan de actuación energética por un documento, que contendrá al menos la información indicada en las letras a) y b) del siguiente apartado, para lo cual contarán con un plazo de dos años, desde la entrada en vigor de la presente Ley.

4.- El contenido mínimo de los planes de actuación energética será el siguiente:

a) Diagnóstico energético y determinación del nivel base de referencia de cada administración, desglosando las fuentes de consumo, e incluyendo el alumbrado público.



b) Planificación temporal para la implantación de medidas de sostenibilidad energética, desglosando cada sector de que se trate. Esta planificación temporal tendrá en cuenta, en su caso, los resultados de la correspondiente auditoría energética y las obligaciones de ahorro que impongan esta Ley y su normativa de desarrollo.

c) Mecanismos de evaluación de la efectividad del plan durante su vigencia.

Artículo 14. Porcentajes de ahorro de energía.

1.- Las Administraciones Públicas Vascas deberán cumplir con los porcentajes de ahorro y eficiencia energética y de energías renovables que se fijan en la presente Ley, en consonancia con los objetivos de política energética que se establezcan en la Estrategia Energética de Euskadi.

2.- Las Administraciones Públicas Vascas, cada una en su respectivo ámbito de actuación, deberán alcanzar una reducción del consumo de energía del 25% en el horizonte 2025, todo ello sobre el nivel base de referencia del consumo energético global correspondiente a cada una de ellas, incluyendo las entidades que de ellas dependen.

3.- Para la determinación de la reducción del consumo energético se tendrán en cuenta los correspondientes a edificios, parque móvil y alumbrado público.

Artículo 15. Utilización de energía procedente de fuentes renovables.

1.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, en las licitaciones para la compra de energía eléctrica de las Administraciones Públicas Vascas, se valorará especialmente el origen renovable de la misma.

Se podrá exigir que el 100% de la energía adquirida por las Administraciones Públicas sea energía eléctrica verde siempre y cuando ello fuera económicamente razonable.

2.- Cada Administración Pública Vasca deberá lograr para el año 2025 que, al menos, un 25% de sus edificios disponga de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables, incluyendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica.



Artículo 16. Renovación de instalaciones, equipos, flotas y vehículos.

1.- Además de instalar sistemas de gestión centralizada de las instalaciones, que pueden incluir la monitorización de consumos, la renovación de instalaciones, equipos, flotas y vehículos de cada Administración Pública Vasca deberá hacerse teniendo en cuenta criterios de ahorro y eficiencia energética y utilización de energías renovables que contribuyan a la disminución del uso de combustibles derivados del petróleo.

2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, y para el caso de contratos sujetos a regulación armonizada, las Administraciones Públicas Vascas deberán adquirir productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, de acuerdo, entre otros, con los siguientes criterios:

- a) Pertener a la clase de eficiencia más alta, teniendo en cuenta la eficacia en los costes, la viabilidad económica y la adecuación técnica, así como la existencia de competencia suficiente. Especialmente se ha de tener en cuenta su aplicación a la adquisición de equipos de climatización, agua caliente sanitaria, equipos ofimáticos y de alumbrado.
- b) Considerar, a la hora de comprar vehículos de transporte por carretera y neumáticos, su ciclo de vida y los impactos energético y medioambiental que producirían los mismos.

Sección 2ª. Edificios

Artículo 17. Calificación energética de edificios existentes.

1. Los edificios existentes de titularidad de las Administraciones Públicas Vascas que, de conformidad con las exigencias de la normativa vigente sobre certificación energética, deban disponer de la Certificación Energética de Edificios, deberán contar con dicho Certificado en los plazos establecidos en la misma.

Los edificios existentes de titularidad de cualquiera de las Administraciones Públicas Vascas que no se vean afectadas por la normativa vigente sobre certificación energética deberán disponer del Certificado de Eficiencia Energética en el plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

2.- El 25% de los edificios existentes de cada Administración Pública Vasca, cuyo nivel de calificación energética fuera inferior a B, deberán mejorar dicha calificación un nivel, como mínimo, antes del año 2025.



En el caso de los edificios existentes de la Administración de los Municipios con número de habitantes inferior a 25.000, incluyendo sus entidades dependientes, este porcentaje será del 20%.

Artículo 18. Calificación energética de edificios de nueva construcción.

1.- Los edificios de titularidad de las Administraciones Públicas Vascas de nueva construcción, deberán ser de consumo de energía casi nulo a partir de la fecha indicada en la normativa aplicable.

Hasta que se concrete normativamente lo que debe entenderse por “consumo de energía casi nulo”, se aplicará lo dispuesto en la disposición adicional tercera de esta Ley sobre Edificios de consumo de energía casi nulo.

2.- La anterior obligación se podrá dispensar en los siguientes supuestos:

- a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico.
- b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas.
- c) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.
- d) Edificios industriales y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agrícolas no residenciales.
- e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m².
- f) Edificios o partes de edificios cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario.



Sección 3ª. Transporte y movilidad

Artículo 19. Uso de combustibles alternativos en vehículos propios.

- 1.- Las Administraciones Públicas Vascas fomentarán el uso de combustibles alternativos a fin de mitigar el impacto ambiental y minimizar la dependencia de los transportes respecto del petróleo.
- 2.- A partir del año 2020, el 100% de los vehículos que se adquieran por las Administraciones Públicas Vascas deberán utilizar combustibles alternativos.
- 3.- La obligación señalada en el apartado anterior no afectará a aquellos departamentos o entes que, por las funciones de seguridad pública, de las personas, sanitarias o medioambientales que realicen, precisen de un mínimo de vehículos de transporte impulsados por combustibles derivados del petróleo.
- 4.- Las Administraciones municipales deberán facilitar que para el año 2025 exista en cada municipio un punto de recarga de vehículo eléctrico por cada 2.000 habitantes.
- 5.- Los edificios de nueva construcción, de titularidad de las Administraciones Públicas Vascas, habrán de contar con puntos de recarga de vehículos eléctricos y de espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de bicicletas.

Artículo 20. Utilización de energía en vehículos que presten el servicio público de transportes de viajeros y viajeras por carretera.

- 1.- El servicio público de transporte de viajeros y viajeras por carretera deberá ser prestado por vehículos que utilicen combustibles alternativos, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en lo que reglamentariamente se desarrolle.
- 2.- Los pliegos o instrumentos que se adopten para el otorgamiento o, en su caso, renovación de las licencias o concesiones administrativas correspondientes deberán tener en cuenta que el 100% de la flota renovada de vehículos habrá de utilizar combustibles alternativos a partir del año 2020.
- 3.- Las empresas adjudicatarias de una concesión o autorización administrativa que exploten servicios de transporte público de viajeros y viajeras u otro tipo de servicios públicos serán ~~son~~ responsables del cumplimiento de las anteriores obligaciones.



Artículo 21. Restricciones a la circulación de vehículos.

1.- A fin de evitar un incremento excesivo del uso de la energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero o un deterioro de la calidad del aire atmosférico, los municipios podrán prohibir o restringir el acceso a determinadas zonas de su término municipal a los vehículos que no utilicen combustibles alternativos o a aquellos que sobrepasen determinados niveles de emisión.

2.- Los municipios podrán reservar zonas para aquellos vehículos que utilicen combustibles alternativos en las que tendrán espacios reservados para su estacionamiento o reducciones en el precio del estacionamiento en zonas públicas o aparcamientos municipales.

Artículo 22. Planes de movilidad.

1.- En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los municipios con más de 25.000 habitantes deberán adoptar un plan de movilidad urbana. Este plazo será de tres años para los municipios que cuenten con entre 5.000 y 25.000 habitantes.

Las Diputaciones Forales adoptarán planes de movilidad para cubrir la movilidad interurbana del resto del territorio no cubierto por lo establecido en el párrafo precedente.

2.- El plan constará de:

a) Parte 1. Diagnóstico, que abarcará los siguientes puntos:

- La incidencia del modelo territorial y urbanístico sobre la movilidad y, en general, en el transporte.
- Los distintos modos de transporte existentes en el municipio y su incidencia en el uso de la energía. Este diagnóstico deberá indicar, entre otras cuestiones: vías de transporte, aforos, lugares de estacionamiento para los distintos tipos de vehículos, sistemas públicos de recarga de combustibles y centros de actividad o de trabajo con afluencia pública relevante.

b) Parte 2. Medidas, que incluirá los siguientes aspectos:

- Instalación de puntos de recarga y repostaje de combustibles alternativos accesibles al público.
- Incentivación del transporte público.



- Alternativas para la reducción progresiva del transporte privado.
- Mejora de la logística para la distribución de mercancías.
- Fomento del uso de bicicletas.
- Establecimiento de nuevas zonas de uso exclusivo de peatones.
- Fomento del uso de vehículos que utilicen combustibles alternativos.

3.- El Plan deberá indicar con claridad los objetivos que persigue, las inversiones comprometidas por la Administración adoptante del plan y el horizonte temporal para su consecución y deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 4/2005. El Plan y los estudios precisos para su realización se redactarán teniendo en cuenta los diferentes usos de la ciudad y del espacio que hombres y mujeres realizan, e incluirán propuestas para disminuir las posibles brechas de género con la finalidad de avanzar hacia el diseño de una ciudad integradora y corresponsable.

4.- La tramitación del plan de movilidad urbana contará con una aprobación inicial y otra definitiva, debiéndose garantizar la participación e información ciudadana una vez adoptado el acuerdo de tramitación del plan. Si tras su aprobación inicial las modificaciones del plan resultasen sustanciales se habrá de garantizar una segunda fase de información pública. En ambos casos, el plazo de presentación de alegaciones no podrá ser inferior a 45 días.

El plan y la documentación que le acompañe durante su tramitación serán públicos.

5.- La vigencia del plan será de 5 años, transcurridos los cuales se deberá efectuar una evaluación de los resultados alcanzados por el mismo e iniciarse una modificación de sus objetivos y medidas. Tales resultados serán públicos.

Sección 4ª. Otras obligaciones

Artículo 23. Publicidad de medidas.

1.- Cada Administración Pública Vasca deberá publicar, mediante la elaboración de bases de datos electrónicas de fácil acceso al público a través de redes públicas de telecomunicaciones, las medidas que adopte para incrementar el ahorro y la eficiencia energética, incluyendo los planes de actuación energética detallados en el artículo 13.

2.- En particular, al menos cada dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, publicará un informe que incluya, como mínimo, los siguientes aspectos:



- a) Consumo energético desglosado por edificio y fuentes energéticas empleadas.
- b) Las auditorías efectuadas y su resultado.
- c) Medidas adoptadas e inversiones realizadas para el ahorro y mejora de la eficiencia energética y para la implantación de instalaciones de generación renovable con indicación de los resultados alcanzados.
- d) El grado de cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas Vascas de los compromisos de las obligaciones exigidas en la presente Ley.

Artículo 24. Formación.

1.- En el plazo de un año tras la entrada en vigor de esta Ley, las Administraciones Públicas Vascas contempladas en el artículo 2 deberán adoptar un plan de formación del personal de su ámbito de actuación sobre técnicas para aumentar el ahorro y la eficiencia energética.

Los municipios con menos de 25.000 habitantes deberán aprobar este plan de formación en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley.

2.- El objetivo de este plan será la formación de personal gestor y técnico relacionados con la compra, mantenimiento y utilización de instalaciones consumidoras de energía sobre técnicas de ahorro y eficiencia energética y energías renovables.

Artículo 25. Exhibición de etiquetas.

1.- Las Administraciones Públicas Vascas exhibirán de manera obligatoria y en un lugar fácilmente visible la etiqueta de eficiencia energética de edificios una vez hayan obtenido la certificación de eficiencia energética de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la presente Ley.

2.- Las Administraciones Públicas Vascas deberán exhibir en un lugar fácilmente visible, respecto de los vehículos nuevos que utilicen combustibles alternativos que adquieran a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, etiqueta informativa sobre el tipo de combustible que emplean y otros datos que se determinen reglamentariamente.



CAPÍTULO III. INSTRUMENTOS VOLUNTARIOS Y FOMENTO

Artículo 26. Obtención de ayudas en materia energética.

La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el ámbito del otorgamiento de ayudas en materia energética, podrá establecer incrementos en la cuantía de las ayudas o beneficios especiales para aquellas Administraciones Públicas solicitantes que justifiquen, previamente a su concesión, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 27. Acuerdos voluntarios.

1.- Las Administraciones Públicas Vascas pueden comprometerse, mediante acuerdos voluntarios, a desarrollar estrategias para alcanzar objetivos más exigentes que los legalmente establecidos en materia de sostenibilidad energética.

2.- Los acuerdos voluntarios, sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, serán de obligado cumplimiento para las partes.

3.- El departamento competente en materia de energía del Gobierno Vasco promoverá e impulsará la colaboración social en el uso responsable de la energía para la consecución de los objetivos de esta Ley, lo que podrá incluir la suscripción de los acuerdos voluntarios precisos con agentes del sector energético y otros agentes sociales.

4.- Las Administraciones Públicas Vascas deberán publicar los acuerdos voluntarios que suscriban en materia de sostenibilidad energética, manteniendo actualizada y disponible para el público la información que obre en su poder sobre ellos.

Artículo 28. Divulgación de la información, formación y sensibilización sobre sostenibilidad energética.

1.- Las Administraciones Públicas Vascas, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en el ámbito de sus competencias, garantizarán el derecho a la información sobre la sostenibilidad energética, mediante la divulgación de pautas y técnicas a través de, entre otros, los siguientes medios:

- a) Campañas de educación, de sensibilización y publicitarias.



- b) Los programas de enseñanza primaria y secundaria.
- c) La publicación y distribución de guías comprensibles para la población y los sectores industrial, comercial, de servicios, residencial y transporte sobre la implantación de técnicas y pautas que logren un mayor ahorro y eficiencia en el uso de la energía, previstas en esta Ley.

La divulgación, formación y sensibilización deberá efectuarse siempre con respeto al lenguaje inclusivo, tanto en textos como en imágenes, y procurando la eliminación de roles y estereotipos.

2.- El departamento competente en materia de energía del Gobierno Vasco podrá convocar premios dirigidos, entre otros, a entes locales, organizaciones o movimientos sociales, sectores industriales, edificaciones, campañas de publicidad, programas educativos o trabajos científicos que mejor contribuyan con su ejemplo o por su repercusión o impacto social a la divulgación de estos valores así como a las mejores pautas y técnicas de ahorro y eficiencia energética y de promoción y desarrollo de las energías renovables.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Consorcios y Mancomunidades.

En el caso de edificios, instalaciones, vehículos, alumbrado público u otros destinados a actividades en régimen de consorcio o mancomunidad dedicados al abastecimiento de agua, recogida y tratamiento de residuos, depuración de aguas residuales y mataderos, las obligaciones comprendidas en la presente Ley serán cumplimentadas por el correspondiente consorcio o mancomunidad. Las administraciones que participen en dicho consorcio o mancomunidad prestarán su colaboración en los términos que ellas acuerden.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Nivel base de referencia.

1.- En el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta Ley, por cada una de las Administraciones Públicas afectadas por la presente Ley se aprobará el nivel base de referencia de su consumo energético, que servirá de punto de partida para el establecimiento de los objetivos.

2.- En su determinación se deberá tomar en consideración la media de los tres últimos años anteriores a la entrada en vigor de esta ley. Alternativamente, se podrá tomar como nivel base de consumo energético el del último año anterior a la entrada en vigor de la



misma u otro año, de manera justificada y con el objeto de poner en valor actuaciones realizadas con anterioridad a la aprobación de esta Ley,

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Edificios de consumo de energía casi nulo.

Mientras no se establezca la normativa o metodología concreta para cuantificarlo, el consumo de energía casi nulo en un edificio se considerará equivalente a contar, como mínimo, con calificación energética tipo A.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Planes de sostenibilidad energética de determinadas instituciones estatutarias.

El Parlamento Vasco, el Tribunal de Cuentas y el Ararteko elaborarán sus propios planes de sostenibilidad energética, sin que vengan obligadas al cumplimiento de las previsiones de esta Ley.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor a los 6 meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.



**TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN EUSKERA /
LEGE PROIEKTUAREN TESTUA EUSKARAZ**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN
ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA
PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VASCAS**



EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN ENERGETIKOARI BURUZKO LEGEAREN PROIEKTUA

ZIOEN AZALPENA

Energia pertsonen bizitzaren parte da. Egia esan, bizitza bada, Eguzkiak ematen duen energiari esker da, zeina 8 minutuko denbora tartean iristen den Lurra planetara; horrexek abiarazten ditu funtsezko bizi-prozesu guztiak. Energia-beharrak ezinbestekoak izan dira gizakia izan eta gara zedin etenik gabeko bilakaeran, historiaurreko sutik hasi eta gaur egunera bitarte. Bi gertakari nabarmendu behar dira, hala ere: industria-iraultza –ikatzean oinarritu zen– eta petrolioaren erabilera erabat zabaldu izana aurreko mendeko 20ko hamarkadatik aurrera, zeinak autoak eta hegazkinak masan ekoiztea ekarri zuen. Bata bestearen atzetik krisi energetiko ugari izan baditugu ere –1973. urtean hasi ziren–, gaur egungo gizartean funtsezko energia-iturri izaten jarraitzen du petrolioak, eta erabilera- eta kontsumo-produktu ia guztietan ageri da. Jakina, petrolio ez da energia-iturri bakarra; badaude beste batzuk ere, hala nola gas naturala, ikatza, energia nuklearra eta energia berriztagarriak: hidraulikoa, eolikoa, eguzki-energia, biomasa, itsas energia eta geotermikoa; horiek guztiek gero eta zeregin garrantzitsuagoa dute energia-hornidura orokorraren barruan.

Baina energia-kontsumoak baditu zenbait arazo. Alde batetik, energia ahalik eta modurik eraginkorrenean erabili nahi da, eta horrek erronka argi bat dakarkie gaur egungo gizartei, alderdi fisikoei eta ekonomikoei dagokienez. Bestetik, atmosferara isuritako berotegi-efektuko gasek eragiten duten arazoa daukagu. Isurketa horiek klima-aldaketan zer ondorio izan dezaketen ikusita –adostasun zientifiko handia dago alor horretan–, halakoak nabarmen gutxitzeko neurriak hartu behar dira, besteak beste jasangarritasun energetikoa bilatuta eta belaunaldien artean behar den elkartasuna era askotako adierazpen eta testu juridikotako ohiko eslogan baino zerbait gehiago bihurtuta.

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunak energia-politikari eskaintzen dio XXI. titulua, eta oinarritzko helburu batzuk jartzen ditu, tartean hauek: energia-merkatuaren funtzionamendua bermatzea, Europar Batasunean energia-horniduraren segurtasuna bermatzea, eraginkortasun energetikoa eta energia aurrez dadin sustatzea, energia berri eta berriztagarriak garatzea eta, azkenik, energia-sareen interkonexioa bultzatzea. Izan ere, Europar Batasunak zenbait neurri hartu ditu alor honetan; aipatzekoak dira hauek: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010eko maiatzaren 19ko 2010/31/EB Zuzentaraua, eraikinen efizientzia energetikoari buruzkoa; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Zuzentaraua, efizientzia energetikoari buruzkoa, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko urriaren 22ko 2014/94/EB Zuzentaraua, ordezkoko erregaietarako azpiegitura bat ezartzeari buruzkoa.



Euskal Autonomia Erkidegoa aspaldidanik ari da energiaren alorreko ekintzak egiten. 1982an sortu zen Energiaren Euskal Erakundea, azaroaren 24ko 9/1982 Legearen bidez; Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoaren energiaren alorreko egungo eta etorkizuneko jardueren plangintza, koordinazioa eta kontrola esleitu zitzaizkion, Autonomia Estatutuan ezarritako eskumenen esparruan Eusko Jaurlaritzak jarritako gidalerroak jarraituz. Egoera horretan, Euskadiko Energia Estrategia 2030ek (3E2030) helburu hauek ezartzen ditu, besteak beste: efizientzia energetikoaren alorreko jarduerak areagotzea kontsumo-sektore guztietan, 2030ean 1.250.000 petrolio-tona baliokide (ptb) aurrezteko eta azken energia-intentsitatea % 33 hobetzeko. Era horretan, 2030ean, petrolioaren azken kontsumoa % 18 gutxitu nahi da 2015. urtearen aldean, eta garraio-sektorearekiko desloturari bidea eman. Errepide bidezko garraioan ordezkoko energiak % 25 izan daitezen ere lortu nahi da, eta energia horien ustiapena 966.000 ptb izatea 2030ean; hau da, berriztagarrien kuota % 21 izatea azken kontsumoan. Helburu horiek guztiak anbizio handikoak dira, dudarik gabe, baina halakoxeak izanda soilik lor daitezke.

Ingurumenaren aldetik ere badu bere lekua legearen aurreproiektu honek. Izan ere, Klima-aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategiak –2015. urtean onetsi zen– klima aldaketaren arloan euskal administrazio publiko arduratsu, eredugarri eta erreferentziazko bat izatea du helburu epe luzera berotegi-efektuko gasen isurketak gutxitzea lortzeko, eta adierazi du ereduazko jarduera izan behar dutela EAEko administrazio publikoaren organo guztiek euskal gizartearen eragile guztien inplikazioa lortzeko. Horretarako ezinbestekoa da koordinazio-lana horizontalki eta bertikalki egitea, hau da, Eusko Jaurlaritzaren sailen artean nahiz udal zein foru-aldundiekin. “Zero isurketa” egiten duen administrazio publikoa lortzea da 2050eko helburuak lortzeko nabarmentzen den jarduera-ildo garrantzitsuenetako bat.

Alde horretatik, lege honek jasangarritasun energetikoaren arau-oinarriak ezartzen ditu bere 28 artikuluetan. Euskal Autonomia Erkidegoan efizientzia energetikorako eta energia aurrezteko neurriak eta energia berriztagarriak sustatzeko eta ezartzekoak bultzatzea du oinarri, politika energetikoaren norabidea betez; EAEko administrazio publikoek zer eginbehar eta obligazio dituzten ezartzen du, eta, gainera, administrazioek eremu honetan eredugarri izan behar dutela jasotzen. Adierazitako guztia biltzeko, hiru kapitulu, hiru xedapen gehigarri eta bi azken xedapen ditu.

I. kapituluan, legearen aplikazio-eremua zehazten da, bai subjektiboa bai objektiboa, eta legea aplikatzeko eta ulertzeko behar diren definizioak ematen dira. Jarraian, legearen helburuak zerrendatzen dira, eta energia-kontsumoa gutxitu eta jasangarritasun energetikoari bultzada eman eta hura sustatu behar dela nabarmentzen da, ingurumena babestu behar dela ahaztu gabe, energia berriztagarrien instalazioak jarrita. Era berean, legeak legea bera interpretatzeko zortzi printzipio zerrendatzen ditu, zeinak EAEko



administrazio publikoen jarduera-jarraibideak ere izango diren; horien artetik nabarmentzekoa da EAEko administrazio publikoek eredugarri izan behar dutela alor honetan. Era berean, funtsezko oinarri gisa, lege honen betekizunak beste politika publiko batzuetan sartu behar direla ezartzen da, bereziki lurraldearen antolamenduarekin, hirigintzarekin eta garraio-azpiegiturekin zerikusia daukatenetan, eta EAEko administrazio publikoen arteko eraginkortasuna eta koordinazioa beharrezkoa dela. Helburu horiek lortzeko, administrazio bakoitzean jasangarritasun energetikorako batzordeak edo antzeko beste organo batzuk osatzea arautzen da; tresna gisa konfiguratu dira, eta zeregin garrantzitsua izango dute alor honetan.

II. kapitulua giltzarria da, eta EAEko administrazioek zer betebeharrak dituzten jasotzen du. Beste politika publiko batzuetan gertatzen den bezala, norabide nagusiak markatzeko ezinbestekoa da denbora tarte zabal baterako helburuak eta jarduerak adieraztea. Betebeharrak, udalerrien kasuan, biztanle-kopuruaren arabera izango dira, baina edonola ere, EAEko administrazio publikoek legearen helburuak lortzeko neurri eraginkorrak har ditzaten bilatzen dute.

II. kapituluak lau atal ditu. Lehenengoan, administrazio publikoek bete behar dituzten helburu eta ekintza orokorrak jaso dira. Horretarako, legeak eskatzen die dagokien inbentarioak egiteko, kontsumoak kontrolatzeko eta energia-auditoretzak egiteko. Hainbat urtetarako energia-jarduketan planak egiteko abiaburu dira neurri horiek; plan horietan, administrazio publikoek norberaren jardun-eremuaren barruko egoera-diagnostikoak egingo dituzte eta planak indarrean dauden bitartean gauzatu beharreko estrategiak finkatuko dituzte. Era berean, helburu hauek ezarri dira: energia-kontsumoan portzentajezko murrizketak egitea, administrazio bakoitzaren urteko kontsumoak erreferentzia gisa hartuta eta tasatutako denbora-aldi batzuen arabera; energia berriztagarrien instalazioak jartzea, eta energia asko kontsumitzen duten instalazioak, ibilgailuak edo ekipamenduak berritzeko betekizunak ezartzea.

2. atalean, berriz, eraikin eta etxebizitzak betebeharrak jaso dira; hala lehenik dauden eraikin guztien kalifikazio energetikoa eskatuko da, eta eraikin berriei edo berrikuntza handiak egin behar zaizkienei energia-kontsumo ia nulua izan dezatela eskatuko zaie. Garraioa eta mugikortasuna 3. atalean jaso dira; hor, besteak beste, udalerriek ibilgailu jakin batzuk herriaren erdialdera sartzeko mugatu edo debekatu dezaketela jasotzen da. Garraioaren alor hau osatzeko, ordezko erregaiak erabiltzen dituzten ibilgailuak sustatzea jaso da, bidaiarien garraiorako zerbitzu publikoa ematen dutenak barne; udalerriek hiri-mugikortasuneko plan bat izatea eskatuko zaie, eta zer helburu lortu nahi dituzten adierazi behar dute plan horretan. Neurri horiek guztiak indartzeko, publikitate-betebeharrak, langileen prestakuntza eta etiketa energetikoak ikusgai jarri behar dituztela ezarri da 4. atalean.



Bukatzeko, III. kapituluaren borondatezko tresnak eta jasangarritasun energetikoko jarduerak sustatzea jaso da, eta, horretarako, neurri sustagarriak ezarri dira lege honetan ezarritako betebeharrak eta helburuak betetzeko, jasangarritasun energetikoaren alorreko diru-laguntza publikoak gehitzeko aukera jasotzen baita. Kapitulu honetan borondatezko akordioei ere egiten zaie erreferentzia, administrazio publikoek lege ezartzen zaizkien betebeharez haratago joateko aukera izan dezaten. Era berean, informaziorako eskubidea ere bermatzen da kapitulu honetan, Europar Batasunaren araudia bete dadin.

Xedapen gehigarriek haxe argitzen dute: partzuergo eta mankomunitateei betebeharrak zehaztu eta ezarri bitartean, nola kalkulatu behar den oinarritzko erreferentzia-maila eta zer jotzen den energia-kontsumo ia nuluko eraikintzat.

Azken xedapenetan, berriz, legea indarrean noiz sartuko den jasotzeaz gain, Eusko Legebiltzarrak, Kontuen Epaitegiak eta Arartekoak, hala badagokie, beren planak egin ahal izango dituztela aurreikusi da, baina ez dutela lege honetan xedatutakoa bete beharrik izango.

I. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Xedea.

Lege honen xedea da, politika energetikoaren joera orokorra kontuan hartuta, EAEko administrazio publikoetan jasangarritasun energetikoaren arau-oinarriak ezartzea, eta administrazio publiko horiek zer eginbehar eta betebehar dituzten antolatzea. Batez ere, energia aurrezteko eta efizientzia energetikoa izateko neurriak bultzatzera bideratuko dira eginbehar eta betebehar horiek, bai eta energia berriztagarriak sustatzera eta ezartzera ere.

2. artikulua. Eremu subjektiboa.

1.- Lege honen ondorioetarako, hauek dira EAEko administrazio publikoak:

- a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa, bere mendeko edo berari lotutako erakundeak barne.

- b) Lurralde historikoetako administrazioak, beren mendeko edo beraiei lotutako erakundeak barne.



c) Euskal Autonomia Erkidegoko udalak, beren mendeko edo beraiei lotutako erakundeak barne.

d) Euskal Herriko Unibertsitatea, bere mendeko edo berari lotutako erakundeak barne.

2.- Administrazio horien mendeko edo horiei lotutako erakundetzat jotzen dira erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, sozietate publikoak, sektore publikoko fundazioak eta nortasun juridiko propioa duten partzuergoak, Lege honen lehenengo xedapen gehigarrian aipatuak.

3. artikulua. Eremu objektiboa.

1.- Lege honen aplikazio-eremuan sartuta dauden erakundeek jabetzan dituzten eraikinei, instalazioei eta ibilgailu-atalari aplikatuko zaie lege hau, baita hirugarren pertsonen alokatuta badaude ere.

2.- Lege honen xede-eremutik kanpo geratzen dira egoera hauetakoren batean dauden eraikinak:

a) Aurreko artikuluan aipatzen diren erakundeek alokairuan hartutakoak, betiere titularra, 2. artikuluan ezarritakoaren arabera, lege hau aplikatu ezin zaion hirugarren bat bada.

b) Atzerrian kokatuta daudenak.

c) Behin-behinean erabiltzekoak, aurreikusitako erabilera-epea 5 urte edo gutxiagokoa bada.

d) Hirigintzako, historia- eta arte-ondarea babesteko edo antzeko arrazoiak egoteagatik, lege honek ezartzen dituen neurriak aplikatu ezin zaizkien eraikinak.

4. artikulua. Definizioak.

Agindu honen ondorioetarako, honela ulertzen dira honako hauek:

a) Egiatzatzea: egiaztzeko ahalmena duen erakunde batek baieztatzea jarduera jakin bat egiteko eskatutako baldintza eta betekizun teknikoak betetzen direla.

b) Borondatezko hitzarmena: jasangarritasun energetikoko zenbait neurri betetzeko konpromisoa, lege eskatutako gutxienekoak gainditzen badira.



c) Energia-aurrezpena: aurreztutako energia-kantitatea –efizientzia energetikoa hobetzeko neurriren bat aplikatu aurretik eta aplikatu ondoren zenbat kontsumitu den neurtuta edo kalkulatuta zehazten da–, aldi berean aintzat hartuta energia-kontsumoan eragina duten kanpoko baldintzen normalizazioa.

d) Energia-auditorea: energia-auditoretzak egiten dituen pertsona fisikoa edo juridikoa; beharrezko ziurtagiriaren jabe izan behar du.

e) Energia-auditoretza: eraikin edo eraikin-multzo batek, industria- edo merkataritza-instalazio edo -eragiketa batek, edo zerbitzu pribatu zein publiko batek energia-kontsumoaren zer profil duen behar bezala jakiteko prozedura sistematikoa, bai eta kostu efiziente batekin energia aurrezteko aukerak zehaztu eta kuantifikatzeko eta horren berri emateko prozedura ere.

f) Azken bezeroa: norberaren erabilerarako energia erosten duen pertsona fisiko edo juridikoa.

g) Garraiorako ordezeko erregaiak: garraioan energia-iturri gisa erabiltzen diren erregai fosil klasikoak parte batean gutxienez ordeztzen dituzten erregai edo energia-iturriak; izan ere, erregai fosilak deskarbonizatzen lagun dezakete eta garraio-sektorearen ingurumen-portaera hobetzen. Besteak beste, hemen sartzen dira:

- Elektrizitatea, hibridoak barne
- Hidrogenoa
- Bioerregaiak –iturri berriztagarrietatik datorren energiaren erabilera sustatzeari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko apirilaren 23ko 2009/28/EE Zuzentarauaren 2.i) artikuluan definitzen dira, edo hura ordezkatzeko Europa Batasunaren zuzenbideko arauan–
- Erregai sintetikoak eta parafinikoak
- Gas naturala, biometanoa barne, gas eran [gas natural konprimatua (GNK)] eta likido eran [gas natural likidotua (GNL)]
- Petrolio-gas likidotua (PGL)

h) Azken energia-kontsumoa: lege honen eraginpeko eraikinetan edo instalazioetan erabilitako energia guztia.

i) Eraikina: sabaia eta hormak dituen eraikuntza, non energia erabiltzen den barruko giroa egokitzeko; etxebizitza gisa nahiz zerbitzuak emateko erabil daiteke, eta eraikin oso bat edo eraikin baten parteak izan daitezke, zeinak bereizita erabiltzeko diseinatu diren edo aldatu diren.



- j) Energia-kontsumo ia nuluko eraikina: efizientzia energetiko handia duen eraikina, eraikinen efizientzia energetikoari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010eko maiatzaren 19ko 2010/31/EB Zuzentarauan ezarritakoaren arabera. Behar den energia ia nulu edo gutxi hori, neurri handi batean, iturri berriztagarrietako energia bidez lortu beharko litzateke, in situ edo inguruan ekoiztutako iturri berriztagarrietako energia ere barne dela.
- k) Lehendik dagoen eraikina: lege hau indarrean sartu aurretik eraikita dagoen, aplikagarri zaion arautegiaren arabera eraikitze-prozesuan dagoen edo eskatzen diren baimen guztiak dituen –hirigintza- ingurumen- edo bestelako baimenak– edozein eraikin.
- l) Eraikin berria: eraikitzeko behar diren baimenak lege hau indarrean sartu ondoren eskatu zaizkien eraikin guztiak.
- m) Efizientzia energetikoa: etekin-, zerbitzu-, ondasun- edo energia-ekoizpenaren eta energia-gastuaren arteko erlazioa.
- n) Iturri berriztagarrietatik lortutako energia: iturri berriztagarri ez fosiletatik eskuratutako energia, hala nola energia hidraulikoa, eolikoa, eguzki-energia, geotermikoa, ozeanikoa eta biomasa, eta berriztagarritzat jotako beste ustiapen-mota batzuk ere bai.
- ñ) Instalazioa: abian dela energia kontsumitzen duen edozer ekipamendu edo sistema, edo, bestela, edozer energia-iturri erabilita, *in situ* energia sortu edo transformatzen duena.
- o) Energia-kontsumo osoaren oinarrizko erreferentzia-maila: dena delako administrazioak une jakin batean kontsumitutako energia guztiaren inbentarioa, energia-mota guztiak kontuan hartuta; horri aplikatzen zaizkio erabakitzen diren efizientzia energetikoko helburuak. Hor sartzan dira energia-iturri guztietako kontsumo zehatza eta erabili diren energia-bektoreak, balio absolutuetan zein erlatiboetan, hauen arabera berezita eta gehituta: eraikinak, energiako jarduketa-unitateak, energia sortu eta kontsumitzen duten instalazioak, ibilgailu-atalak eta argiteria publikoa.
- p) Karga-puntua edo erregaia hartzeko guneak jendearen eskura jartzea: ordezkotako erregai batez hornitzeko karga-puntua edo erregaia hartzeko edukitzea eta Europar Batasuneko erabiltzaile guztiek bereizkeriarik gabe eskura izatea. Bereizkeriarik gabe eskura izanagatik ere, autentifikazio-, erabilera- eta ordainketa-baldintza desberdinak ezar daitezke.
- q) Eraberritze garrantzitsuak: eraikin bat berritzea edo birgaitzea, baldin eta:



- eraikinaren ingurutzaila edo haren instalazio teknikoak berritzeko lanen kostu guztiak eraikinaren balioaren % 25 baino gehiago badira, eraikita dagoen lursailaren balioa alde batera utzita, edo
- eraikinaren ingurutzailaren azaleraren % 25 baino gehiago berritzen bada, edo
- birgaitzeak eraikinaren azalera erabilgarriaren % 50 baino gehiagori eragiten badio.

r) Energia-zerbitzua: energia bat teknologia energetiko efiziente batekin edo ekintza batekin konbinatuta –zerbitzua emateko beharrezko diren eragiketak, mantentze-lanak eta kontrola izan daitezke ekintzak– lortzen den onura fisikoa, etekina edo probetxua; zerbitzu hori kontratu baten arabera ematen da, eta frogatua izaten du, egoera normalean, energia efizientzia hobetzen duela edo energia primarioa aurrezten, modu egiaztagarri, neurgarri edo balioztagarrian.

s) Energiako jarduketa-unitatea: lege honetan aurreikusitako neurri guztien edo batzuen aplikazio-eremua –berezia, baterakoa edo zeharkakoa–, lege honen helburu diren EAEko administrazio publikoen jabetzako eraikinak izan zein haien instalazioak, berogailu- edo hozte-sistemak, ibilgailu-atalak eta, hala badagokio, argiteria publikoa izan.

5. artikulua. Helburuak.

2. eta 3. artikuluetan definitutakoa kontuan hartuz, hauek dira lege honen helburuak:

- a) Energiaren erabileran efizientzia bultzatzea eta energia aurrez dadin sustatzea, Europar Batasunak gai honen inguruan ezarritako arau eta jarduketan esparruan.
- b) Energia berriztagarriak eta ordezkoko beste energia-iturri jasangarri batzuk sustatzea eta ezartzea, erregai fosilekiko mendetasuna gutxitzeko.
- c) Pixkanaka petroliotik eta haren deribatuetatik ekoiztutako energia erabiltzeari uztea, kontsumo nulura iritsi arte.
- d) Ordezko erregaiak erabiltzen dituzten garraio moduak bultzatzea eta sustatzea.
- e) Berotegi-efektuko gasen isurketak gutxitzea, partikulek eta nitrogeno-oxidoek eragindako kutsadura nagusiki, lege hau betetzetik etorriko diren aurrezte-



neurrien eta energia erabiltzeko efizientzia-neurrien eta energia-iturri berriztagarriak erabiltzearen ondorioz.

f) EAEko administrazio publikoen energia-faktura jaistea.

g) Honako hauek sustatu eta bultzatzea: energiaren erabileran eta energia berriztagarrien garapenean aurrezpena eta efizientzia handitzen duten tekniken eta teknologien ikerketa eta garapena, eta horien guztien erabilera eta ezarpena erraztearekin lotuta dauden sistemena.

h) Energiaren erabilerak ingurumenean eta lurraldean dituen inpaktuak aurreikusi eta mugatzea, energia aurreztuta eta erabilera efizienteagoa ahalbidetzen duten teknikak eta teknologiak erabilia; horrela, berotegi efektuko gasen isurketak gutxituko dira.

i) Jasangarritasun energetikoak berekin dakartzan betekizunak politika publikoetan sartzea, eta, bereziki, lurraldearen antolamenduan, hirigintzan, etxebizitzan eta garraioetan.

j) Beste administrazio batzuekin eta partikularrekin hitzarmenak egin daitezen bultzatzea, jasangarritasun energetikoa areagotu dadin.

k) Energia gehiago aurrezteak eta efizientzia energetiko hobea izateak nahiz energia berriztagarriak erabiltzeak zer onura dakartzaten zabaltea.

6. artikulua. Printzipioak.

1.- Lege honek printzipio hauek ditu oinarri:

a) EAEko administrazio publikoak eredugarri izatea jasangarritasun energetikoaren arloan, lege honetan eta lege hau garatzen duten arauetan ezarritako nahitaezko neurriak hartuta, bai eta, lege honetan espresuki aurreikusita ez egon arren, har daitekeen beste edozein neurriren bidez, baldin eta lege honen helburuak betetzen lagun badezake.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako politika eta jarduera publikoen diseinuan eta aplikazioan jasangarritasun energetikoari buruzko eskakizunak sartzea.



- c) Energiaren erabileran hain intentsiboak ez diren garraiobideak eta efizientzia energetiko hobearen instalazioak ezar daitezkeen lehenestea lurralde-antolamenduko, hirigintzako eta azpiegituretako planetan.
- d) Aurrerapen teknikorako egokitzea, hain zuzen ere energia gehiago aurreztea, efizientzia energetiko hobearen izatea edo energia berriztagarriak hobeto erabiltzea dakarten teknikak erabilia, betiere ekonomikoki arrazoizko baldintzetan badaude eskura.
- e) EAEko botere publikoek eskura dauden datu zientifikoak eta teknikoak izanda jardutea, eta jasangarritasun energetikoarekin zerikusia duten neurriak eta jarduketak diseinatzerakoan genero-ikuspegia izanda jardutea.
- f) Jasangarritasunaren arloan, administrazio publiko guztiak lankidetzan, eraginkortasunez eta koordinatuta aritzea.
- g) Herritarrek jasangarritasun energetikoaren arloko politikak diseinatzen eta erabakiak hartzen parte hartzea, zuzenean edo elkarten bidez eta dagokien arauak ezartzen dutena betez. Emakumeen eta gizonen presentzia orekatua egon dadin saiatu behar da; kontuan hartu behar da ez dutela parte hartzeko modu bera batzuek eta besteek, eta, horrenbestez, konpentsazio-estrategiak aurreikusi beharko direla.
- h) EAEko administrazio publikoek jasangarritasun energetikoari buruzko informazioa eta alor horretan egingo dituzten jarduerak zehatzei buruzkoa zabaltzea.

2.- Aurreko printzipioak EAEko administrazio publikoen jarduerak-jarraibideak eta energiaren arloko arauak interpretatzeko irizpideak dira, eta, hala badagokio, baita administrazio publikoek egin eta politika energetikoan eragina duten gainerako politikak interpretatzekoak ere.

7. artikulua. Lurraldearen antolamenduan eta hirigintzan integratzea.

1.- 6.1. artikuluan b) eta c) letretan adierazitakoaren arabera, lurralde-antolamenduko, hirigintza-plangintzetako eta garraio-azpiegituretarako baliabideetan jasangarritasun energetikoari buruzko azterketak egin beharko dira, lege honetan eta lege hau garatzen duten arauetan ezarritakoaren arabera.

2.- Aurrekoa bete beharko dute baliabide hauek:



a) Lurralde-antolamenduko ildo nagusiek, lurralde-plan partzialek eta lurralde-plan sektorialek.

b) Egiturazko antolamenduko planek, hiri-antolamenduko plan orokorrek, plangintza orokorra bateragarri egiteko planek, sektorizazio-planek, eta, hala badagokio eta arauz ezarritakoa betez, antolamendu xehatuko planek.

c) Errepide-planek edo garraio-azpiegituretako planek eta salgaiak banatzeko logistikan zuzenean eragiten duten planek.

Goi-mailako plangintzan egiten diren zehaztapenak hartuko dira kontuan mendeko baliabideetan.

3.- Jasangarritasun energetikoari buruzko azterketak alderdi hauek jorratu behar ditu:

a) Jasangarritasun energetikoko eskakizunetara egokitu den jakiteko ebaluazioa.

b) Eraikinetan eta azpiegituretan energia berriztagarriak ezartzearen ebaluazioa.

c) Mugikortasun-azterketa, energia-kontsumoaren ondorioetarako, garraio pribatuaren erabileraren ordezkotarako aukerak sartuta.

4.- 2. paragrafoan aipatutako lurralde antolamenduko eta hirigintzako baliabideei legez ezarritako ingurumenaren ebaluazio-prozedura estrategiko bat egin behar bazaie, ez dira bikoiztu beharko, batetik, azterketa honen 1. eta 3. paragrafoetan eskatzen diren eta, bestetik, ingurumeneko ebaluazio-prozedura horiek arautzen dituzten arauetan ere eskatzen diren alderdiak.

5.- Dagokien hirigintza-baliabideek erabilera publikoko karga-tokiak aurreikusi beharko dituzte hiri-inguruetan, ibilgailu elektrikoaren eta ordezkotarako erabiltzaileei ibilgailu horiek energiaz hornitzeko aukera izango dutela bermatzeko; horretaz gain, bizikletak erabiltzeko eta aparkatzeko eremuak ere aurreikusi beharko dituzte.

8. artikulua. Jasangarritasun energetikoari buruzko politika koordinatzea.

Jasangarritasun energetikoari buruzko politika koherentea izango dela bermatzeko, Eusko Jaurlaritzan energiaren arloko eskumena duen sailak izango du EAEko interes orokorrak eskatutakoa koordinatzeko ahalmena, besteak beste jarduera hauen bidez:

a) Arauak eginez.

b) Administrazio-prozedurak erraztuz.



- c) Metodoak eta irizpide teknikoak homogeneizatuz.
- d) Joan-etorriko informazio-sistemak ezarriz.
- e) Aurrezpen eta efizientzia energetikorako jarraibideak eta teknikak hedatuz.
- f) Jasangarritasun energetikoaren alorreko ekintzak eta proiektuak sustatzeko planak eta laguntza-programak landuz.

9. artikulua. Jasangarritasun energetikoaren batzordeak.

1.- Lege honek lortu nahi dituen helburuak bete daitezen, administrazio bakoitzeko erakundeak koordinatzeko, Jasangarritasun Energetikoaren Batzorde bana edo antzeko ezaugarriak eta zereginak dituzten erakundeak izango dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak, lurralde historikoetako administrazioek eta udalerrietako administrazioek.

2.- Lurralde historikoetako administrazioek eta 25.000 biztanletik gorako udalerriek lege hau indarrean sartu eta urtebeteko epean sortu behar dituzte beren batzordeak.

5.000 biztanletik 25.000 biztanlera bitarteko udalerriek, berriz, 2 urte izango dituzte batzordeak sortzeko.

3.- Administrazio bakoitzak erabakiko du bere batzordeak zer kide eta funtzionamendu izango dituen, betiere emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatu bermatuz, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.7. eta 23. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera.

4.- Jasangarritasun energetikoaren batzordeen eginkizun izango dira:

- a) 10. artikuluan aipatu den inbentarioa onestea.
- b) Lege hau betetzeko hartzen diren neurriak gauzaten ari direla eta legean ezarritako helburuak betetzen ari direla gainbegiratzea eta bermatzea.
- c) Energia-jarduketan plana zer egoeratan duten eta zenbat garatu den adieraztea aldian behin.



II. KAPITULUA. HELBURUAK ETA EKINTZAK

1. atala. Helburuak eta ekintza orokorrak

10. artikulua. Inbentarioa.

1.- Administrazio publikoek beren jarduera-eremuaren barruan dituzten eraikinen, ibilgailu-atalen eta argiteria publikoko instalazioen inbentarioa egin behar dute. Informazio hau jaso behar da inbentarioan:

- a) Dagokion administrazioaren titulartasuneko eraikinen eta instalazioen inbentarioa, bakoitzak m²-tan duen azalera eta energia-kontsumo eta -gastua. Betebehar horretan ez dira sartzen partikularrek eremu pribatuan erabiltzen dituzten etxebizitzak edo lokalen kontsumoak edo enpresek alokairuan dituztenenak.
- b) Ibilgailu-atalak eragindako kontsumoen inbentarioa; ibilgailu-kopurua eta ibilgailu bakoitza zertarako erabiltzen den zehaztu behar da. Ibilgailu-atalaren barruan sartzen dira lurreko ibilgailuez gain, itsas eta aire-ibilgailuak ere.
- c) Argiteria publikoak eragindako kontsumoen inbentarioa.

2.- Lege hau indarrean sartzen den egunetik gehienez ere sei hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari buruzko inbentarioa egingo du energia-gaietan eskumena duen sailak.

3.- Gainerako administrazioek legea indarrean sartzen denetik urtebete izango dute inbentarioa egiteko.

4.- Inbentarioak eta haiekin erlacionatutako informazioa publikoak izango dira, eta onetsi eta gehienez ere 3 hilabeteko epean publikoaren esku egon beharko dute, eta energia-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren sailari bidali beharko zaizkio.

11. artikulua. Kontsumoen kontrola.

1.- Lege hau indarrean sartu eta urtebeteko epean, energia elektrikoaren kontagailuak eduki beharko dituzte 25 kW-etik gorako elektrizitate-potentzia instalatuta duten EAEko administrazio publiko bakoitzaren eraikinek eta instalazioek, eta kontagailu



horiek gai izan beharko dute ordubete baino gutxiagoko denbora-tartean karga-kurba transmititzeko, erregistratzeko eta teleneurketa egiteko. Kontagailuen bidez lortutako informazioa eskuragarri egongo da, gutxienez egunero eta modu zentralizatuan, eraikin eta instalazio guztietarako.

2.- Eraikin bakoitzaren energia-kontsumoa urtean behin kontrolatuko da gutxienez, hilabeteetan oinarrituta. Erabilitako energia guztien kontsumoak eta horien kostuak hartuko dira kontuan kontrolean.

12. artikulua. Energia-auditoretzak.

1.- Lege hau indarrean sartu eta gehienez ere hiru urteko epean dagokien energia-auditoretza eginda eduki behar dute 70 kW baino gehiagoko potentzia termikoa duten EAEko administrazioen eraikinek.

2.- Energia-auditoretzek energia-kontsumoaren eta balizko aurrezpen eta efizientzia energetikoaren diagnosi bat egitea dute helburu, bai eta hori guztia hobetzeko eta energia berriztagarriak ezartzeko gomendioak ematea ere.

3.- Kanpoko argiteria publikoari aparteko energia-auditoretza egingo zaio; nolahi ere, kanpoko argiteria publikoa osatzen duten osagaiak berritzea eta gutxitzea izan behar du lehenetsun, pertsonen edo instalazioen segurtasunagatik posible ez den kasuetan izan ezik.

4.- Energia-auditoretzetan eduki hauek jaso behar dira, gutxienez, Europar Batasunaren eremuan indarrean dauden arau teknikoek ezartzen dutena ahaztu gabe:

- a) Energiako jarduketa-unitatearen urteko kontsumoa.
- b) Kontsumo espezifikoa eta horien banaketa, kontuan hartuz hauek guztiak: instalazioak, prozesuak, ekipoak, ibilgailu-atala, berokuntza, klimatizazioa, barruko argiztapena eta kanpoko argiteria publikoa.
- c) Energia-hornikuntzaren ehunekoak, iturri konbentzionalak eta energia berriztagarrietatik lortutako beste iturri batzuk bereizita.
- d) Eraikinen, instalazioen, ekipoen eta prozesuen efizientzia-analisia.
- e) Hartzen ari diren neurriak eraginkorrak diren jakiteko azterketak.



f) Eraikin, instalazio, berokuntza, klimatizazio, ibilgailu-atal, barruko argiztapen, kanpoko argiteria publiko, kontsumo-, aurrezpen- eta efizientzia-prozesu eta erosketei buruzko gomendioak eta horietan egin daitezkeen hobekuntzak, auditoretzaren arabera lehentasunezkoak zeintzuk diren adieraziz.

g) Energia berriztagarrien alorreko jarduketa egokiak.

h) Zer metodologia erabili den auditoretzak aztertu dituen elementuetako bakoitzean.

i) Laburpen exekutiboa.

5.- Energia-auditoretzak sei urterako dira. Aldi hori bukatzen denean, berria egin behar da. Egindako jarduketan laburpen bat eta aurreko auditoretza indarrean egon zeneko energia-kontsumoaren bilakaeraren konparaziozko azterketa bat jasoko dira auditoretza berrian.

13. artikulua. Energia-jarduketan planak.

1.- EAEko administrazio publiko guztiek energia-jarduketan hainbat urtetarako planak egin beharko dituzte; plan horietan beren jarduera-eremuan zer egoera dagoen jakiteko diagnostikoak egin behar dituzte, eta plana indarrean dagoen bitartean gauzatu beharreko estrategiak zehaztu. Horretaz gain, planak egiteko prozesuetan herritarrek parte hartuko dutela bermatu behar dute administrazioek.

2.- EAEko Administrazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateak lege hau indarrean sartu eta gehienez ere 6 hilabeteko epean onetsi behar dituzte beren jarduketa-planak.

3.- Lurralde historikoetako administrazioek eta 25.000 biztanletik gorako udalerriek, berriz, lege hau indarrean sartu eta urtebeteko epean onartu behar dituzte beren energia-jarduketan planak.

Eta 5.000 biztanletik 25.000ra bitarteko udalerrietako administrazioek 2 urte izango dituzte plan horiek egiteko.

5.000 biztanletik beherako udalek, berriz, energia-jarduketan planaren ordezkari bat egin dezakete, non, gutxienez, hurrengo zenbakiko a) eta b) letretan adierazitako informazioa jaso beharko duten; horretarako, bi urteko epea izango dute lege hau indarrean sartzen denetik.



4.- Energia-jarduketei buruzko planek gutxieneko eduki hau izan behar dute:

- a) Administrazio bakoitzak energia-diagnostikoa egin eta zer oinarrizko erreferentzia-maila duen zehaztu beharko du, eta, horretarako, kontsumo-iturriak banakatu beharko ditu, argiteria publikoa kontuan hartuz.
- b) Jasangarritasun energetikoko neurriak ezartzeko aldi baterako plangintza egin beharko du, sektoreka banakatuta. Aldi baterako plangintza horietan, hala badagokio, dagokion energia-auditoretzako ondorioak eta lege honek eta berau garatzeko arauak ezartzen dituzten aurrezte-betebeharrak hartu behar dira kontuan.
- c) Plana indarrean dagoen bitartean haren eraginkortasuna ebaluatzeko mekanismoak.

14. artikulua. Energia-aurrezpenaren ehunekoak.

- 1.- EAEko administrazio publikoek lege honetan ezarritako energia-aurrezpen eta efizientzia energetikoaren eta energia berriztagarrien ehunekoak bete behar dituzte, Euskadiko Energia Estrategian ezarritako energia-politikako helburuekin bat eginik.
- 2.- EAEko administrazio publikoek, bakoitzak bere jarduera-eremuaren barruan, % 25 gutxitu beharko dute energia kontsumoa 2025erako; hori guztia administrazio bakoitzaren energia-kontsumo osoaren oinarrizko erreferentzia-maila kontuan hartuta, hor direla haien mendeko erakundeak ere.
- 3.- Energia-kontsumoa zenbat murriztu behar den zehazteko, kontuan hartuko dira bakoitzaren eraikinak, ibilgailu-parkeak eta argiteria publikoa.

15. artikulua. Iturri berriztagarrietatik datorren energia erabiltzea.

- 1.- Lege hau indarrean sartzen denetik aurrera, EAEko administrazioek energia elektrikoa erosteko egiten dituzten lizitazioetan bereziki balioetsi beharko da iturri berriztagarrietakoak izatea.

Administrazio publikoek erosten duten energiaren % 100 energia elektriko berdea izan dadila eskatu ahal izango dute, baldin eta ekonomikoki arrazoizkoa bada.



2.- EAEko administrazio publiko bakoitzak 2025erako lortu beharra dauka gutxienez bere eraikinen % 25ek energia berriztagarriez baliatzeko instalazioak edukitzea – ustiapen termikoko sistemak nahiz elektrizitatea sortzekoak barne–.

16. artikulua. Instalazioak, ekipoak, flotak eta ibilgailuak berritzea.

1.- Instalazioak kudeatzeko sistema zentralizatuak instalatzeaz gain –kontsumoen monitorizazioa ere sar daiteke sistema horietan–, EAEko administrazio publiko bakoitzak bere instalazioak, ekipoak, flotak eta ibilgailuak berritzeko garaian kontuan izan behar ditu energia aurrezteko eta efizientzia energetikoko irizpideak, bai eta energia berriztagarriak erabiltzea ere, petroliotik ateratako erregaiak gutxitzen laguntzeko.

2.- Sektore publikoko kontratuei buruzko legerian xedatutakoa ahaztu gabe, eta erregulazio harmonizatuari lotutako kontratuen kasuan, EAEko administrazio publikoek energia-errendimendu handiko produktuak, zerbitzuak eta eraikinak erosi behar dituzte, irizpide hauen arabera, besteak beste:

- a) Efizientzia-mailarik handienekoak izatea, aintzat hartuz kostuen eraginkortasuna, bideragarritasun ekonomikoa eta egokitzapen teknikoa, bai eta behar besteko lehia egotea ere. Hori bereziki aplikatuko da hauek erosterakoan: klimatizazio-ekipoak, etxeke ur beroko ekipoak, ekipo ofimatikoak eta argiteriako ekipoak.
- b) Errepide-garraioko ibilgailuak eta pneumatikoak erosterakoan, kontuan hartu beharko da zer bizi-ziklo duten eta zer energia- eta ingurumen-inpaktu eragingo dituzten.

2. atala. Eraikinak

17. artikulua. Lehendik dauden eraikinen kalifikazio energetikoa.

1.- Energia-ziurtagiriari buruz indarrean dagoen araudiaren eskakizunen arabera, eraikinen energia-ziurtagiria eduki behar duten EAEko administrazio publikoen titulartasuneko eraikinek, ziurtagiri hori eskuratu behar dute araudi horretan ezarritako epeetan.



Energia-ziurtagiriari buruz indarrean dagoen araudiak eragiten ez dien EAEko administrazio publikoen titulartasuneko eraikinek lege hau indarrean sartu eta bi urteko epean izan beharko dute eraikinen energia-ziurtagiria.

2.- B mailako kalifikazio energetikoa baino baxuagoa duten EAEko administrazio publiko bakoitzaren eraikinen % 25ek maila bat hobetu beharko dute, gutxienez, kalifikazio hori 2025 baino lehen.

25.000 biztanle baino gutxiago dituzten udalerrietako administrazioen eta haien mendeko erakundeen eraikinen kasuan, berriz, eraikinen % 20k hobetu beharko du energia-maila.

18. artikulua. Eraikin berrien kalifikazio energetikoa.

1.- EAEko administrazio publikoen titulartasuneko eraikin berriek kontsumo ia nulukoak izan behar dute, aplikagarri den arautegian adierazitako egunetik aurrera.

"Energia-kontsumo ia nulua" zer den arauz ezartzen den arte, energia-kontsumo ia nuluko eraikinei buruz lege honen hirugarren xedapen gehigarrian xedatutakoa aplikatuko da.

2.- Betebehar hori salbuetsi daiteke kasu hauetan:

- a) Eraikin eta monumentu ofizialki babestuak badira, kultura-ondare aitortutako ingurune baten zati direlako edo balio arkitektoniko edo historikoa dutelako.
- b) Gurtza-leku gisa edo erlijio-jardueretarako soilik erabiltzen diren eraikinak edo eraikin zatiak badira.
- c) Bi urtetan edo gutxiagotan erabiltzekoak diren behin-behineko eraikuntzak badira.
- d) Industria- eta nekazaritza-eraikinak edo horien zatiak, baldin eta lantegi modura edo industria- eta nekazaritza-prozesuetarako erabiltzen badira eta ez bizitoki gisa.
- e) Isolatuta dauden eraikinak edo eraikin-zatiak, baldin eta 50 m² baino gutxiagoko azalera erabilgarria badute.
- f) Urtean lau hilabete baino gutxiago edo urtean zehar denbora mugatu batean erabiltzen diren eraikinak edo eraikin-zatiak, baldin eta urte osoan erabiliz gero



gastatuko luketen energiaren % 25 baino gutxiagoko energia-kontsumoa izango dutela aurreikusten bada, jabearen erantzukizunpeko adierazpenaren bidez.

3. atala. Garraioa eta mugikortasuna

19. artikulua. Ibilgailuetan ordezeko erregaiak erabiltzea.

- 1.- EAEko administrazio publikoek ordezeko erregaiak erabiltzea sustatuko dute, garraioen ingurumen-inpaktua arintzeko eta petrolioarekiko mendekotasuna gutxitzeko.
- 2.- 2020tik aurrera, EAEko administrazio publikoek erosten dituzten ibilgailu guztiek (% 100) ordezeko erregaiak erabili beharko dituzte.
- 3.-Aurreko paragrafoan aipatutako betebeharrak ez die eragingo segurtasun publikoko zereginak, pertsonekin lan egin beharra edo osasun- eta ingurumen- eginkizunak izategatik petrolioaren deribatuak diren erregai bidez propulsatutako gutxieneko ibilgailu-kopuru bat behar duten sailei edo erakundeei.
- 4.- Udal-administrazioek hauxe lortu beharko dute 2025erako: udalerrri bakoitzean ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntu bat egotea 2.000 biztanleko.
- 5.- EAEko administrazio publikoen titulartasuneko eraikin berriek ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak eta bizikletak erabiltzeko eta aparkatzeko lekuak izan beharko dituzte.

20. artikulua. Bidaiariak errepidez eramateko zerbitzu publikoa ematen duten ibilgailuen energia-erabilera.

- 1.- Bidaiariak errepidez eramateko zerbitzu publikoa ordezeko erregaiak erabiltzen dituzten ibilgailuen bidez eskaini behar da, lege honetan eta berau garatzen duten arauetan xedatutakoaren arabera.
- 2.- 2020tik aurrera, berritzen den ibilgailu-flota guztiak (% 100) ordezeko erregaiak erabili behar dituela hartu behar da kontuan administrazio baimenak edo emakidak eman eta egiteko edo baimen horiek berritzeko onartzen diren baldintza-orri edo tresnetan.



3.- Bidaiarien garraio publikoko zerbitzuak edo beste era bateko zerbitzu publikoak ustiatzeko diren administrazio-emakiden edo -baimenen esleipena egiten zaien enpresak izango dira aurretik adierazitako betebeharrak betetzeko ardura izango dutenak.

21. artikulua. Ibilgailuen zirkulazioari mugak jartzea.

1.- Energia gehiegi erabili ez dadin eta berotegi-efektuko gasen isurketak gehiegi igo ez daitezzen edo atmosferako airearen kalitateak okerrera egin ez dezan, udalerriek ordezeko erregaiak erabiltzen ez dituzten edo isurpen-maila jakin batzuk gainditzen dituzten ibilgailuei beren udalerriko leku jakin batzuetara sartzen ez uztea edo sarrera mugatzea erabaki dezakete.

2.- Udalerriek ordezeko erregaiak erabiltzen dituzten ibilgailuetarako lekuak erreserbatu ahal izango dituzte; hala, aparkatzeko lekua erreserbatuta izango dute edo eremu publikoetan edo udal-aparkalekuetan prezio merkeagoak.

22. artikulua. Mugikortasun-planak.

1.- Lege hau indarrean sartu eta bi urteko epean, 25.000 biztanletik gorako udalerriek hiri-mugikortasuneko plan bat onartu beharko dute. 5.000 eta 25.000 biztanle bitarteko udalerriek, berriz, hiru urte izango dituzte plan hori egiteko.

Aurreko paragrafoan ezarritakoarekin estali gabe gelditzen den lurralde-zatian foru aldundiek egingo dituzten hiriarteko mugikortasunari erantzuteko mugikortasun-planak.

2.- Planak atal hauek izango ditu:

a) 1. zatia. Diagnostikoa; alderdi hauek jaso behar dira:

- Lurralde- eta hirigintza-ereduak mugikortasunean duen eragina eta, orokorrean, garraioan duena.
- Udalerrian dauden garraio-moduak, eta energiaren erabileran duten eragina. Diagnostiko horretan, besteak beste, hauek adierazi behar dira: garraiobideak, edukierak, ibilgailu-mota bakoitzerako aparkatzeko lekuak, erregaia kargatzeko sistema publikoak eta jende gehien biltzen duten jarduera-zentroak edo lantokiak.



b) 2. zatia. Neurriak; alderdi hauek izan behar ditu:

- Ordezko erregaien karga-puntuak eta ordezkoko erregaiez hornitzeko puntuak jartzea jendearen eskura.
- Garraio publikoa sustatzea.
- Garraio pribatua pixkanaka gutxitzen joateko ordezkoko beste aukera batzuk ematea.
- Salgaiak banatzeko logistika hobetzea.
- Bizikleten erabilera bultzatzea.
- Oinezkoentzako bakarrik diren eremu gehiago jartzea.
- Ordezko erregaiak darabiltzaten ibilgailuak erabil daitezten sustatzea.

3.- Planean argi eta garbi azaldu behar da zer helburu lortu nahi diren, plana egin duen administrazioak zer inbertsio hitzeman dituen eta zenbat denboran gauzatzea aurreikusi den, eta 4/2005 Legearen 46. artikuluan ezarritakoa bete beharko du. Plana eta plana egiteko beharrezkoak diren azterketak gizonak eta emakumek hiriari eta espazioari ematen dioten erabilera desberdinak kontuan hartuta idatzi behar dira, eta generoen artean egon daitezkeen aldeak gutxitzeko proposamenak jaso behar dira, hiri integratzaile eta erantzunkidea lor dadin aurrera egiteko.

4.- Hiri-mugikortasuneko plana izapidetzeko, lehendabizi, hasierako onespina emango zaio, eta, ondoren, behin betikoa; horretaz gain, herritarrei informazioa emango zaiela eta haien parte-hartzea izango dela bermatu behar da, plana izapidetzea adosten denetik. Hasierako onspena eman ondoren, planari aldaketa asko egiten bazaizkio, berriz jarri beharko da jendaurrean. Bi kasuetan, alegazioak aurkezteko epea ezingo da 45 egun baino gutxiago izan.

Plana eta hura izapidetzen ari den bitartean planaren osagarri diren agiriak publikoak izango dira.

5.- Planak 5 urteko indarraldia izango du; epe hori igarotakoan, planaren bidez lortutako emaitzak ebaluatu behar dira, eta helburuak eta neurriak aldatzeari ekin. Emaitzek publikoak izan behar dute.



4. atala. Beste betebeharrak.

23. artikulua. Neurriak publiko egitea.

1.- EAEko administrazio publiko bakoitzak jakitera eman beharko du energia gehiago aurrezteko eta efizientzia energetikoa areagotzeko zer neurri hartu dituen, 13. artikuluan zehaztutako energia-jarduketari buruzko planak barne, eta, horretarako, telekomunikazioetako sare publikoen bidez edonor sartzeko moduko datu-base elektronikoak erabiliko ditu.

2.- Zehazki, lege hau indarrean sartu eta bi urtetik behin, gutxienez, txosten bat argitaratu beharko du, eta alderdi hauek, behintzat, nabarmendu beharko dira:

- a) Energia-konsumoa, eraikinen eta erabilitako energia-iturrien arabera banakatua.
- b) Egindako auditoretzak eta emaitzak.
- c) Zer neurri hartu eta zer inbertsio egin diren energia aurrezteko eta efizientzia energetikoa hobetzeko, eta energia berriztagarriak sortzen dituzten instalazioak ezartzeko; horrez gain, lortutako emaitzak ere adierazi beharko dira.
- d) EAEko administrazio publikoek lege honetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko hartu dituzten konpromisoak zenbateraino bete dituzten.

24. artikulua. Prestakuntza.

1.- Lege hau indarrean sartu eta urtebetera, 2. artikuluan adierazitako EAEko administrazio publikoek plan bat onartu behar dute beren jarduera-eremuetako langileak energia aurrezteko eta efizientzia energetikoko teknikan prestatzeko.

25.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriek, berriz, lege hau indarrean sartu eta bi urteko epean onartu behar dute prestakuntza-plan hori.

2.- Plan horren helburua da energia kontsumitzen duten instalazioak erostearekin, mantentzearekin eta erabiltzearekin zerikusia duten kudeatzaileak eta teknikariak prestatzea energia aurrezteko eta efizientzia energetikoko teknikan eta energia berriztagarrietan.



25. artikulua. Etiketak ikusgai jartzea.

1.- EAEko administrazio publikoek eraikinen efizientzia energetikoari buruzko etiketak jarri behar dituzte ikusgai nahitaez, erraz ikusteko lekuren batean, lege honen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoaren arabera efizientzia energetikoari buruzko ziurtagiria lortu bezain laster.

2.- EAEko administrazio publikoek lege hau indarrean sartzen denetik ordezkotako erregaiak erabiltzen dituztelako erosten dituzten ibilgailu berriek zer erregai-mota erabiltzen duten jakiteko eta erregelamendu bidez zehaztutako beste datu batzuei buruzko informazioa emateko etiketak erakutsi behar dituzte erraz ikusteko lekuren batean.

III. KAPITULUA. BORONDATEZKO TRESNAK ETA SUSTAPENA

26. artikulua. Energiaren arloko laguntzak eskuratzea.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioak, energiaren alorreko laguntzak ematerakoan, zenbatekoak gehitu edo onura bereziak ezar diezazkieke laguntza eman aurretik lege honetan ezarritako betebeharrak bete dituztela justifikatzen duten administrazio publiko eskatzaileei, arauz ezarritako eran.

27. artikulua. Borondatezko hitzarmenak.

1.- EAEko administrazio publikoek, borondatezko hitzarmenen bidez, jasangarritasun energetikoaren alorrean legez ezarritako helburuak baino zorrotzagoak lortzeko estrategiak garatzeko konpromisoa har dezakete.

2.- Aldeek nahitaez bete beharko dituzte borondatezko hitzarmenak, beharrezko izan daitezkeen baimenak ahaztu gabe.

3.- Eusko Jaurlaritzan energiaren eskumena duen sailak energia arduraz erabiltzeko gizarte-lankidetzat bultzatu eta sustatuko du, lege honen helburuak lor daitezkeen; horrek esan nahi du energiaren sektoreko eragileekin eta beste gizarte-eragile batzuekin behar diren borondatezko hitzarmenak egin ditzakeela.

4.- EAEko administrazio publikoek jasangarritasun energetikoaren arloan izenpetzen dituzten borondatezko hitzarmenak argitaratu behar dituzte, eta eguneratuta eta jendearen eskura eduki, hitzarmen horiei buruz duten informazioa.



28. artikulua. Jasangarritasun energetikoari buruzko informazioaren zabalkundea, prestakuntza eta sentsibilizazioa.

1.- EAEko administrazio publikoek, lege honetan xedatutakoa kontuan hartuz eta beren eskumenen esparruan, jasangarritasun energetikoari buruzko informazioa jasotzeko eskubidea bermatuko dute, besteak beste bitarteko hauen bidez jarraibideak eta teknikak zabalduta:

- a) Prestakuntza-, sentsibilizazio- eta publizitate-kanpainak.
- b) Lehen mailako eta bigarren mailako hezkuntzako programak.
- c) Herritarrei eta industria-, merkataritza-, zerbitzu-, bizitoki- eta garraio-sektoreei zuzendutako gida ulergarrien argitalpena eta zabalkundea, lege honetan aurreikusitako energia aurrezteko eta energia erabiltzerakoan efizientzia hobea izateko teknikak eta jarraibideak nola ezarri jakin dezaten.

Zabalkunde-, prestakuntza- eta sentsibilizazio-lanak egiteko hizkuntza inklusiboa erabili behar da beti, bai testuetan bai irudietan, eta rolik eta estereotiporik ez erabiltzen saiatu.

2.- Eusko Jaurlaritzan energiaren alorreko eskumena duen sailak sarien deialdiak egin ditzake, besteak beste toki-erakundeei, gizarte-erakunde edo -mugimenduei, industria-sektoreei, eraikinei, publizitate-kanpainai, hezkuntza-programei edo lan zientifikoei zuzenduta. Beren ereduarekin edo duten ondorio edo gizarte-eraginagatik balio hauek hobekien hedatzen dituztenentzat izango dira sariak, bai eta energia aurrezteko edo efizientzia energetikorako jarraibide eta teknika onenak dituzten eta energia berriztagarriak gehien sustatzen edo garatzen dituztenentzat ere.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA. Partzuergoak eta mankomunitateak.

Ur-horniduraz, hondakinak bildu eta tratatzeaz, hondakin-urak arazteaz eta hiltegiez arduratzen diren partzuergo eta mankomunitateen eraikin, instalazio, ibilgailu, argiteria publiko edo bestelako jardueren kasuan, dagokion partzuergo edo mankomunitateak bete beharko ditu lege honetan jasotako betebeharrak. Partzuergo edo mankomunitate horietan parte hartzen duten administrazioek haiek adosten dutenaren arabera emango dute laguntza.

**BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA. Oinarrizko erreferentzia-maila.**

1.- Lege hau indarrean sartu eta gehienez ere bederatzi hilabeteko epean, lege honek eragiten dion EAEko administrazio publiko bakoitzak bere energia-kontsumoaren oinarrizko erreferentzia-maila onartuko du, zeina helburuak ezartzeko abiapuntu izango den.

2.- Maila hori ezartzeko, legea indarrean sartu aurreko hiru urteetako batez bestekoa hartuko da kontuan. Horren ordez, legea indarrean sartu aurreko urtekoa edo beste urte batekoa hartu daiteke energia-kontsumoaren oinarrizko maila gisa, betiere justifikatuta badago eta lege hau onartu aurretik egindako jardueren balioa nabarmentzeko.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA. Energia-kontsumo ia nuluko eraikinak.

Nola kuantifikatu jakiteko arau edo metodologia zehatz bat ezartzen ez den bitartean, eraikin batek energia-kontsumo ia nulua duela esango dugu, gutxienez, A motako energia-kalifikazioa badu.

AZKEN XEDAPENAK**AZKEN XEDAPENETATIK LEHENA.- Estatutupeko zenbait erakunderen jasangarritasun energetikoko planak.**

Eusko Legebiltzarrak, Kontuen Epaitegiak eta Arartekoak jasangarritasun energetikoko beren planak egingo dituzte, baina ez dute lege honetan xedatutakoa bete beharrik izango.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.- Indarrean jartzea.

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta sei hilabetera sartuko da indarrean.

IV

**INFORME RESPECTO A LA VIABILIDAD JURÍDICA DE QUE SE VUELVA A RETOMAR
POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY / TXOSTENA,
2016KO UZTAILAREN 19AN ONARTUTAKO EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN ENERGETIKOARI BURUZKO
LEGE-PROIEKTUAREN TESTUA GOBERNU KONTSEILUAK BERRIRO HARTZEAK
DUEN BIDERAGARRITASUN JURIDIKOARI BURUZKOA**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN
ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA
PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VASCAS**



INFORME: Viabilidad jurídica de que se vuelva a retomar por el Consejo de Gobierno el texto del proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas, aprobado el 19 de julio de 2016, y remitirlo al Parlamento Vasco admitiéndose como válidos los trámites procedimentales realizados anteriormente.

61/2017 DDLGN-OL

1. ANTECEDENTES

Con fecha 22 de mayo de 2017, desde la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, se dirigió a esta Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo una consulta sobre la "las posibilidades que tiene el Consejo de Gobierno de retomar el texto del proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas, aprobado el 19 de julio de 2016 y remitirlo al Parlamento Vasco, obviando toda la tramitación establecida en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general".

Por la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, adscrita al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, se emite el presente informe, en virtud de las funciones atribuidas al Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco por el artículo 5.2 de la Ley 7/2016, de 2 de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco; de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.h) del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, así como en base a las competencias atribuidas a la citada Dirección, por el artículo 14.1.a), del Decreto 71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, y el Decreto 144/2017, de 25 de abril, del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco.

2. CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DISTINCIÓN RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN ADMINISTRATIVO

El Capítulo IX del reglamento del Parlamento Vasco, trata de la caducidad de las tramitaciones parlamentarias, señalando, con carácter general, en **su artículo 130**, que

*«Disuelto el Parlamento Vasco o expirado su mandato, **caducarán todos los asuntos en tramitación con excepción de los que corresponda conocer a la Diputación Permanente o que deban prorrogarse por disposición legal.**»*

Por tanto, independientemente de otros factores a los que luego atenderemos, el punto de partida de este análisis sobre las posibilidades de reiterar la iniciativa legislativa ejercida

mediante el correspondiente acuerdo de Consejo de Gobierno, debe ser el clarificar la naturaleza e incidencia de los proyectos y anteproyectos de Ley aprobados por Consejo de Gobierno.

Como decíamos en nuestros Informes DDLCN 51/2017 y 56/2017, del contenido del artículo 130 del Reglamento del Parlamento Vasco, resulta evidente que acaecida su disolución o expirado su mandato por el transcurso del tiempo (a salvo las proposiciones de ley fruto de una iniciativa legislativa popular, que son prorrogadas conforme al inciso final del mismo en virtud del artículo 12 de la Ley 10/2016, de 30 de junio, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular) todas las demás iniciativas y, por tanto, todos los proyectos de ley remitidos por el Gobierno Vasco a él –en el ejercicio de su potestad de iniciativa legislativa, tal y como se reconoce en los artículos 16 y 18.a) de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno (LG)– caducan en su tramitación parlamentaria.

Ahora bien, como también decíamos en aquél informe, siendo doctrina ya consolidada la referida a que –y salvo contadas excepciones– «*caducan*» los procedimientos, y «*prescriben*» los derechos, decaído un procedimiento por caducidad, el derecho pretendido puede volverse a ejercerse en otro procedimiento, en tanto en cuanto, el derecho no ha prescrito. Así, de entrada, *“es completamente indubitado que, en términos estrictamente parlamentarios, el nuevo Gobierno Vasco, en tanto que detentor del derecho de iniciativa legislativa, es plenamente capaz de reiterar ante la nueva cámara salida del correspondiente procedimiento electoral las iniciativas aprobadas por el anterior gabinete en sus mismos términos, por cuanto la caducidad de la iniciativa no se transmite al derecho del Gobierno para su presentación”*.

Por tanto, como ya sucediera con el citado Informe DDLCN 51/2017 (del que extraeremos, aún a riesgo de resultar redundantes, la mayor parte de las consideraciones que verteremos en este que nos ocupa), este informe debe circunscribirse a los eventuales efectos de la retirada o de la disolución del Parlamento, exclusivamente, sobre los procedimientos administrativos que sirvieron de base a la presentación por el Gobierno Vasco del correspondiente proyectos de Ley. Es decir, debe atender o descartar, únicamente, los potenciales efectos sobre la tramitación gubernativa o administrativa, y a su expediente, con independencia de la terminación o de la caducidad producida con respecto a la tramitación parlamentaria y su respectivo expediente.

Así mismo, en la medida en que se nos pregunta, en concreto, sobre las posibilidades de «obviar» en este momento «la tramitación establecida en la LPEDG», cumple advertir que **este informe se circunscribirá también a la validez formal o procedimental, a día de hoy, de los actos de tramitación efectuados de forma previa a la aprobación y remisión al Parlamento del correspondiente proyecto de ley, sin atender a la actualidad o vigencia, desde un punto de vista material o de fondo, del proyecto o de sus premisas jurídicas**. Cuestión esta última que, obviamente, trasciende el objeto y el alcance de esta consulta.

3. ESPECIAL NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES GENERALES CUANDO ES APLICADO A LOS ANTEPROYECTOS DE LEY

Como ya sucediera en el caso analizado en los Informes DDLCN 51/2017 y 56/2017, de lo anterior debe extraerse que el punto de partida más adecuado para dar contestación a la pregunta que se nos plantea debe ser el estudio de la exegesis procedimental de estos “*anteproyectos de ley*” generados dentro de Ejecutivo y de forma previa a su aprobación remisión al Parlamento como “*proyectos de ley*”, al amparo, principalmente, de lo previsto en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, de elaboración de disposiciones generales del País Vasco (en adelante LPEDG). Incluyendo en el análisis todos los trámites preceptivos a los que se refieren

los artículo 8 a 11 y cuya culminación concluye con la toma en consideración del Consejo de Gobierno que decide su aprobación final o no conforme al artículo 13 del mismo texto. Y ello porque, como dispone su exposición de motivos *«en el caso de las leyes, el procedimiento administrativo sólo comprende la fase previa a la iniciación del procedimiento legislativo stricto sensu, cuya regulación está establecida en el Reglamento del Parlamento Vasco»*.

Ello no obstante, la nítida separación que venimos realizando respecto del procedimiento parlamentario caducado obliga a que este examen de las exigencias legales deba seguir la doctrina firmemente establecida de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA), en el sentido de que *«cuando valora el procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley toma en cuenta el distinto papel que aquél tiene en las normas legales y en las normas reglamentarias, tal y como se reconoce en la propia LPEDG»* (Dictamen 129/2015 sobre anteproyecto de Ley de transparencia, participación y buen gobierno del sector público vasco; párrafo 55). La diferencia con las iniciativas reglamentarias, en lo que ahora importa, introduce en el examen del procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley una obligada flexibilidad y un carácter eminentemente material y anti-formalista. Y ello porque: *«Es en sede parlamentaria donde se desenvuelve con plenitud el procedimiento legislativo y, salvo supuestos específicos en los que la Constitución (CE) o el Estatuto de Autonomía del País Vasco (EAPV) o, en algunos casos, las leyes orgánicas, imponen condiciones a su adopción, la única exigencia que han de cumplir es que se acompañen de los antecedentes necesarios para que el Parlamento pueda pronunciarse sobre ellos: cuando menos, la memoria general, anejo de financiación e informe de control económico en aquellos proyectos que comportan un gravamen al presupuesto, el dictamen de este órgano consultivo y los informes que, con arreglo a la legislación, sean preceptivos (artículo 57 de la Ley de Gobierno y artículo 133.2 del Reglamento de la Cámara)»* (Dictamen Nº: 120/2014 sobre anteproyecto de Ley de la Administración Pública Vasca; párrafo 85).

La especial naturaleza de los anteproyectos de ley permitiría relativizar incluso dicha exigibilidad de los informes preceptivos. El Tribunal Constitucional en su Sentencia 108/1986, de 29 de julio, que desestimaba un recurso contra la presentación del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que carecía del preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial, estimó que: *«la ausencia de un determinado precedente sólo tendrá trascendencia si se hubiere privado a las Cámaras de un elemento de juicio necesario para su decisión, pero, en este caso, el efecto, que tuvo que ser conocido de inmediato, hubiese debido ser denunciado ante las mismas Cámaras y los recurrentes no alegan en ningún momento que esto ocurriese. No habiéndose producido esa denuncia, es forzoso concluir que las Cámaras no estimaron que el informe era un elemento de juicio necesario para su decisión, sin que este Tribunal pueda interferirse en la valoración de la relevancia que un elemento de juicio tuvo para los parlamentarios»*. Y más adelante aplica la misma doctrina por lo que se refiere a la falta de remisión al Congreso por el Gobierno de la exposición de motivos y de la memoria explicativa del proyecto de ley. No faltó la remisión de estos antecedentes sino que se hizo tardíamente, a juicio de los recurrentes. Pero, aunque hubieran faltado, dice el Alto Tribunal que: *«El defecto indicado sólo tendría relevancia si hubiese menoscabado los derechos de Diputados o grupos parlamentarios del Congreso, y siendo los hechos, en caso de ser ciertos, plenamente conocidos por ellos sin que mediase protesta por su parte, hay que entender que los afectados no consideraron que existiese lesión de sus derechos, y que, si defecto hubo, fue convalidado por la misma Cámara, por lo que este Tribunal no puede entrar a examinar su existencia o relevancia»*. En otras palabras, el Tribunal entiende que sólo puede considerarse necesario aquello que la propia Cámara estima como tal.

Bien es cierto que, en nuestro ordenamiento, la referencia por el artículo 133.2 del Reglamento de la Cámara a los informes preceptivos es explícita, lo que habilita perfectamente a la Cámara para exigirlos como requisito de admisibilidad del proyecto de ley que le sea remitido. Lo que a su vez nos vuelve a remitir a la LPEDG y su exégesis, aunque sea desde una lectura flexible y finalista.

Siguiendo nuevamente a la COJUA *“para realizar su análisis —material y esencialmente finalista— del procedimiento de elaboración de los proyectos de ley, la Comisión ha sistematizado las pautas de la LPEDG y viene distinguiendo: (i) una fase inicial, que se desenvuelve en el seno del órgano promotor de la iniciativa y cuyo principal objetivo es fijar el texto inicial, exteriorizar las razones que lo sustentan y elaborar la documentación que en cada caso resulte necesaria para la realización de los sucesivos trámites ; (ii) una fase de apertura del procedimiento a los sectores y administraciones potencialmente afectadas por aquella; (iii) una fase de informes —preceptivos y facultativos—; y (iv) una fase final, en la que el órgano impulsor, tras evaluar el entero iter procedimental, establece el texto definitivo y elabora los documentos finales —memoria justificativa y económica—”* (Dictamen 129/2015 sobre anteproyecto de Ley de transparencia, participación y buen gobierno del sector público vasco; párrafo 56).

Tanto la COJUA como esta Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo tienen expresamente dictaminado (aunque principalmente respecto de la tramitación de iniciativas reglamentarias) que el cambio de legislatura y de gabinete en el ejecutivo no produce por sí mismo, en modo alguno, una caducidad de los procedimientos de elaboración de las normas, ni determina que devengan inválidos los trámites realizados en el seno de dichos procedimientos. Así, es práctica común, validada tanto por esta DDLCN como por la COJUA, que los trámites iniciados por un Consejero o Consejera anterior se den por buenos y formen parte, de forma natural, del expediente que el Consejero o Consejera que lo sustituya en la legislatura siguiente remita a la aprobación en Consejo de Gobierno. De esa manera, la tramitación iniciada en una legislatura se ha continuado en la siguiente sin interrupción ni solución de continuidad (por todos, entre los dictámenes de nuestro máximo órgano consultivo podemos citar: Dictamen 203/2009 sobre el proyecto Decreto de desarrollo y aplicación de las medidas de apoyo comunitarias al sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Euskadi, párrafos 2 y 37; Dictamen 217/2009 sobre proyecto de Decreto por el que se regula el desarrollo y aplicación en la CAPV de la reglamentación comunitaria en el sector de frutas y hortalizas y el régimen de ayudas derivadas de la misma, párrafos 1 y 30; Dictamen 64/2013 «Proyecto de Decreto sobre el Consejo Económico y Social Vasco», párrafos 2 y 34).

Dicho de otra manera, la cuestión de la validez jurídica de esos actos de tramitación es independiente de que los mismos fueran o no anteriores a la disolución del Parlamento o a la conformación de un nuevo Gobierno, puesto que la Administración es una, con una única personalidad jurídica para toda su estructura y todas sus funciones (artículos 53 de la LG y 3.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público —en adelante LRJSP—), independientemente de los cambios de Gobierno como titular de la misma. Si esto es así, la autoría de los actos de tramitación, y por tanto su validez, permanece inalterable no obstante el cambio de titular del Ejecutivo.

En sentido estricto, no es necesario ningún acto específico de *«conversión»*, *«conservación»* o *«convalidación»* de los trámites ya realizados en la legislatura anterior (figuras estas previstas en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas —en adelante, LPACAP— como medidas de subsanación de los vicios de determinados actos), en la medida en que dichos trámites

realizados en el seno del procedimiento de elaboración no devienen nulos ni pierden valor por el cambio de legislatura (artículos 47, 48 y 49 de la LPACAP). Y ello, a pesar de que la lógica de economía procesal que subyace en la LPEDG, que postula la necesidad de, en la medida de lo posible, conservar la validez de las actuaciones realizadas hasta ese momento (art. 4.2 LPEDG).

Consecuentemente, y toda vez que no es precisa esa «economía procedimental de conservación», sólo será preciso la realización por el órgano competente de trámites procedentes para el impulso del procedimiento en sus diversas fases, sea ordenando su continuación o con ocasión de cualquiera de los hitos del procedimiento marcados por la LPEDG y la LG (orden de inicio, orden de aprobación previa, orden de solicitud de dictamen de la COJUA, proposición del texto definitivo de la norma al Consejo de Gobierno...).

Estos actos de impulso de la tramitación, en sí mismos, implican una asunción de la tramitación precedente y, por tanto, una valoración de su eficacia formal y material, que no sólo debe conectarse con el cumplimiento formal del expediente, sino que debe también atender a la utilidad real de los mismos al objeto de dotar al órgano decisor de los elementos de juicio adecuados para ajustar la norma a la coyuntura de cada momento, sea el decisor el órgano Gobierno, en el caso de las normas reglamentarias, sea aquél el Parlamento en el caso de los proyectos de Ley.

Por consiguiente, para decidir si se considera oportuno continuar con la tramitación desde un momento concreto de un procedimiento anterior a fin de que no sea preciso reiniciarlo nuevamente, o para asumir y dar por buenos todos los trámites ya realizados, **deben tenerse en cuenta todos los factores circunstanciales que en el procedimiento concurren.**

Una de estos factores circunstanciales será la constatación de si la norma ha sido objeto de anteriores tramitaciones que impliquen una duplicidad de actuaciones, al objeto de no duplicar trámites innecesariamente y agilizar el procedimiento, o si razones de urgencia debidamente acreditadas justifican la necesidad de prescindir de alguno de los trámites, incluso cuando no se hubieran llevado a cabo, salvo cuando vengan exigidos por normas con rango de Ley (Dictamen nº 129/2015 de la COJUA sobre anteproyecto de Ley de transparencia, participación y buen gobierno del sector público vasco, párrafos 55, 59, 63 u 85),

También habrá de considerarse si en el ínterin han sobrevenido o no importantes cambios normativos o sociales que determinen la pérdida de actualidad o valor informativo de los trámites realizados hasta la fecha.

Del mismo modo, es también evidente que, sin soslayar las finalidades materiales a las que responde el proceso de elaboración, el hecho de simplificar o no la tramitación administrativa debe ser un criterio relevante a la hora de realizar esa valoración, pues resultan plenamente aplicables al procedimiento de elaboración de la norma los mismos principios de buena regulación que son aplicables a las normas que serán fruto de dicho procedimiento, de forma que «en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia» (artículo 129 de la LPACAP).

En todo caso, lo dicho hasta ahora es aplicable a todos los actos del procedimiento administrativo previo a la remisión al Parlamento, desde la orden de inicio hasta el acto de aprobación por el Consejo de Gobierno, ambos inclusive, siendo predicable el mantenimiento de la validez jurídica de los actos administrativos y el principio de conservación de los actos a todos

ellos, incluido este último de remisión, debiendo ser tan solo objeto de valoración su vigencia material, en el sentido de los párrafos anteriores.

Pues bien, cuando hablamos de «*anteproyectos y proyectos de ley*», que implican la remisión al parlamento como otra fase añadida posterior al procedimiento de elaboración, esta valoración atañe tanto al Consejero o Consejera (que tendrá la responsabilidad durante el procedimiento previo y también en la decisión de su elevación al Consejo de Gobierno), como al propio Gobierno, como titular de la iniciativa legislativa ante la Cámara (que deberá efectuar esa misma valoración a la hora de aprobarlo y de decidir el momento de la remisión al órgano legislativo junto con los documentos preceptivos o la realización de cualquier otra actuación complementaria, tal y como dispone el artículo 13 LPEDG). Será por tanto, responsabilidad de dichos órganos, cada cual en el momento correspondiente, despejar cualquier duda que pudiera existir al respecto, incluso si para ello fuera necesario recabar, de sus propios servicios o de otros órganos, los informes que resulten pertinentes o si fuera necesario requerir algún trámite adicional o reiterar cualquiera de los ya efectuados.

Y ello, sin perder de vista que, como ya hemos dejado sentado, incluso la importancia de una eventual modificación sobrevenida del ordenamiento o cualquier otra circunstancia coyuntural que se hubiera dado en el ínterin y que afectara al proyecto, debería ser sopesada de una forma relativa, puesto que el «*proyecto de ley*», aún después de ser remitido a la Cámara y transformarse el procedimiento en parlamentario, ha de ser sometido a su tramitación en aquella sede, durante al cuál, y previo a su aprobación final y convertirse en Ley, puede ser sujeto de enmienda por la Cámara de forma que también en ese momento se podrán realizar los ajustes que resulten pertinentes.

En el caso concreto que se informa, la afirmación de la validez formal de los actos de tramitación previos que se pueda deducir de este Informe no releva al Departamento promotor, en tanto que responsable del impulso del procedimiento y detentor del conocimiento sectorial especializado en el asunto, de ponderar si esta afirmación sobre la cuestión de fondo es o no correcta. Ello supondría, por ejemplo, considerar si el texto de proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2016, y remitido al Parlamento Vasco con fecha 21 de julio de ese mismo año, se ha visto afectado o no por el desarrollo reglamentario del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, entre otros

Ya hemos advertido que no es objeto de este informe el análisis material o de fondo del proyecto concreto por el que ahora se nos pregunta, si bien en una preliminar aproximación al mismo, y a partir exclusivamente de la presunción de que la consulta que se nos dirige se sustenta sobre una ponderación previa de la oportunidad de relanzar el texto aprobado en 2015, no parece que existan razones de fondo, o cambios normativos relevantes que, independientemente de la mentada validez formal de los efectuados en su día, impidan a día de hoy la aprobación del mismo texto que fue aprobado con fecha 3 de diciembre de 2015.

4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA E INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO COMO TRÁMITES ESPECÍFICOS.



Aunque la Disposición Adicional Segunda de la LEDCG, por razones estrictamente históricas (se aprobó un año antes de que se promulgara la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi o LCOJUA) se remite al Decreto 187/1999, de 13 de abril, por el que se crea y regula la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, es la LCOJUA (en concreto su artículo 3.1.a) la que, fuera de la LEDCG pero por remisión de la misma, regula la cuestión de la preceptividad del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA).

Conforme al citado artículo, la COJUA *«debe ser consultada»* en relación con todos los *«anteproyectos de ley cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos...»* (excepto los de presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y los de metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales). Hasta aquí, lo dicho hasta ahora sobre el resto de trámites sería también aplicable al dictamen del alto órgano consultivo, cuya validez jurídica no resulta alterada por el cambio de Gobierno o por la caducidad de los expedientes parlamentarios a resultas de la disolución de la cámara.

Ahora bien, la especial naturaleza de este dictamen, ratificada por la jurisprudencia constitucional, hace que nuestro informe deba dedicarle un apartado específico. Como la propia COJUA explicaba en su dictamen nº 084/2003 sobre el anteproyecto de Ley de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco (párrafo 25), la interpretación que la jurisprudencia constitucional ha hecho del 107 de la Constitución Española (CE) *«a juicio del Tribunal Constitucional, supone una suerte de constitucionalización de la "función consultiva superior", no del órgano, Consejo de Estado. Es el alto asesoramiento a la administración activa el que se convierte, por mor de aquél precepto, en un instrumento de relevancia constitucional, al configurar una "importantísima garantía del interés general y de la legalidad objetiva y, a consecuencia de ello, de los derechos y legítimos intereses de quienes son parte de un determinado procedimiento administrativo»*. Se trata, afirma el Tribunal, *«...de una función muy cualificada que permite su subsunción en la categoría de norma básica del régimen jurídico de las administraciones públicas o parte del procedimiento administrativo común (artículo 149.1.18ª CE)»*.

Es esta singular y cualificada naturaleza del trámite la que justifica que el dictamen de la COJUA merezca una mención específica (junto con el informe previo de control económico normativo de la OCE) por el artículo 133 del reglamento del Parlamento entre los documentos que deben acompañar a todo proyecto de ley que sea remitido a la cámara. Y es la razón también que motiva la mención introducida en la LG por la Ley 8/2016, de 2 de junio, de modificación de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, al dar a los artículos 56 y 57 de la LG la siguiente redacción:

Artículo 56

1. El Gobierno, en la fase inicial de elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto que deban ser remitidos a la Comisión Jurídica Asesora, únicamente enviará al Parlamento Vasco el texto de la disposición, una vez tenga la aprobación previa del órgano que haya dictado la orden de iniciación.

2. Asimismo, la misma documentación que se envíe a la Comisión Jurídica Asesora se remitirá, al mismo tiempo, al Parlamento Vasco, a efectos de su conocimiento por parte de los grupos parlamentarios.

3. Los anteproyectos de Ley y los proyectos de Decreto que hayan de ser acordados por el Gobierno, serán remitidos al Secretario del Gobierno, que procederá a su reparto. Se incluirán en el Orden del



Día cuando los Departamentos interesados hayan manifestado su conformidad sobre el contenido, en la forma que el propio Gobierno establezca. No habiendo conformidad, o siendo ésta condicionada, corresponderá al Lehendakari decidir la inclusión del asunto en los debates del Consejo.

Artículo 57

1. Los proyectos de ley presentados al Parlamento Vasco habrán de ir acompañados del informe de la Comisión Jurídica Asesora y, en su caso, de la memoria de adaptación a dicho informe.

2. Si los Proyectos de Ley compartasen un gravamen al Presupuesto, deberán ir acompañados del correspondiente anejo de financiación que será discutido y votado con arreglo a lo que disponga el Reglamento del Parlamento sobre los Proyectos de Ley.

Cabe, por tanto, preguntarse si estos artículos implican especiales obligaciones de comunicación al Parlamento cuando se pretenda rescatar la tramitación de proyectos de ley elaborados durante legislaturas anteriores. De entrada, debe distinguirse (i) si de lo que hablamos es de continuar una tramitación previamente iniciada en la que no se hubieran producido aún la aprobación previa del texto (en cuyo caso será necesario cumplimentar la comunicación requerida por el artículo 56.1 LG), o bien si dicho procedimiento tenía aún pendiente el trámite de solicitud de dictamen a la COJUA (en cuyo caso sería necesario remitir al Parlamento todo lo dispuesto por el artículo 56.2 LG) (ii) de la situación en que nos encontramos ante un anteproyecto o un proyecto que sólo tuviera pendiente la aprobación del Consejo de Gobierno o la de adoptar el acuerdo por este órgano de su remisión al Parlamento, bien por vez primera o bien por reiteración de otro acuerdo de remisión previamente efectuada (en cuyo caso nos encontraríamos ya en los casos previstos por los artículos 56.3 y 57 LG, y 133 del Reglamento del Parlamento).

Así mismo, cuando el anteproyecto o proyecto en cuestión hubiera llegado a ser dictaminado por la COJUA, a la vista de lo previsto en el artículo 29 LCOJUA, cabe también preguntarse si es suficiente en los casos anteriores con adjuntar el dictamen emitido en una legislatura anterior o si sería necesario la solicitud de un nuevo dictamen.

Dicho precepto determina que: «Si, tras la emisión del dictamen, el asunto sobre el que se ve es objeto de modificaciones sustanciales que introducen nuevos contenidos que no responden a las sugerencias o propuestas efectuadas por la comisión o las exceden, se ha de realizar una nueva consulta sobre dichos cambios» Por tanto, del literal de la norma cabe colegir que, independientemente de que el dictamen hubiera sido o no emitido bajo un Gabinete anterior, **procederá un nuevo examen sólo si en la propuesta de proyecto de ley que se vaya a presentar de nuevo a Consejo de Gobierno para su aprobación o remisión concurren «modificaciones sustanciales»**, concepto jurídico indeterminado para cuya concreción, siguiendo el literal del artículo y como tiene explicado la propia COJUA, habrá de estarse a la conexión de aquellas con el previo anterior dictamen.

A este respecto, resulta relevante atender a la doctrina de la propia COJUA respecto a la interpretación que debe darse al artículo 29 LCOJUA, siendo esta una doctrina firmemente establecida en sus dictámenes y acuerdos de inadmisión. Por todos, podemos traer a este informe las palabras del reciente Acuerdo nº 4/2017 del Pleno de la COJUA, al inadmitir una solicitud de dictamen en la sesión del día 26 de abril de 2017:

7. O, en otras palabras, como se señaló en el Dictamen 10/2000, la Comisión sólo tendrá que volver a examinar el asunto cuando de su nueva elaboración se colija la existencia de elementos o aspectos

sustantivos distintos de los examinados en su anterior intervención y cuya relevancia reclamen un nuevo análisis.

8. *Esta doctrina es coherente con la establecida por el Tribunal Supremo en relación con el Consejo de Estado y, por tanto, plenamente aplicable a los supuestos de intervención de esta Comisión.*

9. *De acuerdo con dicha doctrina, en síntesis, procede la nueva consulta cuando “...las innovaciones introducidas tras el dictamen del Consejo de Estado no han sido sugeridas por éste, son ajenas a los términos de la consulta y, además, ostentan una relevancia sustancial” (STS de 27 de mayo de 1993 —RJ 1993\102040—).*

10. *Los supuestos han sido precisados en posteriores pronunciamientos, así la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 10 de marzo de 2009 (RJ\2009\5110) subraya “que no es necesaria una nueva consulta al Consejo de Estado cuando se realizan retoques en el texto o se introducen modificaciones no sustanciales (...), ni cuando las discordancias entre el Proyecto y el Texto definitivo son consecuencias lógicas del procedimiento de elaboración, en el que se emiten informes por distintos órganos, que pueden dar lugar a variaciones en la disposición que resulte, por fin, aprobada, pudiendo añadirse que la propia doctrina de la Sala ha insistido en la necesidad de efectuar una interpretación funcional y teleológica de las garantías procedimentales establecidas para la elaboración de disposiciones generales, que se justifican no por el puro formalismo de su realización sino por la finalidad a que responden, en cuya valoración han de tenerse en cuenta las especialidades de la disposición general de que se trate (...).”*

11. *La misma STS de 10 de marzo de 2009 recuerda que es jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 8 de marzo de 2006) que cuando las modificaciones introducidas en el texto definitivo de una disposición general no sean sustanciales resulta innecesaria una nueva audiencia de las asociaciones, corporaciones o entidades representativas de intereses legítimos en relación directa con el objeto de la disposición o un nuevo informe o dictamen del Consejo de Estado, “entre otras razones porque su parecer no es vinculante, de manera que si, contemplada la modificación tanto desde una perspectiva relativa, por la innovación en el texto informado, como absoluta, por su importancia intrínseca, no representa una alteración sustancial en el ordenamiento previamente sometido al trámite de audiencia o informe, la falta de éstos, respecto de la reforma introducida, no acarrea su nulidad radical, al haber contado quien ostenta la potestad para redactar definitivamente la disposición con el criterio o ilustración de las entidades, corporaciones, asociaciones y organismos consultados, que, en definitiva, es el fin perseguido (...) al establecer un procedimiento para la elaboración de los reglamentos (...).”*

12. *E invoca también la STS de 31 de enero de 2001, por referencia a la Sentencia de 27 de mayo de 1993, valorando las modificaciones allí producidas, que no requerían nuevo dictamen del Consejo de Estado, “ya que es necesario compatibilizar el carácter final de dicho dictamen, como juicio de síntesis de todas las cuestiones planteadas e informes específicos emitidos con anterioridad, con el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno (...), de la que resultaría desapoderado este si hubiese de ajustarse literalmente en la redacción definitiva a dicho dictamen, pues sólo si se regulasen materias no incluidas en el Proyecto remitido a dictamen o su ordenación resultase completa o sustancialmente diferente, sin haber sido sugerida por el propio Consejo de Estado, debería recabarse sobre tales extremos nuevo informe, ya que el titular de la potestad reglamentaria ostenta la facultad de introducir en el texto remitido al Consejo de Estado las reformas que considere adecuadas para la redacción final sin otro límite que el expresado (...).”*

13. *La precedente doctrina sigue plenamente vigente, tal y como se desprende de la lectura de la STS de 22 de diciembre de 2016 (RJ 2017/106).*

14. Procede, por tanto, examinar el texto del proyecto sometido a consulta, conforme al señalado criterio de la conexión de las innovaciones con las consideraciones del dictamen anterior, esto es, si derivan de las sugerencias del dictamen de la Comisión o si, ajenas a este, ostentan una relevancia sustancial que exija una nueva intervención preceptiva.».

También se debe de hacer en este apartado, en tanto que informe explícitamente mencionado por el artículo 133 del Reglamento del Parlamento, al informe de control económico normativo que debe hacer la Oficina de Centro Económico a los «anteproyectos de ley» en virtud de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (LCEyC).

Este informe aunque previo al informe que ha de realizar la COJUA (art. 27.1 LCEyC), es también de singular trascendencia pues la determinación del contenido o del impacto significativo que los «anteproyectos de ley» puedan tener en la actividad económica pueden determinar la preceptividad de la emisión de tal informe (art. 41 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ley14/1994) o la necesaria información y audiencia a la ciudadanía del proyecto (art. 133.4 LPACAP).

Este informe de control económico normativo, tiene más que ver con el contexto que con el texto mismo del «proyecto de ley», pues su finalidad no es otra que hacer un pronunciamiento sobre si las disposiciones en él previstas repercuten o afectan directa o indirectamente, en las materias propias de la Hacienda General del País Vasco así como en el régimen presupuestario y de ejecución del gasto e ingreso público; siendo de singular pertinencia el dictaminar sobre «la incidencia o repercusión de la norma o disposición en el régimen de la Tesorería General del País Vasco, patrimonial, contable, de contratación, tributario propio, de endeudamiento o de concesión de garantías vigente en cada momento» (art. 26.1.b de la LCEyC) o «la razonabilidad financiera en términos cuantificables de la norma o disposición propuesta.» (art. 26.1.b de la LCEyC); aspecto este último que, entre otros muchos matices, tiene repercusión en la normativa denominada de «Estabilidad financiera de las Administraciones Publicas».

Es bien cierto que aunque este informe preceptivo fuera desfavorable y obstativo, el «anteproyecto de ley» podría continuar su *iter* procedimental hasta su elevación por el Consejero o Consejera competente a Consejo de Gobierno, el cual es libérrimo en su decisión de aprobación o no según venimos exponiendo a lo largo de este informe.

Ahora bien, cabe reiterarse la ya esencial pregunta que pretende dar respuesta ente informe: ¿es precisa su nueva emisión de informe OCE en relación con un «proyecto de ley» ya aprobado por Consejo de Gobierno e independientemente de si este tomó el acuerdo de su remisión al Parlamento o no? ¿podría bastar con el informe OCE emitido previamente incluso aunque, remitido éste al Parlamento, su expediente parlamentario hubiera caducado por la disolución de la Cámara?

La normativa que regula este control económico normativo no establece de forma específica sobre la necesidad de nuevo pronunciamiento. Solo hace referencia en el artículo 27.1 in fine de la LCEyC, a los supuestos de proyectos normativos en que deba dictaminar la COJUA y, toda vez que esta es la última en pronunciarse, «...con anterioridad a su aprobación, deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones normativas como consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen de dicho órgano consultivo.».

Es decir, sólo «deberá comunicarse», sin más trámites, la modificación introducida. No se debe formalizar un nuevo dictamen, y ello con independencia que el Consejero competente en materia de Hacienda deba conocer de estas modificaciones por vía interna departamento y haga valer sus consideraciones en el Consejo de Gobierno.

Consecuentemente, y teniendo en cuenta las trascendentes repercusiones que cualquier normativa puede tener en la economía, quien esto informa cree que se debe ser consecuente con lo expuesto en los párrafos precedentes de este apartado, de forma tal que (i) si la COJUA no considera procedente pronunciarse sobre el reenvío de un proyecto de ley ya aprobado por Consejo de Gobierno al Parlamento, tampoco parece procedente que lo haga la OCE, y (ii) caso de que la COJUA decidiera que ha de pronunciarse sobre ese proyectos de ley, tampoco parece procedente que se pronuncie la OCE, sin perjuicio de que le sea comunicado el dictamen o parecer de ésta a los efectos legales oportunos, así como las modificaciones que en su caso se introdujeran.

Todo ello sin perjuicio de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 41.2 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ley14/1994, existe un deber de remisión del anteproyecto de ley a la OCE, a los efectos de su conocimiento del trámite y la valoración de la existencia o ausencia de contenido económico.

5. LA DISTINCIÓN ENTRE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE LEY Y EL ACTO DE REMISIÓN A LA CÁMARA

Conforme a nuestra LG, es atribución de los Consejeros o Consejeras la presentación al Gobierno de anteproyectos que se deberán «*proponer para su aprobación por el Gobierno [como] Proyectos de Ley*» (artículo 26.8 LG en relación con el 55 LG). Los *anteproyectos de ley* «*se someterán a la toma en consideración del Consejo de Gobierno, que decidirá sobre su aprobación final en la misma sesión, o bien establecerá los criterios que hayan de tenerse en cuenta en su redacción final y las actuaciones que, en su caso, hayan de seguirse en su tramitación ulterior hasta dicha aprobación*» (artículo 13 LPEDG). Por su parte, corresponde el Gobierno «*aprobar los Proyectos de Ley para su remisión al Parlamento o determinar su retirada, en las condiciones que establezca el Reglamento de la Cámara*» (artículo 18.a LG).

En efecto, tanto la especial consideración de los anteproyectos de ley en comparación con la tramitación de las iniciativas reglamentarias, como la preceptividad de que sean tomados en consideración por el Consejo de Gobierno es un plus de especialidad en la tramitación que reconoce la propia LPEDG al incluir el artículo 13 dentro de su Capítulo III, de «*Disposiciones Especiales*». Y ello porque, tal y como refiere en su Exposición de Motivos: «*Dada la especial relevancia de las leyes, se ha previsto con respecto a ellas un trámite específico de toma en consideración por el Consejo de Gobierno de los anteproyectos de ley. Su finalidad es que el órgano que ha de ejercer la iniciativa legislativa asuma y oriente la planificación ulterior del procedimiento de elaboración a la vista de un texto ya articulado y sin perjuicio de las modificaciones que resulten de los trámites de audiencia, consulta e informe posteriores*».

En este punto cabe preguntarse de nuevo cuál es la diferencia jurídica entre «*anteproyecto de ley*» objeto de tramitación administrativa y aprobado o no como «*proyecto de ley*», por un lado, y el sustancial «*proyecto de ley*» que se remite al Parlamento, por otro. De entrada, debemos aclarar que no resulta esencialmente relevante para el presente informe la distinción nominal que de habitual se hace entre «*anteproyectos*» y «*proyectos*» –en los artículos de nuestra LG arriba citados parece extraerse que en el Ordenamiento de la CAE llama

«*anteproyecto*» a los textos elaborados por los departamentos, que son presentados al Gobierno como propuestas para su adopción como «*proyectos de ley*», convirtiéndose en tales en el momento en que cuentan con la aprobación de dicho Órgano-. Sí resulta más relevante y sustancial, sin embargo, la distinción entre el «*texto*» en su fase de elaboración administrativa hasta su culminación en la aprobación por el Consejo de Gobierno y el «*documento objeto de ulterior remisión al Parlamento*», con la consiguiente y definitiva conversión en objeto de tramitación parlamentaria, en ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa del Ejecutivo.

A este respecto, existe abundante documentación doctrinal, pero en la actualidad –y a salvo de exegesis más doctas– resulta bastante esclarecedor lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que bajo el epígrafe «*Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley*» dice:

«El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales.»

«La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. (...)»

Aunque la primera parte de este artículo puede considerarse de los preceptos que prevén su aplicación exclusiva en el ámbito de la Administración General del Estado (por lo que no sería de aplicación a la Comunidad Autónoma de Euskadi en los términos de la Disposición final primera LPACAP), no resulta contradictorio en ese punto con nuestra LG. Es decir, los Órganos de gobierno ejercen en dos fases la iniciativa legislativa que, en el presente caso, le confieren al Gobierno Vasco los artículos 16 y 18.a) LG: una primera e interna «*mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley*», y otra segunda y posterior con «*la ulterior remisión de los proyectos de ley*» al Parlamento Vasco.

Estas dos fases –y el producto resultante de sus tramitaciones– tienen, sin lugar a dudas, su trascendencia, pues reflejan la dicotomía del actuar del Ejecutivo en su doble faceta, pues por un lado es el órgano de dirección política y, por otro, es el órgano que culmina la estructura administrativa pública.

Así, se puede considerar que un «*anteproyecto de Ley*» es fruto de una actividad interna administrativa, con notables criterios de discrecionalidad pero sometida a programación (planificación normativa: art. 132 LPACAP) y un específico procedimiento (LPEDG), cuya ausencia puede ocasionar vicios de nulidad –incluso su impugnación en vía jurisdiccional–, y cuya aprobación por Consejo de Gobierno (y transformación en «*proyecto de ley*» en la terminología de nuestra LG) le da ya un carácter acto jurídico final –art. 13 LPEDG–, que bien pudiera concluir su tramitación y efectos en ese momento.

Naturalmente, la finalidad última de los «*anteproyectos de Ley*», va más allá de su simple aprobación o conclusión del *iter* procedimental regulado en la LPEDG. Es decir, trasciende más allá de su aprobación y lánguida residencia como «*proyecto de ley aprobado*» en los servicios administrativos de Consejo de Gobierno (o de su Secretaría). Su pretensión es transformar el ordenamiento jurídico en un aspecto determinado –el objeto y finalidad del anteproyecto de ley–, y ello en base a un programa de Gobierno definido en función de las demandas reales de la sociedad y de la ciudadanía a la que sirve.

A esta finalidad novadora contribuye la remisión al Parlamento del «*proyecto de ley*», acto que se enmarca dentro de los denominados «*actos políticos*» cuya potestad no está reglada actualmente por norma alguna de Derecho Administrativo. Y ello, porque los preceptos referidos a cómo y junto a qué documentación ha de remitirse el proyecto al Parlamento están tan en la frontera de ambos mundos que prácticamente se pueden considerar como de Derecho parlamentario (artículo 57 LG como correlato del artículo 133 del Reglamento del Parlamento, artículo 58 LG como regulación del propio procedimiento parlamentario).

En este sentido el acto de remisión es un acto que concede un *plus* que se añade al ya de por sí ya perfecto del «*proyecto de ley*» aprobado por el Gobierno, con una finalidad superior cual es el dar contenido al programa legislativo contenido en el Programa de Gobierno en ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa que el ordenamiento jurídico le reconoce.

La naturaleza «*política*» de este «*acuerdo de remisión*» del Consejo de Gobierno de un «*proyecto de ley*» al Parlamento, se halla refrendada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, entre otras, en su Sentencia de 15 de marzo de 1990 (RTC 1990, 45), cuyo ponente fue el Excmo. Sr. LEGUINA VILLA, manifiesta:

«... no toda actuación del gobierno, cuyas funciones se enuncian en el artículo 97 del Texto Constitucional, está sujeta al Derecho administrativo. Es indudable, por ejemplo, que no lo está, en general, la que se refiere a las relaciones con otros órganos constitucionales, como la decisión de enviar a las Cortes un proyecto de ley u otros semejantes, a través de las cuales el Gobierno cumple también la función de dirección política que le atribuye el mencionado artículo 97 CE. A este género de actuaciones del Gobierno, diferentes de la actuación administrativa sometida a control judicial, pertenecen las decisiones que otorgan prioridad a una u otras parcelas de la acción que le corresponde, salvo que tal prioridad resulte obligada en ejecución de lo dispuesto por las leyes».

En este mismo sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, que aunque centrada fundamentalmente en los supuestos de relaciones entre los poderes del Estado, ha dictado pronunciamientos referidos a supuestos de denegación de la solicitud de ejercicio de la iniciativa legislativa o el ejercicio de ésta (SSTS 13 marzo 1990 [RJ 1990, 1938]; 25 octubre 1990 [RJ 1990, 7972]; y 10 diciembre 1991 [RJ 1991, 9254]).

De ello podemos obtener ya algunas conclusiones:

- I. La tramitación de los anteproyectos de Ley no se ve, en principio, afectada por la caducidad de los procedimientos parlamentarios fruto de la disolución del Parlamento.
- II. No se puede «obviar» la tramitación establecida en la LPEDG, pero en la medida de lo posible, y sin perjudicar a su finalidad material, debe entenderse que los trámites efectuados con anterioridad conservan plenamente su valor, sin perjuicio de que ello deba ser siempre objeto de valoración por el órgano al que en cada caso corresponde el impulso del procedimiento y teniendo en cuenta, además, la especial consideración flexible y antiformalista que el procedimiento tiene en esos casos.
- III. Los «*anteproyectos de ley*» presentados al Consejo de Gobierno y aprobados por este como «*proyectos de ley*», independientemente de su remisión o no al Parlamento para continuar su tramitación en sede parlamentaria, son actos administrativos válidos (aunque no eficaces en la innovación del ordenamiento jurídico) y quedan residenciados

en dicho Consejo de Gobierno, sin fecha de caducidad alguna, ya que suponen el fin del *iter* procedimental previsto en la LPEDG.

- IV. La toma en consideración y aprobación final del «*anteproyecto de ley*» por el Consejo de Gobierno puede ser anterior o simultánea en el tiempo a la decisión de su remisión al Parlamento como «*proyectos de ley*».
- V. Una vez aprobado por Consejo de Gobierno un «*proyecto de ley*», la decisión de su remisión a Parlamento excede de la función administrativa de éste, debiendo ser considerado como un «*acto político*», y por lo tanto no sujeto a mandato normativo alguno sino, más bien, a criterios de oportunidad, sin perjuicio de las normas que especifican la documentación que debe acompañar esa remisión y que determinarán, en todo caso, su admisión o no por la mesa de la Cámara.

6. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS «PROYECTOS DE LEY» REMITIDOS AL PARLAMENTO TRAS SU DISOLUCIÓN.

Ya se ha comentado anteriormente que tras la disolución del Parlamento Vasco o expirado su mandato, caducarán en cuanto a su expediente parlamentario todos los asuntos en tramitación, y entre estos asuntos los «*proyectos de ley*» remitidos antes de su disolución. Entonces, cabe preguntarse en qué situación quedan, desde el punto de vista del Derecho administrativo, los «*proyectos de ley*» aprobados en Consejo de Gobierno y que posteriormente fueron remitidos como iniciativas legislativas al Parlamento, una vez que este es disuelto.

A juicio de quien esto informa tales «*proyectos de ley*» ya aprobados por Consejo de Gobierno cumplen, también después de la disolución del Parlamento, con la finalidad para la que se han previsto en la fase, llamémosla administrativa. Esto es, y en los términos expuestos en la Exposición de Motivos de la LPEDG, prever el contenido tanto de forma como de fondo de una previsible y concreta iniciativa legislativa mediante el método de:

«...aplicar a la redacción de las leyes en el seno del ejecutivo la misma metodología que a las disposiciones reglamentarias. De ese modo se contribuye muy positivamente a facilitar la labor del titular de la potestad legislativa, pues se le presentan para su discusión y decisión unos proyectos mejor fundados y articulados, con una técnica jurídica más depurada y apropiada para alcanzar los objetivos que se propone. Sobre esa base más precisa y segura corresponde a la Cámara parlamentaria su enmienda y aprobación.»

La razón de ello es la decisión de iniciar la elaboración de las normas, tanto en su fase administrativa como en la puesta en marcha de su tramitación parlamentaria mediante la remisión al Parlamento, «... no se concibe como una mera formalidad, sino como un acto de gran trascendencia jurídica y política que ha de basarse en una mínima reflexión sobre la necesidad y viabilidad de aquéllas. Por eso, se exige que tenga en cuenta los condicionamientos de toda clase (estudios, informes, audiencias, consultas, negociaciones, etc.) que puedan incidir en la fijación de su contenido, y una estimación del coste y eficacia de su puesta en vigor no sólo en relación con las Administraciones públicas, sino, también, para los ciudadanos y la economía en general» (Exposición de Motivos de la LPEDG).

Ahora bien, y es aquí donde entra en valor la alta dirección política de la que es titular el Consejo de Gobierno, ¿puede asumirse por el Consejo de Gobierno un «*anteproyecto de ley*» tramitado o incluso un «*proyecto de ley*» ya aprobado anteriormente y remitirlo de nuevo al

Parlamento como «*proyecto de ley*»? ¿Puede hacerlo, incluso cuando dicho proyecto de Ley hubiera sido remitido ya previamente al Parlamento?

Según venimos exponiendo, independientemente de su “*gran trascendencia*”, en términos literales de la LPEDG, la decisión de asumir como propio un proyecto anterior y de decidir su remisión o no al nuevo Parlamento, reafirmando como iniciativa legislativa necesaria y oportuna –y por lo tanto vigente– conforme al Programa de Gobierno surgido de ese nuevo Parlamento, es **una decisión eminentemente política**.

Cierto es que **la remisión al Parlamento de cualquier proyecto de ley deberá acompañarse siempre, a fin de que no haya dudas respecto a la admisión del mismo por la Mesa de la Cámara, de los antecedentes y documentos exigidos por los artículos 57 LG y 133 del Reglamento del Parlamento. Pero a partir de ahí, es también una decisión eminentemente política la de asumir ese proyecto y esa tramitación administrativa llevada a cabo con anterioridad**. Decisión de carácter político adoptada por el nuevo Gobierno, todo más cuando en su faceta de dirección política y superior de la misma Administración que los adoptó originalmente –Administración que actúa siempre con personalidad única a pesar del cambio de Gobierno–, que conlleva el afirmar la suficiencia, actualidad y vigencia de lo ya tramitado en la fase administrativa.

Es decir, supuesta la validez jurídica de los actos de tramitación efectuados, tales actos no se han visto afectados ni por el cambio de Gobierno ni por la disolución del Parlamento.

Por tanto, en opinión de quien esto suscribe, en la respuesta a la cuestión planteada a esta Dirección no se podrá «*obviar*» y será preceptivo la tramitación de la LPEDG aunque, tanto la Consejera o Consejero en su decisión de elevar la propuesta correspondiente al Consejo de Gobierno, como el Consejo de Gobierno al adoptar, en el ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa, el acuerdo de remisión al Parlamento, habrá de tener en cuenta y aprovechar los trámites válidamente efectuados con anterioridad, toda vez que se constate que tal «*proyecto de ley*» se adecue a las previsión política del nuevo Consejo de Gobierno a realizar durante su mandato, que siga siendo precisa su implementación en el ordenamiento jurídico y que los elementos esenciales del texto del «*proyecto de ley*» no se hayan visto afectados por normativa surgida con posterioridad a su aprobación. Valoración esta que habrá de hacerse, en todo caso, desde criterios materiales y de estricta oportunidad y conveniencia.

7. CONCLUSIÓN


A modo de resumen: el actual y vigente Consejo de Gobierno, puede en el ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa que el reconocen los artículos 16 y 18.a) de la LG acordar la aprobación y remisión al Parlamento de un «*proyecto de ley*» aprobado ya con anterioridad, previa elevación a él por el o la Consejera competente (o por varios si fueran varios los competentes) de la correspondiente propuesta.

Esta elevación por uno o varios miembros del Consejo de Gobierno ha de tener por finalidad, además de reflejar la decisión formal de pertinencia y propuesta recogida en el art. 26.8 LG, la de aseverar tanto la vigencia de la viabilidad normativa (es decir, que no se ha visto afectado por normas aprobadas con posterioridad a su anterior remisión) como la vigencia de los trámites anteriormente efectuados y la oportunidad y necesidad innovadora del ordenamiento jurídico que pretende, de acuerdo con los términos previstos en el proyecto político del Gobierno actual.

Así, los «*proyectos de ley*» ya aprobados y residenciados en el Consejo de Gobierno, volverán a ser desde una perspectiva parlamentaria nuevos «*proyectos de ley*» al ser remitidos, con todos sus antecedentes, al Parlamento, iniciándose de nuevo la tramitación parlamentaria caducada en su día por la disolución de este.

Este es mi informe que emito y someto a cualquier otro mejor fundado en Derecho.

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **XABIER UNANUE ORTEGA**
Fecha de la firma: **31/05/2017 10:07:16**
Validación de la firma:  **Correcta**

Firmante: **JESUS MARIA FERNANDEZ AGUADO**
Fecha de la firma: **31/05/2017 10:41:47**
Validación de la firma:  **Correcta**



TXOSTENA: Noraino den juridikoki bideragarria Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoaren lege-proiektuaren testua berriz hartu eta Eusko Legebiltzarrera bidaltzea, lehenago egindako prozedura-izapideak baliozkotzat jota.

61/2017 DDLCN-OL

1. AURREKARIAK

2017ko maiatzaren 22an, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzak kontsulta bat helarazi zion Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritza honi, ea “Gobernu Kontseiluak zer aukera duen 2016ko uztailaren 19an onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoaren lege-proiektuaren testua berriz hartzeko eta Eusko Legebiltzarrera bidaltzeko, alde batera utzita Xedapen Orokorrek Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legean xedatutako izapidetze guztia.”

Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari atxikita baitago, txosten hau ematen du, euskarri harturik Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko ekainaren 2ko 7/2016 Legearen 5.2 artikulua agindutako funtzioak; aintzat harturik Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak —Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioako sailak sortu, ezabatu eta aldatu baititu, bai eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatu— 6.1.h) artikuluan ezarritakoa, eta oinarritzat harturik apirilaren 11ko 71/2017 Dekretuak —Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezarri baitu—, 14.1.a) artikuluan, eta apirilaren 25eko 144/2017 Dekretuak —Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoarenak— Zuzendaritza horri esleitutako eskumenak.

2. LEGEBILTZARREKO PROZEDURA IRAUNGITZEA ETA PRESTATZEKO PROZEDURA ADMINISTRATIBOAREKIKO ALDEA

Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren IX. kapituluak *izapidetze parlamentarioak iraugitzeaz* dihardu, eta hau dio, izaera orokorrek, bere **130. artikuluan**:

«Eusko Legebiltzarra desegindakoan edo Legebiltzarraren agintaldia amaitutakoan, iraugi egingo dira tramitazioan dauden gai guztiak, salbu eta Diputazio Iraunkorrek aztertu eta erabaki beharrekoak edo legeak hala aginduta atzeratu beharrekoak.»

Beraz, gero jorratuko ditugun beste faktore batzuk gorabehera, Gobernu Kontseiluaren erabakiaren bitartez egikaritutako legegintzako ekimena errepikatzeko aukerei buruzko analisi honek abiapuntutzat hartu behar du Gobernu Kontseiluak onartutako lege-proiektu eta -aurreproiektuen izaera eta eragina argitzea.

Gure DDLCN 51/2017 eta 56/2017 txostenetan esan genuenez, Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren 130. artikuluko edukiak argi erakusten du ezen, behin Legebiltzarra deseginda edo haren agintaldia amaituta (alde batera utzita legegintzako herri-ekimen baten ondoriozko lege-proposamenak, atzeratu egiten baitira aipatu artikulua azken tartekiaren arabera, Legegintzako Herri Ekimena arautzeari buruzko ekainaren 30eko 10/2016 Legearen 12. artikulua ere kontuan hartuta), beste ekimen guztiak, eta, beraz, Eusko Jaurlaritzak Legebiltzarrera bidalitako lege-proiektu guztiak —legegintzako ekimenaren ahala egikarituta, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legeak (JL) 16. eta 18. artikuluetan aitortu bezala— iraingitzen direla izapidetze parlamentarioan.

Hala ere, txosten hartan ere esan genuenez, jada doktrina sendotua da —salbuespen gutxi batzuk salbu— prozedurak «*iraungitzearen*» mende daudela, eta eskubideak, berriz, «*preskripzioaren*» mende, eta, beraz, prozedura bat bertan behera gelditzen bada iraingitzea dela eta, dena delako eskubidea beste prozedura batean egikaritu daitekeela, preskripzioak eskubideari eragiten ez dion bitartean. Hasteko, beraz, “*ez dago batere zalantzarik Eusko Jaurlaritza berriak, legegintzako ekimenerako eskubidearen jabe delarik, erabateko gaitasuna duela aurreko kabineteak onartutako ekimenak bere horretan berresteko dagokion hauteskunde-prozeduratik ateratako ganbera berriaren aurrean; izan ere, ekimenaren iraingitzea ez zaio transmititzen Jaurlaritzak ekimena aurkezteko eskubideari*”.

Beraz, aipatu DDLCN 51/2017 txostenean bezala (zeinetatik aterako baititugu, errepikakor izateko arriskuarekin bada ere, egiten ari garen honetan plazaratuko ditugun kontsiderazio edo gogoeta gehienak), egiten ari garen txostenak honetara mugatu behar du: ekimena erretiratzeak edo Parlamentua desegiteak zer ondorio izan ditzakeen ikertzera, baina Eusko Jaurlaritzak zegokion lege-proiektua aurkezteko oinarritzat baliatu zituen administrazio-prozedurak bakarrik aintzat hartuta. Hau da, izapidetze gubernatibo edo administratiboaren gaineko balizko ondorioak baino ez ditu onartu edo baztertu behar, alde batera utzita izapidetze parlamentarioaren eta haren espedientearen amaiera edo iraingitzea.

Era berean, eta zehazki galdetu digutenez zer aukera dagoen «albo batera uzteko» orain «XOEPLn ezarritako izapidetzea», egoki da ohartaraztea **txosten hau ere mugatuko dela aztertzeraz zer baliozkotasun formal edo prozedimental duten, gaur egun, dagokion lege-proiektua onartu eta Legebiltzarrera bidali aurretik egindako izapidetze-egintzek, arretarik eman gabe, ikuspegi material edo funtsezkotik, proiektuaren edo bere oinarri juridikoen gaurkotasanari edo indarrean egoteari**. Azken gai horrek, jakina, kontsulta honen xedea eta norainokoa gainditzen baitu.

3. XEDAPEN OROKORRAK PRESTATZEKO PROZEDURAREN IZAERA BEREZIA LEGE-AURREPROIEKTUEI APLIKATZEN ZAIENEAN

DDLCN 51/2017 eta 56/2017 txostenetan aztertutako kasuan gertatu zen bezala, ondorio hau atera behar da aurrekotik: egin diguten galderari erantzuna emateko abiapunturik egokiena dela Exekutiboaren barruan sortutako “*lege-aurreproiektu*” horiei, “*lege-proiektu*” gisa onartu eta Parlamentura bidali baino lehen, prozedura-exegesia aztertzea; batez ere, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legeak (aurrerantzean, XOEPL) aurreikusi duena oinarritzat hartuta. Analisiaren barruan sartu behar dira 8. artikulutik 11.era bitartekoek aipatzen dituzten nahitaezko izapide guztiak, zeinei buru ematen baitie Gobernu Kontseiluak aintzat hartzea. Egin-eginean ere, Gobernu Kontseiluak erabakitzen du azken onespena ematea ala ez, testu beraren 13. artikulua arabera. Eta horren arrazoia da, zioen azalpenean dienez: «*nahiz eta, legeak egiteko orduan, berez legegintza-ekimena denaren*

aurreko fasea baino ez den sartzan administrazio-prozeduraren baitan; izan ere, Eusko Legebiltzarraren Araudiak arautzen du berez legegintza-ekimena dena».

Aurrekoa gorabehera, iraungitako prozedura parlamentarioarekiko egiten ari garen bereizketa garbiak nahitaez dakar legezko betekizunei buruzko azterketa honek jarraitu beharra Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak (ABAJU) irmo ezarritako doktrinari, hots «*lege-aurreproiektuak egiteko prozedurak aztertzearen alorrean (...) aldatu egiten baita haren langintza aztertutako araua legea edo erregelamendua denean (...), XOEPLk berak zio-azalpenean adierazten duen moduan*» (129/2015 irizpena, EAeko Sektorre Publikoaren gardentasunerako, herritarren parte hartzerako eta gobernu onerako lege-aurreproiektuaren gainekoa; 55. paragrafoa). Erregelamendu-ekimeneakiko diferentziak, orain ari garenerako, nahitaezko malgutasuna sartzan du lege-aurreproiektuak prestatzeko prozeduraren azterketan, bai eta kutsu funtsean material eta antiformalista ere. Eta horren guztiaren arazoia da: «*Legegintza-prozedura hau legebiltzarrean hedatzen da bere zabalean, eta Konstituzioak (EK) edo Euskal Herriko Autonomia Estatutuak (EHAE), edo, batzuetan, lege organikoek baldintzak ezartzen dituzten kasu berezietan izan ezik, lege-proiektuek bete beharreko baldintza bakarra da beharrezko aurrekariekin batera bidaltzea Legebiltzarrera, hark bere iritzia eman eta erabakia hartu ahal izan dezan: gutxienez ere, memoria orokorra, finantzaketari buruzko eranskina eta kontrol ekonomikoko txostena —aurrekontuari karga edo zama dakarkioten proiektuetan—, kontsulta-organo honen irizpena, eta legeriaren arabera nahitaezko diren beste txostenak (Jaurilaritzaren Legearen 57. artikulua, eta Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133.2 artikulua)*» (120/2014 irizpena, Euskal Administrazio Publikoaren lege-aurreproiektuari buruzkoa, 85. paragrafoa).

Lege-aurreproiektuen izaera bereziak aukera emango luke are nahitaezko txostenen galdagarritasun hori ere erlatibizatzen. Konstituzio Auzitegiak uztailaren 29ko 108/1986 epaian adierazi zuenez, ezetsi egin baitzuen Botere Judizialaren Lege Organikoa aldatzeko lege organikoaren proiektua nahitaezko txostenik gabe aurkeztu izanaren aurkako errekurtso bat: «*aurrekari jakin baten faltak bakarrik izango du garrantzia baldin eta ganberei kentzen bazaie erabakirako beharrezko den irizpen-elementu bat; kasu honetan, ordea, berehala izan beharko zuten akatsaren berri, eta berehala salatu ganberen euren aurrean, eta errekurtsogileek ez dute inoiz alegatu hala gertatu zenik. Halako salaketarik ezean, nahitaez ondorioztatu behar da ganberak ez ziotela txostenari beharrezko irizpen-elementu iritzi erabakirako, eta Auzitegi hau ezin dela tartean sartu baloratzera irizpen-elementu batek parlamentariarentzat zer garrantzi izan zuen*». Eta, aurrerago, doktrina bera aplikatzen du Kongresuari Gobernuak lege-proiektuaren zioen azalpena eta azalpen-memoria bidali ez izanari dagokionez. Aurrekari horiek, egia esan, bidali egin ziren, baina berandu, errekurtsogileen ustez. Baina, faltan izango baziren ere, hau dio goi-azitegiak: «*Adierazitako akatsak Kongresuko diputatuen edo talde parlamentarioen eskubideak kaltetuz gero, orduan bakarrik izango zuen garrantzia, eta eragindakoek egintzak —egiazkoak izatekotan— guztiz ezagutzen bazituzten eta ez bazuten protestarik aurkeztu, ulertu behar da ez ziotela iritzi euren eskubideen lesio edo kalterik zegoenik, eta, akatsik izatekotan, Ganberak berak baliozkotu zuela. Horrenbestez, Auzitegi honek ezin dio ekin haren existentzia edo garrantzia aztertzeari*». Bestela esanda: Auzitegiaren ustez, Ganberak berak beharrezkotzat jotzen duena baino ezin da halakotzat jo.

Egia da, hala ere, gure ordenamenduan, Ganberako Erregelamenduak beren-beregi aipatzen dituela nahitaezko txostenak 133.2 artikuluan, eta horrek erabateko zilegitasuna ematen diola Ganberari txosten horiek eskatzeko bidaltzen zaion lege-proiektuaren onargarritasun-betekizun gisa. Horrek berriro garamatza XOEPLera eta haren exegesira, irakurketa malgu eta finalista batetik bada ere.

Berriz ere ABAJUren ildotik, “Lege-proiektuak egiteko prozedura aztertzeo —azterketa materiala da, eta funtsean, finalista—, XOEPLren jarraibideak sistematizatu ditu Batzordeak, eta honako fase hauek bereizi ditu: (i) hasierako fasea, ekimena proposatu duen organoaren barrukoa, helburu nagusizat duena hasierako testua finkatzea, hari eusten dioten arrazoiak kanporatzea, eta kasuan kasu beharrezkoak diren izapideetarako beharrezkoa den dokumentazioa egitea; (ii) prozedura irekitzeo fasea, arauak eragin diezaiekeen sektore eta administrazioak aintzat hartuta; (iii) txostenak —nahitaezkoak eta aukerakoak— egiteo fasea; eta (iv) amaierako fasea: ekimena bultzatu duen organoak, prozedura-izapide guztia ebaluatuta, behin betiko testua finkatu, eta azken dokumentuak prestatzea —prozedura balioesteko memoria laburra eta memoria ekonomikoa—” (129/2015 irizpena, EAeko Sektore Publikoaren gardentasunerako, herritarren parte hartzerako eta gobernu onerako lege-aurreproiektuari buruzkoa, 56. paragrafoa).

Hala ABAJUk nola Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritza honek beren-beregi adierazia dutenez (erregelamendu-ekimenei buruz, batez ere), legegintzaldi- eta kabinete-aldaketak ez dakar, berez, inola ere, arauak prestatzeo prozedurak iraungitzea, eta ez ditu baliogabe bihurtzen prozedura horien barruan egindako izapideak. Hartara, praktika arrunta da, hala LGAKZ honek nola ABAJUk onetsia, aurreko sailburu batek hasitako izapideak ontzat hartzea eta natural sartzea espedientean, hurrengo legegintzaldian aurreko sailburua ordezkaturako duenak Gobernu Kontseiluari bidal diezaion, onar dezan. Horrenbestez, legegintzaldi batean hasitako izapidetzeari jarraipena ematen zaio hurrengoan, etenik gabe (denen erakusgarri, gure kontsulta-organo gorenaren irizpenen artean aipaturako ditugu: 203/2009 irizpena, Euskal Autonomia Erkidegoko ardogileen alorrerako komunitateko laguntza-neurriak garatu eta aplikatzeko dekretu-proiektuari buruzkoa, 2. eta 37. paragrafoak; 217/2009 irizpena, fruta eta barazkien alorreko arautegi komunitarioa EAEn garatzea eta aplikatzea, eta alor horren inguruko laguntzen erregimena arautzeo dekretu-proiektuari buruzkoa, 1. eta 30. paragrafoak; 64/2013 irizpena, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari buruzko dekretu-proiektuaren gainekoa, 2. eta 34. paragrafoak).

Bestela esanda, izapidetze-egintza horien baliozkotasun juridikoaren gaiak ez duela zerikusirik egintza horiek legebiltzar-desegitea edo jaurlaritza berria eratzea baino lehenagokoak izatearekin ala ez izatearekin; izan ere, bakarra da Administrazioa, nortasun juridiko bakarra du bere egitura osorako eta funtzio guztietarako (JL, 53. artikulua, eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea —aurrerantzean, SPAJL—, Gobernua, haren titular den aldetik, aldatzea gorabehera. Hori hala bada, izapidetze-egintzen egiletzak, eta, beraz, haien baliozkotasunak, bere horretan iraungo dute, Exekutiboaren titularra aldatu bada ere.

Zentzu hertsian, ez da berriazko egintzarik behar aurreko legegintzaldian egindako izapideak «bihurtu», «kontserbatu» edo «baliozkotzeo» (figura horiek Administrazio Publikoaren Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean daude aurreikusita —aurrerantzean, APAPEL—, 50., 51. eta 52. artikuluetan, egintza jakin batzuen akatsak zuzentzeo neurri gisa), zeren eta arauak prestatzeo prozeduraren barruan egindako izapide horiek, legegintzaldia aldatzen denean, ez baitira deusez bihurtzen, ez baitute baliorik galtzean (APAPELen 47., 48. eta 49. artikulua). Eta aurreko hori, XOEPLen azpian datzan ekonomia prozesalaren logika gorabehera, zeinaren arabera ahal den neurrian eutsi behar zaion ordura arte egindako jarduketan balioari (XOEPLen 4.2 artikulua).

Ondorioz, eta «kontserbazioeko ekonomia prozedimental» hori beharrezko ez denez, prozedura bere faseetan bultzatzeko izapide egokiak baino ez ditu egin beharko organo eskudunak, dela prozeduraren jarraipena aginduta dela XOEPLk eta JLk markatzen dituen

prozedura-mugarrietatik edozein baliatuta (hasiera-agindua, aldez aurreko onarpen-agindua, ABAJUri irizpena eskatzeko agindua, arauaren behin betiko testua proposatzea Gobernu Kontseiluari...).

Izapidetzea bultzatzeko egintza horiek berez dakarte aurreko izapidetzea onartzea, eta, hortaz, haren efikazia formal eta materialaren balorazio bat, zeina ez baitzaio lotu behar espedientearen betetze formalari bakarrik, izapideen benetako erabilgarritasunari ere begiratu behar zaiolako, ea baliozkoak diren erabakia hartzen duen organoari irizpen-elementu egokiak emateko araua une bakoitzeko egoerara egokitze aldera, organo hori Gobernua izan, erregelamendu-arauen kasuan, edo Parlamentua izan, lege-proiektuen kasuan.

Horrenbestez, erabaki nahi bada egokitzen jotzen ote den aurreko prozedura baten une jakin batetik aurrerako izapidetzeari jarraipena ematea, berriz ere hasi beharrik izan ez dadin, edo jada eginda dauden izapide guztiak ontzat eman daitezen, **prozeduraren inguruabar guztiak hartu beharko dira kontuan**.

Inguruabar horietako bat izango da ikustea arauak aurreko izapidetzerik izan ote duen, jarduketan bikoizketa ekarriko lukeena, izapideak beharrik gabe ez errepikatzeko eta prozedura bizkortzeko, edota urgentziatzko arrazoi behar bezala egiaztatuek justifikatzen ote duten izapideren bat bertan behera uztea, aurretik egin gabe bazegoen ere; betiere, lege-maila edo -izaera duen arauaren batek izapide hori derrigorrean egitekoa dela arautzen ez baldin badu (ABAJUren 129/2015 irizpena, EAEko Sektore Publikoaren gardentasunerako, herritarren parte hartzerako eta gobernu onerako lege-aurreproiektuaren gainekoa, 55., 59., 63. edo 85. paragrafoak).

Kontuan hartu beharko da, halaber, ea bien bitartean arau- edo gizarte-aldaketa garrantzikorik gertatu den ala ez, ordura arte egindako izapideek gaurkotasuna edo informazio-balioa galtzeko moduan.

Ildo beretik, agerikoa da, era berean, arauak prestatzeko prozedurak dituen helburu materialak alde batera utzi gabe, izapidetze administratiboa erraztu ala ez garrantzizko irizpidetzat hartu behar dela balorazio hori egiteko orduan; izan ere, araua prestatzeko prozedurari berdin-berdin aplikatzen zaizkio prozedura horretatik aterako diren arauari aplikatzen zaizkien erregulazio onaren printzipioak, halako moldez non «Legegintza-ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala baliatzean, administrazio publikoek printzipio hauen arabera jokatu behar dute: premia, efikazia, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta efizientzia» (APAPELen 129. artikulua).

Nolanahi ere den, orain arte esandakoa ondo aplikatzen zaie Parlamentura bidali aurreko administrazio-prozedurako egintza guztiei, hasiera-agindutik Gobernu Kontseiluaren onespenera arte, biak barne, eta guztiei egokitzen zaie administrazio-egintzen baliozkotasun juridikoa mantentzea eta egintzen kontserbazioaren printzipioa, bidalketa-egintza bera ere barruan hartuta; horrenbestez, haien guztien indarraldi materiala baino ez da baloratu behar, aurreko paragrafoetan esandakoaren ildotik.

Bada, «lege-aurreproiektu eta -proiektuez» ari garela, Parlamentura bidaltzea beste fase bat baitute, prestatze-prozedurari gero erantsia, balorazio hori berdin egokitzen zaio sailburuari (ardura edo erantzukizuna izango baitu aurreko prozeduran eta Gobernu Kontseiluari helarazteko erabakian) eta Gobernuari berari, Ganberaren aurreko legegintza-ekimenaren titular den aldetik (balorazio bera egin beharko du proiektua onartzeko garaian, eta legegintza-organuari, nahitaezko dokumentuekin batera, noiz bidali behar dion edo beste jarduketa osagarriren bat

egitea erabakitzeke unean, XOEPLren 13. artikulua xedatu bezala). Beraz, organo horiei egokituko zaie, bakoitzari bere unean, horri buruzko edozein zalantza argitzea, barne hartuta, beharrezko izanez gero, beren zerbitzuetatik edo beste organo batzuetatik txosten egokiak eskuratzea, edo beste izapidereen bat eskatzea edo jada eginda dagoen bat errepikatzea.

Eta aurreko guztia, ahaztu gabe, lehenago aipatu dugunez, erlatiboki haztatu beharko litzatekeela ordenamenduak gerora izan dezakeen aldaketa baten garrantzia edo bitartean gerta litekeen beste edozein inguruabarrena, proiektuari eragingo liokeena; izan ere, «*lege-proiektua*», Ganberara bidalita eta prozedura parlamentaria bihurtuta ere, egoitza hartan izapidetu behar da, eta, izapidetze horretan, azken onespina jaso eta lege bihurtu aurretik, zuzenketak jaso ditzake Ganberan, halako moldez non une horretan ere egin daitezkeen egoki irizitako egokitzapen edo doiketak.

Txosten hau egiten ari gataizkion kasu zehatzari dagokionez, txosten honetatik atera badaiteke ere aurreko izapidetze-egintzen baliozkotasun formalaren baiespena, horrek ez du kentzen sail sustatzaileak, prozedura bultzatzeko ardura duen aldetik eta gaian espezializatutako ezagutza sektorialaren jabe den aldetik, gogoeta egitea funtsezko gaiari buruzko baiespen hori zuzena den ala ez. Horrek ekarriko luke, adibidez, gogoeta egitea ea Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen jasagarritasun energetikoaren lege-proiektuaren testuari —Gobernu Kontseiluaren 2016ko uztailaren 19ko Erabakiz onartu zuten, eta urte bereko uztailaren 21ean bidali Eusko Legebiltzarrera— eragin dion ala ez otsailaren 12ko 56/2016 Errege Dekretuaren erregelamendu-garapenak. Errege-dekretu horrek, gogora dezagun, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren energia-efizientziari buruzko 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Zuzentarauaren transposizioa egiten du, energia-ikuskaritzei, energia-zerbitzuen hornitzaileen eta energia-ikuskatzaileen akreditazioari eta energia-hornikuntzaren efizientzia sustatzeari dagokienez.

Jada ohartarazia dugunez, txosten honek ez du objektutzat oraingo galderaren xedeko proiektu zehatzaren analisi materiala, funtsaren analisisia alegia. Hala ere, harekiko hasierako hurbilketa batean, eta oinarri bakartzat hartuta presuntzio bat —hots, bidali diguten kontsultaren euskarri dela 2015ean onartutako testua berrabiatzeko abagunearen alde aurreko ponderazioa—, ez du ematen funtsezko arrazoirik edo arau-aldaketa garrantzikorik dagoenik —bere garaian egin ziren egintzen baliozkotasun formal jada aipatua gorabehera— gaur egun galarazteko moduan 2015eko abenduaren 3an onetsitako testu beraren onarpena.

4. AHOLKU BATZORDE JURIDIKOAREN IRIZPENA ETA KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOAREN TXOSTENA IZAPIDE ESPEZIFIKO GISA.

XOEPLren bigarren xedapen gehigarriak, arrazoi historikoak direla eta (Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren azaroaren 24ko 9/2004 Legea edo EABAJUL aldarrikatu baino urtebete lehenago onartu zen) apirilaren 13ko 187/1999 Dekretura jotzen badu ere, Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoa sortu eta arautzekoa bera, EABAJULEk arautzen du (3.1 artikuluan hain zuzen ere), XOEPLtik kanpo, baina XOEPLra jota, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak (ABAJU) irizpena eman beharri dagokiona.

Aipatu artikulua araberak, ABAJUri «*kontsultatu behar*» zaizkion gaietako bat da «*lege-aurreproiektuak, horien edukia eta helburua direnak direla ere...*» (salbuespen dira autonomia-erkidegoko aurrekontu orokorre buruzkoak, eta baliabideen banaketarako eta foru-aldundien ekarpenak zehazteko metodologia ezartzen dutenenak). Honaino, gainerako izapideei buruz orain arte esandakoa berdin aplika dakioke kontsulta-organo gorenaren irizpenari, zeinaren

baliozkotasun juridikoa ez baita aldatzen Gobernuak aldatzeagatik edo espediente parlamentarioak irautzeagatik ganbera desegitearen ondorioz.

Hala ere, irizpen horren izaera bereziagatik, jurisprudentzia konstituzionalak berretsi baitu, atal berezia jarri behar zaio gure txostenean. ABAJUk berak 084/2003 irizpenean azaldu zuenez, Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoaren lege-aurreproiektu buruzko irizpenaren 25. paragrafoan alegia, jurisprudentzia konstituzionalak Espainiako Konstituzioaren (EK) 107. artikuluari egin dion interpretazioa «*Konstituzio Auzitegiaren aburuz, "aholkularitza edo kontsulta funtzio gorenaren" nolabaiteko konstituzionalizazio bat da, ez organoarena, Estatu Kontseiluarena. Administrazio aktiboarentzako aholkularitza gorena da, beraz, artikuluko horren bitartez konstituzio-mailako tresna bihurtzen dena, "interes orokorraren eta legezkotasun objektiboaren berme garrantzi handiko, eta, beraz, administrazio-prozedura batean alderdi direnen bidezko eskubide eta interesena ere*». Auzitegi horrek dioenez, «...oso funtzio kualifikatua da, herri-administrazioen araubide juridikoaren oinarritzako arauaren kategoriaren barruan edo administrazio-prozedura erkidearen barruan sar daitekeena» (EKren 149.1.18 artikulua)».

Izapide horren izaera berezi eta kualifikatuak justifikatzen du Parlamentuaren Erregelamenduaren 133. artikulua berariaz aipatzea ABAJUren irizpena (KEBen kontrol ekonomikoari buruzko txostenarekin batera) ganberara bidaltzen den lege-proiektu orori erantsi beharreko dokumentuen artean. Eta arrazoi berak azaltzen du ekainaren 2ko 8/2016 Legeak, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legea aldatzekoak, JLri sartutako aipamena, idazkera hau eman baitzizkien JLren 56. eta 57. artikuluei.

56. artikulua

1. Jaurlaritzak, Aholku Batzorde Juridikoari igorri behar zaizkion lege-aurreproiektuak eta dekretu-proiektuak egiteko hasierako fasean, xedapenaren testua bakarrik igorriko dio Eusko Legebiltzarrari, behin prozedura hasteko agindua eman duen organoaren alde aurreko onespena izanda.

2. Era berean, Aholku Batzorde Juridikoari igortzen zaion dokumentazio bera, aldi berean, Eusko Legebiltzarrari ere igorriko zaio, legebiltzar-taldeek dokumentazio hori ezagut dezaten.

3. Jaurlaritzak erabaki beharrezko Lege-Egitasmatarakoak eta Dekretu-Egitamutak Jaurlaritzako Idazkariari bidaliko zaizkio, banatu ditzan. Doazkien Sailek Jaurlaritzak berak ezarritako moduan idazkiek diotenarekiko onarpena adierazi dezatenean, Gai-zerrendan sartuko dira. Bat etorri ez edo baldintzaren batekin bat badatoz, Lehendakariari dagokio arazo hori Batzarrek aztertze gaitan sartu edo ez sartu erabakitzea.

57. artikulua

1. Eusko Legebiltzarrari aurkezten zaizkion lege-proiektuekin batera, Aholku Batzorde Juridikoaren txostena ere igorriko da eta, halakorik bada, txosten horretara egokitzeko oroitidazkia.

2. Lege-Egitasmoei Diruegitamurako zorpideren bat badario horrentzako dirubideei buruzko eranskin bat eraman beharko du eta, hori, Legebiltzarraren Araudiak Lege-Egitasmoei buruz agindu dezanez eztabaidatuko eta bototara jarriko da.

Beraz, bidezko da galdetzea ea Parlamentuari komunikatzeko behar berezirik sortzen den artikuluko horien ondorioz, aurreko legegintzaldietan prestatutako lege-proiektuen izapidetzea erreskatatu nahi denean. Hasteko, kasu hauek bereizi behar dira: (i) segida ematea alde aurretik hasitako izapidetze bati, artean testuaren alde aurreko onarpena egin gabe zeukana (kasu horretan, JLren 56.1 artikulua eskatutako komunikazioa egin beharko zen), edo ABAJUri irizpena eskatzeko izapidea egin gabe (kasu horretan, JLren 56.2 artikulua xedatutako guztia

bidali beharko zen Parlamentura), eta (ii) aurreproiektu edo proiektu batek bakarrik falta izatea Gobernu Kontseiluaren onarpena edo organo horrek erabakia hartzea proiektua Parlamentura bidal dadin, hala lehenengo aldiz nola aldez aurretik egindako bidaltze-erabaki bat errepikatuz (kasu horretan, JLren 53.2 eta 57. artikuluek eta Parlamentuaren Erregelamenduaren 133. artikulua aurreikusitakoen barruan egongo ginateke).

Era berean, dena delako aurreproiektu edo proiektuak ABAJUren irizpena eginda duenean, EABAJULen 29. artikulua aurreikusi duena ikusita, hau ere galdetu daiteke: aurreko kasuetan nahikoa ote den aurreko legegintzaldi batean emandako irizpena eranstea, ala beste irizpen bat eskatu behar ote den.

Xedapen horren arabera: «Irizpena eman eta gero, irizpenaren aztergai garrantziko aldaketak egiten badira eta, ondorioz, batzordeak egindako iradokizun edo proposamenekin bat ez datozen edo horiek gainditzen dituzten eduki berriak jasotzen badira, aldaketa horiei buruzko kontsulta berria egin beharra dago». Beraz, arauaren testutik ondoriozta daiteke ezen, irizpena aurreko kabinete baten agintaldian emana izan ala ez, **bakarrik egin beharko dela beste azterketa bat baldin eta Gobernu Kontseiluari, onartu edo bidal dezan, berriz aurkeztuko zaion lege-proiektuaren proposamenak «garrantziko aldaketak» baditu**. Zehaztu gabeko kontzeptu juridikoa da hori, eta zehaztapena eman nahi izanez gero, artikulua dioenari jarraiki eta ABAJUk berak azaldu duenaren ildotik, zera begiratu beharko da: funtsezko aldaketa horiek aurreko irizpenean aztertu zenarekin duten lotura.

Horri buruz, egoki da begiratzea ABAJUk berak zer doktrina duen EABAJULen 29. artikuluari eman behar zaion interpretazioari buruz; egin-eginean ere, doktrina sendo-sendoa da, haren irizpenetan eta ez onartzeko erabaketan ezarria. Denen erakusgarri, txosten honetara ekarriko ditugu ABAJUren osoko bilkuraren 4/2017 Erabaki hartu berriko hitzak, 2017ko apirilaren 26ko bileran eman baitzuen irizpen-eskari bat ez onartzean.

7. Edo, bestela esanda, 10/2000 irizpenean adierazi genuenaren ildotik, Batzordeak berriz aztertu beharko du gai hori, baldin eta lantze berri horretatik ateratzen bada aurreko txostenean aztertutako elementu edo alderdi substantiboez bestelakorik badela, eta duten garrantziagatik, beste azterketa bat eskatzen dutela: orduan bakarrik, eta ez beste inoiz.

8. Doktrina hori bat dator Auzitegi Gorenak Estatu Kontseilua dela eta ezarri duen doktrinarekin, eta, beraz, guztiz aplikagarri zaie Batzorde honek esku hartu behar dituen kasuei.

9. Doktrina horren ildotik, laburbilduta, beste kontsulta bat beharko da "...Estatu Kontseiluaren irizpenaren ostean sartutako berrikuntzak ez dituen hark iradoki, kontsultaren nondik norakoarekin zerikusirik ez dutenean, eta, gainera, funtsezko garrantzia dutenean" (AGE, 1993ko maiatzaren 27koa —RJ 1993\102040—).

10. Kasu horiek zehaztera etorri dira beste epai batzuk, hala nola Auzitegi Gorenaren 2009ko martxoaren 10ekoa (RJ\2009\5110), zeinak azpimarratzen baitu "ez dela beharrezko Estatu Kontseiluari beste kontsulta bat egitea testuari ukituak egiten zaizkionean edo funtsezkoan ez diren aldaketak sartzen (...), ez eta proiektuaren eta behin betiko testuaren arteko bat ez etortzeak prestatze-prozeduraren ondorio logikoak direnean ere, prozedura horretan txostenak ematen baitituzte zenbait organok, eta aldaketak ekar ditzakete azkenean onartzen den xedapenean. Gainera dezagun, Salaren doktrinak berak azpimarratu duenez, xedapen orokorrak egiteko ezarri diren prozedura-bermeen interpretazio funtzional eta teleologikoa egin behar dela, berme horien justifikazioa ez baita haiek egitearen formalismo hutsa, baizik eta duten helburua edo xedea, zeinen balorazioan kontuan hartu behar baitira dena delako xedapen orokorraren espezialitateak (...)."

11. 2009ko martxoaren 10eko AGE berak gogoratzen duenez, Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia da (2006ko martxoaren 8ko AGEa) xedapen orokor baten behin betiko testuari sartu zaizkion aldaketak funtsezkoak ez direnean ez dela beharrezkoa berriz ere entzunaldia eskaintzea xedapenaren xedearekin zuzeneko zerikusia duten interes legitimoak ordezkatzen dituzten elkarte, korporazio edo erakundeei, ez eta Estatu Kontseiluari beste txosten edo irizpen bat eskatzea ere, "besteak beste, haien iritzia ez delako loteslea, halako moldez non, aldatetari begiratzuz gero hala ikuspegi erlatibo batetik txostendutako testuaren aldaketa kontuan hartuta, nola absolututik berez duen garrantzia gogoan, ez dion funtsezko aldatetarik ekartzen alde aurretik entzunaldiaren edo txostenaren izapidearen pean jarritako ordenamenduari. Beraz, sartutako erreformarekiko entzunaldirik edo txostenik ezak ez dakar erreformaren erroto deuseztasuna; izan ere, xedapena behin betiko idazteko ahala duenak eskueran izan du kontsulta egin zaien erakunde, korporazio, elkarte eta organismoen irizpidea edo argibidea, horixe baita, azken buruan, lortu nahi den helburua (...) erregelamenduak prestatzeko prozedura ezartzen denean (...)"

12. 2001eko urtarrilaren 31ko AGEa ere aipatzen du, 1993ko maiatzaren 27ko epaiari erreferentzia eginez, izan ere, uztartu egin behar dira, alde batetik, irizpen horren amaiera-izaera, planteatutako gai guztien eta alde aurretik emandako berariazko txosten guztien sintesi-juzgu den aldetik, eta, bestetik, Gobernuaren erregelamendugintza-ahalaren egikaritzea (...). Bada, Gobernua ahal horretaz gabetuko litzateke behin betiko erabakian orpoz orpo jarraitu behar izanez gero irizpen horri; izan ere, irizpenerako bidalitako proiektuan sartu gabeko gaiak arautuz gero, edo proiektuaren ordenazioa guztiz edo funtsean diferente izanez gero, Estatu Kontseiluak berak iradoki gabe, orduan bakarrik eskatuko beharko litzateke beste txosten bat alderdi horiei buruz, erregelamenduak egiteko ahalaren titularrak bere esku baitu azken erredakziorako egoki iriztitako erreformak sartzea Estatu Kontseiluari bidalitako testuan, adierazitako muga bakarrarekin (...)"

13. Aurreko doktrina horrek indarrean dirau, erabat, 2016ko abenduaren 22ko AGEa irakurriz gero ondoriozta daitekeenez (RJ 2017/106).

14. Bidezko da, beraz, kontsultarako aurkeztu diguten proiektuaren testua aztertzea, berrikuntzek aurreko irizpenaren gogoetekin duten loturaren irizpidearen argitan aztertu ere; hau da, ea Batzardearen irizpeneko iradokizunetatik ondorioztatzen diren ala, irizpenetik aldentuta, funtsezko garrantzia duten, beste nahitaezko esku-hartze bat behartzeraino.»

Atal honetan aipatu behar da, baita ere, Parlamentuaren Erregelamenduaren 133. artikulua beren-beregi aipatutako txostena den aldetik, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak «lege-aurreproiektu»ei egin behar dien ekonomia- eta arau-kontrolari buruzko txostena, hala ezarri baitu Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia kontrolari eta kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legeak (EKKL) 25.1 artikuluan.

Txosten horrek, ABAJUK egin beharrezkoa baino lehenagokoa izan arren (EKKLren 27.1 artikulua), berebiziko garrantzia du, baita ere, zeren eta «lege-aurreproiektu»ek jarduera ekonomikoan izan dezaketen eduki edo eragin garrantzizkoak txosten hori nahitaez eman beharra ekar baitezake (14/1994 Legearen Erregelamendua onartzen duen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 41. artikulua) edo proiektua jendaurrean edo entzunaldiaren pean jarri beharra (APAPELen 133.4 artikulua).

Ekonomia- eta arau-kontrolari buruzko txosten horrek zerikusi handiagoa du «lege-proiektu»aren testuinguruarekin testuarekin berarekin baino, txostenaren helburu nagusia baita iritzia ematea ea testuan aurreikusitako xedapenek zuzenean edo zeharka eragiten dioten Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren berezko gaiei, aurrekontu-araubideari eta gastu eta sarrera publikoaren exekuzioarenari; hain zuzen ere, berebiziko garrantzia du honi buruzko iritzia

ematea: «arauak edo xedapenak aldi-aldian indarrean dagoen Euskadiko Diruzaintza Nagusiaren jaurbidean, hau da, ondarearen, kontabilitatearen, kontratazioaren, berezko zergen, zorren edo bermeak emateko jaurbidean duen eragina» (EKKLren 26.1.b artikulua) edo «proposatutako arauaren edo xedapenaren finantza-arrazoizkotasuna, modu zenbakarrian.» (EKKLren 26.1.d artikulua). Azken alderdi horrek, beste ñabardura askoren artean, badu bere eragina «Administrazio publikoen finantza-egonkortasun» deritzonaren arautegian.

Egia da nahitaezko txosten hori kontrakoa eta eragozlea izanda ere, «lege-aurreproiektuak» bere prozedura-itera jarrai dezakeela sailburu eskudunak Gobernu Kontseiluari helarazi arte: Gobernu Kontseiluak askatasun osoz erabaki dezake onartzea ala ez onartzea, txosten honetan zehar adierazi dugunez.

Horrenbestez, bidezko da errepikatzea txosten honek erantzuna eman nahi dion funtsezko galdera: KEBek berriro eman behar al du txostena Gobernu Kontseiluak jada onartutako «lege-proiektu» bati buruz, alde batera utzita Gobernu Kontseiluak lege-proiektua Parlamentura bidaltzeko erabakia hartua izan ala ez? nahikoa izango litzateke aldez aurretik emandako KEB txostena, nahiz eta, Parlamentura bidali ondoren, espediente parlamentarioa iraungi Ganberaren desegitea dela eta?

Ekonomia- eta arau-kontrol hori erregulatzen duten arauak ez diote berariaz ezer beste txosten baten beharri buruz. Egia esan, hauek baino ez ditu aipatzen EKKLren 27.1 artikulua amaiara aldera: ABAJUk irizpena eman behar dizkien arau-proiektuen kasuak, ABAJU baita iritzia ematen azkena, «...Kontrol Ekonomikoko Bulegoari jakinarazi beharko zaizkio organo aholku-emaile horren irizpenak jasotako iradokizun eta proposamenen ondorioz lege-aurreproiektuetan eta arau-proiektuetan egin daitezkeen aldaketak, onartu baino lehen.».

Hau da, «jakinarazi» baino ez da egin behar sartutako aldaketa, beste izapiderik gabe. Ez da txosten berririk formalizatu behar, hargatik eragotzi gabe Ogasunaren alorreko eskumena duen sailburuak aldaketa horien berri izatea sailaren barne-bidetik eta bere gogoetak egitea Gobernu Kontseiluan.

Ondorioz, eta kontuan hartuta edozein arautegik garrantzizko ondorioak izan ditzakeela ekonomian, txosten hau egiten ari denaren ustea da atal honen aurreko paragrafoetan adierazitakoaren arabera jokatu behar dela, halako moldez non (i) ABAJUk ez badu bidezkoztat jotzen iritzia ematea Gobernu Kontseiluak onartutako lege-proiektu bat Parlamentura berriro bidaltzeari buruz, hain gutxi ematen duen bidezko KEBek emateak, eta (ii) ABAJUk erabakiz gero lege-proiektu horri buruzko irizpena eman behar duela, ez duen bidezko ematen KEBek bere iritzia emateak, hargatik eragotzi gabe ABAJUren irizpena edo iritzia KEBi komunikatzea, aldaketekin batera —halakorik sartuz gero—, legezko ondorioetarako.

Aurreko guztia, deusetan galarazi gabe, 14/1994 Legearen Erregelamendua onartzen duen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 41.2 artikuluaekin bat etorrira, lege-aurreproiektua KEBera bidali beharra, izapidearen berri izan dezan eta eduki ekonomikoa duen ala ez balora dezan.

5. LEGE-PROIEKTUEN ETA LEGE-AURREPROIEKTUEN ARTEKO BEREIZKETA ETA GANBERARA BIDALTZEKO EGINTZA

Gure JLren arabera, sailburuen eskudantzia da Jaurlaritzari aurreproiektuak aurkeztea; izan ere, *Jaurlaritzak onar ditzan proposatu beharko dira, lege-proiektu gisa* (JLren 26.8 artikulua, JLren 55. artikuluaekin lotuta). *Lege-aurreproiektuak «Gobernu Kontseiluari aurkeztuko zaizkio, azter ditzan; aztertzen diren bilkuran bertan erabakiko du haiek behin betiko onartu edo ez, edo,*

bestela, azken idazkera egiteko kontuan hartu beharko diren irizpideak ezarriko ditu, bai eta, hala balegokio, behin betiko onartu bitarteko bidean egin beharreko jarduketak ere» (XOEPLen 13. artikulua). Beste alde batetik, Jaurlaritzari dagokio «Legebiltzarrerara bidaltzeko Lege-Egitamua onartzea edo horiei atzera eragitea, Legebiltzarraren Araudiak ezarri ditzan modutan» (JLren 18. artikulua).

Egin-eginean ere, hala lege-aurreproiektuek duten berezitasuna, erregelamendu-ekimenen izapidetzearekin konparatuta, nola Gobernu Kontseiluak aintzat hartu beharra, espezialitate-plus bat dira izapidetzean, XOEPLk berak aitortua, 13. artikulua sartu baitu III. kapituluaren barruan, «Xedapen Bereziak». Eta aurreko hori, lege horren Zioen Azalpenak aipatzen duen bezala: «Legeen garrantzi berezia dela eta, lege-aurregitasmoak aztertzeko berariazko izapide bat ezarri da Jaurlaritzaren Kontseiluarentzat. Horren helburua da legegintzako ekimena erabili behar duen organoak, artikuluka banatutako testu bat aurrean izanez, legea egiteko prozeduraren planifikazioa bideratzea eta haren ardura bere gain hartzea, ondorengo entzunaldi-, kontsulta- eta txosten-izapideek ekar ditzaketan emaitzak gorabehera.».

Honaino helduta, bidezko da berriro galdetzea zer alde edo diferentzia juridiko dagoen hauen artean: alde batetik, «lege-aurreproiektua», izapidetze administratiboaren xedekoa eta «lege-proiektu» gisa onartua zein ez, eta, bestetik, Parlamentura bidaltzen den «lege-proiektua». Hasteko, argi utzi behar dugu txosten honetarako ez dela bereziki garrantzizkoa «aurreproiektuen eta «proiektuen» artean egin ohi den bereizketa nominala –goian aipatu ditugun gure JLren artikuluetatik atera daitekeenez, EAEn ordenamenduak «aurreproiektu» esaten dien sailek prestatutako testuei, zeinak Jaurlaritzari aurkezten baitzaizkio «lege-proiektu» gisa onar ditzan, halakoak bihurtzen baitira organo horren onespina jasotzen duten unean—. Garrantzizkoagoa eta funtsezkoagoa da, ordea, bereizketa hau: alde batetik, lantze administratiboaren faseko «testua», Gobernu Kontseiluaren onespina buru ematen diona, eta, bestetik, «gerora Parlamentura bidaltzen den dokumentua», Exekutiboak legegintzako ekimenerako duen ahala baliatuta, izapidetze parlamentarioaren objektu bihurtzen baita ondoren behin betiko.

Horri buruz, bada doktrina-dokumentazio ugaria, baina, gaur egun —alde batera utzita exegesi jakintsuagoak—, nahikoa argigarria da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 127. artikulua xedatu duena, hau dio-eta «Legegintza-ekimena eta lege-mailako arauak emateko ahala» izenburuaren pean:

«Nazioko Gobernuak Konstituzioan aurreikusitako legegintza-ekimena baliatuko du, lege-aurreproiektuak prestatuz eta onetsiz eta gero lege-proiektuak Gorte Nagusietara igorritz.

Autonomia-erkidegoetako gobernu-organoei Konstituzioan eta beren autonomia-estatutuetan ezarritako moduan baliatuko dute legegintza-ekimena. (...)»

Nahiz eta artikulua horren lehenengo zatia jo daitekeen Estatuaren Administrazio Orokorren eremurako aplikazioa besterik aurreikusi ez zaien horietakotzat (ez litzaioke, beraz, aplikagarri izango Euskadiko Autonomia Erkidegoari APAPELen azken xedapenetatik lehenengoaren terminoetan), puntu horretan ez dago kontraesanean gure JLrekin. Hau da: gobernu-organoei bi fasetan egikaritzen dute JLren 16. eta 18.a) artikuluek Eusko Jaurlaritzari ematen dioten legegintzako ekimena: lehenengoa, barrukoa, *lege-aurreproiektuak prestatuta eta onetsita*, eta bigarrena, gerokoa, *lege-proiektuak* Eusko Legebiltzarrerara bidalita.

Bi fase horiek —eta haien izapidetzeetatik ateratzen den produktuak— badute, zalantzarik gabe, bere garrantzia, Exekutiboaren jarduketaren dikotomia islatzen baitute bere fazeta bikoitzean; izan ere, Exekutiboa, alde batetik, zuzendaritza politikoko organoa baita, eta, bestetik, egitura administratibo publikoaren buru egiten duen organoa.

Hartara, «*lege-aurreproiektu*» bat barneko jarduketara administratibo baten fruitutzat jo daiteke, diskrezionalitate- edo zuhurtziarakotasun-irizpide garrantzizkoekin, baina programazioaren (arau-plangintza: 132. art., APAPEL) eta berariazko prozedura baten mende (XOEPL), zeinaren faltak deuseztasun-akatsak ekar baititzake —are bide juridikzionalako aurkaratzea—. Hain zuzen ere, Gobernu Kontseiluaren onarpenak («*lege-proiektu*» bihurtuta, gure JLren terminologiaren arabera) amaierako egintza juridikoaren izaera ematen dio —13. art., XOEPL—, eta une horretan bertan bukatuko lirateke haren izapidetzea eta ondorioak.

Jakina, «*lege-aurreproiektuen*» azken helburua onespren hutsetik harago dago, edo XOEPLk arautzen duen prozedura-*iteraren* amaieratik urrutirago. Hau da, Gobernu Kontseiluaren zerbitzu administratiboetan (edo haren Idazkaritzan) «*onartutako lege-proiektu*» gisa onartua izatetik eta herbal egotetik harago doa. Ordenamendu juridikoa alor jakin batetan —lege-aurreproiektuaren xedea eta helburua— eraldatzeko asmoa du, Gobernu-programa batean oinarrituta, zeina Gobernuak zerbitzua ematen dien gizartearen eta herritarren benetako eskarien arabera definituta baitago.

Asmo berritzaile horren ondorio da «*lege-proiektua*» Parlamentura bidaltzea, eta egintza hori «*egintza politiko*» esaten zaien horien barruan dago, eta horien gaineko ahala ez dago inon araututa, gaur egun, Administrazio Zuzenbidean. Eta hori guztia, proiektua Parlamentura nola bidali behar den eta zer dokumentazio erantsi behar zaion arautzen duten xedapenak hain daudelako bi mundu horien arteko mugan, ezen Zuzenbide Parlamentariokotzat jo daitezkeen (JLren 57. artikulua, Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikulua ildokoa; JL ren 58. artikulua, prozedura parlamentarioaren beraren erregulazio gisa).

Ildo horretatik, bidaltzeko egintzak *plus* moduko bat ematen dio berez perfektua den «*lege-proiektu*» Gobernuak onartuari, helburu jasoago bat, alegia: edukia ematea Gobernu-programaren barruko legegintza-programari, ordenamendu juridikoak Gobernuari aitortzen dion legegintzako ekimenerako ahala egikarituta.

Gobernu Kontseiluak «*lege-proiektu*» bat Parlamentura «*bidaltzeko erabaki*»aren izaera «*politikoa*» Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziak berretsita dago; egin-eginean ere, 1990eko martxoaren 15eko epaian (RTC 1990, 45), LEGUINA VILLA jauna izan baitzen ponente edo txostengile, hau agertzen da:

«... Gobernuak, zeinaren funtzioak edo eginkizunak Konstituzioaren 97. artikuluan zerrendatzen baitira, ez ditu jarduketara guztiak Administrazio Zuzenbidearen mende. Zalantzarik gabea da, adibidez, ez dagoela Administrazio Zuzenbidearen mende, oro har, beste organo konstituzional batzuekiko harremanari buruzkoa, hala nola lege-proiektu bat Gorteetara bidaltzeko erabakia eta antzeko beste batzuk, zeinen bidez Gobernuak betetzen baitu, era berean, zuzendaritza politikoaren funtzioa, EKren 97. artikulua aipatuak ere ematen diona. Gobernuaren halako jarduketan barruan daude, kontrol judizialaren mendeko administrazio-jarduketaz bestelakoak baitira, Gobernuari dagokion ekintzaren alor bati edo beste batzuei lehentasuna emateko erabakiak, non eta lehentasun hori ez datorren legeek xedatu dutena betearazteak behartuta».

Ildo berberetik jo du Auzitegi Gorenak bere jurisprudenzian, zeinak, Estatuko botereen arteko harremanen kasuetara lerratua funtsean, emanak baititu erabaki batzuk, legegintzako ekimena egikaritzeko eskaria edo egikaritzea bera ukatzeko kasuei buruzkoak (AGEak: 1990eko martxoaren 13koa [RJ 1990, 1938]; 1990eko urriaren 25koa [RJ 1990, 7972]; eta 1991ko abenduaren 10koa [RJ 1991, 9254]).

Ondorio batzuk atera daitezke jada aurrekotik:

- I. Lege-aurreproiektuen izapidetzeari, lehen batean, ez dio eragiten Parlamentua desegiteak dakarren prozedura parlamentarioen iraungitzeak.
- II. Ezin da «alde batera utzi» XOEPLk ezarritako izapidetzea, baina, ahal den neurrian behintzat, eta helburu materialari kalterik egin gabe, ulertu behar da aurretik egindako izapideek erabat eusten diotela beren balioari, hargatik eragotzi gabe kasu bakoitzean prozedurari bultzada ematea egokitzen zaion organoak bere balorazioa egin beharra, kontuan hartuta, gainera, prozedurari, kasu horietan, kontsiderazio malgua eta antiformalista zor zaiola.
- III. Gobernu Kontseiluari aurkeztutako «lege-aurreproiektu»ak, hark «lege-proiektu»tzat onartzen baditu, eta berdin dio Parlamentura bidaltzen dituen ala ez izapidetzeak Parlamentuan jarrai dezan, administrazio-egintza baliodunak dira (ordenamendu juridikoa berritzeko efikaziarik ez badute ere) eta Gobernu Kontseilu horrengan geratzen dira, inongo iraungitze-datarik gabe, buru ematen baitiote XOEPLk aurreikusitako prozedura-iterari.
- IV. Gobernu Kontseiluak «lege-aurreproiektu»ari aintzatespena eta azken onespina ematea lehenago gerta daiteke «lege-proiektu» gisa Parlamentura bidaltzea erabakitzea baino, edo biak gerta daitezke aldi berean.
- V. Behin Gobernu Kontseiluak onartuta «lege-proiektu» bat, Gobernu Kontseiluaren funtzio administratiboaz gaindikoa da Parlamentura bidaltzeko erabakia: «egintza politikoa» da, eta, beraz, ez dago inongo arau-aginduren mende, abagune-irizpideei lotua baizik, hargatik eragotzi gabe bidalketa horrekin batera joan behar duen dokumentazioa zehazten dituzten arauak, zeinek, betiere, Ganberako Mahaiak onartzea ala ez onartzea ekarriko duten.

6. PARLAMENTURA BIDALITAKO «LEGE PROIEKTUEN» EGOERA PARLAMENTUA DESEGIN ONDOREN.

Lehenago adierazi dugunez, Eusko Legebiltzarra deseginda edo haren agintaldia amaituta, iraungita geratuko dira, espediente parlamentarioari dagokionez, izapidetzen ari ziren gai guztiak, eta, gai horien artean, Parlamentua desegin aurretik bidalitako «lege-proiektuak». Horrenbestez, zilegi da galdetzea ea, Administrazio Zuzenbidearen ikuspegitik, zer egoeratan geratzen diren, behin Parlamentua deseginda, Gobernu Kontseiluak onetsitako «lege-proiektuak», legegintzako ekimen gisa Parlamentura bidali zirenak.

Txosten hau egiten ari denaren iritziz, Gobernu Kontseiluak jada onartutako «lege-proiektu» horiek bete egiten dute, are Legebiltzarra desegin eta gero ere, fase nolabait esateko administratiboan aurreikusi den helburua. Hau da, eta XOEPLren Zioen Adierazpenean adierazitakoaren arabera, legegintzako ekimen aurreikusgarri eta zehatz baten eduki formazkoa zein funtsezkoa aurreikustea metodo honen bitartez:

«...erregelamenduaren mailako xedapenetarako ezarritako metodologia bera ezartzea botere bete-arazlearen barruan egiten diren legeetarako. Horrela legegintzako ahala duenaren eginkizuna erraztu egingo da, hobeto funtsatutako egitasmoak aurkeztuko baitzaizkio eztabaidarako eta erabakia hartzeko, helburuak iristeko egokiagoa eta finagoa den teknika juridikoaz artikuluka banatuak. Funtz zehatzago eta ziurrago horren gainean dagokio Legebiltzarrari egitasmoak zuzendu eta onartzea.»

Horra horren arrazoa: arauak prestatzeko prozesuari —hala fase administratiboan nola izapidetze parlamentarioa abiaraztean, proiektua Parlamentura bidalita— hasiera emateko erabakia “...ez da betekizun formal huts bat, baizik eta garrantzi juridiko eta politiko handia duen egintza bat, arauaren beharrian eta bideragarritasunaren gainean gutxieneko gogoeta behar duen egintza bat, alegia. Horrexegatik, arauaren edukia finkatzen eragina izango duten era guztietako aldagaiak kontuan hartzea eskatzen du (azterlanak, txostenak, entzunaldiak, kontsultak, negoziazioak, eta abar); orobat, araua indarrean sartzeak gutxi gorabehera zer kostu ekarriko duen eta zer eraginkortasun izango duen kalkulatzeko eskatzen du, ez bakarrik herri-administrazioei begira, baita herritarrei eta eskuarki ekonomiari ere»(XOEPLren Zioen Azalpena).

Dena den, eta hemen sartzen da Gobernu Kontseiluak bere titulartasunaren pean duen goizuzendaritza politikoaren balioa, zilegi al da Gobernu Kontseiluak bereganatzea jada izapideturik dagoen «lege-aurreproiektu» bat, are aurretik onartutako «lege-proiektu» bat, eta berriro bidaltzea Parlamentura «lege-proiektu» gisa? Egin al dezake halakorik, lege-proiektu hori Parlamentura lehenago bidalita badago ere?

Azaltzen ari garenaren ildotik, alde batera utzita “garrantzi handikoa” dela, XOEPLk dioen bezala, aurreko proiektu bat bereganatu eta Parlamentu berrira bidaltzeko ala ez bidaltzeko erabakia, legegintzako ekimen beharrezko eta egokitzat berretsita —eta indarrekoztat, beraz— Parlamentu berri horretatik sortutako Gobernu-programaren arabera, **erabaki politikoa da, funtsean.**

Egia da **edozein lege-proiektuk, Parlamentura bidaltzen delarik, beti izan beharko dituela ondoan, zalantzarik egon ez dadin Ganberako Mahaiak proiektua onartzeari buruz, JLren 57. artikulua eta eta Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikulua eskatzen dituzten aurrekariak eta dokumentuak. Baina, hortik aurrera, erabaki funtsean politikoa da, orobat, aurretik egindako proiektu eta izapidetze administratibo horiek onartzearena.** Gobernu berriak hartutako erabaki politikoa da, are gehiago hasieran egintzak eman zituen Administrazio berberaren zuzendaritza politiko gorenean diharduenean —Administrazioak beti dihardu pertsonalitate edo nortasun bakarrarekin, gobernu-aldaketa gorabehera—, eta horrek berekin dakar fase administratiboan jada izapidetuta dagoenaren nahikotasuna, gaurkotasuna eta indarra berrestea.

Hau da, egindako izapidetze-egintzen baliozkotasun juridikoa ontzat emanda, Gobernuaren aldaketak eta Parlamentuaren desegiteak ez die egintza horiei eragin.

Beraz, sinatzen duenaren aburuz, Zuzendaritza honi egin zaion galderari erantzunez, ezingo da «alde batera utzi», nahitaezkoa izango baita, XOEPLren izapidetzea; hala ere, bai sailburuak dagokion proposamena Gobernu Kontseiluari helarazteko erabakian, bai Gobernu Kontseiluak, legegintzako ekimenerako ahala egikarituta, Parlamentura bidaltzeko erabakia hartzean kontuan hartu beharko dituzte eta aprobetxatu alde aurretik ondo egindako izapideak, are gehiago egiaztatzen bada dena delako «lege-proiektua» bat datorrela Gobernu Kontseilu berriak bere agintaldian gauzatu nahi dituen aurreikuspen politikoekin, hura ordenamendu juridikoan txertatzea beharrezko izaten jarraitzen duela eta «lege-proiektua» onartu osteko arauak ez diotela eragin lege-proiektuaren funtsezko elementuei. Balorazio horretan, betiere, oinarritzat hartu beharko dira irizpide materialak, abagunea eta egokiera zorrotz begiratuko dutenak.

7. ONDORIOA

Laburbilduta: egungo eta indarreko Gobernu Kontseiluak, JLren 16. eta 18.a) artikuluek onartzen duten legegintzako ekimenerako ahalaz baliatuta, aurretik onartutako «*lege-proiektu*» bat onartzea eta Legebiltzarrari bidaltzea erabaki dezake, eskumena duen sailburuak (edo sailburuek, eskudunak batzuk balira) dagokion proposamena Gobernu Kontseiluari helarazi eta gero.

Gobernu Kontseiluko kide batek edo batzuek proposamena igortzeak helburutzat izan behar du, JLren 26.8 artikulua jasotako egokitasun- eta proposamen-erabaki formala islatzeaz gain, hala arau-bideragarritasunaren iraupena berrestea (hau da, aurreko bidalketaren ondoren onartutako arauak eragin ez diotela) nola lehenago egindako izapideak indarrean daudela eta ordenamendu juridikoa berriztatzea egokia eta beharrezkoa dela, egungo Gobernuaren proiektu politikoan jasota dagoenaren arabera.

Hartara, onartuta eta Gobernu Kontseiluratuta dauden «*lege-proiektuak*», ikuspegi parlamentariotik, «*lege-proiektu*» berriak izango dira Parlamentura aurrekari guztiekin batera bidaltzen direnean, eta berriro hasiko da bere garaian Parlamentua desegiteagatik iraungi zen izapidetze parlamentarioa.

Hauxe da nik egindako irizpena, zuzenbidean hobeto oinarrituriko beste edozeinen mende jartzen dudana.

V

**MEMORIAS EXPLICATIVAS /
AZALPEN MEMORIAK.**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN
ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA
PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VASCAS**



MEMORIA SUCINTA PARA CONSEJO DE GOBIERNO SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS

ANTECEDENTES

El Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas fue aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2016 y remitido al Parlamento Vasco con fecha 21 de julio del mismo año.

La disolución del Parlamento Vasco, en setiembre de 2016 y la convocatoria de elecciones hizo decaer la iniciativa legislativa presentada ante la Cámara por el Gobierno de la pasada legislatura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 130 del Reglamento del Parlamento Vasco que expresamente determina que *“disuelto el Parlamento o caducado su mandato caducaran, todos los asuntos en tramitación con excepción de los que corresponda conocer a la Diputación Permanente o que deban prorrogarse por disposición legal”*.

Decaída por tanto la iniciativa legislativa remitida por el Gobierno Vasco relativa a este Proyecto de Ley, el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras sigue considerando justificado y necesario continuar con la iniciativa legislativa aprobada por el anterior gabinete en sus mismos términos incluyéndola en el Calendario Legislativo de la XI Legislatura (2016-2020) aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017.

A solicitud del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras por la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno se ha emitido informe favorable a la viabilidad jurídica de que se vuelva a retomar por el Consejo de Gobierno el texto del proyecto de ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas, aprobado ya el 19 de julio de 2016 y remitirlo al Parlamento Vasco admitiéndose como válidos los tramites procedimentales ya realizados con anterioridad.

De acuerdo con las consideraciones efectuadas por la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo en dicho informe el Proyecto de ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas, aprobado por el Consejo de Gobierno el 19 de julio de 2016, reúne los requisitos necesarios para considerar validos todos los tramites procedimentales

realizados la pasada legislatura y poder ser sometido a la aprobación directa del Consejo de Gobierno, al no haberse producido modificación alguna en el contenido del mismo.

En consecuencia, se procede nuevamente a la remisión del texto normativo para su aprobación y reproducimos, a continuación, los objetivos del mismo así como todos aquellos tramites procedimentales que, efectuados en su día, deben considerarse válidos.

1.- OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS

El núcleo de la política de la Unión Europea en materia de eficiencia energética lo constituye la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, que establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión con la finalidad de encauzar a los estados miembros hacia el cumplimiento de los objetivos de 2020 y de preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de ese año.

La Directiva 2012/27/UE exige a los estados miembros que establezcan objetivos indicativos nacionales de eficiencia energética para 2020, y se disponen normas vinculantes para los usuarios finales y los proveedores de energía.

La Unión ha considerado que todos los organismos públicos, a nivel nacional, regional y local deben servir de ejemplo en lo que se refiere a la eficiencia energética, en la medida en que se considera que el sector público constituye un motor importante para estimular la transformación del mercado hacia productos, edificios y servicios más eficientes, así como para provocar cambios de comportamiento en el consumo de energía por parte de los ciudadanos y las empresas. Por otra parte, la disminución del consumo de energía a través de medidas de mejora de la eficiencia energética permitiría también liberar recursos públicos muy necesarios para otras finalidades.

Los edificios de titularidad pública representan una parte muy importante del parque inmobiliario y, lo que es aún más importante, tienen una gran visibilidad ante la opinión pública. Por ello es necesario fijar un índice anual de renovación de los edificios de la administración con la finalidad de mejorar su rendimiento energético.

En este sentido, el sector público vasco debe dar ejemplo en lo que se refiere a inversiones, mantenimiento y gestión energética de sus edificios e instalaciones. Por ello, la Directiva 2012 exige la reforma anual de al menos el 3% del parque inmobiliario propiedad de las administraciones centrales, a partir de 2014, y la adquisición de edificios, servicios y productos con un elevado rendimiento en términos de eficiencia energética, ámbito en el cual el sector público considera debe dar ejemplo.

En el ordenamiento interno, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, de carácter básico, formula como uno de los principios que han de guiar la acción de los poderes públicos el de ahorro y eficiencia energética y la promoción de las energías limpias, reducción de emisiones y eficaz tratamiento de residuos.

La ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanística, constituye también un importante fundamento de la disposición proyectada, en la medida en que, con arreglo al artículo tercero de esa ley, “los poderes públicos formularán y desarrollarán en el medio urbano las políticas de su respectiva competencia, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional”.

Conscientes de la importancia de ser eficientes energéticamente, el Gobierno Vasco trabaja desde hace años en este campo y se trata ahora de lograr la implicación de todas las administraciones públicas vascas en la consecución de estos objetivos, ya que, no cabe ninguna duda, de que los organismos públicos pueden y deben llevar a cabo la promoción del ahorro y la eficiencia energética. Esto se ha plasmado, en un primer nivel, en la aprobación del Decreto 175/2015, de 22 de setiembre, sobre la sostenibilidad energética del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, constituyéndose, por tanto, en el antecedente inmediato más cercano de la Ley que se informa si bien esta última resulta mucho más ambiciosa por lo que se refiere no solo al ámbito subjetivo de aplicación de la misma, sino también a su contenido.

El Decreto 178/2015, de 22 de setiembre, abordó, por lo que se refiere al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el ahorro, la eficiencia energética y el uso de las energías renovables en el mismo, con la intención de que el ahorro y la eficiencia dejaran de ser objetivos loables para convertirse en realidades constatables. Así, la citada norma establecía objetivos básicos, pero también medidas específicas y vinculadas a criterios temporales concretos que recalcan el papel ejemplarizante de esta administración.

Sin embargo, a pesar de su importancia, el Decreto no resultaba de aplicación al sector público foral y al municipal por lo que, teniendo en cuenta el peso del consumo energético de esta parte del sector público, se hacía necesario completar la actuación ejemplificadora de la administración abordándola también desde esta última perspectiva.

Por último, es preciso destacar que la Estrategia Energética de Euskadi 2030 contempla también, como uno de sus objetivos lograr la implicación en esa estrategia de todas las administraciones públicas vascas, siendo una de sus principales líneas de actuación promover una Administración pública vasca energéticamente más eficiente y sostenible, lo que supondrá, entre otras actuaciones, la adopción de medidas encaminadas a reducir el consumo en los servicios e instalaciones que dependan de ella y el impulso de las energías renovables en el ámbito de la misma.

Son los antecedentes citados los han determinado la elaboración de una disposición como la proyectada.

2.- PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NORMA.

El anteproyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas se tramitó a través de la aplicación informática “tramitagune” desarrollada para la tramitación electrónica, conforme a las instrucciones de tramitación de disposiciones de carácter general, aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010.

En la elaboración del texto se han observado las directrices para la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Órdenes y Resoluciones aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23.03.1993 y publicadas mediante Orden de 6 de abril de 1993, del Consejero de la Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico. Igualmente se han observado las prescripciones establecidas en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

De conformidad con lo establecido en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, antes citada, la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad dictó la **Orden de iniciación** expresando el objeto y finalidad de la norma , así como, una vez redactado el anteproyecto, **Orden aprobando el mismo** y ordenando continuar con los trámites correspondientes.

De ambas ordenes junto con el texto aprobado se dió la correspondiente publicidad en el espacio compartido de conocimiento “**Legesarea**”, tal y como se establece en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010, por el que se aprueban las instrucciones de tramitación en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. El texto del anteproyecto ha sido también objeto de publicación en “**transparencia**” de conformidad con las exigencias de la Ley 19/2013, de transparencia y derecho de acceso a la información pública.

Este Anteproyecto, de conformidad con lo establecido en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, se ha sometido a los siguientes informes, trámites y actuaciones necesarios para su aprobación:

Así, consta en el expediente la **Memoria Económica** que expresa la estimación del coste a que puede dar lugar, con la cuantificación de los gastos e ingresos y su repercusión en los Presupuestos de la Administración.

Se ha emitido, en un principio, Informe justificativo de ausencia de relevancia desde el punto de vista de género, por entender que se trata de una norma que afecta exclusivamente a aspectos organizativos de las administraciones públicas.

Sin embargo, EMAKUNDE considerando que la norma propuesta incide sobre aspectos sustantivos requiere, con fecha 2 de febrero de 2016, que el proyecto vaya acompañado del Informe de Impacto de Género.

En cumplimiento de dicho requerimiento se **emite el Informe de evaluación de impacto en función del género**, por venir así establecido en el artículo 19 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombre y en el punto 5 de las denominadas “*Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del género*”, aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21.08.2102.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de Disposiciones de Carácter General, se ha emitido **informe jurídico** en el que se analiza su fundamento objetivo, la adecuación de su contenido a la Ley y al Derecho y la observancia de las directrices de técnica normativa

Se ha efectuado **una evaluación del impacto de la disposición en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas,** conforme dispone el artículo 6 de la ley 16/2012, de 28 de junio, de emprendedores del País Vasco y que se remitirá, en su momento, al Parlamento junto con el proyecto de Ley.

Trámite de Audiencia.

En cuanto al preceptivo trámite de audiencia el borrador de la norma propuesta ha sido remitido, para alegaciones, a las siguientes entidades:

- Ayuntamiento de Bilbao
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
- Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
- Asociación Vasca de Municipios (EUDEL)

- Juntas Generales de Bizkaia
- Juntas Generales de Alava
- Juntas Generales de Gipuzkoa

- Diputación Foral de Bizkaia
- Diputación Foral de Alava
- Diputación Foral de Gipuzkoa

- Euskalherriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco

- Lehendakaritza
- Departamento de Medio ambiente y Política Territorial
- Departamento de Salud
- Departamento de Seguridad
- Departamento de Empleo y Políticas Sociales
- Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura
- Departamento de Hacienda y Finanzas
- Departamento de Administración Pública y Justicia

Durante el periodo de audiencia se han presentado observaciones por los siguientes organismos:

- Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
- Juntas Generales de Alava
- Ayuntamiento de Bilbao
- Eudel

Tanto el contenido íntegro de estas alegaciones como la respuesta a las mismas constan en el documento “ *Memoria sucinta para COJUA del procedimiento seguido para la tramitación del Anteproyecto de la Ley de Sostenibilidad Energética de la Administraciones Públicas Vascas* “ al que, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, nos remitimos.

Sintéticamente podemos indicar que, a resultas de dicho trámite, se ha procedido a la realización de las siguientes modificaciones en el texto del Proyecto:

Exposición de Motivos:

A propuesta del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial se incluye un quinto párrafo en la Exposición de Motivos en los siguientes términos:

“Desde el punto de vista medioambiental, este anteproyecto de Ley también tiene su encaje. En efecto, la Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050, aprobada en el año 2015, para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo, establece entre sus metas la de disponer de una Administración pública vasca responsable, ejemplar y referente en cambio climático. Y señala que para lograr la implicación de todos los agentes de la sociedad vasca se debe impulsar una acción ejemplarizante desde todos los órganos de la Administración Pública Vasca. Para ello, es necesario llevar a cabo una coordinación horizontal y vertical, es decir, entre los diferentes departamentos del Gobierno Vasco, así como con los Ayuntamientos y Diputaciones Forales. Una de las principales líneas de actuación que se destaca para lograr los objetivos al 2050, es lograr una Administración pública cero emisiones”.

Artículo 3:

A propuesta de las Juntas Generales de Alava se ha eliminado el artículo 3.2 d) relativo al ámbito objetivo de la Ley.

Artículo 5:

Se ha admitido la propuesta del Ayuntamiento de Bilbao respecto al artículo 5 y se ha incluido un punto que hace referencia a la disminución de la contaminación por partículas, emisiones de NO₂.

Artículo 7:

7.2 a) se sustituye la expresión “Directrices de Ordenación del Territorio” por “Directrices de Ordenación Territorial.

7.4 Se sustituye “*evaluación estratégica del impacto ambiental*” por “*Evaluación Ambiental Estratégica*” y se admite la redacción alternativa propuesta por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de manera que el punto 4 del artículo 7 queda redactado como sigue:

“Cuando los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos a los que se refiere el apartado 2, se sometan a alguno de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica legalmente establecidos, no será necesario duplicar aquellos aspectos del estudio requerido en los apartados 1 y 3 que además vengan exigidos por la normativa que regula dichos procedimientos de evaluación ambiental”

7.5 Se elimina por considerar que se está incidiendo directamente en la regulación recogida en la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, que recoge en su artículo 12 las determinaciones que deben contener los PTPs.

Artículo 10

Se admite la alegación de EUDEL efectuada al artículo 10.1.a) relativa al contenido del inventario a realizar por las administraciones públicas excluyendo de la necesidad del mismo los casos contemplados en el 3.2.f) antes citado. Así la nueva redacción del 10.1 quedaría como sigue:

“1. Las Administraciones Públicas realizarán un inventario de edificios, parque móvil e instalaciones de alumbrado público existentes, dentro de su ámbito de actuación, que contendrá la siguiente información:

- a) *Inventario de los edificios e instalaciones de su titularidad, incluyendo su superficie en m² y el consumo y gasto energético de cada edificio. La anterior obligación no incluye los consumos en viviendas o locales en edificios públicos utilizados en el ámbito privado por particulares o empresas en régimen de alquiler...”*

Artículo 16

Se admite la alegación efectuada al artículo 16.2.b) sustituyéndose la expresión “su utilización durante su vida útil” por “analizando su ciclo de vida”

Artículo 17

Se admite la alegación efectuada al artículo 17.2 añadiéndose “siempre que el nivel de calificación sea inferior a B” con la finalidad, como indica EUDEL, de evitar actuaciones muy costosas y de eficacia relativa en ayuntamientos que ya hayan asumido obligaciones y mejoras de sus edificios hasta llegar a la calificación B.

Artículo 22

Se admite la observación efectuada al artículo 22 en el sentido de que tal y como está redactado la articulación de los planes de movilidad parece que es una obligación municipal mientras que en determinados ayuntamientos pequeños estos planes deben completarse con los planes de movilidad de carácter foral. Se modifica el artículo en ese sentido.

Disposición adicional segunda

Respecto de lo dispuesto en la Disposición adicional segunda a propósito de la aprobación del nivel base de referencia del consumo energético global se plantea la desventaja en la que se encuentran, de acuerdo al texto propuesto, aquellas administraciones que hayan establecido un nivel base o hayan actuado ya en materia de eficiencia energética.

Por ello se ha modificado la Disposición Adicional Segunda que queda redactada en los siguientes términos:

“En su determinación se deberá tomar en consideración la media de los tres últimos años anteriores a la entrada en vigor de esta ley. Alternativamente, se podrá tomar como nivel base de consumo energético el del último año anterior a la entrada en vigor de la misma u otro año de manera justificada y con el objeto de poner en valor actuaciones realizadas con anterioridad a la aprobación de esta ley.”

Disposición Adicional Cuarta

De oficio se elimina la Disposición Adicional Cuarta al constatar que los organismos referenciados ya disponen de canales de información adecuados con las empresas distribuidoras para la obtención de la información que se pretende.

MODIFICACIONES DEL TEXTO COMO CONSECUENCIA DEL INFOME DE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.

Conforme con lo dispuesto en la Ley 2/1988, de 5 de febrero, sobre creación de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer para la igualdad de Mujeres y Hombres y previa realización del informe de evaluación de impacto en función del género, Emakunde emite Informe relativo al Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad de las Administraciones Públicas Vascas en el que recomienda una serie de pautas de actuación que serán tenidas en consideración.

A requerimiento de dicho organismo se ha integrado la perspectiva de género al tratar de los principios que informan la Ley.

Por otra parte, con el fin de dar cumplimiento al mandato del artículo 46 de la Ley 4/2005, se ha modificado el artículo 22 relativo a los planes de movilidad recordando dicho compromiso.

“Artículo 22

3. El Plan deberá indicar con claridad los objetivos que persigue, las inversiones comprometidas por la Administración adoptante del plan y el horizonte temporal para su consecución y deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 4/2005

El Plan y los estudios precisos para su realización se redactarán teniendo en cuenta los diferentes usos de la ciudad y del espacio que hombres y mujeres realizan, e incluirán propuestas para disminuir las posibles brechas de género con la finalidad de avanzar hacia el diseño de una ciudad integradora y corresponsable. “

Asimismo, en línea con lo requerido por Emakunde, se tendrán en cuenta las obligaciones establecidas en la Ley 2/2005, en cuantas actuaciones deriven de la ley proyectada.

Según lo establecido en el Decreto 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas emite informe proponiendo la inserción de una disposición en el Anteproyecto de Ley recordando la obligación de que toda información y publicación sobre sostenibilidad energética que las Administraciones Públicas Vascas pongan a disposición de la ciudadanía este redactada tanto en euskera como en castellano.

No se considera necesario, como propone el citado informe, que la Ley proyectada inserte una disposición recordando una obligación que ya está establecida en una disposición con rango de ley, la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

2.2.3.- INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN (DACIMA).

La Dirección de Atención a la Ciudadanía, conforme dispone el Decreto 188/2013, de 9 de abril, emite informe en el que valora positivamente la iniciativa proyectada efectuando una serie de consideraciones generales relativas a la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el funcionamiento de las Comisiones y a facilitar el acceso a la ciudadanía de la información pública sobre sostenibilidad energética en las administraciones públicas vascas que será tenida en consideración.

2.2.4.- INFORME DE LA JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 21.2.a).4) del Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre régimen de la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi se solicitó a la Junta Asesora de la Contratación Administrativa del País Vasco informe relativo al Anteproyecto sin que se haya evacuado informe alguno.

No obstante indicar que se ha tenido en consideración el informe emitido en relación con el *“Decreto para la Sostenibilidad Energética del Sector Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi”*.

MODIFICACIONES DEL TEXTO DERIVADAS DEL INFORME DE CONTROL ECONOMICO-NORMATIVO DE LA OFICINA DE CONTROL ECONOMICO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la CAE y el Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio de control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la administración de la CAE (art.41 y siguientes.) se evacuó el correspondiente informe que obra en el expediente

Como consecuencia de la información requerida por la Oficina de Control Económico se ha incorporado al procedimiento una nueva Memoria Económica, ampliada con detalle de la distribución de costes tanto por tipo de administración como por tipo de actuación.

MODIFICACIONES DEL TEXTO DERIVADAS DEL DICTAMEN DE LA COMISION JURIDICO ASESORA DE EUSKADI.

Por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se emite Dictamen nº 127/2016 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que incluye como ámbito de la función consultiva de la Comisión los Anteproyectos de ley, cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos.

El Dictamen, de carácter favorable, efectúa una serie de observaciones, algunas de las cuales se refieren a su articulado, siendo otras de carácter terminológico o de técnica legislativa.

Respecto de estas últimas, es necesario precisar que, siguiendo la recomendación efectuada por dicho órgano consultivo, se ha procedido a mejorar la estructura interna de la futura norma, utilizando un mismo criterio para clasificar internamente el contenido de los artículos de acuerdo con las Directrices para la elaboración de proyectos de normas.

En aras a la necesaria precisión y claridad del texto de la norma, se han efectuado las siguientes precisiones o modificaciones propuestas por la Comisión:

- Se ha eliminado el tercer párrafo de la Exposición de motivos por confuso y descontextualizado.
- En el artículo 13.3 se ha sustituido la expresión “*hoja de ruta*” por “*documento*”, más correcta terminológicamente hablando
- En el artículo 16.2.b) se ha eliminado la palabra “*analizando*”.
- En el artículo 17.1, por seguridad jurídica, todas las referencias que se hacían al “*Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de edificios*” se hacen ahora a “*la normativa vigente sobre certificación de eficiencia energética de los edificios*”.
- En el artículo 25.2 se aclara que el artículo se refiere a vehículos nuevos que utilicen combustibles alternativos.
- Se da una redacción más clarificadora a la Disposición Final Primera que ahora establece que “*el Parlamento, Ararteko y Tribunal de Cuentas elaboraran sus propios planes de sostenibilidad energética, sin que vengan obligadas al cumplimiento de las previsiones de la Ley*”.

Por lo que se refiere a las observaciones concretas efectuadas al articulado:

-No se considera adecuado modificar el artículo 1 por entender que, en su actual redacción, responde certeramente a lo que constituye, con carácter general, el objeto de la norma, pues si bien, como indica COJUA, se regulan aspectos que, a su juicio, pueden trascender del ámbito de las administraciones esto no es así si consideramos que entre los principios interpretativos que constituyen pautas de actuación de las Administraciones Públicas se establece la integración de los requisitos de la ley en otras políticas públicas, en especial en aquellas que tienen que ver con la ordenación del territorio, el urbanismo y las infraestructuras de transporte.

-Respecto del artículo 2 se ha eliminado la incierta referencia al artículo 7.4.c) del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y se hace una remisión específica a la Disposición Adicional primera.

-De conformidad con lo sugerido en el Dictamen indicado se completa el artículo 3, dedicado a las definiciones de conceptos con una relativa a lo que debe entenderse, a los efectos de esta Ley, por acuerdo voluntario.

-Respecto de la observación que COJUA efectúa al artículo 9 que regula las comisiones de sostenibilidad energética, se ha dado una nueva redacción al mismo con la finalidad de, en línea con lo sugerido, garantizar el debido respeto a la autonomía foral y local, dando cabida a los órganos que los diversos entes creen para cumplir con la misión encomendada.

-Igualmente se han modificado las fechas de referencia que aparecían en los artículos 15.1 y 18.1.

-Se corrige igualmente el artículo 24, extendiendo el deber de formación a todas las entidades recogidas en el artículo 2 de la Ley y se redefine el artículo 27 referente a los Acuerdos Voluntarios.

-Por último, se da una nueva redacción, mas clarificadora, a la Disposición adicional segunda, precisando que será cada administración la que aprobará su consumo energético, lo que servirá como punto de partida para el establecimiento de los objetivos de cada una de ellas.

LA CONSEJERA DEL DEPARTAMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **MARIA ARANZAZU TAPIA OTAEGI**

Fecha de la firma: **07/06/2017 13:28:29**

Validación de la firma:  **Correcta**



**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN
JASANGARRITASUN ENERGETIKOARI BURUZKO LEGEAREN
AURREPROIEKTUAREN MEMORIA LABURRA GOBERNU
KONTSEILUARENTZAT**

AURREKARIAK

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoari buruzko lege-aurreproiektua Gobernu Kontseiluaren 2016ko uztailaren 19ko Erabakiarekin onartu zen, eta urte bereko uztailaren 21ean bidali zitzaion Eusko Legebiltzarrari.

Eusko Legebiltzarra 2016ko irailean desegin eta hauteskunde-deialdia egin zenez, bertan behera gelditu zen aurreko legegintzaldiko Gobernuak Legebiltzarrari aurkeztu zion legegintzako ekimena; izan ere, Eusko Legebiltzarraren 130. artikulua beren-beregi dioenez, *“Eusko Legebiltzarra desegindakoa edo Legebiltzarraren agintaldia amaitutakoa, iraungi egingo dira tramitazioan dauden gai guztiak, salbu eta Diputazio Iraunkorrek aztertu eta erabaki beharrekoak edo legeak hala aginduta atzeratu beharrekoak.*

Beraz, bertan behera gelditu zenez Eusko Jaurlaritzak lege-proiektu horri buruz bidalitako legegintzako ekimena, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren ustez arrazoizkoa eta beharrezkoa da, orain ere, aurreko kabineteak onartutako legegintzako ekimenari bere horretan ematea jarraipena, eta XI. Legegintzaldiko (2016-2020) legegintza-egutegian sartzea, zeina Gobernu Kontseiluaren 2017ko otsailaren 28ko Erabakiaren bitartez onartu baitzen.

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak eskatuta, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak txosten bat eman, eta juridikoki bideragarritzat jo du, aurretik eginda zeuden prozedura-izapideak balioduntzat hartuta, Gobernu Kontseiluak berreskura dezala Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoari buruzko lege-proiektuaren testua —2016ko uztailaren 19an onartu baitzen—, eta Eusko Legebiltzarrera bidal dezala.

Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak txosten horretan egindako gogoeten arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoari buruzko lege-proiektuak, 2016ko uztailaren 19an onartu baitzuen Gobernu Kontseiluak, beharrezko diren baldintzak betetzen ditu aurreko legegintzaldian egindako prozedura-izapide guztiak balioduntzat jotzeko eta Gobernu Kontseiluari helarazi ahal izateko, zuzenean onar dezan, ez baita inongo aldaketarik gertatu lege-proiektu horren testuan.

Horiek horrela, berriro bidaltzen da arau-testua, onarpenerako, eta ondoren errepikatzen dira arau-testuaren helburuak, bai eta balioduntzat jo behar diren prozedura-izapide guztiak, bere garaian egin zirenak.

1.- HELBURUAK ETA OINARRIAK

Efizientzia energetikoari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 2012/27/UE Zuzentarauak osatzen du Europar Batasunak efizientzia energetikoaren alorrean duen politikaren muina. Zuzentaru horrek Europar Batasunaren baitan efizientzia energetikoa sustatzeko neurrien esparru komuna ezartzen du, estatu kideak 2020ko helburuak betetzera bideratzeko eta urte horretatik aurrera efizientzia energetikoari lotuta geroko hobekuntzetarako bidea prestatzeko.

2012/27/UE Zuzentarauak estatu kideei eskatzen die efizientzia energetikoari lotutako helburu nazional adierazgarriak 2020rako ezar ditzatela, eta arau lotesleak xedatzen ditu energiaren azken erabiltzaileentzat eta hornitzaileentzat.

Europar Batasunaren iritziz, organismo publiko guztiek —direla nazional, lurraldeko zein tokiko— eredugarriak izan behar dute efizientzia energetikoari dagokionez, sektore publikoa motor garrantzitsutzat jotzen den heinean merkatuaren eraldaketa sustatzeko produktu, eraikin eta zerbitzu eraginkorrak eskaintzeari begira, baita energia-kontsumoan portaera-aldaketak sorrarazteko ere herritarren eta enpresen aldetik. Beste alde batetik, efizientzia energetikoa hobetzeko neurrien bidez energia-kontsumoa gutxitzeak aukera emango luke, baita ere, beste helburu batzuetarako oso beharrezkoak diren baliabide publikoak askatzeko.

Titulartasun publikoko eraikinak oso zati garrantzitsua dira higiezinaren parkean, eta are garrantzitsuagoa da ikusgarritasun handia dutela iritziz publikoaren aurrean. Horregatik, administrazioaren eraikinen berritze-indizea finkatu behar da, haien energia-errendimendua hobetzeko helburuarekin.

Ildo horretatik, euskal sektore publikoak eredugarri izan behar du bere eraikin eta instalazioetako inbertsioei, mantentzeari eta kudeaketa energetikoari dagokienez. Horregatik, 2012ko Zuzentarauak exijitzen du administrazio zentralen jabetzako higiezinaren parkearen % 3 gutxienez eraberritzea urtero, 2014tik aurrera, eta efizientzia energetikoaren ikuspegitik errendimendu handia duten eraikin, zerbitzu eta produktuak eskuratzea, arlo horretan sektore publikoak eredugarri izan behar duela iritzita.

Barne-ordenamenduan, Ekonomia Iraunkorrari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legeak, oinarritzko izaera duenak, ezartzen du botere publikoen ekintza gidatu behar duen printzipioetako bat dela aurrezpena, efizientzia energetikoa eta energia garbien sustapena, isurkien murrizketa eta hondakinen tratamendu eraginkorra.

Birgaitzeari eta hiri-berroneratze eta -berrikuntzari buruzko ekainaren 26ko 8/2013 Legea ere bada proiektatutako xedapenaren oinarri garrantzitsu bat, hau ezartzen baitu hirugarren artikuluan: "Botere publikoek dagozkien eskumeneko politikak

formulatu eta garatuko dituzte hirigunean, betiere ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren arloko jasangarritasunaren, lurralde-kohesioaren, efizientzia energetikoaren eta konplexutasun funtzionalaren printzipioei jarraituz".

Energiari dagokionez efizienteak izateak daukan garrantziaren jakitun, Eusko Jaurlaritza aspaldidanik ari da alor horretan lanean, eta orain EAeko administrazio publiko guztiak inplikatzeko lortu nahi da, helburu horiek lortzeko; izan ere, zalantzarik gabe, erakunde publikoek aurrezpena eta efizientzia energetikoa susta dezakete eta hala egin behar dute. Hori gauzatzeko, lehen maila batean, irailaren 22ko 178/2015 Dekretua onartu da, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren jasangarritasun energetikoari buruzkoa, eta, hortaz, txosten honen helburu den Legearen aurrekaririk hurbilena da, nahiz eta Legea askoz asmo handiagokoa izan, ez bakarrik hura aplikatzeko eremu subjektiboari dagokionez, baizik eta haren edukari dagokionez ere.

Irailaren 22ko 178/2015 Dekretuak arautu zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoari dagokionez, bertako aurrezpena, efizientzia energetikoa eta energia berriztagarrien erabilera, aurrezpena eta efizientzia helburu goresgarritzat hartzeari utzi eta errealitate egiaztagarri bihurtzeko. Horrela, bada, aipatutako arauak oinarritzko helburuak ezartzen zituen, baina neurri espezifikoak eta denbora-irizpide zehatzetakoak ere bai, administrazio honek eredugarri izateko duen xedea nabarmenduz.

Hala eta guztiz ere, eta oso garrantzitsua izan arren, dekretua ez zen foru- eta udal-sektore publikoan aplikatzekoa, eta, beraz, sektore publikoaren zati horrek energiaren kontsumoan duen pisua kontuan hartuta, ikusi zen beharrezkoa zela administrazioaren jarduketara eredugarria osatzea, azken ikuspegi horretatik ere helduz.

Azkenik, nabarmentzekoa da Euskadiko Energia Estrategia 2030 berak helburutzat duela, besteak beste, estrategia horretan EAeko administrazio publiko guztien inplikazioa lortzea. Estrategia horren jarduketa-eremu nagusietako bat da energia-arloan efizienteagoa eta jasangarriagoa izango den euskal administrazio publikoa sustatzea, eta horrek berekin ekarriko du, besteak beste, administrazio publikoen mende dauden instalazio eta zerbitzuetan kontsumoa murrizteko neurriak hartzea eta bertan energia berriztagarriak bultzatzea.

Aipatutako aurrekariak eragin dute proiektatua bezalako xedapena prestatzea.

2.- ARAUA EGITEKO PROZEDURA.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legearen aurreproiektua izapidetze elektronikorako garatutako "Tramitagune" aplikazio informatikoaren bidez izapidetu da, Gobernu Kontseiluaren 2010eko abenduaren 28ko Erabakiaren bidez onartutako xedapen orokorrak izapidetzeko jarraibideen arabera.

Testua prestatzean, kontuan hartu dira Gobernu Kontseiluaren 1993ko martxoaren 23ko Erabakiaren bidez onartu eta Lehendakaritza, Lege Araubide eta Autonomia Garapenerako sailburuaren 1993ko apirilaren 6ko Aginduaren bidez argitaratutako

gidalerroak, lege-proiektuak, dekretuak, aginduak eta ebazpenak egitekoak. Halaber, Xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legean ezarritako xedapenak bete dira.

Goian aipatutako abenduaren 22ko 8/2003 Legean xedatutakoaren arabera, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak **hasierako agindua** eman zuen arauaren helburua eta xedea adieraziz eta, aurreproiektua idatzitakoan, hura **onartzeko** eta dagozkion izapideak egiten jarraitzeko **agindua** ere bai.

Agindu horiek eta onartutako testua “**Legesarea**” ezagutza-esparru partekatuan argitaratu ziren, hala ezartzen baitu Gobernu Kontseiluaren 2010eko abenduaren 28ko erabakiak, xedapen orokorrak egiteko prozedurarako izapidetze-jarraibideak onartzen dituenak. Aurreproiektuaren testua “**gardena**” gardentasun-atarian ere argitaratu da, Gardentasunari eta informazio publikoa eskuratzeko eskubideari buruzko 19/2013 Legeari jarraikiz.

Abenduaren 22ko 8/2003 Legean ezarritakoarekin bat etorriz, txosten, izapide eta jarduketa hauek egin zaizkio aurreproiektu honi, beharrezkoak ziren-eta onarpenerako:

Espedientean **Memoria Ekonomikoa** jaso da, izan dezakeen kostuaren estimazioa adierazten duena, eta gastu eta sarrerak eta Administrazioaren aurrekontuetan izan dezaketen eragina kuantifikatu dira.

Hasiera batean, txosten bat egin da, araua genero-ikuspuntutik garrantzirik gabekoa dela justifikatzen duena, administrazio publikoen antolamenduarekin zerikusia duten alderdiei soilik eragiten diela uste izategatik.

Dena den, EMAKUNDEK, proposatutako arauak funtsezko alderdiei eragiten diela iritzita, errekerimendua egin zuen, 2016ko otsailaren 2an, proiektuarekin batera Genero Eraginaren Txostena aurkez zedin.

Errekerimendu hori betetz, **Generoaren arabeko eraginaren ebaluazioaren txostena** egin da, hala baitago ezarrita Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19. artikuluan eta “*Genero-eraginaren aurreko ebaluazioa gauzatzeari buruzko jarraibideak*” izenekoan 5. puntuan; azken horiek Gobernu Kontseiluak 2012-08-21ean onartu zituen.

Xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 7.3 artikuluari jarraikiz, **txosten juridikoa** egin da. Bertan, legearen aurreproiektuaren funts objektiboa aztertu da, bai eta edukia Legearekin eta Zuzenbidearekin bat datorren eta lege-proiektuak araugintza-teknikaren gaineko jarraibideak betetzen dituen ere.

Xedapenak enpresak sortzearen, abian jartzearen eta funtzionamenduaren gainean izango duen eraginari buruzko ebaluazioa egin da, Euskadiko ekintzaileei eta enpresa txikiari laguntzeko ekainaren 28ko 16/2012 Legearen 6. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Entzunaldiaren izapidea.

Entzunaldiaren nahitaezko izapideari dagokionez, proposatutako arauaren zirriborroa honako erakunde hauei bidali zaie, alegazioak egin ahal izateko:

- Bilboko Udala
- Gasteizko Udala
- Donostiako Udala
- Euskadiko Udalen Elkarte (EUDEL)

- Bizkaiko Batzar Nagusiak
- Arabako Batzar Nagusiak
- Gipuzkoako Batzar Nagusiak

- Bizkaiko Foru Aldundia
- Arabako Foru Aldundia
- Gipuzkoako Foru Aldundia

- Euskal Herriko Unibertsitatea

- Lehendakaritza
- Ingurumen eta Lurralde Politika Saila
- Osasun Saila
- Segurtasun Saila
- Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
- Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila
- Ogasun eta Finantza Saila
- Herri Administrazio eta Justizia Saila

Entzunaldian, honako erakunde hauek aurkeztu dituzte oharrak:

- Ingurumen eta Lurralde Politika Saila
- Arabako Batzar Nagusiak
- Bilboko Udala
- Eudel

Alegazio hauen eduki osoa eta haiei emandako erantzuna “*Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legearen aurreproiektua izapidetzeko prozeduraren memoria laburra Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarentzat*” izeneko dokumentuan daude, eta, beharrezkoak ez diren errepikapenak saihestearren, bertan adierazitakora joko dugu.

Laburbilduta adieraziko dugu ezen, izapide horren ondorioz, aldaketa hauek egin direla proiektuaren testuan:

Zioen azalpena:

Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak proposatuta, bosgarren paragrafoa gehitu da Zioen Azalpenean. Honako hau dio:

“Ingurumenaren ikuspegitik, Legearen aurreproiektu honek badauka tokia. Izan ere, Klima Aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategiak, 2015ean onartuak, berotegi-efektuko gasen isurketa epe luzera murrizteko helburuak lortzeko hainbat xede ezarri ditu, eta haietako bat EAEko administrazio publikoa klima-aldaketaren arloan arduratsua, eredugarria eta erreferentea izatea da. Eta EAEko gizarteko eragile guztien inplikazioa lortzeko EAEko administrazio publikoko organo guztiak eredu izatea bultzatu behar da. Horretarako, koordinazio horizontala eta bertikala gauzatu behar da, hau da, Eusko Jaurlaritzaren sailen artekoa, eta bai udalekikoa eta foru-aldundiekikoa ere. 2050erako helburuak lortzeko nabarmentzen den jarduketa-eremu nagusietako bat da Administrazio publikoak zero isurketa egitea lortzea.”

3 artikulua:

Arabako Batzar Nagusiek proposatuta, ezabatu egin da legearen 3.2 d) artikulua, eremu objektiboari buruzkoa.

5 artikulua:

Bilboko Udalak 5. artikuluari buruz egindako proposamena onartu da, eta, hortaz, partikula bidezko eta NO₂ isurketa bidezko kutsadura gutxitzea aipatzen duen puntu bat sartu da.

7. artikulua:

7.2 a) "Lurraldearen Antolamenduko ildo nagusiak" kendu eta, haren ordeztan, "Lurralde-antolamenduko ildo nagusiak" jarri da.

7.4.- *“Ingurumen-inpaktuaren ebaluazio estrategiko ”* kendu eta, haren ordeztan, *“Ingurumen Ebaluazio Estrategikoa”* jarri da, eta Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak proposatutako ordeztan testua onartu da. Hortaz, 7. artikulua 4. zenbakia honela geratuko da idatzita:

“2. paragrafoan aipatutako lurralde antolamenduko eta hirigintzako baliabideei legez ezarritako ingurumenaren ebaluazio-prozedura estrategiko bat egin behar bazaie, ez dira bikoiztu behar, batetik, azterketa honen 1. eta 3. paragrafoetan eskatzen diren eta, bestetik, ingurumeneko ebaluazio-prozedura horiek arautzen dituzten arauetan ere eskatzen diren alderdiak”

7.5.- Ezabatu egin da, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako maiatzaren 31ko 4/1990 Legean jasotako arautzean zuzenean eragiten duela irizteagatik. Lege horren 12. artikuluan LPPEk (Lurralde Plan Partzialak) eduki beharreko zehaztapenak biltzen dira.

10. artikulua

EUDELEk 10.1.a) artikuluari (administrazio publikoek egin beharreko inbentarioaren edukiari buruzkoa) egindako alegazioa onartu da, eta ez dute hura behar izango lehen aipatutako 3.2.f) artikuluan azaldutako kasuek. Horrenbestez, 10.1 artikulua testua honela geratuko litzateke:

“1. Administrazio publikoek beren jarduera-eremuaren barruan dituzten eraikinen, ibilgailu-atalen eta argiteria publikoko instalazioen inbentarioa egin behar dute. Informazio hau jaso behar da inbentarioan:

- a) *Dagokion administrazioaren titulartasuneko eraikinen eta instalazioen inbentarioa, bakoitzak m²-tan duen azalera eta energia-kontsumo eta -gastua. Betebehar horretan ez dira sartzen eraikin publikoetan egon eta partikularrek edo enpresek alokairuan eremu pribatuan erabiltzen dituzten etxebizitza edo lokaletako kontsumoak...”*

16. artikulua

16.2.b) artikuluari egindako alegazioa onartu da. Hortaz, "haiek balio-bizitzan zehar erabiltzeak" kendu eta, haren ordeztan, "haien bizi-zikloa aztertuz" jarri da.

17. artikulua

17.2 artikuluari egindako alegazioa onartu da. Hortaz, "betiere kalifikazio-maila Btik beherakoa bada" gehitu da, helburutzat hartuta, EUDELEk dioen bezala, oso kostu handikoak diren eta eraginkortasun erlatiboa duten jardunak saihestea B kalifikazioa lortu arte beren eraikinei buruzko betebeharrak eta hobekuntzak jada beren gain hartu dituzten udaletan.

22. artikulua

22. artikuluari egindako oharra onartu da; izan ere, idatzita dagoen moduan mugikortasun-planen antolaketak udalen betebeharra dela ematen du, eta udal txiki batzuetan plan horiek mugikortasuneko foru-planekin osatu behar dira. Artikulua zentzu horretan aldatu da.

Bigarren xedapen gehigarria:

Bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoari dagokionez, energiaren gutziko kontsumoaren erreferentzia-oinarriaren maila onartzea dela-eta, planteatu da, proposatutako testuari jarraikiz, oinarriaren maila bat ezarri duten edo efizientzia energetikoaren alorrean jada jardun duten administrazioak desabantailan daudela.

Horregatik, bigarren xedapen gehigarria aldatu da, eta honela idatzita geratu da:

"Maila hori ezartzeko, legea indarrean sartu aurreko hiru urteetako batez bestekoa hartuko da kontuan. Horren orde, legea indarrean sartu aurreko urtekoa edo beste urte batekoa hartu daiteke energia-kontsumoaren oinarritzko maila gisa, betiere justifikatuta badago eta lege hau onartu aurretik egindako jardueren balioa nabarmentzeko".

Laugarren xedapen gehigarria:

Laugarren xedapen gehigarria ofizioz ezabatu da, egiaztatuta geratu baita aipatutako erakundeek, lortu nahi zen informazioa eskuratzeari dagokionez, informazio-kanal egokiak dituztela jada enpresa hornitzaileekin.

EMAKUNDE EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEAK EGINDAKO TXOSTENAREN ONDORIOZKO TESTU ALDAKETAK.

Emakunde Emakumearen Euskal Institutua sortzeari buruzko otsailaren 5eko 2/1988 Legean ezarritakoari jarraituz eta, betiere, generoaren araberako eraginaren ebaluazioaren txostena egin aurretik, EAeko Administrazio Publikoen Jasangarritasunari buruzko Legearen aurreproiektuaren gaineko txostena egin du Emakundek; jarduera-jarraibide batzuk eman ditu bertan, kontuan hartuko direnak.

Erakunde horrek hala eskatuta, genero-ikuspegia txertatu da Legearen oinarri diren printzipioak tratatzean.

Beste alde batetik, 4/2005 Legearen 46. artikuluan agindutakoa betetzeko, 22. artikulua, mugikortasun-planei buruzkoa, aldatu eta konpromiso hori gogorarazi da.

"22. artikulua

3. Planean argi eta garbi azaldu behar da zer helburu lortu nahi diren, plana egin duen administrazioak zer inbertsio hitzeman dituen eta zenbat

denboran gauzatzea aurreikusi den, eta 4/2005 Legearen 46. artikuluan ezarritakoa bete beharko du

Plana eta plana egiteko beharrezkoak diren azterketak gizonek eta emakumeek hiriari eta espazioari ematen dioten erabilera desberdinak kontuan hartuta idatzi behar dira, eta generoen artean egon daitezkeen aldeak gutxitzeko proposamenak jaso behar dira, hiri integratzaile eta erantzunkidea lor dadin aurrera egiteko. “

Halaber, Emakundek eskatutakoarekin bat etorriz, kontuan hartuko dira 2/2005 Legeak ezarritako betebeharrak proiektatutako legetik eratorritako jarduketak guztietan.

Xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskara-erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duen zaroaren 6ko 233/2012 Dekretuak ezarritakoarekin bat etorriz, Administrazio Publikoetako Hizkuntza Politikako Zuzendaritzak txostena egin du, eta horren bidez Legearen aurreproiektuan xedapen bat txertatzea proposatu du. Xedapen horrekin gogorarazten du Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek jasangarritasun energetikoari buruz herritarren esku jartzen duten informazio eta argitalpen orok euskaraz eta gaztelaniaz idatzita egon behar duela.

Ez da beharrezkotzat jo, aipatutako txostenak proposatzen duen bezala, proiektatutako legean xedapen bat txertatzea, lege-mailako xedapen batean jada ezarrita dagoen betebeharrak bat gogorarazteko, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarritzkoa den azaroaren 24ko 10/1982 Legean jasota baitago.

2.2.3.- HERRITARRAK HARTZEKO ETA ADMINISTRAZIOA BERRITZEKO ETA HOBETZEKO ZUZENDARITZAREN (HHABHZ) TXOSTENA.

Apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuak ezarritakoarekin bat etorriz, Herritarrak Hartzeko Zuzendaritzak txostena egin du, eta bertan positiboki balioetsi du proiektatutako ekimena. Batzordeen funtzionamenduan Informazio eta Komunikazio Teknologien erabilerari buruzko gogoeta orokor batzuk egin ditu, baita EAEko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoari buruzko informazioa jendaurrean jartzea errazteari buruz ere. Kontuan hartuko dira.

2.2.4.- KONTRATAZIOKO AHOLKU BATZORDEAREN TXOSTENA

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren kontratazio-araubideari buruzko ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuaren 21.2.a).4) artikuluan ezarritakoa betetz, Administrazio Kontratazioko Aholku Batzordeari aurreproiektuari buruzko txostena egin zezala eskatu zitzaion, eta ez du txostenik eman.

Hala ere, adierazi behar da aintzat hartu dela honako honi dagokionez egindako txostena: *"Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arlo publikoaren jasangarritasun energetikoari buruzko Dekretua"*.

KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOAK EKONOMIA ETA ARAUDI KONTROLARI BURUZ EGINDAKO TXOSTENAREN ONDORIOZKO TESTU-ALDAKETAK.

EAEko kontrol ekonomikoari eta kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legeak eta EAEko administrazioaren eremuan barneko kontrol ekonomikoa eta kontabilitatea nola burutu garatu duen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuak (41. eta hurrengo artikulua) ezarrirakoekin bat etorritik, zegoen txostena egin zen eta espedientean txertatu da.

Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eskatutako informazioaren ondorioz, prozedurari Memoria Ekonomiko berri bat gehitu zaio, administrazio motaren eta jarduketari motaren arabera kostuen banaketaren xehetasunekin aberastuta.

EUSKADIKO Aholku Batzorde Juridikoaren Irizpenaren Ondoriozko Testu-Aldaketak.

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3.1a) artikulua betez eman du Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak 127/2016 zenbakiko irizpena; izan ere, Batzordearen funtzio aholku-emailearen esparruan lege-aurreproiektuak sartzen ditu, haien gaia eta xedea edozein izanik.

Irizpenak, aldekoa baita, ohar batzuk egin ditu: artikuluei buruzkoak batzuk, eta beste batzuk, berriz, terminologiari edo legegintza-teknikari buruzkoak.

Azken horiei dagokienez, aipatutako organo aholku-emaileak emandako gomendioari jarraikiz zehaztu behar da ezen etorkizuneko arauaren barne-egitura hobetu dela, eta, hartara, irizpide berbera erabili dela artikuluen edukia sailkatzeko, arauen proiektuak egiteko gidalerroei jarraikiz.

Arauaren testua zehazteko eta argitzeko, Batzordeak proposatutako zehaztapen edo aldaketa hauek egin dira:

- Zioen azalpeneko hirugarren paragrafoa ezabatu da, nahasgarria zelako eta testuingururik gabe zegoelako.
- 13.3 artikuluan *"ibilbide-orri"* kendu eta, haren ordean, *"dokumentu"*, jarri da, terminologikoki zuzenagoa baita.
- 16.2.b) artikuluan *"analizatuz"* hitza kendu da

- 17.1 artikuluan, segurtasun juridikoa dela-eta, *“Eraikinen efizientzia energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duen apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretua”*ri egiten zitzaizkion erreferentzia guztiak honi egiten zaizkio orain: *“eraikinen efizientzia energetikoa ziurtatzeko indarrean dagoen araudia”*.
- 25.2 artikuluan argitu da artikulua ordezeko erregaiak erabiltzen dituzten ibilgailu berriei buruzkoa dela.
- Azken xedapenetatik lehenengoaren testua argiago jarri da. Honela dio orain: *“Eusko Legebiltzarrak, Arartekoak eta Kontuen Epaitegiak jasangarritasun energetikoko beren planak egingo dituzte, baina ez dute lege honetan xedatutakoa bete beharrik izango”*.

Artikuluei egindako ohar zehatzei dagokienez:

-Ez da egokitzat jo 1. artikulua aldatzea, gaur egungo testuak arauaren xedeari ondo erantzuten baitio, oro har. Izan ere, nahiz eta Aholku Batzorde Juridikoak iritzi administrazioen esparrua gaindi dezaketen alderdiak jorratzen direla, ez da hala, aintzat hartzen badugu administrazio publikoen jardura-jarraibideak izango diren interpretazio-printzipioen artean legearen betekizunak beste politika publiko batzuetan sartzea ezartzen dela, bereziki lurraldearen antolamenduarekin, hirigintzarekin eta garraio-azpiegiturekin zerikusia daukatenetan.

-2. artikuluari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 7.4.c) artikuluari egindako erreferentzia desegokia ezabatu da, eta berariaz aipatu da lehen xedapen gehigarria.

-Adierazitako irizpenean iradokitakoarekin bat etorritik, osatu egin da 3. artikulua, kontzeptuen definizioei buruzkoa: borondatezko hitzarmenaren definizioa sartu da (lege horren ondorioetarako, jakina).

-Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak beste ohar bat egin du 9. artikuluari buruz, jasangarritasun energetikoaren batzordeak arautzen baititu. Ohar horrek iradoki duenaren ildotik, bestelako idazkera eman zaio artikuluari, foru-eta toki-autonomiari zor zaion errespetua bermatzeko helburuarekin, eta, hartara, lekua egingo zaie agindutako eginkizuna betetzeko sortzen dituzten organoei ere.

- Era berean, 15.1 eta 18.1 artikuluetan agertzen diren erreferentzia-datak aldatu dira.

- Halaber, 24. artikulua zuzendu da; prestakuntza emateko eginbeharra Legearen 2. artikuluan jasotako entitate guztiei zabaldu zaie. 27. artikulua birdefinitu da, borondatezko hitzarmenei buruzkoa baita.

-Azkenik, beste era batera idatzi da bigarren xedapen gehigarria, argiagoa izan dadin, eta hau zehaztu da: administrazio bakoitzak onartuko duela bere energia-kontsumoa, eta horrek administrazio bakoitzaren helburuak ezartzeko abiapuntu gisa balioko duela.

Aranza Tapia Otaegi
EKONOMIAREN GARAPENeko ETA AZPIEGITURETAKO SAILBURUA

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**

Firmante: **Salas Cristóbal, Cristina**
Fecha de la firma: **14/07/2016 12:11:03**

MEMORIA SUCINTA PARA CONSEJO DE GOBIERNO SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS

1.- OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS

El núcleo de la política de la Unión Europea en materia de eficiencia energética lo constituye la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, que establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión con la finalidad de encauzar a los estados miembros hacia el cumplimiento de los objetivos de 2020 y de preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de ese año.

La Directiva 2012/27/UE exige a los estados miembros que establezcan objetivos indicativos nacionales de eficiencia energética para 2020, y se disponen normas vinculantes para los usuarios finales y los proveedores de energía.

La Unión ha considerado que todos los organismos públicos, a nivel nacional, regional y local deben servir de ejemplo en lo que se refiere a la eficiencia energética, en la medida en que se considera que el sector público constituye un motor importante para estimular la transformación del mercado hacia productos, edificios y servicios más eficientes, así como para provocar cambios de comportamiento en el consumo de energía por parte de los ciudadanos y las empresas. Por otra parte, la disminución del consumo de energía a través de medidas de mejora de la eficiencia energética permitiría también liberar recursos públicos muy necesarios para otras finalidades.

Los edificios de titularidad pública representan una parte muy importante del parque inmobiliario y, lo que es aún más importante, tienen una gran visibilidad ante la opinión pública. Por ello es necesario fijar un índice anual de renovación

de los edificios de la administración con la finalidad de mejorar su rendimiento energético.

En este sentido, el sector público vasco debe dar ejemplo en lo que se refiere a inversiones, mantenimiento y gestión energética de sus edificios e instalaciones. Por ello, la Directiva 2012 exige la reforma anual de al menos el 3% del parque inmobiliario propiedad de las administraciones centrales, a partir de 2014, y la adquisición de edificios, servicios y productos con un elevado rendimiento en términos de eficiencia energética, ámbito en el cual el sector público considera debe dar ejemplo.

En el ordenamiento interno, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, de carácter básico, formula como uno de los principios que han de guiar la acción de los poderes públicos el de ahorro y eficiencia energética y la promoción de las energías limpias, reducción de emisiones y eficaz tratamiento de residuos.

La ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanística, constituye también un importante fundamento de la disposición proyectada, en la medida en que, con arreglo al artículo tercero de esa ley, “los poderes públicos formularán y desarrollarán en el medio urbano las políticas de su respectiva competencia, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional”.

Conscientes de la importancia de ser eficientes energéticamente, el Gobierno Vasco trabaja desde hace años en este campo y se trata ahora de lograr la implicación de todas las administraciones públicas vascas en la consecución de estos objetivos, ya que, no cabe ninguna duda, de que los organismos públicos pueden y deben llevar a cabo la promoción del ahorro y la eficiencia energética. Esto se ha plasmado, en un primer nivel, en la aprobación del Decreto 175/2015, de 22 de setiembre, sobre la sostenibilidad energética del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, constituyéndose, por tanto, en el antecedente inmediato más cercano de la Ley que se informa si bien esta última resulta mucho más ambiciosa por lo que se refiere no solo al ámbito subjetivo de aplicación de la misma, sino también a su contenido.

El Decreto 178/2015, de 22 de setiembre, abordó, por lo que se refiere al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el ahorro, la eficiencia energética y el uso de las energías renovables en el mismo, con la intención de que el ahorro y la eficiencia dejaran de ser objetivos loables para convertirse en realidades constatables. Así, la citada norma establecía objetivos básicos, pero también medidas específicas y vinculadas a criterios temporales concretos que recalcan el papel ejemplarizante de esta administración.

Sin embargo, a pesar de su importancia, el Decreto no resultaba de aplicación al sector público foral y al municipal por lo que, teniendo en cuenta el peso del consumo energético de esta parte del sector público, se hacía necesario completar la actuación ejemplificadora de la administración abordándola también desde esta última perspectiva.

Por último, es preciso destacar que la Estrategia Energética de Euskadi 2030 contempla también, como uno de sus objetivos lograr la implicación en esa estrategia de todas las administraciones públicas vascas, siendo una de sus principales líneas de actuación promover una Administración pública vasca energéticamente más eficiente y sostenible, lo que supondrá, entre otras actuaciones, la adopción de medidas encaminadas a reducir el consumo en los servicios e instalaciones que dependan de ella y el impulso de las energías renovables en el ámbito de la misma.

Son los antecedentes citados los han determinado la elaboración de una disposición como la proyectada.

2.- PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NORMA.

El anteproyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas se ha tramitado a través de la aplicación informática “tramitagune” desarrollada para la tramitación electrónica, conforme a las instrucciones de tramitación de disposiciones de carácter general, aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010.

En la elaboración del texto se han observado las directrices para la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Órdenes y Resoluciones aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23.03.1993 y publicadas mediante Orden de 6 de abril de 1993, del Consejero de la Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico. Igualmente se han observado las prescripciones establecidas en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

De conformidad con lo establecido en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, antes citada, la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad dictó la **Orden de iniciación** expresando el objeto y finalidad de la norma, así como, una vez redactado el anteproyecto, **Orden aprobando el mismo** y ordenando continuar con los trámites correspondientes.

De ambas ordenes junto con el texto aprobado se dió la correspondiente publicidad en el espacio compartido de conocimiento “**Legesarea**”, tal y como se establece en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010, por el que se aprueban las instrucciones de tramitación en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. El texto del anteproyecto ha sido también objeto de publicación en “**transparencia**” de conformidad con las exigencias de la Ley 19/2013, de transparencia y derecho de acceso a la información pública.

Este Anteproyecto, de conformidad con lo establecido en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, se ha sometido a los siguientes informes, trámites y actuaciones necesarios para su aprobación:

Así, consta en el expediente la **Memoria Económica** que expresa la estimación del coste a que puede dar lugar, con la cuantificación de los gastos e ingresos y su repercusión en los Presupuestos de la Administración.

Por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad se emite en un principio Informe justificativo de ausencia de relevancia desde el punto de vista de género, por entender que se trata de una norma que afecta exclusivamente a aspectos organizativos de las administraciones públicas.

Sin embargo, EMAKUNDE considerando que la norma propuesta incide sobre aspectos sustantivos requiere, con fecha 2 de febrero de 2016, que el proyecto vaya acompañado del Informe de Impacto de Género.

En cumplimiento de dicho requerimiento se **emite el Informe de evaluación de impacto en función del género**, por venir así establecido en el artículo 19 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombre y en el punto 5 de las denominadas “*Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del género*”, aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21.08.2102.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de Disposiciones de Carácter General, se ha emitido **informe jurídico** en el que se analiza su fundamento objetivo, la adecuación de su contenido a la Ley y al Derecho y la observancia de las directrices de técnica normativa

Se ha efectuado **una evaluación del impacto de la disposición en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas**, conforme dispone el artículo 6 de la ley 16/2012, de 28 de junio, de

emprendedores del País Vasco y que se remitirá, en su momento, al Parlamento junto con el proyecto de Ley.

Trámite de Audiencia.

En cuanto al preceptivo trámite de audiencia el borrador de la norma propuesta ha sido remitido, para alegaciones, a las siguientes entidades:

- Ayuntamiento de Bilbao
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
- Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
- Asociación Vasca de Municipios (EUDEL)

- Juntas Generales de Bizkaia
- Juntas Generales de Alava
- Juntas Generales de Gipuzkoa

- Diputación Foral de Bizkaia
- Diputación Foral de Alava
- Diputación Foral de Gipuzkoa

- Euskalherriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco

- Lehendakaritza
- Departamento de Medio ambiente y Política Territorial
- Departamento de Salud
- Departamento de Seguridad
- Departamento de Empleo y Políticas Sociales
- Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura
- Departamento de Hacienda y Finanzas
- Departamento de Administración Pública y Justicia

Durante el periodo de audiencia se han presentado observaciones por los siguientes organismos:

- Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
- Juntas Generales de Alava

- Ayuntamiento de Bilbao
- Eudel

Tanto el contenido íntegro de estas alegaciones como la respuesta a las mismas constan en el documento “ *Memoria sucinta para COJUA del procedimiento seguido para la tramitación del Anteproyecto de la Ley de Sostenibilidad Energética de la Administraciones Públicas Vascas* “ al que, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, nos remitimos.

Sintéticamente podemos indicar que, a resultas de dicho trámite, se ha procedido a la realización de las siguientes modificaciones en el texto del Proyecto:

Exposición de Motivos:

A propuesta del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial se incluye un quinto párrafo en la Exposición de Motivos en los siguientes términos:

“Desde el punto de vista medioambiental, este anteproyecto de Ley también tiene su encaje. En efecto, la Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050, aprobada en el año 2015, para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo, establece entre sus metas la de disponer de una Administración pública vasca responsable, ejemplar y referente en cambio climático. Y señala que para lograr la implicación de todos los agentes de la sociedad vasca se debe impulsar una acción ejemplarizante desde todos los órganos de la Administración Pública Vasca. Para ello, es necesario llevar a cabo una coordinación horizontal y vertical, es decir, entre los diferentes departamentos del Gobierno Vasco, así como con los Ayuntamientos y Diputaciones Forales. Una de las principales líneas de actuación que se destaca para lograr los objetivos al 2050, es lograr una Administración pública cero emisiones”.

Artículo 3:

A propuesta de las Juntas Generales de Alava se ha eliminado el artículo 3.2 d) relativo al ámbito objetivo de la Ley.

Artículo 5:

Se ha admitido la propuesta del Ayuntamiento de Bilbao respecto al artículo 5 y se ha incluido un punto que hace referencia a la disminución de la contaminación por partículas, emisiones de NO₂.

Artículo 7:

7.2 a) se sustituye la expresión “Directrices de Ordenación del Territorio” por “Directrices de Ordenación Territorial.

7.4 Se sustituye “*evaluación estratégica del impacto ambiental*” por “*Evaluación Ambiental Estratégica*” y se admite la redacción alternativa propuesta por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de manera que el punto 4 del artículo 7 queda redactado como sigue:

“Cuando los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos a los que se refiere el apartado 2, se sometan a alguno de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica legalmente establecidos, no será necesario duplicar aquellos aspectos del estudio requerido en los apartados 1 y 3 que además vengán exigidos por la normativa que regula dichos procedimientos de evaluación ambiental”

7.5 Se elimina por considerar que se está incidiendo directamente en la regulación recogida en la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, que recoge en su artículo 12 las determinaciones que deben contener los PTPs.

Artículo 10

Se admite la alegación de EUDEL efectuada al artículo 10.1.a) relativa al contenido del inventario a realizar por las administraciones públicas excluyendo de la necesidad del mismo los casos contemplados en el 3.2.f) antes citado. Así la nueva redacción del 10.1 quedaría como sigue:

“1. Las Administraciones Públicas realizarán un inventario de edificios, parque móvil e instalaciones de alumbrado público existentes, dentro de su ámbito de actuación, que contendrá la siguiente información:

- a) *Inventario de los edificios e instalaciones de su titularidad, incluyendo su superficie en m² y el consumo y gasto energético de cada edificio. La anterior obligación no incluye los consumos en viviendas o locales en edificios públicos utilizados en el ámbito privado por particulares o empresas en régimen de alquiler...”*

Artículo 16

Se admite la alegación efectuada al artículo 16.2.b) sustituyéndose la expresión “su utilización durante su vida útil” por “analizando su ciclo de vida”

Artículo 17

Se admite la alegación efectuada al artículo 17.2 añadiéndose “siempre que el nivel de calificación sea inferior a B” con la finalidad, como indica EUDEL, de evitar actuaciones muy costosas y de eficacia relativa en ayuntamientos que ya hayan asumido obligaciones y mejoras de sus edificios hasta llegar a la calificación B.

Artículo 22

Se admite la observación efectuada al artículo 22 en el sentido de que tal y como está redactado la articulación de los planes de movilidad parece que es una obligación municipal mientras que en determinados ayuntamientos pequeños estos planes deben completarse con los planes de movilidad de carácter foral. Se modifica el artículo en ese sentido.

Disposición adicional segunda

Respecto de lo dispuesto en la Disposición adicional segunda a propósito de la aprobación del nivel base de referencia del consumo energético global se plantea la desventaja en la que se encuentran, de acuerdo al texto propuesto, aquellas administraciones que hayan establecido un nivel base o hayan actuado ya en materia de eficiencia energética.

Por ello se ha modificado la Disposición Adicional Segunda que queda redactada en los siguientes términos:

“En su determinación se deberá tomar en consideración la media de los tres últimos años anteriores a la entrada en vigor de esta ley. Alternativamente, se podrá tomar como nivel base de consumo energético el del último año anterior a la entrada en vigor de la misma u otro año de manera justificada y con el objeto de poner en valor actuaciones realizadas con anterioridad a la aprobación de esta ley.”

Disposición Adicional Cuarta

De oficio se elimina la Disposición Adicional Cuarta al constatar que los organismos referenciados ya disponen de canales de información adecuados con las empresas distribuidoras para la obtención de la información que se pretende.

MODIFICACIONES DEL TEXTO COMO CONSECUENCIA DEL INFOME DE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.

Conforme con lo dispuesto en la Ley 2/1988, de 5 de febrero, sobre creación de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer para la igualdad de Mujeres y Hombres y previa realización del informe de evaluación de impacto en función del género, Emakunde emite Informe relativo al Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad de las Administraciones Públicas Vascas en el que recomienda una serie de pautas de actuación que serán tenidas en consideración.

A requerimiento de dicho organismo se ha integrado la perspectiva de género al tratar de los principios que informan la Ley.

Por otra parte, con el fin de dar cumplimiento al mandato del artículo 46 de la Ley 4/2005, se ha modificado el artículo 22 relativo a los planes de movilidad recordando dicho compromiso.

“Artículo 22

***3.** El Plan deberá indicar con claridad los objetivos que persigue, las inversiones comprometidas por la Administración adoptante del plan y el horizonte temporal para su consecución y deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 4/2005*

El Plan y los estudios precisos para su realización se redactarán teniendo en cuenta los diferentes usos de la ciudad y del espacio que hombres y mujeres realizan, e incluirán propuestas para disminuir las posibles brechas de género con la finalidad de avanzar hacia el diseño de una ciudad integradora y corresponsable. “

Asimismo, en línea con lo requerido por Emakunde, se tendrán en cuenta las obligaciones establecidas en la Ley 2/2005, en cuantas actuaciones deriven de la ley proyectada.

Según lo establecido en el Decreto 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas emite informe proponiendo la inserción de una disposición en el Anteproyecto de Ley recordando la obligación de que toda información y publicación sobre sostenibilidad energética que las Administraciones Públicas Vascas pongan a disposición de la ciudadanía este redactada tanto en euskera como en castellano.

No se considera necesario, como propone el citado informe, que la Ley proyectada inserte una disposición recordando una obligación que ya está establecida en una disposición con rango de ley, la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

2.2.3.- INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN (DACIMA).

La Dirección de Atención a la Ciudadanía, conforme dispone el Decreto 188/2013, de 9 de abril, emite informe en el que valora positivamente la iniciativa proyectada efectuando una serie de consideraciones generales relativas a la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el funcionamiento de las Comisiones y a facilitar el acceso a la ciudadanía de la información pública sobre sostenibilidad energética en las administraciones públicas vascas que será tenida en consideración.

2.2.4.- INFORME DE LA JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 21.2.a).4) del Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre régimen de la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi se solicitó a la Junta Asesora de la Contratación Administrativa del País Vasco informe relativo al Anteproyecto sin que se haya evacuado informe alguno.

No obstante indicar que se ha tenido en consideración el informe emitido en relación con el “*Decreto para la Sostenibilidad Energética del Sector Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi*”.

MODIFICACIONES DEL TEXTO DERIVADAS DEL INFORME DE CONTROL ECONOMICO-NORMATIVO DE LA OFICINA DE CONTROL ECONOMICO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la CAE y el Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio de control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la administración de la CAE (art.41 y siguientes.) se evacuó el correspondiente informe que obra en el expediente

Como consecuencia de la información requerida por la Oficina de Control Económico se ha incorporado al procedimiento una nueva Memoria Económica, ampliada con detalle de la distribución de costes tanto por tipo de administración como por tipo de actuación.

MODIFICACIONES DEL TEXTO DERIVADAS DEL DICTAMEN DE LA COMISION JURIDICO ASESORA DE EUSKADI.

Por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se emite Dictamen nº 127/2016 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que incluye como ámbito de la función consultiva de la Comisión los Anteproyectos de ley, cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos.

El Dictamen, de carácter favorable, efectúa una serie de observaciones, algunas de las cuales se refieren a su articulado, siendo otras de carácter terminológico o de técnica legislativa.

Respecto de estas últimas, es necesario precisar que, siguiendo la recomendación efectuada por dicho órgano consultivo, se ha procedido a mejorar la estructura interna de la futura norma, utilizando un mismo criterio para clasificar internamente el contenido de los artículos de acuerdo con las Directrices para la elaboración de proyectos de normas.

En aras a la necesaria precisión y claridad del texto de la norma, se han efectuado las siguientes precisiones o modificaciones propuestas por la Comisión:

- Se ha eliminado el tercer párrafo de la Exposición de motivos por confuso y descontextualizado.
- En el artículo 13.3 se ha sustituido la expresión “*hoja de ruta*” por “*documento*”, más correcta terminológicamente hablando
- En el artículo 16.2.b) se ha eliminado la palabra “*analizando*”.
- En el artículo 17.1, por seguridad jurídica, todas las referencias que se hacían al “*Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de edificios*” se hacen ahora a “*la normativa vigente sobre certificación de eficiencia energética de los edificios*”.
- En el artículo 25.2 se aclara que el artículo se refiere a vehículos nuevos que utilicen combustibles alternativos.
- Se da una redacción más clarificadora a la Disposición Final Primera que ahora establece que “*el Parlamento, Ararteko y Tribunal de Cuentas elaboraran sus propios planes de sostenibilidad energética, sin que vengan obligadas al cumplimiento de las previsiones de la Ley*”.

Por lo que se refiere a las observaciones concretas efectuadas al articulado:

-No se considera adecuado modificar el artículo 1 por entender que, en su actual redacción, responde certeramente a lo que constituye, con carácter general, el objeto de la norma, pues si bien, como indica COJUA, se regulan aspectos que, a su juicio, pueden trascender del ámbito de las administraciones esto no es así si consideramos que entre los principios interpretativos que constituyen pautas de actuación de las Administraciones Públicas se establece la integración de los requisitos de la ley en otras políticas públicas, en especial en aquellas que tienen que ver con la ordenación del territorio, el urbanismo y las infraestructuras de transporte.

-Respecto del artículo 2 se ha eliminado la incierta referencia al artículo 7.4.c) del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores

de la Hacienda General del País Vasco y se hace una remisión específica a la Disposición Adicional primera.

-De conformidad con lo sugerido en el Dictamen indicado se completa el artículo 3, dedicado a las definiciones de conceptos con una relativa a lo que debe entenderse, a los efectos de esta Ley, por acuerdo voluntario.

-Respecto de la observación que COJUA efectúa al artículo 9 que regula las comisiones de sostenibilidad energética, se ha dado una nueva redacción al mismo con la finalidad de, en línea con lo sugerido, garantizar el debido respeto a la autonomía foral y local, dando cabida a los órganos que los diversos entes creen para cumplir con la misión encomendada.

-Igualmente se han modificado las fechas de referencia que aparecían en los artículos 15.1 y 18.1.

-Se corrige igualmente el artículo 24, extendiendo el deber de formación a todas las entidades recogidas en el artículo 2 de la Ley y se redefine el artículo 27 referente a los Acuerdos Voluntarios.

-Por último, se da una nueva redacción, mas clarificadora, a la Disposición adicional segunda, precisando que será cada administración la que aprobará su consumo energético, lo que servirá como punto de partida para el establecimiento de los objetivos de cada una de ellas.

Cristina Salas Cristóbal
**DIRECCION DE ENERGÍA, MINAS Y ADMINISTRACION
INDUSTRIAL.**



MEMORIA SUCINTA PARA COJUA DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA TRAMITACION DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS

1.- OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS

El núcleo de la política de la Unión Europea en materia de eficiencia energética lo constituye la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, que establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión con la finalidad de encauzar a los estados miembros hacia el cumplimiento de los objetivos de 2020 y de preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de ese año.

La Directiva 2012/27/UE exige a los estados miembros que establezcan objetivos indicativos nacionales de eficiencia energética para 2020, y se disponen normas vinculantes para los usuarios finales y los proveedores de energía.

La Unión ha considerado que todos los organismos públicos, a nivel nacional, regional y local deben servir de ejemplo en lo que se refiere a la eficiencia energética, en la medida en que se considera que el sector público constituye un motor importante para estimular la transformación del mercado hacia productos, edificios y servicios más eficientes, así como para provocar cambios de comportamiento en el consumo de energía por parte de los ciudadanos y las empresas. Por otra parte, la disminución del consumo de energía a través de medidas de mejora de la eficiencia energética permitiría también liberar recursos públicos muy necesarios para otras finalidades.

Los edificios de titularidad pública representan una parte muy importante del parque inmobiliario y, lo que es aún más importante, tienen una gran visibilidad ante la opinión pública. Por ello es necesario fijar un índice anual de renovación de los edificios de la administración con la finalidad de mejorar su rendimiento energético.

En este sentido, el sector público vasco debe dar ejemplo en lo que se refiere a inversiones, mantenimiento y gestión energética de sus edificios e

instalaciones. Por ello, la Directiva 2012 exige la reforma anual de al menos el 3% del parque inmobiliario propiedad de las administraciones centrales, a partir de 2014, y la adquisición de edificios, servicios y productos con un elevado rendimiento en términos de eficiencia energética, ámbito en el cual el sector público considera debe dar ejemplo.

En el ordenamiento interno, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, de carácter básico, formula como uno de los principios que han de guiar la acción de los poderes públicos el de ahorro y eficiencia energética y la promoción de las energías limpias, reducción de emisiones y eficaz tratamiento de residuos.

La ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanística, constituye también un importante fundamento de la disposición proyectada, en la medida en que, con arreglo al artículo tercero de esa ley, “los poderes públicos formularán y desarrollarán en el medio urbano las políticas de su respectiva competencia, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional”.

Conscientes de la importancia de ser eficientes energéticamente, el Gobierno Vasco trabaja desde hace años en este campo y se trata ahora de lograr la implicación de todas las administraciones públicas vascas en la consecución de estos objetivos, ya que, no cabe ninguna duda, de que los organismos públicos pueden y deben llevar a cabo la promoción del ahorro y la eficiencia energética. Esto se ha plasmado, en un primer nivel, en la aprobación del Decreto 175/2015, de 22 de setiembre, sobre la sostenibilidad energética del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, constituyéndose, por tanto, en el antecedente inmediato más cercano de la Ley que se informa si bien esta última resulta mucho más ambiciosa por lo que se refiere no solo al ámbito subjetivo de aplicación de la misma, sino también a su contenido.

El Decreto 178/2015, de 22 de setiembre, abordó, por lo que se refiere al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el ahorro, la eficiencia energética y el uso de las energías renovables en el mismo, con la intención de que el ahorro y la eficiencia dejaran de ser objetivos loables para convertirse en realidades constatables. Así, la citada norma establecía objetivos básicos, pero también medidas específicas y vinculadas a criterios temporales concretos que recalcan el papel ejemplarizante de esta administración.

Sin embargo, a pesar de su importancia, el Decreto no resultaba de aplicación al sector público foral y al municipal por lo que, teniendo en cuenta el peso del consumo energético de esta parte del sector público, se hacía necesario

completar la actuación ejemplificadora de la administración abordándola también desde esta última perspectiva.

Por último, es preciso destacar que la Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3e2020), aprobada por el Consejo de Gobierno en 2011, contempla también, como uno de sus objetivos lograr la implicación en esa estrategia de todas las administraciones públicas vascas, siendo una de sus principales líneas de actuación promover una Administración pública vasca energéticamente más eficiente y sostenible, lo que supondrá, entre otras actuaciones, la adopción de medidas encaminadas a reducir el consumo en los servicios e instalaciones que dependan de ella y el impulso de las energías renovables en el ámbito de la misma.

Son los antecedentes citados los han determinado la elaboración de una disposición como la proyectada.

2.- PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NORMA.

El anteproyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas se está tramitando a través de la aplicación informática “tramitagune” desarrollada para la tramitación electrónica, conforme a las instrucciones de tramitación de disposiciones de carácter general, aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010.

En la elaboración del texto que se somete a Dictamen se han observado las directrices para la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Órdenes y Resoluciones aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23.03.1993 y publicadas mediante Orden de 6 de abril de 1993, del Consejero de la Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico. Igualmente se han observado las prescripciones establecidas en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

De conformidad con lo establecido en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, antes citada, la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad dictó la **Orden de iniciación** expresando el objeto y finalidad de la norma, así como, una vez redactado el anteproyecto, **Orden aprobando el mismo** y ordenando continuar con los trámites correspondientes.

De ambas ordenes junto con el texto aprobado se dió la correspondiente publicidad en el espacio compartido de conocimiento “Legesarea”, tal y como se establece en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010, por el que se aprueban las instrucciones de tramitación en el

procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. El texto del anteproyecto ha sido también objeto de publicación en “transparencia” de conformidad con las exigencias de la Ley 19/2013, de transparencia y derecho de acceso a la información pública.

Este Anteproyecto, de conformidad con lo establecido en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, se ha sometido a los siguientes informes, trámites y actuaciones necesarios para su aprobación:

2.1 Informes y Memorias del Promotor de la iniciativa

2.1.1. Memoria Económica

Consta en el expediente la Memoria Económica que expresa la estimación del coste a que puede dar lugar, con la cuantificación de los gastos e ingresos y su repercusión en los Presupuestos de la Administración.

2.1.2.- Elaboración de Informe de evaluación de impacto en función del género

Por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad se emite Informe justificativo de ausencia de relevancia desde el punto de vista de género, por entender que se trata de una norma que afecta exclusivamente a aspectos organizativos de las administraciones públicas.

Sin embargo, EMAKUNDE considerando que la norma propuesta incide sobre aspectos sustantivos requiere, con fecha 2 de febrero de 2016, que el proyecto vaya acompañado del Informe de Impacto de Género.

En cumplimiento de dicho requerimiento se emite el Informe de evaluación de impacto en función del género, por venir así establecido en el artículo 19 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombre y en el punto 5 de las denominadas “*Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del género*”, aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21.08.2102.

2.1.3.- Emisión de Informe jurídico del Departamento

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de Disposiciones de Carácter General, se ha emitido informe jurídico en el que se analiza su

fundamento objetivo, la adecuación de su contenido a la Ley y al Derecho y la observancia de las directrices de técnica normativa

2.1.4 - Emisión de Informe de impacto en la empresa

Se ha efectuado una evaluación del impacto de la disposición en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas, conforme dispone el artículo 6 de la ley 16/2012, de 28 de junio, de emprendedores del País Vasco y que se remitirá, en su momento, al Parlamento junto con el proyecto de Ley.

Traslado del anteproyecto a los Departamentos del Gobierno Vasco afectados y a otras Administraciones Públicas que resulten afectados por la disposición.

Se ha dado participación y consulta en el procedimiento a los distintos Departamentos del Gobierno Vasco, Universidad del País Vasco. Así mismo, se ha remitido el texto como administraciones directamente afectadas por la regulación prevista a las Diputaciones Forales, a EUEDEL y a los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia-San Sebastián.

2.2 Informes y Dictámenes preceptivos evacuados por otros órganos

2.2.1.- Informe de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

Conforme con lo dispuesto en la Ley 2/1988, de 5 de febrero, sobre creación de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer para la igualdad de Mujeres y Hombres y previa realización del informe de evaluación de impacto en función del género, Emakunde emite Informe relativo al Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad de las Administraciones Públicas Vascas en el que recomienda una serie de pautas de actuación que serán tenidas en consideración.

A requerimiento de dicho organismo se ha integrado la perspectiva de género al tratar de los principios que informan la Ley.

Por otra parte, con el fin de dar cumplimiento al mandato del artículo 46 de la Ley 4/2005, se ha modificado el artículo 22 relativo a los planes de movilidad recordando dicho compromiso.

“Artículo 22

3. El Plan deberá indicar con claridad los objetivos que persigue, las inversiones comprometidas por la Administración adoptante del plan y el horizonte temporal para su consecución y deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 4/2005

El Plan y los estudios precisos para su realización se redactarán teniendo en cuenta los diferentes usos de la ciudad y del espacio que hombres y mujeres realizan, e incluirán propuestas para disminuir las posibles brechas de género con la finalidad de avanzar hacia el diseño de una ciudad integradora y corresponsable. “

Asimismo, en línea con lo requerido por Emakunde, se tendrán en cuenta las obligaciones establecidas en la Ley 2/2005, en cuantas actuaciones deriven de la ley proyectada.

Por lo que se refiere a la necesidad de la aportación de datos desagregados por sexo manifestar que, si bien en un principio se tuvo en cuenta dicha posibilidad, se ha considerado que, por criterios de efectividad, deberían ser cada una de las entidades y administraciones afectadas las que integren dichos datos en las actuaciones que deriven de la Ley proyectada.

2.2.2.- Informe del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura

Según lo establecido en el Decreto 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas emite informe proponiendo la inserción de una disposición en el Anteproyecto de Ley recordando la obligación de que toda información y publicación sobre sostenibilidad energética que las Administraciones Públicas Vascas pongan a disposición de la ciudadanía este redactada tanto en euskera como en castellano.

No se considera necesario, como propone el citado informe, que la Ley proyectada inserte una disposición recordando una obligación que ya está establecida en una disposición con rango de ley, la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

2.2.3.- Informe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (DACIMA).

La Dirección de Atención a la Ciudadanía, conforme dispone el Decreto 188/2013, de 9 de abril, emite informe en el que valora positivamente la iniciativa proyectada efectuando una serie de consideraciones generales relativas a la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el funcionamiento de las Comisiones y a facilitar el acceso a la ciudadanía de la información pública sobre sostenibilidad energética en las administraciones públicas vascas que será tenida en consideración.

2.2.4.- Informe de la Junta Asesora de Contratación

Con fecha 10 de marzo de 2016, se solicitó a la Junta Asesora de la Contratación Administrativa del País Vasco informe relativo al Anteproyecto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21.2.a).4) del Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre régimen de la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

A principios del mes de mayo, no habiéndose emitido el citado Informe se contacta con dicho organismo que solicita, se le remita el texto del Anteproyecto por correo electrónico a los efectos de poder evacuar el correspondiente Informe. El 3 de mayo se efectúa la remisión sin que, hasta la fecha, conste que se haya emitido informe alguno.

2.2.5 Informe de control económico-normativo de la Oficina de Control Económico

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la CAE y el Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio de control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración de la CAE (art.41 y siguientes.) se evacuó el correspondiente informe que obra en el expediente

Como consecuencia de la información requerida por la Oficina de Control Económico se ha incorporado al procedimiento una nueva Memoria Económica, ampliada con detalle de la distribución de costes tanto por tipo de administración como por tipo de actuación.

En otro orden de cosas, respecto de la afirmación efectuada por la OCE de que no se acredita el sometimiento del anteproyecto a la consideración de las administraciones públicas concernidas en ninguna fase procedimental manifestar que, como ya indicábamos en los inicios de esta memoria y consta a continuación, se ha dado participación y consulta en el procedimiento, y así consta acreditado en el expediente, a los distintos Departamentos del Gobierno Vasco, Universidad del País Vasco, y como administraciones directamente afectadas por la regulación prevista a las Diputaciones Forales, EUDEL, y a los ayuntamientos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia. San Sebastián.

A mayor abundamiento, indicar que todos los organismos directamente afectados fueron, asimismo, objeto de consulta ya con anterioridad al inicio de la tramitación administrativa de esta norma.

2.3. Fase de audiencia

En cuanto al preceptivo trámite de audiencia el borrador de la norma propuesta ha sido remitido, para alegaciones, a las siguientes entidades:

- Ayuntamiento de Bilbao
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
- Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
- Asociación Vasca de Municipios (EUDEL)

- Juntas Generales de Bizkaia
- Juntas Generales de Alava
- Juntas Generales de Gipuzkoa

- Diputación Foral de Bizkaia
- Diputación Foral de Alava
- Diputación Foral de Gipuzkoa

- Euskalherriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco

- Lehendakaritza
- Departamento de Medio ambiente y Política Territorial
- Departamento de Salud
- Departamento de Seguridad
- Departamento de Empleo y Políticas Sociales
- Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura

- Departamento de Hacienda y Finanzas
- Departamento de Administración Pública y Justicia

Durante la fase de audiencia se han recibido alegaciones de las siguientes entidades:

- Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
- Juntas Generales de Alava
- Ayuntamiento de Bilbao
- Eudel

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial

ALEGACIONES:

- **Sobre el artículo 7:** *“Integración en la ordenación del territorio y el urbanismo”* efectúa manifestaciones de diversa índole por lo que procuraremos una agrupación de las mismas.

En primer lugar efectúa una serie de precisiones de tipo terminológico que se admiten y recogen en el anteproyecto, en concreto:

Artículo 7.2 a) se sustituye la expresión “Directrices de Ordenación del Territorio” por “Directrices de Ordenación Territorial”.

Artículo 7.4 se sustituye “evaluación estratégica del impacto ambiental” por “Evaluación Ambiental Estratégica” y se admite la redacción alternativa propuesta de manera que el punto 4 del artículo 7 queda redactado como sigue:

“Cuando los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos a los que se refiere el apartado 2, se sometan a alguno de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica legalmente establecidos, no será necesario duplicar aquellos aspectos del estudio requerido en los apartados 1 y 3 que además vengán exigidos por la normativa que regula dichos procedimientos de evaluación ambiental”

Sobre el 7.3 manifiesta que tampoco resulta adecuado exigir para el estudio de sostenibilidad energética que, en su caso, debiera acompañar a estos documentos el contenido concreto y obligatorio establecido (a saber, adaptación a las exigencias de sostenibilidad energética, implantación de energías renovables en los edificios, estudio de movilidad).

COMENTARIOS:

No se admite por considerarlo adecuado en su ámbito de aplicación y cuando tenga sentido al ser los tres ejes claves de los objetivos de la Ley proyectada.

En relación con el **punto 5 del artículo 7** advierte que se está incidiendo directamente en la regulación recogida en la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, que recoge en su artículo 12 las determinaciones que deben contener los PTPs por lo que se admite y elimina el punto cinco del artículo 7

- **Respecto del artículo 14** relativo a porcentajes de ahorro de energía pone de manifiesto que los objetivos señalados en el mismo no se corresponden con los contemplados en la Estrategia Vasca de Cambio Climático, que son más ambiciosos. Propone, asimismo, efectuar en la exposición de motivos una referencia a la Estrategia Vasca de Cambio Climático.

COMENTARIOS:

No es correcto el comentario. La EVCC 2050 plantea objetivos al año 2050 e intermedios al 2030. No hace referencia a objetivos al 2025. Por lo tanto no son comparables, e incluso si lo fueran, los de la EVCC son generales para el conjunto de sectores consumidores, no son de un sector concreto como el de la Administración Vasca. Los objetivos que el presente anteproyecto de Ley plantea de reducción de un 25% del consumo de energía, disponer del 25% de edificios con instalaciones renovables y adaptar el parque móvil y flotas públicas de transporte a alternativas al horizonte 2025, supone un gran reto para la administración vasca. Y su logro supondría reducir las emisiones de CO₂ del subsector de la administración vasca un 25% al 2025, es decir, en 10 años. Además la línea de actuación 22 de la EVCC 2050 mencionada (Administración pública cero emisiones), pretende lograr la Meta de la Administración pública vasca al año 2050. Esta línea de actuación también se ha concretado en el PMA 2020, en la actuación 54 de Impulsar los Proyectos Clave, en el proyecto 1 de Administración ambientalmente ejemplar, que se concreta en el desarrollo del Decreto de Sostenibilidad Energética y la Ley que aquí se propone.

Se admite la siguiente mención como 5º párrafo en la exposición de motivos:

“Desde el punto de vista medioambiental, este anteproyecto de Ley también tiene su encaje. En efecto, la Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050, aprobada en el año 2015, para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo, establece entre sus metas la de disponer de una Administración pública

vasca responsable, ejemplar y referente en cambio climático. Y señala que para lograr la implicación de todos los agentes de la sociedad vasca se debe impulsar una acción ejemplarizante desde todos los órganos de la Administración Pública Vasca. Para ello, es necesario llevar a cabo una coordinación horizontal y vertical, es decir, entre los diferentes departamentos del Gobierno Vasco, así como con los Ayuntamientos y Diputaciones Forales. Una de las principales líneas de actuación que se destaca para lograr los objetivos al 2050, es lograr una Administración pública cero emisiones”.

- **Respecto del artículo 16** del texto propuesto, que se refiere a la renovación de instalaciones, equipos, flotas y vehículos considera que dicho artículo debería aplicarse a toda la contratación y no solo a los contratos de regulación armonizada así como que el mandato del artículo debe ir dirigido a valorar los criterios pero no a establecerlos imperativamente.

Por ello propone una redacción alternativa para el artículo 16.2 del anteproyecto.

COMENTARIOS:

No se admite la alegación en la medida en que “ *el establecimiento de criterios diversos en la contratación de la renovación de instalaciones, equipos y flotas de vehículos, que viene a suponer una trasposición del contenido del artículo 6 de la Directiva Comunitaria 2012/27/UE, de 25 de octubre, relativa a la eficiencia energética, solo puede referirse a los contratos sujetos a regulación armonizada*”. Así lo puso de manifiesto la Junta Asesora de la Contratación Administrativa con ocasión de su informe al proyecto de Decreto para la Sostenibilidad Energética de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Juntas Generales de Alava

ALEGACIONES.-

El borrador de la Ley, según las Juntas Generales establece en algunos puntos unos plazos excesivamente elevados por lo que propone la modificación de los artículos 3 y 12 del texto proyectado.

- Respecto del artículo 3.2 d) relativo al ámbito objetivo de la Ley propone sustituir en la exención prevista para los edificios que tengan prevista su venta en un plazo inferior a 5 años por el de 3 años.
- Respecto del artículo 12.5 relativo a las auditorías energéticas plantea que las mismas en lugar de renovarse cada 6 años se renueven cada 5

debiéndose realizar la nueva antes de que transcurran seis meses del transcurso de dicho plazo.

COMENTARIOS.-

Se elimina el apartado 3.2 d).

Respecto del 12.5, no se admiten por coherencia con lo establecido en el Decreto 175/2016 para la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Ayuntamiento de Bilbao

ALEGACIONES

- Respecto al artículo 5 propone incluir un punto que haga referencia a la disminución de la contaminación por partículas, emisiones de NO₂.

COMENTARIOS:

Se admite y se incorpora al texto.

- La posibilidad de integrar las propuestas de la ley en planes, programas o certificaciones que persiguen objetivos comunes a los de la ley, como el Pacto de los Alcaldes y PAES, Compact of Mayors etc., en los que ya están inmersas algunas administraciones con la finalidad de racionalizar esfuerzos.

COMENTARIOS:

El capítulo denominado “Instrumentos Voluntarios y de Fomento” dedica un artículo íntegramente a los Acuerdos Voluntarios ya contempla con carácter general dicha posibilidad por lo que no se considera necesario

- En el ámbito de Instrumentos Voluntarios y de Fomento solicita el impulso expreso en la Ley de medidas fiscales que animen tanto a la ciudadanía como a otros sectores a la transición hacia la sostenibilidad energética, mediante la adquisición de vehículos eficientes, instalación de fuentes de energía renovables en las viviendas etc.

COMENTARIOS:

Efectivamente el proyecto propuesto no contempla medidas fiscales o de fomento que animen a la ciudadanía u otros sectores privados a la sostenibilidad energética por entender que no constituye este su objeto. Ello no obsta para que, reconociendo la efectividad de medidas de esta índole, se articulen a través de las correspondientes disposiciones

normativas aprobadas a instancia o por los Departamentos u Organismos que, en cada caso, resulten competentes.

Asociación de Municipios Vascos, EUDEL

Por parte de EUDEL se valora positivamente el Anteproyecto de Ley sometido a Audiencia por considerarlo necesario al aportar una forma de trabajo lógica y adecuada para mejorar la gestión energética en los ayuntamientos vascos. Adecuada consideran también el conjunto de obligaciones que se plantean para la consecución de un resultado coherente y continuado en el tiempo respecto a la consecución de un ahorro energético.

ALEGACIONES

Las alegaciones efectuadas a su articulado son, en esencia, las siguientes:

- Para el artículo 4 efectúa una serie de consideraciones respecto de algunas de las definiciones recogidas en el mismo que se desestiman en algunos casos por su obviedad y en otros porque será el desarrollo posterior de la norma el modo más adecuado para concretar dichos aspectos.
- No se admite la alegación relativa a las exclusiones recogidas en el artículo 3.2 para evitar agravios comparativos con los edificios de viviendas de nueva construcción de promotores públicos destinados al alquiler.
- Se admite la alegación efectuada al artículo 10.1.a) relativa al contenido del inventario a realizar por las administraciones públicas excluyendo de la necesidad del mismo los casos contemplados en el 3.2.f) antes citado. Así la nueva redacción del 10.1 quedaría como sigue:

“1. Las Administraciones Públicas realizarán un inventario de edificios, parque móvil e instalaciones de alumbrado público existentes, dentro de su ámbito de actuación, que contendrá la siguiente información:

- a) Inventario de los edificios e instalaciones de su titularidad, incluyendo su superficie en m² y el consumo y gasto energético de cada edificio. La anterior obligación no incluye los consumos en viviendas o locales en edificios públicos utilizados en el ámbito privado por particulares o empresas en régimen de alquiler...”*

- Se admite la alegación efectuada al artículo 16.2.b) sustituyéndose la expresión “su utilización durante su vida útil” por “analizando su ciclo de vida”
- Se admite la alegación efectuada al artículo 17.2 añadiéndose “siempre que el nivel de calificación sea inferior a B” con la finalidad, como indica EUDEL, de evitar actuaciones muy costosas y de eficacia relativa en ayuntamientos que ya hayan asumido obligaciones y mejoras de sus edificios hasta llegar a la calificación B.
- No se admite la modificación del título propuesta para el artículo 18 porque en el caso de un edificio que no es nuevo es difícil exigirle que sea de consumo casi nulo.
- Se desestima la observación efectuada al artículo 19 sobre que sería conveniente recomendar un estándar urbanístico, complementario a la dotación de aparcamiento así como establecer una única red autonómica de puntos de recarga de vehículos eléctrico porque, aun cuando se considera positiva la aportación efectuada, la misma escapa del ámbito de la norma que se propone.
- e admite la observación efectuada al artículo 22 en el sentido de que tal y como está redactado la articulación de los planes de movilidad parece que es una obligación municipal mientras que en determinados ayuntamientos pequeños estos planes deben completarse con los planes de movilidad de carácter foral. Se modifica el artículo en ese sentido.

S

Respecto de lo dispuesto en la Disposición adicional segunda a propósito de la aprobación del nivel base de referencia del consumo energético global plantea la desventaja en la que se encuentran, de acuerdo al texto propuesto, aquellas administraciones que hayan establecido un nivel base o hayan actuado ya en materia de eficiencia energética.

Se admite y se modifica la Disposición Adicional Segunda que queda redactada en los siguientes términos:

“En su determinación se deberá tomar en consideración la media de los tres últimos años anteriores a la entrada en vigor de esta ley. Alternativamente, se podrá tomar como nivel base de consumo energético el del último año anterior a la entrada en vigor de la misma u otro año de manera justificada y con el objeto de poner en valor actuaciones realizadas con anterioridad a la aprobación de esta ley.”

Disposición Adicional Tercera

A la Disposición Adicional Tercera pone de manifiesto que ya existe una definición de “edificio de consumo casi nulo” en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, que se rechaza por tratarse de un comentario erróneo. El Real Decreto citado no contiene una definición de dicho concepto sino que se limita a establecer, en su anexo I, los elementos a considerar para su cálculo pero dicho anexo deber ser objeto de desarrollo por cada país.

De oficio se elimina la Disposición Adicional Cuarta al constatar que los organismos referenciados ya disponen de canales de información adecuados con las empresas distribuidoras para la obtención de la información que se pretendía.

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **Salas Cristóbal, Cristina**
Fecha de la firma: **17/06/2016 11:48:45**
Validación de la firma:

Cristina Salas Cristóbal
DIRECCION DE ENERGÍA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL.

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN
JASANGARRITASUN ENERGETIKOARI BURUZKO LEGEAREN
AURREPROIEKTUAREN MEMORIA LABURRA GOBERNU
KONTSEILUARENTZAT****1.- HELBURUAK ETA OINARRIAK**

Efizientzia energetikoari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 2012/27/UE Zuzentarauak osatzen du Europar Batasunak efizientzia energetikoaren alorrean duen politikaren muina. Zuzentarau horrek Europar Batasunaren baitan efizientzia energetikoa sustatzeko neurrien esparru komuna ezartzen du, estatu kideak 2020ko helburuak betetzera bideratzeko eta urte horretatik aurrera efizientzia energetikoari lotuta geroko hobekuntzetarako bidea prestatzeko.

2012/27/UE Zuzentarauak estatu kideei eskatzen die efizientzia energetikoari lotutako helburu nazional adierazgarriak 2020rako ezar ditzatela, eta energiaren azken erabiltzaileentzat eta hornitzaileentzat arau lotesleak xedatzen ditu.

Europar Batasunaren iritziz, erakunde publiko guztiek, hau da, erakunde nazionalak, lurraldekoak eta tokikoak, eredugarriak izan behar dute efizientzia energetikoari dagokionez, sektore publikoa motor garrantzitsutzat jotzen den heinean merkatuaren eraldaketa sustatzeko produktu, eraikin eta zerbitzu eraginkorrak eskaintzeari begira, baita energia-kontsumoan portaera-aldaketak sorrarazteko ere herritarren eta enpresen aldetik. Beste alde batetik, efizientzia energetikoa hobetzeko neurrien bidez energia-kontsumoa gutxitzeak aukera emango luke, baita ere, beste helburu batzuetarako oso beharrezkoak diren baliabide publikoak askatzeko.

Titulartasun publikoko eraikinak oso zati garrantzitsua dira higiezinaren parkean, eta are garrantzitsuagoa da ikusgaitasun handia dutela iritzi publikoaren aurrean. Horregatik, administrazioaren eraikinen berritze-indizea finkatu behar da, haien energia-errendimendua hobetzeko helburuar ekin.

Ildo horretatik, euskal sektore publikoak eredugarri izan behar du bere eraikin eta instalazioetako inbertsioei, mantentzeari eta kudeaketa energetikoari dagokienez. Horregatik, 2012ko Zuzentarauak exijitzen du administrazio zentralen jabetzakoak diren higiezinaren parkearen % 3 gutxienez eraberritzea

urtero, 2014tik aurrera, eta errendimendu handiko eraikin, zerbitzu eta produktuak eskuratzea efizientzia energetikoaren ikuspegitik, arlo horretan eredugarri izan behar duela uste baitu.

Ekonomia Iraunkorrari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legeak, oinarrizko izaera duenak, ezartzen du botere publikoen ekintzan gidari izan behar duen printzipioetako bat aurrezpena, efizientzia energetikoa eta energia garbien sustapena, isurkien murrizketa eta hondakinen tratamendu eraginkorra dela.

Ekainaren 26ko 8/2013 Legea, birgaitzeari eta hiri-berroneratze eta -berrikuntzari buruzkoa, proiektatutako xedapenaren oinarri garrantzitsua da, hirugarren artikuluari jarraikiz honako hau ezartzen duen heinean: "Botere publikoek dagozkien eskumeneko politikak formulatu eta garatuko dituzte hirigunean, betiere ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren arloko jasangarritasunaren, lurralde-kohesioaren, efizientzia energetikoaren eta konplexutasun funtzionalaren printzipioei jarraituz".

Energiari dagokionez efizienteak izateak daukan garrantziaren jakitun, Eusko Jaurlaritza aspaldidanik ari da alor horretan lanean, eta orain EAEko administrazio publiko guztiak inplikatzeko lortu nahi da, helburu horiek lortzeko, izan ere, zalantzarik gabe, erakunde publikoek aurrezpena eta efizientzia energetikoa susta dezakete eta hala egin behar dute. Hori gauzatzeko, lehen maila batean, onartu da irailaren 22ko 175/2015 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren jasangarritasun energetikoari buruzkoa, eta, hortaz, txosten honen helburu den legearen aurrekaririk hurbilena da, nahiz eta Legea askoz asmo handiagokoa izan, ez bakarrik hura aplikatzeko eremu subjektiboari dagokionez, baizik eta haren edukiari dagokionez ere.

Irailaren 22ko 178/2015 Dekretuak arautu zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoari dagokionez, bertako aurrezpena, efizientzia energetikoa eta energia berriztagarrien erabilera, aurrezpena eta efizientzia helburu goresgarritzat hartzeari utzi eta errealitate konstatagarri bihurtzeko. Horrela, bada, aipatutako arauak oinarrizko helburuak ezartzen zituen, baina neurri espezifikoak eta denbora-irizpide zehatzei lotutakoak ere bai, administrazio honek eredugarri izateko duen xedea nabarmenduz.

Hala eta guztiz ere, eta oso garrantzitsua izan arren, dekretua ez zen foru- eta uda-sektore publikoan aplikatzekoa, eta, beraz, sektore publikoaren zati horrek energiaren kontsumoan duen pisua kontuan hartuta, ikusi zen beharrezkoa zela administrazioaren jarduketa eredugarria osatzea, azken ikuspegi horretatik ere helduz.

Azkenik, nabarmentzekoa da Euskadiko Energia Estrategia 2030 berak helburutzat duela, besteak beste, estrategia horretan EAEko administrazio publiko guztien inplikazioa lortzea. Estrategia horren jarduketa-eremu nagusietako bat da energia-arloan efizienteagoa eta jasangarriagoa izango den euskal administrazio publikoa sustatzea, eta horrek berekin ekarriko du, besteak beste, administrazio publikoen mende dauden instalazio eta zerbitzuetan kontsumoa murrizteko neurriak hartzea eta bertan energia berriztagarriak bultzatzea.

Aipatutako aurrekariak eragin dute proiektatua bezalako xedapena prestatzea.

2.- ARAUA EGITEKO PROZEDURA.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legearen aurreproiektua izapidetze elektronikorako garatutako “Tramitagune” aplikazio informatikoaren bidez izapidetu da, Gobernu Kontseiluaren 2010eko abenduaren 28ko Erabakiaren bidez onartutako xedapen orokorrak izapidetzeko jarraibideen arabera.

Testua prestatzean kontuan hartu dira Gobernu Kontseiluaren 1993ko martxoaren 23ko Erabakiaren bidez onartu eta Lehendakaritza, Lege Araubide eta Autonomia Garapenerako sailburuaren 1993ko apirilaren 6ko Aginduaren bidez argitaratutako gidalerroak, lege-proiektuak, dekretuak, aginduak eta ebazpenak egitekoak. Halaber, xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legean ezarritako xedapenak bete dira.

Goian aipatutako abenduaren 22ko 8/2003 Legean xedatutakoaren arabera, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak **hasierako agindua** eman zuen arauaren helburua eta xedea adieraziz eta, aurreproiektua idatzitakoan, hura **onartzeko** eta dagozkion izapideak egiten jarraitzeko **agindua** ere bai.

Agindu horiek “**Legesarea**” ezagutza-esparru partekatuan argitaratu ziren, Gobernu Kontseiluaren xedapen orokorrak egiteko prozeduran izapidetze-jarraibideak onartzen dituen 2010eko abenduaren 28ko erabakian xedatutakoa betez. Aurreproiektuaren testua “**gardena**” gardentasun-atarian ere argitaratu da, gardentasunari eta informazio publikoa eskuratzeko eskubideari buruzko 19/2013 Legeari jarraikiz.

Abenduaren 22ko 8/2003 Legean ezarritakoarekin bat etorritz, aurreproiektu hau onartzeko, txosten, izapide eta jarduketa hauek gauzatu dira:

Espedientean **Memoria Ekonomikoa** jaso da, izan dezakeen kostuaren estimazioa adierazten duena, eta gastu eta sarrerak eta Administrazioaren Aurrekontuetan duten eragina kuantifikatu dira.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak, hasiera batean, genero-ikuspuntutik garrantzirik gabekoa dela justifikatzen duen Txostena egin du, administrazio publikoen antolamenduarekin zerikusia duten alderdiei soilik eragiten diela uste izateagatik.

Dena den, EMAKUNDEren iritziz proposatutako arauak funtsezko alderdiei eragiten die, eta proiektuarekin batera Genero Eraginaren Txostena aurkez zedila errekeritu zuen 2016ko otsailaren 2an.

Errekerimendu hori betez, **Generoaren arabera eraginaren ebaluazioaren txostena** egin da, hala baitago ezarrita Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19. artikulua eta "*Genero-eraginaren aurreko ebaluazioa gauzatzeari buruzko jarraibideak*" izeneko 5. puntuan; azken horiek Gobernu Kontseiluak 2012-08-21ean onartu zituen.

Xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 7.3 artikuluari jarraikiz, **txosten juridikoa** egin da. Bertan, legearen aurreproiektuaren funts objektiboa aztertu da, bai eta edukia Legearekin eta Zuzenbidearekin bat datorren eta lege-proiektuak araugintza-teknikaren gaineko jarraibideak betetzen dituen ere.

Xedapenak enpresak sortzearen, abian jartzearen eta funtzionamenduaren ginean izango duen eraginari buruzko ebaluazioa egin da, Euskadiko ekintzaileei eta enpresa txikiari laguntzeko ekainaren 28ko 16/2012 Legearen 6. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Entzunaldiaren izapidea.

Entzunaldiaren nahitaezko izapideari dagokionez, proposatutako arauaren zirriborroa honako erakunde hauei bidali zaie, alegazioak egin ahal izateko:

- Bilboko Udala

- Gasteizko Udala
- Donostiako Udala
- Euskadiko Udalen Elkarte (EUDEL)

- Bizkaiko Batzar Nagusiak
- Arabako Batzar Nagusiak
- Gipuzkoako Batzar Nagusiak

- Bizkaiko Foru Aldundia
- Arabako Foru Aldundia
- Gipuzkoako Foru Aldundia

- Euskal Herriko Unibertsitatea

- Lehendakaritza
- Ingurumen eta Lurralde Politika Saila
- Osasun Saila
- Segurtasun Saila
- Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
- Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila
- Ogasun eta Finantza Saila
- Herri Administrazio eta Justizia Saila

Entzunaldian, honako erakunde hauek oharrak aurkeztu dituzte:

- Ingurumen eta Lurralde Politika Saila
- Arabako Batzar Nagusiak
- Bilboko Udala
- Eudel

Alegazio hauen eduki osoa eta haiei emandako erantzuna “*Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legearen aurreproiektua izapidetzeko prozeduraren memoria laburra Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarentzat*” izeneko dokumentuan daude, eta, beharrezkoak ez diren errepikapenak saihestearren, bertan adierazitakora joko dugu.

Laburbilduz, esan dezakegu, izapide horren ondorioz, proiektuaren testuan honako aldaketa hauek egin direla:

Zioen azalpena:

Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak proposatuta, bosgarren paragrafoa gehitu da Zioen Azalpenean. Honako hau dio:

“Ingurumenaren ikuspegitik, Legearen aurreproiektu honek badauka tokia. Izan ere, Klima Aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategiak, 2015ean onartuak, berotegi-efektuko gasen isurketa epe luzera murrizteko helburuak lortzeko hainbat xede ezarri ditu, eta haietako bat EAeko Administrazio Publikoa klima-aldaketaren arloan arduratsua, eredugarria eta erreferentea izatea da. Eta EAeko gizarteko eragile guztien inplikazioa lortzeko EAeko administrazio publikoko organo guztiak eredu izatea bultzatu behar da. Horretarako, koordinazio horizontala eta bertikala gauzatu behar da, hau da, Eusko Jaurlaritzaren sailen artekoa, eta bai udalekikoa eta foru-aldundiekikoa ere. 2050erako helburuak lortzeko nabarmentzen den jarduketa-eremu nagusietako bat da Administrazio publikoak zero isurketa egitea lortzea.”

3 artikulua:

Arabako Batzar Nagusiek proposatuta, legearen 3.2 d) artikulua, eremu objektiboari buruzkoa, ezabatu egin da.

5 artikulua:

Bilboko Udalak 5. artikuluari buruz egindako proposamena onartu da, eta, hortaz, partikula bidezko eta NO₂ isurketa bidezko kutsadura gutxitzea aipatzen duen puntu bat sartu da.

7. artikulua:

7.2 a) "Lurraldearen Antolamenduko ildo nagusiak" kendu eta, haren ordez, "Lurralde Antolamenduko ildo nagusiak" jarri da.

7.4.- *“Ingurumen-inpaktuaren ebaluazio estrategiko ”* kendu eta, haren ordez, *“Ingurumen Ebaluazio Estrategikoa”* jarri da, eta Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak proposatutako ordezkotestua onartu da. Hortaz, 7. artikulua 4. zenbakia honela geratuko da idatzita:

"Lurralde-antolakuntzako tresnak eta garraio-azpiegituretako planak, programak eta proiektuak 2. zenbakian aipatzen direnak lege ezarritako ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozeduretako baten mende jartzen badira, ez da beharrezko izango artikulua honen 1. eta 3. zenbakietan eskatutako azterketaren alderdiak bikoiztea, ingurumena ebaluatzeko prozedura horiek arautzen dituen araudian ere exijitzen direnak".

7.5.- Ezabatu egin da, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako maiatzaren 31ko 4/1990 Legean jasotako arautzean zuzenean eragiten duela irizteagatik. Lege horren 12. artikuluan LPPek (Lurralde Plan Partzialak) eduki beharreko zehaztapenak biltzen dira.

10. artikulua:

EUDELe 10.1a) artikuluari (administrazio publikoek egin beharreko inbentarioaren edukari buruzkoa) egindako alegazioa onartu da, eta ez dute hura behar izango lehen aipatutako 3.2.f) artikuluan azaldutako kasuek. Horrenbestez, 10.1 artikulua testua honela geratuko litzateke:

“1.- Administrazio publikoek beren jarduera-eremuaren barruan dituzten eraikinen, ibilgailu-atalen eta argiteria publikoko instalazioen inbentarioa egin behar dute. Informazio hau jaso behar da inbentarioan:

- a) *Dagokion administrazioaren titulartasuneko eraikinen eta instalazioen inbentarioa, bakoitzak m²-tan duen azalera eta energia-kontsumo eta -gastua. Aurreko betebeharrak ez dira sartzen eraikin publikoetan egon eta partikularrek edo enpresek alokairuan eremu pribatuan erabiltzen dituzten etxebizitza edo lokaletako kontsumoak...”*

16. artikulua:

16.2.b) artikuluari egindako alegazioa onartu da. Hortaz, "haiek balio-bizitzan zehar erabiltzeak" kendu eta, haren ordez, "haien bizi-zikloa aztertuz" jarri da.

17. artikulua:

17.2 artikuluari egindako alegazioa onartu da. Hortaz, "betiere kalifikazio-maila Btik beherakoa bada" gehitu da, helburutzat hartuta, EUDELe dioen bezala, oso kostu handikoak diren eta eraginkortasun erlatiboa duten jardunak saihestea B kalifikazioa lortu arte beren eraikinei buruzko betebeharrak eta hobekuntzak jada beren gain hartu dituzten udaletan.

22. artikulua:

22. artikuluari egindako oharra onartu da; izan ere, idatzita dagoen moduan mugikortasun-planen antolaketak udalen betebeharra dela ematen du, eta udal txiki batzuetan plan horiek mugikortasuneko foru-planekin osatu behar dira. Artikulua zentzu horretan aldatu da.

Bigarren xedapen gehigarria:

Bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoari dagokion ez, energiaren guztizko kontsumoaren erreferentzia-oinarriaren maila onartzea dela-eta, planteatu da, proposatutako testuari jarraikiz, oinarriaren maila bat ezarri duten edo efizientzia energetikoaren alorrean jada jardun duten administrazioak desabantailan daudela.

Horregatik, bigarren xedapen gehigarria aldatu egin da, eta honela idatzita geratu da:

"Maila hori ezartzeko, legea indarrean sartu aurreko hiru urteetako batez bestekoa hartuko da kontuan. Horren ordez, legea indarrean sartu aurreko urtekoa har daiteke energia-kontsumoaren oinarritzko maila gisa, edo beste urte bat modu justifikatuan eta legea onartu aurretik egindako jardunen balioa aintzat hartzeko helburuarekin".

Laugarren xedapen gehigarria:

Laugarren xedapen gehigarria ofizioz ezabatu da, lortu nahi den informazioa eskuratzeko aipatutako erakundeek enpresa hornitzaileekin informazio-kanal egokiak badituztela egiaztatu baita.

EMAKUNDE EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEAK EGINDAKO TXOSTENAREN ONDORIOZKO TESTU ALDAKETAK.

Emakunde Emakumearen Euskal Institutua sortzeari buruzko otsailaren 5eko 2/1988 Legean ezarritakoari jarraituz eta, betiere, generoaren araberako eraginaren ebaluazioaren txostena egin aurretik, EAEko Administrazio Publikoen Jasangarritasunari buruzko Legearen aurreproiektuaren gaineko txostena egin du Emakunde; jarduera-jarraibide batzuk eman ditu bertan, kontuan hartuko direnak.

Erakunde horrek hala eskatuta, genero-ikuspegia txertatu da Legearen oinarri diren printzipioak tratatzean.

Beste alde batetik, 4/2005 Legearen 46. artikuluan agindutakoa betetzeko, 22. artikulua, mugikortasun-planei buruzkoa, aldatu eta konpromiso hori gogorarazi da.

“22. artikulua

3.- Planean argi eta garbi azaldu behar da zer helburu lortu nahi diren, plana egin duen administrazioak zer inbertsio hitzeman dituen eta zenbat denboran gauzatzea aurreikusi den, eta 4/2005 Legearen 46. artikuluan ezarritakoa bete beharko du.

Plana eta egiteko behar diren azterketak gizonek eta emakumeek hiriaz eta gunez egiten dituzten erabilera desberdinak kontuan hartuz idatziko dira, eta balizko genero-zuloak murrizteko proposamenak barne hartuko dituzte, hiri integratzaile eta erantzule baten diseinurantz aurrera egiteko xedearekin.”

Halaber, Emakundek eskatutakoarekin bat etorriz, kontuan hartuko dira 2/2005 Legeak ezarritako betebeharrak proiektatutako legetik eratorritako jarduketa guztietan.

Azaroaren 6ko 233/2012 Dekretuak, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskara-erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duenak, ezarritakoarekin bat etorriz, Administrazio Publikoetako Hizkuntza Politikako Zuzendaritzak txostena egin du, eta horren bidez legearen aurreproiektuan xedapen bat txertatzea proposatu du. Xedapen horrekin gogorarazten du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoek jasangarritasun energetikoari buruz herritarren esku jartzen duten informazio eta argitalpen orok euskaraz eta gaztelaniaz idatzita egon behar duela.

Ez da beharrezkotzat jo, aipatutako txostenak proposatzen duen bezala, proiektatutako legean xedapen bat txertatzea, lege-mailako xedapen batean jada ezarrita dagoen betebeharrak bat gogorarazteko, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarritzkoa den azaroaren 24ko 10/1982 Legean jasota baitago.

2.2.3.- HERRITARRAK HARTZEKO ETA ADMINISTRAZIOA BERRITZEKO ETA HOBETZEKO ZUZENDARITZAREN (HHABHZ) TXOSTENA.

Apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuak ezarritakoarekin bat etorriz, Herritarrak Hartzeko Zuzendaritzak txostena egin du, eta bertan positiboki balioetsi du proiektatutako ekimena. Batzordeen funtzionamenduan Informazio eta Komunikazio Teknologien erabilerari buruzko gogoeta orokor batzuk egin ditu, baita EAEko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoari buruzko informazioa jendaurrean jartzea errazteari buruz ere. Kontuan hartuko dira.

2.2.4.- KONTRATAZIOKO AHOLKU BATZORDEAREN TXOSTENA.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren kontratazio-araubideari buruzko ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuaren 21.2.a).4) artikuluan ezarritakoa betez, Administrazio Kontratazioko Aholku Batzordeari aurreproiektuari buruzko txostena egin zezala eskatu zitzaion, eta ez du txostenik eman.

Hala ere, adierazi behar da aintzat hartu dela honako honi dagokionez egindako txostena: *"Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorren arlo publikoaren jasangarritasun energetikoari buruzko Dekretua"*.

KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOAK EKONOMIA ETA ARAUDI KONTROLARI BURUZ EGINDAKO TXOSTENAREN ONDORIOZKO TESTU-ALDAKETAK.

EAEko kontrol ekonomikoari eta kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legeak eta EAEko Administrazioaren eremuan barneko kontrol ekonomikoa eta kontabilitatea nola burutu garatu duen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuak (41. eta hurrengo artikulua) ezarritakoarekin bat etorriz, espedientean txertatutako txostena egin zen.

Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eskatutako informazioaren ondorioz, prozedurari Memoria Ekonomiko berri bat gehitu zaio, administrazio motaren eta jarduketa motaren araberrako kostuen banaketaren xehetasunekin aberastuta.

EUSKADIKO A HOLKU BATZORDE JURIDIKOAREN IRIZPENAREN ONDORIOZKO TESTU-ALDAKETAK.

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren azaroaren 24 ko 9/2004 Legearen 3.1a) artikulua betez eman du Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak 127/2016 zenbakiko irizpena; izan ere, Batzordearen funtzio aholku-emailearen esparruan lege-aurreproiektuak sartzen ditu, haien gaia eta xedea edozein izanik.

Irizpenak, aldekoa denak, ohar batzuk egiten ditu; haietako batzuk artikuluei buruzkoak dira eta beste batzuk, berriz, terminologiari edo legegintza-teknikari buruzkoak.

Azken horiei dagokienez, zehaztu behar da, aipatutako organo aholku-emaileak emandako gomendioari jarraikiz, etorkizuneko arauaren barne-egitura hobetu dela, eta, hartara, irizpide berbera erabili da artikuluen edukia sailkatzeko, arauen proiektuak egiteko gidalerroei jarraikiz.

Arauaren testua zehazteko eta argitzeko, Batzordeak proposatutako zehaztapen edo aldaketa hauek egin dira:

- Zioen azalpeneko hirugarren paragrafoa ezabatu egin da, nahasgarria zelako eta testuingururik gabe zegoelako.
- 13.3 artikuluan "*ibilbide-orri*" kendu eta, haren ordeztan, "*dokumentu*", jarri da, terminologikoki zuzenagoa baita.
- 16.2.b) artikuluan "*analizatuz*" hitza kendu da
- "*Eraikinen efizientzia energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duen apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretua*"ri 17.1 artikuluan egiten zaizkion erreferentzia guztiak, segurtasun juridikoa dela-eta, orain "*eraikinen efizientzia energetikoa ziurtatzeko indarrean dagoen araudia*"ri egiten zaizkio.
- 25.2 artikuluan argitu da artikulua ordeztan erregaiak erabiltzen dituzten ibilgailu berriei buruzkoa dela.
- Azken Xedapenetatik Lehenengoaren testua argiago jarri da. Orain honela dio: "*Eusko Legebiltzarrak, Arartekoak eta Kontuen Epaitegiak jasangarritasun energetikoko beren planak egingo*

dituzte, eta ez dituzte nahitaez bete beharko legearen aurreikuspenak“.

Artikuluari egindako ohar zehatzei dagokienez:

- Ez da egokitzat jo 1. artikulua aldatzea, gaur egungo testuak arauaren xedeari ondo erantzuten baitio, oro har. Izan ere, Aholku Batzorde Juridikoak administrazioen esparrua gaindi dezaketen alderdiak jorratzen direla irizten badio ere, ez da hala aintzat hartzen badugu administrazio publikoen jarduera-jarraibideak izango diren interpretazio-printzipioen artean legearen betekizunak beste politika publiko batzuetan sartzea ezartzen dela, bereziki lurraldearen antolamenduarekin, hirigintzarekin eta garraio-azpiegiturekin zerikusia daukatenetan.

-2. artikuluari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 7.4.c) artikuluari egindako erreferentzia desagokia ezabatu da, eta lehen xedapen gehigarria berariaz aipatu da.

- Adierazitako irizpenean iradokitakoarekin bat etorritz, kontzeptuen definizioei buruzkoa den 3. artikulua osatu da, eta, horretarako, lege honen ondorioetarako, borondatezko akordioa zer den azaltzeko definizio bat gehitu zaio.

- Jasangarritasun energetikoaren batzordeak arautzen duen 9. artikuluari buruz Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak egindako oharri dagokionez, testua aldatu da, iradokitakoarekin ildotik, foru- eta toki-autonomiari zor zaion errespetua bermatzeko helburuarekin, eta, hartara, agindutako eginkizuna betetzeko sortzen dituzten entitateei ere lekua egingo zaie.

- Era berean, 15.1 eta 18.1 artikuluetan agertzen diren erreferentzia-datak aldatu egin dira.

- Halaber, 24. artikulua zuzendu da; prestakuntza emateko eginbeharra Legearen 2. artikuluan jasotako entitate guztiei zabaldu zaie. Borondatezko akordioei buruzkoa den 27. artikulua birdefinitu da.

- Azkenik, bigarren xedapen gehigarriaren testua aldatu egingo da, argiagoa izan dadin, eta zehaztuko da administrazio bakoitzak onartuko duela bere energia-kontsumoa; horrek administrazio bakoitzaren helburuak ezartzeko abiapuntu gisa balioko du.

Cristina Salas Cristóbal
**ENERGIAREN, MEATEGIEN ETA INDUSTRIA-
ADMINISTRAZIOAREN ZUZENDARITZA.**



EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN ENERGETIKOARI BURUZKO LEGEAREN AURREPROIEKTUA IZAPIDETZEKO PROZEDURAREN MEMORIA LABURRA EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOARENTZAT

1.- HELBURUAK ETA OINARRIAK

Efizientzia energetikoari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 2012/27/UE Zuzentarauak osatzen du Europar Batasunak efizientzia energetikoaren alorrean duen politikaren muina. Zuzentarau horrek Europar Batasunaren baitan efizientzia energetikoa sustatzeko neurrien esparru komuna ezartzen du, estatu kideak 2020ko helburuak betetzera bideratzeko eta urte horretatik aurrera efizientzia energetikoari lotuta geroko hobekuntzetarako bidea prestatzeko.

2012/27/UE Zuzentarauak estatu kideei eskatzen die efizientzia energetikoari lotutako helburu nazional adierazgarriak 2020rako ezar ditzatela, eta energiaren azken erabiltzaileentzat eta hornitzaileentzat arau lotesleak xedatzen ditu.

Europar Batasunaren iritziz, erakunde publiko guztiek, hau da, erakunde nazionalak, lurraldekoak eta tokikoak, eredugarriak izan behar dute efizientzia energetikoari dagokionez, sektore publikoa motor garrantzitsutzat jotzen den heinean merkatuaren eraldaketa sustatzeko produktu, eraikin eta zerbitzu eraginkorrak eskaintzeari begira, baita energia-kontsumoan portaera-aldaketak sorrarazteko ere herritarren eta enpresen aldetik. Beste alde batetik, efizientzia energetikoa hobetzeko neurrien bidez energia-kontsumoa gutxitzeak aukera emango luke, baita ere, beste helburu batzuetarako oso beharrezkoak diren baliabide publikoak askatzeko.

Titulartasun publikoko eraikinak oso zati garrantzitsua dira higiezinaren parkean, eta are garrantzitsuagoa da ikusgaitasun handia dutela iritzi publikoaren aurrean. Horregatik, administrazioaren eraikinen berritze-indizea finkatu behar da, haien energia-errendimendua hobetzeko helburuar ekin.

Ildo horretatik, euskal sektore publikoak eredugarri izan behar du bere eraikin eta instalazioetako inbertsioei, mantentzeari eta kudeaketa energetikoari dagokienez. Horregatik, 2012ko Zuzentarauak exijitzen du administrazio zentralen jabetzakoak diren higiezinaren parkearen % 3 gutxienez eraberritzea

urtero, 2014tik aurrera, eta errendimendu handiko eraikin, zerbitzu eta produktuak eskuratzea efizientzia energetikoaren ikuspegitik, arlo horretan eredarri izan behar duela uste baitu.

Ekonomia Iraunkorrari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legeak, oinarritzko izaera duenak, ezartzen du botere publikoen ekintzan gidari izan behar duen printzipioetako bat aurrezpena, efizientzia energetikoa eta energia garbien sustapena, isurkien murrizketa eta hondakinen tratamendu eraginkorra dela.

Birgaitzeari eta hiri-berroneratze eta -berrikuntzari buruzko ekainaren 26ko 8/2013 Legea proiektatutako xedapenen oinarri garrantzitsua da, hirugarren artikuluari jarraikiz honako hau ezartzen baitu: "Botere publikoek dagozkien eskumeneko politikak formulatu eta garatuko dituzte hirigunean, betiere ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren arloko jasangarritasunaren, lurralde-kohesioaren, efizientzia energetikoaren eta konplexutasun funtzionalaren printzipioei jarraituz".

Energiari dagokionez efizienteak izateak daukan garrantziaren jakitun, Eusko Jaurlaritza aspaldidanik ari da alor horretan lanean, eta orain EAEko administrazio publiko guztiak inplikatzeko lortu nahi da, helburu horiek lortzeko, izan ere, zalantzarik gabe, erakunde publikoek aurrezpena eta efizientzia energetikoa susta dezakete eta hala egin behar dute. Hori gauzatzeko, lehen maila batean, onartu da irailaren 22ko 175/2015 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren jasangarritasun energetikoari buruzkoa, eta, hortaz, txosten honen helburu den Legearen aurrekaririk hurbilena da, nahiz eta Legea askoz asmo handiagokoa izan, ez bakarrik hura aplikatzeko eremu subjektiboari dagokionez, baizik eta haren edukiari dagokionez ere.

Irailaren 22ko 178/2015 Dekretuak arautu zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoari dagokionez, bertako aurrezpena, efizientzia energetikoa eta energia berriztagarrien erabilera, aurrezpena eta efizientzia helburu goresgarritzat hartzeari utzi eta errealitate konstatagarri bihurtzeko. Horrela, bada, aipatutako arauak oinarritzko helburuak ezartzen zituen, baina neurri espezifikoak eta denbora-irizpide zehatzei lotutakoak ere bai, administrazio honek eredarri izateko duen xedea nabarmenduz.

Hala eta guztiz ere, eta oso garrantzitsua izan arren, Dekretua ez zen foru- eta uda-sektore publikoan aplikatzekoa, eta, beraz, sektore publikoaren zati horrek energiaren kontsumoan duen pisua kontuan hartuta, ikusi zen beharrezkoa zela administrazioaren jarduketa eredarria osatzea, azken ikuspegi horretatik ere helduz.

Azkenik, nabarmentzekoa da 2011ko Gobernu Kontseiluak onartutako Euskadiko Energia Estrategia 2020k (3e2020) helburutzat duela, besteak beste,

estrategia horretan EAEko administrazio publiko guztien inplikazioa lortzea. Estrategia horren jarduketa-eremu nagusietako bat da energia-arloan efizienteagoa eta jasangarriagoa izango den euskal administrazio publikoa sustatzea, eta horrek berekin ekarriko du, besteak beste, administrazio publikoen mende dauden instalazio eta zerbitzuetan kontsumoa murrizteko neurriak hartzea eta bertan energia berriztagarriak bultzatzea.

Aipatutako aurrekariak eragin dute proiektatua bezalako xedapena prestatzea.

2.- ARAUA EGITEKO PROZEDURA.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legearen aurreproiektua izapidetze elektronikorako garatutako “Tramitagune” aplikazio informatikoaren bidez izapidetzen ari da, Gobernu Kontseiluaren 2010eko abenduaren 28ko Erabakiaren bidez onartutako xedapen orokorrak izapidetzeko jarraibideen arabera.

Irizpena emateko igorri den testua prestatzean kontuan hartu dira Gobernu Kontseiluaren 1993ko martxoaren 23ko Erabakiaren bidez onartu eta Lehendakaritza, Lege Araubide eta Autonomia Garapenerako sailburuaren 1993ko apirilaren 6ko Aginduaren bidez argitaratutako gidalerroak, lege-proiektuak, dekretuak, aginduak eta ebazpenak egitekoak. Halaber, xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legean ezarritako xedapenak bete dira.

Goian aipatutako abenduaren 22ko 8/2003 Legean xedatutakoaren arabera, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak **hasierako agindua** eman zuen arauaren helburua eta xedea adieraziz eta, aurreproiektua idatzitakoan, hura **onartzeko** eta dagozkion izapideak egiten jarraitzeko **agindua** ere bai.

Agindu horiek “Legesarea” ezagutza-esparru partekatuan argitaratu ziren, Gobernu Kontseiluaren xedapen orokorrak egiteko prozeduran izapidetze-jarraibideak onartzen dituen 2010eko abenduaren 28ko erabakian xedatutakoa betez. Aurreproiektuaren testua “gardena” gardentasun-atarian ere argitaratu da, gardentasunari eta informazio publikoa eskuratzeko eskubideari buruzko 19/2013 Legeari jarraikiz.

Abenduaren 22ko 8/2003 Legean ezarritakoarekin bat etorritz, aurreproiektu hau onartzeko, txosten, izapide eta jarduketa hauek gauzatu dira:

2.1.- Ekimenaren sustatzailearen txostenak eta memoriak

2.1.1.- Memoria ekonomikoa

Espedientean Memoria Ekonomikoa jaso da, izan dezakeen kostuaren estimazioa adierazten duena, eta gastu eta sarrerak eta Administrazioaren Aurrekontuetan duten eragina kuantifikatu dira.

2.1.2.- Generoaren araberako eraginari buruzko txostena egitea

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak genero-ikuspuntutik garrantzirik gabekoa dela justifikatzen duen Txostena egin du, administrazio publikoen antolamenduarekin zerikusia duten alderdiei soilik eragiten diela uste izateagatik.

Dena den, EMAKUNDEren iritziz proposatutako arauak funtsezko alderdiei eragiten die, eta proiektuarekin batera Genero Eraginaren Txostena aurkez zedila errekeritu zuen 2016ko otsailaren 2an.

Errekerimendu hori betez, **Generoaren araberako eraginaren ebaluazioaren txostena** egin da, hala baitago ezarrita Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19. artikuluan eta "*Genero-eraginaren aurreko ebaluazioa gauzatzeari buruzko jarraibideak*" izenekoan 5. puntuan; azken horiek Gobernu Kontseiluak 2012.08.21ean onartu zituen.

2.1.3.- Sailaren txosten juridikoa egitea

Xedapen Orokorrak egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 7.3 artikuluari jarraikiz, txosten juridikoa egin da. Bertan, legearen aurreproiektuaren funts objektiboa aztertu da, bai eta edukia Legearekin eta Zuzenbidearekin bat datorren eta lege-proiektuak araugintza-teknikaren gaineko jarraibideak betetzen dituen ere.

2.1.4 - Enpresan izango duen eraginari buruzko txostena

Xedapenak enpresak sortzearen, abian jartzearen eta funtzionamenduaren gainean izango duen eraginari buruzko ebaluazioa egin da, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari Laguntzeko ekainaren 28ko 16/2012 Legearen 6. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Aurreproiektua igortzea Eusko Jaurlaritzaren eragindako sailei eta xedapenak eragindako beste administrazio publiko batzuei.

Prozeduran Eusko Jaurlaritzako sailek eta Euskal Herriko Unibertsitateak partaidetza eta kontsulta izan dute. Halaber, aurreikusitako xedapenak zuzenean ukitutako administrazioei ere bidali zaie testua, hau da, foru-aldundiei, EUDELI eta Gasteizko eta Donostiako udalei.

2.2 Beste erakunde batzuek egindako nahitaezko txostenak eta irizpenak

2.2.1.- Emakunde Emakumearen Euskal Erakundearen txostena

Emakunde Emakumearen Euskal Institutua sortzeari buruzko otsailaren 5eko 2/1988 Legean ezarritakoari jarraituz eta, betiere, generoaren araberrako eraginaren ebaluazioaren txostena egin aurretik, EAEko Administrazio Publikoen Jasangarritasunari buruzko Legearen aurreproiektuaren gaineko txostena egin du Emakundek; jarduerajarraibide batzuk eman ditu bertan, kontuan hartuko direnak.

Erakunde horrek hala eskatuta, genero-ikuspegia txertatu da Legearen oinarri diren printzipioak tratatzean.

Beste alde batetik, 4/2005 Legearen 46. artikuluan agindutakoa betetzeko, mugikortasun-planeri buruzkoa den 22. artikulua aldatu eta konpromiso hori gogorarazi da.

“22. artikulua

3.- Planean argi eta garbi azaldu behar da zer helburu lortu nahi diren, plana egin duen administrazioak zer inbertsio hitzeman dituen eta zenbat denboran gauzatzea aurreikusi den, eta 4/2005 Legearen 46. artikuluan ezarritakoa bete beharko du

Plana eta egiteko behar diren azterketak gizonak eta emakumeek hiriaz eta gunez egiten dituzten erabilera desberdinak kontuan hartuz idatziko dira, eta balizko genero-zuloak murrizteko proposamenak barne hartuko dituzte, hiri integratzaile eta erantzule baten diseinurantz aurrera egiteko xedearekin. “

Halaber, Emakundek eskatutakoarekin bat etorriz, kontuan hartuko dira 2/2005 Legeak ezarritako betebeharrak proiektatutako legetik eratorritako jarduketa guztietan.

Sexuaren arabera bereizitako datuak gehitzeko beharrari dagokionez, esan beharra dago hasiera batean aukera hori kontuan hartu bazen ere,

azkenean erabaki da, eraginkortasun-irizpideetan oinarrituz, eragindako entitate eta administrazio bakoitzak txertatu beharko lituzkeela datu horiek proiektatutako Legetik eratorritako jarduketetan.

2.2.2.- Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren txostena

Azaroaren 6ko 233/2012 Dekretuak, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskara-erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duenak, ezarritakoarekin bat etorrituz, Administrazio Publikoetako Hizkuntza Politikako Zuzendaritzak txostena egin du, eta horren bidez Legearen aurreproiektuan xedapen bat txertatzea proposatu du. Xedapen horrekin gogorarazten du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoek jasangarritasun energetikoari buruz herritarren esku jartzen duten informazio eta argitalpen orok euskaraz eta gaztelaniaz idatzita egon behar duela.

Ez da beharrezkotzat jo, aipatutako txostenak proposatzen duen bezala, proiektatutako legean xedapen bat txertatzea, lege-mailako xedapen batean jada ezarrita dagoen betebeharrak bat gogorarazteko, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarritzkoa den azaroaren 24ko 10/1982 Legean jasota baitago.

2.2.3.- Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren (HHABHZ) txostena.

Apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuak ezarritakoarekin bat etorrituz, Herritarrak Hartzeko Zuzendaritzak txostena egin du, eta bertan positiboki balioetsi du proiektatutako ekimena. Batzordeen funtzionamenduan Informazio eta Komunikazio Teknologien erabilerari buruzko gogoeta orokor batzuk egin ditu, baita EAEko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoari buruzko informazioa jendaurrean jartzea errazteari buruz ere. Kontuan hartuko dira.

2.2.4.- Kontratazioko Aholku Batzordearen txostena.

2016ko martxoaren 10ean, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazioaren Aholku Batzordeari aurreproiektuari buruzko txostena eskatu zitzaion, ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren kontratazio araubideari buruzkoak, 21.2.a) 4) artikuluan xedatutakoarekin bat etorrituz.

Maiatzaren hasieran, aipatutako txostena ez zela jaulki ikusita, organismo horrengana jo zen, eta organismoak eskatu zuen aurreproiektuaren testua posta elektronikoz bidal zekion, txostena egin ahal izateko. Maiatzaren 3an bidalketa egin zen, baina orain arte ez dago txostena jaso izanaren konstantziarik.

2.2.5 Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena, ekonomia- eta araudi-kontrolari buruzkoa

EAEko kontrol ekonomikoari eta kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legeak eta EAEko administrazioaren eremuan barneko kontrol ekonomikoa eta kontabilitatea nola burutu garatu duen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuak (41. eta hurrengo artikulua) ezarritakoarekin bat etorritik, espedientean txertatutako txostena egin zen.

Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eskatutako informazioaren ondorioz, prozedurari Memoria Ekonomiko berri bat gehitu zaio, administrazio motaren eta jarduketara motaren arabera kostuen banaketaren xehetasunekin aberastuta.

Bestalde, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak esan zuen ez dela egiaztatu aurreproiektua dagokien administrazio publikoen kontsiderazioaren mende jarri denik prozeduraren ezein fasetan, eta horri dagokionez esan beharra dago memoriaren hasieran adierazi dela eta aurrerago ere jasota dago, egiaztatutzat jaso da espedientean prozeduran partaidetza eta kontsulta eman zaiela Eusko Jaurlaritzako Sailei, Euskal Herriko Unibertsitateari eta, aurreikusitako arauak zuzenean eragindako administrazio gisa, Foru Aldundiei, EUDELI eta Bilboko, Gasteizko eta Donostiako Udalei ere bai.

Are gehiago, zuzenean eragindako organismo guztiei ere kontsulta egin zitzaizkien lehenago, arau honen izapidetze administrazioaren hasieran.

2.3.- Entzunaldian.

Entzunaldiaren nahitaezko izapideari dagokionez, proposatutako arauaren zirriborroa honako erakunde hauei bidali zaie, alegazioak egin ahal izateko:

- Bilboko Udala
- Gasteizko Udala
- Donostiako Udala
- Euskadiko Udalen Elkarte (EUDEL)

- Bizkaiko Batzar Nagusiak
 - Arabako Batzar Nagusiak
 - Gipuzkoako Batzar Nagusiak
-
- Bizkaiko Foru Aldundia
 - Arabako Foru Aldundia
 - Gipuzkoako Foru Aldundia
-
- Euskal Herriko Unibertsitatea
-
- Lehendakaritza
 - Ingurumen eta Lurralde Politika Saila
 - Osasun Saila
 - Segurtasun Saila
 - Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
 - Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila
 - Ogasun eta Finantza Saila
 - Herri Administrazio eta Justizia Saila

Entzunaldian entitate hauen alegazioak jaso dira:

- Ingurumen eta Lurralde Politika Saila
- Arabako Batzar Nagusiak
- Bilboko Udala
- Eudel

Ingurumen eta Lurralde Politika Saila

ALEGAZIOAK:

- **7. artikuluari buruz:** *“Lurraldearen antolamenduan eta hirigintzan integratzea”* , mota desberdinetako adierazpenak egin ditu, eta taldekatzen saiatuko gara.

Lehenik eta behin, hainbat zehaztapen terminologiko egin ditu, eta onartuak eta aurreproiektuan jasoak izan dira. Zehazki:

7.2 a artikulua) "Lurraldearen Antolamenduko ildo nagusiak" kendu eta, haren ordez, "Lurralde Antolamenduko ildo nagusiak" jarri da.

7.4 artikulua "Ingurumen-inpaktuaren ebaluazio estrategiko " kendu eta, haren ordez, *“Ingurumen Ebaluazio Estrategikoa”* jarri da, eta

proposatutako ordezeko testua onartu da. Hortaz, 7. artikulua 4. zenbakia honela geratuko da idatzita:

"Lurralde-antolakuntzako tresnak eta garraio-azpiegituretako planak, programak eta proiektuak 2. zenbakian aipatzen direnak lege ezarritako ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozeduretako baten mende jartzen badira, ez da beharrezko izango artikulua honen 1. eta 3. zenbakietan eskatutako azterketaren alderdiak bikoiztea, ingurumena ebaluatzeko prozedura horiek arautzen dituen araudian ere exijitzen direnak".

7.3 artikulua buruz, adierazi du ez dela egokia jasangarritasun energetikoaren azterketarako eskatzea, dokumentu hauekin batera joan behar xedatutako eduki zehatza eta nahitaezkoa (hala nola jasangarritasun energetikoaren betekizunetarako ego kitzapena, energia berriztagarrien ezarpena eraikinetan, mugikortasun-azterketa).

IRUZKINAK:

Ez da onartu, egokitzen jo baita dagokion aplikazio-eremuan eta zentzua daukanean, proiektatutako Legearen helburuen hiru gako-ardatzak baitira hirurak.

7. artikulua 5. puntuari dagokionez, ohartarazi da Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako maiatzaren 31ko 4/1990 Legean jasotako arautzean zuzenean eragiten duela. Lege horren 12. artikuluan LPPek (Lurralde Plan Partzialak) eduki beharreko zehaztapenak biltzen dira, eta, beraz, onartu eta 7. artikulua bosgarren puntua ezabatu da.

- Energia-aurrezpenaren ehunekoei buruzko **14. artikulua dagokionez**, adierazi du zehaztutako helburuak ez datozela bat Klima Aldaketaren aurkako Euskal Estrategiarekin, haiek helburu handiagoak jarri baitituzte. Gainera, proposatzen du arrazoi azalpenean erreferentzia bat egitea Klima Aldaketaren aurkako Euskal Estrategiari.

IRUZKINAK:

Oharra ez da zuzena. 2050eko Klima Aldaketaren aurkako Euskal Estrategiak 2050 urterako helburuak ezartzen ditu, eta tarteko helburuak 2030erako. Ez die erreferentziarik egiten 2025eko helburuei. Hortaz, ez dira bateragarriak, eta bateragarriak izango balira ere, Klima Aldaketaren aurkako Euskal Estrategiaren orokorrak dira kontsumitzaileen sektore guztientzat, eta ez dira EAEko Administrazioaren moduko sektore zehatz bati zuzendutakoak. Legearen aurreproiektu honek ezartzen dituen

helburuak, hala nola energiaren kontsumoa % 25 murriztea, eraikinen % 25ek instalazio berriztagarriak izatea eta parke mugikorra eta garraio publikoaren flotak 2025eko horizonteko alternatibei egokitzea, erronka handia dira EAEko administrazioarentzat. Hori lortzeko ekarriko luke EAEko administrazioaren azpisektoreak CO₂ isuriak % 25 murriztea 2025ean, hau da, 10 urteren buruan. Gainera, aipatutako 2050eko Klima Aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategiaren 22. jarduketa-ildoak (Administrazio publikoak zero isuri) lortu nahi du 2050eko EAEko Administrazio publikoaren jomuga. Jarduketa-ildo hori 2020ko Ingurumeneko Esparru Programan ere zehaztu da, Gako-proiektuak bultzatzeko 54. jarduketan, Ingurumenaren aldetik eredugarria den administrazioaren lehen proiektuan, Jasangarritasun Energetikoari buruzko Dekretuan eta hemen zehazten den Legean zehaztutakoan, hain zuzen.

Aipamen hau onartu da 5. paragrafo gisa zioen azalpenean:

“Ingurumenaren ikuspegitik, Legearen aurreproiektu honek badauka tokia. Izan ere, Klima Aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategiak, 2015ean onartuak, berotegi-efektuko gasen isurketa epe luzera murrizteko helburuak lortzeko hainbat xede ezarri ditu, eta haietako bat EAEko administrazio publikoa klima-aldaketaren arloan arduratsua, eredugarria eta erreferentea izatea da. Eta EAEko gizarteko eragile guztien inplikazioa lortzeko EAEko administrazio publikoko organo guztiak eredu izatea bultzatu behar da. Horretarako, koordinazio horizontala eta bertikala gauzatu behar da, hau da, Eusko Jaurlaritzaren sailen artekoa, eta bai udalekikoa eta foru-aldundiekikoa ere. 2050erako helburuak lortzeko nabarmentzen den jarduketa-eremu nagusietako bat da Administrazio publikoak zero isurketa egitea lortzea.”

- Proposatutako testuaren 16. artikuluari dagokionez –instalazioak, ekipoak, flotak eta ibilgailuak berritzeari buruzkoa—, uste du artikulua hori kontratazio osoari aplikatu beharko litzaiokeela, eta ez soilik erregulazio harmonizatuko kontratuei, eta uste du, halaber, artikuluen aginduak irizpideak balioestera zuzenduta egon beharko lukeela, eta ez inperatiboki ezartzera.

Horregatik, beste idazketa bat proposatzen du aurreproiektuaren 16.2 artikulua erabat.

IRUZKINAK

Ez da onartzen alegazioa, izan ere *“instalazioak, ekipoak eta ibilgailu-flotak berritzeko kontratazioan irizpide desberdinak ezartzea efizientzia energetikoari buruzko urriaren 25eko 2012/27/UE Zuzentarauaren 6. artikulua edukia traspasatzea baita, eta erregulazio harmonizatuari lotutako kontratuei bakarrik egin diezaike erreferentzia”*. Halaxe adierazi

zuen Administrazio Kontratazioko Aholku Batzordeak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Jasangarritasun Energetikoari buruzko Dekretuaren proiekturako egindako txostenean.

Arabako Batzar Nagusiak

ALEGAZIOAK.-

Legearen zirriborroak, Batzar Nagusien arabera, puntu batzuetan epe luzeegiak ezartzen ditu, eta, beraz, proposatzen du proiektatutako testuaren 3. eta 12. artikulua aldatzea.

- Legearen xede-eremuari buruzko 3.2 d) artikuluari dagokionez, proposatzen du 5 urte baino gutxiagoko epean saltzea aurreikusten diren eraikinetarako salbuespena 3 urteko epearekin ordeztzea.
- Energia-auditoretzei buruzko 12.5 artikuluari dagokionez, proposatzen du 6 urtez behin berritzekoak izan ordez 5 urtez behin berritzekoak izatea, auditoria berria egiteko beharra ezarriz epe hori igarotakoan beste sei hilabete igaro baino lehenago.

IRUZKINAK:

3.2 d) paragrafoa kendu da.

12.5 artikuluari dagokionez, ez da onartzen Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorraren 175/2016 Dekretuan ezarritakoarekiko koherentziagatik.

Bilboko Udala

ALEGAZIOAK

- 5. artikuluari dagokionez, partikula bidezko eta NO₂ isurketa bidezko kutsadura gutxitzea aipatzen duen puntu bat sartzea proposatzen du.

IRUZKINAK:

Onartu eta testuan txertatu da.

- Legearen helburu berak lortu nahi dituzten plan, programa edo ziurtagirietan legearen proposamenak integratzeko aukera, hala nola alkateen ituna, Compact of Mayors, etab. Administrazio batzuk haietan murgilduta daude, ahaleginak arrazionalizatzeko helburuarekin.

IRUZKINAK:

"Borondatezko tresnak eta sustapena" izeneko kapituluak artikulua oso bat eskaintzen die Borondatezko Akordioei, eta bertan orokorrean jaso da aukera hori; hortaz, ez da beharrezkotzat jotzen.

- Borondatezko tresnen eta sustapenaren arloan, neurri fiskalak berriaz bultzatzea eskatu du, bai herritarrak bai beste sektore batzuk jasangarritasun energetikoranzko trantsiziora erakartzeko, ibilgailu efizienteak erosituz, etxebizitzetan energia-iturri berriztagarriak instalatuz, etab.

IRUZKINAK:

Hala da, proposatutako proiektuak ez du neurri fiskalik edo sustapen-neurririk jasotzen herritarrak edo beste sektore pribatu batzuk jasangarritasun energetikora erakartzeko, hori ez delako haren helburutzat hartzen. Hala ere, horrek ez du eragozten, mota horretako neurrien eraginkortasuna onartuta, kasuan-kasuan eskudunak diren sail edo erakundeek eskatuta edo haiek onartutako arau-xedapenen bidez haiek antolatzea.

Euskadiko Udalen Elkarte (EUDEL)

EUDELek entzunaldirako igorritako lege-aurreproiektuaren aldeko txostena egin du, beharrezkotzat jotzen baitu EAEko udaletan kudeaketa energetikoa hobetzeko lan egiteko modu logikoa eta egokia dakarrelako. Halaber, egokituz jotzen dute denboran jarraitutasuna duen eta koherentea den emaitza lortzeko planteatzen diren betebeharren multzoa, energia aurrezteari dagokionez.

ALEGAZIOAK

Artikuluei egindako alegazioak, funtsean, honako hauek dira:

- 4. artikuluari dagokionez, gogoeta batzuk egin ditu bertan jasotako zenbait definiziori buruz; kasu batzuetan ez dira aintzat hartu begibistakoak direlako eta beste batzuetan arauaren geroko garapena izango delako alderdi horiek zehazteko modurik egokiena.
- Ez da onartu 3.2 artikuluan jasotako esklusioei buruzko alegazioa, sustatzaile publikoen alokairuko etxebizitza-erakunde berriekiko konparaziozko bidegabekeriak saihesteko.
- 10.1a) artikuluari (administrazio publikoek egin beharreko inbentarioaren edukiri buruzkoa) egindako alegazioa onartu da, eta ez dute hura behar izango lehen aipatutako 3.2.f) artikuluan azaldutako kasuek. Horrenbestez, 10.1 artikulua onartuta honela geratuko litzateke:

“1. Administrazio publikoek beren jarduera-eremuaren barruan dituzten eraikinen, ibilgailu-atalen eta argiteria publikoko instalazioen inbentarioa egin behar dute. Informazio hau jaso behar da inbentarioan:

a) Dagokion administrazioaren titulartasuneko eraikinen eta instalazioen inbentarioa, bakoitzak m2-tan duen azalera eta energia-kontsumo eta -gastua. Aurreko betebeharrak ez dira sartzeko eraikin publikoetan egon eta partikularrek edo enpresek alokairuan eremu pribatuan erabiltzen dituzten etxebizitzak edo lokaletako kontsumoak...”.

- 16.2.b) artikuluari egindako alegazioa onartu da. Hortaz, "haiek balio-bizitzan zehar erabiltzeak" kendu eta, haren ordean, "haien bizi-zikloa aztertuz" jarri da.
- 17.2 artikuluari egindako alegazioa onartu da. Hortaz, "betiere kalifikazio-maila Btik beherakoa bada" gehitu da, helburutzat hartuta, EUDELEk dioen bezala, oso kostu handikoak diren eta eraginkortasun erlatiboak duten jardunak saihestea B kalifikazioa lortu arte beren eraikinei buruzko betebeharrak eta hobekuntzak jada beren gain hartu dituzten udaletan.
- Ez da onartu 18. artikuluari dagokionez proposatutako izenburu-aldaketa, berria ez den eraikin bati zaila delako kontsumo ia nulua izatea exijitzea.
- Ezetsi egin da 19. artikuluari egindako oharra. Ohar horren arabera, hirigintza-estandar bat gomendatzea komeniko litzateke, aparkaleku-zuzkidurarekiko osagarria, eta bai ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen erkidegoko sare bakarra ezartzea ere. Egindako ekarpena positibotzat jotzen bada ere, proposatzen den arauaren esparrutik kanpo dago.
- 2. artikuluari egindako oharra onartu da; izan ere, idatzita dagoen moduan mugikortasun-planen antolaketak udalen betebeharrak dela ematen du, eta udal txiki batzuetan plan horiek mugikortasuneko foru-planekin osatu behar dira. Artikulua zentzu horretan aldatu da.

Bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoari dagokionez, energiaren guztizko kontsumoaren erreferentzia-oinarriaren maila onartzea dela-eta, planteatu da, proposatutako testuari jarraikiz, oinarriaren maila bat ezarri duten edo efizientzia energetikoaren alorrean jada jardun duten administrazioak desabantailan daudela.

Onartu egin da eta bigarren xedapen gehigarria aldatu da. Honela idatzita geratu da:

"Maila hori ezartzeko, legea indarrean sartu aurreko hiru urteetako batez bestekoa hartuko da kontuan. Horren ordeztan, legea indarrean sartu aurreko urtekoa har daiteke energia-kontsumoaren oinarritzko maila gisa, edo beste urte bat modu justifikatuan eta legea onartu aurretik egindako jardunen balioa aintzat hartzeko helburuarekin".

Hirugarren xedapen gehigarria

Hirugarren xedapen gehigarriak agerian uzten du badagoela lehenik "kontsumo ia nuluko eraikina"ren definizio bat otsailaren 12ko 56/2016 Errege Dekretuan; baztertu egin da iruzkin okerra izateagatik. Aipatutako errege-dekretuak ez dauka kontzeptu horren definiziorik, hura kalkulatzeko aintzat hartu beharreko elementuak ezartzera mugatzen baita I. eranskinean, baina herrialde bakoitzak garatu beharko du eranskin hori.

Laugarren xedapen gehigarria ofizios ezabatu da, lortu nahi zen informazioa eskuratzeko aipatutako erakundeek enpresa hornitzaileekin informazio-kanal egokiak badituztela egiaztatuta baita.

Cristina Salas Cristóbal
**ENERGIAREN, MEATEGIEN ETA INDUSTRIA-
ADMINISTRAZIOAREN ZUZENDARITZA.**

VI

MEMORIA ECONÓMICA / MEMORIA EKONOMIKOA


**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN
ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA
PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VASCAS**



FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **AITOR PATXI OREGI BAZTARRIKA**

Fecha de la firma: **16/06/2016 9:38:38**

Validación de la firma:  **Correcta**

**MEMORIA ECONÓMICA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VASCAS**

1.- Alcance de la Ley

La presente ley de sostenibilidad energética establece el marco normativo para la sostenibilidad energética, basada en el impulso de medidas de eficiencia energética y de ahorro de energía y de promoción e implantación de las energías renovables, de acuerdo con la orientación general de la política energética. Asimismo, la Ley establece la integración de este objetivo en el resto de políticas públicas y los deberes y obligaciones que deben cumplir las Administraciones Públicas Vascas.

Su aplicación se refiere por tanto a las actuaciones en materia energética de las Administraciones Públicas Vascas entendidas, tal y como se definen en la propia ley, como la administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la administración de los Territorios Históricos, la de los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Universidad del País Vasco/Euskal-Herriko Unibertsitatea, incluyendo las entidades vinculadas o dependientes de todas ellas tales como los organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado, las sociedades públicas y las fundaciones del sector público.

Con relación a su ámbito objetivo la ley se aplica a los edificios e instalaciones, transporte y parque móvil, energías renovables y alumbrado público que sean propiedad de y estén gestionados por cualquiera de las entidades enunciadas anteriormente. Contiene además actuaciones horizontales así como determinaciones relativas a la consideración de la sostenibilidad energética en la ordenación del territorio y el urbanismo.

Con carácter general, la presente ley no es de aplicación al sector privado excepto en los aspectos expresamente recogidos en la ley como por ejemplo: el impulso de acuerdos con los particulares para lograr una mayor sostenibilidad energética (artículo 4j), la suscripción de acuerdos voluntarios con agentes del sector energético y otros agentes sociales (artículo 26.3).

2.- Significado energético, ambiental y económico general del ahorro de energía, de la eficiencia energética y de las energías renovables

Producir el mismo trabajo o procurar el mismo bienestar consumiendo menos energía siempre ha estado, en mayor o menor medida, entre las preocupaciones de quienes se han relacionado con la energía.

En este sentido, la utilización eficiente de la energía ha sido históricamente una preocupación de los organismos dedicados a la planificación, la transformación o el suministro de energía y de aquellas entidades, empresas o consumidores para los que la utilización de energía significa un gasto o un coste que hay que asumir.

Estas preocupaciones se han visto agudizadas durante las diversas crisis energéticas habidas durante las últimas décadas en las que por ejemplo la escasez de petróleo disponible en el mercado ha venido acompañada de subidas de su precio. De esta manera, unos precios caros de la energía han sido el mayor incentivo para la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética en los países consumidores de energía que carecían, en cuantía suficiente, de fuentes de energía convencionales en sus territorios.

Otro aspecto importante a resaltar es el impacto ambiental que la producción, transporte y transformación de las distintas fuentes de energía lleva aparejado a lo que se une que desde hace décadas la preocupación medioambiental ha ido en aumento en todo el mundo lo que ha introducido un factor añadido de interés por un uso eficiente de la energía. A día de hoy nadie discute que la transformación y la utilización de la energía siempre conlleva un impacto ambiental que en muchos casos se traduce en riesgos para los seres vivos y las personas del entorno más o menos cercano en que tiene lugar el proceso energético.

Estos impactos y riesgos ambientales son más altos para las denominadas fuentes convencionales que para las conocidas como fuentes renovables de energía, pero todas ellas conllevan algún tipo de impacto o riesgo ambiental asociado, por pequeño que sea, a nivel local o global. La contaminación local o regional asociada a la utilización de combustibles fósiles, el impacto global producido por la emisión de gases de efecto invernadero que su transformación energética conlleva, los riesgos asociados al funcionamiento de las centrales nucleares y a todo el ciclo del combustible nuclear, o el impacto paisajístico de la energía eólica y los riesgos alimentarios aparejados a los biocombustibles de primera generación entre las renovables, son algunos ejemplos de impacto o riesgo ambiental que la utilización de todas las fuentes de energía comporta.

Por tanto, sea por cuestiones de escasez o de precio, sea por motivos de preocupación medioambiental, hoy en día nadie discute a priori la bondad, desde cualquier punto de vista que se analice, de utilizar la mínima energía posible para conseguir los mismos resultados en términos de riqueza y bienestar de los que gozamos en las sociedades desarrolladas o de lograr mayores cotas de riqueza y bienestar a igualdad de energía consumida en los países emergentes y en las sociedades en vías de desarrollo.

Otro aspecto a resaltar son las diferencias existentes entre los distintos países en términos de intensidad energética, es decir de eficiencia en el uso de la energía para conseguir los mismos niveles de riqueza y bienestar. Así por ejemplo y dentro de la propia OCDE, las diferencias han sido históricamente muy relevantes, ya que por unidad de riqueza producida los europeos hemos venido consumiendo la mitad de energía que los norteamericanos. La experiencia por lo tanto nos demuestra que hay modelos sociales y económicos mucho más eficientes que otros en el uso de la energía y que el ahorro y la eficiencia energética conllevan ventajas técnicas, económicas y ambientales de todo tipo.

Por este motivo, muchas instituciones y organismos dedicados a la energía a nivel nacional o internacional consideran al ahorro de energía como la sexta gran fuente de energía junto al carbón, el petróleo, el gas natural, la nuclear y las renovables, adquiriendo de esta forma pleno significado la expresión de que “la mejor energía y la más limpia, es la que no se consume”.

Por otra parte, la eficiencia energética y el ahorro de energía son conceptos íntimamente relacionados, ya que la consecuencia directa de una utilización más eficiente de la energía en una determinada sociedad es un ahorro de la energía consumida para obtener el mismo trabajo o los mismos niveles de riqueza o bienestar.

Además, el ahorro de energía se puede lograr también por cambios de comportamiento institucional o social, por transformación de las estructuras económicas, por utilización de nuevos procesos productivos energéticamente más eficientes o por modificaciones en las pautas de consumo que lleven aparejada la reducción del consumo de energía de un país, de una región o a nivel global.

En otro orden de cosas, el desarrollo de las energías renovables a nivel local permite disminuir la dependencia de fuentes de energía fósiles procedentes del exterior, lo que redundará en sistemas energéticos menos dependientes de vaivenes políticos y económicos y en definitiva menos

controlables y por definición más sostenibles. Conviene recordar al respecto que el País Vasco importa más de un 90% de los recursos energéticos que necesita, lo que hace particularmente vulnerable a nuestra economía.

En este sentido, desarrollar las energías renovables competitivas con las convencionales y consumir menos energía para alcanzar los mismos o superiores niveles de riqueza y bienestar es disminuir la dependencia energética del exterior haciendo más estable la economía de un país, más sostenible su sistema energético y más competitivas a sus empresas. Al mismo tiempo con estas políticas se ahorran recursos financieros locales al disminuir la factura energética total, recursos que pueden utilizarse en inversión productiva generadora de actividad económica y empleo.

En todo el mundo, las actuales administraciones públicas juegan el papel de promotoras y reguladoras de la actividad económica por un lado al tiempo que ejercen un papel dinamizador de aquellas actividades innovadoras y ejemplarizantes que pueden servir de estímulo a la incorporación de nuevas prácticas de consumo o de gestión y a la introducción de nuevas tecnologías y equipos que sirvan de referencia al tejido productivo y al conjunto de la sociedad. Esto es especialmente relevante en el campo de la energía.

En este terreno, la nueva regulación procedente de la Unión Europea en temas como el de la eficiencia energética en general y en los edificios o con relación a los combustibles alternativos; las innovaciones que se vienen produciendo durante los últimos años en el campo de la movilidad con la aparición en el mercado de soluciones alternativas a la movilidad basada exclusivamente en el uso de combustibles derivados del petróleo; o la revolución que se viene produciendo en el campo del alumbrado público con la introducción de luminarias y modelos de gestión mucho más eficientes, invitan a las Administraciones Públicas Vascas a jugar de cara al futuro un papel pionero en la implantación de soluciones innovadoras de ahorro, eficiencia energética y promoción de energías renovables competitivas en los ámbitos donde tienen capacidad y pueden jugar ese papel como es el caso de los edificios públicos en su integridad, las necesidades de movilidad general y de su personal y el alumbrado público asociado al tejido urbano y a sus instalaciones y dependencias.

En el caso del subsector eléctrico además, hoy nos encontramos en una encrucijada energética en la que venimos de un sistema de producción y generación centralizada basado fundamentalmente en la utilización de recursos energéticos fósiles y nucleares y nos dirigimos hacia un modelo de

producción y generación eléctricas más descentralizado basado en mayor medida en fuentes de energía renovables. El proceso de transición será más o menos largo pero las bases energéticas, tecnológicas, industriales e incluso económicas de esta transición están ya disponibles.

La exigencia europea de que los nuevos edificios construidos a partir de determinada fecha sean de consumo energético casi nulo lo que implica que estén construidos con niveles de eficiencia energética muy altos de manera que la cantidad casi nula o muy baja de energía que necesiten debería estar cubierta en muy amplia medida por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno, obliga a utilizar estándares constructivos muy elevados que aseguren ahorros de energía muy altos, así como la incorporación de fuentes renovables de energía en los propios edificios o en su entorno.

La necesidad además de asegurar una gestión eficiente en el uso de la energía junto con el imperativo de integrar la energía producida mediante fuentes renovables instaladas in situ o en el entorno obliga a implantar sistemas integrados de generación distribuida de calor y electricidad y a incorporar microrredes eléctricas inteligentes que aseguren una correcta gestión de la oferta y la demanda eléctricas en los edificios.

Por otra parte, la generación distribuida de electricidad con renovables y cogeneración de alta eficiencia, así como la utilización de nuevos vectores energéticos como el hidrógeno procedente de fuentes renovables para la generación de electricidad y calor descentralizados mediante aplicaciones estacionarias de pila de combustible, permite lograr ahorros inmediatos de energía al evitar las pérdidas originadas en las redes de transporte y distribución de electricidad que canalizan la electricidad generada de manera centralizada hasta los puntos de consumo.

La aprobación a nivel europeo de la Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, unida a la irrupción en el mercado de soluciones de movilidad alternativa a la tradicional basada exclusivamente en vehículos que utilizan derivados del petróleo como combustibles, debe permitir una transición hacia modelos de movilidad que vayan abandonando la utilización de esos combustibles fósiles. La actual coyuntura de crisis económica está ralentizando la introducción de esas motorizaciones alternativas que sin duda van a ocupar una parte importante de las futuras soluciones de movilidad. Las Administraciones Públicas Vascas deben jugar un papel impulsor y ejemplarizante en la utilización de estas nuevas soluciones basadas por ejemplo en los vehículos eléctricos puros a base de baterías o

de pilas de combustible de hidrógeno, vehículos eléctricos híbridos o vehículos que utilicen biocombustibles o combustibles no derivados del petróleo.

3.- Impacto económico general de la ley

El impulso a medidas de ahorro y eficiencia energética así como a la introducción de energías renovables en la generación térmica o eléctrica en los edificios y en el transporte viene avalado por un amplio despliegue normativo, regulatorio y planificador a nivel europeo y estatal. Directivas, leyes, otras normas y planes forman un corpus suficientemente explícito para el desarrollo de medidas y actuaciones para la promoción del ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables a nivel en nuestro caso de la Comunidad Autónoma.

En Euskadi además se viene interviniendo desde hace décadas en esta materia tanto en las administraciones como en los diversos sectores económicos y de actividad, amparados en las distintas Estrategias Energéticas que se han venido aprobando y que culmina con la actualmente en vigor Estrategia Energética de Euskadi 3E2020.

No obstante la aprobación de una nueva ley que regula el ahorro, la eficiencia energética y el uso de las energías renovables en las Administraciones Públicas Vascas, supone un paso más en la ampliación de objetivos, en el acortamiento de plazos de cumplimiento de objetivos nacionales y europeos y en la extensión de medidas y acciones sectoriales en este terreno a las administraciones cuyo ámbito de actuación se circunscribe al interior de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

La ley supone un impacto económico en un doble nivel. A nivel presupuestario de las administraciones concernidas por la misma y a nivel de generación de actividad económica en la sociedad vasca.

A nivel presupuestario el impacto se producirá en un doble sentido. Por un lado, el cumplimiento de objetivos y la implementación de acciones de todo tipo, va a suponer un aumento del gasto asociado a la inversión en instalaciones, equipos e infraestructuras así como al aumento de determinados costes de gestión por tareas de monitorización y control de los mismos. Por otro, las inversiones y acciones realizadas se van a traducir en un ahorro de la energía realmente consumida en comparación con la que se hubiese consumido si no se hubiesen implementado las medidas previstas en el decreto, lo que se traducirá en un menor gasto presupuestario asociado a la compra global de energía.

A este respecto es preciso resaltar que el artículo 13.2 de la ley propone que la Administración de la Comunidad Autónoma y la Universidad del País Vasco/Euskal-Herriko Unibertsitatea deben lograr una reducción del consumo de energía del 12% para el año 2020 y del 25% en el año 2025, todo ello sobre el nivel base de referencia del consumo energético global de la Administración de la Comunidad Autónoma.

En el caso de las Administraciones de los Territorios Históricos y de los municipios el artículo 13.3 de la ley dispone que deben lograr, cada una en su respectivo ámbito de aplicación, una reducción del consumo de energía de sus edificios existentes del 12% para el año 2020 y del 25% en el horizonte 2025, todo ello sobre la base del nivel base de referencia del consumo energético global correspondiente a la respectiva Administración, incluyendo los de las entidades que de ellas dependen.

A nivel de generación de actividad económica, el aumento de la inversión pública incrementará el gasto público en bienes y servicios energéticos suministrados por el sector privado, lo que redundará en un aumento de la actividad económica con sus correspondientes retornos fiscales positivos en materia de recaudación.

Se recogen a continuación los objetivos y acciones contenidos en diversos artículos de la ley, cuyo cumplimiento exige destinar recursos económicos para su materialización:

- a) Tal y como se ha mencionado, los apartados 2 y 3 del artículo 13 obligan a que las Administraciones Públicas Vascas logren una reducción del consumo de energía del 12% para el año 2020 y del 25% en el año 2025, todo ello sobre el nivel base de referencia del consumo energético global correspondiente a la respectiva Administración, incluyendo los de las entidades que de ellas dependen.
- b) El artículo 16 apartado 1 obliga a que los edificios existentes de las Administraciones Públicas Vascas deben contar con la certificación de eficiencia energética en unos plazos determinados
- c) Por su parte, el artículo 16 apartado 2 exige que al menos el 25% de los edificios existentes de cada Administración Pública Vasca debe mejorar su calificación energética en al menos un nivel antes del año 2025. En el caso de los edificios existentes de la Administración de los municipios con número de habitantes inferior a 25.000, incluyendo sus entidades dependientes, este porcentaje será del 20%.

d) El artículo 17 apartado 1 obliga a que los edificios de nueva construcción y los existentes que sean objeto de reformas importantes de las Administraciones Públicas Vascas cuya construcción o reforma se inicie dos años después de la aprobación de la ley deben ser de consumo de energía casi nulo.

e) La Disposición Adicional Tercera por su parte indica que hasta en tanto no se establezca la normativa o metodología concreta para cuantificarlo, el consumo de energía casi nulo en un edificio se considere equivalente a contar como mínimo con calificación energética tipo A y a que un 70% de su consumo energético provenga de fuentes renovables.

f) Respecto a la incorporación de energías renovables en los edificios, la ley establece en su artículo 14.2. que cada Administración Pública Vasca debe lograr que al menos un 26% de sus edificios en el año 2025 disponga de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables, incluyendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica.

g) Con relación a la utilización de energía en vehículos, el artículo 18.2. establece que partir del año 2020 el 100% de los vehículos que se adquieran por las Administraciones Públicas Vascas deben utilizar combustibles alternativos.

h) Respecto a la implantación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos el artículo 18 apartado 4 establece que las Administraciones municipales deben facilitar que para el año 2025 exista en cada municipio un punto de recarga de vehículo eléctrico por cada 2.000 habitantes y el apartado 5 de este mismo artículo mandata que los edificios de nueva construcción, de titularidad de las Administraciones Públicas Vascas, han de contar con puntos de recarga de vehículos eléctricos y de espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de bicicletas.

i) En el caso del servicio público de transporte de viajeros por carretera el artículo 19 apartado 1 indica que el mismo debe ser prestado por vehículos que utilicen combustibles alternativos, concretándose esta obligación en que, de acuerdo con el apartado 2 de este mismo artículo, el 100% de la flota renovada de vehículos ha de utilizar combustibles alternativos a partir del año 2020.

j) El artículo 20 establece en su apartado 1 que los municipios, a fin de evitar un incremento excesivo del uso de la energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero o un deterioro de la calidad del aire

atmosférico, pueden establecer restricciones a la circulación de vehículos que no utilicen combustibles alternativos o a aquellos que sobrepasen determinados niveles de emisión, confiriéndoles en su apartado 2 la potestad de reservar, para aquellos vehículos que utilicen combustibles alternativos, zonas en las que tendrán espacios reservados para su estacionamiento o reducciones en el precio del estacionamiento en zonas públicas o aparcamientos municipales.

k) El artículo 21 exige que los municipios aprueben planes de movilidad urbana que incluyan medidas como la instalación de puntos de recarga y repostaje de combustibles alternativos accesibles al público y otras que pueden conllevar la realización de inversiones por parte de la Administración adoptante del plan.

l) Respecto al control de consumos, el apartado 1 del artículo 10 exige que en el plazo de un año tras la aprobación de la ley los edificios e instalaciones de cada Administración Pública Vasca con una potencia eléctrica instalada superior a 25 kW deben disponer de contadores de energía eléctrica con capacidad de telemedida, de registro y transmisión de curva de carga en periodos inferiores a una hora

m) Respecto a las auditorías energéticas en los edificios, el apartado 1 del artículo 11 señala que en el plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor de la Ley, los edificios de las Administraciones Públicas Vascas con una potencia térmica superior a 70 kW deben contar con la correspondiente auditoría energética que evalúe su consumo energético y sus potenciales niveles de ahorro y eficiencia energética, así como las recomendaciones para su mejora y para la implantación de energías renovables.

n) El alumbrado público exterior también es objeto de auditoría energética de acuerdo con el artículo 11 apartado 3 y debe contener, en todo caso, las prioridades de renovación y reducción de los componentes del alumbrado público exterior compatible con la seguridad de las personas e instalaciones.

o) A su vez, el artículo 11.5 establece que las auditorías energéticas tienen una vigencia de seis años debiéndose llevar a cabo una nueva al término de ese plazo.

p) Respecto a la renovación de instalaciones, equipos, flotas y vehículos de cada Administración Pública Vasca, el artículo 15.1 establece que ha de hacerse teniendo en cuenta criterios de ahorro y eficiencia energética y

utilización de energías renovables que contribuyan a la disminución del uso de combustibles derivados del petróleo y en su apartado 2 mandata a que sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, las Administraciones Públicas Vascas solamente deben adquirir productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético por pertenecer a la clase de eficiencia más alta, especialmente por lo que respecta a la adquisición de equipos de climatización, agua caliente sanitaria, equipos ofimáticos y de alumbrado y considerar, a la hora de comprar vehículos de transporte por carretera y neumáticos, los impactos energético y medioambiental de su utilización durante su vida útil.

q) Con relación a la compra de energía eléctrica, la ley establece en el apartado 1 del artículo 14 que a partir del 1 de enero de 2017, en las licitaciones para la compra de energía eléctrica de las Administraciones Públicas Vascas, se valore especialmente el origen renovable de la misma, estableciendo que los porcentajes correspondientes no pueden ser inferiores al 80 por ciento.

r) El artículo 12.1 establece que todas las Administraciones Públicas Vascas deben diseñar sus propios planes de actuación energética de carácter plurianual en los que realicen un diagnóstico de la situación en su ámbito de actuación y fijen estrategias a ejecutar durante la vigencia de los mismos.

s) Además, el artículo 23 exige que la Administración de la Comunidad Autónoma, las Administraciones de los Territorios Históricos y los municipios adopten un plan de formación del personal de su ámbito de actuación sobre técnicas para aumentar el ahorro y la eficiencia energética, siendo el objetivo de este plan la formación de gestores y técnicos relacionados con la compra, mantenimiento y utilización de instalaciones consumidoras de energía sobre técnicas de ahorro y eficiencia energética y energías renovables.

t) Finalmente, la ley establece en su artículo 24 la obligación de las Administraciones Públicas Vascas de exhibir etiquetas de eficiencia energética en sus edificios y en sus vehículos nuevos, aparte de requisitos en materia de obtención de ayudas (artículo 25), de acuerdos voluntarios (artículo 26) o divulgación de la información y sensibilización sobre la sostenibilidad energética (artículo 27).

Todo este conjunto de obligaciones contenidas en la ley se pueden agrupar en cinco categorías fundamentales: actuaciones horizontales, actuaciones en eficiencia en los edificios, actuaciones en transporte, actuaciones en

energías renovables y actuaciones en alumbrado público, tal y como se recoge en la tabla siguiente:

Tabla 1.- Actuaciones a llevar a cabo derivadas de la ley

Actuaciones (Tipo)	Unidades
Actuaciones horizontales	
Monitorización y control	Edificios
Implantación de sistemas de gestión energética	Edificios
Auditorías y certificación energética	Edificios
Estudios de movilidad	Edificios
Cursos de formación de técnicos y/o responsables	Técnicos
Campañas de concienciación	Actuaciones
Medidas de reducción de la factura	Edificios
Actuaciones en Eficiencia	
Rehabilitación envolvente térmica	Edificios
Cambios de ventanas	Ventanas
Mejoras en iluminación interior	Edificios
Mejoras en iluminación exterior	Edificios
Renovación de calderas	Edificios
Renovación sala de calderas (por reposición)	Edificios
Renovación sala de calderas (por EE)	Edificios
Renovación y centralización climatización	Edificios
Instalaciones de cogeneración	Edificios
Renovación equipos frío salas servidores	Edificios
Mejoras en motores (variadores, alta eficiencia,...)	Edificios
Actuaciones en Transporte	
Renovación de vehículos	Vehículos
Cursos conducción eficiente	Técnicos
Sistema de transporte a centros de actividad (autobús, compartir coche, etc...)	Actuaciones
Instalación de aparcamientos para bicis	Udad (de 10 bicis)
Actuaciones en Energías Renovables	
Instalaciones con calderas de biomasa	Edificios
Instalaciones de geointercambio	Edificios
Instalaciones solares	Edificios
Actuaciones en Albrado Público	
Migración a led (lamp + luminarias + reductor)	Lámparas
Telegestión	Cuadros
Medidas de reducción de la factura	Contrato

4.- Estimación del impacto presupuestario de la ley

El impacto económico detallado de la ley a nivel presupuestario se conocerá una vez aprobados los Planes de Actuación Energética previstos en el artículo 12 para todas las Administraciones Públicas Vascas así como el conjunto de actuaciones previstos en la misma.

En la ley, las actuaciones se extienden hasta el año 2025, siendo este el horizonte temporal sobre el que realizarán las estimaciones sobre el impacto económico de la misma.

A partir de las consideraciones generales realizadas más arriba, el Ente Vasco de la Energía (EVE) ha realizado una estimación preliminar sobre los impactos de las distintas actuaciones previstas en la ley, agrupadas en las cinco categorías fundamentales comentadas en el apartado anterior de esta memoria.

La metodología empleada para la realización de esta estimación preliminar parte de la consideración detallada de todas y cada una de las actuaciones previstas en la ley y la definición en cada actuación de las unidades sobre las que hay que intervenir, tal y como se refleja en la Tabla 1 anterior.

Se pasa a continuación a realizar un análisis económico inicial en el que se fijan, en número y porcentaje, las unidades sobre las que se debe intervenir en función de los objetivos fijados en la ley; se estima el coste o sobrecoste de cada intervención a partir de la base de datos del EVE y de la información proporcionada por sus proveedores habituales; y se calcula el coste total en euros de cada actuación como producto del coste o sobrecoste de cada intervención y el número de intervenciones realizadas. Se fija luego el periodo de intervención de las actuaciones en años, el año de inicio de las actuaciones y se calcula el coste anual en euros de las intervenciones que se realizan en cada actuación.

A partir de este punto, se realiza un análisis energético inicial en el que se calcula el ahorro por unidad sobre la que se actúa en porcentaje, en toneladas equivalentes de petróleo cada año (tep/año) y en euros por año. Se calcula a continuación el ahorro total obtenido en tep/año y en euros/año y el ahorro total acumulado en 2025 en tep y euros.

Posteriormente, se procede a calcular el conjunto de costes (inversiones y gastos) incurridos anualmente en euros/año entre 2015 y 2025 para cada

una de las actuaciones exigidas en la ley. El siguiente paso consiste en calcular el ahorro económico, en euros /año, anualizado entre 2015 y 2025, sin tener en cuenta y teniendo en cuenta el incremento anual del consumo; y se realiza el mismo ejercicio para el ahorro energético en tep/año. Finalmente se calculan el ahorro total acumulado a 2025 en términos energéticos (tep/año) y económicos (€/año).

La Tabla 2 siguiente recoge un resumen de los objetivos estratégicos contenidos en la ley para el año 2025, así como un resumen de las inversiones que la aplicación de la ley va a suponer hasta 2025 y una estimación de la factura energética anual del conjunto de las Administraciones Públicas Vascas y del ahorro anual obtenido para ese año una vez implantadas el conjunto de actuaciones exigidas en la ley.

Tabla 2.- Objetivos estratégicos 2025

Objetivos estrategicos 2025	Actual	2025
Ahorro energético EP (%)		26%
Ahorro energético EF (%)		25%
Cuota renovables edificios (%cf)[1]	0,6%	14%
Edificios con renovables (%)	9%	26%
Transporte alternativo (%)		58%
Inversiones (M€)		461
Factura anual (M€)	274	261
Ahorro anual factura (M€)		119
Ahorro anual factura (%)		31%

[1] %cf significa porcentaje de energías renovables sobre el consumo final de energía en edificios

Como se recoge en la Tabla 2 anterior, en el conjunto de las Administraciones Públicas Vascas tal y como se definen en la ley, el ahorro energético en términos de energía final será del 25% y del 26% en términos de energía primaria. La cuota de renovables en edificios pasará del 0,6% al 14% mientras que los edificios con renovables pasarán del actual 9% al 26% en 2025.

En términos económicos, las inversiones acumuladas a 2025 alcanzarán los 461 millones de euros, lográndose con ello un ahorro anual de 119 millones de euros en la factura energética de ese año del conjunto de Administraciones Públicas Vascas, lo que supone un 31% de ahorro sobre la factura energética total que hubiera alcanzado un montante anual de 380 millones de euros el año 2025 si no se realizasen las actuaciones contenidas en la ley, y dejando la factura energética anual para ese ejercicio en los 261 millones de euros señalados en la Tabla 2. A nivel de detalle, los resultados obtenidos con la aplicación de las previsiones contenidas en la ley se recogen en la Tabla 3 siguiente:

Tabla 3.- Detalle de resultados

Detalle de Resultados	Uds.	Actual	Tend. 2025	Objetivo 2025	Ahorro 2025	Ahorros/ 2025
Consumo primaria	tep	294.528	312.685	231.576	81.109	26%
Consumo final	tep	202.292	214.763	161.726	53.037	25%
Factura energética	M€	273,9	380,3	261,4	118,9	31%
Edificios con renovables	nº	350		1033		
Renovables edificios	tep	625		12.556		
Edificios con renovables	%	8,9%		26,4%		
Renovables edificios	%cf	0,6%		13,9%		
Transporte alternativo	nº veh			3.945		
Transporte alternativo	% veh			58,0%		
Inversiones	M€			461,2		
Eficiencia edificios	M€			253,5		
Renovables edificios	M€			79,1		
Transporte	M€			35,5		
Alumbrado público	M€			93,2		

[1] %cf significa porcentaje de energías renovables sobre el consumo final de energía en edificios

La Tabla 3 recoge la situación actual de las diversas variables contenidas en la misma, los valores que alcanzarían estas variables si no se aprobase la ley (v. columna Tend. 2025) y los objetivos de esas mismas variables a 2025, así como los ahorros obtenidos para 2025.

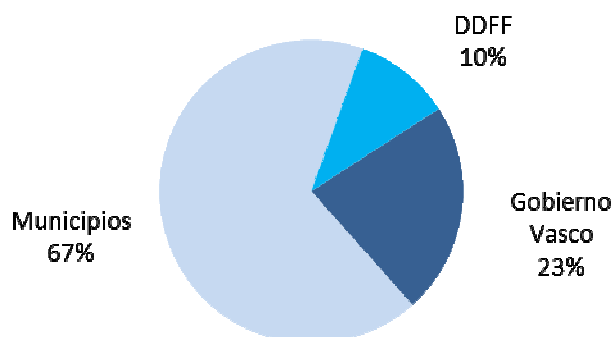
En la tabla se aprecia como el consumo de energía primaria del conjunto de las Administraciones Públicas Vascas pasaría de las 295 ktep actuales a las 313 ktep tendenciales en 2025 si no se actuase y a las 232 ktep objetivo ese mismo año con un ahorro bruto de 81 ktep que representan el 26% sobre el consumo tendencial previsto para ese año. De manera similar en términos de consumo final de energía se logrará un ahorro de 53 ktep que representa un 25% de ahorro sobre el consumo final tendencial en 2025.

Por otra parte, y como ya se ha comentado la factura energética anual del conjunto de las Administraciones Públicas Vascas en 2025 alcanzará los 261 millones de euros con un ahorro del 31% sobre el tendencial previsto. Al mismo tiempo, las inversiones acumuladas hasta 2025 alcanzarán los 461 millones de euros de los que 253 se destinarán a la eficiencia energética en edificios; 79 millones a la implantación de renovables en esos mismos edificios; 35 millones a la compra de vehículos con motorizaciones alternativas a las tradicionales de combustibles derivados del petróleo; y finalmente 93 millones a la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público.

En términos físicos, los 350 edificios actuales (8,9% del total) del conjunto de Administraciones Públicas Vascas que ya cuentan con instalaciones de energía renovable pasarán a ser 1.033 (26,4% del total), mientras que la generación renovable en los edificios pasará de cerca del 0,6 ktep actuales a los 12 ktep, lo que en términos relativos de consumo final de energía significa pasar de un 0,6% a un 14% de la energía final consumida.

Por tipo de administración, las inversiones previstas en el período se repartirían como se presenta en la figura siguiente, en donde 2/3 corresponderían a los municipios.

Figura 1.- Reparto de costes por tipo de Admon

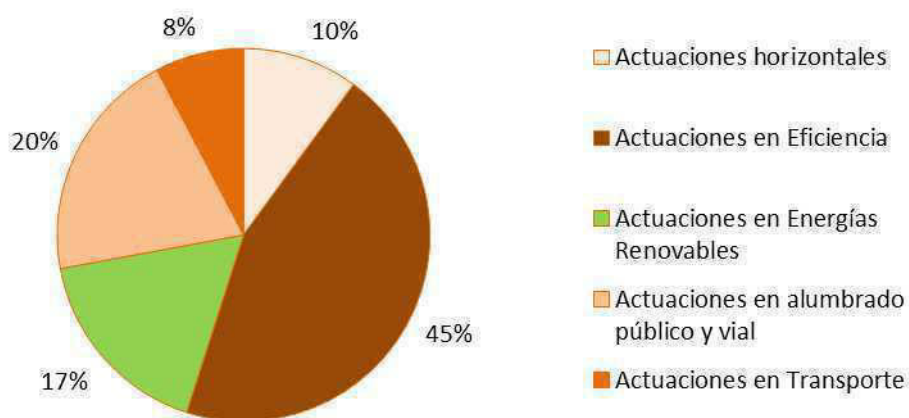


5.- Detalle económico de las actuaciones

Por otra parte, de la información económica de detalle de los costes por tipo de actuación se desprende que de los 461 M€ de desembolso previsto en 10 años, la partida más importante con un 62% correspondía a las inversiones en equipos para la mejora de la eficiencia energética e incorporación de nuevas instalaciones de aprovechamiento de las energías renovables en los edificios públicos, las mejoras en alumbrado público serían el 20%, y otro 8% en los extra-costes de renovación del parque móvil y en flotas de transporte público.

Existe otro 10% que consiste en las denominadas actuaciones horizontales, tales como control de consumos, estudios, auditorías, formación y sensibilización.

Figura 2.- Reparto de costes por tipo de actuaciones



La tabla 4 que se presenta a continuación refleja con un mayor nivel detalle la cuantificación del coste económico de cada tipo de actuación.

Tabla 4.- Desglose económico de las actuaciones

Actuaciones (Tipo)	Costes (€)
Actuaciones horizontales	46.377.500
Monitorización y control	4.676.000
Implantación SGE	17.297.000
Auditorías y certificación energética	16.419.000
Estudios de movilidad	862.000
Cursos de formación de técnicos y/o rbles	5.228.000
Campañas de concienciación	913.000
Medidas de reducción de la factura	982.500
Actuaciones en Eficiencia	207.076.000
Rehabilitación envolvente térmica	37.000.000
Cambios de ventanas	34.555.000
Mejoras en iluminación interior	79.049.000
Mejoras en iluminación exterior	4.424.000
Renovación de calderas	8.936.000
Renovación sala de calderas (por reposición)	10.890.000
Renovación sala de calderas (por EE)	16.160.000
Renovación y centralización climatización	2.480.000
Instalaciones de cogeneración	672.000
Renovación equipos frio salas servidores	560.000
Mejoras en motores	12.170.000
Recuperadores en piscinas	180.000
Actuaciones en alumbrado público y vial	93.180.040
Migración a led	81.281.340
Telegestión	10.768.000
Medidas de reducción de la factura	1.130.700
Actuaciones en Transporte	35.475.920
Renovación de vehículos ligeros	6.540.000
Renovación de vehículos pesados	23.625.000
Cursos conducción eficiente "ligeros"	1.255.500
Cursos conducción eficiente "pesados"	376.920
Sistema de transporte a centros de actividad	1.760.000
Instalación de aparcamientos para bicis	1.918.500
Actuaciones en Energías Renovables	79.065.000
Instalaciones con calderas de biomasa	45.260.000
Instalaciones de geointercambio	9.510.000
Instalaciones fotovoltaicas	24.295.000
TOTAL	461.174.460

Aitor Oregi Bazterrika
**DIRECTOR DE ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACIÓN
INDUSTRIAL**



**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN
JASANGARRITASUN ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE-
AURREPROIEKTUAREN INGURUKO MEMORIA EKONOMIKOA**



1.- Legearen irismena

Jasangarritasun energetikoari buruzko lege honetan, jasangarritasun energetikoaren arau-esparrua finkatzen da. Jasangarritasun energetikoaren oinarria neurriak hartzea da, energia modu efizientean erabiltzeko, energia aurrezteko eta energia berriztagarriak sustatzeko eta ezartzeko, energia-politikaren orientabide orokorrarekin bat etorritik. Halaber, legeak helburu hori gainerako politika publikoetan barneratu beharra finkatzen du eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek dituzten eginbeharrak eta betebeharrak ze hazten ditu.

Aplikazioa, beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek energiaren arloan egiten dituzten jarduerekin lotuta dago, administrazio horiek, legean bertan definitzen diren bezala, honako hauek izanik: Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioa, lurralde historikoetako administrazioa, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietakoa eta Euskal Herriko Unibertsitatea. Horien barruan, horiekin lotuta dauden edo horien mendekoak diren erakunde guztiak sartzen dira, adibidez, erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko ente publikoak, sozietate publikoak eta sektore publikoko fundazioak.

Legearen xede-esparruari dagokionez, aurretik adierazitako edozein erakunderen jabetzakoak diren eta haiek kudeatzen dituzten eraikinetan eta instalazioetan, garraioan eta ibilgailuetan, energia berriztagarrietan eta argiztapen publikoan aplikatzen da. Gainera, jarduketan horizontalak barne hartzen ditu, baita jasangarritasun energetikoa lurraldearen antolaketan eta hirigintzan kontuan hartzeari buruzko determinazioak ere.

Oro har, lege hau ez da sektore pribatuan aplikatzen, legean bertan berariaz adierazitako alderdiak salbuespen izanda, adibidez: partikularrekin jasangarritasun energetiko handiagoa lortzeko akordioak bultzatzea (4j artikulua), energiaren sektoreko eragileekin eta bestelako eragile sozialekin borondatezko akordioak sinatzea (26.3 artikulua).



2.- Energia-aurrezpenaren, efizientzia energetikoaren eta energia berriztagarrien esanahi energetiko, ingurumeneko eta ekonomiko orokorra

Energia gutxiago kontsumituz lan bera ekoiztea edo ongizate bera bilatzea beti izan da, neurri handiagoan edo txikiagoan, energiarekin harremanetan egon direnen kezketako bat.

Ildo horretan, energia modu efizientean erabiltzea, historikoki, energia planifikatzeaz, eraldatzeaz edo hornitzeaz arduratutako erakundeen kezka izan da, baita energia erabiltzeagatik gastu edo kostu bat beren gain hartu behar duten entitateena, enpresena eta kontsumitzaileena ere.

Azken hamarkadetako krisi energetiko ugarietan, kezka horiek areagotu egin dira. Krisialdi horietan, adibidez, merkatuan petrolio eskuragarri gutxi izateak horren prezioa igotzea ekarri du. Horrela, beraien lurraldeetan energia-iturri konbentzional nahikorik ez duten herrialde kontsumitzaileetan, energiaren prezioak garestiak izateak eragin du, nagusiki, energia aurrezteko eta efizientzia handitzeko neurriak ezartzea.

Nabarmendu beharreko beste alderdi garrantzitsu bat energia-iturrien ekoizpenak, garraioak eta eraldaketak dakarren ingurumen-eragina da. Horri gehitu behar zaio duela zenbait hamarkadatik mundu osoan ingurumenarekiko kezka handitzen joan dela, eta horren ondorioz, energia modu efizientean erabiltzeko interesa areagotu egin dela. Gaur egun, inork ez du zalantzan jartzen energia eraldatzeak eta erabiltzeak beti ingurumen-eragina dakarrela. Kasu askotan, eragin horrek energia-prozesutik hurbil antzean bizi diren izaki bizidunengan eta pertsonengan arriskuak sortzen ditu.

Iturri konbentzional deiturikoen kasuan, ingurumenaren gaineko eragin eta arrisku horiek energia-iturri berriztagarrien kasuan baino handiagoak dira, baina denek dakarte ingurumenaren gaineko nolabaiteko eragin edo arrisku bat, nahiz eta txikia izan, maila lokalean edo globalean. Edozein motatako energien erabilerak honako ingurumen-eragin edo -arriskuak sortzen ditu, adibidez: erregai fosilak erabiltzearekin lotutako tokiko edo eskualde-mailako kutsadura, energia eraldatzeko sortzen diren berotegi efektuko gasen isurketaren eragin orokorra, zentral nuklearren funtzionamenduarekin eta erregai nuklearraren ziklo guztiarekin lotutako arriskuak, eta energia



berriztagarrien artean, energia eolikoak paisaian daukan eragina eta lehenengo belaunaldiko bioerregaiekin lotutako elikadura-arriskuak.

Beraz, dela eskasia edo prezio kontuengatik dela ingurumen-kezkengatik, gaur egun, *a priori*, inork ez du zalantzan jartzen ona dela ahalik eta energia gutxien erabiltzea gizarte garatuek ditugun aberastasun- eta ongizate-maila berberak lortzeko; edozein ikuspegitik aztertuta da ona; edo ona dela, baita ere, aberastasun- eta ongizate-maila handiagoak lortzeko energia kopuru bera kontsumitzea, indartzen ari diren herrialdeen eta garabidean dauden gizarteen kasuan.

Azpimarratu beharreko beste alderdi bat herrialdeen artean dauden intentsitate energetikoaren arloko aldeak dira; hau da, aberastasun- eta ongizate-maila berberak lortzeko energia-erabileraren efizientziaren arlokoak. Hala, adibidez, ELGERen beraren barruan, historikoki aldeak oso nabarmenak izan dira; izan ere, ekoiztako aberastasun-unitate bakoitzeko europarrok iparramerikarren energia erdia kontsumitu dugu. Esperientziak erakusten digunez, beraz, energiaren erabileran eredu sozial eta ekonomiko batzuk beste batzuk baino askoz ere eraginkorragoak dira eta energia aurrezteak eta efizientziak mota guztietako abantaila teknikoak, ekonomikoak eta ingurumen arlokoak dakartza.

Horregatik, maila nazionalean edo nazioartekoan energiaz arduratzen diren erakunde eta organismo askoren ustez, energia-aurrezpena seigarren energia-iturri nagusia da, ikatzarekin, petrolioarekin, gas naturalarekin, energia nuklearrarekin eta berriztagarriekin batera. Hala, «energia onena eta garbiena, kontsumitzen ez dena» esamoldea erabat zentzuzkoa da.

Beste alde batetik, efizientzia energetikoa eta energia-aurrezpena elkarri estuki lotutako kontzeptuak dira; izan ere, gizarte jakin batean energia modu efizienteagoan erabiltzearen ondorio zuzena lan bera egiteko edo aberastasun- eta ongizate-maila berberak lortzeko energia gutxiago kontsumitzea da.

Gainera, energia-aurrezpena lortzeko beste bide batzuk ere badaude, esaterako: erakundeen edo gizartearen jokabidea aldatzea, egitura ekonomikoak eraldatzea, energetikoki efizienteagoak diren ekoizpen-prozesu berriak erabiltzea edo kontsumo-ereduak aldatzea, herrialde



bateko, eskualde bateko edo maila globaleko energia-kontsumoa murrizteko.

Beste alde batetik, maila lokalean energia berriztagarriak garatzeak kanpotik datozen energia fosilekiko mendekotasuna murriztea ahalbidetzen du. Horrek kontrolatzeko zailagoak diren gorabehera politikoeikiko eta ekonomikoeikiko mendekotasuna murrizten duten sistema energetikoak dakartza, definizioz jasangarriagoak. Horri dagokionez, gogoan hartzekoa da Euskal Autonomia Erkidegoak behar dituen energia-baliabideen % 90 baino gehiago inportatzen dituela eta horrek gure ekonomia bereziki ahul egiten duela.

Ildo horretan, energia-iturri konbentzionalekin lehiatu daitezkeen energia berriztagarriak garatu eta aberastasun- eta ongizate-maila berberak edo handiagoak lortzeko energia gutxiago kontsumituz gero, kanpoko energiarekiko mendekotasuna murriztuko dugu. Ondorioz, herrialdeko ekonomia egonkorragoa izango da, energia-sistema jasangarriagoa eta enpresak lehiakorragoak. Era berean, politika horiekin, energiaren faktura orokorra murriztuko denez tokiko finantza-baliabideak aurreztuko dira eta baliabide horiek jarduketa ekonomikoa eta enplegua sortzeko inbertsio produktiboak egiteko erabili ahal izango dira.

Mundu osoan, gaur egungo administrazio publikoek, alde batetik, jarduketa ekonomikoaren sustatzaile eta arautzaile rola betetzen dute, eta bestetik, ekoizpen-sarearentzat eta gizarte osoarentzat erreferentziatzekoak izango diren kontsumo- edo kudeaketa-praktika berriak ezartzea eta teknologia eta ekipo berriak barneratzea bultzatu dezaketen jarduketa berritzaile eta eredugarriak dinamizatzen dituzte. Energiaren arloan, hori bereziki garrantzitsua da.

Arlo horretan, Europar Batasunetik datorren arauketa berriak –oro har, efizientzia energetikoari buruzkoa, eta zehazki, eraikinekin edo erregai alternatiboekin lotuta–, azken urteetan mugikortasun naren arloan sortzen ari diren berrikuntzek –merkatuan, petroliotik eratorritako erregaiak bakarrik erabiltzean oinarritutako mugikortasunarekiko alternatiboak diren irtenbideak agertzea– edo argiztapen publikoaren arloan sortzen ari den iraultzak –luminaria eta kudeaketa-eredu askoz ere eraginkorragoak barneratu dira–, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoei, etorkizunera begira, aurrezteko, energia modu



efizientean erabiltzeko eta energia berriztagarri lehiakorrek sustatzeko irtenbide berritzaileen ezarpenean aitzindariak izateko deia egiten diete, betiere rol hori jokatzeko aukera ematen dieten beren eskumeneko esparruetan, adibidez: eraikin publikoetan –horiek osotasunean hartuta–, mugikortasunaren arloko beharretan –bai orokorrak bai beraien langileenak– eta argiztapen publikoan –hirietako sarearekin eta bere instalazioekin eta dependentziekin lotuta–.

Azpi-sektore elektrikoaren kasuan, gainera, gaur egun bidegurutze energetiko batean gaude: nagusiki baliabide energetiko fosilak eta nuklearrak erabiltzean oinarritutako ekoizpen- eta sorkuntza-sistema zentralizatu batetik gatoz eta neurri handiagoan energia-iturri berriztagarrietan oinarritutako ekoizpen eta sorkuntza elektriko deszentralizatuago baterantz goaz. Trantsizio-prozesua gutxi-asko luzea izango da, baina trantsizio horren oinarri energetiko, teknologiko eta industrialak jadanik eskuragarri daude, baita ekonomikoak ere.

Europak data jakin batetik aurrera eraikitako eraikin berriak ia energia-kontsumorik gabekoak izatea exijitzen du, beraz, efizientzia energetiko oso handiarekin eraikita egon behar dute, eta hala, behar duten energia, ia hutsaren hurrengoa edo oso baxua, neurri handi-handi batean energia berriztagarrien bidez estali beharko litzateke, *in situ* edo ingurunean ekoiztutako energia berriztagarria barne hartuta. Horretarako, eraikuntza-estandar oso altuak erabili behar dira, energia-aurrezpen oso handia ziurta dadin, eta eraikinetan bertan edo horien ingurunean energia-iturri berriztagarriak barne hartu behar dira.

Horrez gain, energiaren erabilera modu efizientean kudeatzea ziurtatzeko premiaren eta *in situ* edo ingurunean instalatutako iturri berriztagarrien bidez sortutako energia barne hartzeko premiaren ondorioz, beroa eta elektrizitatea sortzeko eta banatzeko sistema integratuak ezarri behar dira eta eraikinetan eskaintza eta eskaera elektrikoak ondo kudeatzea ziurtatzeko mikrosare elektriko adimendunak barne hartu behar dira.

Beste alde batetik, energia sortzeko eta banatzeko energia berriztagarriak eta efizientzia handiko baterako sorkuntza erabiltzeari esker, hala nola elektrizitate eta bero deszentralizatuak sortzeko bektore energetiko berriak erabiltzeari esker –adibidez, iturri berriztagarrietatik datorren hidrogenoa, erregai-pilako aplikazio finkoen bitartez baliatuta–,



energia berehala aurreztu daiteke, sortutako elektrizitatea kontsumo-guneetaraino modu zentralizatuan eramaten dituzten garraio- eta banaketa-sareetako galerak saihesten direlako.

Europar 2014/94/EB Zuzentaraua onartzeak (erregai alternatiboetarako azpiegitura bat ezartzeari buruzkoa da), eta horrekin batera, merkatuan erregai gisa petrolioaren eratorriak erabiltzen dituzten ibilgailuetan bakarrik oinarritutako mugikortasunarekiko alternatiboak diren mugikortasun-irtenbideak agertzeak erregai fosil horiek erabiltzeari uzten joango diren mugikortasun-ereduetarako trantsizioa ahalbidetu behar dute. Gaur egungo krisi ekonomikoa motorizazio alternatibo horien ezarpena mantsotzen ari den arren, etorkizuneko mugikortasun-irtenbideen parte garrantzitsu bat izango dira. Aipatutako irtenbideak, adibidez, bateriak edo hidrogenozko erregai-pilak erabiltzen dituzten ibilgailu elektriko puruetan, ibilgailu elektriko hibridoetan edo bioerregaiak edo petroliotik eratorriak ez diren erregaiak erabiltzen dituzten ibilgailuetan oinarrituta daude eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek irtenbide berriak erabiltzea bultzatu eta arlo horretan eredu izan behar dute.

3.- Legearen eragin ekonomiko orokorra

Energia aurrezteko eta modu efizientean erabiltzeko neurriak hartzea eta eraikinetako energia termikoa edo elektrikoa sortzeko eta garraiatzeko energia berriztagarriak ezartzea Europa mailako eta estatuko arau, erregulazio eta plangintza askotan babestuta dago. Zuzentarauek, legeek, bestelako arauak eta planek aurrezpena, efizientzia energetikoa eta energia berriztagarriak sustatzeko neurriak eta jarduketak garatzeko corpus behar bezain esplizitua osatzen dute -gure kasuan, Autonomia Erkidegoan garatzeko-.

Euskadin, gainera, duela hamarkada askotatik esku hartzen da arlo horretan, bai administrazioetan bai askotariko sektore ekonomikoetan eta jarduketa-sektoretan, onartzen joan diren energia-estrategien babespean; azkena, gaur egun indarrean dagoen Euskadiko Energia Estrategia da (3E2020).

Hala ere, administrazio publikoen aurrezpena, efizientzia energetikoa eta energia berriztagarrien erabilera arautzeko lege berri bat onartzea helburuak zabaltzeko, helburu nazionalak eta Europa koak lortzeko epeak



murrizteko eta arlo horretako neurri eta ekintza sektorialak Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duten administrazioetara hedatzeko beste pauso bat da.

Legeak eragin ekonomiko bikoitza dauka. Batetik, bere eraginpeko administrazioen aurrekontuan, eta bestetik, euskal gizartean jarduketa ekonomikoa sortzearekin lotuta.

Aurrekontuari dagokionez, bi motatako eragina izango du. Alde batetik, helburuak lortzeko eta mota guztietako ekintzak ezartzeko, instalazioetan, ekipoetan eta azpiegituretan inbertsio handiagoak egin beharko dira eta kudeaketa-gastu batzuk ere handituko dira, horiek monitorizatu eta kontrolatzeko zereginengatik. Bestetik, berriz, egindako inbertsioen eta ekintzen ondorioz, dekretuan aurreikusitako neurriak ezarri izan ez balira kontsumituko litzatekeena baino energia gutxiago kontsumituko da eta horrek energiaren erosketa globalarekin lotutako aurrekontu-gastua txikiagoa izatea eragingo du.

Horri dagokionez, nabarmentzekoa da legearen 13.2 artikulua honako hau jasotzen duela: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateak 2020rako energia-kontsumoa % 12 murriztea lortu behar dutela, eta 2025erako % 25 murriztea, hori guztia Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren energia-kontsumo globalaren oinarritzko erreferentzia-maila abiapuntutzat hartuz.

Lurralde historikoetako eta udalerrietako administrazioen kasuan, legearen 13.3 artikuluan xedatzen denez, bakoitzak, dagokion aplikazio-eremuan, bere eraikinetan, 2020rako energiaren kontsumoa % 12 eta 2025erako % 25 murriztea lortu behar du, hori guztia dagokion administrazioaren eta bere mendeko entitateen energia-kontsumo globalaren oinarritzko erreferentzia-maila abiapuntutzat hartuz.

Jarduketa ekonomikoa sortzeari dagokionez, inbertsio publikoa handitzeak sektore pribatuak hornitutako ondasun eta zerbitzu energetikoen arloko gastu publikoa handitzea eragingo du. Horrek, hedaturaz, jarduketa ekonomikoa handitzea ekarriko du, eta horrekin lotuta, diru-bilketaren arloan dagozkion itzulkin fiskal positiboak izatea.



Jarraian, legearen hainbat artikulutan jasota egonik gauzatu ahal izateko baliabide ekonomikoak bideratzea eskatzen duten helburuak eta ekintzak agertzen dira:

a) Aipatu den bezala, 13. artikuluko 2. eta 3. zenbakietan jasotakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek 2020rako energia-kontsumoa % 12 eta 2025erako % 25 murriztu behar dute, dagokion administrazioaren eta bere mendeko entitateen energia-kontsumo globalaren oinarrizko erreferentzia-maila abiapuntutzat hartuz.

b) 16. artikuluko 1. zenbakian xedatzen denez, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoko eraikinek epe jakin batzuetan efizientzia energetikoko ziurtagiriak eduki behar dituzte.

c) Bestetik, 16. artikuluko 2. zenbakiaren arabera, 2025erako Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publiko bakoitzaren eraikinen % 25ek, gutxienez, bere energia-kalifikazioa gutxienez maila bat hobetu behar dute. 25.000 biztanle baino gutxiago dituzten udalerrietako administrazioen eta haien mendeko erakundeen eraikinen kasuan, berriz, eraikinen % 20k hobetu beharko dute energia-maila.

d) 17. artikuluko 1. zenbakian xedatzen denez, legea onartzen denetik bi urtera eraikitzen edo zaharberritzen hasten diren Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen eraikinek energia-kontsumo ia nulua izan behar dute.

e) Hirugarren xedapen gehigarriaren arabera, bestetik, kuantifikatzeko araudi edo metodologia zehatza finkatzen den arte, eraikin bateko energia-kontsumo ia nulua gutxienez A motako energia-ziurtagiria edukitzearen eta bere energia-kontsumoaren % 70 energia berriztagarrietatik eratorria izatearen baliokidetzat joko da.

f) Eraikinetan energia berriztagarriak ezartzeari dagokionez, legearen 14.2 artikuluan xedatzen denez, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publiko bakoitzak 2025. urtean bere eraikinen gutxienez % 26an energia berriztagarrien aprobetxamendurako instalazioak eduki behar dituzte, bai aprobetxamendu termikoko sistemak bai sorkuntza elektrikokoak barne hartuta.



g) Ibilgailuetan energia erabiltzearekin lotuta, 18.2 artikuluan xedatzen denez, 2020. urtetik aurrera, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek eskuratzen dituzten ibilgailuek erregai alternatiboak erabili behar dituzte.

h) Ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegiturak ez artzeari dagokionez, 18. artikuluko 4. zenbakian xedatzen denez, udal-administrazioek 2025erako udalerrri bakoitzean 2.000 biztanleko ibilgailu elektrikoak kargatzeko gune bat edukitzea ahalbidetu behar dute, eta artikuluko bereko 5. zenbakian xedatzen denez, eraikin berriek, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen jabetzakoek, ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak eta bizikletak erabiltzea eta aparkatzea errazteko espazioak eduki behar dituzte.

i) Bidaiarien errepideko garraiorako zerbitzu publikoaren kasuan, 19. artikuluko 1. zenbakian adierazten denez, zerbitzua emateko erregai alternatiboak erabiltzen dituzten ibilgailuak erabili behar dira. Betebehar horri jarraikiz, artikuluko bereko 2. zenbakian xedatutakoaren arabera, 2020. urtetik aurrera, ibilgailu berrituen % 100ek erregai alternatiboak erabili behar dituzte.

j) 20. artikuluko 1. zenbakian xedatutakoaren arabera, udalerriek, energiaren erabilera eta berotegi efektuko gasen isurketak gehiegi handitzea edo atmosferako airearen kalitatea narriatzea saihesteko, erregai alternatiboak erabiltzen ez dituzten edo isurketa-maila jakin batzuk gainditzen dituzten ibilgailuen zirkulazioan mugak ezar ditzakete. Artikulu bereko 2. zenbakian, erregai alternatiboak erabiltzen dituzten ibilgailuak aparkatzeko guneak gordetzeko ahalmena ematen zaie edo eremu publikoetan edo udal-aparkalekuetan aparkatze-prezioan murrizketak egitekoa.

k) 21. artikuluan exijitzen denez, udalerriek hiri-mugikortasun planak onartu eta plan horietan hainbat neurri barne hartu behar dituzte, adibidez: kargatzeko eta erregai alternatiboak hartzeko guneak instalatzea, jendeak erabili ahal izan ditzan, eta plana indarrean jartzen duen administrazioak inbertsioak egitea eska dezaketen beste batzuk.

l) Kontsumoak kontrolatzeari dagokionez, 10. artikuluko 1. zenbakian exijitzen denez, legea indarrean jarri eta urtebeteko epean, administrazio publiko bakoitzeko eraikinek eta instalazioek, 25 kW-etik gorako



potentzia elektriko instalatua baldin badute, energia elektrikoaren kontagailuak eduki beharko dituzte eta kontagailu horiek ordubete baino gutxiagoko denbora-tartean teleneurketa egiteko, erregistratzeko eta karga-kurba transmititzeko ahalmena izan beharko dute.

m) Eraikinetako energia-ikuskaritzei dagokienez, 11. artikuluko 1. zenbakian adierazten denez, legea indarrean jartzen denetik gehienez hiru urteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen eraikinei, 70 kW-etik gorako potentzia termikoa baldin badute, energia-ikuskaritza bat egin behar zaie, energia-kontsumoa eta energia-aurrezpen eta -efizientzia maila potentzialak ebaluatzeko, baita hobetzeko eta energia berriztagarria ezartzeko gomendioak egiteko ere.

n) Kaleko argiztapen publikoari ere energia-ikuskaritza bat egin behar zaio, 11. artikuluko 3. zenbakiaren arabera, eta, edozein kasutan, kanpoko argiztapen publikoko osagaiak berritzea eta murriztea izan behar du helburu, betiere pertsonen eta instalazioen segurtasunarekin bateragarria den neurrian.

o) Era berean, 11.5 artikuluan xedatzen denez, energia-ikuskaritzek sei urteko indarraldia dute eta epe hori bukatzean beste bat egin behar da.

p) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publiko bakoitzaren instalazioak, ekipoak, flota eta ibilgailuak berritzeari dagokionez, 15.1 artikuluan xedatzen denez, energia-aurrezpen eta -efizientzia irizpideak eta petroliotik eratorritako erregaien erabilera murrizten laguntzen duten energia berriztagarriak erabiltzearen aldeko irizpideak kontuan hartuta egin behar da, eta 2. zenbakian xedatutakoaren arabera, sektore publikoko kontratuen legean finkatutakoa eragotzi gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek efizientzia-maila handienekoak izanik energia-errendimendu handia duten produktuak, zerbitzuak eta eraikinak bakarrik eskuratu behar dituzte –batez ere, klimatizazioko, ur bero sanitarioko, ofimatikako eta argiztapeneko ekipoak erosteari dagokionez– eta errepideko garraiorako ibilgailuak eta pneumatikoak erosterakoan beraien bizitza baliagarrian dituzten energia-eraginak eta ingurumen-eraginak kontuan hartu behar dituzte.

q) Energia elektrikoa erosteari dagokionez, legearen 14. artikuluko 1. zenbakian xedatzen denez, 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek energia elektrikoa erosteko egiten dituzten lizitazioetan, energia berriztagarria izatea



bereziki baloratu behar da. Hala, energiaren % 80k gutxienez berriztagarria izan behar duela finkatzen du.

r) 12.1 artikuluan xedatzen denez, EAEko administrazio publiko guztiek hainbat urtetarako energia-jarduketa planak egin behar dituzte. Plan horietan, beren jarduketa-eremuaren egoeraren diagnostikoa egin eta plana indarrean dagoen bitartean gauzatu beharreko estrategiak zehaztu behar dituzte.

s) Gainera, 23. artikuluan exijitzen denez, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak, lurralde historikoetako administrazioek eta udalerrietako administrazioek dagokion arloko langileei energia-aurrezpena eta -efizientzia areagotzeko buruzko prestakuntza emateko plan bat ezarri behar dute. Plan horren helburua energia kontsumitzen duten instalazioak erosi, mantendu eta erabiltzeaz arduratzen diren kudeatzaile eta teknikariei energia-aurrezpen eta -efizientzia teknikei eta energia berriztagarriei buruzko prestakuntza ematea izango da.

t) Azkenik, legearen 24. artikuluan xedatzen denez, EAEko administrazio publikoek beraien eraikinetan eta ibilgailu berrietan efizientzia energetikoko etiketak erakutsi behar dituzte, baita honako baldintzen ingurukoak ere: diru-laguntzei buruzkoak (25. artikulua), borondatezko akordioei buruzkoak (26. artikulua) edo informazioa zabaltzeko eta jasangarritasun energetikoaren arloko sentsibilizazioari buruzkoak (27. artikulua).

Legean jasotako betebeharrak multzo hori guztia funtsezko bost kategoriatan bildu daitezke: jarduketa horizontalak, eraikinetako efizientziaren arloko jarduketak, garraioaren arloko jarduketak, energia berriztagarrien arloko jarduketak eta argiztapen publikoaren arloko jarduketak, honako taula honetan jasota dagoen bezala:



1. taula: Legetik eratorriak diren gauzatu beharreko jarduketak

Jarduketak (Mota)	Unitateak
Jarduketa horizontalak	
Monitorizazioa eta kontrola	Eraikinak
Energia kudeatzeko sistemak ezartzea	Eraikinak
Energia-ikuskaritzak eta -ziurtapenak	Eraikinak
Mugikortasun-azterketak	Eraikinak
Teknikariak edo arduradunak prestatzeko ikastaroak	Teknikariak
Kontzientziazio-kanpainak	Jarduketak
Faktura txikitzeko neurriak	Eraikinak
Efizientiaren arloko jarduketak	
Ingurutzailerik termikoa birgaitzea	Eraikinak
Leihoak aldatzea	Leihoak
Barneko argiztapena hobetzea	Eraikinak
Kanpoko argiztapena hobetzea	Eraikinak
Galdarak berritzea	Eraikinak
Galdara-gela berritzea (ordeztuz)	Eraikinak
Galdara-gela berritzea (EEa bilatuz)	Eraikinak
Klimatizazioa berritzea eta zentralizatzea	Eraikinak
Baterako sorkuntzako instalazioak	Eraikinak
Zerbitzarien geletako hozte-ekipoak berritzea	Eraikinak
Motorrak hobetzea (erregulagailuak, eraginkortasun handia...)	Eraikinak
Garraioaren arloko jarduketak	
Ibilgailuak berritzea	Ibilgailuak
Eraginkortasunez gidatzeari buruzko ikastaroak	Teknikariak
Lantokietarako garraio-sistema (autobusa, autoa partekatzea...)	Jarduketak
Bizikletetarako aparkalekuak instalatzea	Unit (10 bizikleta)
Energia berriztagarrien arloko jarduketak	
Biomasako galdaren instalazioak	Eraikinak
Geotrukeko instalazioak	Eraikinak
Eguzki-instalazioak	Eraikinak
Argiztapen publikoko jarduketak	
Ledetara pasatzea (lanp + luminariak + murrizgailua)	Lanparak
Telekudeaketa	Koadroak
Faktura txikitzeko neurriak	Kontratua



4.- Legearen aurrekontu-eraginaren kalkulua

Legeak aurrekontuan izango duen eragin ekonomiko zehatza 12. artikuluan EAeko administrazio publiko guztietarako adierazitako energia-jarduketako planak eta jarduketan multzoa onartu ondoren ezagutuko da.

Legean 2025era arteko jarduketak jasotzen dira eta legearen eragin ekonomikoaren inguruko kalkuluak denbora-horizonte horren gainean egingo dira.

Gorago adierazitako gogoeta orokorretatik abiatuz, Energiaren Euskal Erakundeak (EVE) legean aurreikusitako jarduketan eraginei buruzko aurretiazko kalkulua egin du –memoria honetako aurreko atalean aipatutako funtsezko bost kategorietan multzokatuta daude–.

Aurretiazko kalkulu hori egiteko, legean aurreikusitako jarduketa guztiak eta esku-hartze unitateetako jarduketa bakoitzaren definizioa –aurreko 1. taulan agertzen da– zehatz-mehatz aztertu dira.

Jarraian, hasierako analisi ekonomikoa egin da. Analisi horretan, legean finkatutako helburuen arabera dauden esku-hartze unitateen kopurua eta ehunekoa finkatu dira, esku-hartze bakoitzaren kostua edo gainkostua kalkulatu da, EVEren datu-basean eta bere ohiko hornitzaileek emandako informazioan oinarrituz, eta jarduketa bakoitzaren kostu osoa kalkulatu da, eurotan, esku-hartze bakoitzaren kostu edo gainkostuaren eta egindako esku-hartze kopuruaren emaitza gisa. Gero, jarduketan esku-hartze aldia finkatu da, urtetan, jarduketak zein urtetan hasiko diren, eta jarduketa bakoitzean egingo diren esku-hartzeen urteko kostua kalkulatu da, eurotan.

Hortik abiatuz, hasierako energia-analisia egin da. Analisi horretan, esku-hartze unitate bakoitzeko aurrezpen-ehunekoa kalkulatu da, urte bakoitzeko tona petrolio baliokidetan (tpb/u) eta urte bakoitzeko euro kopuruan. Jarraian, urte bakoitzean lortutako aurrezpen osoa kalkulatu da, tpb-tan eta eurotan, eta 2025ean metatutako aurrezpen osoa, tpb-tan eta eurotan.



Gero, legean exijitutako jarduketa bakoitzaren 2015 eta 2025 bitarteko urteko kostu guztiak kalkulatu dira (inbertsioak eta gastuak), eurotan. Hurrengo pausoa 2015 eta 2025 bitarteko urteko aurrezpen ekonomikoa kalkulatzeko izan da, eurotan neurtuta, kontsumoaren urteko igoera kontuan hartu gabe eta hartuta, eta urteko tpb aurr ezipena kalkulatzeko ariketa bera egin da. Azkenik, 2025erako metatutako aurrezpen osoa kalkulatu da, energia aldetik (tpb/urte) eta ekonomia aldetik (€/urte).

Jarraian dagoen 2. taulan, legean 2025. urterako jasotako helburu estrategikoen laburpena eta legea aplikatzeak 2025. urtera arte eragingo dituen inbertsioen laburpena agertzen dira, baita EAEko administrazio publiko guztien urteko energia-fakturaren kalkulua eta legean exijitutako jarduketa guztiak ezarri ondoren urte horretarako lortuko den urteko aurrezpenarena ere.

2. taula.- 2025erako helburu estrategikoak

2025erako helburu estrategikoak	Egungoa	2025
EP, energia-aurrezpena (%-tan)		% 26
EF, energia-aurrezpena (%-tan)		% 25
Eraikinetako energia berriztagarrien kuota (%zf) [1]	% 0,6	% 14
Berriztagarriak dituzten eraikinak (%-tan)	% 9	% 26
Garraio alternatiboa (%-tan)		% 58
Inbertsioak (M€)		461
Urteko faktura (M€)	274	261
Urteko faktura-aurrezpena (M€)		119
Urteko faktura-aurrezpena (%-tan)		% 31

[1] %zf-k honakoa esan nahi du: energia berriztagarrien ehunekoa eraikinetako azken energia kontsumoaren gainean

Aurretik agertzen den 2. taulan jasotakoaren arabera, EAEko administrazio publikoetan -legean definituta dauden bezala-, azken energia-erabileraren aurrezpena % 25ekoa eta % 26koa izango da energia primarioari dagokionez. Eraikinetako berriztagarrien kuota % 0,6koa izatetik % 14ra pasatuko da; berriztagarriak dituzten eraikinak, berriz, % 9 izatetik 2025ean % 26 izatera pasatuko dira.

Termino ekonomikoetan, 2025erako metatutako inbertsioak 461 milioi eurokoak izango dira. Hala, EAEko administrazio publiko guztien urte horretako energia-fakturan urteko 119 milioi euro aurreztuko dira. Horrek esan nahi du energia-faktura osoarekiko % 31ko aurrezpena lortuko dela, 2025erako urteko energia-faktura 261 milioi eurokoa izango delako, 2. taulan adierazi bezala; legean jasotako jarduketak egingo ez balira, berriz, faktura urteko 380 milioi eurokoa izango



litzateke. Zehazki, legean jasotakoa aplikatuz lortu utako emaitzak jarraian agertzen den 3. taulan bilduta daude:

3. taula.- Emaitza zehatzak

Emaitza zehatzak	Unitateak	Egungoa	Joera 2025	Helburua 2025	Aurrezpena 2025	Aurrezpena 2025aren gainean
Energia primarioaren kontsumoa	tpb	294.528	312.685	231.576	81.109	% 26
Azken kontsumoa	tpb	202.292	214.763	161.726	53.037	% 25
Faktura energetikoa	M€	273,9	380,3	261,4	118,9	% 31
Berriztagarriak dituzten eraikinak	kop.	350		1033		
Eraikinetako berriztagarriak	tpb	625		12.556		
Berriztagarriak dituzten eraikinak	%-tan	% 8,9		% 26,4		
Eraikinetako berriztagarriak	%zf	% 0,6		% 13,9		
Garraio alternatiboa	ibilgailu			3.945		
Garraio alternatiboa	kop.			% 58,0		
Garraio alternatiboa	%-a					
Inbertsioak.	M€			461,2		
Eraikinen efizientzia	M€			253,5		
Eraikinetako berriztagarriak	M€			79,1		
Garraioa	M€			35,5		
Argiztapen publikoa	M€			93,2		

[1] %zf-k honakoa esan nahi du: energia berriztagarrien ehunekoa eraikinetako azken energia kontsumoaren gainean

3. taulan, bertan jasotako askotariko aldagaien gaur egungo egoera eta legea onartuko ez balitz aldagai horiek izango litzaketen balioak agertzen dira (ikus 2025eko joeren zutabea), baita aldagai horietako 2025erako helburuak eta 2025erako lortuko diren aurrezpenak ere.

Taulan ikusten denez, EAeko administrazio publiko guztien energia primarioaren kontsumoa gaur egun 295 ktpb-koa izatetik, joerari jarraikiz, 2025ean 313 ktpb-koa izatera pasatuko litzateke, neurririk hartuko ez balitz. Halaber, urte bererako kontsumo-helburua 232 ktpb-koa dela ikusten da, eta hala, 81 ktpb-ko aurrezpen gordina lortuko litzateke, hau da, joerari jarraikiz urte horretarako aurreikusitako kontsumoaren % 26koa. Antzeko ildoan, energiaren azken kontsumoaren aldetik, 53 ktpb-ko aurrezpena lortuko da, hau da, joerari jarraikiz 2025erako aurreikusten den azken kontsumoaren gaineko % 25eko aurrezpena.

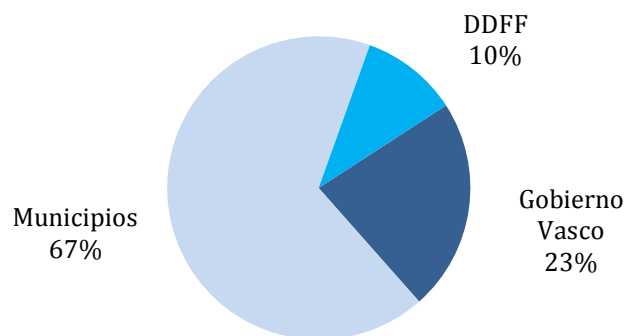


Beste alde batetik, aurretik aipatu den bezala, EAEko administrazio publiko guztien 2025erako urteko energia-faktura 261 milioi eurokoa izango da, hau da, joerari jarraikiz aurreikusitakoarekin alderatuz % 31eko aurrezpena lortuko da. Era berean, 2025era arte metatutako inbertsioak 461 milioi eurokoak izango dira; horietatik 253 eraikinetako efizientzia energetikora zuzenduko dira; 79 milioi eraikin horietan bertan berriztagarriak ezartzera; 35 milioi petrolotik eratorritako erregaiak erabiltzen dituzten ohiko ibilgailuekiko alternatiboak diren motorizazioak erostera, eta azkenik, 93 milioi, argiztapen publikoaren efizientzia energetikoa hobetzera.

Termino fisikoetan, energia berriztagarriko instalazioak dituzten EAEko administrazio publiko guztien eraikinak gaur egun 350 izatetik (kopuru osoaren % 8,9) 1.033 izatera pasatuko dira (kopuru osoaren % 26,4); eraikinetako energia berriztagarriaren sorkuntza, berriz, gaur egun % 0,6 ktpb-koa izatetik 12 ktpb-koa izatera pasatuko da – horrek energiaren azken kontsumoan, termino erlatiboetan, % 0,6tik % 14ra pasatzea esan nahi du–.

Administrazio motaren arabera, adierazitako aldiari aurreikusitako inbertsioak ondorengo figuran agertzen diren bezala banatuko lirateke eta horietatik 2/3 udalerrienak izango lirateke.

1. figura.- Kostuen banaketa, administrazio motaren arabera



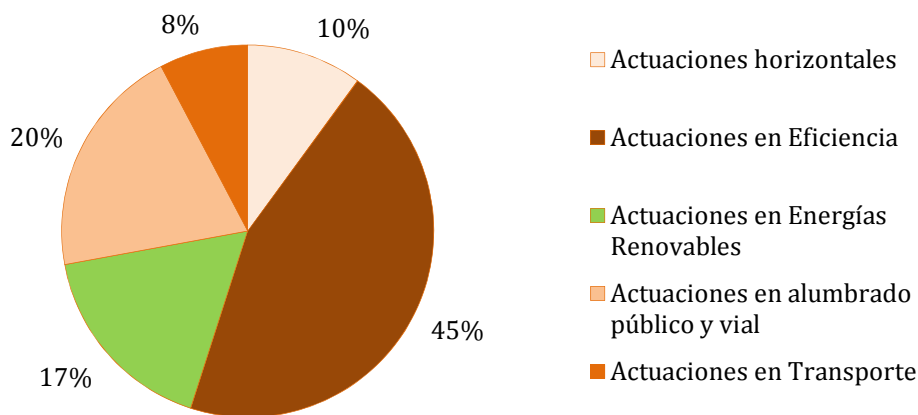


5.- Jarduketan zehaztapen ekonomikoa

Beste alde batetik, jarduketa motaren arabera kostuen zehaztasun ekonomikoari buruzko informaziotik ondorioztatzen denez, aurreikuspenen arabera 10 urtean ordainduko diren 461 milioi euroetatik partida handiena, % 62koa, eraikin publikoetan efizientzia energetikoa hobetzeko eta energia berriztagarrien aprobetxamendurako instalazio berriak ezartzeko ekipoetako inbertsioei dagokie, % 20 argiztapen publikoa hobetzeko inbertsioetarako izango litzateke eta beste % 8 ibilgailuak eta garraio bide publikoetako flotak berritzeko aparteko kostuetarako.

Beste % 10 jarduketa horizontal deiturikoetarako da, adibidez: kontsumoak kontrolatzeko, azterketa eta ikuskaritzak egiteko, prestakuntzarako eta sentsibilizaziorako.

2. figura.- Kostuen banaketa, jarduketa motaren arabera





Jarraian agertzen den 4. taulan, jarduketa mota bakoitzaren kostu ekonomikoa islatzen da, zehatzago kuantifikatuta.

4. taula.- Jarduketan banakapen ekonomikoa

Jarduketak (Mota)	Kostuak (€)
Jarduketa horizontalak	46.377.500
Monitorizazioa eta kontrola	4.676.000
Energia kudeatzeko sistemak ezartzea	17.297.000
Energia-ikuskaritzak eta -ziurtapenak	16.419.000
Mugikortasun-azterketak	862.000
Teknikariak edo arduradunak prestatzeko ikastaroak	5.228.000
Kontzientziazio-kanpainak	913.000
Faktura txikitzeko neurriak	982.500
Efizientziaren arloko jarduketak	207.076.000
Inguratzailerik termikoa birgaitzea	37.000.000
Leihoak aldatzea	34.555.000
Barneko argiztapena hobetzea	79.049.000
Kanpoko argiztapena hobetzea	4.424.000
Galdarak berritzea	8.936.000
Galdara-gela berritzea (ordeztuz)	10.890.000
Galdara-gela berritzea (EEa bilatuz)	16.160.000
Klimatizazioa berritzea eta zentralizatzea	2.480.000
Baterako sorkuntzako instalazioak	672.000
Zerbitzarien geletako hozte-ekipoak berritzea	560.000
Motorrak hobetzea	12.170.000
Igerilekuetan berreskuragailuak jartzea	180.000
Argiztapen publikoko eta bideen argiztapeneko jarduketak	93.180.040
Ledetara igarotzea	81.281.340
Telekudeaketa	10.768.000
Faktura txikitzeko neurriak	1.130.700
Garraioaren arloko jarduketak	35.475.920
Ibilgailu arinak berritzea	6.540.000
Ibilgailu astunak berritzea	23.625.000
Ibilgailu arinak modu efizientean gidatzeari buruzko ikastaroak	1.255.500
Ibilgailu astunak modu efizientean gidatzeari buruzko ikastaroak	376.920
Lantokietara joateko garraio-sistemak	1.760.000
Bizikletetarako aparkalekuak instalatzea	1.918.500
Energia berriztagarrien arloko jarduketak	79.065.000
Biomasako galdaren instalazioak	45.260.000
Geotrukeko instalazioak	9.510.000
Instalazio fotovoltaikoak	24.295.000
GUZTIRA	461.174.460

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

Aitor Oregi Baztarrika
**ENERGIAREN, MEATEGIEN ETA INDUSTRIA-ADMINISTRAZIOAREN
ZUZENDARIA**

VII

INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA / AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN TXOSTENA



**INFORME JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD EN RELACIÓN CON EL
ANTEPROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS.**

1.- NECESIDAD DE INFORME.

El presente informe se emite de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de Disposiciones de Carácter General, según el cual:

“En todo caso, se emitirá por el servicio jurídico del Departamento que haya instruido el procedimiento un informe jurídico en el que se analice su fundamento objetivo, la adecuación de su contenido a la Ley y al Derecho y la observancia de las directrices de técnica normativa que, en su caso, se establezcan.”

En consecuencia, se procede a emitir por esta Asesoría Jurídica, informe jurídico relativo al anteproyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas.

2.- PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NORMA.

El anteproyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas se está tramitando a través de la aplicación informática “tramitagune” desarrollada para la tramitación electrónica, conforme a las instrucciones de tramitación de disposiciones de carácter general, aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010.

En la elaboración del texto que se informa se han observado las directrices para la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Ordenes y Resoluciones aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23.03.1993 y publicadas mediante Orden de 6 de abril de 1993, del Consejero de la Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico. Igualmente se han observado las prescripciones establecidas en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

Previamente a la emisión del presente informe, y según lo establecido en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, antes citada, la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad dictó la Orden de iniciación expresando el objeto y finalidad de la norma, así como, una vez redactado el anteproyecto, Orden aprobando el mismo y ordenando continuar con los trámites correspondientes.

De ambas ordenes se dió la correspondiente publicidad en el espacio compartido de conocimiento “Legesarea”, tal y como se establece en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010, por el que se aprueban las instrucciones de tramitación en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.

En la elaboración de la citada norma deberá tenerse en cuenta lo establecido en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, por lo que el anteproyecto se someterá a los siguientes informes, trámites y actuaciones necesarios para su aprobación:

Elaboración de una Memoria Económica

Se incorporará al expediente junto a la Orden de iniciación, los estudios y consultas evacuados, así como la Memoria Económica que exprese la estimación del coste a que dé lugar, con la cuantificación de los gastos e ingresos y su repercusión en los Presupuestos de la Administración.

Elaboración de una Memoria Sucinta de todo el procedimiento

Con el contenido que señala el artículo 10.2 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, deberá por tanto reseñarse los antecedentes, trámites practicados, modificaciones realizadas en el proyecto para adecuarlas a las observaciones y sugerencias recibidas, justificando con suficiente detalle las razones que motiven la no aceptación de las observaciones contenidas en los informes.

Elaboración de Informe de evaluación de impacto en función del género

Tras redactarse el texto del anteproyecto de ley, deberá redactarse el Informe de evaluación de impacto en función del género, antes de la aprobación previa del proyecto por la Consejera del Departamento y con carácter previo a que dé comienzo la fase de audiencia y de la de emisión de informes y dictámenes preceptivos, por venir así establecido en el artículo 19 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombre y en el punto 5 de las denominadas “*Directrices sobre*

la realización de la evaluación previa del impacto en función del género, aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21.08.2102.

Emisión de Informe jurídico del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 8/2003.

Emisión de Informe de impacto en la empresa, llevando a cabo una evaluación del impacto de la disposición en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas, conforme dispone el artículo 6 de la ley 16/2012, de 28 de junio, de emprendedores del País Vasco. Dicho precepto dispone que el informe será preceptivo en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, deberá remitirse, en todo caso al Parlamento con los proyectos de ley.

Traslado del anteproyecto a los Departamentos del Gobierno Vasco afectados y a otras Administraciones Públicas que resulten afectados por la disposición.

Se dará participación y consulta en el procedimiento a los distintos Departamentos del Gobierno Vasco, Universidad del País Vasco. Así mismo, se remitirá el texto como administraciones directamente afectadas por la regulación prevista a las Diputaciones Forales, a EUDEL y a los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia-San Sebastián.

Informe de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

Conforme con lo dispuesto en la Ley 2/1988, de 5 de febrero, sobre creación de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer para la igualdad de Mujeres y Hombres y previa realización del informe de evaluación de impacto en función del género.

Informe del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura

Según lo establecido en el Decreto 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general.

Informe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (DACIMA), conforme dispone el Decreto 188/2013, de 9 de abril.

Informe de la Junta Asesora de Contratación

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 21.2.a).4) del Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre régimen de la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por el que se atribuye a la Junta Asesora de la Contratación Administrativa la competencia de informar, con carácter preceptivo, los proyectos normativos que incidan en materia de contratación.

Informe de control económico-normativo de la Oficina de Control Económico

Se solicitará dicho informe en aplicación de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la CAE (art. 25 y siguientes) y el Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio de control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración de la CAE (art.41 y siguientes.).

Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

Aprobación por el Consejo de Gobierno y por el Parlamento Vasco

Finalmente, se requerirá la aprobación del anteproyecto por el Consejo de Gobierno y tras su aprobación se remitirá al Parlamento Vasco para su debate y aprobación, en su caso, por el mismo.

No es necesario realizar ningún trámite ante la Unión Europea.

3.- ANTECEDENTES NORMATIVOS

Los antecedentes del proyecto que se informa enraízan directamente con todas aquellas directrices normativas que pretenden estimular la eficiencia energética y el ahorro.

La Comisión Europea aprobó en 2011 el documento “ Energy Efficiency Plan 2011” que propone promover el papel ejemplar del sector público al establecer que las autoridades públicas deberían aplicar estándares exigentes de eficiencia energética de manera sistemática en todas sus compras de energía. Algunos de los objetivos son los de establecer que se rehabilite anualmente el 3% de la superficie construida en edificios públicos, doblando la tasa actual; fomentar las ESE; apoyar el pacto de Alcaldes y Alcaldesas y lanzar la iniciativa ciudades inteligentes.

La Unión Europea ya había establecido y ha reforzado esta orientación hacia la eficiencia y el ahorro a través de:

- Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
- Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 19 de mayo, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
- La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se Modifican las Directivas 2009/125 CE y 2010/30/UE y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE que tiene por objeto establecer un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la unión a fin de asegurar la consecución del objetivo principal de eficiencia energética de un 20% de ahorro para 2020, y preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de ese año.

La Directiva 2012/27/UE obliga no solo a renovar anualmente un porcentaje significativo de los edificios de las administraciones centrales para mejorar su rendimiento energético, sino también a que los estados miembros establezcan una estrategia a largo plazo para mejorar el rendimiento energético del parque inmobiliario. La Directiva, que fija exigencias de carácter mínimo que, por tanto, pueden siempre ser mejoradas por los estados miembros, hace expresamente una amplia referencia al importante papel ejemplarizante del sector público en el ámbito de la eficiencia energética y lo hace no solo en los considerandos de su preámbulo sino

también en el propio articulado (5 y 6) por lo que se refiere al ámbito de la contratación de obras, suministros y al establecimiento de planes de eficiencia energética sostenibles.

En el ámbito estatal estos objetivos se contemplan en estrategias, planes y programas y normas técnicas tan relevantes como la Estrategia Española de Lucha contra el Cambio Climático, el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética en España y en el Plan de Energías renovables actualmente en vigor. Junto a estos planes hay que destacar la aprobación del Código Técnico de la Edificación y la aprobación de la Certificación Energética de Edificios.

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, de carácter básico, determina, en su artículo 5, que uno de los principios que ha de presidir la acción de los poderes públicos es el del ahorro, eficiencia energética y la promoción de las energías limpias, reducción de emisiones y eficaz tratamiento de residuos.

El capítulo I del título II de esta Ley viene referido a la regulación de un modelo energético sostenible, conforme al que se establece la necesidad de que todas las administraciones públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, incorporen los principios de ahorro, eficiencia energética y utilización de fuentes de energía renovables entre los principios generales de su actuación y en sus procedimientos de contratación

La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanística en su artículo 3 en la misma línea establece que *“los poderes públicos formularan y desarrollaran en el medio urbano las políticas de su respectiva competencia de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional”*.

El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios establece la obligatoriedad de la Certificación Energética y la exhibición de la etiqueta energética también para los edificios de titularidad pública, ocupados por una autoridad pública y que vayan a ser frecuentados habitualmente por el público cuando su superficie útil sea superior a 250 m²

En el marco autonómico también se ha generado una legislación de promoción del ahorro y la eficiencia energética que ha sido tenida muy en

cuenta en la elaboración de esta ley. El Decreto 178/2015, de 22 de setiembre, sobre sostenibilidad energética del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi constituye el antecedente inmediato más cercano de la Ley que se informa si bien esta última resulta mucho más ambiciosa por lo que se refiere no solo al ámbito subjetivo de aplicación de la misma, sino también a su contenido.

En el ámbito de la certificación energética podemos citar la normativa dictada en desarrollo del Real Decreto 235/2013 que traspone las directivas comunitarias antes citadas:

- Decreto 226/2014, de 9 de diciembre, de certificación de la eficiencia energética de los edificios.
- Orden de 16 de marzo de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se regula el control y registro de los Certificados de Eficiencia Energética.

Por último, pero no por ello de menor entidad, hay que dejar constancia de que la propia Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3E2020), aprobada por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2011, contempla, también, como uno de sus objetivos, lograr la implicación en dicha estrategia de todas las administraciones públicas vascas. Una de sus principales líneas de actuación es promover una administración pública vasca energéticamente más eficiente y sostenible, lo que supondrá, entre otras actuaciones, la adopción de medidas encaminadas a reducir el consumo en los servicios e instalaciones que dependan de ella y el impulso de las energías renovables en el ámbito de la misma.

4.- TITULO COMPETENCIAL

4.1.- Distribución Competencial

Examinado el objeto del anteproyecto informado podemos afirmar que el mismo afecta exclusivamente a la Administración Pública Vasca, pudiendo subsumirse en la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de régimen energético y de manera más residual en materia de medio ambiente.

En estas materias la CAPV ostenta competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del estado, artículos 11.2.c) y 11.1.a) del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Dentro de la CAPV, la delimitación de las competencias de los distintos entes territoriales que la conforman, viene establecida en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (LTH).

Además de la delimitación de competencias contenida en la LTH, el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco, contiene una atribución específica de competencias a los Órganos Forales. En el artículo 37 del mismo se contienen competencias exclusivas que <<en todo caso>> ostentan los Órganos Forales, dándoles así, una especial protección, dado el rango de Ley Orgánica que tiene el Estatuto. Hay que resaltar que, por lo que aquí nos interesa, señalar que la materia de energía no se encuentra en el elenco de competencias exclusivas atribuidas estatutariamente a los Órganos Forales.

Por lo que respecta a la Ley 27/1983, de 25 de noviembre (LTH), hay que tener en cuenta lo siguiente:

1º No hay en la LTH una referencia expresa al título competencial de energía. No hay una atribución directa de la misma a los Órganos Forales; ni entre las que atribuye a dichos órganos competencia exclusiva, ni de desarrollo y ejecución ni de mera ejecución.

2º Competencia residual de las Instituciones Comunes de la CAPV en todo lo que, correspondiendo a la CAPV no venga atribuido a los Órganos Forales:

El artículo 6º de la LTH, atribuye a la competencia de las Instituciones Comunes de la CAPV, la legislación y ejecución en todas aquellas materias que, correspondiendo a la CAPV según el Estatuto de Autonomía, no se reconozcan o atribuyan bien en dicho Estatuto, bien en la LTH o bien en otras Leyes posteriores a los Órganos Forales de los Territorios Históricos.

En conclusión, en orden al examen de distribución interna de competencias dentro de la CAPV, se comprueba que ni el artículo 37 del EAPV ni la Ley 27/1983, de 25 de noviembre (LTH), mencionan la materia de energía, por lo que de acuerdo con el artículo 6.2 de la LTH, las Instituciones Comunes son competentes para abordar la regulación proyectada.

4.2- Competencia para la tramitación del anteproyecto de ley

El proyecto de Ley que se somete a Dictamen tiene por objeto regular el marco organizativo, los objetivos y las acciones relativas al ahorro, la

eficiencia energética y el uso de las energías renovables en las Administraciones Públicas Vascas.

La habilitación para la adopción de esta norma se encuentra, en primer lugar, en la competencia exclusiva reconocida por el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. En concreto el proyecto que se informa tiene por objeto una serie de normas que afectan directa y exclusivamente a la Administración Pública Vasca asumiéndose el compromiso de adoptar ambiciosas actuaciones en pro del ahorro y la eficiencia energética que se desglosan a lo largo de su articulado, por lo que incide de lleno en la competencia de régimen energético y minero (artículos 10.11 y 11.2.c EAPV).

A la vista de las anteriores consideraciones, tratándose de régimen energético, y, más concretamente, de la promoción del ahorro y la eficiencia energética, la elaboración del presente proyecto es competencia del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad de acuerdo con los artículos 2 y 7 del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, de creación supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

En consecuencia, consideramos que no existen dudas en cuanto al título competencial del que dispone esta Comunidad Autónoma para la aprobación del presente proyecto normativo.

5.- ANALISIS DEL CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto que se somete a Dictamen tiene por objeto, como ya adelantábamos, de acuerdo con la orientación general de la política energética, de los pilares normativos de la sostenibilidad energética en el ámbito de las Administraciones Públicas Vascas, articulando los deberes y obligaciones que estas deben cumplir y que se orientan fundamentalmente al impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética y de promoción e implantación de energías renovables, desarrollando a la par un papel ejemplarizante en la implantación de soluciones innovadoras de ahorro, eficiencia energética y promoción de energías renovables en aquellos ámbitos donde se tiene capacidad para ello, como es el caso de los edificios, movilidad de su personal y alumbrado público a las instalaciones públicas.

Esto supondrá, sin duda, a futuro un importante estímulo a la incorporación de nuevas prácticas de consumo en el ámbito del sector privado, así como en el resto de las administraciones. En este sentido, el objetivo es doble, por un

lado reducir el consumo energético que supone un porcentaje importante del consumo energético del sector servicios y, por otro, fomentar el papel ejemplarizante que la administración pública debe tener a la hora de establecer medidas, incorporando servicios y tecnologías innovadoras.

Desde el punto de vista normativo, la iniciativa se incardina en las exigencias de la normativa europea, pero también en las que la propia Administración de la Comunidad Autónoma entiende que son necesarias para que el ahorro, la eficiencia energética y el uso de las energías renovables dejen de ser objetivos loables para convertirse en realidades constatables. Así se establecen en el mismo no solo los objetivos básicos sino también medidas específicas que se vinculan a plazos concretos, con la finalidad de recalcar el papel ejemplarizante que debe tener la administración.

El impulso a medidas de ahorro y eficiencia energética, así como a la introducción de energías renovables en la generación térmica o eléctrica en los edificios y en el transporte, viene avalado por un amplio despliegue normativo, regulatorio y planificador a nivel europeo y estatal. Directivas, leyes, otras normas y planes forman un corpus suficientemente explícito para el desarrollo de medidas y actuaciones para la promoción del ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables a nivel de la Comunidad Autónoma.

En Euskadi, además, se viene interviniendo desde hace décadas en esta materia, tanto en las administraciones como en los diversos sectores económicos y de actividad, amparados en las distintas Estrategias Energéticas que se han venido aprobando desde hace tres décadas y que culmina con la actualmente en vigor “Estrategia Energética de Euskadi 3E2020”.

Con la aprobación del Decreto 178/2015, de 22 de setiembre, el Gobierno Vasco asumió el liderazgo del cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea en esta materia, si bien circunscribiéndose al ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

La ley cuyo proyecto se informa constituye un paso más en la función tractora y ejemplarizante asumida por el Gobierno Vasco y pretende articular las medidas y obligaciones que contribuirán al ahorro del consumo energético en el conjunto de las instituciones de la Administración Pública Vasca.

En el contenido del proyecto que se informa, resulta conforme con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley para la igualdad de mujeres y hombres y con las Instrucciones del Lehendakari de 18 de marzo de 1994

para erradicar el lenguaje sexista en las disposiciones normativas y documentos administrativos, así como en la información y divulgación de la acción institucional de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se ha incluido la premisa del enfoque de género en diversas partes de su articulado, así al hacer referencia a los principios que inspiran la Ley, al regular la Comisión para la Sostenibilidad Energética, recordándose la obligación de garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en dicho órgano colegiado, al regular las campañas de sensibilización y divulgación y con ocasión de la referencia a los planes de movilidad urbana.

El anteproyecto de Ley se compone de 28 artículos estructurados en tres capítulos, cuatro disposiciones adicionales y dos disposiciones finales:

Capítulo I. Disposiciones Generales (artículos 1 a 9).

Capítulo en el que se concreta el objeto de la normativa proyectada, su ámbito de aplicación, así como, de manera breve, los principales objetivos y una serie de definiciones que se consideran necesarias para la adecuada aplicación de la norma proyectada. Contiene también los principios que inspiran la Ley que, de acuerdo con su Exposición de Motivos constituyen pautas de actuación de las Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma, entre los que cabe destacar el papel ejemplarizante de las Administraciones Públicas Vascas.

Parte destacada de este capítulo es la relativa a la consideración, como pilar fundamental de la misma, de la integración de los requisitos de la Ley en otras políticas públicas, en especial en aquellas que tienen que ver con la ordenación del territorio, el urbanismo y las infraestructuras del transporte, así como el de eficacia y coordinación de las diversas Administraciones Públicas Vascas.

Su ámbito subjetivo de aplicación se extiende a las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi que se considera integrada por:

- a) La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco incluyendo sus entidades vinculadas o dependientes.
- b) La Administración de los Territorios Históricos incluyendo sus entidades vinculadas o dependientes.
- c) La de los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco incluyendo sus entidades vinculadas o dependientes.

d) La Universidad del País Vasco/Euskal-Herriko Unibertsitatea incluyendo sus entidades vinculadas o dependientes.

Se entienden por entidades vinculadas o dependientes los organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado, las sociedades públicas, las fundaciones del sector público y los consorcios con personalidad jurídica propia a los que se refiere el artículo 7.4.c) del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

A instituciones como el Parlamento Vasco, el Tribunal de Cuentas y el Ararteko se refiere la Disposición Final Primera para los que determina que elaborarán sus propios planes de sostenibilidad energética, pudiendo tener en cuenta lo dispuesto en esta Ley.

Respecto de su ámbito objetivo, el Decreto será de aplicación a los edificios, instalaciones, parque móvil y alumbrado público que sean propiedad y estén gestionados por cualquiera de las entidades enunciadas anteriormente.

Capítulo III. Objetivos y Acciones (artículos 10 a 25).

Este capítulo, que constituye la parte central de los compromisos que asumen las Administraciones Públicas Vascas, se desglosa a su vez en tres secciones.

La primera de ellas bajo la rúbrica "Objetivos y acciones Generales" se ocupa de establecer, en consonancia con la Estrategia Energética de Euskadi, los objetivos generales en materia de ahorro, eficiencia y utilización de energías renovables, junto con sus correspondientes horizontes temporales.

De acuerdo con el texto proyectado las Administraciones Públicas Vascas están obligadas a la elaboración de un inventario de los edificios, parque móvil e instalaciones de alumbrado público existentes en su ámbito que serán de carácter público, así como al control de consumos de sus instalaciones para lo cual las instalaciones con una potencia eléctrica instalada superior a 25kW deberán contar con contadores inteligentes. Estos últimos constituyen el requisito imprescindible para que cada una de las Administraciones Públicas Vascas afectadas por esta Ley puedan realizar un diagnóstico certero de sus consumos y potenciales ahorros que es, en

definitiva, la finalidad de la auditoria energética. Todas estas actuaciones culminan en lo que el artículo 13 denomina “Planes de Actuación Energética”, que se elaboraran cada dos años con la finalidad de, a partir del diagnóstico previo, fijar estrategias de actuación.

Asimismo, se establecen los objetivos de reducciones porcentuales de consumo de energía con referencia a sus consumos anuales y a unos períodos de tiempo tasados, los de implantación de instalaciones de energía renovable y los requisitos para la renovación de instalaciones, vehículos o equipos de alto consumo energético.

La Sección segunda hace referencia ya a objetivos y acciones más sectoriales en concreto la relativa a la calificación energética de edificios y viviendas.

La tercera aborda el transporte y la movilidad, estableciendo la exigencia de que los municipios cuenten con un plan de movilidad urbana, con indicación de los objetivos a alcanzar. Se fomentarán los vehículos que utilicen combustibles alternativos, incluyendo los que prestan el servicio público de transporte de viajeros y viajeras estableciéndose la posibilidad de que los municipios restrinjan e incluso prohíban la entrada de determinados vehículos en el centro urbano...

Todas estas medidas se refuerzan por medio de las obligaciones de publicidad, de formación de su personal y de exhibición de etiquetas energéticas establecidas en la sección 4º.

El capítulo III se refiere a los instrumentos voluntarios y al fomento de las actividades de sostenibilidad energética, incluyendo medidas incentivadoras del cumplimiento de las obligaciones y objetivos impuestos en la presente Ley a través de los posibles incrementos de las ayudas públicas en materia de sostenibilidad energética. Este capítulo incluye también una referencia a los acuerdos voluntarios, como fórmula para ir más allá de las obligaciones legales que se imponen a las Administraciones Públicas. Asimismo, en este capítulo se garantiza el derecho a la información, en línea con la normativa de la Unión Europea.

Por lo que respecta a las disposiciones adicionales, imponen distintas obligaciones a los Consorcios y Mancomunidades y a las empresas distribuidoras de gas y electricidad y aclaran el cálculo del nivel base de referencia del consumo energético global de las administraciones

públicas que constituye el punto de partida para las medidas establecidas en este proyecto, refiriéndose también a lo que, mientras no se establezca la metodología para cuantificarlo, se deberá entender por consumo de energía casi nulo.

Por su parte, las disposiciones finales incluyen, además de la entrada en vigor de la Ley, la previsión de que tanto el Parlamento Vasco, el Tribunal de Cuentas y el Ararteko puedan, en su caso, elaborar sus propios planes, teniendo en cuenta lo dispuesto en esta Ley.

CONCLUSIONES

Primera.- La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia para dictar la Ley cuyo anteproyecto se somete a informe en virtud de los artículos 10 y 11 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre.

Segunda.- El anteproyecto de ley que se informa se adecua a las directrices para la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Órdenes y Resoluciones aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993 y publicadas mediante Orden de 6 de abril de 1993, del Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico

Tercera.- Se han observado las prescripciones establecidas en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de Disposiciones de Carácter General y se adecua a las instrucciones de Tramitación de disposiciones de carácter general, aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010.

Cuarta.- Finalmente el Anteproyecto de Ley se considera ajustado a derecho.

Este es mi informe que se somete a cualquier otro mejor fundado en derecho.

FIRMADO DIGITALMENTE POR:
Firmante: CRISTINA SALAS CRISTOBAL
Fecha de la firma: 18/05/2016 15:57:14
Validación de la firma:  Correcta

Cristina Salas Cristóbal
DIRECCION DE ENERGÍA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL.



EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILAREN TXOSTEN JURIDIKOA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN ENERGETIKOARI BURUZKO LEGEAREN AURREPROIEKTUAREN GAINEKOA.

1.- TXOSTENAREN BEHARRA.

Txosten hau Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 7.3 artikuluan ezarritakoaren arabera egin da. Hona hemen zer dioen artikulua horrek:

“Edonola ere, prozedura bideratu duen Saileko zerbitzu juridikoak txosten juridikoa egingo du proiektuaren oinarri objektiboa aztertzeko, edukia legearekin bat eta zuzenbidearekin bat datorren ikusteko eta araugintzako teknikaren jarraibideak bete diren egiaztatzeko, baldin eta halakorik balego.”

Horren ondorioz, aholkularitza juridiko honek EAeko Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legearen aurreproiektuaren gaineko txosten juridikoa egin du.

2.- ARAUA EGITEKO PROZEDURA.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legearen aurreproiektua izapidetze elektronikorako garatutako “Tramitagune” aplikazio informatikoaren bidez izapidetzen ari da, Gobernu Kontseiluaren 2010eko abenduaren 28ko Erabakiaren bidez onartutako xedapen orokorrak izapidetzeko jarraibideen arabera.

Txostenaren xede den testua prestatzean kontuan hartu dira Gobernu Kontseiluaren 1993ko martxoaren 23ko Erabakiaren bidez onartu eta Lehendakaritza, Lege Araubide eta Autonomia Garapenerako sailburuaren 1993ko apirilaren 6ko Aginduaren bidez argitaratutako gidalerroak, lege-proiektuak, dekretuak, aginduak eta ebazpenak egitekoak. Halaber, xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen ezarritako xedapenak bete dira.

Txosten hau egin aurretik eta goian aipatutako abenduaren 22ko 8/2003 Legean xedatutakoaren arabera, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak hasierako agindua eman zuen arauaren helburua eta xedea adieraziz eta, aurreproiektua idatzitakoan, hura onartzeko eta dagozkion izapideak egiten jarraitzeko Agindua ere bai.

Agindu biak "Legesarea" ezagutza-esparru partekatuan argitaratu ziren, xedapen orokorrak egiteko prozeduran izapidetze-jarraibideak onartzen dituen 2010eko abenduaren 28ko Gobernu Kontseiluaren Erabakian ezarritakoari jarraikiz.

Arau hori egitean, kontuan izan beharko da abenduaren 22ko 8/2003 Legean ezarritakoa, eta, beraz, aurreproiektua onartzeko, txosten, izapide eta jarduketa hauek gauzatu beharko dira:

Memoria ekonomikoa egitea.

Espediente honi, hasierako aginduaz gain, egindako azterlan eta kontsulta guztiak erantsiko zaizkio, bai eta memoria ekonomiko bat ere. Memoria ekonomiko horretan, legeak eragingo dituen kostuak haztatuko dira: zer gastu eta diru-sarrera eragingo dituen kuantifikatuko da, eta zer eragin izango duen administrazioaren aurrekontuetan.

Prozedura osoaren memoria laburra egitea.

Memoria labur horrek abenduaren 22ko 8/2003 Legeak 10.2 artikuluan ezarritako edukia izan beharko du, eta, beraz, hau jasoko da: aurrekariak; egindako izapideak; eta zer aldaketa egin diren proiektuan, jasotako ohar eta gomendioetara egokitzeko, eta txostenetan adierazitako iradokizunak onartu ez badira, zergatik ez diren onartu, ondo arrazoituta.

Generoaren araberako eraginari buruzko txostena egitea.

Lege-aurreproiektuaren testua idatzi ondoren, generoaren araberako eraginari buruzko txostena idatzi beharko da, saileko sailburuak proiektuari hasierako onarpena eman aurretik eta entzunaldiko fasea eta nahitaezko txostenak eta irizpenak egiten hasi aurretik. Izan ere, horrela ezartzen dute Emakumeen eta Gizonen arteko berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19. artikulua eta 2012ko abuztuaren 21eko Gobernu Kontseiluak onartutako "genero-eraginaren aurreko ebaluazioa gauzatzeari buruzko jarraibideak" izenek oen 5. puntuak.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun **Sailaren txosten juridikoa egitea**, 8/2003 Legearen 7.3 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Enpresan izango duen eraginari buruzko txostena egitea, xedapenak arloko enpresak eratu, martxan jarri eta funtzionatzerakoan duen eragina ebaluatzeko, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari Laguntzeko ekainaren 28ko 16/2012 Legearen 6. artikuluan xedatutakoaren arabera. Artikulu horrek dio txostena nahitaezkoa izango dela izaera orokorreko xedapenak lantzeko prozeduran, eta, nolana ere, lege-proiektuekin batera Legebiltzarrari igorri beharko zaiola.

Aurreproiektua igortzea Eusko Jaurlaritzaren eragindako sailei eta xedapenak eragindako beste administrazio publiko batzuei.

Prozeduran Eusko Jaurlaritzako sailek eta Euskal Herriko Unibertsitateak partaidetza eta kontsulta izango dute. Halaber, aurreikusitako xedapenak zuzenean ukitutako administrazioei ere bidaliko zai e testua, hau da, foru-aldundiei, EUDELi eta Gasteizko eta Donostiako udalei.

Emakunde Emakumearen Euskal Erakundearen txostena.

Emakunde Emakumearen Euskal Institutua sortzeari buruzko otsailaren 5eko 2/1988 Legean ezarritakoari jarraituz eta, betiere, generoaren araberako eraginaren ebaluazioaren txostena egin aurretik.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren txostena.

Azaroaren 6ko 233/2012 Dekretuak, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskara-erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duenak, ezarritakoarekin bat etorriz.

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren txostena, apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuak ezarritakoari jarraituz.

Kontratazioko Aholku Batzordearen txostena.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren kontratazio-araubideri buruzko ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuaren 21.2.a).4) artikuluan

ezarritakoa betez, Administrazio Kontratazioko Aholku Batzordeari esleitzen zaio kontratazio-alorrean eragina duten araugintza-proiektuez nahitaez informatzeko eskumena.

Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren ekonomia- eta arau-arloko kontrolari buruzko txostena.

Txosten hori eskatuko zaio EAEko kontrol ekonomikoari eta kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legea (25. art. eta hurrengoak) eta EAEko administrazioaren eremuan barneko kontrol ekonomikoa eta kontabilitatea nola burutu garatu duen urriaren 31ko 464/1995 Dekretua (41. art. eta hurrengoak) aplikatuz.

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpena.

9/2004 Legeak, azaroaren 24koak, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzkoak, ezarritakoari jarraituz.

Gobernu Kontseiluak eta Eusko Legebiltzarrak onartzea.

Azkenik, aurreproiektua Gobernu Kontseiluak onartu beharko du, eta hori egin ondoren, Eusko Legebiltzarrera igorriko da, han aztertu eta, hala erabakitzen badute, onar dadin.

Ez dago Europar Batasunean inolako izapiderik egin beharrik.

3.- ARAU-AURREKARIAK

Txostenaren xede den proiektuaren aurrekariak efizientzia energetikoa eta energia aurreztea sustatzea nahi duten arau-gidalerroekin zuzeneko lotura dute.

2011n, Europako Batzordeak “Energy Efficiency Plan 2011” dokumentua onartu zuen, zeinak sektore publikoak eredugarri izan behar duela sustatzea proposatzen baitu; izan ere, ezartzen duenari jarraikiz agintari publikoek egiten dituzten energia-erosketa guztietan efizientzia energetikoko estandar

zorrotzak sistematikoki aplikatu beharko lituzkete. Helburuetako batzuk dira azalera eraikiaren % 3a birgaitzea urtero, eta, hortaz, gaur egungo tasa bikoiztea; energia-zerbitzuen enpresak (EZE) sustatzea; alkateen itunari babesa ematea eta hiri adimendunen ekimena abiaraztea.

Efizientziara eta aurreztera bideratutako orientazio hori Europar Batasunak ezarri eta indartu zuen, honako hauen bitartez:

- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002/91/EE Zuzentaraua, 2002ko abenduaren 16koa, eraikinen efizientzia energetikoari buruzkoa.
- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010/31/EB Zuzentaraua, maiatzaren 19koa, eraikinen efizientzia energetikoari buruzkoa.
- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012/27/EB Zuzentaraua, 2012ko urriaren 25ekoa, efizientzia energetikoari buruzkoa, 2009/125/EE eta 2010/30/EB Zuzentarauak aldatzen dituen eta 2004/8/EE eta 2006/32/EE Zuzentarauak baliogabetzen dituen, xedetzat duena Europar Batasunaren baitan efizientzia energetikoa sustatzeko neurrien esparru komuna ezartzea, 2020an energia % 20 aurreztu ahal izateko efizientzia energetikoaren helburu nagusia lortzeko, baita urte horretatik aurrera efizientzia energetikoari lotuta geroko hobekuntzetarako bidea prestatzeko ere.

2012/27/EB Zuzentarauak administrazio zentraletako eraikinen ehuneko adierazgarri bat berritzera behartzen du urtero, energia-errendimendua hobetzeko, eta estatu kideak ere epe luzeko estrategia bat finkatzera behartzen ditu, higiezin-parke osoaren energia-errendimendua hobetzeko. Zuzentarauak gutxieneko betekizunak finkatzen ditu eta, hortaz, estatukideek hobe ditzakete. Horrez gain, erreferentzia zabala eta berariazkoa dakar sektore publikoak efizientzia energetikoaren arloan eredugarri izatearen garrantziari buruz, eta ez soilik hitzaurreko kontuaren hartuzkoetan baizik eta artikuluetan bertan ere (5.ean eta 6.ean) obra eta horniduren kontratazioari eta efizientzia energetikoko plan jasagarriak ezartzeari dagokionez.

Estatuaren esparruan, helburu horiek garrantzitsuak diren estrategia, plan, programa eta arau teknikoetan jasota daude, hala nola Aldaketa Klimatikoaren aurka Borrokatzeko Espainiako Estrategian, Aurrezpen eta Efizientzia Energetikoko Ekintza Planean eta Energia Berriztagarrien Plana, gaur egun indarrean. Plan horiekin batera, azpimarratu behar da Eraikingintzaren Kode Teknikoa eta Eraikinen Energia Ziurtagiria onetsi direla.

Ekonomia Iraunkorrari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legeak, oinarrizko izaera duenak, 5. artikuluan ezartzen du botere publikoen ekintzan nagusi izan behar duen printzipioetako bat aurrezpena, efizientzia energetikoa eta energia garbien sustapena, isurkien murrizketa eta hondakin en tratamendu eraginkorra dela.

Lege honen II. tituluaren I. kapitulua energia-eredu jasangarria arautzeari buruzkoa da, eta eredu horren arabera administrazio publiko guztiek, beren eskumenak baliatzean, aurrezpenaren, efizientzia energetikoaren eta energia-iturri berriztagarrien erabileraren printzipioak sartu beharko lituzketen beren jardunaren printzipio orokorretan eta kontratazio-prozeduretan.

Ildo horretatik, ekainaren 26ko 8/2013 Legeak, birgaitzeari eta hiri-berroneratze eta -berrikuntzari buruzkoak, honako hau ezartzen du 3. artikuluan: *“Botere publikoek dagozkien eskumeneko politikak formulatu eta garatuko dituzte hirigunean, betiere ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren arloko jasangarritasunaren, lurralde-kohesioaren, efizientzia energetikoaren eta konplexutasun funtzionalaren printzipioei jarraituz”*.

Apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuak, eraikinen efizientzia energetikoaren ziurtagirien oinarrizko prozedura onartzen duenak, ezartzen du nahitaezkoa dela Ziurtagiri Energetikoa eta efizientzia energetikoaren etiketa erakustea titulartasun publikoko eraikinentzat ere bai baldin eta herritarrek sarri erabiltzen dituzten erakunde-eraikinak badira eta 250 m²-tik gorako azalera erabilgarria badute.

Lege hau prestatzean oso kontuan hartu da, baita ere, aurrezpena eta efizientzia energetikoa sustatzeko erkidegoaren esparruan eratu den legedia. 178/2015 Dekretua, irailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren jasangarritasun energetikoari buruzkoa, txostenaren helburu den Legearen aurrekaririk hurbilena da, nahiz eta azken hori askoz asmo handiagokoa izan, ez bakarrik legea aplikatzeko eremu subjektiboari dagokionez, baizik eta haren edukiari dagokionez ere.

Ziurtagiri energetikoaren eremuan, 235/2013 Errege Dekretua garatzeko emandako araudia aipa dezakegu, lehen aipatutako zuzentarauen transposizioa egiten duena:

- 226/2014 Dekretua, abenduaren 9koa, eraikinen efizientzia energetikoaren ziurtagiriari buruzkoa.

- Agindua, 2015eko martxoaren 16koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, efizientzia energetikoaren Ziurtagirien kontrola eta erregistroa arautzen dituen.

Azkenik, baina ez horregatik garrantzi gutxiagokoa, nabarmendu behar da Euskadiko Energia Estrategia 2020 (3E2020) berak, Gobernu Kontseiluak 2011ko abenduan onartuak, helburutzat duela, besteak beste, estrategia horretan EAEko administrazio publiko guztien inplikazioa lortzea. Estrategia horren jardun-eremu nagusietako bat da energia-arloan eraginkorragoa eta iraunkorragoa izango den administrazio publikoa sustatzea, eta horrek berekin ekarriko du, besteak beste, administrazio publikoek beren instalazio eta zerbitzuetan kontsumoa murrizteko neurriak hartzea eta bertan energia berriztagarriak bultzatzea.

4.- ESKUMEN-TITULUA

4.1.- Eskumenen banaketa

Txosten honen helburu den aurreproiektuaren xedea aztertuta, esan dezakegu Euskal Administrazio Publikoari bakarrik eragiten diola eta Euskal Autonomia Erkidegoak energia-araubidearen arloan daukan eskumenaren baitan eta neurri txikiago batean ingurumenaren arloan txerta daitekeela.

Arlo horietan EAEk Estatuko oinarrizko legeria garatzeko eta betearazteko eskumenak ditu, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 11.2.c) y 11.1.a) artikuluei jarraikiz.

EAEn, hura osatzen duten lurralde-erakundeen eskumenen mugak ezartzen ditu 27/1983 Legeak, azaroaren 25ekoak, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremani buruzkoak (LHL).

LHLn mugatuta egoteaz gain, Euskal Herriko Autonomia Estatutuak berak zenbait eskumen ematen dizkie, berariaz, foru-organoei. Estatutuaren 37. artikuluan, foru-organo horiek <<nolanahi ere>> dituzten eskumen eskusiboak adierazten dira, eta, horrenbestez, babes berezia ematen zaie, Estatutua lege organikoa delako. Aipatu behar da, hemen aztergai dugunari dagokionez, energia ez dagoela estatutuz foru-organoei modu eskusiboan emandako eskumenen artean.

Azaroaren 25eko 27/1983 Legeari (LHL) dagokionez, honako hau izan behar da kontuan:

1. LHLn ez dago energia eskumen-tituluaren berariazko aipamenik. Hura ez zaie zuzenean aitortzen foru-organoei, ez dago organo horiei eskumen eksklusibo moduan aitortzen zaizkien artean, ez haiek garatu eta betearazi behar dituztenen artean, ezta betearazi soilik egin behar dituztenen artean ere.

2. EAEko Erakunde Erkideen hondar-eskumena, EAERI dagokiona izanda, foru-aldundiei aitortuta ez dagoen eskumen ororena:

LHLren 6. artikulua dioenez, Autonomia Estatutuaren, oraingo lege nahiz ondorengo beste batzuen arabera lurralde historikoen foru-organoei ez dagozkien arloen legegintza eta betearazpena autonomia-erkidegoaren erakunde erkideen eskumen izango dira.

Ondorioz, EAERen barruan eskumenak nola banatzen diren aztertzeko, egiaztatzen da ez EAEko Autonomia Estatutuaren 37. artikulua, ez azaroaren 25eko 27/1983 Legeak (LHL), ez dutela energia arloa aipatzen, eta, beraz, LHLren 6.2 artikuluari jarraituz, erakunde erkideek badute eskumena proiektuaren xede den arautzea egiteko.

4.2.- Legearen aurreproiektua izapidetzeko eskumena

Irizpena emateko igorri den lege-proiektuaren helburua da EAEko Administrazio Publikoetan aurrezpenari, efizientzia energetikoari eta energia berriztagarrien erabilerari buruzko antolamendu-esparrua, helburuak eta ekintzak arautzea.

Arau hau emateko gaikuntza, lehenik eta behin, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 10.2 artikuluan aitortutako eskumen eksklusiboan dago jasota, bere gobernu-erakundearen antolakuntza, araubide eta funtzionamenduari dagokionez. Hain zuzen ere, proiektu honen xede dira EAEko administrazio publikoari zuzenean eta soilik eragiten dioten arauak, eta, beraz, legearen artikuluetan ikusten den bezala, energia-aurreztearen eta efizientzia energetikoaren aldeko asmo handiko jarduerak gauzatzeko konpromisoa hartzen da. Horregatik, bete-betean eragiten dio meategien eta energiaren araubidearen eskumenari (EHAERen 10.11 eta 11.2.c artikulua).

Azaldutakoa kontuan izanik, gaia energiaren araubide, zehazki aurrezpena eta efizientzia energetikoa sustatzea,enez, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailari dagokio proiektu hau prestatzeko eskumena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta haien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen abenduaren

15eko 20/2012 Dekretuaren 2. eta 7. artikuluek ezartzen dutenarekin bat etorritik.

Ondorioz, autonomia-erkidego honek arau-proiektu hau onartzeko eskumen-titulua baduela irizten diogu, zalantzarik gabe.

5.- PROIEKTUAREN EDUKIAREN ANALISIA

Irizpenaren helburu den proiektu honen xedea da, lehen aurreratu dugun bezala, politika energetikoaren joera orokorra kontuan hartuta, EAeko administrazio publikoetan jasangarritasun energetikoaren arau-oinarriak ezartzea, eta administrazio publiko horiek zer eginbehar eta betebehar dituzten antolatzea. Batez ere, energia aurrezteko eta efizientzia energetikoa izateko neurriak bultzatzera bideratuko dira eginbehar eta betebehar horiek, bai eta energia berriztagarriak sustatzera eta ezartzera ere. Aldi berean, eredugarri izan nahi dute aurrezpen, efizientzia energetiko eta energia berriztagarrien sustapeneko konponbide berritzaileak ezartzean horretarako gaitasuna duten esparruetan, hala nola eraikinetan, bertako langileen mugikortasunean eta instalazio publikoen argiteria publikoan.

Zalantzarik gabe, etorkizunari begira horrek bultzada handia emango dio sektore pribatuan kontsumo-ohitura berriak hartzeari, eta bai gainerako administrazioetan ere. Ildo horretatik, helburua bikoitza da: batetik, zerbitzuen sektorearen energia-kontsumoaren ehuneko handi bat osatzen duen energia-kontsumoa gutxitzea, eta, bestetik, administrazio publikoen eredugarritasuna sustatzea neurriak ezartzean, zerbitzu eta teknologia berritzaileak sartuz.

Ekimen hau Europako arauen eskakizunetan oinarritzen da, baina baita ere energia aurrezteko, efizientzia energetikoa, eta energia berriztagarriak erabiltzea helburu goresgarri izateaz gain errealitate egiaztagarri bilakatu daitezkeen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak beharrezko jotzen dituen eskakizunetan ere. Bertan, oinarritzeko helburuez gain, neurri espezifikoak ezartzen dira, epe zehatzei lotuta daudenak, administrazioak eredugarri izan behar duela azpimarratzeko helburua rekin.

Energia aurrezteko eta efizientzia energetikoa izateko neurriak bultzatzea, baita energia termikoa edo elektrikoa ekoizteko energia berriztagarriak sartzea ere, araudi zabal, arautzaile eta planifikatzaile baten bidez bermatuta dago European eta Estatuan. Zuzentarauek, legeek, beste arau eta plan batzuek aski zehatza den corpusa osatzen dute, EAEn energia aurrezteko, efizientzia energetikoa eta energia berriztagarriak sustatzeko neurriak eta jarduketak gara daitezkeen.

Gainera, Euskadin, hainbat hamarkadatik hona esku hartzen da alor horretan bai administrazioen aldetik bai ekonomiaren eta jardueraren sektoreen aldetik, duela hiru hamarkadaz geroztik onartu izan diren Energia Estrategien babespean, eta gaur egun indarrean dagoen "Euskadiko Energia Estrategia 3E2020"rekin biribiltzen da.

Irailaren 22ko 178/2015 Dekretua onartzean, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu du Europar Batasunak alor horretan finkatutako helburuak betetzeko lidergoa, EAEko Administrazio Orokorrean bada ere.

Txostenaren xede de proiektuaren legea beste urrats bat da Eusko Jaurlaritzak bere gain hartutako eginkizun eragileari eta eredugarriari dagokionez, eta Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde guztietan energia-kontsumoa aurrezteko neurriak eta betebeharrak antolatzea du helburu.

Txostenaren helburu den proiektuaren edukiak errespetatzen du Emakume eta gizonen arteko berdintasunerako Legearen 18.4 artikuluan ezarritakoa; halaber, errespetatzen ditu 1994ko martxoaren 18an lehendakariak emandako jarraibideak, hizkuntza sexista arauetatik, administrazio-dokumentuetatik eta Euskal Autonomia Erkidegoko instituzio-ekintzari buruzko informazio eta hedapenerako dokumentuetatik desagerrarazteko. Artikuluetako hainbat zatitan genero-ikuspegia barne hartu da, hala nola Legearen oinarri diren printzipioak aipatzean, Jasangarritasun Energetikoaren Batzordea arautzean, kide anitzeko organo horretan emakume eta gizonen presentzia orekatua izatea bermatzeko betebeharrak dagoela gogoraraziz, sentsibilizazio- eta zabalkunde-kanpainak arautzean eta hiri-mugikortasunerako planak aipatzean.

Legearen aurreproiektuak 28 artikulua ditu, hiru kapitulu, lau xedapen gehigarri eta bi azken xedapenetan egituratuta:

I. kapitulua. Xedapen orokorrak (1-9. artikulua).

Kapitulu honetan zehazten dira proiektatutako araudiaren xedea, aplikazio-eremua eta, laburbilduta, helburu nagusiak eta proiektatutako araua behar bezala aplikatzeko beharrezkotzat jotzen diren definizio batzuk. Era berean, legeak oinarri dituen printzipioak jaso ditu, Zioen Azalpenaren arabera autonomia-erkidegoko administrazio publikoen jarduera-jarraibideak ere izango direnak; horien artean nabarmentzekoa da EAEko administrazio publikoek eredugarri izan behar dutela alor honetan.

Kapitulua honetan nabarmentzekoa da, funtsezko oinarri gisa, lege honen betekizunak beste politika publiko batzuetan sartu behar direla ezartzen dela, bereziki lurraldearen antolamenduarekin, hirigintzarekin eta garraio-azpiegiturekin zerikusia daukatenetan, eta EAEko administrazio publikoen arteko eraginkortasuna eta koordinazioa beharrezkoa dela.

Aplikazio-eremu subjektiboa Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetara hedatzen da, honako hauek barne hartzen dituena:

- a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa, haren mendeko edo hari lotutako erakundeak barne.
- b) Lurralde historikoetako administrazioak, haien mendeko edo haiei lotutako erakundeak barne.
- c) Euskal Autonomia Erkidegoko udalak, haien mendeko edo haiei lotutako erakundeak barne.
- d) Euskal Herriko Unibertsitatea, haren mendeko edo hari lotutako erakundeak barne.

Administrazio horien mendeko edo horiei lotutako erakundetzat jotzen dira erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, sozietate publikoak, sektore publikoko fundazioak eta nortasun juridiko propioa duten partzuergoak (Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolaraueti buruzko Legearen Testu Bateginaren 7.4.c) artikuluan aipatzen dira partzuergo horiek).

Azken Xedapenetatik Lehenengoak erakunde batzuk aipatzen ditu, hala nola Eusko Legebiltzarra, Kontuen Auzitegia eta Arartekoa eta haiek beren jasangarritasun energetikoko planak egingo dituztela zehazten du; Lege honetan ezarritakoa kontuan hartu ahal izango dute.

Eremu objektiboari dagokionez, lehen aipatutako erakundeetatik edozeinen jabegokoak diren eta haiek kudeatzen dituzten eraikin, instalazio, parke mugikor eta argiteria publikoari aplikatuko zaie Dekretua.

II. kapitulua. Helburuak eta ekintzak (10-25 artikulua).

Kapitulu hau EAEko administrazio publikoek hartzen dituzten konpromisoen zati nagusia da, eta hiru ataletan banatuta dago.

Atal horietako lehenean, "Helburuak eta ekintza orokorrak" izenekoan, Euskadiko Energia Estrategiarekin bat etorritik, aurrezpenari, efizientziari eta energia berriztagarrien erabilerrari dagokionez helburu orokorrak eta haien denbora-epeak finkatzen dira.

Proiektatutako testuaren arabera, EAEko administrazio publikoek beren jarduera-eremuaren barruan dituzten eraikinen, ibilgailu-atalen eta argiteria publikoko instalazioen inbentarioa egiteko betebeharrak dute, publikoak izango direnak, baita beren instalazioen kontsumoak kontrolatzeko ere; hartara, 25 kW-etik gorako elektrizitate-potentzia duten instalazioek kontagailu inteligenteak eduki beharko dituzte. Azken horiek ezinbesteko betekizun dira, Lege honek ukitutako EAEko administrazio publiko bakoitzak bere kontsumoaren eta balizko aurrezpenaren diagnosia egin ahal izan dezan; horixe baita, azken finean, energia-auditoretzaren helburua. 13. artikuluan jasota dauden "Energia-jarduketaren planak" izenekoek buru ematen diete jarduketari horiei guztiei. Plan horiek bi urtean behin prestatuko dira, aurretiko diagnostikotik abiatuta, jarduteko estrategiak finkatzeko helburuarekin.

Era berean, helburu hauek ezarri dira: energia-kontsumoan ehuneko-murrizketak egitea, administrazio bakoitzaren urteko kontsumoak erreferentzia gisa hartuta eta tasatutako denbora-aldi batzuen arabera; energia berriztagarrien instalazioak jartzea, eta energia asko kontsumitzen duten instalazioak, ibilgailuak edo ekipamenduak berritzeko betekizunak ezartzea.

Bigarren ataletan sektoreei lotuago dauden helburuak eta ekintzak jorratzen dira, zehazki eraikinen eta etxebizitzaren kalifikazio energetikoari buruzkoak.

Hirugarrenak garraioari eta mugikortasunari heltzen die. Udalerriari hiri-mugikortasuneko plan bat izateko betebeharrak ezartzen die, eta zer helburu lortu nahi dituzten adierazi beharko dute plan horretan. Ordezko erregaiak erabiltzen dituzten ibilgailuak sustatuko dira, bidaiarien garraiorako zerbitzu publikoa ematen dutenak barne, eta udalerriek ibilgailu jakin batzuk herriaren erdialdera sartzea mugatu edo debekatu dezaketela jasotzen da.

Neurri horiek guztiak indartzeko, publizitate-betebeharrak, langileen prestakuntza eta etiketa energetikoak ikusgai jarri beharko dituztela ezarri da 4. atalean.

III. kapituluaren borondatezko tresnak eta jasangarritasun energetikoko jarduerak sustatzea jaso da, eta, horretarako, betebeharrak eta lege honetan ezarritako helburuak betetzeko neurriak ezarri dira, jasangarritasun energetikoaren alorreko diru-laguntza publikoak gehitzeko aukera izanda. Kapitulu honetan borondatezko akordioei ere egiten zaie erreferentzia, administrazio publikoek legez ezartzen zaizkien betebeharez haratago joateko aukera izan dezaten. Era berean, informaziorako eskubidea ere bermatzen da kapitulu honetan, Europar Batasunaren araudia bete dadin.

Xedapen gehigarriei dagokienez, partzuergo eta mankomunitateei eta gas- eta elektrizitate-banatzaleei betebeharrak ezartzen dizkiete, eta administrazio publikoen energia-kontsumo osoaren oi nartzko erreferentzia-maila nola kalkulatu behar den argitzen dute. Hori izango da proiektuan ezarritako neurrietarako abiapuntua, eta, hura kuantifikatzeko metodologia ezartzen ez den bitartean, energia-kontsumoa ia nulua dela ulertu beharko da.

Azken xedapenetan, azkenik, legea indarrean noiz sartuko den jasotzeaz gain, Eusko Legebiltzarrak, Kontuen Epaitegiak eta Arartekoak, hala badagokie, beren planak egin ahal izango dituztela aurreikusi da, lege honetan xedatutakoa kontuan hartuta.

ONDORIOAK

Lehenengoa.- Euskal Autonomia Erkidegoak badu eskumena aurreproiektu moduan igorri zaigun txosten honen xede den Legea egiteko, Euskal Herriko Autonomia Estatuaren 10. eta 11. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz. 3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa.

Bigarrena.- Txostenaren xede den lege-aurreproiektuak bete egiten ditu Gobernu Kontseiluaren 1993ko martxoaren 23ko Erabakiaren bidez onartu eta Lehendakaritza, Lege Araubide eta Autonomia Garapenerako sailburuaren 1993ko apirilaren 6ko Aginduaren bidez argitaratutako gidalerroak, lege-proiektuak, dekretuak, aginduak eta ebazpenak egitekoak.

Hirugarrena.- Xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legean agindutakoa bete da, eta Gobernu Kontseiluaren 2010eko

abenduaren 28ko Erabakiaren bidez onartutako xedapean orokorrak izapidetzeko jarraibideei egokitzen zaio.


Laugarrena.- Azkenik, aurreproiektuari zuzenbidezkotzat irizten zaio.

Haxe da nire txostena, zuzenbidean hobeto oinarrituriko beste edozeinen mende jartzen dena.

Cristina Salas Cristóbal
**ENERGIAREN, MEATEGIEN ETA INDUSTRIA-
ADMINISTRAZIOAREN ZUZENDARITZA.**

VIII

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA EMPRESA / EMPRESAREN INGURUKO ERAGIN TXOSTENA

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**Firmante: **CRISTINA SALAS CRISTOBAL**Fecha de la firma: **11/05/2016 11:40:53**Validación de la firma:  **Correcta****INFORME DE IMPACTO EN LA EMPRESA E INFORME DE CARGAS ADMINISTRATIVAS.****“ANTEPROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS VASCAS”**

La Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco, establece en su artículo 6 que con carácter previo a cualquier nueva regulación o norma promovida por la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Gobierno Vasco, a través de sus servicios jurídicos, realizará un informe de evaluación del impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas.

En el presente anteproyecto de Ley, tiene por objeto, de acuerdo con la orientación general de la política energética, de los pilares normativos de la sostenibilidad energética en el ámbito de las Administraciones Públicas Vascas, articulando los deberes y obligaciones que estas deben cumplir y que se orientan fundamentalmente al impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética y de promoción e implantación de energías renovables.

En este sentido, su repercusión jurídica deviene en la regulación del marco organizativo, los objetivos y las acciones relativas al ahorro, la eficiencia energética y el uso de las energías renovables en la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, desarrollando a la par un papel ejemplarizante en la implantación de soluciones innovadoras de ahorro, eficiencia energética y promoción de energías renovables en aquellos ámbitos donde se tiene capacidad para ello como es el caso de los edificios, movilidad de su personal y alumbrado público a sus instalaciones.

Por otra parte, para la coordinación de los distintos entes integrantes de cada administración en la consecución de los objetivos proyectados, la

Administración de la Comunidad Autónoma, las Administraciones de los Territorios Históricos y de los municipios contarán cada una con una Comisión para la Sostenibilidad Energética

Dicha tramitación se sustancia dentro de las competencias que el actual Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad tiene atribuidas, en materia de energía.

El estricto ámbito subjetivo al que se circunscribe el proyecto de ley que se informa determina que no se contemplen cargas ni impactos en las empresas del sector que se deriven de la aprobación de la Ley proyectada.

Asimismo, La Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco, establece que en el marco del proceso de simplificación y racionalización, las Administraciones Públicas Vascas en sus respectivos ámbitos de actuación, determinarán las áreas de actuación en orden a proceder a la progresiva reducción y eliminación de las cargas administrativas que generen un mayor coste a la actividad emprendedora. Del mismo modo, se prevé el informe de cargas administrativas en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010.

Las cargas administrativas, se vienen definiendo como "aquellas actividades de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo las empresas y la ciudadanía para cumplir obligaciones normativas"

En este sentido, analizado el contenido del Anteproyecto de Ley no contempla, con carácter general, cargas administrativas ni impacto económico en las empresas, a que se refiere la normativa y el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010.

En Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 2016

Cristina Salas Cristóbal
Asesora Jurídica.



ENPRESAREN GAINEKO ERAGINARI ETA KARGA ADMINISTRATIBOEN BURUZKO TXOSTENA

“EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUNARI BURUZKO LEGEAREN AURREPROIEKTUA”

Euskadiko ekintzaileei eta enpresa txikiari laguntzeko ekainaren 28ko 16/2012 Legeak 6. artikuluan ezartzen du, Euskal Autonomia Erkidegoak sustatutako edozein arauketa edo arau berri bideratu aurretik, Eusko Jaurlaritzak haren zerbitzu juridikoen bidez ebaluazio-txostena egingo duela enpresak sortzearen, abian jartzearen eta haien funtzionamenduaren gaineko eraginari buruz.

Legearen aurreproiektu honen xedea da, politika energetikoaren joera orokorra kontuan hartuta, EAEko administrazio publikoetan jasangarritasun energetikoaren arau-oinarriak ezartzea, eta administrazio publiko horiek zer eginbehar eta betebehar dituzten antolatzea. Batez ere, energia aurrezteko eta efizientzia energetikoa izateko neurriak bultzatzera bideratuko dira eginbehar eta betebehar horiek, bai eta energia berriztagarriak sustatzera eta ezartzera ere.

Horren harira, lege horrek oihartzun juridikoa du antolakuntza-esparruaren arauketan, aurreztearen inguruko helburu eta egintzetan, efizientzia energetikoan eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioan energia berriztagarrien erabileran. Halaber, ereduzko rola jokatzen du aurrezteko konponbide berritzaileak eta efizientzia energetikoa ezartzeari eta energia berriztagarriak sustatzeari dagokienez, horretarako gaitasuna duten alorretan, hala nola eraikinetan, bere langileen mugikortasunean eta bere instalazioetako argiteria publikoan.

Bestalde, lege honek lortu nahi dituen helburuak bete daitezten, administrazio bakoitzeko erakundeak koordinatzeko, Jasangarritasun Energetikorako Batzorde bana izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, lurralde historikoetako administrazioek eta udalerrietako administrazioek. Izapidetze hori uneko Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak energiari dagokionez dituen eskumenen barruan bideratzen da.



Jakinarazten den lege-proiektua mugatzen duen eremu subjektibo zorrotzak xedatzen duenez, ez da ikusi proiektatutako legea onestearen ondorioz sektoreko enpresei kargarik edo eraginik sortu zaie nik.

Halaber, Euskadiko ekintzaileei eta enpresa txikiei laguntzeko ekainaren 28ko 16/2012 Legeak xedatzen duenez, errazteko eta arrazionalizatzeko prozesuaren esparruan, Euskadiko administrazio publikoek, nor bere jardueraren eremuan, jarduera ekintzaileari kosturik handiena sortzen dioten karga administratiboak pixkanaka murriztu eta ezabatzeko jarduera arloak erabakiko dituzte. Era berean, karga administratiboei buruzko txostena Gobernu Kontseiluak 2010eko abenduaren 28an egindako Akordioan aurreikusten da.

Karga administratiboak honela definitu dira: “enpresek eta herritarrek euren arauzko betebeharrak betetzeko burutu behar dituzten jarduera administratiboak”.

Ildo horretatik, legearen aurreproiektuaren edukia aztertu ondoren, ez da ikusi karga administratibo eta eragin ekonomiko orokorrik sortzen dienik enpresei, araudiak eta Gobernu Kontseiluak 2010eko abenduaren 28an egindako Akordioak aipatzen dituztenei dagokienez.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko maiatzaren 10a

Cristina Salas Cristóbal
Aholkulari juridikoa

IX

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

HERRITARRAK HARTZEKO ETA ADMINISTRAZIOA BERRITZEKO ETA HOBETZEKO ZUZENDARITZAREN TXOSTENA.

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN
ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA
PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VASCAS**

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**Firmante: **JAVIER BIKANDI IRAZABAL**
Fecha de la firma: **17/03/2016 17:07:57**Validación de la firma: **Correcta**Firmante: **JESUS MESA ORTIZ**
Fecha de la firma: **17/03/2016 13:11:43**Validación de la firma: **Correcta****INFORME DE ORGANIZACIÓN**

Documento:	IO-2016-012
Denominación:	Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad energética de las administraciones públicas vascas

Elaborado:

Fdo.: Jesús Mesa Ortiz

Responsable de Proyectos

Fecha: 17-03-2016

Aprobado:

Fdo.: Javier Bikandi Irazabal

Director de Atención a la Ciudadanía e
Innovación y Mejora de la Administración

Fecha: 17-03-2016

INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento: IO-2016-012

Página: 2/6

Propuesta:

La Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, mediante transmisión telemática con entrada de 10 de marzo de 2016, en la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (DACIMA en adelante), solicita Informe del Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad energética de las administraciones públicas vascas

Este Anteproyecto de Ley cuyo objeto es el establecimiento, de acuerdo con la orientación general de la política energética, de los pilares normativos de la sostenibilidad energética en el ámbito de las Administraciones Públicas Vascas, articulando los deberes y obligaciones que éstas deben cumplir y que se orientan fundamentalmente al impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética y de promoción e implantación de energías renovables, consta de:

- Una Parte Expositiva.
- Una Parte Dispositiva con 28 Artículos.
- Una Parte Final, con cuatro Disposiciones Adicionales y con dos Disposiciones Finales.

Valoración:

Analizado el Anteproyecto de Ley en cuestión, procede señalar lo siguiente:

A) En cuanto a Aspectos Estructurales y Organizativos:

Nada que reseñar, dado que no se deduce modificación que afecte a dichos Aspectos.

El artículo 8, denominado Coordinación de la política de sostenibilidad energética, dispone que para garantizar la coherencia de la política de sostenibilidad energética, corresponderá al departamento con competencia en materia de energía del Gobierno Vasco el ejercicio de las facultades de coordinación que demande el interés general del País Vasco a través de, entre otras, las siguientes actuaciones:

INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento: IO-2016-012

Página: 3/6

- a) Elaboración de normas.
- b) Simplificación de los procedimientos administrativos.
- c) Homogeneización de métodos y criterios técnicos.
- d) Implantación de sistemas de información recíproca.
- e) Divulgación de pautas y técnicas de ahorro y eficiencia energética.
- f) Elaboración de planes y programas de apoyo para el fomento de acciones y proyectos de sostenibilidad energética.

Se valora positivamente que al departamento con competencia en materia de energía del Gobierno Vasco se le asignen las facultades de coordinación por ser, desde el punto de vista competencial, el órgano de máximo rango en materia de energía en el ámbito de las Administraciones Públicas Vascas. La DACIMA facilitará el asesoramiento que el departamento precise en materia de simplificación de procedimientos administrativos.

Según el artículo 9 para la coordinación de los distintos entes integrantes de cada administración en la consecución de los objetivos perseguidos por la Ley, la Administración de la Comunidad Autónoma, las Administraciones de los Territorios Históricos y de los Municipios, contarán cada una con una Comisión para la Sostenibilidad Energética, con las siguientes funciones:

- a) Aprobar el inventario a que se refiere el artículo 10.
- b) Supervisar y garantizar el desarrollo de las medidas adoptadas en cumplimiento de la presente Ley así como el cumplimiento de los objetivos establecidos en la misma.
- c) Informar periódicamente sobre el estado y desarrollo de su Plan de actuación energética.

Se valora positivamente la creación de las Comisiones para la Sostenibilidad Energética por considerar que son un instrumento eficaz para la gestión de las actividades a desarrollar en materia de sostenibilidad energética. Asimismo, se considera que las funciones propuestas son las adecuadas para la consecución de los objetivos de la presente Ley.

En relación a la composición de la Comisión, el artículo 9.3 dispone que cada Administración establezca la composición y el funcionamiento de esa Comisión. A la vista de lo dispuesto, se

INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento: IO-2016-012

Página: 4/6

propone que se ofrezcan algunas recomendaciones sobre los perfiles de los componentes de los Comités.

Según el artículo 13, todas las Administraciones Públicas Vascas deberán diseñar sus propios Planes de actuación energética de carácter plurianual en los que realicen un diagnóstico de la situación en su ámbito de actuación y fijen estrategias a ejecutar durante la vigencia de los mismos. En todo caso, se garantizará la debida participación ciudadana en su proceso de elaboración.

El contenido mínimo de los Planes de actuación energética será el siguiente:

- a) Diagnóstico energético y determinación del nivel base de referencia de cada administración, desglosando las fuentes de consumo, e incluyendo el alumbrado público.
- b) Planificación temporal para la implantación de medidas de sostenibilidad energética, desglosando cada sector de que se trate. Esta planificación temporal tendrá en cuenta, en su caso, los resultados de la correspondiente auditoría energética y las obligaciones de ahorro que impongan esta Ley y su normativa de desarrollo.
- c) Mecanismos de evaluación de la efectividad del plan durante su vigencia.

Se valora positivamente la implantación de los Planes de actuación energética debido a que son una herramienta para la gestión eficaz de los mismos.

Según el artículo 22, los municipios, deberán adoptar un Plan de movilidad urbana.

El Plan de movilidad urbana constará de:

- a) Diagnóstico.
- b) Medidas.

La tramitación del Plan de movilidad urbana contará con una aprobación inicial y otra definitiva, debiéndose garantizar la participación e información ciudadana una vez adoptado el acuerdo de tramitación del plan. Si tras su aprobación inicial las modificaciones del plan resultasen sustanciales se habrá de garantizar una segunda fase de información pública. En ambos casos, el plazo de presentación de alegaciones no podrá ser inferior a 45 días.

INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento: IO-2016-012

Página: 5/6

El Plan y la documentación que le acompañe durante su tramitación serán públicos.

Se valora positivamente el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de movilidad urbana porque ofrece la posibilidad de que la ciudadanía participe y, a su vez, esté informada.

B) En cuanto a Aspectos Procedimentales:

Según el artículo 23, cada Administración Pública Vasca deberá publicar, mediante la elaboración de bases de datos electrónicas de fácil acceso al público a través de redes públicas de telecomunicaciones, las medidas que adopte para incrementar el ahorro y la eficiencia energética, incluyendo los planes de actuación energética.

La publicación de la información sobre las actuaciones de las Administraciones Públicas Vascas en materia de sostenibilidad energética se valora positivamente debido a que supone un incremento en la transparencia de las mismas y, a su vez, por genera valor público.

La DACIMA expone la conveniencia de que se tengan en cuenta las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el funcionamiento de las Comisiones para la sostenibilidad energética.

Asimismo, la DACIMA facilitará el asesoramiento e información que el Departamento competente en materia de energía precise para la regulación, la organización y la implementación de la Tramitación Electrónica de los Procedimientos vinculados a la sostenibilidad energética de las Administraciones Públicas Vascas.

El Departamento competente en materia de energía, una vez sea vigente la Ley objeto del informe, deberá dar de alta los procedimientos en el Catálogo de Servicios del Gobierno Vasco.

Con la finalidad de facilitar el acceso a la ciudadanía a la información pública sobre la sostenibilidad energética en las Administraciones Públicas Vascas, el Departamento competente en materia de energía deberá ofrecer la misma a través de Euskadi.eus y Opendata.

INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento: IO-2016-012

Página: 6/6

Conclusiones:

De acuerdo con las funciones asignadas a través del artículo 18 del Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia, éstas son las observaciones que, desde el punto de vista organizativo y desde el procedimental, formula la DACIMA del Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad energética de las administraciones públicas vascas.



ANTOLAMENDU-TXOSTENA

Dokumentua:	IO-2016-012
Izena:	Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoari buruzko Legearen aurreproiektua

Egilea:

Sin.: Jesús Mesa Ortiz

Proiektu-arduraduna

Data: 2016-03-17

Onartua:

Sin.: Javier Bikandi Irazabal

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa

Berritzeko eta Hobetzeko zuzendaria

Data: 2016-03-17

**Proposamena:**

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Energia eta Meategien Zuzendaritzak Jasangarritasun energetikoari buruzko Legearen aurreproiektuaren txostena eskatu du, Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzan (aurrerantzean HHABHZ) 2016ko martxoaren 10ean sartutako transmisio telematiko baten bidez.

Legearen aurreproiektu honen xedea da, politika energetikoaren joera orokorra kontuan hartuta, EAEko administrazio publikoetan jasangarritasun energetikoaren arau-oinarriak ezartzea, eta administrazio publiko horiek zer eginbehar eta betebehar dituzten antolatzea. Batez ere, energia aurrezteko eta efizientzia energetikoa izateko neurriak bultzatzera bideratuko dira eginbehar eta betebehar horiek, bai eta energia berriztagarriak sustatzera eta ezartzera ere. Honako atal hauek ditu aurreproiektuak:

- Azalpen-zati bat
- Xedapen-zati bat, 28 artikulua dituena.
- Amaierako zati bat, lau xedapen gehigarri eta bi azken xedapen dituena.

Balorazioa:

Adierazitako legearen aurreproiektua aztertu ondoren, honako hau adierazi behar da:

- A) Egitura- eta antolaketa-alderdiei dagokienez:

Ezer aipagarririk ez, ez baitago alderdi horiei eragingo dien aldaketarik.

Jasangarritasun energetikoari buruzko politika koordinatzea izeneko 8. artikulua xedatzen duenez, jasangarritasun energetikoari buruzko politika koherentea izango dela bermatzeko, Eusko Jaurlaritzan energiaren arloko eskumena duen sailak izango du EAEko interes orokorrak eskatutakoa koordinatzeko ahalmena, besteak beste jarduera hauen bidez:



- a) Arauak eginez.
- b) Administrazio-prozedurak erraztuz.
- c) Metodoak eta irizpide teknikoak homogeneizatuz.
- d) Joan-etorriko informazio-sistemak ezarriz.
- e) Aurrezpen eta efizientzia energetikorako jarraibideak eta teknikak hedatuz.
- f) Jasangarritasun energetikoaren alorreko ekintzak eta proiektuak sustatzeko planak eta laguntza-programak landuz.

Eusko Jaurlaritzan energiaren arloko eskumena duen sailari koordinatzeko ahalmenak ematearen aldeko txostena egiten da. Izan ere, lehiakortasunaren ikuspegitik, EAEko administrazio publikoetako esparruan energiaren arloan maila gorena duen organoa da. HHABHZk sailak behar duen aholkularitza emango du, prozedura administratiboak errazteari dagokionez.

9. artikulua arabera, Lege honek lortu nahi dituen helburuak bete daitezzen, administrazio bakoitzeko erakundeak koordinatzeko, jasangarritasun energetikorako batzorde bana izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak, lurralde historikoetako administrazioek eta udalerrietako administrazioek, honako funtzio hauek in:

- a) 10. artikuluan aipatu den inbentarioa onestea.
- b) Lege hau betetzeko hartzen diren neurriak gauzaten ari direla eta legean ezarritako helburuak betetzen ari direla gainbegiratzea eta bermatzea.
- c) Energia-jarduketan plana zer egoeratan dagoen eta zenbat garatu den adieraztea aldi behin.

Jasangarritasun Energetikorako Batzordeak sortzearen aldeko txostena egiten da, uste baita batzorde horiek tresna eraginkorrak direla jasangarritasun energetikoaren arloan egin beharreko jarduerak kudeatzeko. Halaber, uste da proposatutako funtzioak egokiak direla Lege honetako helburuak lortzeko.

Batzordea sortzeari dagokionez, 9.3 artikulua xedatzen du batzordearen osaera eta funtzionamendua administrazio bakoitzak ezarri behar dituela. Xedatutakoa ikusita, proposatzen da batzordeak osatu behar dituztenen profilen inguruko gomendio batzuk eskaintzea.



13. artikulua arabera, EAEko administrazio publiko guztiek energia-jarduketan hainbat urtetarako planak egin beharko dituzte; plan horietan beren jarduera-eremuan zer egoera dagoen jakiteko diagnostikoak egin behar dituzte, eta plana indarrean dagoen bitartean gauzatu beharreko estrategiak zehaztu. Edonola ere, planak egiteko prozesuetan herritarrek parte hartuko dutela bermatu beharra dago.

Energia-jarduketei buruzko planek gutxienezko eduki hau izan behar dute:

- a) Administrazio bakoitzak energia-diagnostikoa egin eta zer oinarritzko erreferentzia-maila duen zehaztu beharko du, eta, horretarako, kontsumo-iturriak banakatu beharko ditu, argiteria publikoa kontuan hartuz.
- b) Jasangarritasun energetikoko neurriak ezartzeko aldi baterako plangintza egin beharko du, sektoreka banakatuta. Aldi baterako plangintza horietan, hala badagokio, dagokion energia-auditoretzako emaitzak eta lege honek eta berau garatzeko arauak ezartzen dituzten aurrezte-betebeharrak hartu behar dira kontuan.
- c) Plana indarrean dagoen bitartean haren eraginkortasuna ebaluatzeko mekanismoak.

Energia-jarduketei buruzko planak ezartzearen aldeko txostena egingo da, planak kudeatzeko tresna eraginkorra dira eta.

22. artikulua arabera, udalerriek hiri-mugikortasuneko plan bat egin beharko dute.

Plan hori honako hauek osatuko da:

- a) Diagnostikoak
- b) Neurriez

Hiri-mugikortasuneko plana izapidetzeko, lehendabizi, hasierako onespina emango zaio, eta, ondoren, behin betikoa. Horrez gain, herritarrei informazioa emango zaiela eta haien parte-hartzea izango dela bermatu behar da, plana izapidetzea adosten denetik. Hasierako onspina eman ondoren, planari aldaketa asko egiten bazaizkio, berriz jarri beharko da jendaurrean. Bi kasuetan, alegazioak aurkezteko epea ezingo da 45 egun baino gutxiago izan.

Plana eta hura izapidetzen ari den bitartean planaren osagarri diren agiriak publikoak izango dira.



Hiri-mugikortasuneko plana eratzearen eta onestearen aldeko txostena egingo da, herritarrei parte hartzeko aukera ematen baitie, bai eta jakinaren gainean egoteko ere.

B) Prozedura-alderdiei dagokienez:

23. artikulua arabera, EAEko administrazio publiko bakoitzak jakitera eman beharko du energia gehiago aurrezteko eta efizientzia energetikoa areagotzeko zer neurri hartu dituen, energia-jarduketei buruzko planak barne, eta, horretarako, telekomunikazioetako sare publikoen bidez edonon sartzeko moduko datu-base elektronikoa erabiliko ditu.

Euskal administrazio publikoek jasangarritasun energetikoaren arloan egiten dituzten jarduketei buruzko informazioa argitaratzearen aldeko txostena egiten da, jarduketan gaineko gardentasuna handitu, eta, aldi berean, balio publikoak sortzen baitu.

HHABHZk komenigarritzat jotzen du informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak kontuan izatea Jasangarritasun Energetikorako Batzordeen funtzionamendurako.

Halaber, HHABHZk energiaren arloan eskumena duen sailari behar duen aholkularitza eta informazioa emango dizkio, euskal administrazio publikoen jasangarritasun energetikoarekin lotutako prozeduren izapidetze elektronikoa arautu, antolatu eta ezartzeko.

Energiaren arloan eskumena duen sailak, behin txostenaren xede den Legea indarrean dagoela, prozeduren alta eman beharko du Eusko Jaurlaritzako Zerbitzuen Katalogoan.

Euskal administrazio publikoen jasangarritasun energetikoari buruzko informazioa jendurrean jartzea errazteko helburuz, energiaren arloan eskumena duen sailak informazio hori eskaini beharko du Euskadi.eus eta Opendataren bidez.

Ondorioak:

Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuak 18. artikuluan emandako funtzioekin bat, horiek dira antolamenduaren eta prozeduren aldetik euskal administrazio publikoen Jasangarritasun energetikoari buruzko Legearen aurreproiektuaren HHABHZk egin dituen oharpenak.

X

**INFORME DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO /
GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN TXOSTENA**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN
ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA
PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VASCAS**



ANEXO I A LAS DIRECTRICES INFORME DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE NORMA O PROPUESTA DE ACTO ADMINISTRATIVO

1.– Indicar la denominación del proyecto de norma o propuesta de acto administrativo:

Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas.

2.– Indicar el Departamento y la Dirección que lo promueve:

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad.
Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial.

3.– Señalar, en su caso, otras normas, planes, etc. relacionados con el proyecto o propuesta:

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
- Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 19 de mayo, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
- Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se Modifican las Directivas 2009/125 CE y 2010/30/UE.
- Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos.
- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
- Decreto 226/2014, de 9 de diciembre, de certificación de la eficiencia energética de los edificios.
- Orden de 16 de marzo de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad por la que se regula el control y el registro de los certificados de eficiencia energética.



- Decreto 178/2015, de 22 de setiembre, sobre sostenibilidad energética del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– Exponer los objetivos generales del proyecto de norma o propuesta de acto administrativo:

El proyecto de Ley tiene como finalidad establecer los pilares normativos de la sostenibilidad energética en la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la orientación de la política energética, determinando los deberes y obligaciones que deben cumplir las Administraciones Públicas Vascas.

5.– Exponer los objetivos para promover la igualdad de mujeres y hombres:

El Proyecto de Ley que informamos no tiene como objetivo explícito promover la igualdad de mujeres y hombres, sin embargo, recuerda como requisito de actuación a las destinatarias, las administraciones públicas, el enfoque de género y que la participación ciudadana, contemplada en este proyecto de ley, tenga en cuenta también dicho enfoque.

EVALUACIÓN PREVIA DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO

6. – Análisis de la situación.

Dos áreas centran la mirada de género en la elaboración de esta Ley:

- La obligación de las administraciones a las que se dirige de que integren el enfoque de género en la elaboración de estudios sobre movilidad.

Ligado a esto se halla:

- Una visión de género sobre el planeamiento de los municipios.
 - El diferente uso de los medios de transporte tanto privados como públicos que efectúan hombres y mujeres.
- La participación ciudadana en el contraste de los planes de movilidad como elemento de gobernanza, y el favorecer que la voz de las mujeres sea oída en esos procesos participativos.

El espacio urbano no es nunca neutro, las ciudades han sido planificadas o han ido adquiriendo su disposición actual según funciones, trabajo productivo y reproductivo. Los estudios de planeamiento territorial, urbanístico municipal con género recomiendan apostar por espacios sin jerarquizaciones, ni separaciones o segregaciones. En otras palabras, desechar espacios monofuncionales (desiertos a ciertas horas y accesibles solo en coche que generan “lugares prohibidos”).

Construir la ciudad y sus espacios desde una “escala de barrio”, mezcla de usos, permite satisfacer, en un radio cercano al hogar o al trabajo, las necesidades básicas de la vida cotidiana. Ciudades en que resulte fácil caminar para posibilitar la conciliación de los trabajos productivo y reproductivo, con espacios accesibles y seguros para favorecer la autonomía de los grupos más desfavorecidos o dependientes.

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/actividadesRed/docs/SesionPiei... Desarrollo Econó... gob.es Emakunde Emakunde.Impac...

hivo Edición Ira Favoritos Ayuda

D) MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

LA ESCALA QUE TENGAN NUESTRAS CIUDADES Y EL SISTEMA DE MOVILIDAD determina el acceso de las personas a múltiples recursos

DIAGNÓSTICO DE PAUTAS DE MOVILIDAD

- ▶ Modelos diferenciados de desplazamientos:
 - “tipo pendular”
 - “tipo poligonal”
- ▶ Mayor y diferente uso transporte público
- ▶ “mujeres cautivas”

Secuencias de los desplazamientos

Trabajo pagado (combinado con trabajo doméstico)

Trabajo pagado

Factores que REDUCEN O DIFICULTAN LA MOVILIDAD Y RESTRINGEN OPORTUNIDADES laborales, de ocio.

ES 13:45 16/03/21



D) MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

MEDIDAS PARA FAVORECER LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

- FOMENTO DESPLAZAMIENTO A PIE O EN BICICLETA**
- FAVORECER LA INTER-MODALIDAD**
- RECONSIDERAR RUTAS DE BUS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**
- PARTICIPACIÓN MUJERES EN DISEÑO REDES DE TRANSPORTE**

La participación ciudadana en estos proyectos es importante. Sirve de inspiración y contraste del proyecto.

Sin embargo la voz de las mujeres en el ámbito público es débil, no tanto por que carezcan de argumentos, sino porque ni ellas ni sus experiencias suelen ser tenidas en cuenta en ámbitos mixtos. Contra este tipo de situaciones, colectivos vinculados a la cooperación al desarrollo, el decrecimiento y los jóvenes, han trabajado los micromachismos en ámbitos de participación mixtos. (Dossier de micromachismos en las asambleas) <http://madrid.tomalaplaza.net/2011/06/11/dossier-de-micromachismos-en-las-asambleas/>

Todas las acciones que favorezcan que la voz de las mujeres sea tenida en cuenta en cualquier tipo de proceso que afecte a la ciudadanía supone un granito de arena en el camino a favor de la igualdad

Un ejemplo interesante de dar voz a las mujeres ha sido el de Vitoria-Gasteiz, que ha impulsado la participación de las mujeres a través de talleres de urbanismo y género. El proyecto se explica en:

<http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/16/58/51658.pdf>



¿Se prevé que la presencia de mujeres y hombres en los beneficios o resultados derivados de la futura norma o acto administrativo contribuya a la disminución de las desigualdades en el sector?

No es el objeto de la norma, pero afianza una forma de trabajar más igualitaria

7. – ¿Se prevé que la futura norma o acto administrativo produzca la eliminación o, al menos, una disminución de las desigualdades en cuanto al acceso a los recursos?

No, pero nos reafirmamos en la respuesta dada al punto anterior, sobre todo en la parte relativa a la participación ciudadana.

8.– ¿En cuanto a la toma de decisiones, la futura norma o acto administrativo prevé una representación equilibrada de mujeres y hombres o, al menos, una representación similar al de su presencia en el ámbito?

Si, en tanto en cuanto la ley insta a las administraciones públicas a tener en cuenta la voz de las mujeres en los procesos de participación.

Por otro lado, al regularse la Comisión para la sostenibilidad se recuerda la obligación de una presencia equilibrada de mujeres y hombres en dicho órgano colegiado.

9. – ¿Se prevé que los objetivos y las medidas planteadas en la futura norma o acto administrativo contribuyan a la superación o modificación de las normas sociales o valores de lo que se atribuye a las mujeres o a los hombres?

No, aunque ello sea siempre lo deseable.



10.– ¿Se garantiza el cumplimiento de las normas y otros instrumentos jurídicos dirigidos a evitar la discriminación y promover la igualdad y se prevé una mejora de las mismas?

Si, en concreto y de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en la redacción del texto propuesto se ha procurado hacer un uso no sexista del lenguaje.

Por otro lado, se ha incluido la premisa del enfoque de género en diversas partes de su articulado. Así, al hacer referencia a los principios que inspiran la Ley, al regular la Comisión para la Sostenibilidad Energética, recordándose la obligación de una presencia equilibrada de mujeres y hombres en dicho órgano colegiado, al regular las campañas de sensibilización y divulgación y con ocasión de la referencia a los planes de movilidad urbana.



MEDIDAS PARA ELIMINAR LAS DESIGUALDADES Y PROMOVER LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES		
¿Se ha incluido en el texto del proyecto de norma o acto administrativo alguna medida ...		<i>Indicar los artículos en que se incluyen las medidas y su descripción.</i>
Si	... para promover la incorporación de la perspectiva de género?	mejorando el conocimiento de la situación diferencial de mujeres y hombres
		incorporando la igualdad de mujeres y hombres como principio, objetivo o a título declarativo o expositivo
		Artículo 6. Principios sobre los que se asienta la Ley
		haciendo o promoviendo un uso no sexista del lenguaje
		A lo largo de todo su articulado y en las campañas de difusión, información y sensibilización.
		promoviendo la participación de personas con formación en cuestiones de género y/o entidades que trabajan por la igualdad
	incluyendo la igualdad como contenido o criterio (de admisión, valoración o ejecución) en procesos selectivos, subvenciones, convenios o actividades formativas, etc.	
	otras, especificar _____	
... para promover una participación equilibrada de mujeres y hombres?	en tribunales de selección	
	en jurados de premios	
	en órganos consultivos	
	en órganos directivos	



Si	otras, especificar _____	<i>Artículo 9: Comisión para la Sostenibilidad Energética. Se exige participación equilibrada.</i>
... de acción positiva?	para las mujeres	
No	para la implicación de los hombres a favor de la igualdad	
	otras, especificar _____	
... aparentemente neutra pero con un previsible impacto de género positivo?	para víctimas de violencia	
Si	para familias monoparentales	
	para quienes asumen el cuidado de personas dependientes	
	otras, especificar _____	<i>Artículo 22: Planes de Movilidad Urbana población. Participación ciudadana pero desde un enfoque de género.</i>
... para disminuir las desigualdades de las mujeres que sufren múltiple discriminación?	por edad	
NO	por clase social	
	por opción sexual	
	por discapacidad	
	por etnia y/o raza	
	por origen nacional	
	otras, especificar _____	
... prohibitiva o sancionadora?	por incurrir en discriminación por razón de sexo	
No	por hacer un uso sexista del lenguaje y las imágenes	
	otras, especificar _____	



¿Se prevé más allá del contenido del proyecto de norma o acto administrativo la adopción de alguna medida...		Descripción
... dirigida a complementar o incrementar la eficacia de los objetivos y medidas para la igualdad? Si	acciones de refuerzo a la difusión	
	actuaciones de seguimiento y evaluación	
	adecuación de estadísticas y realización de estudios específicos	
	acciones de información, sensibilización y formación	<i>Artículo 28: Divulgación de la información, formación y sensibilización. Se exige respeto al lenguaje inclusivo en todo tipo de actuaciones y la eliminación de roles y estereotipos.</i>
	adecuación o adopción de normas, planes o programas	
	elaboración de planes para la igualdad	
	creación de estructuras o servicios	
	otras, especificar _____	

Fecha del Informe:

Firma de la persona que ha realizado el informe:

Firma del director o directora responsable del proyecto:

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **CRISTINA SALAS CRISTOBAL**

Fecha de la firma: **13/04/2016 9:02:08**

Validación de la firma:  **Correcta**

Firmante: **AITOR PATXI OREGI BAZTARRIKA**

Fecha de la firma: **14/04/2016 9:41:06**



JARRAIBIDEEN I. ERANSKINA
GENEROAREN ARABERAKO ERAGINARI BURUZKO TXOSTENA

**ARAU-PROIEKTUAREN EDO ADMINISTRAZIO-EGINTZARAKO
PROPOSAMENAREN DESKRIBAPEN OROKORRA**

1.- Aipatu administrazio-egintzaren proposamenaren edo arau-proiektuaren izena:

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legea.

2.- Aipatu zer sailek eta zer zuzendaritzak sustatzen duen:

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
Energia, Meategi eta Industria Administrazioko Zuzendaritza.

3. Aipatu, hala balegokio, proiektuarekin edo proposamenarekin zerikusia duten beste arau, plan eta abarrak:

- Martxoaren 4ko 2/2011 Legea, Ekonomia Jasangarriari buruzkoa.
- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010/31/EE Zuzentaraua, maiatzaren 19koa, eraikinen efizientzia energetikoari buruzkoa.
- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012/27/EB Zuzentaraua, 2012ko urriaren 25ekoa, efizientzia energetikoari buruzkoa, 2009/125/EE eta 2010/30/EB Zuzentaruak aldatzen dituenak.
- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren urriaren 22ko 2014/94/EB Zuzentaraua, ordezkotzako erregaietarako azpiegitura bat ezartzeari buruzkoa.
- 235/2013 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, Eraikinen eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duena.
- 226/2014 Dekretua, abenduaren 9koa, eraikinen efizientzia energetikoaren ziurtagiriari buruzkoa.
- Agindua, 2015eko martxoaren 16koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, efizientzia energetikoaren ziurtagiriaren kontrola eta erregistroa arautzen dituenak.



- 178/2015 Dekretua, irailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren jasangarritasun energetikoari buruzkoa.

4.- Azaldu administrazio-egintzaren proposamenaren edo arau-proiektuaren helburu orokorrak:

Lege-proiektuaren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko jasangarritasun energetikoaren arau-oinarriak ezartzea politika energetikoaren orientazioarekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoek bete behar dituzten betebeharrak eta eginbeharrak zehaztuz.

5.- Azaldu gizonen eta emakumeen berdintasuna bultzatzeko helburuak:

Ez da txosten honi dagokion lege-proiektuaren helburu esplizitua gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzea, baina gogorarazten du hartzaileek, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, bete beharrekoa dela genero-ikuspegia, eta herritarren partaidetzak ere, lege-proiektu honetan barne hartzen denak, kontuan hartu behar du ikuspuntu hori.

**GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN AURRETIAZKO EBALUAZIOA****6. – Egoeraren analisisia.**

Bi arlo dira Lege hau egitean aintzat hartu beharrekoak:

- Helburuko administrazioek genero-ikuspegia txertatu behar dute mugikortasunari buruzko azterlanak egitean.

Horri lotuta dago:

- Udalerrien plangintzaren gaineko genero-ikuspegi bat.
 - Gizonek eta emakumeek egiten duten garraiobide pribatuen eta publikoen erabilera desberdina.
- Herritarren partaidetza mugikortasun-planen kontrastean gobernantza-elementu gisa, eta emakumeen ahotsa entzun dadila partaidetzako prozesu horietan.

Hiriguneak ez dira inoiz neutroak: hiriak planifikatuak izan dira, edo uneko antolamendua funtzioen eta ekoizpen- eta erreprodukzio-lanaren arabera hartuz joan dira. Generoa kontuan hartzen duten udal-hirigintzako lurralde-plangintzako azterketek hierarkizaziorik eta bereizketarik edo banaketarik gabeko guneen aldeko apustua egiten dute. Bestela esanda, funtzio bakarreko gunek baztertzen dituzte (hainbat orduan hutsik egoten diren edo autoz bakarrik heltzeko modukoak diren "debekatutako lekuak" sortzen dituztenak).

Hiria bera eta hiriaren gunek "auzo-eskala" batetik sortuz gero, erabilerak nahasiz, etxetik edo lanetik hurbil dagoen erradio batean eguneroko bizitzako oinarrizko beharrak bete ahal izango ditugu. Halako hirietan erraza izango da oinez ibiltzea ekoizpen- eta erreprodukzio-lanen uztartzea ahalbidetzeko, oztoporik gabeko gunek seguruekin gizarte-egoera ahulenean daudenen edo mendekotasunak dituztenen autonomia bultzatzeko.



http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/actividadesRed/docs/SessionPlea... Desarrollo Econó... gob.es Emakunde Emakunde.Impac...

hivo Edición Ira Favoritos Ayuda

D) MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

LA ESCALA QUE TENGAN NUESTRAS CIUDADES Y EL SISTEMA DE MOVILIDAD determina el acceso de las personas a múltiples recursos

DIAGNÓSTICO DE PAUTAS DE MOVILIDAD

- ▶ Modelos diferenciados de desplazamientos:
- “tipo pendular”
- “tipo poligonal”
- ▶ Mayor y diferente uso transporte público
- “mujeres cautivas”

Secuencias de los desplazamientos

Trabajo pagado (combinado con trabajo doméstico)

Trabajo pagado

Factores que REDUCEN O DIFICULTAN LA MOVILIDAD Y RESTRINGEN OPORTUNIDADES laborales, de ocio.

ES 13:45 16/03/21



D) MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

MEDIDAS PARA FAVORECER LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

- FOMENTO DESPLAZAMIENTO A PIE O EN BICICLETA**
- FAVORECER LA INTER-MODALIDAD**
- RECONSIDERAR RUTAS DE BUS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**
- PARTICIPACIÓN MUJERES EN DISEÑO REDES DE TRANSPORTE**

Horrelako proiektuetan oso garrantzitsua da herritarren parte-hartzea. Inspirazio gisa eta proiektua kontrastatzeko balio du.

Nolanahi ere, emakumeen ahotsa ahula da eremu publikoan, ez bereziki argumenturik ez daukatelako, baizik eta emakumeak eta haien esperientziak ez direlako kontuan hartzen eremu mistoetan. Halako egoerei aurre egiteko, garapenerako lankidetzari, desazkundeari eta gazteei lotutako taldeek mikromatxismoak landu dituzte partaidetza-eremu mistoetan. (Batzarretako mikromatxismoen txostena

<http://madrid.tomalaplaza.net/2011/06/11/dosier-de-micromachismos-en-las-asambleas/>)

Herritarrengan eragina daukan edozein prozesutan emakumeen ahotsa kontuan hartzea bultzatzen duten ekintza guztiek laguntzen dute berdintasunaren aldeko bidean.

Emakumeei ahotsa ematearen adibide interesgarria izan da, adibidez, Gasteizkoa, emakumeen parte-hartzea bultzatu baitu hirigintza eta generoaren tailerren bidez. Proiektuaren azalpena:

<http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/16/58/51658.pdf>



6.- Aurreikusten al da arauak edo administrazio-egintzak emakumeei eta gizonei ekarriko dizkien onurek edo izango dituen emaitzek lagundu egingo dutela sektoreko desberdintasunak murrizten?

Ez da arauaren xedea, baina berdintasuna gehiago zaintzen duen lan egiteko modu bat sendotzen du

7. – Aurreikusten al da etorkizuneko arauak edo administrazio-egintzak desberdintasunak desagerraraziko edo, behintzat, gutxituko dituela baliabideak eskuratzeari dagokionez?

Ez, baina berretsi egiten dugu aurreko galderari emandako erantzuna, batez ere herritarren parte-hartzeari dagokionez.

8.– Erabakiak hartzeari dagokionez, etorkizuneko arauak edo administrazio-egintzak aurreikusten al du emakumeen eta gizonen ordezkariak orekatua izatea edo ordezkariak hori, gutxienez, esparruan duten presentziaren maila berekoa izatea?

Bai, legeak administrazio publikoei parte-hartzearen prozesuetan emakumeen ahotsa kontuan hartzea eskatzen dien neurrian.

Bestalde, Jasangarritasunaren Batzordea arautzean, gogora ekarri nahi da emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izateko betebeharra.



9. – Aurreikusten al da arau edo administrazio-egintzak proposatutako helburu eta neurriak baliagarriak izango direla emakumeei eta gizonei egokitzen zaizkien gizarte-arauak eta balioak gainditu edo aldatzeko?

Ez, nahiz eta hori beti izan lortu nahi dena.

10.– Bermatzen al da diskriminazioa saihesteko eta berdintasuna bultzatzeko arauak beteko direla eta bestelako tresna juridikoak erabiliko direla? Eta ba al dago haiek hobetzeko asmorik?

Bai, zehazki Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 18.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, proposatutako testua idaztean hizkuntza ez-sexista erabiltzeko ahalegina egin da.

Bestalde, genero-ikuspegiaren premisa sartu da artikuluetako hainbat zatitan. Horrela egin da, bada, Legearen oinarri diren printzipioak aipatzean, Jasangarritasun Energetikoaren Batzordea arautzean —gogorarazi da kide anitzeko organo horretan emakume eta gizonen presentzia orekatua izateko betebeharra dagoela—, sentsibilizazio- eta zabalkunde-kanpainak arautzean eta hiri-mugikortasunerako planak aipatzean.



EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA BULTZATZEKO ETA DESBERDINTASUNAK EZABATZEKO NEURRIAK		
Arau edo administrazio-egintzaren proiektuan, jaso al da neurriren bat...		<i>Adierazi zer artikulutan jasotzen diren neurriak eta egin haien deskribapena.</i>
... genero-ikuspegia txerta dadin sustatzeko? Bai	emakumeen eta gizonen egoerek erakusten dituzten aldean ezagutza hobetzen da	
	emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna jasotzen da printzipio moduan, helburu moduan edo adierazpen nahiz azalpen gisa	<i>6. artikulua. Legearen oinarri diren printzipioak</i>
	hizkuntzaren erabilera ez-sexista egiten edo sustatzen da	<i>Artikulu guztietan eta zabalkunde-, informazio- eta sentsibilizazio-kanpainetan.</i>
	genero-gaiei buruzko prestakuntza duten pertsonen eta/edo berdintasunaren alde lan egiten duten erakundeen partaidetza sustatzen da	
	eduki edo irizpide moduan jasotzen da berdintasuna (onartzeko, balioztatze edo betetzeko) hautatze-prozesuetan, laguntzak eta hitzarmenak egiteko prozesuetan, prestakuntza-jardueretan, eta abar.	
	beste batzuk; zehaztu: _____	
... emakumeen eta gizonen partaidetza orekatua sustatzeko?	hautatze-epaimahaietan	
	sariak emateko epaimahaietan	



Bai	kontsulta-organoetan	
	zuzendaritza-organoetan	
	beste batzuk; zehaztu: _____	9 artikulua: <i>Jasangarritasun Energetikoaren Batzordea. Partaidetza-orekatua eskatzen da.</i>
... ekintza positiboak lantzeko? Ez	emakumeentzat	
	gizonek ere berdintasunaren alde egiteko	
	beste batzuk; zehaztu: _____	
... itxuraz neutroa dena baina generoaren arabera onuragarria dezakeena? Bai	indarkeriaren biktimentzat	
	guraso bakarreko familientzat	
	mendekotasuna duten pertsonak zaintzen dituztenentzat	
	beste batzuentzat; zehaztu: _____	22 artikulua: <i>Herritarrentzako hiri-mugikortasuneko planak. Herritarren parte-hartzea baina genero-ikuspegitik.</i>
... askotariko diskriminazioa pairatzen duten emakumeen desberdintasun-egoerak berdintzeko? EZ	adinagatik	
	gizarte-mailagatik	
	sexu-aukeragatik	
	desgaitasunagatik	
	etnia edota arrazagatik	
	nazio-jatorriagatik	
	beste batzuk, zehaztu: _____	
... debekuak edo zehapenak ezartzekoa denik? Ez	sexuagatiko diskriminazioak egiteagatik	
	hizkuntzaren eta irudien erabilera sexista egiteagatik	
	beste batzuk; zehaztu: _____	

Arau edo administrazio-egintzaren proiektuaren edukiaz gain, aurreikusten al da bestelako

Deskribapena



neurririk...		
... berdintasunerako helburu eta neurrien eraginkortasuna osatu edo areagotzeko? Bai	hedapena indartzeko ekintzak	
	jarraipena egiteko eta ebaluatzeke jarduketak	
	estatistikak egokitzea eta azterlan espezifikoak egitea	
	Informazio-, sentsibilizazio- eta prestakuntza-ekintzak	<i>28 artikulua: Informazioaren zabalkundea, prestakuntza eta sentsibilizazioa. Hizkuntza barne-hartzaileari errespetua eskatzen zaio mota guztietako jarduketetan, eta rolak eta estereotipoak kentzea.</i>
	arauak, planak edo programak egokitzea edo prestatzea	
	berdintasunerako planak egitea	
	egiturak eta zerbitzuak sortzea	
	beste batzuk; zehaztu: _____	

Txostenaren data:

**Txostena egin duenaren
sinadura:**

**Proiektuaren ardura duen
zuzendariaren sinadura:**

XI

INFORME DE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER / EMAKUNDEAREN TXOSTENA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN
ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA
PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VASCAS**

INFORME RELATIVO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS.

Se emite el presente informe a solicitud del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco y en el ejercicio de la competencia atribuida a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer por el artículo 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

El informe tiene por objeto verificar la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ley 4/2005 y en las Directrices para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de agosto de 2012, y realizar propuestas de mejora en tal sentido.

El anteproyecto de Ley tiene por objeto establecer, de acuerdo con la orientación general de la política energética, los pilares normativos de la sostenibilidad energética en el ámbito de las Administraciones Públicas Vascas, articulando los deberes y obligaciones que éstas deben cumplir y que se orientan fundamentalmente al impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética y de promoción e implantación de energías renovables.

Se trata, por tanto, de una disposición de carácter general que debe ser evaluada sobre su impacto en función del género, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.1 de la Directriz Primera. A tal fin, el órgano promotor de la norma ha emitido el correspondiente Informe de impacto en función del género, en los términos previstos en el anexo I.

Verificado el cumplimiento de los trámites formales previstos por la Ley 4/2005 y las Directrices para la realización del Informe de Impacto en Función del Género, respecto a su contenido nos gustaría señalar que se valora positivamente el esfuerzo realizado en la cumplimentación de todos los apartados y cuestionarios establecidos.

En el **informe de impacto** remitido se describen los objetivos generales de la norma. En el apartado relativo a los objetivos para promover la igualdad de mujeres y hombres se señala que *“el proyecto de Ley no tiene como objetivo explícito promover la igualdad de mujeres y hombres, sin embargo, recuerda como requisito de actuación a las destinatarias, las administraciones públicas, el enfoque de género y que la participación ciudadana, contemplada en este proyecto de ley, tenga en cuenta también dicho enfoque”*. En este sentido, debemos señalar que sería recomendable incluir una mención expresa con este compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres en la parte expositiva del anteproyecto de Ley. Así, de modo expreso, y en cumplimiento del artículo 3 sobre principios generales de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres, se podría explicitar el compromiso para garantizar el principio de igualdad de trato y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Por otra parte, en la **Evaluación Previa del Impacto en función del género**, el informe se centra en dos aspectos, por un lado, en la obligación que tienen las administraciones públicas de integrar la perspectiva de género, y por otro, en la participación ciudadana como elemento de gobernanza. Añade que el espacio urbano no es neutro al género, al tiempo que describe las características y criterios que deben reunir los estudios de planeamiento territorial y urbanístico desde el punto de vista del género.

En este sentido, si bien valoramos de modo positivo tal descripción, debemos señalar que no se aporta ningún tipo de dato, por lo que ni tan siquiera se analizan datos desagregados por sexo, tal y como exige la Directriz Primera 4.1)b) “se debe recoger, de forma diferenciada, la información sobre cuál es la situación social de las mujeres y los hombres en el ámbito...”. Todo ello, se debería haber realizado en función de los siguientes criterios:

- ✓ La presencia de mujeres y hombres entre las potenciales personas beneficiarias de la propuesta normativa y los obstáculos para la obtención de un beneficio equivalente.
- ✓ El acceso de mujeres y hombres a los recursos que influyen de forma significativa en la generación de las desigualdades en el sector.
- ✓ La participación de mujeres y hombres en los ámbitos de toma de decisiones.

Este mismo apartado concreta que para “analizar la situación de mujeres y hombres se deberá hacer una búsqueda previa de información tanto cuantitativa como cualitativa”.

Por ello, a pesar de la dificultad que implica analizar la repercusión de la citada Ley en la eliminación de desigualdades de género, para profundizar sobre el impacto de la norma sería necesario analizar desagregados por sexos, por ejemplo, los datos sobre compra de edificios y viviendas y en qué medida la certificación sobre eficiencia energética pueda influir en dicha compra.

Asimismo, y considerando que la norma también abarca otras políticas públicas, entre las que se encuentran aquellas que tienen que ver con la ordenación del territorio, el urbanismo y las infraestructuras del transporte, se han de tener en cuenta las diferencias existentes en las pautas de movilidad de hombres y mujeres derivadas, entre otros motivos, de un mayor uso del transporte público por parte de las mujeres y de su mayor dedicación al trabajo doméstico y de cuidado. Por lo tanto, a la hora de definir y planificar un modelo territorial, será fundamental considerar la inclusión de la perspectiva de género, en el sentido de que habrá que satisfacer las necesidades de cobertura de equipamientos y de transporte público de las mujeres, atendiendo a la diversidad de grupos y necesidades.

Para ello, será fundamental establecer indicadores que nos permitan obtener información relativa a:

- Porcentaje de población de la CAE que realiza desplazamientos, desagregado por sexo, edad, medio de transporte y finalidad.

- Porcentaje de población de ámbito rural que considera que tiene satisfechas sus necesidades de cobertura de equipamientos, servicios y transporte público, desagregado por sexo, edad y comarca.
- Porcentaje de población con discapacidad que considera que tiene satisfechas sus necesidades de cobertura de equipamientos, servicios y transporte público, desagregado por sexo, edad y comarca.

Los desplazamientos de las mujeres suponen en la CAE en términos generales el 51,9% del total diario de desplazamientos que se realizan, de acuerdo con el Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca correspondiente a 2011. Esta mayor movilidad de las mujeres es en buena medida consecuencia del mayor peso que supone para ellas las tareas derivadas del trabajo reproductivo. Asimismo, ellas se mueven más dentro de la ciudad, en distancias cortas, y con un predominio de desplazamientos no motorizados. Por ello, un buen diseño urbano que garantice la accesibilidad, el confort y la seguridad en sus calles y espacios públicos constituye un elemento fundamental a considerar por parte de las Administraciones Públicas Vascas en el impulso de una movilidad pensada desde la perspectiva de género.

Por lo tanto, y ya que la seguridad ciudadana es otro aspecto primordial a considerar a la hora de que la igualdad de oportunidades sea efectiva, será necesario diseñar la ciudad de forma integradora para su uso por parte de todas las personas mediante la inclusión de la perspectiva de género.

Sería también relevante aportar información más específica del ámbito sobre el que el anteproyecto de Ley pretender incidir, como pueden ser las entidades públicas o privadas que se financiarán, ya sea mediante la concesión de ayudas o mediante acuerdos voluntarios, al objeto de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente Ley así como a la divulgación de valores dirigidos a mejorar las técnicas de ahorro y eficiencia energética y de promoción y desarrollo de las energías renovables. Así, si fuera posible, sería de interés aportar datos desagregados por sexo de la plantilla de estas entidades, organizaciones o agentes del sector que pueden ser beneficiarias de tales ayudas, su evolución en los últimos años, etc.

En cuanto al **contenido del anteproyecto de Ley**, si bien se valoran de manera positiva las medidas incluidas en la norma, se realizan las siguientes propuestas de mejora:

De conformidad con lo previsto en el artículo 3.4 y 16 de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en lo referente a los principios recogidos en el artículo 6, sería recomendable incorporar la perspectiva de género en todas las políticas y acciones, es decir, tomar en consideración de manera sistemática las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y así, promover la igualdad en todas las actuaciones para que su intervención sea más eficaz.

Asimismo, y con relación al principio de participación ciudadana, regulado también en ese mismo artículo 6, sería recomendable añadir que dicho proceso

participativo se hará atendiendo a una participación equilibrada de mujeres y hombres y considerando la perspectiva de género y la diversidad de colectivos y situaciones. Más allá del equilibrio numérico, es importante, además, desarrollar estrategias que tengan en cuenta las posibles diferencias respecto a la capacidad y oportunidad de participación de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de la sostenibilidad energética.

Igualmente, y con la intencionalidad de realizar una posterior evaluación y seguimiento, se recomienda explicitar la necesidad de recabar datos desagregados por sexo sobre la participación, así como tipología de propuestas realizadas.

Por otro lado, la Ley 4/2005 en su artículo 46 señala que “los poderes públicos vascos arbitrarán los medios necesarios para garantizar que sus políticas y programas en materia de medio ambiente, vivienda, urbanismo y transporte integren la perspectiva de género, considerando entre otras, cuestiones relativas a la seguridad de las personas, a facilitar la realización del trabajo doméstico y de cuidado de las personas y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como a fomentar mayor participación de las mujeres en el diseño y ejecución de las citadas políticas y programas”. Por lo tanto, y con el fin de dar cumplimiento a dicho mandato, se recomienda añadir un párrafo que haga referencia a este compromiso en el artículo 22 relativo al plan de movilidad urbana, y se analicen formas de darle desarrollo.

También sería recomendable complementar el párrafo del artículo 22 relativo a los diferentes usos de la ciudad y del espacio que hacen hombres y mujeres, con

la necesidad de diseñar la ciudad de forma integradora para su uso por parte de todas las personas mediante la inclusión de la perspectiva de género.

Al mismo tiempo, no debemos olvidar que tal y como se establece en el Programa 6 del Eje II del VI Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE, los planes de movilidad, planes urbanísticos, el diseño de la vivienda y el diseño de los espacios públicos, deberán incluir una serie de medidas destinadas a facilitar la conciliación corresponsable y la autonomía de las personas.


Para ello, sería aconsejable contar con la participación de la técnica de igualdad del departamento y/o con personal experto en igualdad de mujeres y hombres a la hora de realizar el estudio y elaboración de cualquiera de los planes regulados en la presente Ley, ya sean éstos planes de ordenación del territorio, planes de ordenación urbana, de carreteras o de infraestructuras de transporte, estudios de movilidad, etc., con el objeto de incluir la perspectiva de género en todo el proceso. Una de las funciones principales de la unidad es el asesorar en materia de igualdad de mujeres y hombres, incluido el asesoramiento en la elaboración de planes y políticas sectoriales.


Para finalizar, se recuerda que según lo señalado en el artículo 2.3 de la Ley 4/2005, los artículos 3, 16, 18.4 y 23 son de aplicación a todos los poderes públicos y a las entidades privadas con las que los poderes públicos suscriban contratos, convenios o concedan ayudas, por lo que deben disponer de datos desagregados por sexo, hacer un uso no sexista del lenguaje, promover una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de toma de

decisiones y en sus órganos de dirección y colegiados y respetar los principios generales que en materia de igualdad de mujeres y hombres establece el artículo 3 de la Ley 4/2005. En este sentido, se sugiere incluir expresamente todas estas obligaciones en los contratos y ayudas que se realicen al amparo de esta Ley.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de abril de 2016.

FIRMADO DIGITALMENTE POR:
Firmante: **NAGORE GOMARA PICAZA**
Fecha de la firma: **25/04/2016 12:50:18**
Validación de la firma:  **Correcta**

Firmante: **UNAY CASADO LATABURU**
Fecha de la firma: **25/04/2016 16:29:52**
Validación de la firma:  **Correcta**

Firmante: **ANA JESUSA ALBERDI ZUBIA**
Fecha de la firma: **25/04/2016 13:05:54**
Validación de la firma:  **Correcta**

EUSKAL ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN EKONOMIKOARI BURUZKO LEGEAREN
AURREPROIEKTUAREN INGURUKO TXOSTENA

Txosten hau Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak eskatuta egin da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 21. artikulua Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer erakundeari emandako eskumena erabiltzeko.

Txostenaren helburua da 4/2005 Legearen 19. eta 20. artikuluetan generoaren araberako eragina aurretik ebaluatzeko Jarraibideetan xedatutakoa egoki aplikatzen ari dela egiaztatzea. Horrez gain, beste bi xede ditu: desberdintasunak ezabatzeko eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko neurriak gehitzea, Gobernu Kontseiluak 2012ko abuztuaren 21ean egindako Akordioan onartutakoak, eta horri buruzko hobekuntza-proposamenak egitea.

Legearen aurreproiektu honen xedea da, politika energetikoaren joera orokorra kontuan hartuta, EAEko administrazio publikoetan jasangarritasun energetikoaren arau-oinarriak ezartzea, eta administrazio publiko horiek zer eginbehar eta betebehar dituzten antolatzea. Batez ere, energia aurrezteko eta efizientzia energetikoa izateko neurriak bultzatzera bideratuko dira eginbehar eta betebehar horiek, bai eta energia berriztagarriak sustatzera eta ezartzera ere.

Beraz, xedapen orokorra da eta haren eragina generoaren arabera ebaluatu behar da, Lehen Jarraibideko 2.1 atalean ezarritakoari jarraikiz. Horretarako, arauaren organo sustatzaileak eraginari buruzko txostena egin du, generoaren arabera eta I. eranskinean aurreikusitako baldintzei jarraikiz.

4/2005 Legeak aurreikusitako izapide formalak eta generoaren araberako eraginaren txostena egiteko Jarraibideak bete direla egiaztatu ondoren, edukiari buruz adierazi nahiko genuke ezarritako atal eta galdetegi guztiak betetzeko egindako ahaleginaren balorazio positiboa egiten dela.

Eraginari buruzko igorritako txostenean arauaren helburu orokorrak deskribatzen dira. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko helburuei buruzko atalean adierazten denez, “emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea ez da Legearen aurreproiektuaren helburu esplizitua; hala ere, hartzaileei, administrazio publikoei hain zuzen, gogorarazten die jarduketa-baldintza dela genero-ikuspegia eta lege-proiektu honetan jasotako herritarren parte-hartzeak ikuspegi hori aintzat hartu behar duela. Horren harira, adierazi behar dugu gomendagarria litzatekeela Legearen aurreproiektuaren azalpen zatian emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko konpromisoa berariaz aipatzea. Hala, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 3. artikulua, printzipio orokorrei buruzkoa, betetze aldera, berariaz adieraz daiteke tratu-berdintasuneko printzipioa eta emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bermatzeko konpromisoa.

Bestalde, generoaren arabera eraginaren alde aurreko ebaluazioan, txostenak bi alderditan jartzen du arreta: alde batetik, genero-ikuspegia integratzeko administrazio publikoek duten betekizunean, eta, bestetik, herritarren parte-hartzean gobernamentu-elementu gisa. Hirigunea genero-eragineko neutroa ez dela ere gehitzen du, eta, aldi berean, lurralde- eta hirigintza-azterketek bildu behar dituzten ezaugarriak eta irizpideak deskribatzen ditu genero-ikuspegitik.

Horren harira, deskribapen hori egokituz jotzen badugu ere, adierazi behar dugu datu motarik ez dela ematen. Hori dela eta, sexuaren arabera banakatutako daturik ez da aztertzen, 4.1)b) Lehen Jarraibideak eskatzen duen moduan:

“...eremuan emakumeen eta gizonen egoera sozialari buruzko informazioa bereizita jaso behar da...”. Hori guztia, honako irizpide hauen arabera egin behar arko litzateke:

Araudi-proposamenaren eta onura baliokide bat jasotzeko oztopoen onuradunak izan daitezkeen pertsonen artean emakumeek eta gizonek egon behar dute.

Sektorean desberdintasunak sortzean eragin nabarmena duten baliabideek emakumeen eta gizonen eskura egon behar dute.

Emakumeek eta gizonek parte hartu behar dute erabakiak hartzen diren esparruetan.

Atal honek zehazten du, “emakumeen eta gizonen egoera aztertzeko, aldez aurretik informazio kuantitatiboa zein kualitatiboa bilatu beharko dela”.

Horregatik, nahiz eta aipatutako Legeak genero-desberdintasunak ezabatzean duen oihartzuna aztertzea zaila den, arauaren eraginean sakontzeko beharrezkoa litzateke sexuen arabera banakatutako azterketa egitea. Adibidez, eraikinak eta etxebizitzak erosteari buruzko datuak, eta eraginkortasun energetikoari buruzko ziurtagiriak zein neurritan eragin dezakeen erosketa horretan.

Halaber, aintzat hartuta arauak beste politika publiko batzuk ere barne hartzen dituela, besteak beste, lurraldearen, hirigintzaren eta garraio-azpiegituren antolamenduaren ingurukoak, kontuan hartu behar dira gizonen eta emakumeen mugikortasun-jarraibideen arteko ezberdintasunak. Horiek, besteak beste, honako arrazoi hauetatik eratortzen dira: emakumeek garraio publikoa gehiago erabiltzen dute eta etxeko lanei eta zaintza-lanei arreta gehiago eskaintzen diete. Hortaz, lurralde-eredu bat definitzean eta haren plangintza egitean, funtsezkoa izango da aintzat hartzea genero-ikuspegia, emakumeek ekipamendu-estalduraren eta garraio publikoaren inguruan dituzten beharrak asebetze beharko direlako, talde- eta behar-aniztasunari arreta emateko.

Horretarako, ezinbestekoa izango da adierazleak ezartzea, honako hauei buruzko informazioa jasotzeko aukera emango digutenak:

- Joan-etorriak egiten dituzten EAEko biztanleen ehunekoak sexuaren, adinaren, garraio-bidearen eta helburuaren arabera bananduta.

- Ekipamenduen, zerbitzuen eta garraio publikoaren estaldura-beharrak asebeteta dituztela uste duten landa-eremuko biztanleen ehunekoa sexuaren, adinaren eta eskualdearen arabera bananduta.

Ekipamenduen, zerbitzuen eta garraio publikoaren estaldura-beharrak asebeteta dituztela uste duten desgaituen ehunekoa sexuaren, adinaren eta eskualdearen arabera bananduta.

Orokorrean, EAEn egunero egiten diren joan-etorrien % 51,9 emakumeek eginak dira, 2011n egindako Euskal Autonomia Erkidegoko mugikortasuneko azterketaren arabera.

Hein handi batean, emakumeak gehiago mugitzen dira ugaltze-lanetik eratorritako zereginak dakarkien pisu handiagoaren ondorioz. Halaber, emakumeak gehiago mugitzen dira hirian barrena, distantzia laburretan, eta, nagusiki, ez dute ibilgailu motordunik erabiltzen joan-etorri horietan. Hori dela eta, euskal administrazio publikoek funtsezkotzat jo beharko lukete kaleetan irisgarritasuna, erosotasuna eta segurtasuna bermatzen dituen hiri-diseinu on bat izatea, genero-ikuspegitik pentsatutako mugikortasuna bultzatzearren.

Ondorioz, aukera-berdintasuna benetakoa izateko herritarren segurtasuna ezinbestekoa denez gero, hiria era integratzailean diseinatu beharko da, genero-ikuspegia gizartean sartuz, pertsona guztiek hiria erabil dezaten.

Horrez gain, garrantzitsua litzateke ere bai, Legearen aurreproiektuak eragin nahi duen alorrari buruzko berariazko informazio gehiago ematea. Esate baterako, finantzatuko diren erakunde publiko edo pribatuak. Finantzaketa hori diru-lagun tzak emanaz edo borondatezko hitzarmenen bidez egingo da, Lege honetan ezarritako betekizunak betetzeko eta aurrezteko eta eraginkortasun energetikoa lortzeko teknikak eta energia berriztagarrien sustapenerako eta garapenerako teknikak hedatzeko. Hala, diru-laguntza horiek jaso ditzaketen erakunde, elkarte edo sektoreko agente horien langileei, azken urteetako garapenari eta abarri buruzko informazioa sexuaren arabera bananduta ematea interesgarria litzateke.

Legearen aurreproiektuaren edukiari dagokionez, arauan gehitutako neurrien aldeko balorazioa egin arren, honako hobekuntza-proposamenak egiten dira:

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 3.4 eta 16. artikuluetan aurreikusitakoarekin bat eginez, 6. artikuluan jasotako printzipioei dagokienez, gomendagarria litzateke genero-ikuspegia txertatzea politika eta egintza guztietan, hau da, emakumeen eta gizonen egoera, baldintza, nahi eta behar ezberdinak sistematikoki aintzat hartzea, bai eta desberdintasunak kentzera zuzendutako berariazko helburuak eta jarduketak gehitzea ere, jarduketa guztietan berdintasuna sustatzeko, esku-hartzea eraginkorragoa izan dadin.

Halaber, herritarrek parte hartzeko printzipioari dagokionez (6. artikuluan ere arautzen da), gomendagarria litzateke gehitzea

prozesu parte-hartzaile hori egingo dela emakumeen eta gizonen arteko parte-hartze orekatu batekin eta kolektibo eta egoeren genero-ikuspegia eta aniztasuna aintzat hartuta. Gainera, kopuru-orekatik haratago joanda, garrantzitsua da estrategiak garatzea, jasangarritasun energetikoaren arlo ezberdinetan emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasuna aintzat hartzen dituenak, parte hartzeko dituzten gaitasun eta aukera ezberdinei dagokienez.

Era berean, geroago ebaluazio eta segimendua egiteko asmoaz, gomendatzen da parte-hartzeari buruzko datuak sexuaren arabera bananduta biltzeko beharra argi eta garbi adieraztea, bai eta proposatutako tipologiei buruzkoak ere.

Bestalde, 4/2005 Legeak honakoa adierazten du 46. artikuluan: “euskar botere publikoek beharrezkoak diren bitartekoak erabakiko dituzte, ingurumenaren, etxebizitzaren, hirigintzaren eta garraioaren inguruko politika eta programa guztietan genero-ikuspegia txertatzen dela bermatzeko. Besteak beste, aintzat hartuko dira pertsonen segurtasunari buruzko gaiak, etxeko lanak eta pertsonak zaintzeko lanak errazteko eta bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa bateratzea errazteko gaiak eta emakumeek aipatutako politika eta programen diseinuan eta exekuzioan parte-hartze gehiago sustatzekoak. Hortaz, agindu hori betetzearren, paragrafo bat gehitzea gomendatzen da, konpromiso hori aipatzeko, hiri-mugikortasuneko planari buruzko 22. artikuluan. Horrez gain, gomendatzen da hori garatzeko erak aztertzea.

Halaber, gomendagarria litzateke 22. artikuluko paragrafo bat osatzea. Hain zuzen ere, paragrafo hori hiriaren eta emakumeek eta gizonek sortzen duten espazioaren erabilera ezberdinei buruzkoa da,

eta gehitu beharko litzateke beharrezkoa dela hiria era integratzailean diseinatzea, genero-ikuspegia gizartean txertatuz, pertsona guztiek hiria erabil dezaten.

Aldi berean, ez dugu ahaztu behar, EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Planeko II. Ardatzeko 6. Programan ezartzen denez, mugikortasun-planek, hirigintza-planek, etxebizitzaren diseinuak eta espazio publikoen diseinuak neurri sorta bat gehitu beharko dutela, adiskidetze erantzunkidea eta pertsonen autonomia erraztera zuzentzen direnak.

Horretarako, Lege honetan arautzen den edozein planen azterketa edo prestaketa egiterakoan, gomendagarria litzateke saileko berdintasun-teknikariaren eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean adituak diren langileen parte-hartzea izatea. Plan horiek lurralde-antolamendukoak, hiri-antolamendukoak, errepide edo garraio-azpiegituretakoak, mugikortasun-azterketak, etab. izan daitezke, eta horien helburua da genero-ikuspegia prozesu osoan gehitzea. Unitatearen funtzio nagusietako bat da aholkularitza ematea emakumeen eta gizonen arteko berdintasun gaiaren inguruan, planak eta sektore-politikak prestatzeko aholkularitza barne.

Bukatzeko, gogorarazten da, 4/2005 Legearen 2.3 artikulua araberan, 3., 16., 18.4 eta 23. artikulua botere publiko guztiei aplikatu ahal zaizkiela, bai eta botere publikoekin kontratuak, hitzarmenak sinatu edo haie n aldetik diru-laguntzak jasotzen dituzten erakunde pribatuei ere.

Ondorioz, sexuaren arabera banandutako datuak izan behar dituzte, hizkuntza ez sexista erabili behar dute, erabakiak hartzeko esparruetan eta beren zuzendaritza-organoetan eta kide anitzeko organoetan emakume eta gizonen presentzia orekatua sustatu behar dute eta printzipio orokorrak errespetatu behar dituzte, emakumeen eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Legearen

3. artikulua ezartzen dituenak. Ildo horretatik, Lege honek babestuta egiten diren kontratu eta diru-laguntza guztietan betebeharrak horiek guztiak berariaz gehitzea gomendatzen da.

Vitoria-Gasteizen, 2016ko apirilaren 25ean

XII

**INFORME DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS/HERRI ADMINISTRAZIOETAN
HIZKUNTZA NORMALITZATZEKO ZUZENDARITZAREN TXOSTENA.**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN
ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA
PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VASCAS**



Aitor Patxi Oregi Baztarrika
Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendaria
Industria Sailburuordetza
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila

Jaun hori,

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoari buruzko Lege Aurreproiektuaren berri jaso genuen Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzan iragan urtarrilaren 22an, euskaraz eta gaztelaniaz, Tramitagune tresna informatikoaren bitartez, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza horretatik bidalita, derrigorrezko txostena emateko eskatuz.

Eskaera horri erantzunez, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskararen erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duen azaroaren 6ko 233/2012 Dekretua, eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren 22.1) artikulua oinarri hartuta, txosten hau ematen dut:

a) Hizkuntza arloko araudiaren betetze maila.

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoari buruzko Lege Aurreproiektua aztertu ondoren, egungo hizkuntza araudia urratzen ez duela adierazten dut.

Bestalde, kontuan harturik Lege Aurreproiektuaren euskarazko eta gaztelaniazko bertsioak daudela, bete da Eusko Jaurlaritzak 2013ko maiatzaren 14an hartutako Erabakian jasotakoa, lege, legegintzako dekretu, dekretu edo agindu izango diren xedapen orokorrak bi hizkuntzetan idazteko neurriak onartu zituena.

b) Euskararen erabileraren normalizazioaren gaineko eragina.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua onartu zuen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak dio autonomia erkidegoak eskumena duela oinarri arauak legez garatzeko eta bere lurraldean betearazteko, meategien eta energiaren araubide eta baliabide geotermikoen gainean (11.2.c artikulua). Halaber, autonomia erkidegoak bakarreko eskumena du bere autogobernu erakundeen antolaketa, araubidea eta jarduera arautzeko (10.2 artikulua).

Eskumen horien babesean onartu zen azaroaren 24ko 9/1982 Legea, Energiaren Euskal Erakundea sortzekoa.

Orain izapidetzen ari den Lege Aurreproiektuaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoa arautuko da.

Lege Aurreproiektuaren I. kapituluaren xedapen orokorrak jasotzen dira (1-9 artikulua), II. kapituluaren helburuak eta ekintzak jorratzen dira (10-25 artikulua), eta III. kapituluaren borondatezko tresnak eta sustapena (26-28 artikulua). Azkenik, lau xedapen gehigarri eta bi azken xedapen daude.

Aztergai dugun Lege Aurreproiektuan hizkuntza aipamenik ez badago ere, kontuan izan behar dugu Autonomia Estatutuaren 6. artikuluari jarraiki euskara eta gaztelania direla Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialak, herritarrek biak ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea dutela, eta autonomia erkidegoko erakunde komunei dagokiela bi hizkuntzen erabilera bermatzea.

Zentzu horretan, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarritzko Legeak euskara eta gaztelaniaren erabilera arautzen du Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean, herritarren hizkuntza eskubideak aitortuz (5. artikulua), eta gehienbat herri administrazioen hizkuntza betekizunak ezarriz.

Aztartzen ari garen Lege Aurreproiektuan xedatutakoa betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek jasangarritasun energetikoari buruzko informazio eta argitalpen batzuk jarri beharko dituzte herritarren esku, eta azaroaren 24ko 10/1982 Oinarritzko Legeak dio botere publikoek bi hizkuntza ofizialak erabiliko dituztela, zabalkunde ofiziala izango duten arau-xedapen, ebazpen ofizial, administrazio jakinarazpen eta komunikazio orotan (8. artikulua).

Ondorioz, euskararen eta gaztelaniaren erabilera bermatzeko, eta arau berriak euskararen normalizazioaren gaineko eragin positiboa izan dezan, Lege Aurreproiektuan xedapen berria txertatzeko proposatzen dugu, eduki honekin:

-Lege honetan agindutakoa betez Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek herritarren esku jartzen duten jasangarritasun energetikoari buruzko informazio eta argitalpen oro euskaraz eta gaztelaniaz egongo da idatzita.


Adeitasunez,

Gasteizen, 2016ko urtarrilaren 27an

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **JOSE RICARDO LOZANO SANTOS**

Fecha de la firma: 28/01/2016 11:09:47

Validación de la firma:  **Correcta**

Joseba Lozano Santos

Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria



Iñaki Aldeko garai Labaka
Director de Servicios
Viceconsejería de Comercio y Turismo
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad

Estimado señor:

En esta Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Pública se recibió en castellano de modo telemático el pasado 26 de mayo mediante la herramienta informática Tramitagune el proyecto de orden que regulará el control externo y el registro de certificados de eficiencia energética, enviado desde la Dirección de Servicios del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, solicitando el preceptivo informe.

En contestación a su petición, tomando como base el Decreto 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general y el artículo 22.1) del Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, emito el siguiente informe:

a) Grado de cumplimiento de la normativa lingüística.

Tras analizar proyecto de orden que regulará el control externo y el registro de certificados de eficiencia energética, declaro que no infringe la actual normativa lingüística.

b) Impacto sobre la normalización del uso del euskara.

Según dispone la Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre de aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Vasca, es de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución, dentro de su territorio, de las bases, en los términos que las mismas señalen, en materia de régimen minero y energético (art. 11.2.c), y competencia de desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de medioambiente (art. 11.1.a). Asimismo, tiene competencia exclusiva en materia de defensa del consumidor y del usuario (art. 10.28), en materia industrial (art. 10.30), y en materia urbanismo y vivienda (art. 10.31).

Al amparo de esas competencias se aprobó el Decreto 240/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios de nueva construcción.

Asimismo se aprobaron la Orden de 12 de diciembre de 2012 del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se regula el control externo de la Certificación de Eficiencia Energética (BOPV, 22-01-2013) y la Orden de 2 de abril de 2013 de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad que regula el registro de certificados de eficiencia energética de edificios (BOPV 20-05-2013).

De otro lado, para reflejar la normativa de la Unión Europea en el estado se publicó el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios y trajo consigo la necesidad de adaptar la legislación vasca.

El Gobierno Vasco está tramitando el proyecto de decreto que regulará certificación de la eficiencia energética de los edificios; esta dirección informo de ello el pasado año y fueron derogados el mencionado Decreto 240/2011 de 22 de noviembre y las dos órdenes.

En consecuencia, teniendo en cuenta el contenido de ese proyecto de decreto mediante el proyecto de orden que se está tramitando se regulará el control externo y los certificados de eficiencia energética de edificios.

En el artículo 1 del proyecto de orden se fija el objeto, en el capítulo primero (artículos 2-13) se regula el control externo de los certificados de eficiencia energética, y en el II capítulo, el Registro de certificados de eficiencia energética (artículos 14-26). Para finalizar, una única disposición adicional y dos disposiciones finales.

Aunque en el proyecto de orden no hay mención en materia lingüística, hay que tener en cuenta que en el II capítulo se regula el Registro de certificados de eficiencia energética, y en temas de energía la competencia corresponde a esta dirección (artículo 17), la cual será pública (artículos 14a, 16 y 25). Del mismo modo, la ciudadanía estará en relación con el registro.

En ese sentido, la Ley 10/1982, de 24 de Noviembre, básica de normalización del uso del Euskara dice que la ciudadanía vasca tiene derecho a relacionarse en euskera o en castellano oralmente y/o por escrito con la Administración y a ser atendidos en la lengua oficial que elijan (artículos 5.2.a y 6.1), en lo cual coincide lo dispuesto en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, en sus artículos 5 y 9.2.

Así mismo, según el artículo 7 de la Ley 10/1982 de 24 de noviembre, la inscripción de documentos se hará en la lengua oficial en que aparezcan extendidos y a efectos de exhibición y/o de certificaciones, se garantizará la traducción a cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Por tanto, proponemos incluir en el texto del proyecto de orden objeto de este informe la siguiente disposición:

- Mediante esta orden se establece que debe garantizarse el derecho de la ciudadanía a relacionarse en euskera o en castellano oralmente y/o por escrito con el registro de certificados de eficiencia energética y a ser atendidos en la

lengua oficial que elijan. Del mismo modo, en lo que respecta al funcionamiento del registro se cumplirá lo dispuesto en el artículo 7 de Ley 10/1982, de 24 de Noviembre, básica de normalización del uso del Euskara.

Atentamente,

Vitoria-Gasteiz, 4 de junio de 2014

Jokin Azkue Arrastoa
Director de Promoción del Euskara¹

¹ En ausencia del director de Normalización Lingüística de las Administraciones, según lo dispuesto en la disposición adicional primera del Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

XIII

INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO / KONTROL LEGE-EKONOMIKOKO BULEGOAREN TXOSTENA.

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN
ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA
PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VASCAS**



INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO, EN RELACIÓN CON EL ANTEPROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS

Tramitagune: DNCG_LEY_77255/2015_03

La Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (LCEC), regula en el Capítulo IV del Título III el Control Económico Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se ejerce mediante la emisión del correspondiente informe de control por parte de la Oficina de Control Económico.

Dicho control incluye, en su aspecto económico-organizativo, la fiscalización de toda creación y supresión de órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones.

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo III del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 4. a) del decreto 192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda y Finanzas, se emite el siguiente

INFORME:

I. OBJETO

El presente informe de control económico normativo que se emite conforme al marco normativo enunciado en el anterior apartado se inscribe en el procedimiento de elaboración del anteproyecto de LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS (en lo sucesivo también citado como LSEN).

El citado anteproyecto tiene como objeto declarado (artículo 1):

"... el establecimiento, de acuerdo con la orientación general de la política energética, de los pilares normativos de la sostenibilidad energética en el ámbito de las Administraciones Públicas Vascas, articulando los deberes y

obligaciones que éstas deberán cumplir y que se orienta fundamentalmente al impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética y de promoción e implantación de energías renovables”.

Conforme a tal planteamiento el procedimiento ha sido incoado y sustanciado por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad (DEC), al que le viene asignada, en el marco de las competencias que esta Administración ostenta, el área de energía conforme al artículo 7.1 apartado e) del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL EXPEDIENTE

En primer lugar procede indicar que el Anteproyecto de referencia no figura expresamente incluido en el Calendario legislativo de la X Legislatura (2012-2016) aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 2013¹, lo cual no es óbice para su tramitación.

En este sentido, la Orden de la Consejera por la que se ordena el inicio del procedimiento, sin ofrecer una argumentación de necesidad se limita a una descripción formal del procedimiento que haya de seguir conforme a la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general.

Es la memoria justificativa de la iniciativa y la Exposición de Motivos del Anteproyecto (que ya se incluye en la fase de aprobación inicial), los soportes que ofrecen una perspectiva general de la cuestión de la que, en cualquier caso, estimamos oportuno destacar los siguientes aspectos

- La existencia de diversas normas de órganos estatales que, por trasposición de diversas Directivas UE (que se citan en el expediente del anteproyecto) y en ejercicio de diversos títulos competenciales (no solamente los referidos estrictamente a la materia de energía) establecen con carácter básico diversas obligaciones en relación a esta materia, algunas contempladas con carácter general (alcanzado, también, a las Administraciones Públicas²), otras con carácter específico destinadas a las Administraciones Públicas.
- La aprobación y entrada en vigor el pasado año del Decreto 178/2015, de 22 de septiembre, sobre la sostenibilidad energética del sector público de la

¹ Tampoco se hace alusión al mismo en el último Acuerdo de Seguimiento semestral de ese Calendario Legislativo adoptado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 2 de febrero de 2016

² Así, los certificados de eficiencia energética, también, en edificios públicos

Comunidad Autónoma de Euskadi. Este Decreto como claramente expresa su denominación tiene un alcance al "sector público de la CAE" y, aparece aludido como referente de la iniciativa legal proyectada en cuanto a la intención actual de extender al conjunto de las Administraciones Públicas Vascas concernidas las previsiones relativas a "sostenibilidad energética" que se contemplan.

En atención a ello, por las importantes similitudes y proximidad en el tiempo se adelanta la relevancia de las consideraciones efectuadas, en particular, en relación al aludido Decreto 178/2015; teniendo, no obstante, bien presente el objetivo primordial del Proyecto formulado de extender tales medidas a las Administraciones Públicas Vascas previstas en su ámbito subjetivo.

Así las cosas, se ha tramitado el oportuno expediente habiéndose puesto a disposición de esta Oficina (a través la aplicación informática de tramitación electrónica Tramitagune -DNCG_LEY_77255/2015_03), para la emisión del preceptivo Informe de control económico-normativo.

La documentación remitida, se acomoda formalmente a las previsiones del artículo 42 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración de la comunidad Autónoma de Euskadi, verificándose respecto el presente Informe de control económico normativo, en los términos previstos en los artículos 25 a 27 de la LCEC.

A1) De la documentación remitida, obrante en el expediente, se apuntan algunos aspectos de relevancia en cuanto a los requerimientos derivados del vigente régimen de elaboración de disposiciones de carácter general en el ámbito de esta Administración contenidos, fundamentalmente, en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre que, con las consideraciones efectuadas a este respecto por COJUA³, alcanzan a:

- a)** Sin que pueda concluirse su omisión, no se acredita el sometimiento a la consideración de las Administraciones Públicas concernidas del anteproyecto en ninguna fase procedimental. En este sentido, si bien constan alegaciones efectuadas por EUDEL (que por su representatividad vendría a constituir el sometimiento a consideración de los Municipios

³ Así, tiene advertido como, si bien en relación a los proyectos reglamentarios una tramitación defectuosa (vgr. la falta de audiencia o de participación de intereses públicos y privados o la ausencia de informes preceptivos) puede llegar a incidir en la validez del futuro producto normativo, con los anteproyectos de Ley no sucede lo mismo ya que sólo en casos excepcionales pueden ver comprometida su validez, siempre además que la carencia afecte limitativamente a la formación de la voluntad parlamentaria (STC 108/1986).

vascos), el Ayuntamiento de Bilbao y por las Juntas Generales de Álava (en principio, sujeto no implicado directamente en el ámbito de aplicación del anteproyecto); no aparece ningún soporte de cómo y a quién haya sido recabada tal intervención. Entendemos que por el alcance proyectado y teniendo en cuenta el artículo 9 de la Ley 8/2003 se hace preciso garantizar la participación y consulta a esas otras Administraciones más allá de un mero traslado para que durante un breve plazo preclusivo formulen sus alegaciones. En particular, se echa en falta cualquier requerimiento para la toma en consideración por las Diputaciones Forales (que alcanzaría a sus respectivos sectores públicos forales).

- b)** En línea con lo anterior, no consta, tal y como se ha venido haciendo durante esta X Legislatura ninguna actuación de información pública en general del anteproyecto. En tal sentido, tomando en cuenta el artículo 8.1 de la citada Ley 8/2003, se estima oportuno que el expediente reflejase una elemental consideración de las razones por las que no se ha promovido tal información pública (en la medida que el anteproyecto tiene una repercusión medioambiental evidente, se estima que hubiese sido procedente, a fin de promover opciones o soluciones insertables dentro del marco competencial de la CAE)
- c)** Queda constancia de que se ha requerido Informe a la Junta Consultiva de Contratación sin que, habida cuenta de la información incorporada, se haya emitido ni en el plazo correspondiente, ni posteriormente, el Informe requerido o pronunciamiento acerca de su improcedencia. En este sentido, consideramos que, cuando menos y sobre la base del Informe 8/2015 de este órgano de fecha 2 de junio de 2015 emitido en relación al posterior Decreto 178/2015, cabría haber efectuado una elemental reflexión acerca de su adecuación.
- d)** Resulta también, relevante la ausencia de referencias que evidencien la eventual intervención activa por parte de los Departamentos de la estructura del propio Gobierno Vasco que tienen atribuidas áreas de evidente importancia en la norma proyectada. En este sentido, aun cuando por razón del ámbito de aplicación esta participación cabría entenderla respecto al Decreto 178/2015; no puede olvidarse que la perspectiva de abordar un futuro proyecto de ley ofrece la posibilidad de que se aporten propuestas de contenidos más amplias que las que una norma reglamentaria permite.

Así, queremos aludir de forma singular a la Viceconsejería de Administración y Servicios de este Departamento de Hacienda y Finanzas⁴; sin perjuicio de otras áreas de actuación que se veán, igualmente, fuertemente implicadas en la implementación de las medidas que se contemplan⁵, tales como infraestructuras del transporte y puertos (de titularidad de la CAE, incluidos los deportivos), administración educativa, medios para la administración de justicia, centros sanitarios, seguridad...

Constatándose que, al menos, el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial (DMAPT) que ha formulado observaciones lo ha hecho como respuesta a una comunicación previa del órgano promotor, nos limitaremos a dejar constancia de la falta de evidencia material respecto a la colaboración que pueda haberse verificado. En cualquier caso, la documentación del expediente, en particular la Memoria económica, no ofrece una visión detallada de lo que, al menos de forma aproximada, va a suponer la eventual repercusión de este anteproyecto sobre esta Administración.

- e) El expediente incluye un escueto informe de impacto en la empresa, tal y como exige el artículo 6 de la Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco⁶, que incluye el informe de cargas administrativas⁷, en el que se concluye que *“no se contemplan cargas ni impactos en las empresas del sector que se deriven de la aprobación de la Ley proyectada”*. Bien entendido que, el objeto de esta regulación se inscribe en el marco de la actividad emprendedora, cabe concluir que tal conclusión no ha contemplado la eventual implicación del sector empresarial público que se ve concernido en el ámbito subjetivo del anteproyecto.

⁴ Que, entre otros, desempeña las funciones en relación a los inmuebles de gestión centralizada y multidepartamentales, incluida la gestión energética, servicio de supervisión de proyectos, inspección técnica y control de calidad y seguimiento de certificaciones (aun remitiéndolo a la normativa en materia de contrataciones) y en parque móvil, a través de la Dirección de Recursos Generales; así como las relacionadas con el Patrimonio de Euskadi y en materia de contratación que ejerce a través de la Dirección de Patrimonio y Contratación (en particular detalladas en el Decreto 192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda y Finanzas)

⁵ Cuestión que nos obliga a adelantar la ausencia de referencia a cuál sea el alcance adicional que el anteproyecto analizado implanta respecto al actual marco normativo ya vigente en esta Administración de la CAE, por razón de la normativa básica estatal y, particularmente el Decreto 178/2015.

⁶ *Que en su apartado 2 expresa que dicho informe “será preceptivo en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general...”*

⁷ El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 28 de diciembre de 2010, por el que se aprueban las instrucciones de tramitación de disposiciones de carácter general, en el que, entre otras consideraciones, se establece que la memoria sucinta, que se prevé en el artículo 10 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, ha de incluir una referencia expresa a la incidencia de las cargas administrativas que supondrá el proyecto de norma, a fin de evitar que la nueva regulación añada trabas innecesarias

A2) A los efectos del presente Informe debe destacarse como Documento de referencia la Memoria económica que debe acompañar el anteproyecto, prevista tanto en la legislación propia de control económico de esta Administración⁸, como en la Ley 8/2003, de procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general⁹.

De hecho, sin perjuicio de las obligaciones vigentes al respecto, la próxima entrada en vigor de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común y de las Administraciones Públicas añade a los efectos de la actividad regulatoria de las Administraciones Públicas, la estimación de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en la cuantificación que se vaya a efectuar (artículo 129.7).

A.2.1. En el caso de la Memoria económica que acompaña al anteproyecto¹⁰ apuntamos ya en este momento el limitado detalle con el que se ofrece la visión económico-presupuestario derivada del anteproyecto analizado, en el que, no obstante otro tipo de información general incorporada a esta Memoria, en cuanto a la requerida visión económico-presupuestaria se limita a ofrecer una síntesis general de las medidas generales, la tipología de actuaciones, objetivos a 2025 y estimaciones globales de algunas inversiones y ahorros proyectados a esa fecha de 2025.

En concreto se ofrece una cifra del eventual ahorro previsto¹¹, una estimación global a 2025 por 461 millones de euros, una estimación de ahorro anual de 119 millones de euros (sin que se ofrezca una elemental progresión temporal por razón de la paulatina implantación de los instrumentos de ahorro). A este respecto no se alcanza a clarificar el cálculo de un "ahorro anual factura" por 119 millones de euros a partir de una factura anual actual de 274 millones de euros y una previsión de "factura anual" a 2025 de 261 millones de euros.

La limitada información que ofrece la Memoria económica junto con la ausencia de información acerca de la intervención directa de las Diputaciones Forales y de los órganos de esta misma Administración con responsabilidad en los elementos sobre los que se van a aplicar las medidas de eficiencia energética nos llevan a advertir

⁸ Se detallan en el apartado E.1, vertiente de Gasto de este Informe

⁹ Se detallan en el apartado E.1, vertiente de gasto de este Informe

¹⁰ En su esquema general y con la elemental adaptación al objetivo de que su alcance subjetivo llegue al conjunto de "Administraciones Públicas Vascas" que se define en, comparte un alto grado de similitud con la Memoria que acompañó a la tramitación del ulterior y vigente Decreto 178/2015.

¹¹ Se desconoce la base de la información para el momento actual por cuanto una de las previsiones del proyecto sería determinar el inventario del que se extraerán los datos para acometer tal cálculo.

que la limitada visión que se ofrece desde la perspectiva económico-presupuestario no alcanza a dar cumplimiento de las previsiones formalmente requeridas para estas Memorias, lo que conduce a la imposibilidad de conocer el efectivo impacto que vaya a tener respecto a los Presupuestos de cada una de las Instituciones implicadas (al menos, de cada uno de los niveles institucionales involucrados).

A.2.2. Un aspecto adicional acerca del que, en este sentido, debe abundarse es en la falta de una evidencia clara sobre cuál es el "plus" que este anteproyecto genera respecto a las Administraciones Públicas llamadas a su cumplimiento. Así, más allá de las obligaciones contempladas, la implementación de algunas medidas específicas ya viene impuesta por la normativa ya vigente de forma que, el efectivo impacto económico-presupuestario de este anteproyecto debiera contemplarse desde la consideración de cuáles son los aspectos agregados por la norma proyectada a los que se verán obligadas las Administraciones Públicas Vasca de forma adicional a las previsiones normativas ya vigentes.

En este sentido, y en lo que a esta misma Administración respecta, debe aludirse al reiterado Decreto 178/2015, de 22 de septiembre, sobre sostenibilidad energética del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que entró en vigor el 15 de octubre de 2015 y que contemplaba, para el ámbito de la Administración general, administración institucional y sector público de la CAE, buena parte de las medidas que ahora se reiteran en el anteproyecto. La vigencia de este Decreto que, en parte, articulaba la implementación de las medidas derivadas de la trasposición por el Estado de las Directivas de la UE.

De hecho, al margen de la extensión a otras Administraciones Públicas, la ausencia de una identificación clara de cuáles sean los aspectos de contenido respecto de los que este anteproyecto resulta "mucho más ambicioso" que los que la norma reglamentaria vigente ya impone, dificulta la estimación real de los costes adicionales que suponen para esta Administración (bien entendido que la elevación a rango de Ley de los mismos supone que ya no sea el Ejecutivo el que, dentro del marco legal vigente, pueda modular la implantación de esas medidas en su ámbito).

A este respecto y aun cuando una vez que pueda ser aprobado por el Parlamento Vasco será esta instancia la que conforme a sus facultades atribuya fuerza legal al proyecto elaborado por el Ejecutivo, en la actual fase de tramitación del expediente en el seno del propio Ejecutivo, ha de insistirse en la falta de un conocimiento elemental acerca de la repercusión derivada respecto a los otros dos niveles institucionales de Euskadi que puedan derivarse de la adopción de este anteproyecto de Ley.

En este sentido, aun desconociéndose en detalle, se puede constatar que tanto las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos como ciertos Ayuntamientos (que, además de sus propias iniciativas son destinatarios de ayudas forales para los mismos objetivos del anteproyecto) vienen acometiendo diversas medidas para la mejora de la eficiencia energética de sus edificios, parque móvil y resto de instalaciones de su titularidad. Entendemos que, hubiese sido oportuno un mayor detalle y concreción de tales repercusiones y de los costes derivados previsibles tomando en consideración las obligaciones establecidas y una elemental puesta en conocimiento del actual estado de la cuestión.

A.2.3. Así las cosas, se entiende que la Memoria económica que acompaña al anteproyecto debiera haber analizado con un mayor grado de concreción el conjunto de costes derivados de su implantación. Tales costes, no pueden limitarse a las inversiones que van a posibilitar un eventual ahorro de la "factura energética" sino que debiera reflejar los costes derivados del conjunto de obligaciones administrativas derivadas de la misma, implicando, en todo caso, la perspectiva del ámbito subjetivo con el que se conforma el anteproyecto.

En concreto se identifican como eventuales medidas que vayan a generar un coste administrativo:

- Estudio sobre sostenibilidad energética (artículo 7). En este punto, se recuerdan las alegaciones del DMAPT no tomadas en consideración acerca de la procedencia de implementar este Estudio en diversos instrumentos de ordenación.
- Comisiones para la sostenibilidad energética (artículo 9). Sin que conste ninguna alusión a las mismas y, aun cuando pueda presuponerse su constitución en el seno y con medios de cada Administración constituye una obligación acerca de cuyo coste debiera haberse reflejado una elemental previsión (en el caso de esta Administración, sin perjuicio o con remisión a lo que ya contempla el Decreto 178/2015)
- Inventario (artículo 10); sin que conste ninguna estimación acerca del impacto derivado de su creación y costes de gestión derivados del mantenimiento y actualización. En el caso concreto de esta Administración, habida cuenta que el Decreto 178/2015, preveía este inventario en su artículo 13, hubiese resultado oportuno reflejar cuál sea el actual estado acerca del mismo; particularmente de si se ha dado cumplimiento al mandato de que estuviese realizado en el plazo

de seis meses desde su entrada en vigor (plazo conuido en abril de este año), posibilitando conocer un coste orientativo de su elaboración y puesta en marcha en otros niveles y de información conforme a la que ahondar en las previsiones de costes de implantación de las medidas materiales contempladas en el ámbito de esta Administración.

En cuanto a este Inventario añadiremos que, en cuanto el ámbito objetivo alude, también a instalaciones, cabe pensar que la sola referencia a edificios en cuanto al inventario (limita el concepto de instalaciones solo a las de alumbrado), puede conducir a un inventario con elementos no contemplados y sí sujetos al ámbito de la futura Ley, se sugiere su corrección.

Finalmente, aprovechamos este apartado para señalarque, habida cuenta que en el párrafo 4 se prevé la información pública de estos inventarios y su información asociada puede resultar una carga no justificada para el resto de Administraciones la previsión de que sean facilitados a Gobierno Vasco, cuando este extremo conlleve algo más que la mera comunicación de tal puesta a disposición.

- Mecanismos de control de consumos (artículo 11). La ausencia de referencias impide conocer y estimar si los contadores específicos a los que se alude deberán ser sufragados por el titular del contrato y su eventual coste.
- Auditorías energéticas (artículo 12). Se trata de un instrumento cuya formulación en el ámbito de las AAPP Vascas va a derivar de la implantación de esta Ley. Su configuración normativa básica, referida al ámbito empresarial, viene establecida por el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se traspone a Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, dictado con carácter básico. La previsión del anteproyecto de Ley contempla que las entidades sujetas a su ámbito de aplicación dispondrán de esta Auditoria en el plazo de tres años, debiendo renovarse cada seis años (12.5). Sin perjuicio de lo que el Decreto 178/2015 en su artículo 17 prevé en similares términos (por cuanto el anteproyecto varía alguno de sus enunciados ampliando los

contenidos de la auditoria energética) para la Administración de la CAE, es necesario acometer la estimación de costes para el resto de destinatarios en los términos formalmente requeridos.

- Planes de actuación energética u hoja de ruta (artículo 13). Nuevamente, se trata de una previsión recogida en el Decreto 178/2015 (artículo 15) y, la sola extensión a otras Administraciones Públicas, determina la necesidad de que la Memoria estimase este coste agregado acerca del que no se expresa nada.
- Planes de movilidad urbana (artículo 22). Se trata de una obligación específica impuesta a los Municipios de la CAE que agrega un grado de detalle que no alcanzan otras previsiones destinadas a la propia Administración de la CAE. De hecho, resulta llamativo y, de alguna manera suscita cierto desequilibrio su imposición legal a todos los Municipios con una población superior a 5.000 habitantes, obviando una mención legal acerca de un instrumento equivalente a nivel foral y/o autonómico que permita concebir una planificación de movilidad coherente para tales ámbitos territoriales. De alguna manera, las características socio-geográficas de Euskadi llevan a pensar que la existencia de conurbaciones y comarcas con un alto grado de integración permitirían generar economías de escala a tales niveles. No obstante la necesaria reflexión acerca de esa omisión, en cuanto al contenido del anteproyecto se señala que como tal obligación debiera ser objeto de un análisis económico presupuestario más detallado que garantice en qué medida este deber municipal cuenta con la suficiencia financiera necesaria, no solo para su formulación (que en sí representa un coste) sino para la eventual implementación de los contenidos que se le requieren (en el plano jurídico, se trata de un caso en el que se rebasa el ámbito estricto de la energía y que, carece de un elemental contraste con las disposiciones de la reciente Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi).
- Informe bianual relativo a la implantación de medidas (artículo 23). Esta previsión se inscribe como una medida adicional a la publicidad de medidas e implica, asimismo, "la elaboración de bases de datos electrónicas de fácil acceso al público a través de redes públicas de telecomunicaciones". Al margen de las obligaciones derivadas de la vigente legislación sobre transparencia e información pública a la ciudadanía, la forma en la que se concibe esta previsión

necesariamente conlleva unos gastos asociados que no han sido estimados.

- Plan de formación del personal gestor y técnico relacionados con la compra, mantenimiento y utilización de instalaciones consumidoras de energía sobre técnicas de ahorro y eficiencia energética y energías renovables (artículo 24). Se impone como una obligación a todas las Administraciones sujetas al ámbito de esta Ley por lo que, habida cuenta la extensión contemplada requerirá recursos públicos adicionales no solo por la formulación del correspondiente plan sino, fundamentalmente, por las medidas de implementación para su cumplimiento. Aun cuando podía haber sido concebido como una medida ligada al derecho general de formación del personal empleado, para lo que podría haberse expresado como un contenido necesario inserto en los planes generales de formación del personal que cada Administración tenga adoptado; el enunciado legal le otorga una singularidad expresa a este plan. Más allá de la ausencia de explicación acerca de su razonabilidad (incluida la perspectiva de eficacia y eficiencia de tal mención singular) no consta en el expediente reflejo de costes de esta medida. Por otra parte, en cuanto la previsión legal no contempla secuencia o sucesión del mismo queda planteada la duda de la actualización de ese Plan, su seguimiento y la pervivencia en el tiempo de la lógica actualización de conocimientos.

A.2.4. Para concluir este extenso bloque relativo a la limitada efectividad de la Memoria económica, hemos de aludir a lo que entendemos constituye otro elemento que debiera haberse estimado. Se trata de la toma en consideración conjunta de todos los citados instrumentos administrativos que van a ser requeridos a los sujetos destinatarios de la norma proyectada a fin de dar respuesta a la necesidad de su imposición más o menos generalizada desde un prisma de la propia eficacia y eficiencia de la misma norma.

En este sentido, se apunta tanto la acumulación de instrumentos desde la perspectiva de propiciar una gestión de la materia que integre los diferentes requerimientos, todo ello conforme a una cadencia temporal acorde con la obtención de datos y análisis de los mismos.

A este respecto, de cara a la implantación de las previsiones de la norma legal proyectada, cabe advertir que las fechas de formulación del conjunto de

instrumentos burocráticos contemplados pudieran formularse con tal visión de conjunto evitando costes económicos no deseables.

Así, de forma no exhaustiva, apuntamos:

- Comisión de Sostenibilidad. Se crea en el plazo máximo de un año y debe aprobar el inventario dentro del mismo plazo de un año, esto es, cabría que adoptase tal acuerdo en su misma constitución, no obstante constituir un documento de referencia que requeriría su elemental debate. En el caso de la Administración de la CAE el plazo se fija en seis meses, obviando que se trata de una obligación que ya el Decreto 178/2015 estableció en esos seis meses, sin darse cuenta del tema.
- Planes de actuación energética respecto a Auditorías energéticas. Obviando el tiempo transcurrido para la Administración de la CAE que ya viene obligada por el Decreto 178/2015, fija para las Auditorías un plazo de tres años y para los planes, entre seis meses y dos años. Teniendo en cuenta que la propia Auditoría incorpora un diagnóstico, recomendaciones y resumen ejecutivo, entre otros contenidos, parece que el instrumento de planificación debiera ser subsiguiente a tal análisis o, en cualquier caso, con una integración más consistente entre ambos (en ese mismo sentido, una mejor integración para los planes de movilidad urbana –artículo 22- que en el plazo de dos o tres años deberán, según tamaño, aprobar los Municipios de más de 5.000 habitantes).

A.3) Un aspecto de esta visión conjunta del expediente al que tan solo haremos alusión por cuanto el anteproyecto de Ley sometido a nuestra consideración será objeto de dictamen por la COJUA es el relativo al marco competencial conforme al cual se aborda la iniciativa. El Informe Jurídico departamental aborda esta cuestión centrándola en las competencias que las Instituciones Comunes de la CAE ostentan en “materia de régimen energético y de manera más residual en materia de medio ambiente” (artículos 11.2, apartado c y, 11.1, apartado a del EAPV, respectivamente).

Sin negar la relevancia del área energética para fundamentar el impulso del anteproyecto, cabe apuntar que su exclusiva referencia se muestra, al menos, en algunas previsiones limitada como fundamento único de la iniciativa. De hecho, en el caso del Decreto 178/2015, se aludía como fundamento “de manera preferente – a-, la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno ...”, bien es cierto que conectándolo con los citados títulos competenciales de régimen

energético y medio ambiente¹². En términos similares, la fundamentación de las actuaciones de los órganos del Estado en esta materia que acuden a ambos títulos competenciales; además del recurrente de la planificación general de la actividad económica.

Así, queda advertido por el Departamento de Medio Ambiente y Planificación Territorial, fundamentalmente, en lo relativo a las previsiones que inciden en el ámbito de ordenación del territorio. Igualmente, cabe mencionar la interacción de otros títulos en las previsiones relativas a la actividad contractual de las Administraciones Públicas (artículos 15 y 16), las "restricciones a la circulación de vehículos" (artículo 21) y los "planes de movilidad" (artículo 22) o en relación a la cuestión de la capacidad de autoorganización y gestión de bienes propios por parte tanto de las administraciones forales como municipales¹³.

A.4) Conforme se ha apuntado, en cualquier caso, el anteproyecto ha de ser, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.1.a) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, sometido con carácter previo a su aprobación, al dictamen de dicha instancia consultiva, instancia que abordará el contraste jurídico que le compete.

En relación con ello, ha de recordarse que, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico-normativo y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (*según redacción dada por la Disposición final primera de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi*), deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones normativas como consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (*para cuyo cumplimiento habrá de estarse a lo prevenido en la circular nº 2/2005, de 14 de octubre de 2005, del Director de la Oficina de Control Económico*).

III ANÁLISIS:

B) Del texto y contenido

B.1) Examinada la documentación relacionada cabe apuntar como la ausencia de una memoria sucinta de elaboración del procedimiento dificulta la motivación de las

¹² Dictamen 112/2015 de COJUA de 31 de julio de 2015, en relación al Proyecto de Decreto, posteriormente aprobado como Decreto 178/2015.

¹³ No cabe obviar que el anteproyecto incide de forma directa sobre aspectos relativos a los bienes forales y municipales (inmuebles o muebles como los vehículos) que constituyen parte del núcleo de las competencias propias de esas Instituciones forales y municipales (artículo 7.7 LTH y 9.5 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi).

opciones adoptadas y, de forma particular la fundamentación de la limitada aceptación de las alegaciones formuladas en la sustanciación del mismo. En particular, debemos subrayar las formuladas por EUEL y su limitada acogida en el texto remitido para nuestra consideración. En este sentido, en la medida que la naturaleza y alcance proyectado para la norma tiene pleno alcance para los Municipios Vascos se entiende que, de cara a su ulterior tramitación esta falta de justificación deberá ser incorporada en el expediente.

B.2) En relación con el texto se estima oportuno plantear algunas cuestiones y efectuar las siguientes consideraciones (sin reiterar las cuestiones que han sido apuntadas anteriormente al hilo de otras cuestiones analizadas):

a).- El artículo 2 aborda el “ámbito subjetivo” de la Ley proyectada. Como se ha apuntado, uno de los aspectos determinantes para su planteamiento ha sido la extensión al resto de Administraciones territoriales Vascas y sus respectivas entidades “vinculadas o dependientes” de las previsiones que a este respecto ya fueron planteadas para la Administración de la CAE por el Decreto 178/2015. En la configuración que en el último párrafo de este artículo se hace de las “entidades vinculadas o dependientes” se hace remisión al artículo 7.4 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco¹⁴(LPOHGVPV). Esta remisión resulta inexacta por cuanto tan solo corresponde al ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, no siendo adecuada a los otros ámbitos (foral y municipal) para los que, también, se pretende su alcance.

En este sentido, existiendo diversas posibilidades, a fin de poder propiciar un alineamiento con eventuales normativas futuras se sugiere acomodar la propuesta deseada sobre la base de las previsiones que contempla el Proyecto de Ley de organización y funcionamiento del sector público vasco que actualmente se encuentra en el Parlamento Vasco, en concreto el artículo 4. Esta sugerencia no implica acoger el total de previsiones contenidas en ese artículo sino el enunciado que corresponde a aquellas que se prevén en este anteproyecto. En concreto, las Administraciones públicas vascas territoriales; esto es, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las Administraciones forales de los Territorios Históricos y las Administraciones locales; sus respectivas Administraciones institucionales y los demás entes instrumentales

¹⁴ Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba su texto refundido.

dependientes y adscritos a las mismas; y, también, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Esta propuesta nos lleva a plantear la ausencia de una elemental reflexión acerca de por qué no se ha planteado la extensión de este anteproyecto a lo que podemos denominar "sector público vasco mixto". Con esta denominación atípica se quiere aludir a lo que el citado Proyecto en el Parlamento define en su artículo 4.3, extensible, incluso a los previstos en el 4.4. En todo caso, aún cuando pueda tener un impacto elemental en la mayor parte de estas entidades, toda vez que se trabaja sobre un anteproyecto de ley se entiende oportuno ese análisis elemental que permita articular, al menos, previsiones acordes a esta tipología que posibiliten su eventual incorporación al ámbito previsto¹⁵.

b).- El artículo 3 del anteproyecto acota el ámbito objetivo que se prevé. La perspectiva de la previsión se liga al título jurídico de propiedad, con una previsión expresa a que el alcance se extienda "aun cuando estuvieran arrendados a terceras personas".

Las posibilidades de que la Administración pueda detentar diversos bienes de una forma relativamente permanente no se limitan a la propiedad. Cabe valorar una reflexión desde la perspectiva patrimonial para efectuar una delimitación objetiva, tal vez, más acorde con los objetivos del anteproyecto (así, existen otros títulos jurídicos patrimoniales diferentes al de propiedad que posibilitan una duración prolongada en el disfrute de bien que debieran ser objeto de toma en consideración a fin de propiciar el cumplimiento de los objetivos de la Ley o evitar efectos no deseados por una configuración legal no ajustada a las previsiones iniciales¹⁶). En este sentido, se hace indispensable un conocimiento más exhaustivo de la realidad jurídico-patrimonial de las entidades involucradas a fin de adecuar las medidas legales a los objetivos propugnados por el texto legal proyectado.

Una cuestión que, aun ligándose a la actividad contractual, podría merecer una previsión en este artículo es la relativa a la cada vez más frecuente práctica de "renting" u otras modalidades equivalentes de los

¹⁵ Por ejemplo y, entre otros múltiples ejemplos, dentro de esta categoría podría citarse por el interés que puede representar para este anteproyecto el Consorcio de Transportes de Bizkaia

¹⁶ Así, y a mero título de ejemplo, la consecuencia derivada respecto a los centros educativos de educación primaria que son sufragados en todos sus aspectos por la Administración de la CAE correspondiendo su titularidad jurídica registral al Municipio o, diversos centros sanitarios que incluso tras los años desde que se verificó la transferencia se encuentran en una situación registral no acorde con la realidad.



que se derivan significativos consumos energéticos (vehículos, previstos en el ámbito de aplicación, bajo la fórmula "parque móvil" y soportes informáticos, bajo la expresión "instalaciones", sin perjuicio de otros que puedan existir y que debieran ser objeto del análisis que se propone).

En este sentido, en la medida que los correspondientes artículos del anteproyecto (en particular 15 y 16) al incorporar previsiones para alcanzar los objetivos del anteproyecto en la actividad contractual, al aludir al concepto "adquirir" (en concreto el artículo 16.2, si bien, también en el artículo 19.2) parece no alcanzar estas otras fórmulas, cuyo uso se va generalizando, mediante las que las diferentes administraciones y resto de sujetos a los que alcanza esta Ley se proveen de tales medios.

El contraste con las aplicaciones presupuestarias evidencia la relevancia de estos costes y, como en la medida que pueden generar un ahorro repercutible en la factura energética de los mismos debieran haber sido objeto de toma en consideración, en cuyo caso, este artículo 3, referido al ámbito objetivo, entendemos que debiera reflejar su alcance a estas otras modalidades (así, como los procedentes ajustes en los artículos aludidos referidos a la actividad contractual, a fin de que también acojan la implementación de los correspondientes criterios en los procesos de contratación de estos arrendamientos).

c) El artículo 8 del anteproyecto alude a la "coordinación de la política de sostenibilidad energética". A este respecto alude al departamento con competencia en materia de energía del Gobierno Vasco para el ejercicio de las facultades de coordinación general atribuyéndole cometidos que, en su formulación, entendemos corresponden o pueden corresponder a otras instancias; tal y como apuntan las alegaciones del DMAPT entendemos más acorde que, sin perjuicio de que tal instancia pueda adoptar efectivamente alguna de esas medidas, tales cometidos vengán precedidos de la expresión "propuesta de ..." o equivalente.

A este respecto, nada se cita acerca de si alguna de estas actuaciones implica nuevos cometidos de los que ya desempeña el DEC, al que le viene atribuida el área de energía, y en tal caso se va a requerir de nuevos medios humanos o materiales para su desempeño. Entendemos que la omisión de referencia a este respecto supone que serán asumidos con los medios actualmente asignados.



Finalmente, entendemos que las previsiones contempladas no se ajustan adecuadamente al concepto de "coordinación", menos aun cuando nos encontramos con un anteproyecto de ley cuyo alcance rebasa el de esta Administración¹⁷.

d) En la referencia anterior a las cargas económicas derivadas de este anteproyecto ya se ha aludido a la falta de referencias acerca de las "comisiones para la sostenibilidad energética". En este sentido, aun cuando se configure el precepto como una previsión de mandato para su futura constitución, se ha apuntado la necesidad de una elemental referencia en el expediente, en particular, por razón de las funciones concretas que se les prevén¹⁸.

e) Los artículos 15 y 16 contemplan diversas previsiones relativas a la actividad contractual; sin perjuicio de lo apuntado anteriormente acerca de su eventual alcance y, toda vez que, aun habiéndose solicitado no consta informe de la Junta Consultiva de Contratación por el transcurso del tiempo para su emisión, entendemos oportuno aludir al Informe que en relación al Decreto 178/2015 sí emitió órgano consultivo (teniendo bien presente que nos hallamos ante un Proyecto de norma legal y con un ámbito subjetivo más amplio).

- Conforme se ha apuntado, no obstante la ausencia de emisión del Informe requerido a esta instancia, entendemos relevante el Informe de Junta Consultiva 8/2015, de 2 de junio (emitido en la tramitación del posterior Decreto 178/2015). Remitiéndonos a sus consideraciones destacamos como se concluye la dificultad de implementar la valoración del origen renovable de la compra de energía eléctrica y la eventual articulación de las medidas previstas en relación a la renovación de instalaciones, equipos, flotas y vehículos, a través de su previsión en los Pliegos de Bases Técnicas.

¹⁷ Sin perjuicio de lo que apunte la COJUA a este respecto, aludimos a la STC 32/1983, de 28 de abril, que si bien referida al concreto ámbito de la coordinación general de la sanidad desde la competencia estatal ilustra adecuadamente la perspectiva de la coordinación como principio de organización administrativa, en la que la configura como: "**La coordinación persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto del sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían respectivamente la realidad del sistema**"; a tal efecto, "**la coordinación general debe ser entendida como la fijación de medios y de sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades ... en el ejercicio de sus respectivas competencias -o funciones- de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema**"

¹⁸ Acerca de este extremo, nuevamente se plantea una duda acerca de cuál es el impacto de estas previsiones funcionales respecto a la facultad de autoorganización de los órganos forales.

En cuanto a la limitación a los contratos sujetos a regulación armonizada, consideramos oportuno apuntar que la Directiva 2012/27/UE a la que sistemáticamente se viene acudiendo en este anteproyecto y que se apunta en el Informe, distingue los Estados miembros, como sujetos directamente vinculados a la misma, de los organismos públicos regionales y locales respecto de los que se plasma el mandato a los Estados miembros para que promuevan las medidas contempladas¹⁹, por lo que sería oportuno analizar la extensión de las medidas previstas a otros contratos (así lo apunta también el DMAPT). Esta extensión posibilitaría un alcance más amplio que su sola aplicación a los contratos sujetos a regulación armonizada.

- Un referente normativo en esta materia lo constituye la previsión de la Disposición Adicional decimotercera de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Las previsiones ahí contenidas vienen dirigidas a los órganos de la Administración estatal; no obstante lo cual, cabe valorar una previsión normativa propia que alcance, al menos, mecanismos aproximados. En particular, las previsiones impulsadas desde los párrafos 3 y 4 de la citada disposición.
- Efecto contable de inversiones. El impulso de las medidas contractuales aludidas deben, en todo caso, enjuicarse con una estimación adecuada de su efecto contable. Así, y aun cuando se trata de un aspecto no directamente contemplado en el Anteproyecto, se apunta la necesidad de que las limitaciones en eficiencia energética que se promuevan para inversión en instalaciones eficientes en inmuebles incorporen necesariamente la toma en consideración del efecto derivado en el déficit público. Evidentemente, queda fuera del campo del legislador vasco la configuración de los conceptos del déficit público (sujeto en mayor parte al criterio de los órganos de la UE), si bien podría haber sido objeto de análisis alguna mención que promoviese, precisamente, las iniciativas que coadyuvando a la eficiencia energética en edificios no se vean obstaculizadas por la exigencia de cumplimiento del déficit presupuestario, en concreto, la promoción de proyectos en los que el riesgo corre por cuenta de la adjudicataria de servicios energéticos (concesiones, cuando los equipos más eficientes son propiedad de la adjudicataria o algunas actuaciones en colaboración público-privada sujetas a diversos condicionantes).

¹⁹ Artículo 6.3 de la Directiva 2012/27/UE

- Contratación pública innovadora. Dentro de este ámbito, y a título de sugerencia, se apunta la oportunidad de que, precisamente, al articularse un texto con rango legal se pueda contemplar la posibilidad de incorporar alguna previsión que promueva la “compra pública innovadora²⁰” en relación al ámbito de aplicación del anteproyecto. Más allá de tratarse de una posibilidad que contribuye como factor tractor en el ámbito de I+D+i (en el que el propio DEC tiene un amplio marco de actuación) se considera un instrumento para la mejora de la calidad y precio de las ofertas, esto es, de la eficiencia en la satisfacción de los servicios públicos encomendados²¹.

f) Aludiremos a la sección 3ª del anteproyecto “Transporte y movilidad” en su conjunto, apuntado lo siguiente:

- La referencia a “fomentar” junto a la genérica a “dependencia de los transportes” del artículo 19.1, sugerimos que se acote al ámbito específico al que alude el propio título de este artículo 19 “vehículos propios” (en su caso, tal y como se ha apuntado respecto al “renting”, extensible a todos los vehículos que se destinen al ejercicio de los cometidos propios de la entidad sujeta a esta Ley). En la medida que el término “fomentar” frecuentemente seliga al impulso respecto a terceros, con esta precisión se quiere acotar que esta Ley pueda extender su ámbito a otros vehículos al margen de su configuración general.
- Causa extrañeza la excepción a las eventuales funciones medioambientales que puedan fundamentar la exclusión del artículo 19.3, en la medida que no se hace ninguna consideración a este respecto, la apuntamos para que, se aporten tales consideraciones que las respalden evitando desigualdades no fundamentadas en la propia Ley.
- En el 19.5, la formulación del precepto no contempla que los edificios de titularidad pública prevean un aparcamiento específico para vehículos eléctricos (tal vez se trata exclusivamente de aquéllos donde se ubiquen los puntos de recarga).

²⁰ En este sentido la Directiva 2014/24/UE (considerando 47)

²¹ Incorporado en el derecho estatal, entre otras previsiones, en el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)

- El artículo 20 implica una excepción al objeto y sujetos de la norma prevista en cuanto tiene otros destinatarios como son los prestadores de los servicios de transporte de viajeros y viajeras por carretera. Esta circunstancia no tiene un reflejo claro en el expediente, asimismo no ha sido analizada en relación a las implicaciones que conllevan para los particulares prestadores de tales servicios, ni en el Informe de impacto en la empresa.

En concreto, entendemos que las previsiones contempladas tienen incidencia en sendas Leyes del Parlamento Vasco, la Ley 4/2004, de 18 de marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera y la Ley 2/2000, de 29 de junio, de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros en Automóviles de Turismo.

Sin entrar en mayores consideraciones acerca de la forma jurídica mediante la que se pretende incorporar las obligaciones contempladas y demás implicaciones jurídicas (entre otras, la eventual necesaria intervención de las entidades representativas de los sectores afectados), al igual que otros aspectos enunciados debiera tener su toma en consideración en la correspondiente Memoria económica y en el Informe de impacto en la empresa.

g) El Capítulo III se dedica a los “Instrumentos voluntarios y fomento” acerca del que apuntamos:

- o El artículo 26 hace mención expresa a una facultad que, sin necesidad de que medie el pronunciamiento legal, puede articularse por parte de esta Administración. Así, toda vez que han quedado acreditadas sus facultades en el área de energía, no se advierte obstáculo para que, dentro del marco legal actualmente vigente en materia subvencional²², se pueda abordar tal previsión sin que se requiera ninguna mención como la propuesta en un artículo legal.

Al margen de su posible supresión por no incorporar contenido adicional al régimen vigente, se evidencia que la mención a Administración de la CAPV en este artículo, no concuerda con la sistemática llamada que se viene haciendo al Departamento

²² En la actualidad, conformado básicamente por los preceptos normativos básicos dictados por los órganos del Estado (fijados en la Ley 8/2003, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006) y el Título VI de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (Texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre).

competente en materia de energía a lo largo del texto, incluido el párrafo 2 de este mismo artículo 26. En este mismo sentido, igual comentario merece esta previsión del artículo 26.2 pues, constituyendo los premios una modalidad de la actividad de fomento que ya ejerce el órgano aludido la previsión de este párrafo no tiene otro efecto que el meramente estético.

En este orden de cosas, aun tratándose de una cuestión, en principio, actuable sin necesidad de que medie una intervención legislativa concreta, nos parece oportuno apuntar la idoneidad de haber efectuado un contraste con las líneas de apoyo que desde la UE se vienen impulsando en este ámbito de Eficiencia Energética (dentro de la Estrategia Europa 2020 se integra en uno de los cinco objetivos estratégicos²³). Más allá de una mera cuestión de oportunidad, el análisis de los instrumentos bajo los que se configuran las ayudas europeas para estas iniciativas, pueden propiciar el emplazamiento en este texto normativo de aspectos concretos que redunden y fortalezcan la posibilidad de que las Administraciones Públicas Vascas y las entidades de su entorno conozcan y diseñen programas o medidas accesibles a tales ayudas.

Finalmente, la previsión de desarrollo reglamentario que se contempla en este artículo 26, párrafo 1, entendemos que, se refiere al desarrollo reglamentario de las previsiones concretas de esta Ley, allá donde proceda por cuanto muchos de sus contenidos parecen ser directamente aplicables, y no una eventual configuración específica reglamentaria para el otorgamiento de ayudas en este ámbito que no alcanzamos a ver qué alcance tendría fuera de los desarrollos reglamentarios que puedan abordarse por esta Administración en la materia subvencional.

- o Acerca del artículo 27 y a los efectos que a esta Oficina interesan, nos limitaremos a señalar que, no obstante configurarse en el marco de un texto legal, los denominados "Acuerdos voluntarios" que prevé resultan inconcretos. En particular, no se alcanza a conocer entre qué

²³ El artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que introduce la base legal específica para el campo de la energía basada en las competencias compartidas entre la UE y los países miembros. La Estrategia EUROPA 2020 (COM(2010) 2020 final COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPA 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador) contempla cinco Objetivos estratégicos. En concreto el 3 "Cambio climático y sostenibilidad energética", se configura con tres objetivos específicos: 1) Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (o un 30% si se dan las condiciones) menores a los niveles de 1990; 2) 20% de energías renovables y, 3) aumento del 20% de la eficiencia energética

sujetos van a suscribirse y cuál de ellos va a instar el cumplimiento obligado de los mismos, así como las medidas para obligar a tal cumplimiento.

En tal sentido, en la medida que tales acuerdos versan sobre medidas adicionales a las exigidas por esta Ley, se entiende que la posibilidad de destinar recursos económicos a tales medidas adicionales quedará en todo caso, siempre sujeto no solo a las disponibilidades económicas sino también a que se venga dando cumplimiento efectivo a los mandatos legales vigentes que se implanten por ésta u otras Leyes acerca de la materia.

h) Finalmente, se advierte que la previsión contenida en la Disposición adicional cuarta del anteproyecto (de ahí, suponemos, su ubicación), aun versando sobre el área energética, teniendo en cuenta el enunciado que propone resulta ajena al objeto y ámbito de esta Ley. Esta previsión contempla una obligación dirigida a "las empresas distribuidoras de gas y electricidad" (no alcanza a las de combustibles) y les impone el deber de comunicar a los Ayuntamientos de la CAE una detallada información.

A nuestros efectos lo más relevante es la ausencia de mención acerca de esta previsión en el expediente, lo cual impide conocer su fundamento y razonabilidad, en particular en el Informe de impacto y de cargas administrativas a la empresa.

En este sentido, en la medida que la información requerida se venga ofreciendo a través de las páginas webs u otros organismos públicos no parece que la obligación que se pretende imponer tenga un fundamento especialmente sólido. Asimismo, el detalle que se prevé referido a "personas consumidoras", si bien nos suscita la duda de su correcto enunciado pudiendo pensar que se quería aludir a los consumidores que en el ámbito municipal estén sujetos a esta Ley, por otra parte, en la medida que tales consumidores formen parte o estén vinculados a la estructura municipal debería disponerse de tal información por su propia condición de consumidores.

Así las cosas, entendemos que el enunciado del precepto merece una reconsideración y, en todo caso, la correspondiente plasmación efectiva del impacto y cargas administrativas que se lleguen a imponer a las empresas sujetas a la obligación.

C) De la Incidencia organizativa.

En este apartado nos remitimos a lo apuntado en el apartado A.2.3 de este Informe, acerca de las Comisiones para la Sostenibilidad Energética. En todo caso, insistir en que las escasas previsiones que en el proyecto se ocupan de las citadas Comisiones, junto con la ausencia justificativa del expediente acerca de su necesidad, no permiten emitir juicio alguno sobre su razonabilidad organizativa, posible duplicidad de funciones o medidas para su fusión.

D) De la incidencia en aspectos de índole hacendística y de régimen económico financiero

Constatado lo anterior procede examinar los aspectos de índole hacendística y de régimen económico financiero que pudiera entrañar el proyecto examinado, esto es su posible incidencia en las materias propias de la Hacienda General del País Vasco identificadas en el artículo 1.2 del texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 17 de noviembre (TRLPOHGPV)²⁴.

En tal sentido puede concluirse que no se contempla una afección directa a las materias propias de la Hacienda General del País Vasco; si bien, se recuerda lo señalado acerca de la necesidad de abordar un análisis patrimonial más detallado de cara a la configuración objetiva del anteproyecto y las consideraciones efectuadas en relación a las previsiones en materia contractual (que, de alguna manera incluyen alguna mención a la afección del tratamiento contable de algunas iniciativas).

E) De la incidencia económico-presupuestaria

En este apartado corresponde examinar la potencial incidencia económico-presupuestaria para la Administración General de la Comunidad Autónoma, tanto en la vertiente del gasto como en la del ingreso.

1) Vertiente del gasto:

Para abordar este análisis se hace indispensable disponer de una Memoria económica que detalle las múltiples implicaciones que pueden derivarse de un texto normativo siendo éste el fundamento de la configuración normativa de

²⁴ El régimen del patrimonio; el procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria; el sistema de control y de contabilidad a que debe sujetarse la actividad económica de la Comunidad Autónoma; el de la contratación; el de la Tesorería General del País Vasco; la regulación de sus propios tributos y demás ingresos de derecho público y privado; el régimen de endeudamiento; el régimen de concesión de garantías; el régimen general de ayudas y subvenciones; el de las prerrogativas de la Comunidad Autónoma en relación con las demás materias de su Hacienda General; cualquier otra relacionada con los derechos y obligaciones a que se refiere de naturaleza económica, de que sea titular la Comunidad Autónoma de Euskadi

este instrumento indispensable para la conformación de un juicio acerca de esta perspectiva y la fundamentación de la toma de decisión por el órgano competente.

En este sentido, hay que recordar que el artículo 10.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General establece que:

“En el expediente figurará, igualmente, una memoria económica que exprese la estimación del coste a que dé lugar, con la cuantificación de los gastos e ingresos y su repercusión en los Presupuestos de la Administración pública, las fuentes y modos de financiación, y cuantos otros aspectos se determinen en la normativa que regule el ejercicio del control económico-normativo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. También evaluará el coste que pueda derivarse de su aplicación para otras Administraciones públicas, los particulares y la economía general”.

Incluso con anterioridad y manteniendo su vigencia, el artículo 42 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dispone que:

“Artículo 42.1.- ... una Memoria que como mínimo deberá contener los siguientes extremos:

- a) Cuantificación de los gastos e ingresos presupuestarios que ocasione su entrada en vigor con distinción de los que sean corrientes y de los que sean de operaciones de capital, e identificación del destino de dichos gastos o ingresos.*
- b) Financiación de los gastos presupuestarios con indicación de los recursos que se vean afectados y fuentes de financiación al margen de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.*
- c) Identificación de aquellos aspectos de la disposición que incidan o repercutan en materias propias de la Hacienda General del País Vasco y de régimen presupuestario, así como descripción de los antecedentes y justificación de la necesidad de la disposición.*
- d) Descripción del programa económico presupuestario en el que se inserta la disposición propuesta, con identificación de los objetivos, acciones e indicadores afectados por la entrada en vigor de la Norma y evaluación económica y social de su aplicación.*
- e) Evaluación del grado de ejecución y cumplimiento de los programas y de los objetivos perseguidos cuando se trate de una regulación dictada en desarrollo de los programas subvencionales, así como sobre las convocatorias de las subvenciones y éstas supongan una continuidad de las aprobadas en ejercicios anteriores.*

2. Cuando se trate de expedientes con repercusión presupuestaria, en tesorería y/o contabilidad, deberán acompañarse los documentos

contables que resulten oportunos de conformidad con la normativa aplicable.

3. Asimismo, se remitirán todos aquellos datos, informes, estudios que permitan conocer las líneas generales y los presupuestos jurídicos habilitantes de la regulación propuesta, y cuantos otros faciliten la emisión del informe”.

Examinada la documentación incorporada al expediente, se insiste en el limitado alcance que ofrece la Memoria económica que acompaña al anteproyecto, por cuanto, centrándose en planteamientos descriptivos generales acerca de la materia energética, efectúa un análisis de coste-ahorro en una visión global (sin, tan siquiera, establecer un detalle por cada nivel institucional), una elemental progresión en el ritmo de necesidades económico financieras, amortización de las inversiones verificadas, grado de ejecución necesario para que se puedan verificar los ahorros previstos un análisis de las previsiones de costes energéticos y, ninguna otra previsión acerca de las estimaciones de costes derivadas de los aspectos organizativos y singulares apuntados a lo largo de este Informe, incluida la ausencia de un análisis más detallado de algunas previsiones acerca del impacto en algunos ámbitos productivos (transportes de personas y proveedores de energía, en particular).

En cuanto se trata de un anteproyecto que contempla un alto grado de actuaciones administrativo-burocráticas para su cumplimiento y, sobre todo, una importante incidencia en las inversiones por parte del conjunto de las Administraciones Vascas involucradas, entendemos que la perspectiva económica y presupuestario-financiera resulta insuficiente en su formulación actual. Por ello se concluye la necesidad de que se aborde un planteamiento que aborde con un mayor grado de detalle y precisión la fundamentación de las medidas que se implementan y la estimación de los costes derivados de las mismas así como su financiación.

2) Vertiente del ingreso:

El planteamiento general de la Memoria económica abunda en los ahorros derivados de la implantación de las medidas. Este extremo no constituye en sí ingreso, sino una previsible reducción en los gastos derivados del abono en concepto de energía y combustibles. Tal y como se ha apuntado la Memoria económica resulta excesivamente escueta en la determinación de este extremo limitándose a ofrecer cifras globales, sin una elemental secuenciación temporal, diferenciación de ámbito institucional y concreción de los conceptos sobre los que se va a generar tal ahorro.

Por otra parte, y no constituyendo en sí tampoco ingresos, apuntamos que la Memoria económica alude al efecto de "generación de inactividad económica en la sociedad vasca" que se derivaría de la implantación de las medidas de este anteproyecto. Este impacto aun cuando pueda ser difícilmente estimable, consideramos que, cuando menos podría haber apuntado los sectores que vayan a verse beneficiados por tal implantación y cómo, en un mercado abierto en el ámbito europeo, puede concluirse tal efecto directo.

Al margen de lo expresado no se aprecia incidencia derivada de la regulación proyectada en la vertiente de los ingresos.

F) Impacto económico para otras Administraciones públicas, los particulares y la economía general

Se considera que ya se ha evidenciado la falta de una estimación mensurada de costos previsibles a los que se refiere este apartado. Como ya se ha apuntado anteriormente, resulta necesaria la incorporación en la memoria económica del expediente de los contenidos previstos en el art. 10.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre; esto es, la evaluación del coste que pueda derivarse de su aplicación para el resto de Administraciones públicas –al margen de la municipal-, los particulares y la economía general.

IV. CONCLUSIÓN:


En conclusión y sin perjuicio del detalle con el que se han argumentado las consideraciones expuestas:

- Se comprueba que el expediente sometido a nuestra consideración refleja un alto grado de seguimiento de las previsiones ya establecidas para el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi por el Decreto 178/2015, de 22 de septiembre. Esta circunstancia, sin embargo y habida cuenta el ámbito subjetivo proyectado, implica que su traslación respecto a otras Administraciones públicas vascas debieran incorporar su perspectiva, la adaptación y razonabilidad del conjunto de medidas proyectadas.
- No obstante las referencias a la regulación comunitaria y estatal que impulsan el ámbito concernido, el expediente no llega a una concreción evidente del impacto real derivado del anteproyecto más allá de aquella regulación. Este aspecto resulta determinante a la hora de estimar las efectivas necesidades presupuestarias derivadas de la implantación de las medidas proyectadas.

- Asimismo, en el plano de la propia Administración el anteproyecto evidencia una perspectiva fuertemente ligada al área energética y una escasa intervención e integración con el resto de ámbitos implicados (tanto en lo que a medio ambiente y planificación territorial respecta, como a los que corresponden a la gestión patrimonial, de los inmuebles, del parque móvil, transportes u otros ya señalados). Esta ausencia de perspectiva en el nivel de Gobierno supone una falta de integración con los instrumentos generales ya existentes con la consiguiente pérdida de eficiencia para las Administraciones implicadas.
- Se constata un gran volumen de requerimientos burocrático-administrativos derivados de la implantación de las medidas proyectadas. En este sentido, en la medida que es como consecuencia de este anteproyecto por lo que se imponen tales medidas, debieran haber sido objeto de una mayor reflexión y reflejo documentado en cuanto a su integración, sucesión temporal y, fundamentalmente, análisis de costes derivados de su implantación e implementación.
- En conjunto el expediente no ofrece una visión de conjunto suficientemente fundamentada ni una estimación de su repercusión en los Presupuestos de la Administración pública, las fuentes y modos de financiación, así como una elemental evaluación del coste que pueda derivarse de su aplicación para otras Administraciones públicas, los particulares y la economía general. Han de subsanarse dichas carencias.

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: FRANCISCO DE JAVIER LOSA ZIGANDA
Fecha de la firma: 02/06/2016 14:00:42

Validación de la firma:  Correcta

Firmante: Vaquero Manrique, Iñaki
Fecha de la firma: 02/06/2016 13:19:02
Validación de la firma:

Iñaki Vaquero Manrique
CONTROL ECONÓMICO NORMATIVO

VºBº Javier Losa Ziganda
DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO

**KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOAREN TXOSTENA, EUSKAL AUTONOMIA
ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN
ENERGETIKOARI BURUZKO LEGEAREN AURREPROIEKTUAREN GAINEKOA**

Tramitagune: DNCG_LEY_77255/2015_03

Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia-kontrolari eta kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legeak kontrol ekonomikoa eta araugintzakoa arautzen du, III. tituluko IV. kapituluan. Kontrol hori nahtaezkoa da, eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eginiko txostenaren bidez gauzatzen da.

Kontrol horretan sartzen da, ekonomiaren eta antolamenduaren alorretan fiskalizatzea Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoko organo ororen eraketa zein ezabaketa, bai eta organo horien aldaletak eta berregituraketak ikuskatzea ere.

Txosten hau egiteko, xedapen hauek hartu ditugu kortuan: aipatutako araua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren barneko ekonomiaren kontrola eta kontabilitatea garatzen dituen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren III. kapituluko 3. atala, eta Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 9ko 192/2013 Dekretuaren 4.a) artikulua.

TXOSTENA:**I.- XEDEA**

Aurreko idatzi-zatian adierazitako arau-esparruaren baitan egin da kontrol ekonomikoa eta araugintzakoaren txosten hau, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren jasangarritasun energetikoari buruzko Legearen (hemendik aurrera, JEL) aurreproiektua egiteko prozeduraren barnean.

Aurreproiektu horrek xede hau adierazten du 1. artikuluan:

"... politika energetikoaren joera orokorra kontuan hartuta, EAEko administrazio publikoetan jasangarritasun energetikoaren arau-oinarriak ezartzea, eta administrazio publiko horiek zer eginbehar eta betebehar dituzten antolatzea. Batez ere, energia aurrezteko eta efizientzia energetikoa

izateko neurriak bultzatzera bideratuko dira eginbehar eta betebehar horiek, bai eta energia berriztagarriak sustatzera eta ezatzera ere”.

Xede hori aintzat hartuta, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak abiatu eta bideratu du prozedura hau, berari baitagokio, Administrazio honek dituen eskumenen esparruan, energiaren arloa arautzea. Izan ere hori arautzen du abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuak (Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioako Sailak sortu, ezabatzen eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak identifikatzen dituen) 7.1. artikuluko e) letran.

II.- AURREKARIAK ETA ESPEDIENTEAN SARTUTAKO DOKUMENTAZIOA

Hasteko, adierazi behar da aipatutako aurreproiektua ez dagoela berariaz jasota X. legegintzaldiko (2012-2016) legegintza-egutegian (Jaurlaritzaren Kontseiluaren 2013ko ekainaren 13ko erabakiz onartua),¹ baina hori ez da oztopo aurreproiektua izapidetzeko.

Alde horretatik, prozedura abiatzea agindu zuen salburuaren agindu batek, baina agindu horrek ez du arauaren beharrezko arrazoitzan; aitzitik, bete behar den prozeduraren deskribapen formala egitera mugatzen da, abenduaren 22ko 8/2003 Legeak (Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarena) arautzen duenari erreparatuta.

Ekimena justifikatzeko memoriak eta aurreproiektuaren zio-azalpenak (hasierako onarpenaren fasetik jasota dago) dakarkigute aztertzekoa dugun gaiaren ikuspegi orokorra; edonola ere, honako alderdi hauek nabarmendu behar direla irizten diogu:

- Estatuko organoek emandako arau batzuek xedatzen dituzte gai-alor honetan oinarritzko izaeraz bete behar diren betebeharrak; horietako batzuk EBren zuzentzauren transposizioa egin ondorenko arauak dira horietako batzuk (aurreproiektuaren espedienteak adierazten du zein diren), eta zenbait eskumen-titulu egikaritzuz emandakoak dira beste batzuk (eta ez soilik, eta zentzu hertsian, energiaren alorrari dagozkionak). Arauetako batzuk orokorrak dira (eta bete beharrekoak dituzte administrazio publikoek²), eta beste batzuk, berriz, berariazkoak, administrazio publikoetara zuzenduak.
- Irailaren 22ko 178/2015 Dekretua (Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren jasagarritasun energetikoari buruzkoa) onartu eta indarrean jarri zen iaz. Dekretu horrek, izenburuan bertan, argi adierazten du “EAEko

¹ Era berean, aurreproiektua ez da aipatu legegintza-egutegi horren seihilekoaren jarraipena egiteko azken erabakian (Jaurlaritzaren Kontseiluak 2016ko otsailaren 2ko bilkuran onartua).

² Hala, eraikin publikoek ere energia-eraginkortasuneko ziurtagiriak izan behar dituzte



arlo publikoa" duela eremu, eta egin asmo den legeak berak erreferentzia moduan adierazten du hura. Horren harian, arauarenasmoa da izenburuko kontzeptu horren barnean sartzen diren Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publiko guztientzat izatea betetzekoak "energia eraginkortasuneko" xedapenak.

Bi arauak antzekotasun handia dutela eta denboran nahiko gertu emandakoak direla jakinda, nabarmendu behar dugu, berariaz, antzat hartzekoak direla 178/2015 Dekreturako adierazi zirenak; hala ere, oso kontuan izan behar da egindako proiektuak duen helburu nagusia: dekretuak araututako neurriak betetzekoak izatea legearen eremu subjektiboko administrazio publiko guztientzat

Hori horrela, dagokion espedientea izapidetu da eta Bulego honen eskura jarri da (tramitazio elektronikorako Tramitagune aplikazio informatikoaren bidez - DNCG_LEY_77255/2015_03), kontrol ekonomikoari eta araugintzakoari dagokion txosten derrigorrezkoa egiteko.

Jasotako dokumentazioak bete egiten du urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren barneko ekonomiaren kontrola eta kontabilitatea garatzen dituen) 42. artikuluen eskakizun formalak, eta egiaztatu da, bete egiten direla, kontrol ekonomiko eta araugintzakoaren txostenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen 25. artikulutik 27. artikulura bitarteko xedapenak.

A1) Igorri zaigun dokumentazioa, espedientean ageri dena, aztertu ondoren, ikusten da badela nabarmendu beharreko alderirik, Administrazio honek izaera orokorreko xedapenak egiteko indarrean den araubideak zenbait eskakizun egiten dituen aldetik. Alde horretatik, abenduaren 22ko 8/2003 Legeari begiratu behar zaio bereziki, eta, COJUA³ aholku-batzordeak gai horri buruz adierazi duena kontuan hartuta, alderdi hauek ohartu behar dira:

- a) Aurreproiektuaren prozedurako faseetan, ez da egiaztatu aurreproiektua aztertua izateko eman ote zaienik hura bete beharrean izango diren administrazio publikoei, baina ezin da ondorioztatu halakorik egin ez denik. Egia da, alde horretatik, EUDEL erakundeak egindako alegazioak jaso direla (erakunde horrek ordezkutzen duenari begiratuta, EAeko udalerriei aztertzeko eman zaiela esan daiteke), baina Bilboko Udalarenak

³ Aholku-batzordeak adierazi du, erregelamenduen proiektuen gainean baldin bada ere, tramitazio akastun batek (adibidez: entzunaldirik edo interes publiko eta pribatuaren parte-hartzerik ez izatea, nahitaezko txostenik ez egin izana), etorkizuneko arauaren baliozkotasuna baldintza dezakeela. Lege-aurreproiektuen kasuan, aldiz, ez da hori gertatzen. Izan ere, aipatutako salbuespenetan soilik eragin diezaioke baliozkotasunari, eta, betiere, hutsune horrek parlamentuaren borondatea mugatzen badu (Auzitegi Konstituzionalaren 108/1986 Epaia).

eta Arabako Batzar Nagusienak ere (hasiera batean, aurreproiektuaren aplikazio-eremuak ez dio zuzenean eragiten azken subjektu horri); hala ere, ez da inon adierazi noren bidez eta nola egin diren interbentzio horiek. Proiektuaren nolakoari begiratuta eta 8/2003 Legearen 9. artikulua arautzen duena aintzat hartuta, uste dugu ez dela nahikoa testua beste administrazio horiei bidaltzea; izan ere, haien partaidetza eta kontsulta bermatu behar litzateke, alegazioak egiteko aukera izan dezaten preklusio-epe labur batean. Berariaz, uste dugu testua foru-aldundiei aztertzeko ematea falta dela (horien foru-izaerako sektore publikoengana ere iritsi beharko litzakete).

- b)** Adierazitako horren harian, ez da inon jasota ageri X. legegintzaldi honetako ildoari jarraituz, aurreproiektuaren jendaurreko informazioarako jardura orokorrik egin denik. Alde horretatik, 8/2003 Legearen 8.1 artikulua arautzen duena aintzat hartuta, iruditzen zaigu gaingiroki azaldu behar liratekeela espedientean jendaurreko informazio-izapide hori ez egitearen arrazoiak (izan ere, agerikoa da aurreproiektuak eragin handia duela ingurumenean, eta pentsatzekoa da egoka izango litzatekeela izapide hori egitea, EAEn eskumen-esparruan txertatzeko moduko aukerak edo irtenbideak sustatzeko).
- c)** Espedientean adierazten da txosten bat emateko eskaera zaiola Kontratazioko Aholku Batzordeari, baina, espedientean jaso den informazioari erreparatuta, ez dago jakiterik dagokion epean edo gerora eman ote den eskatutako txosten hori, ala organo horrek adierazi ote duen ez dagokiola txosten hori ematea. Iruditzen zaigu, alde horretatik, txosten horren egokitasunari buruzko gogoeta gutxieneko bat egin behar zela, eta organo honek 2015eko ekainaren 2an eman zuten 8/2015 txostenari erreparatu behar zitzaioela, gerora eman zen 178/2015 Dekretuaren gainekoa.
- d)** Hutsune nabarmena da, era berean, Eusko Jaurlaritzaren beraren egiturako sailen balizko esku-hartze edo partaidetza aktiboaren gaineko erreferentziarik ez jasotzea, eman asmo den arauak jardun-eremu handiak uzten baititu haien esku. Alde horretatik, egia den arren, partaidetza horren aplikazio-eremuari erreparatuta, 178/2015 Dekretuaren araupean egindakoa izan behar duela, agerikoa da erregelamendu-mailako arau batean baino eduki-proposamen zabalagoak egin daitezkeela lege-proiektu batean.



Hori horrela, berariaz erreparatu nahi diogu Ogasun eta Finantza Saileko Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzaren egærari⁴; eta kontuan izan behar da, era berean, beste jarduera-arlo batzuek eginkizun handia izango dutela arautzen diren neurriak betetzeko lanean⁵, hala nola garraioaren azpiegiturak eta portuak (EAEk du haien titulartasuna, kirol-izaerakoena barne), hezkuntza-administrazioa, justzia-administrazioaren bitartekoak, osasun-zentroak, segurtasuna...

Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak (ILPS) zenbait ohar egin ditu, baina organo sustatzaileak alde aurretik egindako komunikazio bati erantzuteko egin ditu; hala, hemen adieraziko dugun bakarra da ez dagoela ebidentzia materialik egin izan litezkeen lankidetzajardunen gainean. Edonola ere, espedienteko dokumentazioak, eta, berariaz, memoria ekonomikoak, ez du xehetasunez, edo, gutxienez, nolabaiteko argitasunez azaltzen zer nolako ondorioak izan ditzakeen aurreproiektuak Administrazio horretan.

- e)** Ekainaren 28ko 16/2012 Legearen (Euskadiko Ekintzaleei eta Enpresa Txikiari Laguntzekoa) 6. artikulua arautzen duena betetzen da, eta enpresan izango duen eraginaren gaineko txosten labur bat jasotzen da⁶. Txosten horrek administrazio-kargen gaineko txostera dakar⁷, eta azken horrek honako hau ondorioztatzen du: *"Egin asmo den Legearen onarpenak ez die kargarik edo inpakturik eragingo sektoreko enpresei"*. Ulertu behar da arauaren xedek ekintzaitzaren esparrua arautzen duela, eta ondorioztatu behar da konklusio horrek ez duela aintzat hartu enpresa-sektore publikoan izan dezakeen eragina, aurreproiektuaren eremu subjektiboan barne hartzen den neurrian.

A2) Txosten honen ondorenetarako, nabarmendu behar da aurreproiektuko memoria ekonomikoak izan behar duela erreferentziazko agiria. Agiri horren

⁴ Besteak beste, sail bat baino gehiago hartzen eta kudeaketa zentralizatua duten higiezinaren gaineko eginkizunak ditu, energia-kudeaketarena barne, eta horien artean sartzen dira proiektuak ikuskatzeko zerbitzua, ikuskaritza teknikoa, kalitate-kontrola, ziurtapenen jarraipena (kontratazioen alorreko araudirako igorpena egin daitekeen arren) eta, Baliabide Orokorren Zuzendaritzaren bidez, ibilgailu-atala; horrez gainera, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren bidez, eginkizunak betetzen ditu Euskadiko Ondarearen gainean eta kontratazioaren alorrean (berariaz zehazten ditu eginkizun horiek apirilaren 9ko 192/2013 Dekretuak, Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzekoak).

⁵ Gai horri erreparatuta, ezinbesteko zaigu adieraztea erreferentziarik ez dagoela aztertutako aurreproiektuak EAeko Administrazio horrek betetzeko duen arau-esparruari dakarkion esparru gehigarriarekiko, estatuko araubide oinarritzakoari, eta bereziki, 178/2015 Dekretuari erreparatuta.

⁶ 2. zerbakiaren zera adierazten du: *"Txostena nahitaezkoa izango da izaera orokorreko xedapenak lantzeko prozeduran..."*.

⁷ Gobernu Kontseiluaren 2010eko abenduaren 28ko erabakiak, xedapen orokorrak izapidetzeko jarraibideak onartzen dituenak, adierazten du, besteak beste, abenduaren 8/2003 Legearen 10. artikuluan aurreikusten den memoria laburrak berariaz adierazi behar dituela arau-proiektuak administrazio-kargen alorrean izango dituen inpaktu edo eraginak, emango den arauak ez dezan behar ez den kargarik erantsi.

beharrizana arautzen dute, bai Administrazio honen beronen kontrol ekonomikoaren alorreko araubideak⁸, bai 8/2003 Legeak, xedapen orokorrak egiteko prozedurarenak⁹.

Alor horretan gaur egun indarrean diren betebeharrak betetzekoak izanda, kontuan hartu behar da laster jarriko dela indarrean 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen administrazio-prozedura erkidearena, eta lege horrek arautzen duela administrazio publikoek, araugintza-jarduerak egitean, aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-iraunkortasunaren printzipioen zenbatespenak egin behar dituztela kuantifikazioetan (129.7. artikulua).

A.2.1.- Aurreproiektuak dakarren memoria ekonomikoari erreparatuta¹⁰, une honetan bertan adierazi behar da mugatua dela aztetutako aurrekontuaren gainean ematen den ikuspegi ekonomikoa eta aurrekontu-ikuspegia. Egia da memoria horretan bestelako informazio orokorra ere ematen dela, baina eman beharrekoa den ikuspegi ekonomiko eta aurrekontuzko horrek laburtuta adierazten ditu neurri orokorrak, jarduera motak, 2025erako hurburuak eta 2025 urte horri begira egin asmo diren inbertsioen eta aurrezkien zenbatespen orokorrak.

Zehazki, oro har aurreikusten den aurrezkiaren zenbatekoa¹¹ ematen da; guztira, 461 milioi euroko zenbatespena egiten da 2025erako, eta urtero 119 milioi euro aurreztuko direla adierazten da (ez da adierazten aurrezki-tresnen pixkanakako ezarpenak denboran izango duen progresioa). Horrengainean adierazi behar da ez dela argitzen "fakturaren urteko aurrezki" nolatan izango den 119 milioi eurokoa, baldin eta egungo urteko faktura 274 milioi eurokoa baldin bada eta "urteko fakturaren" aurreikuspena, 2025. urterako, 261 milioi eurokoa baldin bada.

Memoria ekonomikoak informazio gutxi ematen du, eta ez da ematen foru-aldundiek eta Administrazio honen beraren organoek, beren erantzukizun-eremuan, energia-eraginkortasuneko neurriak hartuko dituzten elementuen gainean egingo duten esku-hartze zuzenaren gaineko informaziorik; horrenbestez, ohartarazi behar dugu alderdi ekonomikoaren ikuspegitik eta aurrekontuaren ikuspegitik ematen den informazio mugatuak ez dituela betetzen memoria horiek bete behar dituzten eskakizun formalak. Hori horrela, ezin da jakin, zehaztasunez, zer eragin edo

⁸ E.1. puntuan zehazten dira, txosten honetako gastu -atalean

⁹ E.1. puntuan zehazten dira, txosten honetako gastu -atalean

¹⁰ Eremu subjektiboa arauan adierazitako "EAEko Administrazio Publiko" guztien eremura zabaltzeko egokitzea alde batera utzita, agiri horren eskema orokorrak antzekotasun handia du indarrean den 178/2015 Dekretuak tramitazio-garaian izan zuen memoriaren eskemarekin.

¹¹ Ez da jakina egungo informazioaren oinarria; hala, proiektuak argitu behar duen alderdi bat da zer inberturietatik hartuko diren kalkulu hori egiteko datuak.

inpaktu izango duen arauak erakunde horietako bakoitzaren aurrekontuetan (ez, bederen, arauaren eraginpean izango den maila instituzional bakoitzerako).

A.2.2.- Horren harian, beste alderdi bati erreparatu behar zaio oster, ez baitago argi zer "plus" edo gehigarri dakarkien aurreproiektuak hura bete beharrean izango diren administrazio publikoei. Aurreikusitako betebeharez gainera, ezarri nahi diren berariazko neurrietako batzuk jasota daude jada indarreko araubidean; beraz, aurreproiektu honek egiaz izango duen eragin ekonomikoa eta aurrekontuetan izango duen eragina behar bezala zehazteko, adierazi behar da eman asmo den arauak zer alderdi gehitzen dizkien hura bete beharrean izango diren EAEko administrazio publikoei, egun jada indarrean diren arau-xedapenek ezarritakoetatik harago.

Alde horretatik, eta Administrazio honi dagokionez, berriro aipatu behar da irailaren 22ko 178/2015 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren jasangarritasun energetikoari buruzkoa, 2015eko urriaren 15ean indarrean jarritakoa; izan ere, aurreproiektu honek berriro errepikatzen ditu arau hark EAEko administrazio orokorraren, administrazio instituzionalaren eta sektore publikoaren esparrurako arautzen dituen neurrietako asko. Dekretu hori indarrean da, eta haren bidez artikulatu dira, zati batean, Estatuan EBko zuzentarauen transposizioa egin ondoreneko neurriak.

Aplikazio-eremua beste administrazio publiko batzuetara zabaltzeko asmoa alde batera utzita, ez da argi zehazten aurreproiektu honen zer eduki diren egun indarrean den erregelamendu-mailako arau horrenak baino "askoz ere asmo handiagokoak", eta horrek zaildu egiten du Administrazio honi ekarriko dizkion kostu gehigarrien zenbatespen erreala egitea (ulertu behar da, beraz, horiei lege-maila ematen baldin bazaie, Jaurlaritzak ezingo duela, indarreko lege-esparruaren barruan, neurri horien ezarpena moldatu bere eremuan).

Horren harian, Eusko Legebiltzarrak onartzen duenean, instantzia arau-emaille horrek, bere eskumenen baitan, lege-indarra emango dio Jaurlaritzak egindako proiektuari, baina une honetan izapidetze fasean da hura, Jaurlaritzan. Hori horrela, berriro adierazi behar da ez dela lege-aurreproiektu horren onarpenak Euskal Autonomia Erkidegoko beste bi maila instituzionaletan izango duen eraginaren gaineko oinarrizko informaziorik ematen.

Alde horretatik, xehetasun guztiak izan gabe ere, jakina da lurralde historikoetako foru-aldundiak eta udal batzuk (azken horiek, gainera, beren ekimenak izateaz gain, aldundien laguntzak jasotzen dituzte, aurreproiektuaren helburu berak betetzeko) beren eraikinetako, ibilgailu-flotako eta beraien jabetzako gainerako

instalazioetako energia-eraginkortasuna handitzeko neurriak hartzen ari direla. Gure aburuan, xehetasun gehiago ematea komeni da, aurreikus daitezkeen eraginen eta, araututako betebeharrak aintzat hartuta, kostu eratorrien zehaztapen handiagoa egitea, baita, era berean, gaiaren egoeragaur egun zertan den jakiteko oinarritzko informazioa ematea ere.

A.2.3.- Hori horrela, aurreproiektuak dakarren memoria ekonomikoak zehaztasun-maila handiagoz aztertu behar ditu haren ezarpenakekarriko dituen kostu guztiak. Ezin da "faktura energetikoan" balizko aurrezpena ekarriko duten inbertsioak adieraztera mugatu kostu horien zehaztapena; aitzitik, arauak dakartzan administrazio-betebeharren ondoriozko kostu guztiak adierazi behar dira, eta beti barneratu behar da lan horretan aurreproiektuaren eremu subjektiboari dagokion ikuspegia.

Kostu administratiboa sorraraziko duten neurri hauak identifikatu dira, berariaz:

- Jasangarritasun energetikoaren gaineko azterlana (7. artikulua). Aintzat hartuak izan ez diren arren, hona ekarri behar dira ILPSren alegazioak, azterlan hori antolamendu-tresnetan inplementatu behar litzakeela adierazten duten aldetik.
- Jasangarritasun energetikoaren batzordeak (9. artikulua). Ez da batzorde horien gaineko aipamenik egiten, eta pentse daitezke administrazio bakoitzak era ditzakeela bere bitartekoekin, baina betebehar bat diren aldetik, aurreikuspen oinarritzko batek aintzat hartu beharko litzuzke horien kostuak (Administrazio honi dagokionez, kontuan hartzekoa izango da 178/2015 Dekretua edo haren ikurpea).
- Inbentarioa (10. artikulua); ez da hura egiteak izango duen eraginaren zenbatespenik egiten, ezta haren mantentze-lanen eta eguneratzeen gainekorik ere. Administrazio honen epera konkretuari begiratuta, kontuan izatekoa da inbentario hori egin beharra arautzen duela 178/2015 Dekretuak, eta egokia litzatekeela betebehar hori gaur egun zertan den adieraztea. Oso egokia izango da adierazpen hori egitea, baldin eta beteta baldin badago inbentarioa araua indarrean jarri ondorengo sei hileko epean egiteko agindua (aurtengo apirilean amaitu da epe hori); izan ere, inbentariora egiteko eta beste maila batzuetan abiarazteko kostuaren gutxi gorabeherako zenbatekoaren berri jakin daiteke horren bidez, eta informazio hori lagungarria izango litzateke, era berean, administrazio honetan



ezartzekoak diren neurri materialen ezarpen-kostuen gaineko aurreikuspen zehatzagoak egiteko.

Inbentario horren gainean, adierazi behar da eremu objektiboak, instalazioak izendatzen dituen aldetik, inbentarioaren ikuspegitik adierazten dituela, itxura batean, eraikinak (instalazioen kontzeptua argiteriakoetara mugatzen du); horren ondorioz, aratu gabeko elementuak jaso ditzake inbentarioak, eta komeni da egoera hori zuzentzea, ematekoa den legearen eremuan sar daitezkeen aldetik.

Azkenik, gai hau baliatuko dugu adierazteko inbentario horien eta atxikitako informazioaren jendaurreko informazioa izapidetu beharra arautzen duela 4. puntuak, eta horiek Eusko Jaurlariari eman behar izatea arrazoirik gabeko karga bat izan daitekeela gainerako administrazioentzat, baldin eta zeregin horrek informazioa eskura jartzetik haragoko betebeharrak ezartzen baldin baditu.

- Kontsumoak kontrolatzeko gailuak (11. artikulua). Erreferentziarik izan gabe, ezin da jakin titularrak ordaindu behar ote dituen arauak agindutako kontagailu espezifikoak, eta ezin da zenbatetsi zer kostu izango duten.
- Energia-auditoretzak (12. artikulua). Lege hau ematean ezarriko dira energia-auditoretzak Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetan. Alor horretako oinarrizko araubidea, enpresaren eremurako ezarria, finkatzen du 56/2016 Errege Dekretuak, otsailaren 12koak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren energia-efizientziari buruzko 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Zuzentarauaren transposizioa egiten duenak energia-ikuskaritzei, energia-zerbitzuen hornitzaileen eta energia-ikuskatzaileen akreditazioari eta energia-hornikuntzaren efizientzia sustatzeari dagokienez. Oinarrizko izaera du arau horrek. Lege-aurreproiektuak xedatzen du beren aplikazio-eremuan sartzen diren erakundeek hiru urteko epean egin behar dutela auditoretza, eta sei urtean behin berrituko dela (12.5.). Betetzekoa izango den arren 178/2015 Dekretuaren 17. artikulua Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarentzat oso antzeko xedapenen bidez arautzen duena (xedapen horietako batzuen testua aldatzen du aurreproiektuak, energia-auditoretzaren edukiak zabaltzeko), zenbatetsi egin behar da, betetzekoak diren baldintza formalen bidez, zer kostu eragingo dien horrek arauaren gainerako hartzaileei.



- Energia-jarduketan planak edo bide-orria (13. artikulua). Xedapen hau ere 178/2015 Dekretuan jasota dago (15. artikulua), eta beste administrazio publiko batzuegana zabaltzen denez bide-orriak egiteko betebeharra, horrek dakarren kostu gehigarria zenbatetsi behar luke memoriak, baina ez da horren gaineko ezarri adierazten.
- Hiri-mugikortasuneko planak (22. artikulua). EAEko udalerri ezarritako betebeharrak berariazkoa da, eta EAEko Administrazioari zuzendutako beste xedapen batzuek baino xehetasun-maila handiagoak xedatzen ditu. Izan ere, deigarria da, eta, neurri batean, nolabaiteko desorekaren sortzaile, hura legez inposatzea 5.000 biztanletik gorako udalerriz guztiei, legeak ez baitu adierazten maila foralean edo autonomia-erkidegoan horren pareko trantsia bat izango denik, lurralde-eremu horietan mugikortasun-plangintza koherenteak egiteko. Euskal Autonomia Erkidegoaren ezaugarri sozio-geografikoei erreparatuta, pentsatzekoa da posible izango litzatekeela, lotura-maila handiko konurbazioak eta eskualdeak izanez gero, eremu horietan eskala-ekonomiak sorraraztea.
Hala ere, gogoeta bat egin behar da behatzeko zergatik ez duen aurreproiektuak, edukiak zehaztean, alderdi horren aipamenik egiten, eta adierazi behar da betebeharrak horrek aurrekontuen baitako azterketa ekonomiko xeheago bat egin beharra dakarrela, zehazteko udalerriek nahikoa baliabide finantzario ote duten, bai hura egiteko (horrek berez baitakar kostu bat), bai hark izan behar dituen edukiak inplementatzeko (alderdi juridikoari erreparatuta, gainditu egiten da energiaren eremu hertsia, eta ez da oinarritzko kontrasterik egiten eman berri den Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearekin – 2/2016 Legea-).
- Bi urtean behingo txostena, neurrien ezarpenari buruzkoa (23. artikulua). Neurrien publikitateari erantsitako neurri gehigarria da txostenarena, eta arautu da "telekomunikazioetako sare publikoen bidez edonon sartzeko moduko datu-base elektronikoak" erabiliko direla. Gardentasuna eta herritarrei eman beharreko informazio publikoa arautzen dituen araubideak dakartzan betebeharrak alde batera utzita, agerikoa da zenbait gastu egin behar direla xedapen hori betetzeko, eta ez da gastu horien zenbatespenik egin.
- Energia kontsumitzen duten instalazioak erosten, erabiltzen eta haien mantentze-lanak egiten dituzten kudeatzaileei eta teknikariei

energia-aurrezpenaren eta -eraginkotasunaren gaineko prestakuntza emateko plana (24. artikulua). Lege honen eremuari eratzekitako administrazio guztiei ezartzen zaie betebeharrak, ezinbestekoa izango delako, egin beharrekoaren tamainari erreparatuta, baliabide publiko gehigarriak jartzea, bai plana bera egiteko eta bai, batik bat, hura betetzeko ezarri behar diren neurriak egikaritzeko. Enplegatutako langileen eskubide orokorren baitako neurri gisa arau zitekeen, hau da, administrazio bakoitzak langileen prestakuntzarako ezarriak dituen plangintza orokorrek ezinbestean izan beharreko edukia izango dela arau zitekeen, baina legearen formulazio zehatzak berriaz xedatzen du plan horren izaera berezia. Ez da azaltzen zergatik den neurri hori arrazoizkoa (ez da azaltzen zer ekarpen egiten dion izaera berezitu horrek efikaziari eta efizientziari), eta espedienteak ez du adierazten zer kostu izango duen. Bestalde, lege-xedapenak ez du planaren jarraipenik edo aurrerago sekularik arautzen, beraz, ezin da jakin nola eguneratuko diren, zer jarraipen egingo zaien eta zer egingo den jakintzaren eguneratzeak denboran iraunarazteko.

A.2.4.- Memoria ekonomikoaren eraginkortasun mugatuaren gainean diharduen idatzi-zati zabal honekin amaitzeko, gure aburuan aintzat hartzekoa zen beste elementu bat aipatuko dugu. Egin asmo den arauaren subjektu hartzaileei eskatuko zaizkien bitarteko administrazio horien guztien gaineko balorazio orokorra egin beharko litzateke, arauaren beraren efikaziaren eta efizientziaren ikuspegia hartuta, zehazteko zer neurritan den beharrezkoa arauaren erarpen orokorra.

Alde horretatik, bitartekoen pilaketa bat bultzatzen dela dirudi, egiten diren eskakizun guztiak barne har ditzan gai-alor horren kudeaketak, aintzat hartuta, beti, datuen lorpenari eta horien azterketari lotutako denbora-antolamendua ezarri behar dela.

Egin asmo den lege-arauaren xedapenen ezarpenaren gainean, nabarmendu behar da osotasunari begiratzea komeni dela aurreikusten diren bitarteko burokratikoaren multzoa prestatzeko datak zehaztean, behar ez den kostu ekonomikorik ez sorrarazteko.

Hauek nabarmenduko ditugu, zerrenda osatu gabeen:

- Jasangarritasun Batzordea. Urtebeteko epea izango da gehienez batzordea sortzeko, eta urtebete horretan onartu behar du inbentarioa, hau da, gerta daiteke eratzen den ekintza berean onartzea agiri hori; hala ere, gutxienez

hausnarketa bat behar du, erreferentziazko agiria den aldetik. Sei hileko epea ezarri da EAEko Administrazioarentzat, konturatu gabe 178/2015 Dekretuak ezarria duela, lehendik, sei hileko epeabetebehar hori betetzeko.

- Energia-jarduketan planak eta energia-auditoretzekko lotura. Alde batera utzita EAEko Administrazioarentzat igaro den denbora, 178/2015 Dekretuak ezarria diolako alde aurretik horren gaineko betebeharra, esan behar da hiru urteko epea finkatzen duela auditoretzentzat, eta sei hilabete eta bi urte bitartekoa planentzat. Auditoretzaren eduki dira, besteak beste, diagnostikoak, gomendioak eta laburpen exekutiboak egitea, baina, itxura batean, azterketa-lana egin ondoren osatu behar litzateke plangintza-bitartekoa, eta, beti, bien arteko lotura estuago bat bermatuta (ildo horri berari jarraituz, lotura edo integrazio egokiagoa gauzatu behar da hiri-mugikortasuneko planekin -22. artikulua-, bi edo hiru urteko epe batean onartu behar baitituzte horiek, duten tamainaren arabera, 5.000 biztanletik gorako udalerriek).

A.3) Espedientearen ikuspegi orokor horren alderdietako bat da ekimenaren abiapuntuan dagoen eskumen-esparrua, eta esparru horren gaineko aipamen soila egingo dugu hemen, COJUAREN irizpena jasotzekoa bata aztertzeke eman zaigun lege-aurreproiektua. Sailaren txosten juridikoak, gai hori aztertzean, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen eskumenei ereparatzen die, eta, zehazki, gai alor hauetan dituztenei: "energiarekiko erregimena eta, maila apalagoan, ingurumenaren gaia" (EAEko Autonomia Estatuaren 11.2.c artikulua eta, 11.1.a artikulua, hurren hurren).

Energiaren alorraren eskumena ezinbestekoa da aurreproiektuaren ekimena oinarritzeko, baina ohar moduan adieraz daiteke oinarri hori, zenbait xedapenentarako, mugatua izan daitekeela, ekimenaren oinarri bakarra baldin bada. Izan ere, 178/2015 Dekretuak oinarri gisa hartu zuen "lehentasunez, Euskal Autonomia Erkidegoak bere autogobernurako erakunde antolamenduaren, erregimenaren eta funtzionamenduaren alorrean duen eskumena...", baina egia da, era berean, energiarekiko erregimenaren eta ingurumenaren eskumen-titulu horiekin lotu zuela¹². Ildo bertsukoak dira Estatu organoek gai-dor horretan egiten dituzten jarduketan oinarriak, bi eskumen-titulu horietan bermatuak, batetik, eta, sarri ageria izanagatik, jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren eskumenean, bestetik.

Hori ohartarazi du, funtsean, Ingurumen eta Lurralde Plangintza Sailak, lurraldearen antolamenduaren esparruari eragiten duten xedapenentarako. Era

¹² COJUAREN 112/2015 irizpena, 2015eko uztailaren 31koa, gerora 178/2015 Dekretu gisa onartu zen dekretu-proiektuari buruzkoa.

berean, beste eskumen-titulu batzuen eragina nabarmendu behar da administrazio publikoen kontratu-jardueren gaineko xedapenetan (15. eta 16. artikulua), "ibilgailuen zirkulazioari mugak jartzea" dakartenetan (21. artikulua) eta "mugikortasun-planak" agintzekoetan (22. artikulua), baita foru- eta udal-administrazioek beren buruak antolatzeko eta beren ondasun propioak kudeatzeko ahalaren gainekoetan ere¹³.

A.4).- Edonola ere, lehen adierazi den moduan, azaroaren 24ko 9/2004 Legearen (Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzkoa) 3.1.a) artikulua arautzen duena betetzeko, aurreproiektua aholku-erakunde horren iizpenaren menpe jarri behar da onartu aurretik, eta dagokion azterketa juridikoa egingo du organo horrek.

Horrekin batera, gogorarazi behar da, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia-kontrolari eta kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 27.2 artikulua arautzen duena betetzeko (*Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen azken xedapenetatik lehenengoan emaniko idazketaren arabera*), Kontrol Ekonomikoko Bulegoari jakinarazi behar zaizkiola lege-aurreproiektuetan eta xedapen arautzaileen proiektuetan egiten diren aldaketak, aldaketa horiek Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren iradokizunen eta irizpen-proposamenen ondorio direnean (*horretarako, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren zuzendariaren 2005eko urriaren 14ko 2/2005 zirkularrean ezarritakoa bete behar da*).

III.- AZTERKETA:

B) Testua eta edukia

B.1) Dokumentazioa aztertu ondoren, ohartu behar da prozeduraren lanketaren memoria labur bat ez izateak zailtasunak dakartzala egindako hautuak behar bezala arrazoitze, eta, berariaz, araua bideratzean alegazio gutxi onartu direla ikusita, zaila dela onarpen mugatu horren arrazoiak zehaztea EUDEL erakundeak egindako alegazioak nabarmendu ditugu, eta, berariaz, aztertzeko eman zaigun testuan izan duten oihartzun apala. Alde horretatik, kontuan izan behar da arauaren izaerak eta norainokoak eragin osoa duela EAEko udalerrian, eta, ondorioz, ulertu behar da aurreragoko izapidetzean jasoko direla espedientean orain falta diren justifikazioak.

B.2) Testuaren gainean, gai batzuk planteatu eta ohar batzuk egin behar ditugu (aurrez aztertu diren beste gai batzuetan adierazi ditugunak errepikatu gabe):

¹³ Ezin da adierazi gabe utzi aurreproiektuak eragin zuzena duela foru-aldundien eta udalen ondasunen (h igiezinen, ibilgailuen eta bestelako ondasun higikorren) zenba it alderdiren gainean, eta horiek foru- eta udal-erakundeen berezko eskumenean erdigunean daudela (Lurralde Historikoen Legearen 7.7 artikulua eta Euskadiko Toki Erakundeak buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 9.5 artikulua).

a).- Egin asmo den legearen "eremu subjektiboa" arautzen du 2. artikulua. Ohartarazi den moduan, artikulua horren xede nagusia izan da 178/2015 Dekretua gai-alar honetan EAEko Administrazioarentzat arautzen dituen xedapenak EAEko gainerako lurralde-administrazioei eta horien erakunde "atxiki edo mendekoei" zabaltzea. Artikulu horren azken puntuan, "erakunde atxikiak edo mendekoak" adierazten direnean, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen (EONAL) 7.4.- artikulurako igorpena egiten da¹⁴. Igorpen hori ez da zehatza, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren esparruari baitagokio, eta ez da egokia, ondorioz, beste bi eremuetarako (foru- eta udal-administrazioetarako), nahiz eta azken bi horietara ere zabaltzea nahi duen bere eragina.

Alde horretatik, eta aukera ugari izan daitezke jakinda, iradokitzen dugu, etorkizunean eman daitezkeen arauetako ildo berari jarraitzeko, egokia dela euskal sektore publikoaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko lege-proiektuak (Eusko Legebiltzarrean dago egun) arautzen dituen xedapenei, eta, berariaz, 4. artikuluari begratuta moldatzea egin nahi den proposamena. Ez dugu iradokitzen artikulua horretako xedapen guztiak hartzea, eta bai aurreproiektu honek aurrekusten dituen xedapenei dagokien testua. Zehazki, EAEko lurralde-izaerako administrazioei buruz ari gara, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraz, lurralde historikoetako foru-administrazioez eta toki-administrazioez; horien guztien administrazio instituzionalaz eta haiei atxikitako eta haien mendeko gainerako erakunde instrumentalez; eta, baita Euskal Herriko Unibertsitateaz ere.

Proposamen honen harian, nabarmentzekoa da zergatik den planteatu edo, gutxienez, hausnartu aurreproiektu hau "euskal sektore publiko misto" gisa izenda dezakegun horretara zabaltzea. Xedapen atipiko horren bidez, Legebiltzarren proiektu horrek 4.3 artikuluan emandako definizioa adierazi nahi dugu, eta hura zabaltzekoa izan daiteke, baita ere, 4.4 artikuluan adierazitakoetara. Edonola ere, egia den arren erakunde horietako gehienetan eragin bistakoa izango duela, oinarrizko azterketa hori egitea komeni dela deritzogu, lege-aurreproiektu batez ari baikara. Horren bidez, tipologia bereko xedapenak arautzeko aukera izango da, aurrekusten den esparruan sartu aurretik¹⁵.

¹⁴ 1/1997 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 24koa, Legearen testu bategina onartzen duena.

¹⁵ Eman daitezkeen adibide ugarien artean, kategoria horren baitan aipa daiteke, esaterako, Bizkaiko Garraio Partzuergoak aurreproiektuarentzat izan dezakeen interesa.

b).- Eremu objektiboa zedarritzen du aurreproiektuaren 3. artikulua. Xedapenak jabetzaren titulu juridikoarekiko loturaren ikuspegia hartzen du, eta, berariaz, haren hedadura zabalduko dela adierazten du, "baita hirugarren pertsoneri alokatuta badaude ere".

Administrazioak hainbat ondasun izan ditzake modu egonkorrean, haiek jabetzan izan beharrik gabe. Ondarezko ikuspegiari erreparatzea izan daiteke bestelako mugaketa objektibo bat egiteko modua, aurreproiektuaren helburuei atxikiagoa (izan ere, bada jabetzaz bestelako titulu juridiko batzuk ondasuna denbora luzean erabiltzeko aukera ematen dutenak eta kontuan hartu behar lirakeenak, hortik jo behar baita legearen helburuak betetzeko, eta hasierako aurreikuspenarekin bat ez datorren lege-eraketa batek izan ditzakeen ondorio ez desiragarriak saihesteko¹⁶). Alde horretatik, ezinbestekoa da xehetasun handiagoz ezagutzea araupean izango diren erakundeen ondarezko egoera juridikoa, egin asmo den legeak bete nahi dituen helburuetara egokitzeko aurreikusten diren lege-neurriak.

Kontratu-jarduerarekin lotutako alderdia den arren, artikulua horrek aintzat hartzekoak izan ditzake "rentinga" edo horren antzeko beste modalitate batzuk, gero eta gehiago erabiltzen direnak; izan ere, energia-kontsumo handiak egiten dira horietan (ibilgailuak, arauaren aplikazio-eremuan sartzen direnak "ibilgailu-atala" terminoarekin izendatuak, euskarri informatikoak, "instalazioak" terminoarekin izendatuak, eta izan daitezkeen bestelakoak, proposatzen den azterketak aztertu beharrekoak).

Alde horretatik, aurreproiektuan alderdi hori arautzen duten artikuluek (bereziki, 15. eta 16. artikulua) zenbait xedapen ezartzen dituzte kontratu-jardueraren baitan erdiesteko aurreproiektuaren helburuak, eta, "erosi" terminoa erabiltzen den aldetik (zehazki, 16.2 artikuluan, baina baita 19.2 artikuluan ere), ez dirudi beste formula horiek barne hartzen direnik; izan ere, administrazioek eta legea bete beharrean dauden gainerako subjektuek gero eta gehiago erabiltzen dituzte formula horiek bitarteko horiek eskuratzeko.

¹⁶ Hori horrela, adibide moduan adierazi daitezke Lehen Hezkuntzako ikastetxe zenbaiten egoera, EAEko Administrazioak osorik finantzatu arren, titulartasun juridikoa udalerriren baten izenean erregistratuta izan dezaketenak, edo zenbait osasun-zentroena, eskualdaketa egin zutenetik urteak igaro arren, errealitatearekin bat ez datorren erregistro-egoera bat izan dezaketenak.

Aurrekontuen zenbatekoei begiratuta, agerikoa da kostu nabarmenak ditzutela eta aintzat hartu beharrekoak zirela, auzitegi handia eragin baitaiteke horiek eragindako faktura energetikoan; hori horrela izanda, 3. artikuluko horrek, eremu objektiboa arautzen duenez, barne hartu behar lituzke, bere norainokoa zehaztean, beste modalitate horiek ere (eta, noski, egokitu egin beharko liriteke kontratu-jardura arautzen duten artikuluko horiek, irizpide egoki horiek barnera ditzaten errentamendu horien gaineko kontratazio-prozesuetan).

c) "Jasangarritasun energetikoari buruzko politika koordinatzea" du izenburu 8. artikuluko. Eremu horretan, Eusko Jaurlaritzan energiaren gai-alorraren gaineko eskumena duen sailari ematen zaizkio koordinazio orokorreko ahalmenak; halaber, haren gainean uztendituen egitekoetako batzuk, testuan idatzita dauden moduan, beste organo batzuenak direla edo izan daitezkeela irizten diogu. Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko Sailaren alegazioek adierazten dutenaren ildotik, egokiagoa iruditzen zaigu egiteko edo zeregin horiek adieraztean "...-ek proposatuta" edo antzeko formularen bat erabiltzea xedapenen aurretik, nahiz eta sail hori izan daitekeen neurri horietako batzuek hartuko dituen.

Alde horretatik, ez da adierazten jarduketako horietakoren batek egiteko berriak dakartzkion egun EGL Sailak egiten dituenen, hark baitu esleitua energiaren gai alorra, eta ez da esaten, egiteko berriak balekarzkie, giza baliabide edo bitarteko material berriak beharko ote dituen horiek betetzeko. Pentsatzekoa da, horren gaineko ezer esaten ez baldin bada, egun esleituta dauden bitartekoak erabiliko direla egiteko horiek betetzeko.

Azkenik, iruditzen zaigu arautu nahi diren xedapenak ez direla behar bezala egokitzen "koordinazioaren" kontzeptura, araz kontuan izanda lege-aurreproiektu honek gainditu egiten duela Administrazio honen esparrua¹⁷.

¹⁷ Aintzat hartzekoa izango da COJUA batzordeak horren gainean adierazten duena, baina guk Auzitegi Konstituzionalaren apirilaren 28ko 32/1983 sententzia ekarriko dugu hona, osasun-alorraren koordinazio orokorraz diharduena, koordinazioaren ikuspegiaren berri ematen baitu, antolamendu administratiboaren printzipio a den aldetik. Honela erazten du printzipio hori: "**Koordinazioak zatien edo azpisistemen aniztasuna integratu nahi du sistema osoan, kontraesanak saihestuz eta disfuntzioak murriztuz. Izan ere, kontraesan eta disfuntzio horiek iraunez gero, sistemaren jarduna oztopatu edo zailduko lukete**". Hori horrela, "**egintza partzialak sistemaren globaltasunean barneratzen ditu koordinazio orokorrak, eta harreman-baliabideak eta -sistemak ezartzeaz gain, honako elementu hauek finkatzen ditu: elkarrekiko informazioa erakunde-esparruan, eta zenbait alderdiren homogeneotasun teknikoak ... agintariak batera jarduten dutenean, haiei dagozkien eskumenak –edo funtzioak– betetzen ari direnean**".

d) Agiri honetan bertan aurreproiektuak dakartzan karga ekonomikoei buruz hitz egin dugunean, adierazi dugu ez direla "jasangarritasun energetikorako batzordeen" gaineko erreferentziak onatu. Xedapen horrek etorkizunean batzordeak eratzeko agindua mana dezakeen arren, azaldu dugu espedientean horren gaineko erreferentzia gutxieneko bat egin beharko litzatekeela, batik bat, haiei esleitzen zizkien eginkizun konketuengatik¹⁸.

e) Kontratu-jardueraren gaineko zenbait xedapen arautzen dituzte 15. eta 16. artikuluek; hori horrela, xedapen horien neurrikoaz adierazi duguna aintzat hartzekoa izanda ere, kontuan izan behar dugu ez dela Kontratazioko Aholku Batzordearen txostenik eman (egia da eskatu dela, baina hura emateko denbora igarota, ez dago haren neurririk), eta ondorioz, egokia deritzogu 178/2015 Dekretuarentzat organo horrek eman zuen txostenari erreparatzea (oso kontuan izan behar da, era berean, lege-arau baten proiektua dela hau, eta eremu subjektibo zabalagoa duela).

- Organo horri eskatu zaion txostena eman ez den arren, garrantzitsua deritzogu, azaldu berri dugun moduan, Aholku Batzordearen ekainaren 2ko 8/2015 txostenari erreparatzea (gero eman zen 178/2015 Dekretuaren tramitazioan emandakoa). Txosten horrek adierazitakoari begiratuta, nabarmendu behar dugu zaila deritzola erosten den energia elektrikoaren jatorri berriztagarriaren balorazioa inplementatzeari, eta baldintza-orri teknikoetan barmenatuz bideratzea instalazioak, ekipamenduak, flotak eta bilgailuak berritzeko neurriak. Araubide harmonizatua bete behar duten kontratuen mugapenari dagokionez, egoki deritzogu hartaraztea 2012/27/EB Zuzentarauak (aurreproiektuak behin eta berriz egiten du haren erreferentzia, eta txostenak berak ere aipatzen du) estatu kideak lotzen dituela, zuzenean, hark ezarritako araubidera, eta bereizi egiten dituela estatu kide horiei ematen zaien agindua gauzatuko duten eskualde mailako eta tokiko erakunde publikoekiko, arautzen diren neurriak sustatze aldera¹⁹; beraz, egokia litzateke neurriak beste kontratu batzuetara zabaltzeko aukera aztertzea (hori bera adierazi du ILP Sailak). Araua horrela zabaltzen baldin bada,

¹⁸ Alderdi hori arautzean, zalantza bat sortzen da, berriro ere, ez baita zehazten zer eragin izango duten aurreikuspen funtzional horiek foru-organoen autoan tolateta ahalmenean.

¹⁹ 2012/27/EE Zuzentarauaren 6.3 artikulua

haren norainokoa ez da mugatuko araubide harmonizatuko kontratuetara.

- Gai-alor horretako arau-erreferentzietako bat da ia ilaren 16ko 15/2014 Legearen (sektore publikoa arrazionalizatu eta administrazioa eraberritzeko beste zenbait neurri buruzkoa) hamahirugarren xedapen gehigarria. Estatuko administrazioaren organoek bete behar dituzte xedapen horiek, baina pentsatzekoa da, bertan emandako arau batek antzeko mekanismoak aratu beharko lituzkeela, gutxienez. Zehazki, adierazitako xedapen horren 3. eta 4. puntuetan arautzen direnak.
- Inbertsioen kontularitza-eragina. Adierazi diren kontratu-neurriak bultzatzean, beti egin behar da haien kontularitza-eraginaren zenbatespen egokia. Hori horrela, ohartu behar da, aurreproiektuak alderdi hori zuzenean arautzen ez duen arren, higiezinetan instalazio efizienteak jartzeko inbertsioen barnean egiten diren energia-eraginkortasuneko lizitazioek derrigorrean jaso behar luketela defizit publikoan izango duten eragina. Agerikoa da EAEko legegilearen eskumenetik kanpo geratzen direla defizit publikoaren gaineko kontzeptuen zehaztapena (neurri handi batean, EBko organoen irizpideari jarraitu behar zaio alor horretan); hala ere, azter zitekeen bestelako xedapenen bat emateko aukera, eraikinetan energia-eraginkortasuna iristen lagundu eta aurrekontuen defizitaren gaineko eskakizunetara loturik ez dauden ekimenetarako. Horen adibide dira arriskua energia-zerbitzuen esleipendunaren bizkar uzten duten proiektuen sustapena (emakidak, baldin eta ekipamerdu efizienteenak esleipendunaren jabetzakoak baldin bada, edo lankidetzak publiko-pribatuko jarduerak, baldintza jakinetara atxikirik baldin badaude).
- Berrikuntzarako kontratazio publikoa. Eremu horretan, iradokizun moduan, adierazten da aukera dela, lege-lerruneko testu bat egin behar dela baliatuta, "berrikuntzarako kontratazio publikoa"²⁰ sustatuko duen xedapenen bat barneratzea aurreproiektuaren aplikazio-eremuan. Aukera horrek traktore-lana egiten du I+G+b jardunen eremuan (EGL Sailean bertan ere jardun-eremu zabala dute jarduera horiek), baina, horrez gainera, eskaintzaen kalitatea eta prezioa hobetzeko tresna da, hau da, agindutako zebitzu publikoen eraginkortasuna handitzeko bitartekoa²¹.

²⁰ Ildo hori jorratzen du 2014/24/EB Zuzentarauak (47. kontuan-hartuzkoa)

²¹ Estatu-zuzenbidean barneratua zenbait xedapenetan, hala nola Sektorre Publikoko Kontratuei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 22 artikuluan.

f) Aurreproiektuaren 3. atala, "Garraioa eta mugikortasuna", oro har aztertu ondoren, hau ohartu behar dugu:

- Aurreproiektuaren 19.1 artikulua "sustatu" hitza darabil "garraioen mendekotasuna" kontzeptu generikoarekin batera, eta horiek 19. artikulua izenburuak berak darabilen "ibilgailuak" eremu espezifikora mugatzea iradokitzen dugu (beharrezkoa baldin bada, eta "rentingarekin" adierazi den moduan, Lege hau bete beharrekoa duten erakundeei berezko zaizkien egitekoak betetzeko erabiltzen diren ibilgailu guztiengana zabal daiteke bere aplikazioa). Maiz askotan, hirugarren pertsonetik bultzadarekin lotzen da "sustatzea" kontzeptua, baina zehaztapen hori eginda, beste ibilgailu batzuetara zabaldu nahi da bere aplikazio-eremua, antolamendu orokorretik landa.
 - Arraroa egiten da 19.3 artikulua ingurumen-eginkizunetan oinarritzea xedapen horrek araututako salbuespenak, ez baita horren gaineko bestelako oharpenik egiten; horrenbestez, dar horiek zehaztea eskatzen dugu, oinarri egoki bat ezartzeko eta ez eragiteko Legean bertan oinarritu gabeko desberdintasunik.
 - Aurreproiektuko 19.5 artikulua ez du arautzen titulartasun publikoko eraikinek berariazko aparkalekuak izan behar dituzten ibilgailu elektrikoentzat (kargatzeko guneen kokapeneko eremuez ari daiteke).
- Eman asmo den arauaren objektuarekiko eta subjektuarekiko salbuespen bat dakar 20. artikulua, bestelako hartzaileak batitu: bidaiariak errepidez garraiatzeko zerbitzu publikoa ematen dutenak. Espedienteak ez du horren gaineko adierazpen garbirik egiten, eta ez da aztertu, enpresen gaineko eraginaren txostenean ere, zer lotura eta ondorio izango dituen zerbitzu horiek ematen dituzten pertsona partikularrekiko.

Zehazki esateko, eman asmo diren xedapen horiek eragina dute Eusko Legebiltzarrak emandako bi legetan, hala nola martxoaren 18ko 4/2004 Legea (Errepideko Bidaiari Garraioarena), eta ekainaren 29ko 2/2000 Legea (Bidaiariak Herri Barruan eta Herriz Kanpo kotxez garraiatzeko Zerbitzu Publikoa arautzen duena).

Ezarri asmo diren betebeharrak arauan zer forma juridikoren bidez barneratu nahi diren gehiago aztertu eta bestelako alderdi juridikoetan

(besteak beste, arauaren eraginpeko sektoreetako enkondeen parte-hartzearen premia suerta daitekeela) sakondu gabe, esan behar da memoria ekonomikoan eta enpresen gaineko eraginaren txostenean aztertu eta adierazi beharko lirakeela, egitasmoan aipatu diren beste alderdi batzuen moduan.

g) Hirugarren kapituluak "Borondatezko tresnak eta sustapena" arautzen ditu, eta hauek nabarmendu behar ditugu:

- o Aurreproiektuaren 26. artikulua berariaz arautzen du Administrazio honek balia dezakeen ahalmen bat, lege-erabakien birtekotzarik gabe. Energiaren eremuan dituen ahalmen guztiak egztatu ondoren, ez dago eragozpenik, diru-laguntzen alorrean gaur egun indarrean den araubideari erreparatuta²², xedapen hori arautzeko, lege baten artikulua batean haren aipamenik egin beharrik izan gabe.

Aintzat hartuta xedapen hori, indarreko araubideari ezer berririk ez dakarkion aldetik, kendu egin daitekeela, nabarmendu behar da artikulua ez datorrela bat, EAEko Administrazioaren aipamena egiten duen aldetik, testuan zehar, eta baita 26. artikuluhorren 2. puntuan, energiaren alorrean eskumendun den Sailari egiten aizkion etengabeko aipamenekin. Hori bera esan daiteke 262 artikulua arautzen duen xedapenarekin; izan ere, sustapen-jardura horren modalitate bat dira sariak eta organo horrek ematen dituen gaur egun. Ondorioz, puntu hori xedatzeak eragin estetikoa du soil-soilik.

Hori horrela, egia da gai hori, hasiera batean, legegintzako jardura zehatzik burutu gabe landu daitekeela, baina egoki deritzogu Europar Batasunak energia-eraginkortasunaren alorrean bultzatzen ari den laguntza-ildoekiko kontraste bat egiteari (Europa 2020 Estrategiaren barnean, bost helburu estrategikoetako batean kokatzen da²³). Abaguneko aukera dela alde batera utzita, EBk ematen dituen

²² Gaur egun, oinarritzko araubidea osatzen dute Estatuko organoek emandako arau-xedapenek (8/2003 Legea, Diru-laguntzen lege orokorra, eta hura garatzeko erregelamendua, 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua) eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen VII. titulua (azaroaren 11ko 1/1997 Dekretuak onartu zuen haren testu bategina).

²³ Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatua uaren 194. artikulua arautzen du energiaren alorreko lege-oinarri berariazkoa, EBk eta haren kide diren estatuak partekatutako eskumenei begiratuta. EUROPA 2020 Estrategiak (COM(2010) 2020 azkena EUROPA 2020 BATZORDEAREN KOMUNIKAZIOA: Hazkunde adimentsu, jasangarri eta integratzaileko estrategia) bost helburu strategiko ditu. Zehazki, 3. estrategia, "Klima-aldaketa eta energiaren kudeaketa jasangarria", berariazko hiru helburu hauek ditu: 1) berotegi-efektuko gasen isurketen % 20 murriztea (edo % 30, ahal izanez gero), 1990eko datuekin erkatuta; 2) energia berriztagarrien % 20ko kuota lortzea; eta 3) energiaren eraginkortasuna % 20 handitzea.

laguntzei dagozkien araugintza-tresnak aztertzea egokia izan daitezke arau-testu honetan alderdi konkretu batzuk barneratzeko eta EAEko administrazio publikoek eta haren inguruko erakundeek laguntza horiek ezagutarazteko eta laguntza horiek eskuragarri egiteko programak eta neurriak prestatzeko.

Azkenik, 26. artikuluko horren 1. puntuak erregelamendu bidezko garapenari egiten dion aipamenak, gure aburuan, Lege honen xedapen zehatzen erregelamendu bidezko garapenaren gainean dihardu; betiere, garapen hori egingarria baldin bada. Izan ere, haren edukietako asko zuzenean betetzeko modukoak dirudite. Ez litzateke, beraz, berriazko erregelamendu-egitura bat erabilko alor horretako laguntzak emateko, ez baitugu ikusten zer eduki izan dezakeen Administrazio honek diru-laguntzen alorretik kanpo egin ditzakeen erregelamendu-garapenetan.

- 27. artikuluko gainean, adierazi behar da, Bulego honek aztertzeak dituen alderdietan, artikuluko horrek arautzen dituen "Borondatezko hitzarmenak" zehaztugabeak direla, nahiz eta lege-mailako testu baten esparruan arautuak izan. Zehazki, ez dakigu zer subjektuk izenpetuko dituzten hitzarmen horiek, nor eskatu dezakeen horien betearazpena eta zer neurri har ditezkeen horiek betetzera behartzeko.

Alde horretatik, jakina da lege honek arautzen dituenetatik haragoko neurriak hitzartuko dituztela hitzarmen horiek, eta, ondorioz, neurri gehigarri horietarako baliabide ekonomikoak bideratzeko, beti erreparatu behar zaiela eskura dauden baliabide ekonomikoak; horrez gainera, beti egiaztatu behar da egiaz betetzen direla lege honek eta gainerako legeek gai-alor hori arautzeko ematen dituzten aginduak.

- h)** Azkenik, ohartarazi behar da aurreproiektuaren lagarren xedapen gehigarriak, energiaren eremuko edukia izan arren, ez dakarrela lege honen xedearen eta eremuaren baitako edukirik (pentsatzekoa da horregatik jarri dela arauaren kokaleku horretan). Xedapen horren hartzaile dira "gasa eta elektrizitatea banatzen duten enpresak" (ez du eraginik erregaia banatzen duten enpresengan), eta informazio xehea emateko betebeharra ezartzen die EAEko udalei.

Gure aztertze-lanari dagokionean, ez da xedapen horren gaineko berriazko aipamenik egiten espedientean, ezta enpresetik eraginaren

eta administrazio-kargen gaineko txostenean ere, eta, ondorioz, ez dugu haren oinarriaren eta arrazoen berririk.

Alde horretatik, eskatutako informazioa web-orrien bidez edo beste erakunde publikoren baten bidez ematen baldin bada, ez dirudi ezarri nahi den obligazioak oinarri bereziki sendorik duenik. Halaber, pentsatzekoa da xedapenak, "kontsumitzaileak" aipatzen dituenen, ez dela aipamen zuzena egin, baldin eta udal-eremuan lege hau betetzera behartuta dauden kontsumitzaileak adierazi nahi badin badira; bestalde, kontsumitzaile horiek udal-egituren partaide edo horiei atxikitako kontsumitzaileak baldin badira, informazio hori izan behar lukete, kontsumitzaile diren aldetik.

Hori horrela, xedapen horren testua berraztertu behar dela iruditzen zaigu, eta, edonola ere, zehaztu egin behar dela zera eragin izango duen eta zer administrazio-karga ekarriko dizkien betebeharrak horri lotutako enpresei.

C) Antolamenduaren gaineko eragina

Txosten honen A.2.3 idatzi-zatian jasangarritasun energetikoaren batzordeei buruz adierazitakoari lotu behar gaitzaizkio puntu honetan. Edonola ere, berriro adierazi behar da proiektuak xedapen laburrak darabiltzala batzorde horiek arautzeko, espedienteak ez duela horien beharrezanari buruzko justifikaziorik ematen, eta ezin dela baloratu, ondorioz, haien antolamendua arrazoizkoa ote den, funtzioak bikoizten ote diren edo bikoiztasun horiek saihesteko modurik ba ote den.

D) Ogasunarekin eta ekonomia- eta finantza-araubidearekin lotutako alderdietan izango dituen eraginak

Aurrez adierazitako hori guztia egiaztatu ondoren, aztertutako proiektuak ogasunaren alorrean, eta ekonomia- eta finantza-araubidearekin lotuta, izan ditzakeen eraginak aztertzea dagokigu, hau da, Euskadiko Ogasun Nagusiari dagozkion gai-alor berezkoen gainean izan dezakeen eragina. Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategnaren 1.2 artikulua zehazten ditu gai-alor horiek (azaroaren 17ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartu zuen arau batekin hori)²⁴.

²⁴ Ondarearen gaineko araubidea; aurrekontuak egiteko eta kudeatzeko prozedura; Euskal Autonomia Erkidegoaren jardura ekonomikoak betetzeko duen kontularitzako eta kontroleko sistema; kontratazioa; Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusia; zerga propioen eta zuzenbide publiko eta pribatuko gainerako diru-sarreren gaineko araubidea; zorpetze-erregimena; bermeak emateko erregimena; laguntzen eta diru-laguntzen araubide orokorra; Autonomia Erkidegoak bere ogasun nagusiaren barruko gainerako gaien inguruan dituen prerrogatibak

Adierazi behar da ez dela zuzenean erasaten Euskadko Ogasun Nagusiaren berezko gai-alorrik; hala ere, aurrez adierazi duguna gogoratu behar da, hau da, ondare-azterketa xeheago bat egitea komeni dela aurreproiektuaren egitura objektiboa eratzeko, eta kontuan hartu behar direla kontratazioaren gainean egin ditugun oharpenak (izan ere, zenbait ekimenek izan beharreko kontularitza-tratamenduaren gaineko aipamenak egiten dira).

E) Eragina ekonomian eta aurrekontuetan

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean izan dezakeen eragin ekonomikoa eta aurrekontuetan izango duen eragina zertuko da puntu honetan, bai gastuaren ikuspegitik, bai diru-sarreraren ikuspegitik.

1) Gastuaren ikuspegia:

Gastuaren ikuspegia aztertzeke, ezinbestekoa da memoria ekonomiko bat izatea eta memoria horretan zehaztea arauaren testuak izan ditzakeen eragin askotarikoak. Hori da, hain justu, tresna honen arau-egituratzearen oinarria, funtsezkoa den aldetik ikuspegi horren gaineko iritzi bat osatzeko, eta organo eskudunari oinarri bat emateko, haren gaineko erabakia har dezan.

Alde horretatik, gogoratu behar da hau arautzen duen Xedapen Orokorren Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 10.3 artikulua:

"Espedienteak memoria ekonomiko bat edukiko du, eta, hor, egitekoa den arauaren kostuaren zenbatespena azalduko da: gatu eta diru-sarrerak zenbatuta agertuko dira, eta, orobat, herri-administrazioaren aurrekontuetan izango duen eragina, finantzaketa-iturri eta -erak nahiz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ekonomia- eta araudi-kontrolaren gaineko arauak zehaztutako beste alderd batzuk. Egitekoa den arau horren aplikazioak beste herri-administrazio batzuei, banakoei eta oro har ekonomiari ekarriko dion kostua ere neurtuko du".

Arau horren aurrekoa izanagatik, indarrean da oraindik Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren barne-kontrol ekonomikoa eta kontabilitatea garatzen dituen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 42 artikulua, eta honako hau arautzen du:

"42.1 artikulua.- ... gutxienez honako hauek jaso behar dira bertan:

erregimena; eta izaera ekonomikoa duten gainerako eskubideak eta betebeharrak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoak baldin badu horien gaineko titulartasuna .



a) Hori indarrean jartzeak ekarri ditzan aurrekontu-gastu eta diru-sarreraren kuantifikazioa, ohikoak direnak eta kapital-eragiketetatik datozenak berezitu egin beharko direla eta gastu edo diru-sarrera horien destinoa identifikatu egin beharko dela.

b) Aurrekontu gastuen finantzaketa, eraginpean dauden baliabideak eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorrean aparte ematen diren finantzaketa-iturriak aipatuz.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiak beretzko dituen gaietan eta aurrekontu-araubidean eragina duen xedapeneko aldeak identifikatzea, xedapenaren aurrekariak deskribatzea eta horren beharrak justifikatzea.

d) Proposatutako xedapena hartzen duen aurrekontu-programa ekonomikoa deskribatzea, arau hori indarrean jartzeak bere baitan hartuko dituen helburuak, egintzak eta adierazleak identifikatuz eta hori aplikatzeak ekonomian eta gizartean izango dituen eraginaren ebaluazioa eginez.

e) Programak noraino gauzatu diren eta bilatutako helburuak noraino lortu ebaluatzea, diru-laguntzapeko programak garatzeko emandako arauak direnean. Diru-laguntzen deialdien ebaluazioa ere egin beharko da, deialdi horiek beste ekitaldi batzuetan onartutako jarraipena direnean.

2. Aurrekontuetan, diruzaintza eta/edo kontaduritzan eragina duten espedienteak izan daitezenean, aplikagarriak izan daitezkeen arauetan xedatzen denaren arabera egokitzat jotako kontadurtza-agiriak ere aipatu beharko dira.

3. Era berean, proposamenaren gai izan den erregulazioari indarra ematen dioten iritzi orokorrak eta juridikoak ezagutzeko bide eman dezaketen datu, txosten eta ikerketa guztiak jasoko beharko dira memoria horretan. Txostena emateko bideak erraztuko dituzten beste edozein berri ere bai”.

Espedientean jasotako dokumentazioa aztertu ondoren, berriro adierazi behar dugu aurreproiektuarekin batera doan memoria ekonomikoak azalpen mugatuak ematen dituela; izan ere, planteamenduen deskribapen orokorrak egiten dituen energiaren gai-alorrean, eta ikuspegi orokor batetik aztertzen dituen kostu-aurrezpenak (ez ditu, sikiera, maila instituzional bakoitzeko xehetasunak adierazten), oso oinarritzekoak dira beharizan ekonomiko eta finantzarioen gaineko progresioaren azalpenak, eta egindako inbertsioen amortizazioaren gainekoak, egin asmo diren aurrezpenak egiaztatzeko beharko diren betetze-mailen zehaztapena, eta kostu energetikoen gaineko azterketa, baina, horrez gainera, ez du bestelako zerbatespenik egiten antolamendu-alderdiek eta txosten honetan adierazi diren beste alderdi zehatz batzuek eragingo dituzten kostuak aurreikuszeko, eta nabarmentzekoa da, era berean, xehetasun handiagoz aztertu behar direla zenbait esparru produktibotan (pertsonek garraioan eta energiaren hornitzaileengan bereziki) izango diren eraginaren gaineko aurreikuspen batzuk.

Jarduera administratibo eta burokratiko ugari egin behar dira eman asmo den araua betetzeko, eta, horrez gainera, hura betetzeko izango duten EAEko



administrazio guztiek inbertsio nabarmenak egin beharko dituzte; horrenbestez, iruditzen zaigu, gaur idatzita dauden moduan, ez direla behar bezain zehatzak agiri horretan ematen diren azalpen ekonomikoak eta aurrekontuen eta alderdi finantzarioen gaineko azapenak. Horrenbestez, ondorioztatzen dugu xehetasun eta zehaztasun handiagoz azaldu behar direla ezarri asmo diren neurrien oinarriak, haiek eragingo dituzten kostuen zenbatespenak eta horien guztien finantzazio-bideak.

2) Diru-sarreraren ikuspegia:

Neurrien ezarpenak eragingo dituen aurrezpenak aletzea da memoria ekonomikoaren planteamendu orokorra. Horrek ez dakar, berez, diru-sarrerarik, energia eta erregaiak ordaintzean eragingo den gastu-murrizpenaren aurreikuspena egiten baita. Adierazi den moduan, memoria ekonomikoa laburregia da alderdi hori argitzen ahalegintzen denean, zenbateko orokorrak ematera mugatzen baita, denborasekuentzia oinarritzorik zehaztu gabe, eremu instituzionalak bereizi gabe, eta aurrezpena zer kontzeptutan gauzatuko den zehaztu gabe.

Bestalde, ohartu behar dugu, berez diru-sarrera ez izanagatik ere, memoria ekonomikoak "euskal gizartean jarduera ekonomia sorraraztearen" efektua nabarmentzen duela, aurreproiektuko neurriak ezarri ondoreneko eragin moduan. Zaila izan daiteke eragin edo inpaktu hori zenbatestea, baina, gure ustez, posible da zehaztea, gutxienez, zer sektorek jasoko duten neurrien ezarpenaren onura, eta nola ondorioztatuko den eragin zuzen hori eremu europarreko merkatu ireki batean.

Adierazi diren alderdi horiez landa, ez da hauteman, diru-sarreraren ikuspegitik, eman asmo den arauak bestelako eraginik duenik.

F) Beste administrazio publiko batzuegan, partikularrengan eta, oro har, ekonomian, izango duen eragina

Azaldu dugu, orain bitartean, ez dela zenbatespen neurritsurik egin, puntu honek adierazten dituen kostuen aurreikuspena zehazteko. Lehen adierazi dugun moduan, abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 10.3 artikulua arautzen dituen edukiak barneratu behar dira espedientearen memoria ekonomikoan; hau da, araua aplikatzearen ondorioz gainerako administrazio publikoetarako –udal-arlokoak alde batera utzita–, partikularrentzako eta ekonomia ordokorrerako ekar ditzakeen kostuen ebaluazioa egin behar da.

IV.- ONDORIOA:

Egin diren oharpenen arrazoiaren xehetasunari ukorik egin gabe, honako ondorio hauek azaldu behar ditugu:

- Aztertzekeo igorri diguten espedienteak neurri handian betetzen ditu irailaren 22ko 178/2015 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eremurako agintzen dituen xedapenak. Hori horrela izanda ere, kontuan izan behar da proiektuaren eremu subjektiboak EAEko beste administrazio publiko batzuetara zabaltzen duela bere eragina, eta, horretarako, haien ikuspegia barneratu behar duela eta arautu asmo diren neurriak egokitu eta arrazoitu behar dituela.
- Zer eremu arautzen duen aintzat hartuta, EBko eta Estatuko araubidearen erreferentziak egiten dira, baina espedienteak ez du zehazten aurreproiektuak zer eragin egiazko izango duen, araubide hartatik landa. Ezinbestekoa da alderdi hori zehaztea, arautu asmo diren neurriak ezartzeko benetan behar diren aurrekontuen zenbatespena egiteko.
- Era berean, administrazioaren beraren ikuspegitik, aurreproiektuak nabarmen lantzen du energiaren eremua, baina oso apala da gainerako eremuen lanketa eta integrazioa (ingurumenarena, lurralde-plangintzarena, ondarearen, higiezinaren eta ibilgailu-floten kudeaketarena, garraioena eta txostenean adierazi diren gainerako eremuena). Gobernu-mailetan ageri den ikuspegiaren edo perspektibaren gabezia horrek galarazi egiten du indarrean diren tresna orokorreko integrazioa, eta horrek efizientzia-galera bat dakarkie administrazioei.
- Nabarmenezkoa da eskakizun burokratiko eta administratibo ugari dakartzala arautu asmo diren neurrien ezarpenak. Neurri horiek aurreproiektu honen ondorioz ezartzekoak diren heinean, hausnarketa handiagoa behar zuten eta behar bezala dokumentatuta adierazi behar zen haien integrazioa, denbora-segida eta, batik bat, neurriak ezartzeak eta inplementatzeak dakartzan kostuen analisia.
- Espedienteak, oro har, ez du behar bezala oinarritutako ikuspegi osorik ematen, eta ez du balioztatzen zer eragin izango duen Administrazio Publikoaren aurrekontuetan, ez ditu finantzazio-iturriak eta -bideak adierazten, eta ez du oinarritzko ebaluaziorik egiten, jakiteko hura betetzeak zer kostu izango duen, beste administrazio publiko batzuentzat, pertsona partikularrentzat eta, oro har, ekonomiarentzat. Zuzendu egin behar dira gabezia horiek.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko ekaina

Iñaki Vaquero Manrique
EKONOMIAREN ETA ARAUEN KONTROLA

OE, Javier Losa Ziganda
KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOKO ZUZENDARIA

XIV

DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI / EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOAREN IRIZPENA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN
ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA
PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VASCAS**




AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA
COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
EUSKADI

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA-COMISION JURIDICA ASESORA**

Fecha de la firma: **08/07/2016 11:22:16**

Validación de la firma:  **Correcta**

**SRA. CONSEJERA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD**

El Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadij en la sesión del día 7 de julio de 2016, con la asistencia de los miembros que al margen se expresan, ha examinado su **consulta**, registrada con el nº 138/2016, relativa al **anteproyecto de Ley de sostenibilidad energética de las administraciones públicas vascas (Ref.: DNCG_LEY_77255/2015_03)**.

Tras su deliberación, ha emitido por unanimidad el siguiente dictamen. Expresa el parecer de la Comisión, el vocal Sr. Zorrozuza Aierbe.

PRESIDENTE:

D. Sabino Torre Díez.

VICEPRESIDENTE:

D. Xabier Unanue Ortega.

VOCALES:

D^a M^a Teresa Astigarraga Goenaga.

D. Luis M^a Eskubi Juaristi.

D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo.

D^a Fátima Saiz Ruiz de Loizaga.

D. Gorka Erlantz Zorrozuza Aierbe.

D. Imanol Zubizarreta Arteché.

D. Ion Gurutz Echave Aranzabal.

D. Iñaki Calonge Crespo.

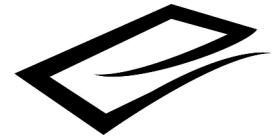
SECRETARIO:

D. Jesús M^a Alonso Quilchano.

DICTAMEN N° 127/2016

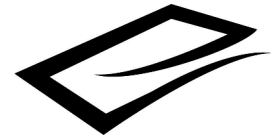
ANTECEDENTES

1. El día 20 de junio de 2016 se recibe en la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi la Orden de 17 de junio de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que solicita a la Comisión que dictamine el anteproyecto de Ley de sostenibilidad energética de las administraciones públicas vascas.
2. La solicitud se realiza con carácter de urgencia, a amparo de lo previsto en el artículo 26.2 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, por la necesidad de dar cumplimiento a la Proposición no de ley aprobada por el Pleno



del Parlamento Vasco el 19 de febrero de 2015, en la que “se instaba al Gobierno Vasco a que, en el plazo de un año, presente una Ley de sostenibilidad energética para las administraciones públicas y su sector público en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi”. Por Resolución del Presidente de esta Comisión, de 21 de junio de 2016, se acordó la tramitación de la consulta por el procedimiento de urgencia.

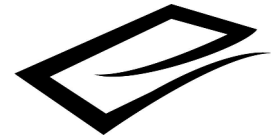
3. A dicha orden se acompaña el expediente en el que, junto con el texto definitivo del anteproyecto de ley, figuran los siguientes documentos relevantes:
 - a) Orden de 15 de septiembre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se acuerda el inicio del expediente de aprobación del anteproyecto de Ley de sostenibilidad energética de las administraciones públicas vascas.
 - b) Orden 13 de octubre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se acuerda la aprobación previa del anteproyecto de Ley de sostenibilidad energética de las administraciones públicas vascas.
 - c) Primer texto del proyecto normativo.
 - d) Informe justificativo de la ausencia de relevancia desde el punto de vista de género.
 - e) Segunda versión del anteproyecto.
 - f) Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas.
 - g) Informe de Emakunde.
 - h) Alegaciones del Ayuntamiento de Bilbao.
 - i) Alegaciones de las Juntas Generales de Álava.
 - j) Alegaciones de Euskadiko Udalen Elkarte (EUDEL).
 - k) Memoria justificativa del anteproyecto.
 - l) Informe de la Dirección de Atención Ciudadana y Mejora de la Administración.
 - m) Informe de impacto en función de género.
 - n) Tercera versión del anteproyecto.



- o) Informe de Emakunde.
- p) Observaciones del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial.
- q) Memoria económica del anteproyecto.
- r) Informe de impacto en la empresa e informe de cargas administrativas.
- s) Informe jurídico del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad.
- t) Cuarta versión del anteproyecto de norma.
- u) Nueva memoria económica del anteproyecto.
- v) Memoria sobre el procedimiento de elaboración de la norma.
- w) Informe sobre control económico normativo de la Oficina de Control Económico.

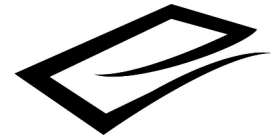
DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY

4. El anteproyecto de Ley de sostenibilidad energética de las administraciones públicas vascas (en adelante, el anteproyecto de ley) constata una parte expositiva, veintiocho artículos recogidos en tres capítulos, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
5. La exposición de motivos relaciona la normativa comunitaria en la que se enmarca, señala las acciones que se han llevado a cabo en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) en materia de energía —como la creación del Ente Vasco de la Energía en el año 1982 y la definición de la Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3E 2020)— y en materia de medio ambiente —con el documento sobre la Estrategia Vasca del Cambio Climático 2050, aprobada el año 2015—, para dar seguidamente una breve explicación del contenido del anteproyecto de ley.
6. El capítulo primero, con el título “Disposiciones generales”, abarca los artículos 1 a 9.
7. El artículo 1 regula el objeto de la ley, constituido por los deberes y obligaciones que las administraciones públicas vascas han de cumplir orientadas al impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética, así como a la promoción e implantación de energías renovables.
8. El artículo 2 regula el ámbito subjetivo de la norma, constituido por la Administración de la CAPV, las administraciones de los territorios históricos y la de los municipios y la

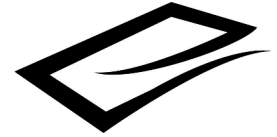


Universidad del País Vasco, así como las entidades vinculadas y dependientes de las anteriores.

9. El artículo 3 establece que la ley será de aplicación a los edificios, instalaciones y parque móvil de los anteriores entes.
10. El mismo artículo recoge cuáles son los edificios a los que no resulta de aplicación la norma.
11. El artículo 4 regula las definiciones de los conceptos más relevantes para la comprensión de la norma.
12. El artículo 5 establece como objetivos de la norma el impulso de la eficiencia en el uso de la energía y la promoción de su ahorro; la promoción e implantación de energías renovables y de otras fuentes energéticas alternativas sostenibles; la desvinculación progresiva de la utilización del petróleo y sus derivados; el fomento del transporte que use combustibles alternativos; la reducción de gases de efecto invernadero; la reducción de la factura energética; el fomento de la investigación de tecnologías que incrementen el ahorro y la eficiencia energética; la limitación de impactos nocivos en el medio ambiente; la integración de la idea de sostenibilidad energética en las distintas políticas públicas; el impulso de acuerdos entre administraciones y particulares para lograr una mayor sostenibilidad energética y la divulgación de los beneficios que reporta un mayor ahorro y eficiencia energética.
13. El artículo 6 establece los principios en los que se asienta la ley, que constituirán pautas de actuación de las administraciones públicas y criterios de interpretación de las normas que se dicten en materia energética.
14. El artículo 7 dispone que los instrumentos de ordenación del territorio, de planeamiento urbanístico y de las infraestructuras del transporte deberán incluir un estudio de sostenibilidad energética y señala los aspectos que han de incluir los citados estudios.
15. El artículo 8 dispone que al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de energía le corresponde llevar a cabo las tareas de coordinación necesarias para garantizar la coherencia de las políticas de sostenibilidad energética.
16. El artículo 9 dispone que, a fin de coordinar las actuaciones en materia energética de los diferentes entes integrantes de cada Administración, se crearán en cada una de ellas comisiones para la sostenibilidad energética con la composición que establezca cada Administración, y regula sus funciones.

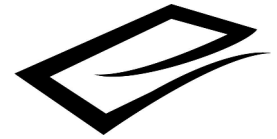


17. El capítulo II, “Objetivos y acciones”, comprende, en cuatro secciones, los artículos 10 a 25.
18. La sección primera, “Objetivos y acciones generales”, comprende los artículos 10 a 16.
19. El artículo 10 establece el deber de cada una de las administraciones públicas de realizar un inventario de edificios, parque móvil e instalaciones de alumbrado público existentes dentro de su ámbito de actuación, dispone la información que ha de recoger cada inventario y establece el plazo en el que han de ser confeccionados los inventarios.
20. El artículo 11 regula que en el plazo de un año los edificios e instalaciones con una potencia eléctrica instalada superior a 25 KW deberán disponer de contadores de energía eléctrica con determinadas características de control de consumos, debiendo llevarse a cabo el control de consumos de energía por edificio al menos una vez al año y en base mensual.
21. El artículo 12 dispone que en el plazo de tres años los edificios con una potencia térmica superior a 70 KW deberán contar con la correspondiente auditoría energética, que se renovará cada seis años, con la finalidad de realizar un diagnóstico sobre su consumo energético y sus potenciales niveles de ahorro y eficiencia energética, así como las recomendaciones de mejora, y regula los contenidos de las auditorías. El alumbrado público exterior será objeto de auditoría independiente.
22. El artículo 13 dispone que cada Administración pública habrá de diseñar, en los plazos que dependiendo de los habitantes de cada ente establece, sus propios planes de actuación energética de carácter plurianual y regula el contenido de dichos planes.
23. El artículo 14 dispone que las administraciones públicas vascas deberán alcanzar una reducción del consumo de energía, sobre el nivel base de referencia, del 25% en el horizonte 2025.
24. El artículo 15 establece que, a partir del día uno de enero de 2017, en las licitaciones de compra de energía eléctrica de las administraciones públicas vascas se valorará especialmente el origen renovable de la misma, debiendo lograr cada Administración para el año 2025 que, al menos, un 25% de los edificios cuente con instalaciones de aprovechamiento de energías renovables, incluyendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico como los de generación eléctrica.
25. El artículo 16 dispone que, además del deber de instalar sistemas de gestión centralizada de las instalaciones, la renovación de instalaciones, equipos y vehículos de cada Administración deberá hacerse teniendo en cuenta criterios de ahorro y eficiencia



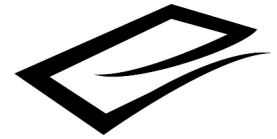
energética y utilización de energías renovables que contribuyan a la disminución del uso de combustibles derivados del petróleo, debiendo ser de alto rendimiento energético las adquisiciones por las administraciones públicas de productos, servicios y edificios mediante contratos sujetos a regulación armonizada.

26. La sección 2ª del capítulo, “Edificios”, comprende los artículos 17 y 18.
27. El artículo 17 regula los plazos dentro de los cuales han de obtener la certificación energética los edificios que ocupen las administraciones vascas o sus entes dependientes, y los plazos en los que deben mejorar su eficiencia energética los edificios cuyo nivel de calificación sea inferior a B).
28. El artículo 18 dispone que los edificios de titularidad de las administraciones públicas vascas cuya construcción se inicie dos años después de la entrada en vigor de la ley deberán de ser de consumo de energía casi nulo y recoge los supuestos en que podrá dispensarse tal obligación (los mismos que quedan excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto 235/2013, de procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios). A este respecto, interesa señalar que la norma anterior establece en su disposición adicional segunda que los edificios que se construyan a partir del día 31 de diciembre de 2018 serán edificios de consumo de energía casi nulo.
29. La sección 3ª del capítulo, “Transporte y movilidad”, comprende los artículos 19 y 20.
30. El artículo 19 dispone que las administraciones públicas fomentarán el uso de combustibles alternativos y, a partir de 2020, con excepción de los que vayan a ser destinados a algunos servicios, el 100% de los vehículos que adquieran deberán utilizar combustibles alternativos.
31. Por otra parte, establece que los municipios deberán facilitar que para el año 2025 exista un punto de recarga de vehículos eléctricos por cada 2000 habitantes, debiendo contar con puntos de recarga los nuevos edificios que adquieran.
32. El artículo 20 establece que los servicios de transporte de viajeros y viajeras por carretera deberá ser prestado por vehículos que utilicen combustibles alternativos, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y los reglamentos que la desarrollen, y que los instrumentos de otorgamiento o renovación de las licencias o concesiones deberán tener en cuenta que el 100% de la flota renovada de vehículos habrá de utilizar combustibles alternativos a partir de 2020.
33. El artículo 21 dispone que los municipios podrán prohibir o restringir, a fin de evitar un incremento excesivo del uso de la energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero, el acceso a determinadas zonas del término municipal a vehículos que no



utilicen combustibles alternativos o a aquellos que sobrepasen determinados niveles de emisión, y podrán reservar zonas para los vehículos que utilicen combustibles alternativos, con espacios para su estacionamiento o reducción de tarifas en zonas públicas o aparcamientos municipales.

34. El artículo 22 regula, en relación con los planes de movilidad urbana, las partes de que constan y los plazos en los que deberán adoptarlos los municipios, según el número de habitantes. El plan, cuya vigencia será de cinco años, deberá indicar los objetivos, las inversiones comprometidas y el horizonte temporal para su consecución, debiendo contar su tramitación con una aprobación inicial y otra definitiva, garantizándose la participación e información de la ciudadanía.
35. Las diputaciones forales adoptarán los planes de movilidad correspondiente al transporte interurbano, sin que el anteproyecto establezca plazo para ello.
36. La sección 4º del capítulo, “Otras obligaciones”, comprende los artículos 23 a 25.
37. El artículo 23 regula la obligación de las administraciones públicas de publicar, al menos cada dos años, un informe sobre las medidas que adopte para incrementar el ahorro y la eficiencia energética, incluyendo los planes de actuación energética regulados en el artículo 13, y señala los extremos que ha de recoger el informe.
38. El artículo 24 dispone que las administraciones públicas deberán adoptar un plan de formación del personal gestor y técnico relacionados con la compra, mantenimiento y utilización de instalaciones consumidoras de energía sobre técnicas para aumentar el ahorro y la eficiencia energética, en el plazo de un año desde la publicación de la ley.
39. El artículo 25 regula la obligación de las administraciones públicas de exhibir en un lugar fácilmente visible, una vez que lo hayan obtenido, la etiqueta de eficiencia energética de los edificios y la de los vehículos nuevos que adquieran a partir de la entrada en vigor de la ley.
40. El capítulo III, “Instrumentos voluntarios y fomento”, abarca los artículos 26 a 28.
41. El artículo 26 dispone que la Administración General de la CAPV podrá establecer para las administraciones públicas incrementos en la cuantía de las ayudas en materia de energía, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
42. El artículo 27, en los apartados 1 y 2, establece que mediante acuerdos voluntarios las administraciones públicas se comprometerán a llevar a cabo determinadas medidas de sostenibilidad energética que superen los mínimos legalmente exigibles, siendo tales acuerdos de obligado cumplimiento para las partes.



43. En el apartado 3 dispone que el departamento competente del Gobierno Vasco en materia de energía promoverá e impulsará la colaboración social en el uso responsable de la energía para la consecución de los fines de la ley, lo que podrá incluir la suscripción de acuerdos voluntarios precisos con agentes del sector energético y otros agentes sociales.
44. El artículo 28 dispone que las administraciones públicas divulgarán las pautas y técnicas sobre sostenibilidad energética a través, entre otros medios, de campañas de educación, sensibilización y publicitarias, a través de los programas de enseñanza primaria y secundaria, y de la publicación y distribución de guías sobre pautas y técnicas de ahorro y eficiencia en el uso de la energía, pudiendo el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de energía convocar premios para la divulgación y sensibilización en la materia.
45. La disposición adicional primera establece que las obligaciones que establece la ley serán cumplimentadas por los correspondientes consorcios o mancomunidades que gestionen mataderos, abastecimiento y depuración de aguas, y el tratamiento de residuos, debiendo prestarles su colaboración las administraciones que participen en tales entidades.
46. La disposición adicional segunda establece que en el plazo de nueve meses se aprobará el nivel base de referencia del consumo energético global de las administraciones públicas que servirá de punto de partida para las medidas establecidas en la norma, debiendo de tomarse en consideración para su determinación la media de los tres últimos años. Alternativamente, de manera justificada, se podrá tomar en consideración como nivel base el consumo energético del último año.
47. La disposición adicional tercera establece que, entanto no se disponga de la norma o metodología para la cuantificación del consumo de energía casi nulo en un edificio, se considerará equivalente a contar como mínimo con calificación energética tipo A.
48. La disposición final primera establece que el Parlamento Vasco, el Tribunal de Cuentas y el Ararteko elaborarán sus propios planes de sostenibilidad energética, pudiendo tener en cuenta lo dispuesto en esta ley.
49. La disposición final segunda establece que la ley entrará en vigor a los seis meses de su entera publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.



INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN

50. Este dictamen se emite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que incluye como ámbito de la función consultiva de la Comisión los anteproyectos de ley, cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos, siempre que no se encuentren incursos en las excepciones que contempla, lo que no es el caso.
51. Dado el carácter de urgencia con el que ha sido solicitado el dictamen y, dentro de esa urgencia, el escaso plazo del que se ha dispuesto para emitirlo por parte de esta Comisión, el análisis resultará inevitablemente limitado y dirigido fundamentalmente a analizar los objetivos del anteproyecto de ley en el marco competencial y legal que luego se describirá.

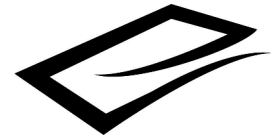
CONSIDERACIONES

I EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN

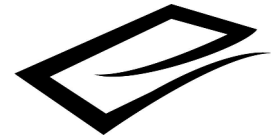
52. El procedimiento que debe seguirse en la elaboración del anteproyecto es el establecido en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general (en adelante, LPEDG).
53. Ello no obstante, esta Comisión ha expresado las diferencias que existen en la valoración que debe hacerse del procedimiento en atención a la diferente naturaleza del producto al que conduce la tramitación, pues no es lo mismo que sea un reglamento que termina su tramitación con la aprobación por el Gobierno y que debe producirse con total respeto a la ley, o una iniciativa legislativa que ha de seguir, tras la aprobación del Gobierno, la correspondiente tramitación parlamentaria, sin otra sujeción que el cumplimiento del ámbito competencia derivado del Estatuto de Autonomía y la Constitución.
54. Como también hemos dicho de forma reiterada, la LPEDG ha querido orientar la actividad del Gobierno a fin de que procure seguir en la redacción de los proyectos de ley la misma metodología que emplea para elaborar las disposiciones generales. De ese modo, señala su exposición de motivos, se contribuye muy positivamente a facilitar la labor del titular de la potestad legislativa, pues se le presentan para su discusión y decisión unos proyectos mejor fundados y articulados, con una técnica jurídica más depurada y apropiada para alcanzar los objetivos que se propone.



55. Consecuentemente, abordaremos el examen del expediente a fin de contrastar si el procedimiento seguido para obtener el texto que se somete a dictamen es conforme a la LPEDG.
56. Se ha dictado la orden de iniciación prevista en el artículo 5, se ha redactado el anteproyecto de disposición cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 6, y se ha dictado la orden de aprobación prevista en el artículo 7.1, todos de la LPEDG.
57. Se ha informado por la Asesoría jurídica del departamento proponente, analizándose el fundamento objetivo de la norma, su adecuación aderecho y la observancia de las directrices de técnica normativa, cumpliendo lo previsto en el artículo 7.3 LPEDG.
58. Se ha dado participación a las siguientes administraciones públicas y entes de la comunidad autónoma, además de a los departamentos del Gobierno Vasco, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 LPEDG
 - Ayuntamiento de Bilbao.
 - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
 - Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
 - Asociación Vasca de Municipios (EUDEL).
 - Juntas Generales de Álava.
 - Juntas Generales de Bizkaia.
 - Juntas Generales de Gipuzkoa.
 - Diputación Foral de Álava.
 - Diputación Foral de Bizkaia.
 - Diputación Foral de Gipuzkoa.
 - Euskalherriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco.
59. Se han recibido comunicaciones de los siguientes departamentos, instituciones y administraciones:
 - Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial.



- Juntas Generales de Álava.
 - Ayuntamiento de Bilbao.
 - EUDEL.
60. Se ha elaborado la memoria económica prevista en el artículo 10.3 de la LPEDG.
 61. Aunque en un primer momento se consideró innecesaria la realización de la evaluación previa de impacto en función de género, por entender el departamento que tramita el expediente que el anteproyecto de ley era de carácter organizativo, a instancia de Emakunde se ha llevado a cabo tal evaluación prevista en el artículo 19 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres.
 62. Ha informado Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la misma Ley.
 63. Ha informado la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.
 64. Se ha efectuado una evaluación del impacto de la disposición en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 16/2012, de 28 de junio, de Emprendedores del País Vasco.
 65. Ha informado la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (DACIMA), según lo dispuesto en el artículo 18.c) del Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia.
 66. Ha informado la Junta Asesora de Contratación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21.2.a).4, del Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre régimen de contratación de la Administración de la CAPV.
 67. Se ha realizado una memoria justificativa de la factibilidad o fundamentación de la norma, así como de la tramitación del anteproyecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 10.2 de la LPEDG.
 68. El texto ha sido informado por la Oficina de Control Económico, de acuerdo con lo dispuesto en el título III, capítulo IV de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la hacienda pública vasca, y el Decreto 464/1995, de 31 de

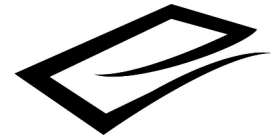


octubre, por el que se desarrolla el control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración General de la CAPV.

69. Cabe concluir, por tanto, que la tramitación del anteproyecto de ley se ha adecuado en lo fundamental a lo dispuesto en la LPEDG.

II ASPECTOS COMPETENCIALES Y MARCO NORMATIVO

70. Para realizar el encuadre material de la competencia es preciso atender al contenido del anteproyecto, así como al carácter, sentido y finalidad de sus disposiciones.
71. En principio, atendido su objeto (artículo 1), delimitado su ámbito subjetivo y objetivo (artículos 2 y 3) —está destinado a ordenar la actividad de las administraciones públicas vascas, pues se establecen reglas que afectan a sus medios materiales (edificios, instalaciones y parque móvil)— y su finalidad —lograr una serie de objetivos en materia de energía, con importantes implicaciones medio ambientales (parte expositiva)—, son tres los títulos competenciales fundamentales que habilitan el dictado de la presente disposición.
72. La competencia exclusiva que ostenta la CAPV para la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno recogida en el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía (EAPV), y las competencias de desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente y régimen energético, recogidos en los apartados 1.a) y 2.c) del artículo 11 del EAPV.
73. Pese a tratarse de los títulos prevalentes, la Comisión no puede ignorar que el anteproyecto desborda ese ámbito, al incluir previsiones que afectan a sectores distintos, como luego veremos.
74. En lo que se refiere a tales contenidos, junto a los genéricos en materia de medio ambiente y régimen energético, será preciso también tomar en consideración otros títulos competenciales más específicos.
75. Así, la competencia en materia de ordenación del territorio y urbanismo, prevista como exclusiva de la Comunidad Autónoma en el artículo 10.31 del EAPV.
76. También la competencia en materia de transportes, definida por el artículo 10.32 EAPV y el artículo 149.1.21ª de la Constitución (CE), que otorga al Estado la competencia exclusiva en materia de transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, y la de tráfico y circulación de vehículos a motor.



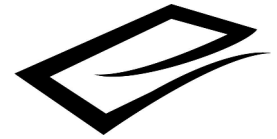
77. Y residualmente la competencia en materia de régimen local, del artículo 10.4 EAPV, incluyéndose entre las competencias propias del municipio la de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, artículo 25.2. g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, y artículo 17.1.7) de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones locales de Euskadi.
78. Dentro del examen de urgencia que requiere la iniciativa nos centraremos sobre los títulos prevalentes, sin perjuicio de que al analizar el fondo nos detengamos con mayor detalle en la regulación del servicio público de transportes de viajeros y viajeras por carreteras.
79. Sobre el artículo 10.2 EAPV, y con relación con las competencias de los territorios históricos sobre la organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones, señalamos en nuestro Dictamen 105/202 que la ley también puede entrar a ordenar el régimen jurídico que puede considerarse ordinario de las administraciones forales, porque:

“... el núcleo intangible de la foralidad—que reconoce la disposición adicional 1ª CE, actualiza el artículo 37.3.a) EAPV y tiene reflejo en el artículo 7 a).1 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus territorios históricos (LTH)— es el diseño institucional de los territorios históricos.

Tanto su configuración interna como las normas que ordenan las relaciones entre sus instituciones de autogobierno—juntas generales y diputaciones forales— constituyen un reducto indisponible de su autonomía institucional constitucionalmente reconocida, límite que resulta infranqueable tanto al legislador estatal como al autonómico.

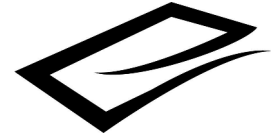
En tanto Administración pública, sin embargo, es posible una intervención del legislador autonómico al servicio de una idea común de la que han de participar todas las administraciones públicas autonómicas, y que se traduce en principios y reglas básicas sobre aspectos organizativos y de funcionamiento aplicables a todas ellas.

Bajo el prisma del artículo 10.2 EAPV, la autonomía organizativa de los órganos forales no ha de concebirse como una esfera total y absolutamente resistente a cualquier mínima incidencia o afectación proveniente del legislador autonómico en cuanto institución que forma parte de los poderes del País Vasco, siempre que no



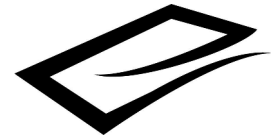
cuestione sus rasgos organizativos ni desdibuje la imagen identificable de sus régimen foral tradicional, encuentre adecuado soporte en preceptos constitucionales y tenga carácter principal”.

80. Iguales razonamientos se recogen, entre otros, en los dictámenes de la Comisión 120/2014, 128/2015 y 138/2015.
81. En relación con el medio ambiente y el régimen energético, las competencias que ostenta la CAPV corresponden a las instituciones comunes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6, en relación con el 7, de la LTH.
82. En relación con la competencia en materia de medioambiente, en nuestro Dictamen 100/2011 nos referíamos a la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 156/1995 (FJ 4) que, enlazando con la doctrina de las SSTC 170/1989 y 102/1995, señalaba que “lo básico cumple más bien una función de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pueden permitir que las comunidades autónomas con competencia en la materia establezcan niveles de protección más altos (...). Lo básico tiene aquí simultáneamente carácter mínimo, como patrón indispensable para la protección del medio ambiente, fuera de cuyo núcleo entran en juego las normas que lo complementan y lo desarrollan, con la ejecución, sin fisura alguna de ese entero grupo normativo. Se trata pues, de una estratificación de la materia por niveles, donde el estatal ha de ser suficiente y homogéneo, pero mejorable por así decirlo para adaptarlo a las circunstancias de cada comunidad autónoma” (doctrina posteriormente reiterada, entre otras, en las SSTC 13/1998, 90/2000, 306/2000).
83. Ello nos conduce a examinar el marco normativo en el que se inscribe el anteproyecto de ley.
84. Comenzando por el marco europeo, la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, dispone en su artículo 5 que los estados miembros velarán por que el sector público cumpla un papel ejemplar en el contexto de la presente directiva garantizando la adopción de una o más medidas de mejora de la eficiencia energética, ya sea a nivel nacional, regional o local.
85. El Plan de eficiencia energética, aprobada por la Comisión Europea en el año 2011, expresa en su apartado segundo que “orientar el gasto público hacia productos, modos de transporte, edificios, obras y servicios eficientes desde el punto de vista energético contribuye a reducir la factura energética de las administraciones públicas y permite mejorar la relación calidad-precio. Los trabajos de la Comisión en relación con la contratación pública para un medio ambiente mejor han respaldado esta idea, elaborando criterios para la contratación pública que tienen en cuenta la eficiencia energética. Además, los organismos públicos que están sujetos a las Directivas



de la UE sobre contratación pública ya están obligados a tomar en consideración los criterios de eficiencia energética a la hora de adquirir sus vehículos o equipos ofimáticos. A partir de 2019, la obligación también afectará al sector de los nuevos edificios, que deberán alcanzar un nivel de consumo de energía casi nulo. Para aplicar este enfoque a mayor escala, la Comisión propone que se apliquen de forma sistemática normas rigurosas de eficiencia energética cuando las administraciones públicas adquieran bienes (por ejemplo, equipos informáticos) y servicios (por ejemplo, energía) y realicen obras (por ejemplo, renovación de edificios)''.

86. La Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, dispone en su artículo 6.1 que los estados miembros garantizarán que las administraciones centrales adquieran solamente productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, en la medida en que ello sea coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido más amplio, la idoneidad técnica, así como una competencia suficiente, siendo tal obligación aplicable a los contratos para la adquisición de productos, servicios y edificios por parte de organismos públicos, siempre que tales contratos sean de un valor igual o superior a los límites fijados en el artículo 7 de la Directiva 2004/18/CE.
87. El apartado 3 del mismo artículo dispone que los estados miembros animarán a los organismos públicos, también a escala regional y local, teniendo debidamente en cuenta sus respectivas competencias y estructura administrativa, a que sigan el ejemplo de sus administraciones centrales para adquirir solamente productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético.
88. El documento de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, Horizonte 2007-2012-2020, aprobado por el Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007, en el apartado de cooperación institucional establece como uno de los objetivos la cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para impulsar políticas de lucha contra el cambio climático, en particular, en aspectos relacionados con la energía, el transporte, la edificación y la planificación urbanística.
89. El Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética aprobado por el Consejo de Ministros del 29 de julio de 2011, prevé también la acción conjunta entre la Administración del Estado y de las comunidades autónomas para el cumplimiento de los objetivos de ahorro energético.
90. El Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, regula en su artículo 15 las exigencias básicas de ahorro de energía de las construcciones.



91. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, establece en su artículo tercero que la acción de los poderes públicos en sus respectivos ámbitos de competencia estará guiada, entre otros, por los principios de ahorro y eficiencia energética, que deben contribuir a la sostenibilidad propiciando la reducción de costes, atenuando la dependencia energética y preservando los recursos naturales, así como a la promoción de las energías limpias, reducción de emisiones, eficaz tratamiento de residuos y la racionalización de la construcción residencial.
92. Mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, se aprobó el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
93. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, regula en su artículo 3 el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, disponiendo que las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible.
94. En la CAPV, mediante Ley 9/1982, de 24 de noviembre, se creó el Ente Vasco de la Energía (EVE), como ente público de derecho privado que tiene a su cargo la planificación, coordinación y el control de las actividades actuales y futuras del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el campo de la energía.
95. La Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3E2020) define los objetivos y las líneas básicas de actuación del Gobierno Vasco en materia de política energética para el período 2011-2020 y se enmarca dentro de una visión a más largo plazo para alcanzar un sistema energético cada vez más sostenible en términos de competitividad, seguridad del suministro y bajo en carbono.
96. La Estrategia Vasca de Cambio Climático, KLIMA 2050 aprobada en el año 2015, ha definido como primer objetivo el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Euskadi en al menos un 40 % para el año 2030 y en al menos un 80 % para 2050, respecto al año 2005, debiendo alcanzarse en el año 2050 un consumo de energía renovable del 40 % sobre el consumo final.
97. El Gobierno Vasco ha promulgado el Decreto 226/2014 de 9 de diciembre, de certificación de la eficiencia energética de los edificios, la Orden de 16 de marzo de 2015 de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se regula el control y registro de los certificados de eficiencia energética, y por último, es importante señalar la publicación del Decreto 178/2015 de 22 de septiembre, de sostenibilidad energética del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi,



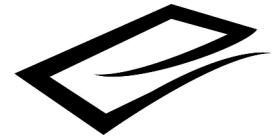
dado que tiene un objetivo similar al del anteproyecto, aunque limitado a la Administración de la CAPV.

98. Examinado el marco normativo en el que se inserta el anteproyecto de ley, la Comisión entiende que este no contraviene la normativa estatal sobre ahorro y eficiencia energética y medio ambiente—que, a su vez se dicta en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea—, sino que contribuye a su mejor cumplimiento.

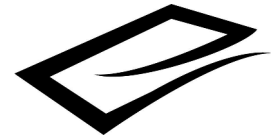
III ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

A) Observaciones al articulado:

99. El anteproyecto de ley, como se ha dicho, tiene un contenido similar al del Decreto 178/2015 de 22 de septiembre, aunque el ámbito subjetivo se amplía a la totalidad de las administraciones públicas vascas y a los entes dependientes de ellas. Se amplía también el objeto de regulación a aspectos de la tramitación de determinados instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico; a los vehículos que presten servicios públicos de transporte de viajeros por carretera; a la posibilidad de restringir en determinadas zonas la circulación de vehículos que no utilicen combustibles alternativos o que superen determinados niveles de emisión, y modifica el concepto de los planes de movilidad, para contemplar la movilidad a escala global, no únicamente referida a la generada por los centros públicos.
100. El **artículo 1** dispone que el objeto de la norma es el establecimiento de los pilares normativos de la sostenibilidad energética en el ámbito de las administraciones públicas vascas, articulando los deberes y obligaciones que estas deben cumplir y que se orientan fundamentalmente al impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética y de promoción e implantación de energías renovables.
101. Sin embargo, aunque la norma regula por una parte previsiones sobre ahorro de energía, eficiencia energética, uso de energías renovables y combustibles alternativos referidos o relacionados con la utilización de edificios, instalaciones y parque móvil de titularidad de las administraciones públicas, por otra parte establece previsiones que trascienden del ámbito de las administraciones, como los estudios de sostenibilidad energética que deben incluirse en la tramitación de determinados planes de ordenación territorial y urbanística, la utilización de combustibles alternativos por los vehículos dedicados al transporte público de viajeros, la posibilidad de establecer restricciones a la circulación de vehículos o los acuerdos voluntarios con los particulares para alcanzar los objetivos que señala la norma, por lo que debería modificarse la redacción del artículo a fin de incluir estos últimos aspectos.

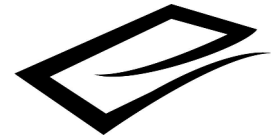


102. El **artículo 2**, al regular el ámbito subjetivo de la norma, dispone que se entenderán por administraciones públicas vascas, a los efectos de la ley, la Administración General de la CAPV, las de los territorios históricos, las de los municipios y la Universidad del País Vasco, junto con las respectivas entidades vinculadas o dependientes, y en la disposición adicional primera establece que las obligaciones de la ley también afectan a los consorcios y mancomunidades de aguas, recogida y tratamiento de residuos y mataderos, por lo que convendría incluir estas entidades, cuando no constituyan entidades vinculadas o dependientes de las anteriores, entre las administraciones públicas que recoge el artículo 2.
103. El mismo artículo dispone, en su apartado final, que “se entienden por entidades vinculadas o dependientes [de las administraciones territoriales vascas y de la Universidad del País Vasco] los organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado, las sociedades públicas, las fundaciones del sector público y los consorcios con personalidad jurídica propia a los que se refiere el artículo 7.4 c) del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco”.
104. Pero la referencia al artículo 7.4.c) del Texto refundido de la Ley de principios ordenadores de la hacienda general del País Vasco (según la redacción dada por disposición final 6ª del Decreto Legislativo 2/2007, 6 noviembre, de aprobación del Texto refundido de la Ley del patrimonio de Euskadi) nos remite a los consorcios que forman parte del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, no a los consorcios que dependan de las demás administraciones.
105. Sin perjuicio de lo que se dirá en relación con el concepto de “acuerdo voluntario”, su definición convendría recogerla en el **artículo 4**, dedicado a las definiciones de los conceptos que utiliza la ley.
106. El **artículo 9** regula las comisiones para la sostenibilidad energética, que tienen la función de “coordinación de los distintos entes integrantes de cada administración en la consecución de los objetivos perseguidos por la ley”, previendo que la Administración de la Comunidad Autónoma, las administraciones de los territorios históricos y de los municipios contarán cada una con una comisión para la sostenibilidad energética, cuyas funciones son la aprobación del inventario, la supervisión y garantía del cumplimiento de las medidas de sostenibilidad que se adopten, e informar periódicamente sobre el estado y desarrollo del plan de actuación energética.
107. En la línea de lo señalado en los párrafos 71 y siguientes de este dictamen, parece más respetuoso con la autonomía foral, la autonomía local y la de la propia universidad no cerrar la fórmula con ese grado de detalle (en cada Administración una comisión para la sostenibilidad energética). Podría, así, formularse la necesaria coordinación interna

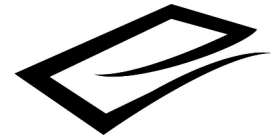


de los distintos entes de cada Administración al servicio del mejor logro de los objetivos de la ley, pero dejando que cada Administración adopte la solución que, de acuerdo con sus características, estime más conveniente, lo que desde otra perspectiva parece también una solución más eficaz para obtener el fin perseguido.

108. Por otra parte, sería más correcto hablar de la coordinación de las distintas acciones de cada Administración y sus entidades vinculadas o dependientes para la consecución de los objetivos de la ley, en vez de coordinación de los diferentes entes de cada Administración, pues entre las administraciones públicas que han de constituir la comisión —todas menos la universidad— habrá administraciones en las que no quepa distinguir diferentes entes.
109. El **párrafo 1 del artículo 15** dispone que “a partir del 1 de enero de 2017, en las licitaciones para la compra de energía eléctrica de las administraciones públicas vascas se valorará especialmente el origen renovable de la misma”.
110. La fecha de referencia habrá de ser modificada, dado que va a ser materialmente imposible su cumplimiento si se pretende que la ley entre en vigor a los seis meses de su publicación en el BOPV, como establece la disposición final segunda.
111. El **artículo 18.1** dispone que “los edificios de nueva construcción de titularidad de las administraciones públicas vascas cuya construcción se inicie dos años después de la entrada en vigor de la presente ley deberán ser de consumo de energía casi nulo, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable”.
112. Y la normativa aplicable (disposición adicional segunda, apartado 2, del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, que aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios) establece que “todos los edificios nuevos que se construyan a partir del 31 de diciembre de 2018, que vayan a estar ocupados y sean de titularidad pública, serán edificios de consumo casi nulo”, por lo que es previsible que surja una contradicción entre ambas normas en esta última fecha, dado que el horizonte de aplicación de la norma proyectada será posterior a la estatal.
113. El **artículo 20**, intitulado “Utilización de energía en vehículos que presten servicio público de transportes de viajeros y viajeras por carretera”, es del siguiente tenor:
 - “1. El servicio público de transporte de viajeros y viajeras por carretera deberá ser prestado por vehículos que utilicen combustibles alternativos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y en lo que reglamentariamente se desarrolle.

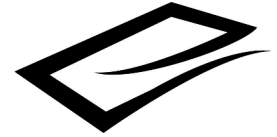


2. Los pliegos o instrumentos que se adopten para el otorgamiento o, en su caso, renovación de las licencias o concesiones administrativas correspondientes deberán tener en cuenta que el 100% de la flota renovada de vehículos habrá de utilizar combustibles alternativos a partir del año 2020.
3. Las empresas adjudicatarias de una concesión o autorización administrativa que exploten servicios de transporte público de viajeros y viajeras u otro tipo de servicios públicos serán responsables del cumplimiento de las anteriores obligaciones.”
114. La regulación anterior refleja una cierta confusión de conceptos que llevan a establecer obligaciones a ciertos servicios de transporte para los que la CAPV carece de la competencia necesaria.
115. Interesa precisar a este respecto, en primer lugar, que servicio público de transporte no significa que tal servicio sea de titularidad pública, sino que los servicios se llevan a cabo por cuenta ajena, mediante retribución económica [artículo 2.1.b) de la Ley 4/2004, de 18 de marzo, de transporte de viajeros por carretera – LTVC-].
116. Únicamente tienen carácter de servicios públicos de titularidad de la Administración los transportes públicos regulares permanentes de uso general —los que, en general, se realizan con un itinerario, calendario y horario prefijados—, con las excepciones que recoge la ley —según dispone el artículo 19.1 de la LTVC—.
117. Los transportes públicos discrecionales —los que, en general, no tienen itinerario, calendario ni horario prefijados— están sujetos a autorización.
118. Las autorizaciones, en todo caso, deberán determinar el radio de acción en el que se puede prestar el servicio (artículo 37.2 LTVC), otorgando las diputaciones las que habilitan para prestar servicios que trasciendan el espacio de la CAPV, por delegación del Estado, en virtud de las facultades delegadas mediante la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las comunidades autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.
119. La misma ley orgánica establece en su artículo 16 que “el ejercicio de las facultades delegadas a que se refiere la presente ley orgánica estará sujeto a las normas del Estado, que conservará, en todo caso, la función legislativa y la potestad reglamentaria sobre las materias objeto de delegación, y a lo que dispongan los programas o planes generales o sectoriales del Estado”.
120. Por razones de falta de interés económico y social, la Comunidad Autónoma de Euskadi no ha regulado o establecido autorizaciones de transporte público discrecional de viajeros de ámbito autonómico, por lo que todo el transporte de este tipo que se



realiza en Euskadi en este momento se lleva a cabo al amparo de autorizaciones estatales gestionadas, mediante delegación, por las diputaciones forales, a las que, según las normas de delegación expuestas, no se les pueden aplicar las determinaciones que regula el artículo 20 del anteproyecto.

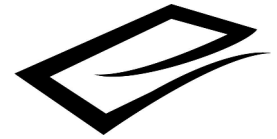
121. Consecuentemente, la previsión relativa a que el cien por cien de la flota renovada de vehículos que presten servicios de transporte público de viajeros y viajeras por carretera haya de utilizar combustibles alternativos a partir del año 2020, que establece el párrafo 2 del artículo 20, podrá ser aplicable a los servicios públicos de titularidad de la Administración —transportes públicos regulares permanentes de viajeros de uso general—.
122. Podría establecerse también la obligación para los servicios regulares de baja utilización (artículo 34 LTVC) y temporales (artículo 35 LTVC), dado que los primeros se rigen por regímenes específicos que se pueden establecer reglamentariamente y los segundos son servicios que se establecen por la Administración, aunque el establecerlo con carácter general para los primeros tal vez no fuera prudente ya que, prestándose en condiciones de débil demanda, las exigencias de la ley podrían hacerlos inviables.
123. En cualquier caso, podría exigirse que los servicios de transporte regular de viajeros de uso especial (el transporte escolar, el más usual), y los servicios de transporte discrecional que contrate la Administración deban ser prestados mediante vehículos que utilicen combustibles alternativos, aunque será conveniente establecer la obligación condicionada a que resulte económicamente posible.
124. El **artículo 24** establece para la Administración de la Comunidad Autónoma y las de los territorios históricos y municipios el deber de aprobar un plan de formación del personal sobre técnicas de aumentar el ahorro y la eficiencia energética, que no afecta a la Universidad del País Vasco, sin que pueda explicarse el motivo para ello, dado que también la universidad tiene la consideración de Administración pública, según dispone el artículo 2, y le afecta la ley.
125. El **artículo 27**, intitulado “Acuerdos voluntarios”, tiene la siguiente redacción:
 - “1. Mediante los acuerdos voluntarios las administraciones públicas vascas se comprometerán a llevar a cabo determinadas medidas de sostenibilidad energética que superen los mínimos legalmente exigibles.
 2. Los acuerdos voluntarios, sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, serán de obligado cumplimiento para las partes.



3. El departamento competente en materia de energía del Gobierno Vasco promoverá e impulsará la colaboración social en el uso responsable de la energía para la consecución de los objetivos de esta ley, lo que podrá incluir la suscripción de los acuerdos voluntarios precisos con agentes del sector energético y otros agentes sociales.

4. Las administraciones públicas vascas deberán publicar los acuerdos voluntarios que suscriban en materia de sostenibilidad energética, manteniendo actualizada y disponible al público la información que obre en su poder sobre ellos.”

126. Hubiera sido deseable que los acuerdos voluntarios se regularan con mayor densidad.
127. El acuerdo voluntario surge como instrumento pactado para la protección del medio ambiente con el documento del V Programa comunitario de acción en materia de medio ambiente (1992-2000), con el objetivo de conseguir, por medio de medidas o técnicas de “soft law”, la responsabilidad compartida de todas las partes implicadas en la sostenibilidad ambiental, constituyendo una figura jurídica que aún no se encuentra completamente perfilada, razón por la cual su utilización precisa de una mayor definición de los elementos que lo componen.
128. La Comisión Europea, a través de comunicaciones al Consejo y al Parlamento Europeo, ha ido desarrollando la figura.
129. En el marco del V Programa de acción en materia de medio ambiente, la Comunicación de 27 de noviembre de 1996 (COM (96) 561) recoge una “lista de control” relativa a los acuerdos sobre medio ambiente a nivel de estados, en el que en cuatro apartados se señalan: las razones para elegir el instrumento del acuerdo voluntario, el contenido del mismo, la conformidad con el tratado CE y la publicación de los convenios.
130. Dentro del contenido de los convenios, la anterior comunicación señala los siguientes aspectos que han de ser definidos: partes firmantes del acuerdo (asociaciones o empresas a título individual); objeto del acuerdo; definición de los términos; objetivos cuantificados; especificación de las etapas; especificación de las obligaciones; seguimiento de los resultados; información periódica; acceso a la información; procedimientos de recogida, evaluación y comprobación de los resultados; sanciones; adhesión de terceros; duración; revisión; terminación; naturaleza jurídica del acuerdo; jurisdicción que ha de conocer sobre el acuerdo.
131. En relación con la **disposición adicional primera** —que incluye a los consorcios y mancomunidades dedicadas al abastecimiento de agua, recogida y tratamiento de

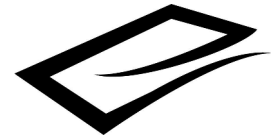


residuos, depuración de aguas residuales y mataderos, entre los destinatarios de las obligaciones que establece la ley—, nos remitimos a las observaciones hechas en relación con las administraciones públicas recogidas en el artículo 2.

132. La **disposición adicional segunda**, en su apartado primero, establece que en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de la ley se aprobará el nivel base de referencia del consumo energético global de las administraciones públicas que servirá de punto de partida para las medidas establecidas en la misma.
133. La disposición debe precisar con la necesaria claridad si se trata del consumo energético del conjunto de las administraciones públicas o del consumo global de cada una de las administraciones públicas, y a quién corresponde aprobar el expresado nivel de referencia del consumo energético.

B) Observaciones de técnica legislativa:

134. El tercer párrafo de la exposición de motivos—“nuestra sociedad, compuesta de mujeres y hombres, hace un uso de la energía y, dado el compromiso de la administración con las personas garantizaremos la igualdad de oportunidades y de taro en el uso de la energía”— además de confuso en su significado, parece descontextualizado, pues no es la Administración la que dicta la norma, sino el Parlamento.
135. El artículo 5.j) establece entre los objetivos de la ley el impulso de acuerdos con otras administraciones y con los particulares con el fin de lograr una mayor sostenibilidad energética.
136. Parece que se quiere decir impulso de acuerdos entre administraciones y entre administraciones y particulares.
137. El tercer apartado del artículo 13.3 dispone que los ayuntamientos con un número de habitantes inferior a 5.000 podrán sustituir el plan de actuación energética por una “hoja de ruta” que contendrá al menos la información indicada en las letras a y b del siguiente apartado
138. El término “hoja de ruta”, salvo que sea de común utilización en el ámbito de la energía, sería más correcto sustituirlo por “documento”.
139. En el apartado b) del artículo 16.2 sobra la palabra “analizando”.
140. Las referencias que se recogen en el artículo 17.1a) Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, que aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, sería conveniente hacerlas a “la normativa vigente sobre certificación de



eficiencia energética de los edificios”, dado que el citado reglamento es presumible que se modifique antes que la ley proyectada.

141. El párrafo segundo del artículo 18.1 dispone que “hasta que se concrete normativamente lo que debe entenderse por ‘consumo de energía casi nulo’ se aplicará lo dispuesto en la disposición adicional tercera de esta ley sobre edificios de consumo de energía casi nulo”, lo que resulta superfluo dado que lo mismo está establecido en la citada disposición adicional tercera.
142. En el artículo 25.1, la referencia que se hace al artículo 18 de la ley debe hacerse al artículo 17.
143. El artículo 25.2 dispone que las administraciones públicas vascas deberán exhibir en un lugar fácilmente visible, respecto de los vehículos nuevos que adquieran a partir de la entrada en vigor de la presente ley, la etiqueta informativa sobre el tipo de combustible que empleen y otros datos que se determinen por orden.
144. La Comisión quiere advertir que quizás se quiera referir a los vehículos nuevos que utilicen combustibles alternativos, dado que hasta el año 2020 las administraciones públicas pueden adquirir vehículos que no consuman combustibles alternativos, según lo dispuesto en el artículo 19.2.
145. En el párrafo 4 del artículo 27, en vez de “manteniendo actualizada y disponible al público la información”, debe decir “manteniendo actualizada y disponible para el público la información”
146. La disposición final primera establece que “el Parlamento Vasco, el Tribunal de Cuentas y el Ararteko elaborarán sus propios planes de sostenibilidad energética, pudiendo tener en cuenta lo dispuesto en esta ley”.
147. Estaría mejor expresado si dijera que las citadas instituciones elaborarán sus propios planes de sostenibilidad energética, sin que vengán obligadas al cumplimiento de las previsiones de la ley.
148. Por último, mejoraría la estructura interna de la futura norma, la utilización de un mismo criterio para clasificar internamente el contenido de los artículos.
149. A tal fin, siguiendo las Directrices para la elaboración de proyectos de normas, podría aplicarse el siguiente criterio: si el artículo tiene diversos párrafos, se numera cada uno (si solo hay uno, la numeración no es necesaria); los apartados de cada párrafo no se numeran; si debe subdividirse un párrafo, se utilizan las letras. En principio, los apartados no deben subdividirse, pero si excepcionalmente fuera necesario, cada división se numerará (1.º, 2.º, 3.º [...]).



CONCLUSIÓN

Se informa favorablemente el presente anteproyecto de ley, con las observaciones recogidas en el cuerpo del dictamen.

Lo que certificamos en Vitoria-Gasteiz, a 8 de julio de 2016 para su conocimiento y consideración, recordándole la obligación prevista en el artículo 30.2 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de comunicar a esta Comisión la disposición o resolución que finalmente se adopte, en la forma y plazo que se establecen en el artículo 34 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (aprobado por Decreto 167/2006, de 12 de septiembre).

Vº Bº:

Jesús María Alonso Quilchano,
Secretario

Sabino Torre Díez,
Presidente



EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUNEN SAILBURU ANDREA

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak, 2016ko uztailaren 7an egindako osoko bilkuran, ertzean adierazitako kideak bertaratu direla, zure kontsulta aztertu du, 138/2016 zenbakiarekin erregistratutakoa; hain zuzen ere, **Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legearen aurreproiektuaren** gainekoa (Erref.: **DNCG_LEY_77255/2015_03**).

Gaiaren inguruan hausnartu, eta aho batez eman du irizpen hau. Batzordearen iritzia Zorrozu Aierbe kideak adierazi du.

BATZORDEBURUA:

Sabino Torre Díez jauna.

BATZORDEKO BURUORDEA:

Xabier Unanue Ortega jauna.

BATZORDEKIDEAK:

Maria Teresa Astigarraga Goenaga andrea.

Luis M^a Eskubi Juaristi jauna.

Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo jauna.

Fátima Saiz Ruiz de Loizaga andrea.

Gorka Erlantz Zorrozu Aierbe jauna.

Imanol Zubizarreta Arteche jauna.

Ion Gurutz Echave Aranzabal jauna.

Iñaki Calonge Crespo jauna.

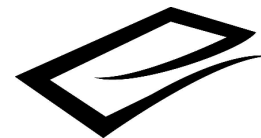
IDAZKARIA:

Jesús M^a Alonso Quilchano jauna.

127/2016 IRIZPENA

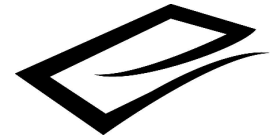
AURREKARIAK

1. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoan 2016ko ekainaren 17ko Agindua jaso zen 2016ko ekainaren 20an. Agindu hori Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak emandakoa da, eta haren bidez EAEko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoari buruzko Legearen aurreproiektuaren gainean irizpena eman dezala eskatzen zaio Batzordeari.
2. Eskaera presazkoa dela adierazten da, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzkoa den azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 26.2 artikuluan aurreikusitakoaren babespean, Eusko Legebiltzarrak 2015eko otsailaren 19an egindako Osoko



Bilkuran onartutako legez besteko proposamena bete beharra dagoelako. Proposamen horren bidez “Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaio aurkez dezala, urtebeteko epean, jasangarritasun energetikoari buruzko lege bat Euskadiko Autonomia Erkidegoaren eremuko administrazio publikoentzat eta bere sektore publikoarentzat”. Batzorde honen buruak 2016ko ekainaren 21ean emandako Ebazpenaren bitartez erabaki zen kontsulta presazko prozeduraren bidez izapidetzea.

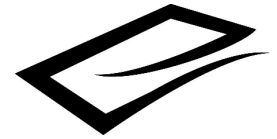
3. Aipatutako aginduarekin batera, espedientea aurkeztu da. Espedientean, lege-aurreproiektuaren behin betiko testuarekin batera, honako dokumentu garrantzitsu hauek daude:
 - a) 2015eko irailaren 15eko Agindua, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legearen aurreproiektua onartzeko espedienteari hasiera ematea erabaki zuena.
 - b) 2015eko urriaren 13ko Agindua, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legearen aurreproiektua alde aurretik onartu zuena.
 - c) Proiektu arauemailearen lehenengo testua.
 - d) Generoaren ikuspegitik garrantzirik ez izatea justifikatzen duen txostena.
 - e) Aurreproiektuaren bigarren bertsioa.
 - f) Herri-administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzaren txostena.
 - g) Emakunderen txostena.
 - h) Bilboko Udalaren alegazioak.
 - i) Arabako Batzar Nagusien alegazioak.
 - j) Euskadiko Udalen Elkartearen alegazioak.
 - k) Aurreproiektua justifikatzeko memoria.
 - l) Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Hobetzeko Zuzendaritzaren txostena.
 - m) Generoaren araberako eraginari buruzko txostena.



- n) Aurreproiektuaren hirugarren bertsioa.
- o) Emakunderen txostena.
- p) Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren oharrak.
- q) Aurreproiektuaren memoria ekonomikoa.
- r) Enpresen gaineko eraginari eta karga administratiboei buruzko txostena.
- s) Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren txosten juridikoa.
- t) Arau-aurreproiektuaren laugarren bertsioa.
- u) Aurreproiektuaren memoria ekonomiko berria.
- v) Araua egiteko prozedurari buruzko memoria.
- w) Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena, ekonomia- eta araudi-kontrolari buruzkoa.

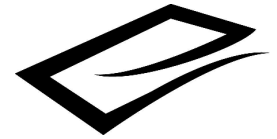
LEGE-AURREPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA

4. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legearen aurreproiektuak (lege-proiektua, aurrerantzean) azalpen-zatia, hiru kapitulutuan banatutako hogeita zortzi artikulua, hiru xedapen gehigarri eta bi azken xedapen ditu.
5. Zioen azalpenak dagozkion erkidegoko araudiak zerrendatzen ditu, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) energia-arloan gauzatutako ekintzak zehazten ditu —hala nola, Energiaren Euskal Erakundearen sorrera 1982an eta Euskadiko Energia Estrategia 2020ren (3E 2020) definizioa— baita ingurumenaren arloan ere — Klima Aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategiari buruzko dokumentuarekin — , eta jarraian azalpen labur bat ematen du lege-aurreproiektuaren edukiaren inguruan.
6. Lehenengo kapituluak, “Xedapen orokorrak” izenburudunak, 1.etik 9.ra bitarteko artikulua biltzen ditu.
7. 1. artikulua legearen xedea arautzen du, hau da, EAEko administrazio publikoek bete behar dituzten eginbeharrak eta betebeharrak energia aurrezteko eta

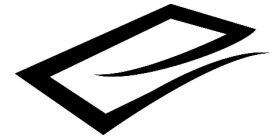


efizientzia energetikoa izateko neurriak bultzatzeari begira, bai eta energia berriztagarriak sustatzeari eta ezartzeari ere.

8. 2. artikulua arauaren eremu subjektiboa arautzen du. Eremu hori honako hauek osatzen dute: EAEko administrazioak, lurralde historikoetako administrazioek eta udaletakoek eta Euskal Herriko Unibertsitateak, bai eta haien mendeko edo haiei lotutako erakundeak ere.
9. 3. artikulua ezartzen duenez, legea aurreko erakundeen eraikinei, instalazioei eta ibilgailu-atalari aplikatuko zaie.
10. Artikulu berak jasotzen du zein eraikin geratuko den arau horretatik kanpo.
11. 4. artikuluan araua ulertzeko kontzepturik garrantzitsuenen definizioak arautzen ditu.
12. 5. artikuluan arauaren helburuak ezartzen dira: energiaren erabileran efizientzia bultzatzea eta energia aurrez dadin sustatzea; energia berriztagarriak eta ordezko beste energia-iturri jasangarri batzuk sustatzea eta ezartzea; pixkanaka petroliotik eta haren deribatuetatik ekoiztako energia erabiltzeari uztea; ordezko erregaiak erabiltzen dituzten garraio moduak sustatzea; berotegi-efektuko gasen isurketak gutxitzea; EAEko administrazio publikoen energia-faktura jaitea; aurrezpena eta efizientzia energetikoa handitzen duten teknologien ikerketa sustatzea; ingurumenean dituen inpaktu kaltegarriak mugatzea; jasangarritasun energetikoaren ideia politika publikoetan sartzea; administrazioen eta partikularren artean hitzarmenak egin daitezkeen bultzatzea, jasangarritasun energetikoa areagotu dadin; eta energia gehiago aurrezteak eta efizientzia energetiko hobea izateak zer onura dakartzaten zabaltzea.
13. 6. artikulua legearen oinarri diren printzipioak ezartzen ditu. Printzipio horiek administrazio publikoen jardura-jarraibideak eta energiaren arloko arauak interpretatzeko irizpideak izango dira.
14. 7. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, lurralde-antolamenduko, hirigintza-plangintzetako eta garraio-azpiegituretarako baliabideetan jasangarritasun energetikoari buruzko azterketa egin beharko da, eta azterketa horietan barne hartu beharreko alderdiak zehazten ditu.
15. 8. artikulua xedatzen duenez, Eusko Jaurlaritzan energiaren arloko eskumena duen sailari dagokio jasangarritasun energetikoari buruzko politika koherentea izango dela bermatzeko beharrezkoak diren koordinazio-lanak egitea.

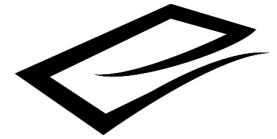


16. 9. artikulua xedatzen duenez, administrazio bakoitzeko erakundeak koordinatzeko, Jasangarritasun Energetikoaren Batzorde bana izango dute, eta administrazio bakoitzak erabakiko du batzorde horien osaera. Halaber, batzorde horien eginkizunak arautzen ditu.
17. II. kapituluak, "Helburuak eta ekintzak", lau ataletan, 10.etik 25.era bitarteko artikulua jasotzen ditu.
18. Lehenengo atalak, "Helburuak eta ekintza orokorrak" 10.etik 16.era bitarteko artikulua jasotzen ditu.
19. 10. artikulua ezartzen du administrazio publiko bakoitzak beren jardueraren barruan dituzten eraikinen, ibilgailu-atalen eta argiteria publikoko instalazioen inbentarioa egiteko beharra. Inbentario bakoitzak jaso beharreko informazioa eta inbentario horiek zein epetan egin behar diren ere ezartzen du.
20. 11. artikulua arautzen du urtebeteko epean 25 kW-tik gorako elektrizitate-potentzia instalatuta duten eraikinek eta instalazioek energia elektrikoaren kontagailuak izan beharko dituztela kontsumo-kontrol zehatz batzuekin, eta energiaren kontsumo-kontrola gutxienez urtean behin beharko dela, hilabeteka.
21. 12. artikulua xedatzen duenez, hiru urteko epean dagokien energia-auditoretza eginda eduki behar dute 70 kW baino gehiagoko potentzia termikoa duten eraikinek, eta sei urtean behin berriro beharko da, energia-kontsumoaren eta horien balizko aurrezpen eta efizientzia energetikoaren diagnosi bat egiteko helburuz, bai eta hori guztia hobetzeko gomendioak egiteko ere. Artikulu horrek arautzen ditu, halaber, auditoretzen edukiak. Kanpoko argiteria publikoari aparteko energia-auditoretza egingo zaio.
22. 13. artikulua xedatzen duenez, Administrazio publiko bakoitzak, erakunde bakoitzaren biztanle-kopuruaren arabera ezarritako epean, hainbat urtetarako energia-jarduketan bere plana diseinatu behar du eta artikuluan xedatzen da, halaber, plan horien edukia.
23. 14. artikulua xedatzen duenez, euskal administrazio publikoek energia-kontsumoa % 25 gutxitzea lortu behar dute 2025erako, erreferentzia-oinarriaren mailaren gainean.
24. 15. artikulua ezartzen du 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera EAeko administrazioek energia elektrikoa erosteko egiten dituzten lizitazioetan bereziki balioetsi beharko dela iturri berriztagarrietakoak izatea, eta 2025erako administrazio bakoitzaren, gutxienez, eraikinen % 25ek izatea energia berriztagarriak ustiatzeko instalazioak,



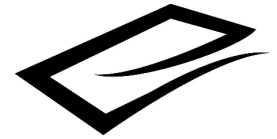
aprobetxamendu termikoko sistemak zein elektrizitatea sortzekoak erabilia horretarako.

25. 16. artikulua xedatzen duenez, kudeaketa-sistema zentralizatuak ezartzeko derrigortasunaz gain, Administrazio bakoitzak instalazioak, ekipoak eta ibilgailuak berritu egin behar ditu, aurrezpen eta efizientzia energetikoa eta energia berriztagarrien erabilera kontuan hartuta, petroliotik ateratako erregaien erabilera gutxitzeko, eta administrazio publikoek energia-errendimendu handiko produktuak, zerbitzuak eta eraikinak erosi behar ditu, erregulazio harmonizatura lotutako kontratuen bidez.
26. "Eraikinak" izeneko kapituluaren 2. atalak 17. eta 18. artikulua biltzen ditu.
27. 17. artikulua ezartzen du euskal administrazioek eta haien mendeko erakundeek erabiltzen dituzten eraikinek zein epe duten efizientzia energetikoaren ziurtagiria lortzeko eta zein epetan hobetu behar duten B) baino kalifikazio-maila kaskarragoa duten eraikinen efizientzia energetikoa.
28. 18. artikulua xedatzen duenez, EAEko administrazio publikoen titulartasuneko eraikin berriek, baldin eta legea indarrean sartu eta bi urtera eraikitzen hasi bada, energia kontsumo ia nulukoak izan behar dute, eta betebeharrak hori zein kasutan salbuets daitezkeen ere xedatzen du (eraikinen energia-efizientzia ziurtatzeko oinarritzko prozedura onartzen duen 235/2013 Errege Dekretuaren aplikaziotik salbuetsitako berak). Hala, aurreko arauak bere bigarren xedapen gehigarrian ezartzen du 2018ko abenduaren 31tik aurrera eraikitzen diren eraikinek energia-kontsumo ia nulukoak izan behar dutela.
29. "Garraioa eta mugikortasuna" izeneko kapituluaren 3. atalak 19. eta 20. artikulua biltzen ditu.
30. 19. artikulua xedatzen duenez, administrazio publikoek ordezkotako erregaien erabilera sustatuko dute, eta 2020tik aurrera, zerbitzu jakin batzuk emateko direnak izan ezik, erosten diren ibilgailuen % 100ek ordezkotako erregaiak erabiliko dituzte.
31. Bestetik, 2025erako udalerrri bakoitzean ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntu bat egotea 2.000 biztanleko lortu behar da, eta erositako eraikin berrietan kargatzeko puntuak ezarri beharko dira.
32. 20. artikulua ezartzen duenez, bidaiariak errepidez eramateko zerbitzua ordezkotako erregaiak erabiltzen dituzten ibilgailuen bidez eskaini behar da, lege honetan eta berau garatzen duten arauetan xedatutakoaren arabera, eta baimen edo emakida

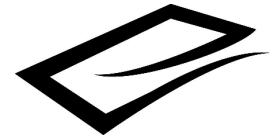


horiek berritzeko onartzen diren tresnek kontuan hartuko dutela 2020tik aurrera ibilgailu-flotatik berritzen diren ibilgailu guztiek ordezeko erregaiak erabili beharko dituztela.

33. 21. artikulua ezartzen duenez, energia gehiegi erabil ez dadin eta berotegi-efektuko gasen isurketak gehiegi igo ez daitezzen, udalerriek ordezeko erregaiak erabiltzen ez dituzten edo isurpen-maila jakin batzuk gainditzen dituzten ibilgailuei beren udalerriko leku jakin batzuetara sartzeko ez uztea edo sarrera mugatzea erabaki dezakete, eta ordezeko erregaiak erabiltzen dituzten ibilgailuetarako lekuak erreserbatu ditzakete; hala, aparkatzeko lekua erreserbatuz edo eremu publikoetan edo udal-aparkalekuetan prezio merkeagoak ezarri.
34. 22. artikulua ezartzen du, hiri-mugikortasuneko planari dagokionez, zenbat zati izan behar dituen eta zein epetan bete behar dituzten udalerriek, biztanle-kopuruaren arabera. Bost urteko indarraldia izango duen planean azaldu behar da zer helburu lortu nahi diren, zer inbertsio hitzeman diren eta zenbat denboran gauzatzea aurreikusi den, eta hura izapidetzeko, lehendabizi, hasierako onespena emango zaio, eta, ondoren, behin betikoa; eta horrez gain, herritarrei informazioa emango zaiela eta haien parte-hartzea izango dela bermatu behar da.
35. Foru-aldundiek hiri-garraioari dagokion mugikortasuneko plana onartuko dute, aurreproiektuak hura betetzeko eperik ezarri gabe.
36. "Beste betebeharrak" izeneko kapituluaren 4. atalak 23. eta 25. artikulua biltzen ditu.
37. 23. artikulua xedatzen duenez, administrazio publikoek energia gehiago aurrezteko eta efizientzia energetikoa areagotzeko zer neurri hartu dituzten azaltzen duen txostena argitaratu behar dute gutxienez bi urtez behin, 13. artikuluan zehaztutako energia-jarduketari buruzko planak barne, eta txostenak jaso beharreko puntuak ere zehazten ditu.
38. 24. artikulua xedatzen duenez, administrazio publikoek plan bat egin behar dute energia kontsumitzen duten instalazioetan erostearekin, mantentzearekin eta erabiltzearekin zerikusia duten kudeatzaileak eta teknikariak trebatzeko energia aurrezteko eta efizientzia energetikoko teknikan, urtebeteko epean legea argitaratzen denetik.
39. 25. artikulua arautzen du administrazio publikoek eraikinaren efizientzia energetikoari buruzko etiketak jarri behar dituztela nahitaez ikusgai, bai eta legea indarrean sartzeko denetik erositako ibilgailuena ere.



40. III. kapituluak, “Borondatezko tresnak eta sustapena” izenekoak, 26.etik 28.ra bitarteko artikulua biltzen ditu.
41. 26. artikulua xedatzen duenez, EAEko administrazio orokorrak energiaren alorreko laguntzak ematerakoan zenbatekoak gehitu ahal izango ditu, arauz ezarritako eran.
42. 27. artikulua 1. eta 2. zenbakietan ezarritakoarekin bat etorriz, borondatezko hitzarmenen bidez, EAEko administrazio publikoek konpromisoa hartuko dute lege eskatutako gutxienekoak gainditzeko dituzten jasangarritasun energetikoko zenbait neurri betetzeko, eta hitzarmen horiek nahitaez bete beharrekoak izango dira alderdientzat.
43. 3. zenbakiak xedatzen duenez, Eusko Jaurlaritzan energiaren eskumena duen sailak energia arduraz erabiltzeko gizarte-lankidetzak bultzatu eta sustatuko du, lege honen helburuak lor daitezkeen; horrek esan nahi du energiaren sektoreko eragileekin eta beste gizarte-eragile batzuekin behar diren borondatezko hitzarmenak egin ditzakeela.
44. 28. artikulua xedatzen duenez, administrazio publikoek jasangarritasun energetikoari buruzko informazioa emango dute bitarteko hauen bidez jarraibideak eta teknikak zabaldu: prestakuntza-, sentsibilizazio- eta publizitate-kanpainak, lehen mailako eta bigarren mailako hezkuntzako programak, eta energiaren aurrezpen eta efizientzia handiagoko lortzeko jarraibideak eta teknikak jasotzen dituzten gida ulergarrien argitalpena eta zabalkundea; horrez gain, Eusko Jaurlaritzan energiaren arloko eskumena duen sailak gaiari buruzko zabalkundea eta sentsibilizazioa lortzeko lehiaketak dei ditzake.
45. Lehenengo xedapen gehigarriak ezartzen du legeak ezarritako betebeharrak hondakinak tratatzeaz, hondakin-urak arazteaz eta hiltegiak arduratzen diren partzuergo eta mankomunitateek bete beharko dituztela, eta erakunde horietan parte hartzen duten administrazioek laguntza eman behar dietela.
46. Bigarren xedapen gehigarriak ezartzen du bederatzi hilabeteko epean administrazio publikoen energiaren guztizko kontsumoaren erreferentzia-oinarriaren maila onartuko dela, eta abiapuntutzat hartuko dela araudian ezarritako neurrietarako, eta kontuan hartu beharko direla azken hiru urteetako neurria ezartzeko. Horren ordez, azken urtekoa har daiteke energia-kontsumoaren oinarriko maila gisa, modu justifikatuan.



47. Hirugarren xedapen gehigarriak ezartzen du nola kuantifikatu jakiteko arau edo metodologia zehatz bat ezartzen ez den bitartean, eraikin batek energia-kontsumo ia nulua duen jakiteko, gutxienez, A motako energia-kalifikazioa izango du.
48. Azken xedapenetatik lehenengoak ezartzen du Eusko Legebiltzarrak, Kontuen Epaitegiak eta Arartekoak jasangarritasun energetikoko beren planak egingo dituztela, eta lege honetan xedatutakoa har dezaketela kontuan horretarako.
49. Azken xedapenetatik bigarrenak ezartzen du Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta sei hilera sartuko dela indarrean araua.

BATZORDEAREN ESKU-HARTZEA

50. Irizpen hau Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3.1. a) artikuluan ezarritakoarekin bat etorritz eman da; artikulua horrek Batzordearen kontsulta-funtzioaren eremutzat jotzen ditu lege-aurreproiektuak, edozein dela ere haien arloa eta xedea, betiere biltzen dituen salbuespenen barruan sartuta ez badaude, eta honako hau ez da horietako bat.
51. Irizpena presaz eskatu denez, eta eskatu den urgentzia horren barruan, Batzorde honek jaulkitzeko izan duen epe laburra kontuan izanda, azterketa mugatua izango da, halaber, eta legearen aurreproiektuaren helburuak aztertzerako bideratuko da nagusiki, gerora sinatuko den eskumenen inguruko esparruan eta lege-esparruan.

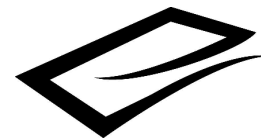
AINTZAT HARTZEKOAK

I LEGE-AURREPROIEKTUA EGITEKO PROZEDURA

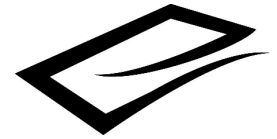
52. Aurreproiektua lantzeko jarraitu beharreko prozedura abenduaren 22ko 8/2003 Legean, xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzkoan (aurrerantzean XOEPL) ezarritakoa da.
53. Nolanahi ere, Batzorde honek azpimarratu ditu prozeduraren balorazioaren desberdintasunak izapidetzen den produktuaren izaeraren arabera, ez baita gauza bera Gobernuak onartu behar duen izapidea erregelamendu bat izatea, zeinetan legeak dioena hertsiki jaso behar den, edota legegintzako ekimen bat izatea. Halakoetan, Gobernuak onartu eta gero ere, legebiltzarraren izapidetzea eskatzen da, eta ekimen horri Autonomia Estatututik eta Konstituziotik eratorritako eskumen-eremua betetzea besterik ez zaio eskatuko.



54. Behin eta berriro adierazi dugun moduan, XOEPLk Jaurlaritzaren jarduera bideratu nahi izan du, lege-proiektuak idazterakoan ere xedapen orokorrak egiteko erabiltzen duen metodologia bera erabil dezan. Hala, zioen azalpenean esaten duenez, oso ekarpen ona egiten da legegintza-ahalmena duenaren lana errazteko, proiektu hobeto oinarrituak eta antolatuak, teknika juridiko txukunago eta xede dituen helburuak lortzeko egokiagoa dutenak aurkezten zaizkiolako, eztabaidatu eta erabaki dezan.
55. Hori dela eta, txostenaren azterketari helduko diogu irizpen pean jarritako testua lortzeko jarraitutako prozedura XOEPLn ezarritakoa ote den egiaztatzeko.
56. XOEPLren 5. artikuluan aurreikusitako hastapen-agindua eman da, xedapenaren aurreproiektua idatzi da, 6. artikuluan ezarritakoa betez, eta 7.1 artikuluan aurreikusten den onespren-agindua ere eman da.
57. Sail proposatzailearen Aholkularitza juridikoak txostena egin du eta, bertan, arauaren helburua zein den, zuzenbidearekin bat ote datorren eta araugintza-teknikaren jarraibideak betetzen ote diren aztertu da, XOEPLren 7.3 artikuluan aurreikusitakoa betez.
58. XOEPLren 9. artikuluan xedatutakoa betez, administrazio publiko eta autonomia-erkidegoko erakunde hauei zein Eusko Jaurlaritzako sail hauei parte hartzen utzi zaie:
 - Bilboko Udala.
 - Gasteizko Udala.
 - Donostiako Udala.
 - Euskadiko Udalen Elkarte (EUDEL).
 - Arabako Batzar Nagusiak.
 - Bizkaiko Batzar Nagusiak.
 - Gipuzkoako Batzar Nagusiak.
 - Arabako Foru Aldundia.
 - Bizkaiko Foru Aldundia.
 - Gipuzkoako Foru Aldundia.



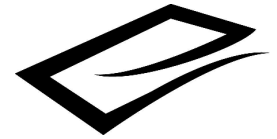
- Euskal Herriko Unibertsitatea.
59. Sail, erakunde eta administrazio hauen komunikazioak jaso ditugu.
- Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
 - Arabako Batzar Nagusiak.
 - Bilboko Udala.
 - EUDEL.
60. XOEPLren 10.3 artikuluan aurreikusitako txosten ekonomikoa egin da.
61. Hasiera batean ez bazen ere beharrezkotzat jo generoaren araberako inpaktuaren aurretiazko ebaluazioa egitea, espedientea izapidetzen duen Sailak ulertzen baitzuen legearen aurreproiektua antolamendukoa zelako, Emakundek hala eskatuta egin da Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19. artikuluan aurreikusitako ebaluazioa.
62. Emakunde Emakumearen Euskal Institutuak txostena egin du, Lege horretako 21. artikuluan ezarritakoa betez.
63. EAEko Administrazio Publikoetako Hizkuntza Normalizaziorako Zuzendaritzak txostena egin du, azaroaren 6ko 233/2012 Dekretuak, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskara-erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duenak, ezarritakoarekin bat etorritz.
64. Xedapenak enpresen eraketan, abiarazpenean eta funtzionamenduan duen eragina aztertu da txosten honetan, Euskadiko ekainaren 28ko Ekintzaileen 16/2012 Legearen 6. artikuluan ezarritakoa betez.
65. Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzak txostena egin du, Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuaren 18.c) artikuluan ezarritakoari jarraituz.
66. Kontratazioaren Aholku Batzordeak txostena egin du, ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren kontratazio araubideari buruzkoak, 21.2.a) 4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorritz.



67. Egingarritasuna edo memoriaren fundamentazioa justifikatzen dituen txostena egin da, baita aurreproiektuaren izapidetzearena ere, XOEPLren 6. eta 10.2 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorritz.
68. Txostena Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egin du, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eman beharrekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen III. tituluko IV. kapituluaren xedatuaren arabera, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren barneko ekonomiaren kontrola eta kontabilitatea garatzen dituen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuak ezarritakoaren arabera ere.
69. Ondoriozta dezakegu, beraz, aurreproiektuaren izapidetzea XOEPLn xedatutakoari egokitzen zaiola funtsean.

II ESKUMENEN INGURUKO ALDERDIAK ETA ARAU-ESPARRUA

70. Eskumenaren enkoadre materiala egiteko aurreproiektuaren edukia azertu behar da, bai eta xedapenen izaera, zentzua eta helburua ere.
71. Printzipioz, xedea (1. artikulua) aztertuta, eremu subjektiboa eta objektiboa mugatuta (2. eta 3. artikulua) —EAEko administrazioen jardura antolatzaera zuzenduta dago, bere bitarteko materialei (eraikinak, instalazioak eta parke mugikorra)— eta bere helburuari —helburu jakin batzuk lortzea energiaren arloan, ingurumenari eragiten dioten inplikazio garrantzitsuekin (eragin-zatia)— eragiten dieten mugak jartzen baitira, hiru dira xedapen honen diktatua gaitzen duten funtsezko eskumen-tituluak.
72. EAEk autogobernuko erakundeen antolamendu, erregimen eta funtzionamendurako duen eskumen eskusiboa, Autonomia Estatutuko 10.2 artikuluan jasotakoa, eta ingurumenaren eta energiaren arloan Estatuko oinarrizko legeria bere lurraldean garatzeko eta betearazteko eskumenak, EHAeko 11. artikuluko 1.a) eta 2.c) zatietan jasotakoak.
73. Lehenasuna duten tituluak izan arren, Batzordeak ezin du ez ikusi egin aurreproiektuak arlo hori gairitzen duela, sektore desberdinei eragiten dieten aurreikuspenak sartzen baitira, gero ikusiko dugun moduan.
74. Halako edukiei dagokienez, ingurumen eta erregimen energetikoaren arloko eduki orokorrekin batera, beharrezkoa izango da beste eskumen-titulu espezifikoko batzuk aintzat hartzea.

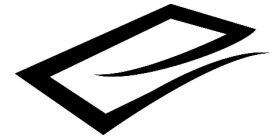


75. Horrela, bada, lurraldearen antolamenduaren eta hirigintzaren arloko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen eskusibotzat aurreikusita dago EHAeko 10.31 artikuluan.
76. Baita garraioaren arloko eskumena ere, EHAeko 10.32 artikulua eta Konstituzioaren (EK) 149.1.21 artikulua definitua, Estatuari emanez autonomia erkidego bat baino gehiagotako lurraldetik igarotzen diren lurreko garraioen arloko eskumen eskusiboa eta motor bidezko ibilgailuen trafikoa eta zirkulazioa.
77. Eta, hondar moduan bada ere, toki-araubidearen arloko eskumena, EHAeren 10.4 artikuluan jasotakoa, udalaren berezko eskumenetan honako hauek barne hartuta: trafikoa, ibilgailuak aparkatzea eta mugikortasuna, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2.g) artikulua, eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa den apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 17.1.7) artikulua.
78. Ekimenak behar duen presazko azterketan, lehentasuna duten tituluetan jarriko dugu arreta handiena, baina horrek ez du eragotziko funtsa aztertzean xehetasun handiagoz erreparatzea bidaiariak errepidez eramateko zerbitzu publikoaren arauketan.
79. EHAeren 10.2 artikuluari dagokionez, eta lurralde historikoek beren erakundearen antolakuntzan, araubidean eta funtzionamenduan dituzten eskumenekin lotuta, gure 105/2012 Irizpenean adierazi genuen legea arruntzat jo daitekeen foru-administrazioen araubide juridikoa arautzera ere sar daitekeela, izan ere:

"...foru izaeraren muin ukiezina —EKren lehenengo xedapen gehigarriak aitortu, EAEeren 37.3.a) artikulua eguneratu, eta 27/1983 Legean, azaroaren 25ekoan, Autonomia Erkidego Osorako Erakundearen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundearen arteko harremanei buruzkoan (LHL), 7.a)1 artikuluan, islatzen baita— lurralde historikoen erakunde-diseinua baita.

Hala diseinu horren barne-taxutzeak nola autogobernu-erakundearen —batzar nagusien eta foru-diputazioen— arteko harremanak ordenatzen dituzten arauak osatzen dute lurralde historikoen erakunde-autonomiaren hondar ukiezina (Konstituzioak aitortu baitu), zeina Estatuko legegileak zein autonomikoak gainditu eziniko muga izango baita.

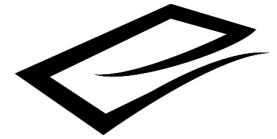
Herri-administrazio ere badiren aldetik, hala ere, litekeena da legegile autonomikoaren esku-hartzea, herri-administrazio autonomiko guztiek partekatu behar duten ideia erkide baten zerbitzuan, horiei guztiei aplikatzeko moduko



printzipio eta arauetan gauzatzen baita, antolamendu- eta funtzionamendu-aldertiak aintzat hartuta.

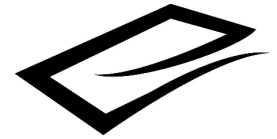
EAEko APLPren 10.2 artikulua ikuspuntutik, foru-organoak antolatzeko autonomia ez da hartu behar Euskal Autonomia Erkidegoa osatzen duten botereen parte den erakundea den heinean autonomiako legeriatik eratorritako edozein gorabehera edo kalteri aurre egiteko moduko guztizko esferatza, betiere erakundearen ezaugarriak desitxuratzen ez baditu edo foru-araubide tradizionalaren irudi adierazgarria itxuragabetzen ez baditu, konstituzioaren arauetan euskarri egokia aurkitzen badu eta lehentasunezkoa denean.

80. Arrazoibide berdinak jasotzen dira, besteak beste, Batzordearen irizpen hauetan: 120/2014, 128/2015 eta 138/2015.
81. Ingurumenari eta energiaren araubideari dagokienez, EAEk dituen eskumenak erakunde erkideei dagozkie, LHLren 6. artikuluan, eta, horri lotuta, 7. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.
82. Ingurumenaren arloko eskumenari dagokionez, gure 100/2011 Irizpenean Konstituzio Auzitegiaren 156/1995 (FJ 4) Epaia (KAE) aipatu genuen; bertan, Konstituzio Auzitegiaren 170/1989 eta 102/1995 Epaien (KAEak) doktrinarekin lotuta, honako hau adierazten zuen: “oinarrizkoak gutxienekoen bitartez antolatzeko funtzioa betetzen du, eta dena den, gutxieneko horiek errespetatu behar dira, baina gaiaren eskumena dutena Autonomia-erkidegoei babes-maila handiagoak ezartzeko ahalmena eman diezaiekete (...). Oinarrizko babesa gutxienezkoa da hemen, ingurumena babesteko ezinbesteko eredu, baina muin horretatik kanpo hura osatzen eta garatzen duten arauak sartzen dira, eta arau-multzo hori inolako arrakalarik utzi gabe bete behar da. Beraz, mailen araberrako geruzatze bat dago; Estatuaren araudiak nahikoa eta homogenea izan behar du, baina nolabait esatearren hobetzeko modukoa, hura autonomia-erkidego bakoitzaren inguruabarretara egokitu ahal izateko” (gerora arrazoitutako doktrina, besteak beste, 13/1998, 90/2000, 306/2000 KAEetan).
83. Horrek lege-aurreproiektuaren arau-esparrua aztertzeraz garrantzitsua.
84. Europako esparrutik abiatuta, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko urriaren 5eko 2006/32/CE Zuzentarauak, energiaren azken erabilerean eta energia zerbitzuen efizientziari buruzkoak, 5. artikuluan xedatzen du estatu kideek sektore publikoak Zuzentaru honen testuinguruan ereduazko rola izan dezan zainduko dutela, eta efizientzia energetikoa hobetzeko neurri bat edo



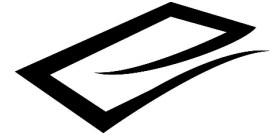
batzuk hartuko direla bermatzen du, maila nazionalen, lurraldekoan nahiz tokikoan.

85. Europako Batzordeak 2011n onartutako Efizientzia Energetikoaren Planaren bigarren atalean honako hau adierazten du: “gastu publikoa produktu, garraiobide, eraikin, obra eta zerbitzu efizienteetara bideratzeak energiaren ikuspegitik energia-faktura jaisten lagundu eta kalitate-prezio erlazioa hobetzeko aukera ematen du. Ingurumen hobea lortzeko kontratazio publikoari dagokionez, Batzordeak egindako lanek ideia horren aldekoak izan dira, eta kontratazio publikorako prestatu dituzten irizpideek efizientzia energetikoa kontuan hartzen dute. Gainera, EBk kontratazio publikoaren arloan ematen dituen zuzentarauei lotuta dauden erakunde publikoek ibilgailu edo bulegotika-tresnak eskuratzean efizientzia energetikoko irizpideak aintzat hartzeko betebeharra dute. 2019tik aurrera, betebeharrak horrek eraikin berrien sektorea ere ukituko du, energia-kontsumoa ia nulua izatea lortu beharko baitute. Ikuspegi hori eskala handiago batean aplikatzeko, administrazio publikoek ondasunak (adibidez, ekipamendu informatikoak) eta zerbitzuak (adibidez, energia) eskuratzen dituztenean eta obrak egiten dituztenean (adibidez, eraikinak berritzea) efizientzia energetikoko arau zorrotzak sistematikoki aplikatu daitezela proposatzen du Batzordeak”.
86. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Zuzentzarauak, efizientzia energetikoari buruzkoak, 6.1 artikuluan ezartzen du estatu kideek bermatuko dutela administrazio zentralak energia-errendimendu handiko produktuak, zerbitzuak eta eraikinak soilik eskuratzen dituztela, baldin eta haiek eskuratzea koherentea bada errentagarritasunarekiko, bideragarritasun ekonomikoarekiko, jasagarritasunarekiko (zentzu zabalenean), egokitasun teknikoarekiko, bai eta behar besteko lehiarekiko ere, eta aipatutako betebeharrak hori aplikatzekoa izango da, halaber, erakunde publikoek produktu, zerbitzu eta eraikinak eskuratzeko kontratuarekin, baldin eta kontratu horien balioa 2004/18/EE Zuzentzarauaren 7. artikuluan finkatutako muga berdina edo handiagoa bada.
87. Artikulu beraren 3. zenbakiak xedatzen duenez, estatu kideek erakunde publikoak, lurraldekoak nahiz tokikoak, animatu egingo dituzte, bakoitzaren eskumenak eta administrazio-egitura behar bezala kontuan izanda, administrazio zentralen ereduari jarraituz, energia-errendimendu handiko produktuak, zerbitzuak eta eraikinak soilik eskuratzera.
88. Klima Aldaketari eta Energia Garbiari buruzko Espainiako Estrategia Horizonte 2007-2012-2020 dokumentuak (Ministroen Kontseiluak 2007ko azaroaren 2an onartuak) erakundeen arteko lankidetzari buruzko atalean ezartzen duenez, helburuetako bat Estatuaren Administrazio Orokorren eta autonomia-erkidegoen arteko lankidetzak da, klima-aldaketaren aurka borrokatzeko politikak bultzatzeko,



eta, bereziki, energiarekin, garraioarekin, eraikingintzarekin eta hirigintza-plangintzarekin zerikusia duten alderdietan.

89. Ministroen Kontseiluak 2011ko uztailaren 29an onartutako Aurrezpen eta Efizientzia Energetikoko Ekintza Planak, halaber, Estatuko Administrazioak eta autonomia-erkidegoetakoek batera jardutea aurreikusten du, energia aurrezteko helburuak bete daitezzen.
90. Martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bidez onartu zen Eraikingintzaren Kode Teknikoaren 15. artikuluan eraikuntzetan energia aurrezteko oinarrizko eskakizunak arautzen dira.
91. Ekonomia Iraunkorrari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legearen hirugarren artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, botere publikoen ekintzan, bakoitzaren eskumen-eremukoan, gidari izan behar duen printzipioak dira, besteak beste, energia aurreztearena eta efizientzia energetikoarena, jasangarritasuna lortzen lagundu behar dutenak, kostuak gutxituz, mendekotasun energetikoak arinduz eta baliabide naturalak gordez, bai eta energia garbiak sustatuz, isurketak gutxituz, hondakinak modu eraginkorrean tratatuz eta bizitegi-eraikuntza arrazionalizatuz ere.
92. Apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuaren bidez eraikinen efizientzia energetiko ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartu zen.
93. Lurzoruari eta hiri-birgaitzeari buruzko legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 3. artikuluan lurralde- eta hiri-garapen iraunkorraren printzipioa arautzen da, eta xedatzen du lurzoria arautu, antolatu, okupatu, eraldatu eta erabiltzeari buruzko politika publikoen xede erkidea dela baliabide hori interes orokorrarekin bat etorriz eta garapen jasangarriaren printzipioaren arabera erabiltzea.
94. EAEn, azaroaren 24ko 9/1982 Legearen bidez, Energiaren Euskal Erakundea (EEE) sortu zen, zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoaren energiaren alorreko egungo eta etorkizuneko jardueren plangintzaz, koordinazioaz eta kontrolaz arduratzen da.
95. Euskadiko Energia Estrategia 2020k (3e2020) berak energia-politikaren alorrean 2011-2020 aldirako Eusko Jaurlaritzaren helburuak eta oinarrizko ildoak definitzen ditu, eta epe luzeagokoa den ikuspegia du gero eta jasangarriagoa izango den energia-sistema lortzeko lehiakortasunari, horniduraren segurtasunari eta karbono gutxikoa izateari dagokionez.

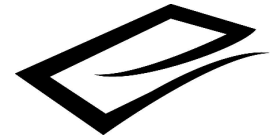


96. 2015ean onartutako Klima Aldaketaren aurkako Euskal Estrategiak (KLIMA 2050) berak Euskadin berotegi-efektua duten gasen (BEG) isurpena gutxitzea jarri du lehen helburutzat, 2030erako gutxienez % 40 murriztea eta 2050erako gutxienez % 80, 2005. urtearekin alderatuta; eta 2050erako % 40ko energia berriztagarrien kontsumoa lortzea azken kontsumoarekiko.
97. Eusko Jaurlaritzak abenduaren 9ko 226/2014 Dekretua onartu du, eraikinen efizientzia energetikoaren ziurtagiriari buruzkoa, bai eta Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko martxoaren 16ko Agindua ere, efizientzia energetikoaren ziurtagirien kontrola eta erregistroa arautzen dituen, eta, azkenik, garrantzitsua da aipatzea irailaren 22ko 178/2015 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren jasangarritasun energetikoari buruzkoa, argitaratu izana, aurreproiektuaren antzeko helburua baitu, nahiz eta EAeko Administrazioa mugatua egon.
98. Lege-aurreproiektuaren arau-esparrua aztertu ondoren, Batzordearen iritziz aurreproiektuak ez du aurrezpenari eta efizientzia energetikoari eta ingurumenari buruzko Estatuko araudia urratzen —Europar Batasunaren araudia betez, halaber, ematen dena—, baizik eta hura hobeto betetzen laguntzen du.

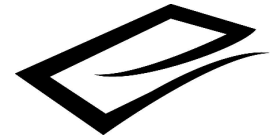
III AURREPROIEKTUAREN EDUKIAREN AZTERKETA

A) Artikuluei buruzko oharra:

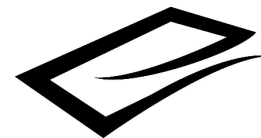
99. Esan dugun bezala, lege-aurreproiektuak irailaren 22ko 178/2015 Dekretuaren antzeko edukia dauka, eremu subjektiboa EAeko administrazio publiko guztietara eta haien mendeko erakundeetara hedatzen bada ere. Arautzearen xedea honako hauetara hedatzen da: lurralde-antolamenduko, hirigintza-plangintzetako eta garraio-azpiegituretarako baliabide jakin batzuen izapidetzeari buruzko alderdiak; bidaiariak errepidez eramateko zerbitzu publikoa ematen duten ibilgailuak; ordezkio erregaiak erabiltzen ez dituzten edo isurpen-maila jakin batzuk gaintzen dituzten ibilgailuei leku jakin batzuetatik ibiltzea mugatzea; eta mugikortasun-planen kontzeptua aldatzen du, mugikortasuna eskala globalean ikusiz, eta ez zentro publikoek sortutakoari buruzkoa soilik.
100. **1. artikulua** xedatzen duenez, arauaren xedea da EAeko administrazio publikoetan jasangarritasun energetikoaren arau-oinarriak ezartzea, eta administrazio publiko horiek zer eginbehar eta betebehar dituzten antolatzea. Batez ere, energia aurrezteko eta efizientzia energetikoa izateko neurriak bultzatzera bideratuko dira eginbehar eta betebehar horiek, bai eta energia berriztagarriak sustatzera eta ezartzera ere.



101. Hala eta guztiz ere, arauak alde batetik administrazio publikoen titulartasuneko eraikinen, instalazioen eta parke mugikorrari erreferentzia egiten dioten edo haiei lotuta dauden energia-aurrezpenaren, efizientzia energetikoaren, energia berriztagarrien eta ordezeko erregaien erabileraren aurreikuspenak arautzen baditu ere, beste alde batetik administrazioen eremua gainditzen duten aurreikuspenak ezartzen ditu, adibidez, lurralde-antolamendu eta hirigintzako plan batzuen izapidetzean sartu beharreko jasangarritasun energetikoaren azterlanak, bidaiarien garraio publikoan erabiltzen diren ibilgailuek ordezeko erregaiak erabiltzea, ibilgailuen zirkulazioari murriztapenak ezartzeko aukera edo partikularrekiko borondatezko akordioak arauak ezartzen dituen helburuak lortzeko, eta, horregatik, hain zuzen, artikulua idazketa aldatu beharko litzateke azken alderdi horiek sartzeko.
102. **2. artikulua**, arauaren eremu subjektiboa arautzen duenez, ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioetat joko direla, legearen ondorioetarako, EAEko administrazio orokorra, lurralde historikoetako, udaletako eta Euskal Herriko Unibertsitatea, haiei lotutako entitateekin edo haien mendekoekin batera, eta lehen xedapen gehigarrian ezartzen du legearen betebeharrak eragiten dietela ur-horniduraz, hondakinak bildu eta tratatzeaz, hondakin-urak arazteaz eta hiltegiez arduratzen diren partzuergo eta mankomunitateei, eta, beraz, komeniko litzateke erakunde horiek ere sartzea, aurrekoei lotutako erakundeak edo haien mendekoak ez direnean, 2. artikulua jasotzen dituen administrazio publikoen artean.
103. Artikulu berak ezartzen du, azken idatzi-zatian, "EAEko lurralde-administrazioen edo Euskal Herriko Unibertsitateen mendeko edo horiei lotutako erakundetat jotzen dira erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, sozietate publikoak, sektore publikoko fundazioak eta nortasun juridiko propioa duten partzuergoak (Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 7.4.c) artikuluan aipatzen dira partzuergo horiek).".
104. Baina Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 7.4.c) artikuluari egindako erreferentziak (Euskadiko Ondarearen Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuaren 6. azken xedapenak ezarritako idazketaren arabera) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten partzuergoetara eramaten gaitu, eta ez beste administrazioaren mendeko partzuergoetara.
105. "Borondatezko akordioa" kontzeptuari buruz esango denari kalterik egin gabe, komeniko litzateke kontzeptu horren definizioa jasotzea **4. artikuluan**, legeak erabiltzen dituen kontzeptuen definizioei buruzkoan.



106. **9. artikulua**k jasangarritasun energetikorako batzordeak arautzen ditu. Batzorde horiek “Lege honek lortu nahi dituen helburuak bete daitezzen, administrazio bakoitzeko erakundeak koordinatzeko” funtzioa dute, aurreikusiz EAEKo administrazioak, lurralde historikoetako administrazioak eta udaletako administrazioak jasangarritasun energetikorako batzorde bana izango dutela, eta batzordeen funtzioak izango dira jasangarritasunari dagokionez hartzen diren neurrien inbentarioa onartzea, gainbegiratzea eta betetzea bermatzea, eta aldian-aldian informatzea jarduketara energetikoaren planaren egoerari eta garapenari buruz.
107. Irizpen honen 71. paragrafoan eta hurrengoetan adierazitakoaren ildoari jarraikiz, badirudi foru-autonomia, toki-autonomia eta unibertsitatearen autonomia gehiago errespetatzen direla formula zehaztasun-maila horrekin ez itxiz (Administrazio bakoitzean jasangarritasun energetikorako batzorde bat). Horrela, bada, Administrazio bakoitzaren enteei behar duten barne-koordinazioa formula liteke legearen helburuak hobeto betetzeko, baina Administrazio bakoitzaren esku utziz bere ezaugarrien arabera egokitzat jotzen duen formula; gainera horrek, beste ikuspegi batetik begiratuta, konponbide eraginkorragoa dirudi lortu nahi den xedea lortzeko.
108. Bestalde, zuzenagoa litzateke legearen helburuak lortzeko Administrazio bakoitzaren eta hari lotutako entitateen edo haren mendeko entitateen ekintzen koordinazioaz hitz egitea; izan ere, batzordea eratu behar duten administrazio publikoen artean — unibertsitatea ez beste guztiak — egongo dira ente desberdinak bereizten ez dituzten administrazioak.
109. **15. artikulua**ren **1. paragrafoa**k xedatzen du “2017ko urtarrilaren 1etik aurrera, EAEko administrazioek energia elektrikoa erosteko egiten dituzten lizitazioetan bereziki balioetsi beharko dela iturri berriztagarrietakoak izatea”.
110. Erreferentziazko data aldatu egin beharko da, ezinezkoa izango baita betetzea legea EHAA-n argitaratu eta handik sei hilabetera indarrean sartzea nahi bada, bigarren azken xedapenak ezartzen duen moduan.
111. **18.1 artikulua**k xedatzen duenez, ” EAEko administrazio publikoen titulartasuneko eraikin berriek energia-konsumo ia nulukoak izan behar dute, baldin eta lege hau indarrean sartu eta bi urtera hasi behar badira eraikitzen edo berritzen, aplikagarri den arautegian ezarritakoa kontuan hartuta”.
112. Eta aplikatzekoa den araudiak (bigarren xedapen gehigarria, 2. idatzi-zatia, Eraikinen Efizientzia Energetikoa Ziurtatzeko Oinarrizko Prozedura onartzen duen apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuarena) ezartzen du “2018ko abenduaren



31tik aurrera eraikitzen diren eraikin berri guztiak —okupatuak izango direnak eta titulartasun publikokoak— energia-kontsumo ia nulukoak izango direla”, eta, beraz, aurreikus daiteke kontraesanen bat sortuko dela bi arauen artean azken data horretan, proiektatutako arauaren aplikazio-horizontea Estatukoarenaren ondorengokoa baita.

113. **20. artikulua**, “Bidaiariak errepidez eramateko zerbitzu publikoa ematen duten ibilgailuen energia-erabilera” titulua duenak, izaera hau du:

“1. Bidaiariak errepidez eramateko zerbitzu publikoa ordezkoko erregaiak erabiltzen dituzten ibilgailuen bidez eskaini behar da, lege honetan eta berau garatzen duten arauetan xedatutakoaren arabera.

2. Administrazio-baimenak eman edo administrazio-emakidak egiteko edo, hala badagokio, baimen edo emakida horiek berritzeko onartzen diren baldintza-orri edo tresnetan kontuan hartu beharko da 2020tik aurrera ibilgailu-flotatik berritzen diren ibilgailu guztiak ordezkoko erregaiak erabili beharko dituztela.

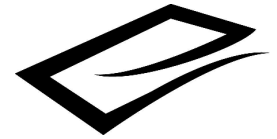
3. Bidaiarien garraio publikoko zerbitzuak edo beste era bateko zerbitzu publikoak ustiatzeko diren administrazio-emakida edo -baimenen esleipena egiten zaien enpresak izango dira aurretik adierazitako betebeharrak betetzeko ardura izango dutenak”.

114. Aurreko erregulazioak nolabait kontzeptuak nahasi direla erakusten du, eta horrek eramaten du EAEk beharrezko eskumenik izan ez arren zenbait garraio-zerbitzuri betebeharrak ezartzera.

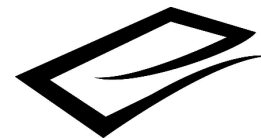
115. Alde horretatik, komeni da zehaztea garraio-zerbitzu publikoa izateak ez duela esan nahi titulartasun publikokoa denik, baizik eta zerbitzu publikoak besteren kontura egiten direla ordainsari ekonomiko bidez [Bidaiariak Errepidez Eramateko martxoaren 18ko 4/2004 Legearen 2.1 b) artikulua].

116. Administrazioaren titulartasuneko zerbitzu publikoak dira soilik erabilera orokorreko garraio publiko erregular iraunkorrak —oro har aurrez ezarritako ibilbide, egutegi eta ordutegi batekin egiten direnak—, legeak jasotzen dituen salbuespenekin, Bidaiariak Errepidez Eramateko Legearen 19.1 artikulua ezartzen duen moduan.

117. Garraio publiko bereziek —normalean aurrez ezarritako ibilbide, egutegi edo garraiorik ez dutenek— baimenduak izan behar dute.



118. Baimenek zehaztu behar dute, beti, zerbitzua zein ekintza-eremutan eman daitekeen (Bidaiariak Errepidez Eramateko Legearen 37.2 artikulua), eta aldundiak dira EAEko lurraldea gainditzten dituzten zerbitzuak emateko baimenak dituztenak, Estatuaren eskuordetzaren bidez, errepide eta kable bidezko garraioei dagokienez Estatuak eskumenak autonomia erkidegoetan eskuordetzeari buruzko uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoarekin bat etorritz.
119. Lege organiko berak 16. artikuluan ezartzen du “lege organiko honek erreferentzia egiten dien eskumen eskuordetuen erabilera Estatuaren arauen mende egongo da, eta Estatuak beti mantenduko du eskuordetutako gaiei buruzko legegintza-funtzioa eta erregelamendu-ahala, eta, orobat, eskumen eskuordetuen erabilera hori Estatuaren programa edo plan orokor nahiz sektorialek ezarritakoarekin bat etorri beharko dute baita ere”.
120. Interes ekonomiko eta sozialik egon ez delako, Euskal Autonomia Erkidegoak ez du arautu edo baimenik ezarri autonomia erkidegoaren eremuko bidaiarien garraio publiko bereziari dagokionez, eta, beraz, Euskadin egiten den era horretako garraio guztia eskuordetza bidez foru-aldundiek kudeatzen dituzten Estatuaren baimenen babesean egiten da, eta azaldutako eskuordetza-arauen arabera, ezin zaizkie aurreproiektuaren 20. artikulua araututako zehaztapenak aplikatu.
121. Ondorioz, bidaiariak errepidez eramateko zerbitzu publikokoa ematen duen ibilgailu-flota berrituaren ehuneko ehunek 2020tik aurrera ordezkotako erregaiak erabiliko dituela zehazten duen aurreikuspena —20. artikuluko 2. paragrafoak ezartzen duena— Administrazioaren titulartasuneko zerbitzu publikoei aplikatu ahal izango zaie, hau da, erabilera orokorreko bidaiarien garraio publiko erregular iraunkorrak.
122. Betebeharra ezar liteke, orobat, erabilera txikiko (Bidaiariak Errepidez Eramateko Legearen 34. artikulua) eta aldi baterako (Bidaiariak Errepidez Eramateko Legearen 35. artikulua) zerbitzu erregularrentzat ere, lehenak erregelamenduz ezar daitezkeen erregimen espezifikoaren bidez arautzen baitira, eta bigarrenak, berriz, Administrazioak ezartzen dituen zerbitzuak direlako. Hala ere, oro har lehenentzat ezartzea ez litzateke zuzurra izango; izan ere, eskaera urriko baldintzetan ematen diren zerbitzuak badira, legearen eskakizunek bideragarritasuna kendu ahal izango liekete.
123. Nolanahi ere, exiji liteke erabilera bereziko bidaiarien garraio-zerbitzu erregularrek (eskola-garraioa, ohikoena) eta Administrazioak kontratatzen dituen garraio-zerbitzu bereziak ordezkotako erregaiak erabiltzen dituzten ibilgailu bidez eman behar izatea, baina ekonomikoki posible izateko nahitaezko baldintza ezartzea komeniko litzateke.



124. **24. artikulua**k Euskal Autonomia Erkidegoari eta lurralde historikoei eta udalerriei ezartzen die energia-aurrezpena eta efizientzia energetikoa areagotzeko teknikei buruzko langileentzako prestakuntza-plana onartzeko betebeharra; betebeharrak horrek ez dio eragiten Euskal herriko Unibertsitateari, nahiz eta horren arrazoia ezin den azaldu, berez unibertsitatea ere Administrazio Publikotzat jo baitaiteke 2. artikulua ren arabera, eta legearen eraginpean baitago.

125. **27. artikulua**k, “Borondatezko akordioak” titulua duenak, idazketa hau dauka:

“1. Borondatezko hitzarmenen bidez, EAEko administrazio publikoek konpromisoa hartuko dute lege eskatutako gutxienekoak gainditzen dituzten jasangarritasun energetikoko zenbait neurri betetzeko.

2. Aldeek nahitaez bete beharko dituzte borondatezko hitzarmenak, beharrezko izan daitezkeen baimenak ahaztu gabe.

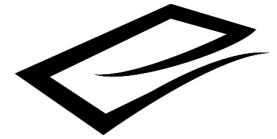
3. Eusko Jaurlaritzan energiaren eskumena duen sailak energia arduraz erabiltzeko gizarte-lankidetzak bultzatu eta sustatuko du, lege honen helburuak lor daitezkeen; horrek esan nahi du energiaren sektoreko eragileekin eta beste gizarte-eragile batzuekin behar diren borondatezko hitzarmenak egin ditzakeela.

4. EAEko administrazio publikoek jasangarritasun energetikoaren arloan izenpetzen dituzten borondatezko hitzarmenak argitaratu behar dituzte, eta eguneratuta eta jendearen eskura eduki hitzarmen horiei buruz duten informazioa.

126. Komenigarria izango litzateke borondatezko akordioak dentsitate handiagoarekin arautu izana.

127. Borondatezko akordioa itun-tresna gisa sortu da ingurumena babesteko ingurumenaren arloan jarduteko Batasunaren V. programaren dokumentuarekin (1992-2000), “soft law” neurrien edo tekniken bidez ingurumenaren jasangarritasunean inplikaturako alderdi guztien erantzukizun partekatua lortzeko helburuarekin, oraindik erabat zehaztua ez dagoen figura juridiko bat eratuz. Horregatik, figura hori erabiltzeko, bere elementuak hobeto definitu behar dira oraindik.

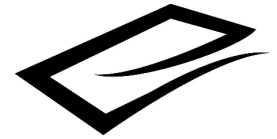
128. Europako Batzordea, Europako Kontseiluari eta Parlamentuari igorritako komunikazio bidez, figura garatuz joan da.



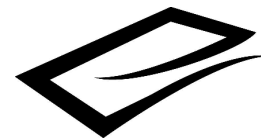
129. Ingurumenaren arloan jarduteko V. programaren barruan, 1996ko azaroaren 27ko komunikazioak (COM (96) 561) jasotzen du ingurumenari buruzko estatuen mailako akordioen “kontrol-zerrenda” bat. Zerrenda horretako lau ataletan zehazten dira, hain zuzen, borondatezko akordioaren tresna aukeratzeko arrazoiak, akordio horren edukia, EE tratatuarekiko adostasuna eta hitzarmenen argitalpena.
130. Hitzarmenen edukiaren barruan, aurreko komunikazioak zehazten du alderdi hauek definitu behar direla: akordioa sinatzen duten alderdiak (elkartek edo enpresak banaka); akordioaren xedea; terminoen definizioa; helburu kuantifikatuak; etapen zehaztapena; betebeharren zehaztapena; emaitzen jarraipena; aldizkako informazioa; informaziorako sarbidea; emaitzak jasotzeko, balioesteko eta egiaztatzeko prozedurak; zehapenak; hirugarrenak atxikitzea; iraupena; berrikuspena; amaiera; akordioaren izaera juridikoa; akordioari buruz ezagutu beharreko jurisdikzioa.
131. **Lehenengo xedapen gehigarriari** dagokionez —Ur-horniduraz, hondakinak bildu eta tratatzeaz, hondakin-urak arazteaz eta hiltegiez arduratzen diren partzuergo eta mankomunitateak barne hartzen ditu legeak ezarritako betebeharren hartzaile gisa —, 2. artikuluan jasotako administrazio publikoei dagokienez egindako oharrak bidaltzen dizkizuegu.
132. **Bigarren xedapen gehigarriak** lehen idatzi-zatian ezartzen duenez, lege hau indarrean sartu eta bederatzi hilabeteko epean EAeko administrazio publikoen energia-kontsumo osoaren oinarritzko erreferentzia-maila onartuko da, eta hori izango da legean ezarritako neurrietarako abiapuntua.
133. Xedapenak zehaztu behar du, behar bezain argi, administrazio publiko guztien kontsumo energetiko osoaz ari den edo administrazio publiko bakoitzaren kontsumo osoaz, eta nori dagokion adierazitako erreferentziazko energia-kontsumoa onartzea.

B) Legegintzako teknika arloko oharrak:

134. Zioen azalpenaren hirugarren paragrafoa —“gure gizarteak, emakumez eta gizonez osatutakoak, energia erabiltzen du, eta administrazioak pertsonekin duen konpromisoa dela-eta, aukera- eta tratu-berdintasuna bermatuko dugu energiaren erabileran”—, esanahiari dagokionez nahasia izateaz gainera, testuingururik gabea dirudi, ez baita Administrazioa araua ematen duena, Parlamentua baizik.



135. 5.j) artikulua bere helburuen artean ezartzen du beste administrazio batzuekin eta partikularrekin hitzarmenak egin daitezzen bultzatzea, jasagarritasun energetikoa areagotu dadin.
136. Administrazioen arteko eta administrazioen eta partikularren arteko akordioak bultzatzea esan nahi dela dirudi.
137. 13.3 artikuluko hirugarren idatzi-zatiak ezartzen du 5.000 biztanletik beherako udalek ordeztu ahal izango dutela jarduketa energetikoko plana hurrengo idatzi-zatiko a eta b letretan adierazitako informazioa gutxienez edukiko duen “ibilbide-orri” batekin.
138. “ibilbide-orri” terminoa, energiaren arloan ohiko erabilerakoa ez bada, hobe litzateke “dokumentu” terminoarekin ordeztea.
139. 16.2 artikuluko b) idatzi-zatian “aztertuz” hitza sobera dago.
140. 17.1 artikuluan jasotzen diren Eraikinen Efizientzia Energetikoa Ziurtatzeko Oinarritzko Prozedura onartzen duen apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuaren erreferentziak komeniko litzateke “eraikinen efizientzia energetikoaren ziurtatzeari buruz indarrean dagoen araudiari” bihurtzea, araudi hori proiektatutako legea baino lehen aldatuko dela espero baita.
141. 18.1 artikulua bigarren paragrafoak xedatzen du “Energia-kontsumo ia nulua zer den araz ezartzen den arte, energia-kontsumo ia nuluko eraikinei buruz lege honen hirugarren xedapen gehigarrian xedatutakoa aplikatuko da”, eta hori ez da beharrezkoa, gauza bera ezartzen baita aipatutako hirugarren xedapen gehigarrian.
142. 25.1 artikuluan, legearen 18. artikuluari egiten zaio erreferentzia 17. artikuluari egin beharrean.
143. 25.2 artikulua ezartzen du EAEko administrazio publikoek lege hau indarrean sartzen denetik erosten dituzten ibilgailu berriek zer erregai-mota erabiltzen duten jakiteko eta agindu bidez zehaztutako beste datu batzuei buruzko informazioa emateko etiketak erakutsi behar dituztela erraz ikusteko lekuren batean.
144. Batzordeak ohartarazi nahi du agian ordezeko erregaiak erabiltzen dituzten ibilgailu berriei egin nahi zaiela erreferentzia, 2020 urtera arte administrazio publikoek ordezeko erregaiak erabiltzen ez dituzten ibilgailuak eros baititzakete, 19.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.



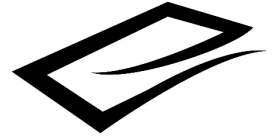
145. 27. artikuluko 4. paragrafoak, “eguneratuta eta jendeari eskura eduki” esan ordeztu “eguneratuta eta jendearen eskura eduki” esan behar du.
146. Azken xedapenetatik lehenengoak ezartzen du “Eusko Legebiltzarrak, Kontuen Epaitegiak eta Arartekoak jasangarritasun energetikoko beren planak egingo dituztela, eta lege honetan xedatutakoa har dezaketela kontuan horretarako”.
147. Hobeto adierazita egongo litzateke esango balu aipatutako erakundeek jasangarritasun energetikoari buruzko beren planak egingo dituztela, legearen aurreikuspenak betetzeko beharrezkoak izan gabe.
148. Azkenik, etorkizuneko arauaren barne-egitura hobetuko luke irizpide bakar bat erabiltzeak artikuluen edukiaren barne-sailkapenerako.
149. Horretarako, Arauen proiektuak egiteko gidalerroei jarraikiz, irizpide hau aplikatu liteke: artikulua hainbat paragrafo baditu, paragrafo bakoitza zenbaituko da (bakarra bada, ez da beharrezkoa zenbaitzea); paragrafo bakoitzeko idatzi-zatiak ez dira zenbaituko; paragrafo bat zatitu behar bada, letrak erabiliko dira. Berez, paragrafoetako zati horiek ez dira azpibanatu behar, baina, kasu berezietan beharrezkoa denean, zati bakoitzari zenbakiak jarriko zaizkio (1., 2., 3. [...]).

ONDORIOA

Legearen aurreproiektuaren aldeko irizpena ematen dut; dena den, kontuan hartu behar dira irizpen honetan jasotako oharra.

Eta hala ziurtatzen dugu, Gasteizen, 2016ko uztailaren 8an, jakin eta kontuan har dadin. Era berean, azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 30.2 artikulua xedatzen duen betebeharra gogorarazi nahi dugu: azkenean onartzen den xedapen edo ebazpena Batzordeari jakinarazi behar zaio, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren antolamendu eta funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duen irailaren 12ko 167/2006 Dekretuaren 34. artikulua xedatzen duen moduan eta epean.

O. I.:



Jesús María Alonso Quilchano
Idazkaria

Sabino Torre Díez
Batzordeburua

XV

**ORDEN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO /
PROZEDURA HASTEKO AGINDUA**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN
ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA
PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VASCAS**



ORDEN DE LA CONSEJERA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD POR LA QUE SE ACUERDA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS.

La Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, pretende ordenar el procedimiento de elaboración de las normas, estableciendo en su artículo 4.1 que los procedimientos de elaboración de las disposiciones de carácter general se iniciarán por Orden del Consejero o Consejera titular del Departamento competente por razón de la materia sobre la que versen. Asimismo, el artículo 5.1 de la citada disposición establece los requisitos y el contenido mínimo de esta Orden de iniciación.

El proyecto de Ley que se pretende elaborar tiene por objeto establecer los pilares normativos de la sostenibilidad energética en la Comunidad Autónoma de acuerdo con la orientación de la política energética, determinando los deberes y obligaciones que deben cumplir las Administraciones Públicas Vascas.

Por todo ello, y sobre la base del contenido necesario que debe tener, conforme al artículo 5.1 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, la orden de iniciación,

RESUELVO

Primero.- Objeto y competencia para ordenar la iniciación del procedimiento.

1.- El objeto de la presente Orden es ordenar el inicio del procedimiento para la elaboración del proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas.

2.- En cuanto a la competencia para ordenar la iniciación del procedimiento, la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, establece en su artículo 4.1 que este procedimiento de elaboración se iniciará por Orden del Consejero titular del Departamento competente por razón de la materia sobre la que versen. En este caso, la Orden de inicio viene formulada por la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad.

Segundo.- Viabilidad jurídica y material de la norma.

El marco legal de la competencia que se ejercita deriva fundamentalmente de lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre, en cuya virtud, la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución de las bases en materia de régimen minero y energético. Significativas resultan así mismo las relativas a organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno (artículo 10.2 EAPV).



A la vista de lo expuesto, las materias a desarrollar en la Ley, quedan encuadradas sustancialmente entre las funciones y áreas de actuación del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, conforme dispone el artículo 7 del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

Tercero.- Objeto y finalidad del proyecto de Ley.

El proyecto de Ley tiene como finalidad establecer los pilares normativos de la sostenibilidad energética en la Comunidad Autónoma de acuerdo con la orientación de la política energética, determinando los deberes y obligaciones que deben cumplir las Administraciones Públicas Vascas.

Cuarto.- Repercusión en el ordenamiento jurídico.

El proyecto de Ley regulará la materia ex novo por lo que se refiere a la Administración Local y Foral.

Quinto.- Incidencia presupuestaria.

La Ley que se proyecta no va a suponer nuevos compromisos económicos para el Departamento.

Sexto.- Trámites e informes procedentes.

1.- La redacción del texto del proyecto de Ley se efectuará teniendo en cuenta las opciones que mejor se acomoden a los objetivos perseguidos y al resultado de las consultas que se estimen convenientes para garantizar el acierto y legalidad de la regulación prevista.

2.- De conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010, por el que se aprueban las instrucciones de tramitación en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, la presente Orden de iniciación se hará pública en el espacio colaborativo de conocimiento compartido: <http://elkarlan.jakina/webguneak/legesarea>.

3.- Una vez redactado el proyecto de Ley se someterá a la aprobación previa de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad.



- 4.- Tras redactarse el proyecto de Ley, se realizará por el órgano competente para elaborar la disposición, un informe de evaluación de impacto en función del género conforme dispone el artículo 19 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, en relación con las Directrices para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres aprobadas por Consejo de Gobierno el 13 de febrero de 2007.
- 5.- Se emitirá por el servicio jurídico del Departamento un informe jurídico en el que se analice su fundamento objetivo, la adecuación de su contenido a la Ley y al Derecho y la observancia de las directrices de técnica normativa.
- 6.- Se emitirá Informe de impacto en la empresa conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 16/2012, de 28 de junio de emprendedores del País Vasco.
- 7.- Se dará participación y consulta en el procedimiento a los Departamentos del Gobierno Vasco y a cuantos órganos o entidades considere el órgano promotor que pudieran verse afectados por la disposición. Así mismo, se remitirá el texto a otras Administraciones que pudieran resultar afectadas directamente por la regulación prevista como Diputaciones Forales y EUDEL.
- 8.- Se solicitarán observaciones, informes preceptivos y dictámenes de los órganos consultivos en el momento y forma que determinen las disposiciones que regulan dichos trámites, con arreglo al vigente procedimiento de elaboración de disposiciones normativas, incluidos los relativos a:
- a) Informe de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, de conformidad con lo establecido en la Ley 2/1988, de 5 de febrero, sobre creación de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, modificada por Ley 4/2005, de 18 e febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.
 - b) Informe de la Viceconsejería de Política Lingüística del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura sobre la incidencia de las disposiciones de carácter general en la normalización del uso del Euskera y su adecuación a la normativa vigente en materia lingüística, exigido por el artículo 2 del Decreto 128/2007, de 31 de agosto, por el que se establece el régimen al que ha de ajustarse el trámite de evacuación de informe por el Departamento de Cultura en el marco del procedimiento de elaboración de disposiciones generales.
 - c) Informe de la Junta Asesora de la Contratación Administrativa de conformidad con lo previsto en el artículo 21.2.a) del Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre régimen de la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
 - d) Informe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (DACIMA), conforme dispone el Decreto 188/2013, de 9 de abril.
 - e) Informe de control económico-normativo de la Oficina de Control Económico, en aplicación de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la CAE y el Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio de control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la CAE.
 - f) Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi de conformidad con lo establecido por la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.



9.- No es necesario realizar ningún trámite ante la Unión Europea

10.- Se incorpora al expediente la presente Orden de iniciación y toda la documentación correspondiente, los estudios y consultas evacuados, la Memoria Económica y una Memoria Sucinta de todo el procedimiento, con el contenido que señala el artículo 10.2 de la Ley 8/2003. de 22 de diciembre, y a los efectos de la aprobación final por el Consejo de Gobierno del proyecto de Ley en los términos que señala el artículo 13 de la referida Ley.

Tras su aprobación se remitirá al Parlamento Vasco para su debate y aprobación, en su caso, por el mismo.


Séptimo.- Sistema de redacción

El sistema que se utilizará para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 10/1982 del Euskera será el de traducción por los servicios de traducción del Departamento de la versión castellana del texto normativo.

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **MARIA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI**

Fecha de la firma: **16/09/2015 12:31:41**

Validación de la firma:  **Correcta**

Fdo.: Arantza Tapia Otaegi
CONSEJERA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUNEN SAILBURUAREN AGINDUA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN ENERGETIKOARI BURUZKO LEGEAREN PROIEKTUA EGITEKO PROZEDURA HASTEA ERABAKITZEN DUENA

Xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen helburua da arauak prestatzeko prozedura antolatzea eta, horretarako, 4.1. artikulua bidez agintzen du xedapen orokorrak egiteko prozedurak jorratzen duten dena delako gaian eskumena daukan sailaren titularra den sailburuaren aginduz abiarazi behar direla. Bestalde, xedapen horretako 5.1 artikulua ezartzen ditu Hasierako Aginduaren betekizunak eta gutxieneko edukia.

Egin nahi den lege-proiektuaren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko jasangarritasun energetikoaren arau-oinarriak ezartzea politika energetikoaren orientazioarekin bat etorritik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoek bete behar dituzten betebeharrak eta eginbeharrak zehaztuz.

Horregatik guztiagatik, eta abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 5.1. artikulua arabera hasteko aginduak ezinbestean izan behar duen edukian oinarrituta, honako hau

XEDATZEN DUT:

Lehenengoa.- Prozeduraren xedea eta prozedura hasteko eskumena.

1.- Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Jasangarritasun Energetikoari buruzko legea egiteko prozedura has dadin agintzea.

2.- Prozedura hasteko agindua emateko eskumenari dagokionez, xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legeak 4.1. artikuluan xedatzen du dena delako gaitan eskumena daukan sailaren titularra den sailburuaren aginduz abiarazi behar direla prestatzeko prozedurak. Kasu honetan, hasteko agindua Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak eman du.

Bigarrena.- Arauaren bideragarritasun juridikoa eta materiala.

Gauzatzen den eskumenaren lege-esparrua Euskal Herriko Autonomia Estatutuak (abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartu zen) 11.2 artikuluan xedatzen duenaren ondoriozkoa da, hartan ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoak eskumena duela lege-garapenerako eta oinarrien exekuziorako meatzaritza eta energiaren erregimenean. Esanguratsuak dira, orobat, autogobernu-erakundearen antolamendu, erregimen eta funtzionamenduari dagozkionak (EHAEko 10.2 artikulua).



Azaldutakoa kontuan izanik, Legean garatu beharreko gaiak Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren zereginen eta jardun-eremuen artean lerratuta geratzen dira funtsean, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta haien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuaren 7. artikulua ezartzen duenarekin bat etorritik.

Hirugarrena.- Lege-proiektuaren xedea eta helburua.

Lege-proiektuaren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko jasangarritasun energetikoaren arau-oinarriak ezartzea politika energetikoaren orientazioarekin bat etorritik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoek bete behar dituzten betebeharrak eta eginbeharrak zehaztuz.

Laugarrena.- Antolamendu juridikoan izango duen eragina.

Lege-proiektuak *ex novo* arautuko du gaia toki- eta foru-administrazioari dagokionez.

Bosgarrena.- Aurrekontuan izango duen eragina.

Proiektatzen den Legeak ez du konpromiso ekonomiko berririk sortuko Sailarentzat.

Seigarrena.- Beharrezkoak diren izapideak eta txostenak.

1. Lege-proiektuaren testua idazteko kontuan hartuko dira bilatzen diren helburuetara ondoen egokitzen diren aukera guztiak bai eta aurreikusitako araudiaren egokitasuna eta legezotasuna bermatzeko beharrezkotzat jo eta egingo diren kontsulten emaitzak ere.

2.- Xedapen orokorrak egiteko prozeduran izapidetze-jarraibideak onartzen dituen 2010eko abenduaren 28ko Jaurkitzearen Kontseiluaren Akordioan ezarritakoarekin bat etorritik, Hasierako Agindu hau ezagutza partekatuko lankidetzarako gunean egingo da publiko: <http://elkarlan.jakina/webguneak/legesarea>

3.- Lege-proiektua idatzitakoan, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuak alde aurreko onarpena eman beharko dio.

4.- Lege-proiektua idatzitakoan, xedapena egiteko eskumena duen organoak generoaren arabera eraginaren ebaluazioaren txosten bat egingo du Gizonen eta Emakumeen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko (GEBL) 19. artikulua eskatzen duenari jarraikiz, 2007ko otsailaren 13ko Gobernu Kontseiluak onartutako genero eraginaren aurreko ebaluazioa gauzatzeko jarraibideetan eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak ekidin eta berdintasuna sustatzeko neurrietan xedatutakoari begira.



5.- Saileko zerbitzu juridikoak txosten juridikoa prestatuko du, proiektuaren oinarri objektiboa aztertzeko, edukia legearekin bat eta zuzenbidearekin bat datorren ikusteko eta araugintzako teknikaren jarraibideak bete diren egiaztatzeko.

6.- Enpresetan duen eraginari buruzko txostena egingo da, ekainaren 28ko Euskadiko Ekintzaileen 16/2012 Legearen 6. artikuluan ezarritakoaren arabera.

7.- Prozeduran Eusko Jaurlaritzako Sailek partaidetza eta kontsulta izango dute, eta erakunde sustatzailearen iritziz xedapenak eragin ditzakeen organo eta entitateek ere bai. Horrez gain, xedapenak zuzenean eragin ditzakeen beste administrazio batzuei ere bidaliko zaie testua, foru-aldundiei eta EUDELi, esaterako.

8.- Oharrak, nahitaezko txostenak eta kontsulta-organoen irizpenak eskatuko dira, izapide horiek arautzen dituzten xedapenek agintzen duten unean eta moduan, arau-xedapenak prestatzeko gaur egun indarrean dagoen prozedura gogoan hartuta. Besteak beste, honako txosten eta irizpen hauek bildu behar dira:

a) Emakunde Emakumearen Euskal Institutuaren txostena, Emakunde Emakumearen Euskal Institutua sortzeari buruzko otsailaren 5eko 2/1988 Legean (Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak aldatu zuen) ezarritakoari jarraituz.

b) Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren txostena, 2007ko abuztuaren 31ko 128/2007 Dekretuaren 2. artikulua agindutakoari jarraikiz xedapen orokorrek euskararen erabileraren normalizazioan zer eragin duten eta hizkuntza arloan indarrean dagoen araudia betetzen duten ala ez argitzekoa. Dekretu horrek xedapen orokorrak egiteko prozeduraren barruan Kultura Sailak txostenak bideratzeko bete behar duen araubidea ezartzen du.

c) Kontratazioaren Aholku Batzordearen txostena, ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren kontratazio araubideari buruzkoak, 21.2.a) artikuluan xedatutakoarekin bat etorritik.

d) Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren txostena, apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuak ezarritakoarekin bat etorritik.

e) Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren ekonomiaren eta arauen kontrolerako txostena, EAEko kontrol ekonomikoari eta kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legea eta EAEko eremuan barneko kontrol ekonomikoa eta kontabilitatea nola burutu garatu duen urriaren 31ko 464/1995 Dekretua aplikatuz.

f) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpena, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legean ezarritakoaren arabera.

9.- Ez dago Europar Batasunean inolako izapiderik egin beharrik.

10.- Espedientean jasoko dira prozedura hasteko agindu hau eta dagokion dokumentazio guztia, egindako azterlan eta kontsultak, memoria ekonomikoa eta prozedura guztiaren memoria laburtu bat, abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 10.2 artikuluan adierazten den



edukiarekin, Lege horren 13. artikuluan adierazitakoaren arabera Gobernu Kontseiluak lege-proiektua behin betiko onar dezan.

Onartu ondoren, Eusko Legebiltzarrera bidaliko da bertan eztabaidatu eta, hala badagokio, onar dadin.

Zazpigarrena.- Erredakzio-sistema

Euskararen 10/1982 Legearen 8.1 artikuluan xedatutakoa betetzeko erabiliko den sistema izango da saileko itzulpen-zerbitzuek egitea arau-testuaren gaztelaniazko bertsioaren itzulpena.

Izpta: Arantza Tapia Otaegi

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUNEN SAILBURUA

XVI

ORDEN DE APROBACIÓN PREVIA DEL PROYECTO / PROIEKTUA AURRETIK ONARTZEKO AGINDUA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN JASANGARRITASUN
ENERGETIKOARI BURUZKO LEGE PROIEKTUA
PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VASCAS**



ORDEN DE LA CONSEJERA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, POR LA QUE SE APRUEBA, CON CARÁCTER PREVIO, EL PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS.

La Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, establece en su artículo 7, que “una vez redactados los proyectos de disposición de carácter general, deberán contar con la aprobación previa por el órgano que haya dictado la orden de iniciación, antes de evacuar los trámites de negociación, audiencia y consulta que procedan”. Así mismo, se establecen los requisitos y el contenido mínimo de esta Orden de iniciación.

Mediante Orden de este mismo órgano se acordó el inicio del procedimiento administrativo necesario para la elaboración del Proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas, debiéndose instruir el correspondiente expediente de elaboración de una disposición reglamentaria, realizándose los análisis, estudios y trámites que resultaran necesarios.

Elaborado por los Servicios Técnicos de este Departamento un primer proyecto normativo que se adecua a lo dispuesto en las Directrices para la elaboración de Proyectos de Ley, Decretos, Ordenes y Resoluciones aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993 y publicadas mediante Orden de 6 de abril de 1993, del Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autónomico, mediante la presente Orden se aprueba el primer proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas.

En virtud de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, vistos los preceptos legales citados y otras disposiciones de general y concordante aplicación,

RESUELVO

Uno.- Aprobar, con carácter previo, el proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas.

Dos.- Ordenar la continuación en la tramitación del expediente de acuerdo con lo previsto en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, así como en la Orden de 16 de setiembre de 2015, de este órgano, por la que se inicia el mismo.

Arantza Tapia Otaegi

CONSEJERA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



**AGINDUA, EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUNEN
SAILBURUARENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO
PUBLIKOEN JASANGARRITASUN ENERGETIKOAREN LEGE-PROIEKTUA
ALDEZ AURRETIK ONARTZEN DUENA.**

Xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legeak 7. artikuluan ezartzen duenez, "xedapen orokorren egitasmoak idatzitakoan, prozedura hasteko agindua eman duen organoak aldeaz aurreko onarpena eman beharko die, dagozkion negoziazio-, entzunaldi- eta kontsultazapideak egin aurretik". Hasierako aginduaren betekizunak eta gutxieneko edukia ere ezartzen ditu.

Organo beraren Agindu bidez erabaki zen Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoari buruzko legea egiteko prozedura hastea, eta arautegi-xedapen bat egiteko espedientea instruitu behar zela, beharrezkotzat jotako analisiak, azterketak eta izapideak eginez.

Sail honetako Zerbitzu Teknikoek lehen arau-proiektu bat egin dute, 1993ko martxoaren 23ko Gobernu Kontseiluak onartutako Lege-proiektuak, Dekretuak, Aginduak eta Ebazpenak egiteko gidalerroek —1993ko apirilaren 6ko Lehendakaritza, Lege Araubide eta Autonomia Garapeneko Sailburuaren Aginduaren bidez argitaratutakoek— ezarritakoari egokitzen zaiona, eta Agindu honen bidez onartzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoaren Legearen lehen proiektua.

Abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 7. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, aztertu ondoren aipatutako legezko aginduak eta aplikazio orokorreko gainerako guztiak,

XEDATZEN DUT:

Bat.- Hasierako onarpena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoaren Legearen proiektuari.

Bi.- Espedientearen izapidetzearen jarraipena agintzea abenduaren 22ko 8/2003 Legearekin bat etorriz, baita 2015eko irailaren 16ko Aginduarena ere, organo honena, hari hasiera ematen diona.

Arantza Tapia Otaegi

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUNEN SAILBURUA

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA,
Merkataritza eta Turismo SAILA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

ANEXO

PROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La energía forma parte íntegra de la vida de las personas. De hecho, la vida es posible porque el sol emite energía que llega al planeta Tierra, en un lapso de 8 minutos, desencadenando todos los procesos vitales esenciales. Las necesidades energéticas han sido básicas para la existencia y desarrollo humano, en una evolución sin descanso que discurre desde las hogueras prehistóricas hasta la actualidad y con dos hitos destacables, a saber, la revolución industrial, fundamentada en el carbón, y el empleo generalizado del petróleo a partir de los años 20 del siglo pasado con la producción en masa de automóviles y aviones. A pesar de las sucesivas crisis energéticas, que comienzan en 1973, el petróleo constituye una fuente esencial de las sociedades actuales y está presente en prácticamente todos los artículos de uso y consumo. Obviamente, el petróleo no es la única fuente energética, al convivir con otras, como el gas natural, el carbón o la nuclear y con las renovables: hidráulica, eólica, solar, biomasa, marina y geotérmica, cuyo papel en el suministro global de energía resulta cada día más importante.

Ahora bien, el consumo energético presenta distintos problemas. Por una parte, se trata de utilizar la energía de la manera lo más eficiente posible, lo que constituye un evidente reto en las sociedades actuales en términos físicos y económicos. Por otra, está el problema de las emisiones de gases con efecto invernadero a la atmósfera. Las previsibles consecuencias del cambio climático, que cuentan con un amplio consenso científico, hacen necesario adoptar medidas que reduzcan significativamente dichas emisiones por medio, entre otros, de la sostenibilidad energética, haciendo que la debida solidaridad intergeneracional sea algo más que un eslogan habitual en declaraciones y textos jurídicos diversos.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea incluye un Título XXI específicamente dedicado a la política energética, con una serie de objetivos básicos que pasan por garantizar el funcionamiento del mercado de la energía; garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión; fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético así como el desarrollo de energías nuevas y renovables; y fomentar la interconexión de las redes energéticas. De hecho, la Unión Europea ha adoptado distintas medidas en este terreno, entre las que cabe citar la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, o la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos.



La Comunidad Autónoma del País Vasco ha tomado desde hace años distintas acciones en materia de energía. Ya en 1982 se creó el Ente Vasco de la Energía, mediante la Ley 9/1982, de 24 de noviembre, atribuyéndole la planificación, la coordinación y el control de las actividades actuales y futuras del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el campo de la energía, de acuerdo con las directrices del Gobierno en el ámbito de las competencias establecidas en el Estatuto de Autonomía. En este contexto, la Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3E2020) establece, entre otros objetivos, la intensificación de las actuaciones en eficiencia energética en todos los sectores consumidores, con un ahorro de 1.050.000 tep anuales en el año 2020, y mejorar la intensidad energética final en un 22%. De esta manera, se pretende ahorrar entre 4.000 y 5.000 millones de euros en la próxima década y reducir el consumo final de petróleo en el año 2020 un 9% respecto de 2010, favoreciendo la desvinculación con el sector transporte. También se persigue que las energías alternativas en el transporte por carretera sean el 15% y que el aprovechamiento de estas energías alcance en el año 2020 los 905.000 tep, lo que significaría una cuota de renovables en consumo final del 14%. Todos estos objetivos son ciertamente ambiciosos, pero solo si se es ambicioso es posible que se puedan lograr.

En este sentido, la presente Ley establece a través de sus 28 artículos los pilares normativos de la sostenibilidad energética, basada en el impulso de medidas de eficiencia energética y de ahorro de energía y de promoción e implantación de las energías renovables, en la Comunidad Autónoma de acuerdo con la orientación de la política energética determinando los deberes y obligaciones que deben cumplir las Administraciones Públicas Vascas que, además, deben adoptar un papel ejemplar en este ámbito. Para ello, se estructura en tres capítulos, cuatro disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.

El capítulo I determina en primer lugar sus ámbitos de aplicación subjetivo y objetivo y las definiciones necesarias para poder aplicarla y comprenderla. A continuación enumera los objetivos que subyacen en la Ley, destacándose la reducción del consumo energético y el impulso y promoción de la sostenibilidad energética, sin olvidar la componente de protección del medio ambiente mediante la implantación de instalaciones de energía renovable. Asimismo, la Ley enuncia ocho principios interpretativos que constituyen pautas de actuación de las Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma, entre los que cabe destacar el papel ejemplarizante de las Administraciones Públicas Vascas. Asimismo, se establece como pilar fundamental la integración de los requisitos de la Ley en otras políticas públicas, en especial en aquellas que tienen que ver con la ordenación del territorio, el urbanismo y las infraestructuras del transporte, así como el de eficacia y coordinación de las diversas Administraciones Públicas Vascas. Para la consecución de estos objetivos se establecen las Comisiones para la sostenibilidad energética de cada Administración, que se configuran como instrumentos con importantes funciones en la materia.



El capítulo II es clave y en él se determinan las obligaciones a las que se sujetan las Administraciones Públicas Vascas. Como en el caso de otras políticas públicas, para marcar las orientaciones principales resulta esencial señalar objetivos y actuaciones a realizar en un lapso temporal amplio. Estas obligaciones quedan moduladas en el supuesto de los municipios, dependiendo de su población, pero en todo caso persiguen que las Administraciones Públicas Vascas adopten medidas eficaces para la consecución de los objetivos de la Ley.

El capítulo se divide en cuatro secciones. La primera de ellas contiene los objetivos y acciones generales que deben acometer las Administraciones Públicas. En este sentido, la Ley les exige la elaboración de los correspondientes inventarios, el control de consumos y la realización de auditorías energéticas. Estas medidas sirven de punto de partida para la elaboración de los correspondientes planes de actuación energética de carácter plurianual en los que las Administraciones Públicas realizan un diagnóstico de la situación en su ámbito de actuación y fijan estrategias a ejecutar durante la vigencia de los mismos. Asimismo, se establecen los objetivos de reducciones porcentuales de consumo de energía con referencia a sus consumos anuales y a unos períodos de tiempo tasados, los de implantación de instalaciones de energía renovable y los requisitos para la renovación de instalaciones, vehículos o equipos de alto consumo energético.

La sección 2ª contempla las obligaciones referidas a los edificios y viviendas, exigiendo la calificación energética de todos los edificios existentes y que los nuevos o que sean objeto de reformas importantes sean de consumo energético casi nulo. Por su parte, el transporte y la movilidad es objeto de la sección 3ª que recoge, entre otras cosas, la posibilidad de que los municipios restrinjan e incluso prohíban la entrada de determinados vehículos en el centro urbano. Esta materia del transporte se completa con el fomento de los vehículos que utilicen combustibles alternativos, incluyendo los que prestan el servicio público de transporte de viajeros, y con la exigencia de que los municipios cuenten con un plan de movilidad urbana, con indicación de los objetivos a alcanzar. Todas estas medidas se refuerzan por medio de las obligaciones de publicidad, de formación de su personal y de exhibición de etiquetas energéticas establecidas en la sección 4ª.

Para terminar, el capítulo III se refiere a los instrumentos voluntarios y al fomento de las actividades de sostenibilidad energética, incluyendo medidas incentivadoras del cumplimiento de las obligaciones y objetivos impuestos en la presente Ley a través de los posibles incrementos de las ayudas públicas en materia de sostenibilidad energética. Este capítulo incluye también una referencia a los acuerdos voluntarios, como fórmula para ir más allá de las obligaciones legales que se imponen a las Administraciones Públicas. Asimismo, en este capítulo se garantiza el derecho a la información, en línea con la normativa de la Unión Europea.



Por lo que respecta a las disposiciones adicionales, estas aclaran el cálculo del nivel base de referencia y lo que se entiende por edificio de consumo de energía casi nulo mientras no se especifique e imponen distintas obligaciones a los Consorcios y Mancomunidades y a las empresas distribuidoras de gas y electricidad. Por su parte, las disposiciones finales incluyen, además de la entrada en vigor de la Ley, la previsión de que tanto el Parlamento Vasco, el Tribunal de Cuentas y el Ararteko puedan, en su caso, elaborar sus propios planes, teniendo en cuenta lo dispuesto en esta Ley.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto el establecimiento, de acuerdo con la orientación general de la política energética, de los pilares normativos de la sostenibilidad energética en el ámbito de las Administraciones Públicas Vascas, articulando los deberes y obligaciones que estas deben cumplir y que se orientan fundamentalmente al impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética y de promoción e implantación de energías renovables.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

A los efectos de esta Ley, se entenderá por Administraciones Públicas Vascas:

- a) La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco incluyendo sus entidades vinculadas o dependientes.
- b) La Administración de los Territorios Históricos incluyendo sus entidades vinculadas o dependientes.
- c) La de los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco incluyendo sus entidades vinculadas o dependientes.
- d) La Universidad del País Vasco/Euskal-Herriko Unibertsitatea incluyendo sus entidades vinculadas o dependientes.

Se entienden por entidades vinculadas o dependientes los organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado, las sociedades públicas, las fundaciones del sector público y los consorcios con personalidad jurídica propia a los que se refiere el artículo 7.4.c) del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.



Artículo 3. Ámbito objetivo.

1.- Esta Ley será de aplicación a los edificios, instalaciones y parque móvil, que sean propiedad de alguna de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la misma, aun cuando estuvieran arrendados a terceras personas.

2. Se excluyen del ámbito objetivo de la presente Ley los edificios que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

- a) Los ocupados por alguna de las entidades del artículo anterior en régimen de arrendamiento, siempre y cuando su titularidad corresponda a un tercero al que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, no le fuera de aplicación la presente Ley.
- b) Los situados en el extranjero.
- c) Los provisionales cuyo plazo previsto de utilización sea igual o inferior a 5 años.
- d) Los que tengan prevista su venta en un plazo inferior a 5 años.
- e) Aquellos en los que se justifique la inviabilidad de implantar las medidas establecidas en la presente Ley por razones de carácter urbanístico, de protección del patrimonio histórico-artístico u otras de análoga naturaleza.

Artículo 4. Definiciones.

A los efectos de esta Ley se entiende por:

- a) Acreditación: verificación por parte de una entidad de acreditación del cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos exigidos para realización de una determinada actividad.
- b) Ahorro de energía: la cantidad de energía ahorrada, determinada mediante la medición y/o estimación del consumo antes y después de la aplicación de alguna medida de mejora de la eficiencia energética, teniendo en cuenta al mismo tiempo la normalización de las condiciones externas que influyen en el consumo de energía.
- c) Auditor energético: persona física o jurídica que se encarga de la realización de una auditoría energética y que cuenta con la correspondiente acreditación.
- d) Auditoría energética: todo procedimiento sistemático destinado a obtener conocimientos adecuados del perfil de consumo de energía existente de un edificio o grupo de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un



servicio privado o público, así como para determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de energía a un coste eficiente e informar al respecto.

e) Cliente final: toda persona física o jurídica que compra energía para su propio uso final.

f) Combustibles alternativos en el transporte: los combustibles o fuentes de energía que sustituyen, al menos en parte, a los combustibles fósiles clásicos como fuente de energía en el transporte y que pueden contribuir a la descarbonización de estos últimos y a mejorar el comportamiento medioambiental del sector del transporte. Incluyen, entre otros:

- la electricidad, incluyendo los híbridos,
- el hidrógeno,
- los biocarburantes, tal como se definen en el artículo 2, letra i), de la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, o en la norma de Derecho de la Unión Europea que la sustituya,
- los combustibles sintéticos y parafínicos,
- el gas natural, incluido el biometano, en forma gaseosa [gas natural comprimido (GNC)] y en forma licuada [gas natural licuado (GNL)], y
- el gas licuado del petróleo (GLP);

g) Consumo de energía final: toda la energía suministrada a los edificios o instalaciones afectados por la presente Ley.

h) Edificio: una construcción techada con paredes en la que se emplea energía para acondicionar el ambiente interior, que puede dedicarse tanto a vivienda como a la prestación de servicios, y puede referirse a un edificio en su conjunto o a partes del mismo que hayan sido diseñadas o modificadas para ser utilizadas por separado.

i) Edificio de consumo de energía casi nulo: edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determina de conformidad con lo establecido en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno.

j) Edificio existente: cualquier edificio construido, en construcción de acuerdo con la normativa aplicable o que cuente con todas las autorizaciones requeridas, ya sean de carácter urbanístico, ambiental o de otro tipo, antes de la entrada en vigor de esta Ley.



k) Edificio nuevo: todo edificio para cuya construcción se soliciten las correspondientes autorizaciones a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

l) Eficiencia energética: la relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o energía, y el gasto de energía.

m) Energía procedente de fuentes renovables: energía procedente de fuentes renovables no fósiles, como la **energía** hidráulica, eólica, solar, geotérmica, oceánica y biomasa, así como otros tipos de aprovechamiento considerados renovables.

n) Instalación: cualquier equipamiento o sistema que consuma energía en el cumplimiento de su función o bien la genere o la transforme *in situ* a partir de cualquier fuente de energía.

ñ) Nivel base de referencia del consumo energético global: inventario del total de la energía consumida, en todas sus formas, por la respectiva Administración en un momento dado y sobre el que se aplican los objetivos de sostenibilidad energética que se determinen. Incluye el consumo en detalle de las distintas fuentes de energía y vectores energéticos utilizados, tanto en términos absolutos como relativos, desagregados y agregados por edificios, unidades de actuación energética, instalaciones generadoras y consumidoras de energía, parque móvil y alumbrado público.

o) Punto de recarga o de repostaje accesible al público: punto de recarga o de repostaje para suministrar un combustible alternativo que permite el acceso no discriminatorio a los usuarios en toda la Unión Europea. El acceso no discriminatorio puede incluir diferentes condiciones de autenticación, utilización y pago.

p) Reformas importantes: la renovación o rehabilitación de un edificio cuando:

1. Los costes totales de la renovación referentes a la envolvente del edificio o a sus instalaciones técnicas son superiores al 25% del valor del edificio, excluido el valor del terreno en el que está construido, o
2. se renueve más del 25% de la superficie de la envolvente del edificio o
3. la rehabilitación afecte a más de un 50% de la superficie útil del edificio.

q) Servicio energético: el beneficio físico, la utilidad o el bien derivados de la combinación de una energía con una tecnología energética eficiente o con una acción, que puede incluir las operaciones, el mantenimiento y el control necesarios para prestar el servicio, el cual se presta con arreglo a un contrato y que, en circunstancias normales, ha demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía primaria verificables y medibles o estimables.

r) Unidad de actuación energética ámbito de aplicación, singular, conjunta o transversal, de todas o algunas de las medidas previstas en la presente Ley ya se trate de edificios propiedad de cualquiera de las Administraciones Públicas Vascas objeto de la presente



Ley como de sus instalaciones, sistemas de calefacción y refrigeración, parque móvil y, en su caso, alumbrado público.

Artículo 5. Objetivos.

En el ámbito definido en los artículos 2 y 3, los objetivos de esta Ley son:

- a) El impulso de la eficiencia en el uso de la energía y la promoción del ahorro, en el marco de las normas y actuaciones de la Unión Europea en esta materia.
- b) La promoción e implantación de las energías renovables y de otras fuentes energéticas alternativas sostenibles, con el fin de reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
- c) La desvinculación progresiva del uso energético del petróleo y sus derivados hasta alcanzar el consumo nulo.
- d) La promoción y el fomento de modos de transporte que utilicen combustibles alternativos.
- e) La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero consecuencia de las medidas de ahorro y eficiencia en el uso de la energía y de la utilización de fuentes de energía renovables derivadas del cumplimiento de la presente Ley.
- f) La reducción de la factura energética de las Administraciones Públicas Vascas.
- g) La promoción y el fomento de la investigación y del desarrollo de técnicas y tecnologías que incrementen el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía y el desarrollo de energías renovables, así como de los sistemas asociados que faciliten el avance de su utilización e implantación.
- h) La prevención y limitación de los impactos del uso de la energía en el medio ambiente y el territorio, mediante el ahorro y el empleo de técnicas y tecnologías que impliquen una mayor eficiencia en su uso, contribuyendo también a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- i) La integración de los requisitos derivados de la sostenibilidad energética en las distintas políticas públicas y, en particular, en las de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y transportes.
- j) El impulso de acuerdos con otras administraciones y con los particulares con el fin de lograr una mayor sostenibilidad energética.



k) La divulgación de los beneficios que aporta un mayor ahorro y eficiencia energética y el empleo de las energías renovables.

Artículo 6. Principios.

1. La presente Ley se asienta en los siguientes principios:

- a) Papel ejemplarizante de las Administraciones Públicas Vascas en materia de sostenibilidad energética mediante la adopción de las medidas obligatorias establecidas en esta Ley y normativa que la desarrolle, así como de cualquier otra que, no estando contemplada expresamente en esta Ley, pueda contribuir igualmente al cumplimiento de sus objetivos.
- b) Integración de las exigencias relativas a la sostenibilidad energética en el diseño y aplicación del resto de las políticas y actuaciones públicas que se desarrollen en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- c) Priorización en los planes de ordenación del territorio, urbanismo y de infraestructuras de medios de transporte menos intensivos en el uso de la energía y de la implantación de instalaciones con una mayor eficiencia energética.
- d) Adaptación al progreso técnico mediante el empleo de aquellas técnicas que logren un mayor ahorro, una mejor eficiencia energética o una mejor utilización de las energías renovables, siempre que se encuentren disponibles en condiciones económicamente razonables.
- e) Actuación informada de los poderes públicos en el País Vasco en datos científicos y técnicos disponibles a la hora de diseñar medidas y actuaciones sobre sostenibilidad energética.
- f) Cooperación, eficacia y coordinación entre las distintas administraciones públicas en materia de sostenibilidad.
- g) Participación ciudadana, directamente o por medio de asociaciones, en los términos que establezcan las correspondientes normas, en el diseño de las políticas y en las decisiones de sostenibilidad energética.
- h) Divulgación por parte de las Administraciones Públicas Vascas de información sobre sostenibilidad energética y sobre sus actuaciones concretas en esta materia.

2. Los anteriores principios constituyen pautas de actuación de las Administraciones Públicas Vascas y criterios de interpretación de las correspondientes normas en materia



energética y, en su caso, de aquellas otras políticas que desarrollen las Administraciones Públicas con incidencia en la política energética.

Artículo 7. Integración en la ordenación del territorio y el urbanismo.

1. De acuerdo con lo señalado en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 6, los instrumentos de ordenación del territorio, de planeamiento urbanístico y de infraestructuras del transporte deberán incluir un estudio sobre sostenibilidad energética en los términos de esta Ley y de la normativa que la desarrolle.

2. Estarán sujetos a lo anterior los siguientes instrumentos:

a) Las Directrices de Ordenación del territorio, los Planes territoriales parciales y los Planes territoriales sectoriales.

b) Los Planes de ordenación estructural, planes generales de ordenación urbana, planes de compatibilización de planeamiento general, plan de sectorización y, en su caso y en los términos que se establezcan reglamentariamente, los planes de ordenación pormenorizada.

c) Los Planes de carreteras o de infraestructuras de transporte y aquellos con incidencia directa en la logística de la distribución de mercancías.

Las determinaciones que se realicen en el planeamiento superior se tendrán en cuenta en los instrumentos subordinados.

3. El estudio sobre sostenibilidad energética incluirá los siguientes aspectos:

a) Evaluación de la adaptación a las exigencias de sostenibilidad energética.

b) Evaluación de la implantación de energías renovables en los edificios e infraestructuras.

c) Estudio de movilidad, a los efectos del consumo energético, incluyendo alternativas al uso del transporte privado.

4. En el caso de llevarse a cabo una evaluación estratégica del impacto ambiental de los instrumentos mencionados en el apartado 2, se deberá tener en cuenta su incidencia sobre la sostenibilidad energética.

5. A los efectos de contribuir a los objetivos de sostenibilidad energética, los instrumentos de planificación territorial y urbanística establecerán las reservas de suelo



que resulten precisas para la implantación de las infraestructuras necesarias para el logro de estos objetivos.

6. Los instrumentos urbanísticos correspondientes deberán prever estaciones de recarga de uso público en los entornos urbanos para garantizar el suministro de energía a los usuarios de vehículos eléctricos y alternativos, así como de espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de bicicletas.

Artículo 8. Coordinación de la política de sostenibilidad energética.

Para garantizar la coherencia de la política de sostenibilidad energética, corresponderá al departamento con competencia en materia de energía del Gobierno Vasco el ejercicio de las facultades de coordinación que demande el interés general del País Vasco a través de, entre otras, las siguientes actuaciones:

- a) Elaboración de normas.
- b) Simplificación de los procedimientos administrativos.
- c) Homogeneización de métodos y criterios técnicos.
- d) Implantación de sistemas de información recíproca.
- e) Divulgación de pautas y técnicas de ahorro y eficiencia energética.
- f) Elaboración de planes y programas de apoyo para el fomento de acciones y proyectos de sostenibilidad energética.

Artículo 9. Comisiones para la Sostenibilidad Energética.

1. Para la coordinación de los distintos entes integrantes de cada administración en la consecución de los objetivos perseguidos por la Ley, la Administración de la Comunidad Autónoma, las Administraciones de los Territorios Históricos y de los municipios, contarán cada una con una Comisión para la Sostenibilidad Energética.

2. Las Administraciones de los Territorios Históricos y los municipios con más de 25.000 habitantes deberán crear sus respectivas Comisiones en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Este plazo será de 2 años para los municipios de entre 5.000 y 25.000 habitantes.



3. Cada Administración establecerá la composición y el funcionamiento de esta Comisión.

4. Serán funciones de las Comisiones para la Sostenibilidad Energética:

- a) Aprobar el inventario a que se refiere el artículo 10.
- b) Supervisar y garantizar el desarrollo de las medidas adoptadas en cumplimiento de la presente Ley así como el cumplimiento de los objetivos establecidos en la misma.
- c) Informar periódicamente sobre el estado y desarrollo de su Plan de actuación energética.

CAPÍTULO II. OBJETIVOS Y ACCIONES

Sección 1ª. Objetivos y acciones generales

Artículo 10. Inventario.

1. Las Administraciones Públicas realizarán un inventario de edificios, parque móvil e instalaciones de alumbrado público existentes, dentro de su ámbito de actuación, que contendrá la siguiente información:

- a) Inventario de los edificios e instalaciones de su titularidad, incluyendo su superficie en m² y el consumo y gasto energético de cada edificio. Este inventario debe abarcar los sistemas de calefacción y de refrigeración. La anterior obligación no incluye las viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
- b) Inventario de consumos derivados de su parque móvil, desglosando el número de vehículos y el destino al que se dedica cada uno. El parque móvil incluye tanto los vehículos terrestres como los marinos y aéreos.
- c) Inventario de consumos derivados de su alumbrado público.

2. En el plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el departamento con competencia en materia de energía realizará el inventario referido a la Administración de la Comunidad Autónoma.



3. El resto de las Administraciones realizarán este inventario en el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
4. Los inventarios y su información asociada serán públicos y, en el plazo máximo de 3 meses desde su aprobación, deberán estar a disposición del público en general y serán facilitados al departamento del Gobierno Vasco con competencia en materia de energía.

Artículo 11. Control de consumos.

1. En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los edificios e instalaciones de cada Administración Pública Vasca con una potencia eléctrica instalada superior a 25 kW deberán disponer de contadores de energía eléctrica con capacidad de teledorada, de registro y transmisión de curva de carga en periodos inferiores a una hora. La información obtenida por los contadores estará disponible, al menos diariamente, de manera centralizada para todos los edificios e instalaciones.
2. El control del consumo de energía por edificio, que incluirá todos los consumos de todas las energías utilizadas y su coste, se realizará al menos una vez al año y en base mensual.

Artículo 12. Auditorías energéticas.

1. En el plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los edificios de las Administraciones Públicas Vascas con una potencia térmica superior a 70 kW deberán contar con la correspondiente auditoría energética.
2. Las auditorías energéticas tendrán la finalidad de realizar un diagnóstico sobre su consumo energético y sus potenciales niveles de ahorro y eficiencia energética, así como las recomendaciones para su mejora y para la implantación de energías renovables.
3. El alumbrado público exterior será objeto de una auditoría energética independiente que deberá contener, en todo caso, las prioridades de renovación y reducción de los componentes del alumbrado público exterior, salvo en aquellos casos en que por la seguridad de las personas o instalaciones no resultara posible.
4. Las auditorías energéticas, sin perjuicio de lo establecido en las normas técnicas vigentes en el ámbito de la Unión Europea, tendrán, al menos, los siguientes contenidos:
 - a) Consumo anual de la unidad de actuación energética.



- b) Consumos específicos y distribución de los mismos, abarcando instalaciones, procesos, equipos, parque móvil, calefacción, climatización, iluminación interior y alumbrado público exterior.
- c) Porcentajes de suministro energético, distinguiendo entre fuentes convencionales y otras provenientes de energías renovables.
- d) Análisis de la eficiencia de edificios, instalaciones, equipos y procesos.
- e) Análisis de la eficacia de las medidas que se estén adoptando.
- f) Recomendaciones y posibles mejoras en edificios, instalaciones, calefacción, climatización, parque móvil, iluminación interior, alumbrado público exterior, procesos de consumo, de ahorro y eficiencia, y de compras, señalando aquellas que, de acuerdo con la auditoría, resulten prioritarias.
- g) Actuaciones apropiadas en materia de energías renovables.
- h) Metodología empleada, desglosada en los distintos elementos objeto de análisis por la auditoría.
- i) Resumen ejecutivo.

5. Las auditorías energéticas deberán renovarse cada tienen una vigencia de seis años debiéndose realizar una nueva al término de ese plazo. Las nuevas auditorías incluirán un resumen de las actuaciones realizadas y un análisis comparativo de la evolución del consumo de energía durante la vigencia de la anterior.

Artículo 13. Planes de actuación energética.

1. Todas las Administraciones Públicas Vascas deberán diseñar sus propios planes de actuación energética de carácter plurianual en los que realicen un diagnóstico de la situación en su ámbito de actuación y fijen estrategias a ejecutar durante la vigencia de los mismos. En todo caso, se garantizará la debida participación ciudadana en su proceso de elaboración.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma y la Universidad del País Vasco/Euskal-Herriko Unibertsitatea aprobarán sus respectivos planes de actuación en el plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.

3. Las Administraciones de los Territorios Históricos y de los municipios con más de 25.000 habitantes deberán aprobar sus respectivos planes de actuación energética en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor de la presente Ley.



Este plazo será de dos años para las Administraciones de los municipios de entre 5.000 y 25.000 habitantes.

Los Ayuntamientos con un número de habitantes inferior a 5.000 podrán sustituir el plan de actuación energética por una hoja de ruta, que contendrá al menos la información indicada en las letras a) y b) del siguiente apartado, para lo cual contarán con un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley.

4. El contenido mínimo de los planes de actuación energética será -el siguiente:

- a) Diagnóstico energético y determinación del nivel base de referencia de cada administración, desglosando las fuentes de consumo, e incluyendo el alumbrado público.
- b) Planificación temporal para la implantación de medidas de sostenibilidad energética, desglosando cada sector de que se trate. Esta planificación temporal tendrá en cuenta, en su caso, los resultados de la correspondiente auditoría energética y las obligaciones de ahorro que impongan esta Ley y su normativa de desarrollo.
- c) Mecanismos de evaluación de la efectividad del plan durante su vigencia.

Artículo 14. Porcentajes de ahorro de energía.

1. Las Administraciones Públicas Vascas deberán cumplir con los porcentajes de ahorro y eficiencia energética y de energías renovables que se fijan en la presente Ley en consonancia con los objetivos de política energética que se establezcan en la Estrategia Energética de Euskadi.

2. Las Administraciones Públicas Vascas, cada una en su respectivo ámbito de actuación, deberán alcanzar una reducción del consumo de energía del 25% en el horizonte 2025, todo ello sobre el nivel base de referencia del consumo energético global correspondiente a cada una de ellas, incluyendo las entidades que de ellas dependen.

3. Para la determinación de la reducción del consumo energético se tendrán en cuenta los correspondientes a edificios, parque móvil y alumbrado público.



Artículo 15. Utilización de energía procedente de fuentes renovables.

1. A partir del 1 de enero de 2017, en las licitaciones para la compra de energía eléctrica de las Administraciones Públicas Vascas, se valorará especialmente el origen renovable de la misma.
2. Cada Administración Pública Vasca debe lograr para el año 2025 que, al menos, un 25% de sus edificios disponga de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables, incluyendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica.

Artículo 16. Renovación de instalaciones, equipos, flotas y vehículos.

1. Además de instalar sistemas de gestión centralizada de las instalaciones, que pueden incluir la monitorización de consumos, la renovación de instalaciones, equipos, flotas y vehículos de cada Administración Pública Vasca deberá hacerse teniendo en cuenta criterios de ahorro y eficiencia energética y utilización de energías renovables que contribuyan a la disminución del uso de combustibles derivados del petróleo.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, y para el caso de contratos sujetos a regulación armonizada, las Administraciones Públicas Vascas deberán adquirir productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, de acuerdo, entre otros, con los siguientes criterios:
 - a) Pertener a la clase de eficiencia más alta, teniendo en cuenta la eficacia en los costes, la viabilidad económica y la adecuación técnica, así como la existencia de competencia suficiente. Especialmente se ha de tener en cuenta su aplicación a la adquisición de equipos de climatización, agua caliente sanitaria, equipos ofimáticos y de alumbrado.
 - b) Considerar, a la hora de comprar vehículos de transporte por carretera y neumáticos, los impactos energético y medioambiental de su utilización durante su vida útil.

Sección 2ª. Edificios

Artículo 17. Calificación energética de edificios existentes.

- 1.-Los edificios existentes de titularidad de las Administraciones Públicas Vascas, que de conformidad con las exigencias del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril por el que aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los



edificios, deban disponer de la Certificación Energética de Edificios, deberán contar con dicho Certificado en los plazos establecidos en su Disposición Transitoria Segunda.

2.-Los edificios existentes de titularidad de cualquiera de las Administraciones Públicas Vascas que no se vean afectadas por el ámbito de aplicación del Real Decreto 235/2013, antes citado, deberán disponer del Certificado de Eficiencia Energética en el plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

2. El 25% de los edificios existentes de cada Administración Pública Vasca deberán mejorar su calificación energética un nivel, como mínimo, antes del año 2025.

En el caso de los edificios existentes de la Administración de los municipios con número de habitantes inferior a 25.000, incluyendo sus entidades dependientes, este porcentaje será del 20%.

Artículo 18. Calificación energética de edificios de nueva construcción.

1.-Los edificios de titularidad de las Administraciones Públicas Vascas de nueva construcción y los existentes que sean objeto de reformas importantes, cuya construcción o reforma se inicie dos años después de la entrada en vigor de la presente Ley deberán ser de consumo de energía casi nulo, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.

Hasta que se concrete normativamente lo que debe entenderse por “consumo de energía casi nulo” se aplicará lo dispuesto en la disposición adicional tercera de esta Ley sobre .

2. La anterior obligación se podrá dispensar en los siguientes supuestos:

- a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico.
- b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas.
- c) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.
- d) Edificios industriales y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agrícolas no residenciales.
- e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m².



f) Edificios o partes de edificios cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario.

Sección 3ª. Transporte y movilidad

Artículo 19. Uso de combustibles alternativos en vehículos propios.

- 1.-Las Administraciones Públicas Vascas fomentarán el uso de combustibles alternativos a fin de mitigar el impacto ambiental y minimizar la dependencia de los transportes respecto del petróleo.
2. A partir del año 2020, el 100% de los vehículos que se adquieran por las Administraciones Públicas Vascas deberán utilizar combustibles alternativos.
3. La obligación señalada en el apartado anterior no afectará a aquellos departamentos o entes que, por las funciones de seguridad pública, de las personas, sanitarias o medioambientales que realicen, precisen de un mínimo de vehículos de transporte impulsados por combustibles derivados del petróleo.
4. Las Administraciones municipales deberán facilitar que para el año 2025 exista en cada municipio un punto de recarga de vehículo eléctrico por cada 2.000 habitantes.
5. Los edificios de nueva construcción, de titularidad de las Administraciones Públicas Vascas, habrán de contar con puntos de recarga de vehículos eléctricos y de espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de bicicletas.

Artículo 20. Utilización de energía en vehículos que presten el servicio público de transportes de viajeros por carretera.

1. El servicio público de transporte de viajeros por carretera deberá ser prestado por vehículos que utilicen combustibles alternativos, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en lo que reglamentariamente se desarrolle.
2. Los pliegos o instrumentos que se adopten para el otorgamiento o, en su caso, renovación de las licencias o concesiones administrativas correspondientes deberán tener en cuenta que el 100% de la flota renovada de vehículos habrá de utilizar combustibles alternativos a partir del año 2020.



3. Las empresas adjudicatarias de una concesión o autorización administrativa que exploten servicios de transporte público de viajeros u otro tipo de servicios públicos serán responsables del cumplimiento de las anteriores obligaciones.

Artículo 21. Restricciones a la circulación de vehículos.

1. A fin de evitar un incremento excesivo del uso de la energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero o un deterioro de la calidad del aire atmosférico, los municipios podrán prohibir o restringir el acceso a determinadas zonas de su término municipal a los vehículos que no utilicen combustibles alternativos o a aquellos que sobrepasen determinados niveles de emisión.

2. Los municipios podrán reservar zonas para aquellos vehículos que utilicen combustibles alternativos en las que tendrán espacios reservados para su estacionamiento o reducciones en el precio del estacionamiento en zonas públicas o aparcamientos municipales.

Artículo 22. Plan de movilidad urbana.

1. En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los municipios con más de 25.000 habitantes deberán adoptar un plan de movilidad urbana. Este plazo será de tres años para los municipios que cuenten con entre 5.000 y 25.000 habitantes.

2. El plan constará -de:

a) Parte 1. Diagnóstico, que abarcará -los siguientes puntos:

- La incidencia del modelo territorial y urbanístico sobre la movilidad y, en general, en el transporte.
- Los distintos modos de transporte existentes en el municipio y su incidencia en el uso de la energía. Este diagnóstico deberá indicar, entre otras cuestiones: vías de transporte, aforos, lugares de estacionamiento para los distintos tipos de vehículos, sistemas públicos de recarga de combustibles y centros de actividad o de trabajo con afluencia pública relevante.

b) Parte 2. Medidas, que incluirá los siguientes aspectos:

- Instalación de puntos de recarga y repostaje de combustibles alternativos accesibles al público.



- Incentivación del transporte público.
- Alternativas para la reducción progresiva del transporte privado.
- Mejora de la logística para la distribución de mercancías.
- Fomento del uso de bicicletas.
- Establecimiento de nuevas zonas de uso exclusivo de los peatones.
- Fomento del uso de vehículos que utilicen combustibles alternativos.

3. El Plan deberá indicar con claridad los objetivos que persigue, las inversiones comprometidas por la Administración adoptante del plan y el horizonte temporal para su consecución.

4. La tramitación del plan de movilidad urbana contará con una aprobación inicial y otra definitiva, debiéndose garantizar la participación e información ciudadana una vez adoptado el acuerdo de tramitación del plan. Si tras su aprobación inicial las modificaciones del plan resultasen sustanciales se habrá de garantizar una segunda fase de información pública. En ambos casos, el plazo de presentación de alegaciones no podrá ser inferior a 45 días.

El plan y la documentación que le acompañe durante su tramitación serán -públicos.

5. La vigencia del plan será -de 5 años, transcurridos los cuales se deberá efectuar una evaluación de los resultados alcanzados por el mismo e iniciarse una modificación de sus objetivos y medidas. Tales resultados serán públicos.

Sección 4ª. Otras obligaciones

Artículo 23. Publicidad de medidas.

1. Cada Administración Pública Vasca deberá publicar, mediante la elaboración de bases de datos electrónicas de fácil acceso al público a través de redes públicas de telecomunicaciones, las medidas que adopte para incrementar el ahorro y la eficiencia energética, incluyendo los planes de actuación energética detallados en el artículo 12.

2. En particular, al menos cada dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, publicará un informe que incluya, como mínimo, los siguientes aspectos:



- a) Consumo energético desglosado por edificio y fuentes energéticas empleadas.
- b) Las auditorías efectuadas y su resultado.
- c) Medidas adoptadas e inversiones realizadas para el ahorro y mejora de la eficiencia energética y para la implantación de instalaciones de generación renovable con indicación de los resultados alcanzados.
- d) El grado de cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas Vascas de los compromisos de las obligaciones exigidas en la presente Ley.

Artículo 24. Formación.

1. En el plazo de un año tras la entrada en vigor de esta Ley, la Administración de la Comunidad Autónoma, las Administraciones de los Territorios Históricos y los municipios deberán adoptar un plan de formación del personal de su ámbito de actuación sobre técnicas para aumentar el ahorro y la eficiencia energética.

Los municipios con menos de 25.000 habitantes deberán aprobar este plan de formación en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley.

2. El objetivo de este plan será la formación de gestores y técnicos relacionados con la compra, mantenimiento y utilización de instalaciones consumidoras de energía sobre técnicas de ahorro y eficiencia energética y energías renovables.

Artículo 25. Exhibición de etiquetas.

1. Las Administraciones Públicas Vascas exhibirán de manera obligatoria y en un lugar fácilmente visible la etiqueta de eficiencia energética de edificios una vez hayan obtenido la certificación de eficiencia energética de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la presente Ley.

2. Las Administraciones Públicas Vascas deberán exhibir en un lugar fácilmente visible, respecto de los vehículos nuevos que adquieran a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, etiqueta informativa sobre el tipo de combustible que emplean y otros datos que se determinen mediante Orden.



CAPÍTULO III. INSTRUMENTOS VOLUNTARIOS Y FOMENTO

Artículo 26. Obtención de ayudas en materia energética.

La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el ámbito del otorgamiento de ayudas en materia energética, podrá establecer incrementos en la cuantía de las ayudas o beneficios especiales para aquellas Administraciones Públicas solicitantes que justifiquen, previamente a su concesión, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 27. Acuerdos voluntarios.

1. Mediante los acuerdos voluntarios las Administraciones Públicas Vascas se comprometerán a llevar a cabo determinadas medidas de sostenibilidad energética que superen los mínimos legalmente exigibles.
2. Los acuerdos voluntarios, sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, serán de obligado cumplimiento para las partes.
3. El departamento competente en materia de energía del Gobierno Vasco promoverá e impulsará la colaboración social en el uso responsable de la energía para la consecución de los objetivos de esta Ley, lo que podrá incluir la suscripción de los acuerdos voluntarios precisos con agentes del sector energético y otros agentes sociales.
4. Las Administraciones Públicas Vascas deberán publicar los acuerdos voluntarios que suscriban en materia de sostenibilidad energética, manteniendo actualizada y disponible al público la información que obre en su poder sobre ellos.

Artículo 28. Divulgación de la información, formación y sensibilización sobre sostenibilidad energética.

1. Las Administraciones Públicas Vascas, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en el ámbito de sus competencias, garantizarán el derecho a la información sobre la sostenibilidad energética, mediante la divulgación de pautas y técnicas a través de, entre otros, los siguientes medios:
 - a) Campañas de educación, de sensibilización y publicitarias.
 - b) Los programas de enseñanza primaria y secundaria.



c) La publicación y distribución de guías comprensibles para la población y los sectores industrial, comercial, de servicios, residencial y transporte sobre la implantación de técnicas y pautas que logren un mayor ahorro y eficiencia en el uso de la energía, previstas en esta Ley.

2. El departamento competente en materia de energía del Gobierno Vasco podrá convocar premios dirigidos, entre otros, a entes locales, organizaciones o movimientos sociales, sectores industriales, edificaciones, campañas de publicidad, programas educativos o trabajos científicos que mejor contribuyan con su ejemplo o por su repercusión o impacto social a la divulgación de estos valores así como a las mejores pautas y técnicas de ahorro y eficiencia energética y de promoción y desarrollo de las energías renovables.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Consorcios y Mancomunidades.

En el caso de edificios, instalaciones, vehículos, alumbrado público u otros destinados a actividades en régimen de consorcio o mancomunidad dedicados al abastecimiento de agua, recogida y tratamiento de residuos, depuración de aguas residuales y mataderos, las obligaciones comprendidas en la presente Ley serán cumplimentadas por el correspondiente consorcio o mancomunidad. Las administraciones que participen en dicho consorcio o mancomunidad prestarán su colaboración en los términos que ellas acuerden.

Disposición adicional segunda. Nivel base de referencia.

En el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta Ley se aprobará el nivel base de referencia del consumo energético global de las Administraciones Públicas que servirá de punto de partida para las medidas establecidas en la misma.

En su determinación se deberá tomar en consideración la media de los tres últimos años anteriores a la entrada en vigor de esta ley. Alternativamente, se podrá tomar como nivel base de consumo energético el del último año anterior a la entrada en vigor de la misma.

Disposición adicional tercera. Edificios de consumo de energía casi nulo.

Mientras no se establezca la normativa o metodología concreta para cuantificarlo, el consumo de energía casi nulo en un edificio se considerará -equivalente a contar, como mínimo. con calificación energética tipo A.

**Disposición adicional cuarta. Empresas distribuidoras de gas y electricidad.**

Las empresas distribuidoras de gas y electricidad deberán comunicar anualmente a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi la información sobre precios, consumos, facturaciones y condiciones de venta aplicables a los consumidores, distribución de consumidores y volumen correspondiente por categorías de consumo que se establezcan o se hayan establecido en su ámbito respectivo ámbito municipal.

DISPOSICIONES FINALES**Disposición final primera. Planes de sostenibilidad energética de determinadas instituciones estatutarias.**

El Parlamento Vasco, el Tribunal de Cuentas y el Ararteko elaborarán sus propios planes de sostenibilidad energética, pudiendo tener en cuenta lo dispuesto en esta Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor a los 6 meses de su completa publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

FIRMADO DIGITALMENTE POR:Firmante: **MARIA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI**Fecha de la firma: **13/10/2015 16:43:34**Validación de la firma:  **Correcta**